RV: CONTESTACIÓN DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICACIÓN 50001-23-33-000-2021-00229-00 DEMANDANTE JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA- 20216200940212-20211031183661

info <info@ant.gov.co>

Mié 15/09/2021 3:12 PM

Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>; carlos.vargas.bacci@gmail.co <carlos.vargas.bacci@gmail.co>; Proc. II Judicial Administrativa 49 <procjudadm49@procuraduria.gov.co>; Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>; carlos.vargas.bacci@gmail.co <carlos.vargas.bacci@gmail.co>; Proc. II Judicial Administrativa 49 <procjudadm49@procuraduria.gov.co>; joseorlandocarabalyrivera@gmail.com <joseorlandocarabalyrivera@gmail.com>
CC: correo@certificado.4-72.com.co <correo@certificado.4-72.com.co>

3 archivos adjuntos

Contestacion Demanda.pdf; Poder Jose Orlando Carabali.pdf; Pruebas contestacion.zip;

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT
Agencia Nacional de Tierras (ANT)
E-mail: info@ant.gov.co
logos-firma4

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Bogotá D.C., 2021-09-15 08:41

20211031183661

Al responder cite este Nro.
20211031183661

H. Magistrado
CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Villavicencio - Meta

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA
DEMANDADO	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
RADICACIÓN	50001-23-33-000-2021-00229-00
ASUNTO	CONTESTACION DEMANDA

CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 76.328.360 de Popayan, abogado titulado con Tarjeta Profesional No. 194.129 del C.S.J, actuando en ejercicio del poder otorgado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras; por medio del presente escrito, en forma respetuosa y clara, me permito dar contestación a la demanda del proceso de la referencia, de la siguiente manera:

I. **Contestación a los hechos de la demanda**

1. **EL HECHO DENOMINADO COMO "1": Parcialmente cierto**, toda vez que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, luego de un proceso de búsqueda, logró encontrar un registro de una solicitud a nombre del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNÁNDEZ, el cual tampoco cuenta con número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido radicada ante el extinto Incoder.

No obstante, es de tener en cuenta que el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA,** dentro de la acción de tutela promovida contra la ANT y cuyo conocimiento correspondió al **JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META)** *(Radicado No. 5057-3318-4001-**2018-00024**-00)* aportó como prueba el mismo documento, es decir, solicitud que no contiene radicado, fecha, ni número de solicitud.

Sin embargo, y en virtud de la orden impartida por el **JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META)**, en consonancia con la orden cuarta, literal (ii), de la sentencia SU – 426 de 2016 de la H. Corte Constitucional, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT procedió a resolver la solicitud de adjudicación allegada con la acción judicial.

(Ver pruebas documentales No. 1 y 2)

2. **EL HECHO DENOMINADO COMO "2": Es parcialmente cierto.** Luego de la reconstrucción vectorial de la ocupación, realizada al predio por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, según **INFORME TÉCNICO JURÍDICO PRELIMINAR** de fecha 12 de agosto de 2020, el mismo cuenta con un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**.

   (Ver prueba documental No. 3)

3. **EL HECHO DENOMINADO COMO "3": No es cierto**, en razón a que el señor **CARAVALI RIVERA** en el Formulario de Sujetos de Ordenamiento - FISO - No. 97738 de fecha 25 de julio del año 2018, indicó que: **i).** Habita el predio desde el día 14 de enero de 2014 *(numeral 31)*; y **ii).** Que el tiempo de tenencia, posesión u ocupación es de "*4 años*" *(numeral 37)*. Con relación a este último literal, es de resaltar que, el formulario fue diligenciado en el año 2018, razón por la cual, los 4 años indicados determinan que la ocupación inició desde el año 2014 y no desde el 1 de febrero del año 2010.

   De igual manera, es de tener en cuenta que, a través del Formulario Censo No. 110 de fecha 26 de junio de 2017, el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA**, indicó que: **i).** ingreso al predio ocupado "*5 años aproximadamente*" *(numeral 24)*; y **ii).** No registra fecha desde la cual ocupa y explota el predio *(numeral 38)*.

   Conforme lo anterior, se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** relacionada con la fecha desde la cual ocupa o habita el predio objeto de solicitud.

   (Ver pruebas documentales No. 4 y 5)

4. **EL HECHO DENOMINADO COMO "4": Es parcialmente cierto** debido a lo siguiente: **i).** No es cierto que, en el año 2010, el señor Caravali haya comenzado la ocupación, esto, *como se afirmó en el numeral 3 del pronunciamiento sobre los hechos de la presente contestación*; **ii).** No es cierto que en el año 2015 el señor

Caravali radicó solicitud de adjudicación ante el extinto Incoder, esto, *como se afirmó en el numeral 1 del pronunciamiento sobre los hechos de la presente contestación*; y **iii).** Es cierto que para el año 2010 y 2015 la Unidad Agrícola Familiar (UAF) vigente es la determinada en la resolución 041 de 1996.

5. **EL HECHO DENOMINADO COMO "5": No es cierto**, la resolución No. 041 del 24 de septiembre de 1996, fue modificada y adicionada por la resolución No. 020 de 1998 *"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución No. 041 expedida por la Junta Directiva el 24 de septiembre de 1996"*[1] proferida por el extinto INCORA.

   (Ver prueba documental No. 6)

6. **EL HECHO DENOMINADO COMO "6": No nos costa.** El hecho narrado por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** a través de su apoderado, corresponden a circunstancias acontecidas con anterioridad a la creación y entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente, en los registros y archivos administrativos en poder de la ANT, no se observaron documentos que permitan confirmar o negar lo manifestado.

7. **EL HECHO DENOMINADO COMO "7": Es parcialmente cierto**, en razón a lo siguiente: No es cierto que el Decreto 1075 de 2015 haya reglamentado la Ley 160 de 1994. Este decreto, corresponde al sector educación.

   Lo cierto es que el Gobierno Nacional expidió el día 26 de mayo de 2015 el Decreto 1071 *"Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural"*, y este decreto en su Título 10 - Procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación, estableció en su capítulo 4 los *"Requisitos para la Adjudicación Baldíos Inadjudicables. Prohibiciones"* y en su capítulo 5 el "*Procedimiento para la Adjudicación"*

8. **EL HECHO DENOMINADO COMO "8": No es cierto**, la Agencia Nacional de Tierras no tiene en su página web la publicación de los requisitos para adjudicación de predios baldíos. Ahora bien, es de resaltar que, en la página web de la ANT lo que se encuentra publicado es el Decreto 1071 de 2015 en el siguiente enlace: https://www.ant.gov.co/normativa/decretos/

   Igualmente, es de tener en cuenta que el anexo aportado por la parte demandante, contiene las modificaciones del decreto antes señalado, pero en ninguna parte se logra evidenciar lo afirmado.

9. **EL HECHO DENOMINADO COMO "9": Es cierto**.

10. **EL HECHO DENOMINADO COMO "10": No es cierto**. El Decreto por medio del cual se creó la Agencia Nacional de Tierras, se fijó su objetivo y estructura, fue el

[1] *"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución No. 041 expedida por la Junta Directiva el 24 de septiembre de 1996".*

Decreto 2363 del 07 de diciembre de 2015 y no a través del Decreto 2366 como se afirma en el escrito.

11. **EL HECHO DENOMINADO COMO "11": No nos costa.** El hecho narrado por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** a través de su apoderado, corresponden a circunstancias acontecidas con anterioridad a la creación y entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente, en los registros y archivos administrativos en poder de la ANT, no se observaron documentos que permitan confirmar o negar lo manifestado.

12. **EL HECHO DENOMINADO COMO "12":** No nos consta, la ANT al momento de asumir las funciones del INCODER en la forma que son señaladas en el Decreto 2365 de 2015 empezó el proceso de gestión documental de los expedientes en trámite para la cual realizó diversas acciones como pueden ser las señaladas en el hecho. Sin embargo, en los registros y archivos administrativos en poder de la ANT, no se observaron documentos que permitan confirmar o negar lo manifestado.

13. **EL HECHO DENOMINADO COMO "13":** No nos consta, la ANT al momento de asumir las funciones del INCODER en la forma que son señaladas en el Decreto 2365 de 2015 empezó el proceso de gestión documental de los expedientes en trámite para la cual realizó diversas acciones como pueden ser las señaladas en el hecho. Sin embargo, en los registros y archivos administrativos en poder de la ANT, no se observaron documentos que permitan confirmar o negar lo manifestado.

14. **EL HECHO DENOMINADO COMO "14": No es cierto**. Como se indicó en el numeral uno (1) del presentante escrito, luego de un proceso de búsqueda, se logró encontrar un registro de una solicitud a nombre del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNÁNDEZ; sin embargo, como se expuso, este tampoco cuenta con número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido presentada o radicada ante el extinto Incoder.

15. **EL HECHO DENOMINADO COMO "15":** No nos consta, la ANT al momento de asumir las funciones del INCODER en la forma que son señaladas en el Decreto 2365 de 2015 empezó el proceso de gestión documental de los expedientes en trámite para la cual realizó diversas acciones como pueden ser las señaladas en el hecho. Sin embargo, en los registros y archivos administrativos en poder de la ANT, no se observaron documentos que permitan confirmar o negar lo manifestado.

16. **EL HECHO DENOMINADO COMO "16": Es parcialmente cierto.** Los documentos a nombre del acto fueron hallados dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNÁNDEZ, - *el cual, como se dijo, tampoco cuenta con número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido presentada o radicada.*

No obstante, a partir del año 2018, la Agencia Nacional de Tierras inició la búsqueda, recopilación y estudio de estas solicitudes de adjudicación elevadas por personas ocupantes del predio conocido como El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, entre ellas, la solicitud a nombre del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA.**

(Ver prueba documental No. 12)

17. **EL HECHO DENOMINADO COMO "17": Es cierto.** Los predios titulados objeto de revocatoria retornaron nuevamente al dominio de la nación con carácter de baldíos.

18. **EL HECHO DENOMINADO COMO "18": Es cierto.** La decisión de revocatoria obedeció a que se demostró que los adjudicatarios de los predios no reunían los requisitos para ser considerados sujetos de reforma agraria.

19. **EL HECHO DENOMINADO COMO "19": Es cierto.**

20. **EL HECHO DENOMINADO COMO "20": Es parcialmente cierto.** Cabe aclarar que, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8011, también se inscribió en el procedimiento de revocatoria. Adicionalmente, existen restricciones jurídicas que aplican a los baldíos recuperados que no requieren ser inscritas dentro de folios de matrícula, como el caso de la reserva.

21. **EL HECHO DENOMINADO COMO "21": Es parcialmente cierto.** Resulta importante reiterar que la solicitud de adjudicación no contiene número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido presentada o radicada ante el extinto Incoder, sin embargo, como se observa dentro de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, la Agencia Nacional de Tierras a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, realizó el correspondiente estudio de la ocupación del predio denominado ***"Villa Camila"***, determinando que el mismo se encuentra inmerso en un (1) predio denominado en su momento como "El Rincón".

    Además, la ocupación y explotación económica del demandate en el predio referido aquí no ha sido probada de manera congruente tal como se expresó en el numeral 3 de la presente contestación a los hechos de la demanda y en la Resolución No. 6915 de 2020.

22. **EL HECHO DENOMINADO COMO "22":** No es un hecho, es un parafraseo de la parte resolutoria de la Sentencia SU-426 de 2016 realizado por el demandante. Nos atenemos al texto literal de la sentencia mencionada.

23. **EL HECHO DENOMINADO COMO "23": Es parcialmente cierto** en la medida que en la parte resolutiva no hace alusión expresa sobre los ocupantes históricos. No obstante, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional en el Título de Consideraciones y Fundamentos de la Sentencia SU-426 de 2016, acogió en varios apartes la condición respecto de que la población campesina accionante de

las tutelas que dieron origen a la sentencia, son ocupantes históricos de los predios baldíos debido a las circunstancias del caso y la problemática de tenencia de la tierra en el predio El Porvenir especialmente en el numeral 9.3. Según la Corte, esto es confirmado por las pruebas valoradas en el expediente correspondientes a informes del ministerio público (Defensoria del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) así como por organizaciónes no gubernamentales (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello) de la siguiente manera:

> *"(…) 9.3. Como puede verse, los accionantes y el Incoder presentan una versión coincidente en lo que tiene que ver con la historia jurídica de El Porvenir, aunque exponendiferencias puntuales, inherentes al conflicto que debe resolver la Corte, y acerca de las cuales es preciso adelantar algunas conclusiones, con base en los demás elementos probatorios incorporados al expediente.*
> ***Es claro que un particular (Víctor Machado) se apoderó de un inmenso baldío de la Nación hacia el año 1970*** *y que, al momento de su muerte, quien fuera su esposa realizó un negocio de compraventa con otro particular, conocido en la región como comerciante de esmeraldas (Víctor Carranza (F)).* ***También existe información suficiente acerca de que la comunidad campesina de El Porvenir se encontraba en este territorio desde la época, y explotaba el predio, mediante actividades de pequeña ganadería.*** *La comunidad explica que, en un principio no supo de las pretensiones de dominio de Machado, ni de los negocios celebrados con Víctor Carranza (F) y que durante un tiempo fue posible mantener una relación tranquila con uno y otro.*
>
> ***Al expediente se ha incorporado un cuerpo amplio de documentos que describen la llegada de fuerzas paramilitares a la zona desde mediados de los años 80 del siglo pasado, y el comienzo de actos de violencia contra los pobladores de El Porvenir (ver acápite anterior);*** *está demostrado que en 1992 el Incora entregó el predio a particulares, a través de 27 adjudicaciones individuales y que, 15 años después estas propiedades fueron englobadas en cinco grandes terrenos, mediante actos jurídicos protocolizados en la Notaría 4 de Villavicencio y registrados en el folio de matrícula. El Incoder, en el año 2014 revocó las resoluciones del año 1992 y, al hacerlo, obtuvo el consentimiento de los cinco propietarios del año 2007.*
>
> ***Así las cosas, esta breve recomposición de la historia jurídica demuestra que El Porvenir fue, primero, un predio apropiado por particulares, explotado por campesinos, calificado como baldío por el Estado, fragmentado estratégicamente en 27 fracciones para ser adjudicado en el marco de la reforma agraria*** *y posteriormente, convertido en cinco grandes propiedades, en el marco de los protocolos notariales y la inscripción en el registro, ya sin ánimo de aparentar validez legal alguna (dado que la extensión de los predios hacía evidente la ilegalidad de los negocios).*

Las diferencias en las versiones (accionantes e Incoder) tienen que ver con el 'antes' y el 'después' de que se desplegaron, se consolidaron y se desenmascararon esas estrategias jurídicas de consolidación de un derecho de propiedad espurio. Primero, en torno a la entrega material del predio; segundo, acerca de quiénes son sus ocupantes y cuándo se asentaron en el lugar; tercero, acerca de si existen o no solicitudes de adjudicación por parte de los campesinos de El Porvenir. Entra la Sala a analizar cada uno de esos puntos en controversia.

(…)

9.3.3. Sobre los ocupantes de El Porvenir.

En lo que hace a la ocupación del predio, los peticionarios señalan que se encuentran en la zona que ocupa El Porvenir desde hace 45 años, mientras que el Incoder ha efectuado dos afirmaciones sobre el punto, en las que se omite cualquier mención a esta comunidad. Primero, indicó que en el marco del trámite de revocatoria directa de las 27 adjudicaciones del año 1992, encontró que sólo la empresa La Cristalina explotaba el predio (visita técnica del año 2013); y, después, en respuesta a un requerimiento de la Corte Constitucional señaló que sólo después de la revocatoria comenzó a percibir la presencia de 'invasores'.

La Sala considera que la respuesta del Incoder no es aceptable, si se analiza dentro del contexto histórico y el conjunto de intervenciones, informes y conceptos técnicos incorporados al trámite. Todos estos confirman la versión de los accionantes y, especialmente, así lo hacen la Defensoría del Pueblo128 y la Procuraduría General de la Nación. ***Este conjunto de intervenciones presentan una narración coherente y consistente, en la que se parte de la presencia de la población campesina de El Porvenir desde los años 70 del Siglo pasado.***

(…)

Por supuesto, también los accionantes y los órganos de control han informado acerca de la aparición reciente de nuevos ocupantes, tal como lo hace el Incoder. Pero es claro que estos últimos no pueden confundirse con quienes llevan medio siglo viendo afectados sus derechos y (al menos) dos décadas asumiendo una compleja disputa legal y jurídica por su titularidad. Si esta confusión se produce, ello obedece precisamente a las actuaciones y especialmente las omisiones del Incoder frente a la situación de El Porvenir.

No corresponde a la Corte evaluar la situación específica de cada una de las 421 familias que actualmente esperan una decisión del Incoder. Esta actividad deben adelantarla dicho Instituto y la Unidad de Tierras, en el marco de sus competencias. Pero es irrazonable que se ignore la presencia histórica de la población de El Porvenir o que se asimile a la de posibles ocupantes actuales *(de hace tres meses, según las palabras*

del Incoder) como lo hace el Incoder, al afirmar que ninguna de las familias que pueden hallarse hoy en día en El Porvenir podría acreditar una explotación pacífica del mismo por más de cinco años, dado que el baldío regresó a la Nación hace apenas algo más de un año.

Para la Corte, sin lugar a dudas, está comprobada la existencia de una situación de violación de derechos de una población campesina, tanto por la ausencia de una respuesta a su aspiración de obtener la adjudicación de los predios, como a raíz del conflicto armado interno. (…)" (subrayado y resaltado propios.)

De igual manera, es importante tener en cuenta lo referido en los numerales 2.1 y 3.6. del mismo título de Consideraciones y Fundamentos, donde se alude lo siguiente:

"(…) 2.1. La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia el caso de 73 ciudadanos (37 mujeres y 36 hombres), que manifiestan ser campesinos pobladores de la vereda El Porvenir – jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta)–. Afirman que han mantenido un asentamiento generacional desde por lo menos el año 1960. Sin embargo, indican que su permanencia en el lugar se ha visto afectada por una serie de sucesos que los han afectado y que pueden sintetizarse así: en un primer momento, la propiedad de los predios de El Porvenir fue obtenida por un empresario de la zona; luego, en el año 1979, la titularidad de cerca 27.000 hectáreas fue traspasada al empresario de esmeraldas Víctor Carranza Niño (F), momento a partir del cual, según los accionantes, se empezó a notar la presencia de "grupos paramilitares" en la región, los cuales iniciaron procesos de hostigamiento contra los pobladores que históricamente venían ocupando los terrenos adquiridos por el señor Carranza (F), soportando homicidios masivos y desplazamientos forzados internos. Adicionalmente, en 1992, mientras los campesinos de la zona seguían habitando los predios bajo referencia, el hoy extinto Incora adjudicó las 27.000 hectáreas antes aludidas a 27 personas que no tenían ninguna relación con estos bienes y, con posterioridad, dichos inmuebles fueron englobados en 5 grandes haciendas.

(…) Bajo ese contexto, señalan los actores que: (i) actualmente el dominio material del lugar sigue estando en manos de una empresa ganadera perteneciente a la familia del señor Víctor Carranza (F), cuyos propietarios han venido ejercido actos violentos contra los campesinos ocupantes; (ii) pese a su relación con estos terrenos, hasta la fecha no se ha adelantado ninguna gestión encaminada a adjudicarle a los ***ocupantes históricos*** *la propiedad de los mismos; (iii) aun cuando los pobladores de El Porvenir han denunciado permanentemente el riesgo en el que se encuentran –materializado en las constantes amenazas dirigidas por parte de los representantes de la empresa ya referida y los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona–, no han recibido un apoyo institucional efectivo para contrarrestar las condiciones de inseguridad y la alerta de desplazamiento masivo; por último, (iii) los pobladores han tenido que*

permanecer en El Porvenir sin acceso a servicios públicos, vías de comunicación o asistencia estatal para desarrollar proyectos productivos que propendan por su digna supervivencia. (…)" (subrayado y resaltado propio).

"(…) 3.6. Además, la relevancia constitucional del caso, y la necesidad de un pronunciamiento del juez constitucional, ***se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar,*** *que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros.*

En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores. (…)" (subrayado y resaltado propio).

Finalmente, es importante traer a colación lo mencionado en el numeral 10 de la sentencia, así:

"(…)10.1. El Porvenir es un caso emblemático en lo que tiene que ver con los problemas históricos del acceso a la tierra para la población campesina, el despojo por vías legales e ilegales, y la restitución de predios a las víctimas del conflicto armado interno reciente.

La extensión del predio, el número de familias interesadas, el conjunto de negocios irregulares, la protocolización de los mismos, el uso del registro para la inscripción de la propiedad y las adjudicaciones efectuadas por el Incora, por una parte; y las presiones de hecho ejercidas sobre los campesinos de El Porvenir, por otra, dan cuenta de la dimensión social del asunto.

(…)

Pero desde el punto de vista del goce efectivo de los derechos de los pobladores de El Porvenir, ambos trámites podrían resultar inocuos, pues el Estado no ha asegurado la tenencia física y material de los predios, ni su protección frente a quienes históricamente los ocuparon indebidamente. ***Es así como, mientras pasa el tiempo sin una respuesta para la comunidad de El Porvenir, nuevos ocupantes aparecen día tras día, lo que agrava la situación social en la zona y cierne nuevas amenazas sobre los derechos territoriales de quienes por cerca de cincuenta años persiguen la formalización de sus derechos sobre la tierra.***

10.2. La Corte debe advertir que la apropiación de un bien 'baldío' de casi 30.000 hectáreas por parte de un particular es un hecho que refleja claramente la inequidad en el acceso, distribución y uso de la tierra que caracteriza la historia colombiana. ***Esta actitud no equivale a la colonización campesina que ha defendido el Estado, sino a una conducta abusiva y lesiva de los derechos de quienes ya se hallaban explotando el lugar y que, por ausencia de ciertos conocimientos, no impidieron la consumación del hecho.*** *Se trata de un bien que debe satisfacer los derechos de muchos, utilizado en beneficio de una sola persona, como consecuencia de la ineficiencia estatal para la adecuada conservación y administración de los baldíos.*

(…)

10.4. La intervención de la entidad que el Estado diseñó para llevar a cabo la reforma agraria muestra la última faceta de esta historia de despojo: la adjudicación de predios a personas que no los explotan, en grandes extensiones, y ajenas a los propósitos de democratización del acceso a la tierra, a través de un modelo de desarrollo rural, basado en el campesino propietario. Así, el Incora, en su momento, privilegió intereses poderosos sobre los de la población campesina tutelante, y su decisión permaneció incólume por más de dos décadas, hasta que, a raíz de una enorme presión social y una política pública decidida a asumir seriamente los problemas rurales, hizo insostenible la situación jurídica creada en 1992 en El Porvenir.

10.5. ***La comunidad campesina afectada muestra otra dimensión de los problemas esenciales asociados a la inequidad en las áreas rurales. La dificultad de los trámites jurídicos, la carencia de dinero y la ausencia de una asesoría legal adecuada, llevaron a que durante años se conformaran con explotar pacíficamente una tierra, con la supuesta aquiescencia de un gran propietario****. La violencia, luego, le impidió mantener ese arreglo precario, pues tornó prioritaria la supervivencia. Y, actualmente, enfrenta la posición asumida por el Incoder en este trámite: nadie puede haber ocupado ni explotado tranquilamente esos predios, salvo el gran propietario.*

Esta última respuesta resulta inadmisible, pues ***el Instituto no sólo ignora que los peticionarios son víctimas del conflicto, sino que le atribuye consecuencias negativas a los hechos de violencia padecida, como la imposibilidad de demostrar una explotación pacífica de los predios.”*** (subrayado y resaltado propio).

De allí que, en el asunto, la Alta Corporación tuviera en cuenta el conjunto de supuestos fácticos narrados en el trámite, que demuestra la condición de vulnerabilidad de los actores, y que devino en la categorización de estos como ocupantes históricos, la cual no puede ser desconocida.

24. **EL HECHO DENOMINADO COMO “24”: Es parcialmente cierto.** El señor **CARAVALI RIVERA** junto con 15 personas más interpusieron acción de tutela, cuyo conocimiento le correspondió al JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE

PUERTO LÓPEZ (META) con Radicado No. 50573318400120180002400. Lo que no es cierto, es que se haya interpuesto la acción de tutela por efectos de una solicitud de adjudicación radicada el 18 de febrero de 2016 como lo afirma el demandante. Lo anterior, conforme lo ya expuesto; a pesar de que se encontraron documentos a nombre del actor, la solicitud de adjudicación no cuenta con número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido presentada o radicada ante el extinto Incoder.

25. **EL HECHO DENOMINADO COMO "25": Es parcialmente cierto.** El fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META), concedió el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados por los 16 accionantes, ordenando a la Agencia Nacional de Tierras adelantar los actos administrativos que correspondan en el marco de las ordenes contenidas en la sentencia **SU-426 de 2016**, respecto de los ocupantes de los terrenos baldíos de que trata la resolución Incoder No. 6423 de 2014, a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos establecidos en la Ley. Así, mismo, ordenó a la Agencia abstenerse de ejecutar actos que les impidan a los tutelantes la explotación del predio.

Lo que no es cierto, es que Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López – Meta, haya reconocido al señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA**, u alguno de los otros 15 accionantes como ocupantes legítimos de cada uno de los predios que ocupan, dado que esto no es una cuestión en cabeza del juez de tutela sino de la autoridad de tierras.

Por lo anterior, se relaciona la parte textual de lo ordenado por el Juzgado Promiscuo de familia:

> *"(…)* ***PRIMERO: Conceder*** *el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la vivienda y el debido proceso reclamados por los accionantes, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> ***SEGUNDO: Ordenar,*** *a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que se abstenga de impedir la explotación agropecuaria de los predios de que trata la resolución No. 6423 de 2014, ocupados por los accionantes y se les brinde el acompañamiento mientras realiza los trámites legales para la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulan.*
>
> ***TERCERO: Ordenar,*** *a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que en un término de dos (2) meses, adelante los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme lo estableció la sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumpla las ordenes allí dadas respecto de los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen (…)"*

(Para probar estos hechos se solicita al honorable Tribunal decretar el oficio dirigido al JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META) para que allegue copia auténtica del expediente en mención)

26. **EL HECHO DENOMINADO COMO "26": Es cierto.**

27. **EL HECHO DENOMINADO COMO "27": Es cierto.**

28. **EL HECHO DENOMINADO COMO "27": Es parcialmente cierto**. Los 16 accionantes si interpusieron incidente de desacato. Lo que no es cierto, es que hayan trascurrido dos (2) años sin que se cumplieran las respectivas órdenes, como lo afirma el demandante.

    Lo anterior, por cuanto, la Agencia Nacional de Tierras, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la H. Corte Constitucional en la sentencia **SU-426 de 2016**, a través de la resolución No. 5776 del 06 de septiembre de 2018, ordenó la apertura del procedimiento de adjudicación en favor del grupo de accionantes amparados por el máximo Tribunal Constitucional.

    Dentro del grupo poblacional aludido en la providencia constitucional, no se encuentran contemplados los 16 ocupantes amparados en la sentencia de tutela con Radicado No. 50573318400120180002400, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia; sin embargo, en cumplimento al mismo, la Agencia Nacional de Tierras desplegó diferentes actuaciones con el fin de atender y adelantar los trámites ordenados en el correspondiente fallo de tutela, todo, dentro de la ruta de actuación dispuesta para el cumplimiento de la sentencia **SU- 426 de 2016.**

    Por lo expuesto, la ANT, en el momento que se interpuso el incidente de desacato, venia adelantando todas las gestiones técnicas (visitas de campo, caracterización, levantamientos topográficos, entre otras) y jurídicas (Estudio de documentos, conformación de expedientes, entre otras) necesarias para resolver las solicitudes de adjudicación presentadas por los 16 accionantes.

    (Ver prueba documental No. 12)

29. **EL HECHO DENOMINADO COMO "29": Es parcialmente cierto.** El día 11 de agosto de 2020 el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ-(META), resolvió, entre otras cosas, imponer sanción por desacato al Director de Acceso A Tierras y la Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras con arresto de 10 días; lo que no es cierto, es que los hayan sancionado a pagar "*3 meses del salario que devengan en sus cargos"*, como lo afirma el demandante.

    Por lo expuesto, se relaciona la parte textual de lo ordenado por el Juzgado Promiscuo de familia:

"(…) ***PRIMERO. -*** *Declarar que los doctores JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ, en calidad de Director de Acceso a Tierras y JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ [sic], en su calidad de Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT, incurrieron con su actuar frente a la decisión tomada por este Despacho Judicial, en decisión de fecha 24 de abril de 2018, en DESACATO, conforme lo reseñado en la motivación.*

SEGUNDO. - *Sancionar por Desacato al Doctor JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ, en calidad de Director de Acceso a Tierras de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, con arresto de 10 días, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Bogotá y multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a tres (3) smlmv.*

TERCERO. - *Sancionar por Desacato a la Doctora JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ [sic], en calidad de Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, con arresto de 10 días, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Bogotá y multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a tres (3) smlmv (…)"*

30. **EL HECHO DENOMINADO COMO "30": No es cierto.** El fallo de incidente de desacato fue notificado el 11 de agosto de 2020.

31. **EL HECHO DENOMINADO COMO "31":** Es cierto.

32. **EL HECHO DENOMINADO COMO "32": No es cierto** atendiendo lo siguiente: La resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 *"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* fue notificada al señor **CARAVALÍ RIVERA** a través del radicado No. 20204100781711 del 14 de agosto de 2020, a los siguientes correos electrónicos: joseorlandocaravalyrivera@gmail.com, el cual fue suministrado por su apoderado - Doctor Carlos Daniel Vargas Bacci; y jacporvenir1974@gmail.com, el cual fue autorizado por el señor CARAVALI RIVERA para recibir notificaciones por medios electrónicos a través del Formulario – FISO No. 97738.

    Ahora bien, debido a que la empresa de mensajería 4-72 mediante identificador: ***E29689753-S***, certificó que la citada notificación no fue entregada al correo electrónicos joseorlandocaravalyrivera@gmail.com y que los representantes de la Junta de Acción Comunal del Provenir manifestaron no haber recibido la citada notificación al correo electrónico jacporvenir1974@gmail.com, pese a obtener la correspondiente prueba de envió, la Agencia Nacional de Tierras, mediante radicado No. 20204100796241 de fecha 19 de agosto de 2020, realizó alcance al oficio de notificación radicado bajo No. 20204100781711 de fecha 14 de agosto de 2020, el cual, según las pruebas de envió, fue entregado y recibido el día 20 de agosto a los siguientes correos electrónicos: zalberto95@hotmail.com, carloseromerog@hotmail.com y, secretariaasoyoposanjose@gmail.com.

(Ver pruebas documentales No. 7 a 11)

33. **EL HECHO DENOMINADO COMO "33": Es cierto.**

34. **EL HECHO DENOMINADO COMO "34": Es parcialmente cierto**, en la siguiente medida:

- **Numeral 34.1.** Es parcialmente cierto. La Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, a través de memorando con radicado No. 20184200005571 de fecha 15 de enero de 2018, ordenó entregar a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas el expediente administrativo del predio denominado "El Porvenir", ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán - Meta, para que, dentro de sus competencias legales, adelante las actuaciones administrativas que correspondan.

  Lo que no es cierto, es que la competencia corresponde a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas por mandato del artículo 40 de la Ley 902 del 2017; sino que la competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas deviene directamente del artículo 23 del Decreto Ley 2363 de 2015.

  (Ver. Num. "1.1. Competencia" - Página No. 3 y 4 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020)

- **Numeral 34.2.** No es cierto. La Agencia Nacional de Tierras nunca ha dado por cierto la existencia de un solo predio como lo afirma el demandante. La Agencia siempre ha sostenido que el predio de mayor extensión conocido como "El Porvenir" ubicado en inmediaciones del Centro Poblado "El Porvenir", perteneciente al municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, se conforma por los veintisiete (27) predios que fueron objeto de la decisión de revocatoria directa proferida por el extinto INCODER, a través de la resolución No. 6423 de 2014, en la cual, su área se estima aproximadamente en 25940 ha + 3605 m2.

  (Ver. Num. "1.3. Identificación del predio de mayor extensión." - Página No. 6 a 8 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020)

- **Numeral 34.3.** Es cierto. La Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, a través de la resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, indica que los baldíos que conforman el de mayor extensión conocido como "El Porvenir" como un bien baldío reservado de la nación; esto, en consideración a lo señalado en la resolución de revocatoria directa No. 6423 de 2014 en la cual, uno de sus efectos, fue el de otorgar a los predios que lo conforman, la naturaleza de baldíos sustraídos de la posibilidad de ser ocupados libremente con la finalidad de pretender su adjudicación, pues tales predios se encuentran exceptuados del régimen de ocupación ordinario. Esto con el fin de evitar que se repita en un ciclo el fenómeno de acaparamiento de

tierras que dio lugar a la revocatoria adelantada por el Incoder.

Así mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014, el cual establece que:

> *"(…) En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos. (…)*
>
> *Así pues, todas las áreas que excedan la Unidad Agrícola Familiar definida para el predio de mayor extensión denominado El Porvenir, el cual, como se dijo, tiene una extensión aproximada de 25 mil hectáreas, se les debe impartir el tratamiento de baldíos reservado, y, por tanto, su régimen de ocupación, aprovechamiento y adjudicación no corresponde al ordinario (...)"*

(Ver. Num. "1.6.1. Reserva de baldíos: áreas que superen la UAF." - Página No. 14 y 15 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020)

Aunado a lo anterior, es de tener en cuenta que mediante la resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020 *"Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras."*, la Dirección de acceso a Tierras de la ANT, confirmó parcialmente la resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 expedida a nombre del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** al igual que las otras quince (15) resoluciones expedidas a nombre de cada uno de los accionantes, señalando lo siguiente:

> *"(…) Por otra parte, las áreas que exceden la Unidad Agricola [sic] Familar [sic] en los baldios [sic] de la Nación si adquieren la connotación de baldios [sic] reservados, es así como la Ley 160 de 1994 establece en el artículo 67 inciso 2º lo siguiente:*
>
> > *"En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos." (...)"*

(Ver. Num. "3.4 Cálculo de la UAF a través de la metodología de UAF predial definida en la Resolución ANT No. 740 de 2017 (Manual Operativo del Procedimiento Único del Decreto Ley 902 de 2017)" - Página No. 30 de la resolución 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020*)*

(Ver pruebas documentales No. 13, 15 y 16)

- **Numeral 34.4.** No es cierto. En ningún momento se afirmó que el predio conocido como "El Porvenir" haya sido focalizado por la ANT para los efectos de su adjudicación y, menos cierto es que, por esta razón, la competencia sea de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

  Por lo anterior, es importante precisar que los municipios son los focalizados, y que, a partir de allí, se le asignó la competencia a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

  Conforme a lo dicho, es importante precisar lo siguiente:

  La Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para conocer de las solicitudes de adjudicación de predios baldíos ubicados en los municipios focalizados, dentro de ellos, el de Puerto Gaitán, Meta, y, en especial, de los pertenecientes a los predios baldíos que conforman el de mayor extensión conocido actualmente como El Porvenir, de conformidad con las normas y reglamentos vigentes" *(Ver. Num. "1.1. Competencia" – Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020)*

- **Numeral 34.5. Es cierto** debido a lo siguiente: El predio denominado por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** como "Villa Camila", se encuentra ubicado dentro de los predios que conforman el de mayo extensión conocido como "El Porvenir", el cual hace parte de una zona focalizada en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

- **Numeral 34.6. Es parcialmente cierto** en la siguiente medida: Es cierto que se aplicaron normas procedimentales del Decreto Ley 902 de 2017, no obstante, también se tuvieron en cuenta normas sustanciales vigentes contempladas en la Ley 160 de 1994. Por lo anterior, resulta importante señalar que el numeral 2.4. ***"El procedimiento aplicable"***, de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, sostuvo lo siguiente:

  > *"(…) El Decreto Ley 902 de 2017 señala que, a partir de su vigencia, toda solicitud de acceso a tierra debe ser tramitada bajo las reglas allí contenidas; no obstante, en el artículo 27 se establece la regla para el tratamiento de las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de su entrada en vigencia (29 de mayo de 2017), de la siguiente manera:*
  >
  > *"Artículo 27. Solicitudes en proceso. En los casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley se aplicará en su integridad el régimen más favorable para lograr la adjudicación."*
  >
  > Este artículo consagra la posibilidad de aplicación de la ultraactividad de la norma, la cual supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017 pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable al ocupante. No obstante,

esta última regla exigirá que la ocupación se realice de manera regular, es decir, no pueden pretenderse la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

Lo anterior implica que la presente solicitud no pueda ser tramitada bajo las reglas procedimentales vigentes al momento en que inicio la ocupación deprecada, esto es, la Ley 160 de 1994, toda vez que para la aplicación a la figura de transición de que trata el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017, es necesario que la ocupación demostrada sea de aquellas que pueden dar lugar a una posible adjudicación, situación que como se advirtió, no ocurre en el caso bajo estudio (...)» (subrayas fuera del texto original)

Finalmente, no está probado que la solicitud de adjudicación se haya radicado el día 26 de noviembre de 2015 ante el extinto Incoder, puesto que, la solicitud existente – *como se ha sostenido reiterativamente* – no contiene radicado, fecha, ni número de solicitud.

- **Numeral 34.7.** No es cierto que en la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se afirmara lo expresado por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** a través de su apoderado en virtud de lo siguiente:

  En primera medida, resulta importante tener en cuenta que el señor **CARAVALI RIVERA**, al igual que los otros 15 accionantes de la tutela con radicado No. 50573318400120180002400, no hacen parte del grupo de actores directos amparado en la sentencia **SU- 426 de 2016**, y según lo afirmado por el mismo solicitante, hace presencia en el territorio desde el año **2010**, lo cual desvirtúa prima facie su condición de ocupante antes del año 1992 como encontró probado el Tribunal Constitucional respecto de los 73 ciudadanos que dieron origen a la sentencia **SU- 426 de 2016 (Ver numerales 9.3 y 10 de l**; no obstante, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional y el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López (Meta), la Agencia Nacional de Tierras desplegó diferentes actuaciones a fin de atender y adelantar los trámites ordenados en el correspondiente, dentro de la ruta de actuación dispuesta para el cumplimiento de la sentencia **SU- 426 de 2016**.

  Por lo anterior, la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se expidió conforme a lo establecido por la sentencia **SU - 426 de 2016**, a través de la cual se ordeno estudiar los requisitos de reforma agraria de los ocupantes de los terrenos baldíos que conforman El Porvenir ubicado en el municipio de Puerto Gaitán-Meta, encontrando que el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** no reúne los requisitos mencionados.

- **Numeral 34.8.** Es cierto. En la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT a nombre del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA**, con el fin de atender las órdenes judiciales, se relacionó como antecedentes la acción de

tutela con radicado No. T-00024 de 2018, como también fue citado como antecedente la sentencia **SU - 426 de 2016** y la solicitud. *(Ver. Num. "1.2. Antecedentes" - Páginas No. 4 a la 6 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020)*

- **Numeral 34.9.** No es cierto. Es una interpretación personal del demandante.

  En la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 se indica que la Agencia Nacional de Tierras realizó el cálculo de las UAF predial tipo para los baldíos que conforman el de mayor extensión conocido actualmente como El Porvenir. Esta labor se llevó a cabo haciendo uso de la metodología adoptada a través de la Resolución ANT No. 2533 de 2018 *"Por la cual se adopta la Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto Ley 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF Predial"*.

  Conforme lo anterior, el cálculo de la UAF se encuentra relacionado en el numeral **2.2.9**. de la citada resolución, donde se manifestó lo siguiente:

  > *"(…)* ***Informe Agronómico UAF predio El Porvenir.***
  >
  > *Este informe consagra principalmente el resultado del cálculo de la UAF predial definida para el predio de mayor extensión en cuestión. De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos según las Unidades Cartográficas de suelos; y por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector, las cuales se detallan en el Informe Agronómico sobre Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta. Así, las condiciones especiales de manejo para los suelos, en combinación con la ubicación del predio, las vías de acceso, las vías de comercialización de los productos, el transporte fluvial y los costos de mano de obra, convergen en el cálculo de la UAF predial para el predio El Porvenir, razón por la cual, como se dijo anteriormente, resultaron 4 áreas de UAF, que comprenden: cincuenta y cinco hectáreas más cinco mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (55 ha + 5984 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD; ochenta y siete hectáreas más siete mil quinientos setenta y siete metros cuadrados (87 ha + 7577 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica RVK y VVC; cincuenta y cinco hectáreas más dos mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados (55 ha + 2588 m2) para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y; cuarenta y cuatro hectáreas más dos mil setecientos veintidós metros cuadrados (44 ha + 2722 m2) para el uso de suelo Forestal Protector (...)"*

  (Ver. Num. " 2.2.9. Informe Agronómico UAF predio El Porvenir" - Páginas No. 24 y 25 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

(Ver prueba documental No. 14)

- **Numeral 34.10.** Es una cita de un aparte de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020.

- **Numeral 34.11. No es cierto,** es una cita parcial que realiza el demandante del numeral "***1.4.1.1. Excepciones a la ocupación previa como modo de acceder a la propiedad de tierras baldías en el régimen de la Ley 160 de 1994***" de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020.

  Por lo expuesto, se relaciona la parte textual del numeral 1.4.1.1.; a decir:

  > *"(…) la figura de la ocupación previa se postuló como la regla general para definir el acceso a los derechos de propiedad sobre tierras baldías, empero, este prevé múltiples excepciones que identifican ciertos atributos de algunos terrenos baldíos que los hacen inadjudicables, o en otros eventos,* ***no adjudicables por la vía de la ocupación previa****.*
  >
  > *Dentro de tales excepciones podemos identificar la figura de la reserva de baldíos, que implica que el Estado sustrae del régimen general de la ocupación determinadas áreas de baldíos.*
  >
  > *Las reservas de baldíos, a su vez, contemplan múltiples hipótesis: i. Son baldíos reservados los predios de propiedad privada que revierten al dominio de la nación en virtud de la declaratoria de la extinción administrativa del dominio y deben ser destinados a procesos de adjudicación especiales, conforme al reglamento que expida la Junta Directiva del Incora (hoy Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras) (artículo 56 ley 160 de 1994); ii. Son baldíos reservados los delimitados conforme a las reglas de los artículos 67, 75 y 76 de la Ley 160 de 1994, para su destinación a actividades de utilidad pública e interés social, o para el establecimiento de regímenes especiales de ocupación, aprovechamiento y adjudicación; iii. Son baldíos reservados las islas de uno y otro mar que no hayan sido apropiados por particulares en virtud de título traslaticio del Estado; iv. Son baldíos reservados los delimitados para la constitución de títulos étnicos expedidos en vigencia de la Ley 135 de 1961; v. Son baldíos reservados los que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados (artículo 48 numeral 3) (...)"* (Subrayado fuera de texto.)

  (Ver. Num. " 1.4.1.1. *Excepciones a la ocupación previa como modo de acceder a la propiedad de tierras baldías en el régimen de la Ley 160 de 1994" - Páginas No. 10 y 11 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).*

- **Numeral 34.12.** Es parcialmente cierto, atendiendo lo siguiente:

Dentro de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, en ninguna parte se hace referencia respecto del *"(…) marco jurídico aplicable a las solicitudes de adjudicación radicadas ante el Incoder (…)"* conforme lo manifiesta el demandante.

Adicionalmente, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, la solicitud aportada por el señor **CARAVALI RIVERA**, junto a la acción de tutela y la encontrada en el expediente de la también solicitante MARTHA YANETH HERNÁNDEZ, no cuentan con número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido presentada o radicada ante el extinto Incoder; no obstante, en virtud de la orden impartida por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META), en consonancia con la orden cuarta, literal (ii), de la sentencia SU – 426 de 2016, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT procedió a resolver la solicitud de adjudicación allegada con la acción judicial.

Así las cosas, a través de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se realizó pronunciamiento respecto de la procedencia de las solicitudes de adjudicación indicando lo siguiente:

> *"(…)* ***1.6. Procedencia de las solicitudes de adjudicación***
>
> *Como un elemento común a las diferentes solicitudes de adjudicación de los aspirantes de tierra dentro del predio denominado hoy "El Porvenir", encontramos que las ocupaciones se iniciaron con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 (29 de mayo de 2017), por cuanto, en principio, se deben resolver sustancialmente bajo las prerrogativas de la Ley 160 de 1994.*
>
> *Ahora bien, como se mostró, el efecto inmediato de la resolución que declaró la revocatoria de las adjudicaciones implicó que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y, por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho a la adjudicación. Esta conclusión, se extrae del análisis de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la Ley 160 de 1994 por efecto de la ultraactividad prevista por el Decreto Ley 902 de 2017, permite afirmar que, en principio, no resultan procedentes las titulaciones solicitadas (...)"*
> (Subrayado fuera de texto.)

(Ver. Num. " 1.6. Procedencia de las solicitudes de adjudicación" - Página No. 14 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

Aunado a lo anterior, es de tener en cuenta que a través del numeral 34.6. del pronunciamiento sobre los hechos de la presente contestación, se manifestó que para resolver de fondo la solicitud de adjudicación del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA**, se aplicaron normas procedimentales del

Decreto Ley 902 de 2017, empero, también se aplicaron normas sustanciales vigentes contenidas en la Ley 160 de 1994.

- **Numeral 34.13.** Es parcialmente cierto, atendiendo lo siguiente:

  En la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se dispuso que, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014 *"(…) En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos (…)"* (Subrayas fuera del texto original).

  Conforme a lo anterior, se dispuso también que todas las áreas que excedan la UAF que sea definida por la Autoridad de Tierras para un municipio o zona determinada, en virtud de la ley, se encuentran reservadas automáticamente para el desarrollo de los programas de acceso a tierra en favor de la población campesina.

  Lo que no es cierto, es lo manifestado por el demandante en cuanto a afirmar que, por esta razón, la Agencia Nacional de Tierras a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas en la citada resolución dijera que: *"(…) todas las ocupaciones ejercidas en ese predio no otorgan derecho a la adjudicación (…)"* cuando a través del numeral 1.6.1., de la citada resolución, se hizo referencia a la *"Reserva de baldíos: áreas que superen la UAF"* de la siguiente manera:

  > *"(…) Así pues, todas las áreas que excedan la Unidad Agrícola Familiar definida para el predio de mayor extensión denominado El Porvenir, el cual, como se dijo, tiene una extensión aproximada de 25 mil hectáreas, se les debe impartir el tratamiento de baldíos reservado, y, por tanto, su régimen de ocupación, aprovechamiento y adjudicación no corresponde al ordinario.*
  >
  > *Esto, como se dijo, implica que tales áreas no puedan ser objeto de ocupación libre por particulares con el objeto de que sean tituladas en su favor; toda vez que, al estar reservadas, su régimen de ocupación y adjudicación debe ser el que defina la hoy Agencia Nacional de Tierras.*
  >
  > *En consecuencia, todas las ocupaciones ejercidas sobre dichas áreas no solo no otorgan derecho a la adjudicación, sino que, en principio, se tornan indebidas, debiendo ser recuperadas por la autoridad de tierras para el desarrollo de los programas en favor de la población campesina (...)"* (Subrayado fuera de texto).

  (Ver. Num. " 1.6.1. Reserva de baldíos: áreas que superen la UAF" - Páginas No. 14 y 15 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

Adicionalmente, cabe agregar que los baldíos que conforman EL Porvenir tienen un área total aproximada de 25 mil ha, de las cuales solo 15 mil ha son adjudicables de acuerdo a los informes técnicos realizados en la zona.

- **Numeral 34.14.** Es cierto. A través del numeral "*1.6.2. Efectos de la revocatoria directa: reserva especial de baldíos"*, de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, otorga el tratamiento de baldíos reservados de la nación; esto, en consideración a lo señalado en la Resolución de revocatoria directa No. 6423 de 2014 en la cual, uno de sus efectos, fue el de otorgar a los predios que lo conforman, la naturaleza de baldíos sustraídos de la posibilidad de ser ocupados libremente con la finalidad de pretender su adjudicación, pues tales predios se encuentran exceptuados del régimen de ocupación ordinario.

  Lo anterior tiene asidero en que carece de sentido que el Estado corrija una irregularidad de tenencia de la tierra a través de una revocatoria de titulaciones ilegales, si una vez recuperado se permite que otros actores poderosos ocupen libremente los bienes de la nación, repitiendo el fenómeno de acumulación indebida de grandes extensiones de tierra en un ciclo infinito. Esta consideración se desarrolla ampliamente dentro del acto bajo estudio.

- **Numeral 34.15.** Es un parafraseo del numeral 1.6.3. de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 realizado por el demandante y adicionalmente, realiza una cita de un aparte de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, por tanto, el mismo no requiere de pronunciamiento alguno. No obstante, se relaciona la parte textual del numeral antes aludido:

  > *"(…)* ***1.6.3. Improcedencia de las solicitudes de adjudicación de baldíos concentrados y reservados.***
  >
  > *De conformidad con lo expuesto, y en consonancia con el inciso segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994**,** no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida. Como se señaló el peticionario afirma que su ocupación inició antes del 29 de mayo de 2017, bajo el régimen de la Ley 160 de 1994, lo que pudo ocurrir solo en dos hipótesis:* ***(i)*** *las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío reservado que se encuentra fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario,* ***(ii)*** *lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se encontraban concentrados por efecto de la titulación indebida, y posterior englobe, lo cual devino en la revocación de dichas adjudicaciones (...)"*

  (Ver. Num. "1.6.3. Improcedencia de las solicitudes de adjudicación de baldíos concentrados y reservados" - Página No. 16 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

- **Numeral 34.16.** Es un parafraseo e interpretación personal del numeral "*2.1.2. La ocupación*" de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 realizado por el demandante. No obstante, se relaciona la parte textual de las conclusiones del análisis geográfico:

  > *"(…) El predio denominado como "**Villa Camila",** sobre el cual, el señor **José Orlando Caravalí Rivera**, con cédula de ciudadanía **17.385.776**, ejerce ocupación, tiene un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**, se encuentra ubicada en un predio de mayor extensión denominado "El Porvenir", jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta, específicamente, el predio "**Villa Camila",** se encuentra inmerso en un (1) predio denominado "El Rincón", el cual hace parte de un total de cinco (5) grandes extensiones que se generaron en el año 2007, a partir del englobe de veintisiete (27) predios que inicialmente fueron adjudicados en la década de 1990 y posteriormente, mediante Resolución 6423 de julio 30 de 2014, fueron revocados y cancelados junto con los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5) predios.*
  >
  > *El predio denominado "**Villa Camila",** sobre el cual ejerce ocupación el señor **José Orlando Caravalí Rivera**, con cédula de ciudadanía **17.385.776**, la cual ocupa un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**, queda plenamente identificada bajo los aspectos técnicos descritos en el presente documento(...)"* (Subrayado fuera de texto).

  (Ver. Num. " 2.1.2. La ocupación" - Páginas No. 17 a 21 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

- **Numeral 34.17.** Es parcialmente cierto atendiendo lo siguiente:

  Dentro de los documentos valorados para realizar el análisis probatorio referido en el numeral 2.2 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se relacionó: **i)** El certificado de la junta de acción comunal inspección El Porvenir de fecha 20 de julio de 2018, en el cual se certifica que el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA** es miembro activo y habitante del centro Poblado de la inspección el Porvenir desde **el 27 de agosto de 2015** y, **ii)** La declaración con fines extraprocesales **(**Documento suscrito ante la Notaria Única del Círculo de Puerto Gaitán – Meta) de fecha 24 de julio de 2018, en la cual, señor **CARAVALÍ RIVERA** declara que es ocupante con ánimo de señor y dueño en forma quieta, pública pacifica e ininterrumpida, desde el día 01 de febrero de 2010 del predio rural denominado "Villa Camila 1".

  Lo que no es cierto, es que, a través de la declaración con fines extraprocesales *(Documento suscrito ante la Notaria Única del Círculo de Puerto Gaitán – Meta)* se ratificara que la ocupación del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, inició desde el 01 de febrero del 2010; esto, teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 3 del pronunciamiento sobre los hechos de la presente contestación.

(Ver pruebas documentales No. 17, 18 y el numeral *" 2.2.* análisis probatorio" y especificamente el párrafo final del numeral "2.2.5 Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial"- *Páginas No. 21 a 23 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).*

- **Numeral 34.18.** Es una cita de un aparte de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, por tanto, el mismo no requiere de pronunciamiento alguno. Sin embargo, a fin de precisar lo que alude el demandante, y, con el propósito que no se salga de contexto; se cita correcta y completamente lo que alude el demandante:

> *"(…) En atención a la información que contienen los documentos revisados, se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por el señor* ***José Orlando Carabalí Rivera*** *relacionada con la fecha desde la cual ocupa o habita el predio objeto de solicitud, ni el área del mismo. (...)"*

(Ver. Num. " 2.2. Análisis probatorio – párrafo final del numeral "*2.2.5 Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial" - Páginas No. 22 a 23 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).*

- **Numeral 34.19.** Es una cita de un aparte de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, por tanto, el mismo no requiere de pronunciamiento alguno. Sin embargo, a fin de precisar lo que alude el demandante, y, con el propósito que no se salga de contexto; se cita correcta y completamente lo que alude el demandante:

> *"(…) 2.2.6. Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder.*
>
> *Con base en dicho acto administrativo se puede concluir que, en virtud de la revocatoria directa de los actos de adjudicación efectuados por el extinto Incoder, a través de la resolución 6423 de 2014, el predio ocupado el cual hace parte del predio de mayor extensión conocido hoy como El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, volvió al dominio de la Nación, es decir, que ostenta la condición de baldío para ser administrado por la máxima autoridad de tierras, hoy en día, La Agencia Nacional de Tierras.*
>
> *Igualmente, de la resolución se evidencia la situación de tenencia indebida de la tierra producto de las veintisiete (27) adjudicaciones efectuadas con violación de las normas aplicables a la adjudicación de baldíos, la cual, al quedar plenamente demostrada, devino en la revocatoria de la totalidad de las titulaciones (...)"*

(Ver. Num. " 2.2.6. Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder" - Página No. 23 de la Resolución No.

6915 del 13 de agosto de 2020).

- **Numeral 34.20.** Es cierto. No obstante, es de resaltar que se realiza un parafraseo e interpretación personal del demandante sobre el Informe Técnico Jurídico – ITJ relacionado en el numeral 2.2.7, de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020; no obstante, se relaciona la parte textual del citado numeral:

  "(…) ***2.2.7. Informe Técnico Jurídico -ITJ.***

  Dentro de este documento preliminar se encuentra consagrada la información catastral y registral (FMI) de los predios objeto de solicitud. Igualmente, contiene una descripción y análisis de la situación de ocupación y naturaleza jurídica del fundo.

  A partir de allí, y especialmente de los antecedentes registrales, queda demostrada la naturaleza privada que revestía los predios objeto de solicitud a partir de las resoluciones de adjudicación expedidas el extinto Incora durante los años 1992 a 1996 y hasta su revocatoria en el año 2014, a través de la señalada Resolución No. 6423.

  Igualmente, se puede establecer que en razón a la existencia de un título de dominio y su correspondiente inscripción en el Folio de Matricula Inmobiliaria de cada uno de los predios en cuestión, es un hecho aparente y, por tanto, conocido públicamente, que los mismos revestían la naturaleza de privados a partir de su titulación y registro. De allí se establece que la ocupación inicio en el momento en que los predios se encontraban bajo el dominio privado, producto de las titulaciones que hiciera el entonces Incora, y, que posteriormente fueron revocadas por el Incoder.

  Así mismo, quedó establecido que la ocupación alegada se ejerce sin autorización de la ANT, sobre predios que se encuentra por fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario a partir de la revocatoria de que trata la resolución No. 6423 de 2014.

  Sumado a lo anterior, se tiene que el área ocupada por el (la) solicitante excede por mucho la UAF definida por la Autoridad de Tierras para el predio El Provenir, circunstancia que, igualmente, pone de presente la ocupación indebida de conformidad con las disposiciones y consideraciones indicadas (...)"

- **Numeral 34.21.** Es cierto. A través del numeral **2.2.9.** de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se manifestó que la Agencia nacional de Tierras realizó un Informe Agronómico que consagra principalmente el resultado del cálculo de la UAF predial definida para el predio de mayor extensión conocido como El Porvenir.

(Ver. Num. " 2.2.9. Informe Agronómico UAF predio El Porvenir 2.2.6." - Página No. 23 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

- **Numerales 34.22 a 34.24.** No son ciertos. Son conclusiones personales que el demandante realizó de la lectura del acápite denominado: "*Análisis de la situación particular*", el cual se encuentra en el numeral **2.3.** de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 y del cual se desprenden los numerales **2.3.1.** *"Ocupaciones iniciadas con anterioridad a la Resolución No. 6423 de 2014"*, **2.3.2.** *"Ocupaciones iniciadas a partir de la resolución No. 6423 de 2014"*, y **2.3.3.** *"Conclusiones"*.

  No obstante, resulta importante precisar que, en ningún momento, dentro de la citada resolución, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, manifestó que *"(…) estas ocupaciones se gestaron con el patrocinio de la familia Carranza dueña de la empresa ganadera La Cristalina (…)"* conforme lo relaciona el demandante a través de su apoderado en el numeral 34.22. del segundo literal. Por lo expuesto, se relaciona la parte textual de lo manifestado en la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020:

  > *"(…) esto permite concluir que tales posesiones se gestaron y/o mantuvieron bajo el conocimiento o permisión de los titulares del derecho real de dominio de los fundos cuyos actos irregulares de adjudicación fueron revocados por el extinto Incoder; o bien, lo hicieron bajo la aquiescencia de terceros que en su momento ejercían explotación sobre los mismos, como es el caso de la empresa ganadera La Cristalina, de propiedad de la familia del fallecido Víctor Carranza (...)"*

  (Ver. Página No. 24, 25 y 26 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

- **Numeral 34.25.** No es cierto. Es una interpretación personal que realiza el demandante respecto del numeral "*2.4. El procedimiento aplicable*." dispuesto en la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020.

  Lo cierto es que, dentro del citado numeral, se realizaron las respectivas consideraciones en relación con las normas aplicables al caso en concreto: se expresó que el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017, consagra la posibilidad de la aplicación de la ultraactividad de la norma, la cual supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017, pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable para el ocupante; no obstante, se aclaró que la aplicación del régimen de transición, no pueden pretenderse cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

  Así las cosas, luego del estudio y análisis de la solicitud, conllevó a que las misma no pudiera ser tramitada bajo las reglas procedimentales de la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias; esto, debido a que la ocupación

ejercida es de las consideradas como indebidas y, por tanto, no es posible aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994, sino que, por el contrario, se debe hacer uso del Procedimiento Único contenido en el Decreto Ley 902 de 2017 y demás normas reglamentarias.

- **Numeral 34.26.** No es cierto. Es una interpretación personal que realiza el demandante respecto del numeral "*2.6. De la buena fe y el reconocimiento de mejoras."* dispuesto en la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020. Adicionalmente, el demandante omitió decir que en el citado numeral, se manifestó lo siguiente:

  1. Que desde el momento en el que la Agencia Nacional de Tierras asumió la administración de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión conocido como El Porvenir, se ha ejecutado permanentes actuaciones (visitas de campo, vallas informativas, comunicaciones, reuniones y mesas de trabajo con la comunidad ocupante) con el fin de advertir a los particulares sobre la condición de los predios, las limitaciones y posibles consecuencias e implicaciones de efectuar negocios jurídicos, mejoras e inversiones sobre estos predios baldíos que se encuentran bajo el dominio de la Nación.

  2. Que en consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras no está en posibilidad legal de reconocer ningún tipo de mejoras efectuadas cuando los predios en comento ostentaban la calidad de privados (por cuanto entonces deberían ser reclamado ante los entonces titulares del derecho real de dominio) , y, mucho menos, a partir de que estos retornaron al dominio de la Nación con carácter de baldíos al momento de ejecutoriarse las revocatorias directas, toda vez que como quedó establecido, la ocupación se ejerce, a partir de allí, de manera indebida.

35. **EL HECHO DENOMINADO COMO "35": Es parcialmente cierto**. El recurso de apelación presentado por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA** tenía como finalidad, entre otras cosas, solicitar la revocatoria de la 6915 del 13 de agosto de 2020. Lo que no es cierto, es que fuera presentado el 27 de agosto de 2020, sino que el mismo fue allegado el día 29 de agosto de 2020, bajo el radicado número **20206200563502.**

36. **EL HECHO DENOMINADO COMO "36" y sus numerales 36.1 a 36.10: No son hechos**, se trata de un resumen personal del recurso de apelación presentado por el demandante, documento este que fue aportado como prueba dentro del presente proceso. Sin embargo, es de resaltar que este recurso fue resuelto debidamente a través de la **Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020**, proferida por la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

    (Ver pruebas documentales No. 13, 15 y 16)

37. **EL HECHO DENOMINADO COMO "37": Es parcialmente cierto.** Sin embargo, es importante precisar que la Agencia Nacional de Tierras, a través de la Dirección de Acceso a Tierras resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020, la cual fue notificada al demandante el día 28 de diciembre de 2020 bajo el radicado No. 20204001411761 del 22 de diciembre de 2020, como consta en los certificados de la empresa de mensajería 4-72 No. E37413512-S y No. E37413514-S.

    (Ver pruebas documentales No. 13, 15 y 16)

38. **EL HECHO DENOMINADO COMO "38": No es un hecho,** es una consecuencia jurídica que asigna el actor la cual debe ser probada y valorada por el juez.

39. **EL HECHO DENOMINADO COMO "39": No es cierto**, el señor **CARAVALÍ RIVERA** no reúne los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado "Villa Camila", el cual se encuentra ubicado dentro de los predios que conforman el de mayo extensión conocido como "El Porvenir", el cual hace parte de una zona focalizada en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

    Lo anterior, atendiendo lo expuesto en la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, que textualmente dispuso:

    > *"(…) la ocupación ejercida por el peticionario **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, no es de aquellas que permitan o den lugar al reconocimiento de derechos de propiedad rural, es decir, posible de titulación; toda vez que como se analizó, la misma tuvo inicio en el momento que los predios objeto de estudio se encontraban bajo el dominio privado producto de títulos expedidos en forma irregular (año 2010), lo cual conlleva que la ocupación alegada se derive de una tenencia indebida de la tierra ejercida por particulares, materializando de esta forma el postulado normativo establecido en el parágrafo artículo 74 Ley 160 de 1994.*
    >
    > *En tal virtud, toda solicitud de adjudicación que tenga origen o se derive de la titulación irregular de las áreas de qué trata la señalada Resolución de revocatoria 6423 de 2014, debe ser desestimada, en tanto que uno de los Principios Generales del Derecho establece que "Lo accesorio sigue la suerte de lo principal."*
    >
    > *Concebirlo de otra manera significaría abrir la puerta para que se entregue el dominio de la tierra a personas que derivan su pretensión agraria de situaciones irregulares como la tenencia indebida de las áreas reclamadas, lo cual atentaría contra los postulados esenciales de un Estado Social de Derecho.*
    >
    > *En consecuencia, se tiene que la ocupación alegada no permite el reconocimiento de derechos (adjudicación), por cuanto, como se indicó, esta se originó como una posesión ejercida sobre predios que se*

encontraban irregularmente bajo el dominio privado; escenario que a la luz de ordenamiento jurídico colombiano no tiene la capacidad de producir efectos para adquirir el dominio de bienes baldíos.

Sumado a esto, se debe reiterar que debido a que la ocupación aludida se ejerce actualmente sobre predios que ostentan la condición de reservados y, al no contar con el consentimiento de la autoridad de tierras, dicha ocupación es a todas luces indebida[2], susceptible de ser recuperada con destino a los programas de acceso a tierra dispuesto por el Gobierno Nacional en los términos establecidos en artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con las consideraciones establecidas en la sentencia ***SU-426 de 2016*** *proferida por la Corte Constitucional. Adicionalmente, se encuentra plenamente probado que las áreas ocupadas por el solicitante exceden ostensiblemente la UAF definida para el predio EL Provenir.*

Así las cosas, al no encontrase acreditadas las condiciones y presupuestos que permitan llevar a cabo una eventual titulación del área reclamada, la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, debe desestimar la solicitud de adjudicación y, por ende, abstener de continuar con el presente procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, con ocasión de la solicitud presentada por el señor ***JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA****, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776. (…)"*

(Ver. Página No. 25 y 26 de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020).

40. **EL HECHO DENOMINADO COMO "40": No es cierto.** La norma aplicable al procedimiento es el Decreto Ley 902 de 2017, esto, atendiendo que el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017 consagra la posibilidad de dar aplicación a la ultraactividad de la norma, la cual supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017, pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable para el ocupante; no obstante, se aclaró que la aplicación del régimen de transición no pueden pretenderse cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

---

2 El artículo 48 de la Ley 160 de 1994, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (hoy Agencia Nacional de Tierras, según lo establece el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015), previa obtención de la información necesaria adelantará entre otros, los procedimientos tendientes a determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos. ***Citado por:*** *Agencia Nacional de Tierras en resolución 6915 del 13 de agosto de 2020.*

Así las cosas, luego del estudio y análisis de la solicitud, conllevó a que la misma no podía ser tramitada bajo las reglas procedimentales de la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias; esto, debido a que la ocupación ejercida es de las consideradas como indebidas y, por tanto, no es posible aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994, sino que, por el contrario, se debe hacer uso del Procedimiento Único contenido en el Decreto Ley 902 de 2017 y demás normas reglamentarias.

Tampoco está probado que la solicitud de adjudicación se haya radicado ante el extinto Incoder en la fecha aludida por el demandante, esto, debido a que la solicitud existente no contiene radicado, fecha, ni número de solicitud, esto, como reiteradamente se ha sostenido en la presente contestación.

41. **EL HECHO DENOMINADO COMO "41": No es cierto.** La Agencia Nacional de Tierras no tiene en su página web la publicación de los requisitos que debe cumplir el señor **JOSE ORLANDO CARABALI RIVERA** para la adjudicación de predio alguno. Así mismo. Es importante precisar que, debido a que la ocupación ejercida por el señor **CARAVALÍ RIVERA** es considerada como indebida, no es posible aplicar las antiguas disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994 para la adjudicación del predio denominado "Villa Camila", sino que, por el contrario, se debe hacer uso de las reglas vigentes contendidas en el Decreto Ley 902 de 2017, esto, como bien se ha sostenido en la presente contestación.

42. **EL HECHO DENOMINADO COMO "42": No es cierto.** Si bien es cierto, la Agencia Nacional de Tierras está en la obligación de observar la presunción de buena fe en favor del señor **CARAVALÍ RIVERA** cuando ingresó al predio, no es cierto es que las mejoras que haya realizado hubieren sido con el fin de demostrar explotación económica alguna.

    Así las cosas, es importante precisar que, en atención a la información que contienen los documentos revisados, se observa claramente que no existe tampoco congruencia en la información aportada por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA** relacionada con la fecha desde la cual explota el predio ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido como El porvenir.

    Conforme lo anterior, resulta importante precisar que, el señor **CARAVALI RIVERA** en el Formulario de Sujetos de Ordenamiento - FISO - No. 97738 de fecha 25 de julio del año 2018, indicó que: **i).** Habita el predio desde el día 14 de enero de 2014 *(numeral 31),* **ii).** Tiempo de tenencia, posesión u ocupación "*4 años*" *(numeral 37);* y **iii)** Fecha desde la cual explota el predio "18 -05-2014" *(numeral 50).*

    De igual manera, es de tener en cuenta que, a través del Formulario Censo No. 110 de fecha 26 de junio de 2017, el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA**, no registró la fecha desde la cual ocupa y explota el predio *(numeral 38)*.

    Por lo anterior, se podría concluir que no se observa buena fe dentro de la presente actuación administrativa, toda vez, que como se ha mostrado, no existe

congruencia en la información aportada por el demandante en los diferentes documentos allegados al trámite administrativo, siendo dicha información aportada bajo gravedad de juramento.

Igualmente, es de tener en cuenta que, desde el momento en el que la Agencia Nacional de Tierras asumió la administración de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión conocido como El Porvenir, se han ejecutado varias y permanentes actuaciones, con el fin de advertir a las personas sobre la condición de los predios, las limitaciones y posibles consecuencias e implicaciones de efectuar negocios jurídicos, mejoras e inversiones sobre estos predios.

Asimismo, es de reiterar que la Agencia Nacional de Tierras no está en posibilidad legal de reconocer ningún tipo de mejoras efectuadas cuando los predios en comento ostentaban la calidad de privados (por cuanto entonces deberían ser reclamado ante los entonces titulares del derecho real de dominio) , y, mucho menos, a partir de que estos retornaron al dominio de la Nación con carácter de baldíos al momento de ejecutoriarse las revocatorias directas, toda vez que como quedó establecido, la ocupación se ejerce, a partir de allí, de manera indebida.

43. **EL HECHO DENOMINADO COMO "43": No nos consta**, pues lo único que realizó el señor **CARAVALI RIVERA** fue la acción de tutela ya conocida, como el recurso de apelación ya aludido en el presente escrito.

44. **EL HECHO DENOMINADO COMO "44": No es un hecho**, por tanto, el mismo no requiere de pronunciamiento.

II. CONTESTACIÓN A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

La parte actora identifica un acápite denominado *"declaraciones y condenas"* en el cuál identifica sus pretensiones principales y subsidiarias. Nos oponemos a todas y a cada una de ellas, por cuanto las mismas carecen de fundamento fáctico y jurídico. De la manera más comedida y respetuosa, se solicita al Honorable Tribunal no acceder a las pretensiones, por las siguientes razones:

1. La demanda no cumple con identificar la causal de nulidad que alega para sostener que el acto administrativo demandado debe ser anulado. Esto es una de los requisitos de la demanda de nulidad como se expone en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues sin que una de dichas causales se presente no procede la solicitud de nulidad. Además, obviar esto por parte del demandante supone una afrenta contra el derecho de defensa y contradicción del demandado, porque no se puede dirigir la contestación a un cargo específico de nulidad que se reproche. En consecuencia, el juez también encontrará dificultades para darle sentido a la nulidad alegada. De manera que, se presenta una situación de ineptitud de la demanda, y esta no debe prosperar.

2. La demanda adolece de no dirigirse contra el acto administrativo que confirmó la decisión de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, porque no existe

acto “ficto o presunto” producto de silencio administrativo. La ANT, a través de la Dirección de Acceso a Tierras resolvió el recurso de apelación mediante la resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020. No obstante, resultaría improcedente a su vez declarar la nulidad de esta resolución atendiendo que, con la expedición de esta, no se vulneró ningún derecho al demandante. (Ver pruebas documentales No. 13, 15 y 16)

3. El acto administrativo demandado no adolece de ningún vicio porque, siguió el debido proceso requerido, lo cual está demostrado a través del expediente administrativo (notificaciones, oportunidades probatorias y de impugnación por parte del solicitante), se realizó por la autoridad competente, es decir la ANT en cabeza de su dependencia encargada como ya se ha explicado, y se motivó debidamente en las siguientes razones de derecho, así:

   3.1. En primer lugar, se deben recordar las disposiciones legales contenidas en el artículo 65 (vigente) de la Ley 160 de 1994 que establecen claramente:

   > *“ARTÍCULO 65. **La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria**, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad.*
   >
   > *Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, **y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.**” (Se subraya y resalta)*

   3.2. Ahora bien, al momento del estudio de la solicitud de adjudicación de un baldío, el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras está en la obligación de observar la presunción de buena fe en favor del ocupante que reclama la adjudicación; no obstante, al ser una presunción de carácter legal, esta puede ser desvirtuada o impugnada por la Autoridad de Tierras, si se demuestra por ejemplo, que la ocupación se deriva de un acto ilícito, o si la misma recae sobre baldíos que tienen el carácter de reservados.

   Esta última situación no implica automáticamente que la ocupación se considere ejercida de mala fe, lo cual debe ser debidamente acreditado dentro del procedimiento, pero si constituye una circunstancia que impide su adjudicación, obligando a su vez a la autoridad a corregir esta situación a través de la recuperación de las áreas ocupadas indebidamente.

   3.3. La legislación agraria contempla una diferente gama de condiciones bajo las cuales se pueden considera baldíos reservados, entre ellas, la consagrada en el artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014, normal que habilita a la Agencia Nacional de Tierras para dar el carácter de baldíos reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos, en los casos de áreas que exceden el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

3.4. Como se dijo, una vez la Autoridad de Tierras dentro del procedimiento administrativo correspondiente advierta que existe ocupación indebida por recaer sobre terrenos baldíos que tengan el carácter de reservados, debe proceder a su recuperación, con el fin de corregir esta situación, toda vez que no hacerlo impide que estos baldíos sean destinados a la población campesina que cumpla con los requisitos para ser considerados sujetos de acceso a tierra. En tal sentido, el artículo 74 de la Ley 160 de 1994, establece:

> *"ARTÍCULO 74. En caso de ocupación indebida de tierras baldías o que no puedan ser adjudicables, el Instituto ordenará la restitución de las extensiones indebidamente ocupadas, previa citación personal del ocupante o de quien se pretenda dueño, o en la forma prevista en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, el decreto reglamentario establecerá el procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del ocupante o de quien se pretenda dueño. Las autoridades de policía están en la obligación de prestar su concurso para que la restitución se haga efectiva."* (Se subraya)

3.5. Adicionalmente, se debe señalar que el inciso final del artículo 25 del Decreto Ley 902 de 2017, establece:

> *"(…) Los bienes baldíos adjudicables que a la fecha de la expedición del presente decreto no se encuentren ocupados debidamente en los términos de la Ley 160 de 1994, y los que se identificarán a partir de la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales en este Decreto señalados como fuentes del Fondo, se declaran reservados, y su destinación a los programas de acceso acá establecidos se realizará conforme a las reglas de adjudicación del RESO, según la competencia establecida por el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015.(…)"* (Se subraya)

3.6. Como puede observarse, existen diferentes circunstancias que impiden la titulación de baldíos en favor de sus ocupantes, entre ellas, que los bienes objeto de ocupación tengan la condición de reservados, en cuyo caso, la ocupación se torna indebida, impidiendo, por tanto, su adjudicación. De ahí que es la Autoridad de Tierras quien debe establecer esta circunstancia a través de la expedición de un acto administrativo, previo el agotamiento del correspondiente procedimiento.

De las normas citadas se pueden extraer las siguientes conclusiones:

3.7. Los ocupantes de baldíos solo tienen una mera expectativa frente a la adjudicación por parte de la ANT, y, por tanto, su tratamiento y derechos que les asisten no se asimilan por ningún motivo a los de un poseedor.

3.8. La ANT es la autoridad encargada de estudiar y resolver sobre el cumplimiento los requisitos objetivos y subjetivos de los ocupantes que reclamen adjudicación de baldíos. Para ello se deben estudiar, las condiciones de ingreso y ocupación, ubicación, extensiones de tierra ocupada, cumplimiento de requisitos particulares de conformidad con la normatividad vigente.

3.9. La ANT es la competente para establecer si la ocupación alegada se ejerce de manera debida y, por tanto, puede dar lugar a la adjudicación, o si, por el contrario, es de aquellas llamadas a ser calificadas como irregulares o indebidas, caso en el cual, su medida no será la adjudicación sino la recuperación material. Para ello la Agencia debe verificar y establecer si la ocupación del aspirante de un bien baldío se deriva, por ejemplo, de un acto ilícito o si esta recae sobre baldíos que tengan la calidad de reservados. Dentro de esta última circunstancia se encuentran aquellas que exceden las extensiones de UAF determinadas o las que no reúnan los requisitos de una ocupación con arreglo a la ley, antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 902 de 2017, entre otras.

3.10. Lo anterior fue objeto de estudio a través del acto administrativo demandado y expedido con observancia de las garantías del peticionario.

4. El demandante no cumple con los requisitos legales para que se le adjudique el predio en atención a las siguientes razones fácticas:

4.1. Como se ha expresado en la contestación a los hechos de la demanda, el predio de mayor extensión El Porvenir presenta especiales circunstancias fácticas de ocupación, que son fudamento y están probadas en la Resolución No. 6423 de 2014 y en la sentencia SU-426 de 2016.

4.2. El predio El Porvenir ha sido habitado y explotado por la población campesina accionante de las tutelas que dieron origen a la sentencia SU-426 de 2016 (expediente T-5353319), desde por lo menos el año 1960, “manteniedo un asentamiento generacional”.

4.3. Los predios baldíos de El Porvenir fueron apropiados por parte de privados poderosos a través de maniobras de hecho y de derecho que alteraron la permanencia de dicha población campesina en la zona.

4.4. La Administración corrigió los errores en los que incurrió al permitir la adjudicación ilegal y el fenómeno de la concentración de tierras en manos de privados con respecto a los bienes baldíos de El Porvenir, en la Resolución No. 6423 de 2014 al declarar la revocatoria directa de las adjudicaciones de los predios a terceros que no habitaban ni explotaban la zona.

4.5. Hay múltiples personas que alegan ser ocupantes de los predios bladíos de El Porvenir y tener derecho a adjudicación de los mismos; tanto los accionantes que dieron origen a la SU-426 de 2016 como ocupantes posteriores, entre ellos el demandante.

4.6. En la zona se han presentado hechos violentos derivados del conflicto armado y del fenómeno de concentración de tierras que han alterado las circunstancias de ocupación y explotación de los predios baldíos de El Porvenir. Esto, junto con las adjudicaciones indebidas de los predios que estuvieron vigentes hasta el año 2014, hacen muy gravoso para ocupantes

asentados desde antes de 1992, probar su antigüedad de ocupación y explotación.

4.7. Existen campesinos que alegan ocupación previa al tiempo en que alega el demandante haber empezado su ocupación (2010), y que fueron reconocidos en la sentencia SU-426 de 2016 de acuerdo con las pruebas valoradas en esa decisión judicial. En consecuencia, la ANT viene construyendo desde 2016 una ruta metodológica para lograr el censo y estudio de requisitos legales de adjudicación respecto de las diversas personas que ocupan El Porvenir.

4.8. No puede la autoridad de tierras permitir una nueva concentración de la tierra e inequidad en el reparto de la misma, si pretende garantizar el derecho de acceso a la tierra a los diversos ocupantes de los predios. De ahí que no se pueda reconocer una UAF por el procedimiento de Zonas Relativamente Homogéneas como pretende el actor, sino una UAF predial que permita el reparto equitativo de la tierra. Por tanto, la solicitud del actor no cumple con los postulados de la Ley 160 de 1994 y sobretodo con los postulados del artículo 64 de la Constitución Nacional.

4.9. El actor no prueba ni es congruente con sus afirmaciones respecto de la época en la cual empezó a ocupar y explotar el predio que solicita de acuerdo con las pruebas allegadas con la solicitud de adjudicación. (Formulario de Sujetos de Ordenamiento - FISO - No. 97738 de fecha 25 de julio del año 2018, Formulario Censo No. 110 de fecha 26 de junio de 2017, certificado de la junta de acción comunal inspección El Porvenir de fecha 20 de julio de 2018, y declaración extrajudicial del demandante).

5. A través del presente medio de control, no es posible obtener la adjudicación de baldíos. Esta es una competencia que recae en el Estado a través de la hoy Agencia Nacional de Tierras, previo el agotamiento del correspondiente procedimiento administrativo. **Lo anterior, aunado a que, llevar a cabo una adjudicación de las áreas reclamadas por el demandante bajo el régimen de UAF contenido en la Resolución Incoder No. 041 de 1994, conllevaría una directa afectación frente a muchos de los aspirantes vulnerables dentro del territorio, ya que las áreas ocupadas exceden por mucho la UAF fijada, impidiendo llevar a cabo una distribución equitativa de la tierra, conforme al mandato superior que le asiste a la ANT, y perpetuando la situación de inequidad en el acceso a la tierra que afecta a los pobladores históricos desde el siglo pasado.**

III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA (EXCEPCIONES DE MÉRITO)

1. La demanda no precisa causales de nulidad, lo cual vulnera el derecho de defensa y contradicción de la Agencia Nacional de Tierras

La demanda no cumple con identificar la causal de nulidad que alega para sostener que el acto administrativo demandado debe ser anulado. Esto es una de los requisitos de la demanda de nulidad como se expone en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues sin que una de dichas causales se presente no procede la solicitud de nulidad. Además, obviar esto por parte del demandante supone una afrenta contra el derecho de defensa y contradicción del demandado, porque no se puede dirigir la contestación a un cargo específico de nulidad que se reproche. En consecuencia, el juez también encontrará dificultades para darle sentido a la nulidad alegada. De manera que, se presenta una situación de ineptitud de la demanda, y esta no debe prosperar.

2. De la confrontación entre las normas invocadas como violadas y la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 no surge violación.

Aunque la demanda no cumpla con señalar una causal de nulidad clara que permita direccionar la defensa hacia la misma, pasaremos a presentar argumentos de defensa frente a las normas señaladas como violadas.

En la demanda hay un aparte denominado *"DISPOSICIONES QUEBRANTADAS"* que es del siguiente tenor:

> *"Con la expedición de la resolución número 6915 del 13 de agosto del año 2020 acusada en esta demanda, se infringieron los siguientes preceptos legales:*
>
> *CONSTITUCIONALES: Artículo 12; 25; 44; 58 y 64*
>
> *LEGALES: Ley 160 de 1.994; decreto ley 902 del 2017 y demás normas concordantes y complementarias."*

De manera que solo estas deben ser las disposiciones confrontadas con la Resolución No. 6915 de 2020 y las que serán abordadas en seguida.

2.1. Artículo 27 y parágrafo del artículo 81 D. L. 902 de 2017 y Ley 160 de 1994

En la demanda se expresa que en el acto administrativo demandado no se le ha dado aplicación a los artículos 27 y al parágrafo del 81 del Decreto Ley 902 de 2017, y en consecuencia, tampoco se aplican los parámetros de la Ley 160 de 1994.

Ello no es así, pues, en la Resolución No. 6915 de 2020, se puede identificar que la Agencia tiene en cuenta los artículos 27 y 81 del D.L. 902 de 2017 en el acto administrativo, y que de hecho si se aplican los preceptos de la Ley 160 de 1994 para motivar la decisión final tal como se indicó en la contestación al numeral 34.12:

> *"Como un elemento común a las diferentes solicitudes de adjudicación de los aspirantes de tierra dentro del predio denominado hoy "El Porvenir", encontramos que las ocupaciones se iniciaron con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 por cuanto, en principio, se deben resolver sustancialmente bajo las prerrogativas de la Ley 160 de 1994.*

> *Ahora bien, como se mostró, el efecto inmediato de la resolución que declaró la revocatoria de las adjudicaciones implicó que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y, por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho a la adjudicación.* ***Esta conclusión, se extrae del análisis de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la Ley 160 de 1994 por efecto de la ultraactividad prevista por el Decreto Ley 902 de 2017***[3]*, permite afirmar que, en principio, no resultan procedentes las titulaciones solicitadas."* (Resaltado propio).

Esto va en concordancia con lo expresado en la contestación a los hechos de la demanda en la cual se establece que para resolver la solicitud de adjudicación, la Agencia, a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, aplicó normas procedimentales del D. L. 902 de 2017, como también, se tuvieron en cuenta normas sustanciales vigentes contempladas en la Ley 160 de 1994.

En esta línea, el acto administrativo demandado si aplica los parámetros de la Ley 160 de 1994 y estos se exponen a lo largo de la misma, cuestión distinta es que el actor no este de acuerdo con la decisión de la Administración. En concreto, en el aparte 1.6.1 de la Resolución No. 6915 de 2020 se argumenta por qué en virtud de la aplicación del artículo 67 de la Ley 160 de 1994, los predios baldíos del predio de mayor extensión "El Porvenir" se convirtieron en baldíos reservados y no susceptibles del régimen de ocupación ordinario después de que se comprobó que fueron objeto de adjudicación y acumulación indebida de baldíos, por parte de los adjudicatarios anteriores.

Adicionalmente, se hace referencia al parágrafo segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994 como fundamento de que la ocupación ejercida por este, no es de aquellas que permitan o den lugar al reconocimiento de derechos de propiedad rural, es decir, posible de titulación; toda vez que, como se ha reiterado, la ocupación ejercida tuvo inicio en el momento en que los predios objeto de estudio se encontraban bajo el dominio privado producto de títulos expedidos en forma irregular (año 2010), lo cual conlleva que la ocupación alegada se derive de una tenencia indebida de la tierra ejercida por particulares, materializándose de esta forma, el postulado normativo.

Sobretodo, para analizar la procedencia jurídica de lo dicho, el Tribunal debe tener en cuenta en las especiales circunstancias fácticas de el predio de mayor extensión El Porvenir, que lo enmarca en una realidad jurídica más amplia que simplemente resolver la solicitud de adjudicación del demandante, la cual consiste en decidir sobre la asignación de derechos de adjudicación en cabeza de varios actores en los predios de El Porvenir, con el antecedente de lo analizado y ordenado en la sentencia SU-426 de 2016. Por ello, permitir la ocupación y explotación solo del señor Carabalí en una extensión de aproximadamente 312 Ha sería más perjudicial y volvería más gravosa la situación de hecho para los diferentes ocupantes de la zona y aún más para los reconocidos como ocupantes históricos que han sufrido por largos años la indefinición de su derecho de

[3] La cual está comprendida en los artículos referenciados: 27 y 81.

dominio y conflictos territoriales.

De manera que, como autoridad de tierras el rol de la ANT es propender por un ordenamiento social de la tierra que permita garantizar los derechos a todas las personas involucradas que cumplan con los requisitos, y esto no se puede lograr siguiendo la lógica de ocupación ordinaria. Es decir, se necesita una distribución de la tierra de manera objetiva que permita que sea equitativo para varios ocupantes la adjudicación y que se evite acumulación de terreno nuevamente como ocurrió con las primeras adjudicaciones en la zona, de ahí el régimen de reservado de los predios de El Porvenir.

En este contexto, la ANT expidió la Resolución No. 5776 del 6 de septiembre de 2018[4], por la cual se dio apertura a la actuación administrativa de asignación de derechos dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado El Porvenir en cumplimiento de la sentencia constitucional citada, y se expusieron los mismos motivos que se acaban de referenciar en el acto administrativo demandado: que los preceptos de la Ley 160 de 1994 deben ser aplicadas a las solicitudes de adjudicación de los aspirantes de baldíos en El Porvenir, y en virtud de la aplicación estricta de estas, no tendrían los accionantes que dieron origen a la SU-426 de 2016 ni otros solicitantes de baldíos derecho a adjudicación. Sin embargo, en virtud de la providencia constitucional, se reconocieron las especiales circunstancias de ocupación de la zona y se designo tener en cuenta la imposibilidad de probar una ocupación pacífica para la población campesina accionante. Dentro de los accionantes referidos no esta el señor Carabalí, sin embargo, se han tenido en cuenta dentro de la ruta metodológica dispuesta en la resolución No. 5776 de 2018 a los no accionantes.

Como se ha expresado previamente, la Corte Constitucional en la varias veces citada sentencia reconoció que la situación de ocupación en El Porvenir es compleja y que hay ocupantes que han estado históricamente en la zona a los cuales no se puede comparar con otros más recientes por lo cual debe haber una respuesta del Estado pronta para evitar mayores conflictos:

> "*10.1. El Porvenir es un caso emblematico en lo que tiene que ver con los problemas historicos del acceso a la tierra para la poblacion campesina, el despojo por vias legales e ilegales, y la restitucion de predios a las victimas del conflicto armado interno reciente.*

[4] *"Por la cual se abre actuación administrativa de asignación de derechos en el marco del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado "El porvenir", ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional y se ordenan otras actuaciones".*

La extension del predio, el numero de familias interesadas, el conjunto de negocios irregulares, la protocolizacion de los mismos, el uso del registro para la inscripcion de la propiedad y las adjudicaciones efectuadas por el Incora, por una parte; y las presiones de hecho ejercidas sobre los campesinos de El Porvenir, por otra, dan cuenta de la dimension social del asunto. (…)

Pero desde el punto de vista del goce efectivo de los derechos de los pobladores de El Porvenir, ambos tramites podrian resultar inocuos, pues el Estado no ha asegurado la tenencia fisica y material de los predios, ni su proteccion frente a quienes historicamente los ocuparon indebidamente. Es asi como, mientras pasa el tiempo sin una respuesta para la comunidad de El Porvenir, nuevos ocupantes aparecen dia tras dia, lo que agrava la situacion social en la zona y cierne nuevas amenazas sobre los derechos territoriales de quienes por cerca de cincuenta anos persiguen la formalizacion de sus derechos sobre la tierra."

"(...) ***es irrazonable que se ignore la presencia histórica de la población de El Porvenir o que se asimile a la de posibles ocupantes actuales*** *(de hace tres meses, según las palabras del Incoder) como lo hace el Incoder, al afirmar que ninguna de las familias que pueden hallarse hoy en día en El Porvenir podría acreditar una explotación pacífica del mismo por más de cinco años, dado que el baldío regresó a la Nación hace apenas algo más de un año."*

*"(...) Por supuesto, también los accionantes y los órganos de control han informado acerca de la aparición reciente de nuevos ocupantes, tal como lo hace el Incoder. Pero es claro que estos últimos no pueden confundirse con quienes llevan medio siglo viendo afectados sus derechos y (al menos) dos décadas asumiendo una compleja disputa legal y jurídica por su titularidad****. Si esta confusión se produce, ello obedece precisamente a las actuaciones y especialmente las omisiones del Incoder frente a la situación de El Porvenir.*** *(...)" (resaltado propio).*

Como puede observarse, la dimension social del predio El Porvenir resulta ser una problematica de gran relevancia, que requiere especial atencion y cuidado para evitar la continuidad de amenazas a los derechos en cabeza de los *ocupantes historicos* y la reincidencia en el fenomeno de acaparamiento de la tierra por parte de actores poderosos.

Nuevamente se destaca, que esa es la razón fundamental por la cual los predios de El Porvenir no pueden estar sujetos a régimen ordinario de ocupación, lo que se ha llamado baldíos reservados en la Resolución No. 6915 de 2020 demandada, pues desde la Resolución No 6423 de 2014 en la cual se revocaron las anteriores titulaciones, el Estado inició una intervención para corregir las irregularidades en las adjudicaciones y el fenómeno de concentración de dichos terrenos baldíos, y no dejarlo a la contingencia de los particulares. De manera que, al no condicionarse la titulación a un proceso de selección objetiva no existe garantía de que los beneficiarios sean aquellos que revisten mayores condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, es más probable que, por efecto

de la ocupación, se prefiera en la adjudicación a quienes poseen mejores condiciones para ejecutar señoría y aprovechamiento económico.

Otro aspecto, es que en El Porvenir no es posible tramitar adjudicaciones de los predios baldíos mediante el uso de la UAF por Zonas Homogéneas contenida en la resolución 041 de 1996 aunque esta esté vigente, si se quiere ser congruente con la lógica explicada, pues para garantizar el Derecho de Acceso a la Tierra a todos los ocupantes que lo reclaman, que a la fecha se identifican por lo menos 244 familias, se debe optar por el uso de la UAF predial. Si se sigue la aplicación de la UAF por Zonas Homogéneas grandes extensiones en las cuales se reclaman derechos por varias personas quedarían en cabeza de una sola, y esto es lo que sucedió en el caso del señor Carabalí, la extensión por el pretendida supera la UAF predial definida para la zona, además de que su ocupación empezó cuando los predios estaban en tenencia de los adjudicatarios irregulares, no antes de ellos como si lo reclaman otros ocupantes.

Así las cosas, el artículo 67 de la Ley 160 de 1994 responde al hecho de que los predios baldíos del Porvenir deben obedecer a un régimen especial o reservado y no el ordinario, pues con solicitudes de extensas hectáreas como lo hace el actor se supera la UAF predial y no es posible adjudicar a otros campesinos asentados en El Porvenir como lo ordenó la Corte Constitucional.

Por último, es importante señalar que el conflicto territorial entre ocupantes de predios en El Porvenir que se ha reseñado, esta documentado también en noticias, comunicados de prensa, y estudios sobre la situación de ocupación de baldíos en el predio El Porvenir de Puerto Gaitán, Meta, en los cuales se puede evidenciar que es palpable el conflicto y entre los ocupantes se cuentan campesinos, ganaderos, ex trabajadores del fallecido Víctor Carranza, comunidades indígenas y población desplazada de otros territorios[5].

Así las cosas, respetuosamente la Agencia hace un llamado para que los Honorables Magistrados consideren la real situación fáctica global del predio El Porvenir para decidir sobre la medida solicitada.

[5] Ver: El lío para repartir las tierras que fueron de Víctor Carranza, VERDADABIERTA, 12 de noviembre de 2016, https://verdadabierta.com/el-lio-para-repartir-las-tierras-que-fueron-de-victor-carranza/; Tierreros y conflictos por la tierra en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Caso El Porvenir, https://www.javeriana.edu.co/papelpoliticoestudiantil/reflexion-tierreros.php; Empieza proceso para adjudicar finca que pertenecía a Víctor Carranza, land portal, 10 de noviembre de 2016, https://landportal.org/fr/node/36756 ; DENUNCIA PÚBLICA No. 41. PERSISTEN LAS INVASIONES A BALDÍOS DE LA NACIÓN EN EL PORVENIR Y MATARRATON(...), Corporación Claretiana Norman Perez Bello, mayo 7 de 2021, https://corporacionclaretiana.org/2021/05/07/denuncia-publica-no-41/.

2.2. Artículo 40 D.L. 902 de 2017 y competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas para expedir el acto administrativo demandado

En la demanda se hace referencia a este artículo como vulnerado por la resolución 6915 de 2020, en el entendido de que este artículo requiere que en el folio de matrícula del predio "Villa Camila", solicitado en adjudicación por el señor Carabalí, este registrado el hecho de que se trata de una zona focalizada por el Ministerio de Agricultura.

Frente a esto se tiene que, lo señalado en la demanda no es verdaderamente lo que esta consignado en el artículo 40 del D.L. 902 de 2017. En primer lugar, a lo que se refiere el artículo 40, es al Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y no a otros trámites como el que finalizó con la Resolución No. 6915 de 2020, es decir al reconocimiento de derechos sobre baldíos. En segundo lugar, el parágrafo del artículo 40 cuando menciona la inscripción de un acto ante la oficina de registro de instrumentos públicos, se refiere a la inscripción del acto administrativo de apertura del Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, no de que una zona sea focalizada.

Por lo demás, esta explicado de manera precisa en la resolución demandada y en la contestación al hecho 34.4 de la demanda realizada previamente, que la competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas debido a que Puerto Gaitán, donde se encuentra el predio de mayor extensión El Porvenir, y el predio Villa Camila que fue solicitado en adjudicación por el actor, es un municipio focalizado para la política de ordenamiento social de la propiedad a través de la Resolución 130 del 30 de mayo de 2017, proferida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, porque cuenta con aprobación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural mediante Resolución No. 4375 del 06 de agosto de 2018, expedida por la Dirección General de la ANT.

Aún más, la Resolución No. 12096 de 2019 proferida por la ANT y "Por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017" a través de su artículo 5, modificó el parágrafo único del artículo 4 de la Resolución número 740 de 2017 (reglamento operativo) quedando claro que NO se requiere relacionar o inscribir en los folios de matrícula inmobiliaria en el Plan de Ordenamiento Social de la propiedad Rural, teniendo en cuenta que la asignación se da para bienes baldíos cuya titularidad y régimen de ocupación y adjudicación se encuentra direccionado por la ANT. Para mayor precisión, se cita textualmente el artículo 5 de la Resolución 12096 de 2019 que estableció:

> *"(…) Artículo 5. Modifíquese el parágrafo único del artículo 4 de la Resolución número 740 de 2017, modificado por el artículo 1 de la Resolución número 108 de 2018, el cual quedará así:*
>
> *Parágrafo. Elaborado el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural este deberá ser aprobado por el director general de la ANT.*
>
> *La resolución que apruebe el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural NO deberá contener la relación de los Folios de Matrícula Inmobiliaria que se afectarán como medida publicitaria en el marco de los procesos de Ordenamiento Social de la Propiedad, en tanto la etapa de publicidad conforme lo establece el parágrafo del artículo 40 del Decreto Ley 902 de 2017 se reserva hasta el momento de la implementación del Procedimiento Único mediante la estrategia de barrido predial.*

(…)"

Por tanto, ni siquiera se debe cumplir ya con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 estudiado.

Ahora bien, también es importante destacar que, la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018, la Dirección General de la ANT ordenó la suspensión de manera provisional, de la fase de implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), entre otros, y que mediante la Resolución No. 6162 del 20 de septiembre de 2018 el Director General de la ANT dispuso aclarar el artículo 17 de la Resolución No. 6060 *"…en el sentido de indicar que las actuaciones de impulso a procesos en curso que se podrán seguir adelantando, se refieren tanto a los asuntos iniciados por el Incoder bajo el régimen dispuesto en la Ley 160 de 1994, así como las actividades de impulso del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en su Fase Administrativa (Numeral 1 del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017), para los casos en los que no se contempla adelantar actividades de barrido predial masivo (…)*", esto atendiendo *"(…) la necesidad de atender algunos asuntos de especial importancia, entre otros, bajo los siguientes criterios: cumplimiento de sentencias judiciales, vigilancia especial designada por el Ministerio Público o afectación de los derechos de poblaciones en caso de no resolución oportuna(…) respecto del cual "(…) la Agencia dispuso del personal y recursos necesarios para la atención de los casos que se denominaron como prioritarios…".*

Así las cosas, es clara la competencia de la Subdirección para decidir sobre las solicitudes de adjudicación que recaen sobre los predios que conforman El Porvenir, y conforme a las siguientes conclusiones:

- Es función de la Subdirección "(…)Resolver en primera instancia, los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (…)". (Num. 5 Art. 23 Decreto Ley 2363 de 2015) (Negrita, subrayado y cursiva fuera de texto);

- Su competencia está definida por el Decreto Ley 2363 de 2015, Resolución No. 1384 del 5 de octubre de 2017, y activada en el caso concreto a través del memorando con radicado No. 20184200005571 de fecha 15 de enero de 2018 de la Dirección de Acceso a Tierras; y

- Se deben seguir adelantando asuntos de especial importancia, como: cumplimiento de sentencias judiciales, vigilancia especial designada por el Ministerio Público o afectación de los derechos de poblaciones en caso de no resolución oportuna, como lo son los procedimientos administrativos del caso El Porvenir.

2.3. Artículos 48 y 56 de la Ley 160 de 1994

Aunque en el aparte de "disposiciones quebrantadas" de la demanda, referido previamente, no se especifican estas disposiciones de la Ley 160, vale la pena aclarar la realidad de la referencia a estas normas en el acto administrativo demandado.

En la Resolución No. 6915 de 2020 se hace referencia a estos dos artículos cuando se esta exponiendo de manera general el régimen de baldíos reservados que trae la Ley 160 de 1994 en diferentes normas, entre ellas el artículo 56, cuando se trata de procedimientos de extinción de dominio, y a que el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados es de aquellos que puede realizar la autoridad de tierras, antes el INCODER, hoy la ANT. Por lo tanto, estos artículos no se esgrimen como sustento de la sustracción del régimen ordinario de ocupación.

Es decir, cuando se citó el artículo 56 ley 160 de 1994 dentro de la citada Resolución No. 6915 de 2020, se hacía referencia únicamente a las múltiples excepciones que identifican ciertos atributos de algunos terrenos baldíos que los hacen inadjudicables, o en otros eventos, no adjudicables por la vía de la ocupación previa, en las cuales, dentro de tales excepciones podemos identificar la figura de la reserva especial de baldíos, que implica que el Estado sustrae del régimen general de la ocupación determinadas áreas de baldíos.

Se equivoca el demandante al realizar su interpretación y afirmación. Por lo anterior, es FALSO que la ANT este manifestando que el predio de mayor extensión conocido como El Porvenir, sea reservado por motivo de un proceso de "(…) CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS (…)", como equivocadamente se pretende hacer ver en la demanda.

2.4. Artículos 12, 25, 44, 58 y 64 Constitución Nacional

En primer lugar, en la demanda NO se explica porque se considera que se violan todas estas disposiciones como razón para decretar la nulidad, de manera que es muy complicado para el juzgador evaluar la confrontación de estas con el acto administrativo demandado para extraer una violación, y siendo este un trámite rogado, no puede el juez ir más allá de lo solicitado por el actor.

Además de no ser explicado por que son violados, los artículos 12, 25 y 44 constitucionales no tienen nada que ver con el asunto en estudio. Se refieren a la desaparición forzada y prohibición de la tortura, el Derecho al Trabajo y a los Derechos Fundamentales de los niños respectivamente. Por tanto, no se le ocurre a la Agencia como podrían ser vulnerados por el acto administrativo sin que ello sea explicado por el actor, y en ese entendido, no son sustento suficiente para decretar la nulidad.

En cuanto a los artículos 58 y 64 de la constitución Nacional, en los cuales se consignan los derechos sobre la propiedad privada y el Derecho al Acceso Progresivo a la Tierra, respectivamente, se tiene que tampoco es explicada la razón por la cual se consideran violados. Sin embargo, se recuerda que los derechos sobre la propiedad privada también comportan una función social y unas obligaciones o deberes asociados a la tenencia de la tierra, y que expresamente en el artículo 58 se menciona que el interés particular debe ceder ante el interés general.

En la misma línea, lo anterior se complementa con el Derecho al Acceso Progresivo a la Tierra que en lugar de ser violado por la resolución demandada es uno de sus pilares,

debido a que el caso del señor Carabalí se enmarca en una realidad jurídica más amplia, que consiste en decidir sobre la asignación de derechos de adjudicación en cabeza de varios actores en los predios de El Porvenir, con el antecedente de lo analizado y ordenado en la sentencia SU-426 de 2016.

Precisamente, en dicha providencia, así como en su antecedente, la Resolución No. 6423 de 2014, se documenta *in extenso* la compleja situación de ocupación de predios que se presenta en el predio de mayor extensión denominado El Porvenir, y se concluye como este lugar ha sido objeto de apropiación por parte de particulares poderosos y de acumulación indebida de baldíos en perjuicio de los ocupantes que históricamente se han asentado en el territorio. Por tanto, en la sentencia SU-426 de 2014 se ordena garantizar el Derecho de Acceso a la Tierra a esos ocupantes históricos que cumplan con los requisitos de adjudicación y que antes de las adjudicaciones irregulares de 1992 ya estaban asentados en el territorio. De ahí que la ANT ha venido realizando acciones para resolver los conflictos territoriales y asignar los derechos sobre predios baldíos en la zona a quienes cumplen con los requisitos de antigüedad en la zona, no solo a través del caso de la decisión de la solicitud del actor sino de muchas otras y que continúa en trámite.

IV. PRUEBAS

En ejercicio del derecho de defensa y contradicción, respetuosamente se solicita al Despacho decretar y practicar las siguientes pruebas.

A. Documentales:

1. Solicitud a nombre del señor JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA ubicado dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNÁNDEZ.
2. Solicitud a nombre del señor JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA aportado junto a la acción de tutela No. 2018-0004.
3. Informe técnico jurídico preliminar del Predio de Mayor extensión El Porvenir, y los predios que lo conforman de fecha 12 de agosto de 2020.
4. Formulario de Sujetos de Ordenamiento - FISO - No. 97738 de fecha 25 de julio del año 2018.
5. Formulario Censo No. 110 de fecha 26 de junio de 2017.
6. Resolución No. 020 de 1998.
7. Notificación electrónica de la resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, remitida mediante radicado No. 20204100781711 del 14 de agosto de 2020
8. Certificado (E29689753-S) de no entrega de la notificación electrónica de la resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 al correo electrónico joseorlandocaravalyrivera@gmail.com, remitida mediante radicado No. 20204100781711.
9. Certificado (E29689754-S) de entrega de la notificación electrónica de la resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 al correo electrónico

jacporvenir1974@gmail.com, remitida mediante radicado No. 20204100781711.

10. Radicado No. 20204100796241 de fecha 19 de agosto de 2020, mediante el cual se realiza alcance de la notificación electrónica remitida mediante radicado No. 20204100781711.
11. Pruebas de envió y entrega del radicado No. 20204100796241 de fecha 19 de agosto de 2020.
12. Resolución No. 5776 del 6 de septiembre de 2018, “Por la cual se abre actuación administrativa de asignación de derechos en el marco del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado “El porvenir”, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional y se ordenan otras actuaciones”.
13. Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020 “Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras.”
14. Informe Agronómico UAF definido para el predio El Porvenir.
15. Oficio No. 20204001411761 del 22 de diciembre de 2020, mediante el cual se notificó la resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre 2020
16. Certificados de envió y entrega de la notificación de la resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre 2020, expedidos por la empresa de mensajería 4-72 No. E37413512-S y No. E37413514-S.
17. Certificado de la junta de acción comunal inspección El Porvenir de fecha 20 de julio de 2018.
18. Declaración con fines extraprocesales (Documento suscrito ante la Notaria Única del Círculo de Puerto Gaitán – Meta) de fecha 24 de julio de 2018.
19. Resolución ANT No. 740 de 2017 y sus resoluciones modificatorias y aclaratorias.
20. Resolución 915 DE 2020.
21. Resolución No. 12096 de 2019.
22. Resolución 108 de 2018
23. Resolución 130 del 30 de mayo de 2017.
24. Resolución No. 6060 de 2018.
25. Resolución No. 6162 de 2018.
26. Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES” expedida a nombre del señor JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA.

27. Corte Constitucional, Sentencia SU-426 de 2016 (Ya aportada con la demanda)
28. Acta de instalación de la Mesa Interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia SU-426 de 2016 – 25 de noviembre de 2016.

B. Oficios:

1. Se oficie al JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META) a fin de que allegue al proceso, copia auténtica del expediente identificado con Radicado No. 5057-3318-4001-2018-00024-00

V. ANEXOS

Comedidamente me permito allegar como anexo lo solicitado como prueba documental en el acápite de pruebas.

VI. SOLICITUD

Con base en las excepciones de mérito expuestas, la contestación a los hechos de la demanda y demás fundamentos de hecho y de derecho desarrolladas anteriormente, solicito a los Honorables Magistrados, negar las pretensiones de la demanda y en su lugar acceder a las excepciones presentadas.

VII. NOTIFICACIONES

El ente accionado Agencia Nacional de Tierras - ANT, recibirá notificaciones y comunicaciones en el correo electrónico: juridica.ant@ant.gov.co

El suscrito recibirá comunicaciones en los correos electrónicos: carlosvivasp@gmail.com y/o carlos.vivas@ant.gov.co

Atentamente,



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
C.C. 76.328.360 de Popayán
T.P. No. 194.129 del CSJ

Bogotá D.C., 2021-08-16 15:55

Al responder cite este Nro.
20211031027071

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

dZaT-6nT2-63aGD-r68HY-ZUhyX

H. Magistrado
CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Villavicencio - Meta

Referencia:

ASUNTO	OTORGAMIENTO DE PODER
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA
DEMANDADO	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
RADICACIÓN	50001-23-33-000-2021-00229-00

JOSÉ RAFAEL ORDOSGOITÍA OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.032.405.689, con Tarjeta Profesional No 217.212 del Consejo Superior de la Judicatura, nombrado mediante Resolución No. 19386 del 27 de octubre de 2020 y Acta de posesión No. 065 del 3 de noviembre de 2020, actuando en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, agencia estatal de naturaleza especial, creada mediante el Decreto 2363 de 2015 y de conformidad con la delegación de funciones señalada en la Resolución 292 de 13 de marzo de 2017; confiero poder amplio y suficiente al abogado titulado y en ejercicio **CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.328.360 de Popayán, portador de la Tarjeta Profesional No. 194.129 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a la Agencia Nacional de Tierras - ANT dentro del proceso de la referencia.

Para el buen uso de su gestión, el apoderado tendrá todas las facultades propias del mandato, así como las demás consagradas en los artículos 75 y 77 del Código General del Proceso.

El presente poder no requiere presentación personal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 5 del decreto 806 del 4 de junio de 2020.

Adicionalmente y de conformidad con los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011, manifiesto el interés de la Agencia Nacional de Tierras de ser notificada al correo electrónico jurídica.ant@agenciadetierras.gov.co.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

Atentamente,

José R. Ordosgoitia O.

JOSÉ RAFAEL ORDOSGOITÍA OJEDA
Jefe Oficina Jurídica

Acepto,



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
C.C. 76.328.360 de Popayán
T.P. No. 194.129 del CSJ
carlosvivasp@gmail.com
carlos.vivas@ant.gov.co

dZaT-6nT2-63aGD-r68HY-ZUhyX

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 19386 **DE 2020**

(27 OCT 2020)

"Por el cual se hace un nombramiento ordinario"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 909 de 2004, el numeral 23 del artículo 11° del Decreto Ley No. 2363 de 2015, el Decreto No. 419 de 2016 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento allí establecido.

Que mediante Decreto No. 419 del 07 de marzo de 2016, el Gobierno Nacional estableció la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

Que en cumplimiento del Decreto No.1083 de 2015, para verificar las capacidades y competencias laborales de la persona aspirante al cargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública como Entidad experta en la selección de personal las avaló y expidió resultado satisfactorio para su nombramiento; igualmente en aplicación del principio de transparencia la hoja de vida del aspirante fue publicada durante tres (3) días en la página web de la Presidencia de la República y la página web de la Agencia Nacional de Tierras.

Que el señor **JOSE RAFAEL ORDOSGOITIA OJEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.405.689, cumple los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción denominado Jefe de Oficina de Agencia, Código G1, Grado 06, perteneciente a la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter ordinario a **JOSE RAFAEL ORDOSGOITIA OJEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.405.689, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Jefe de Oficina de Agencia, Código G1, Grado 06, perteneciente a la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.

ARTÍCULO SEGUNDO. El nombramiento realizado en el artículo primero de la presente Resolución surtirá efectos fiscales a partir de la fecha de posesión de la servidora.

"Por el cual se hace un nombramiento ordinario"

ARTÍCULO TERCERO. Las funciones que cumplirá el servidor serán las establecidas en la Resolución No. 1999 del 07 de febrero de 2019 y sus adiciones y/o modificaciones, según corresponda para el empleo.

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C. a los 27 días de octubre del 2020.

MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS
Directora General

Aprobó: Carlos Alberto Salinas Sastre – Secretario General
VoBo.: Martha Amador / Carolina Merchán – Abogadas Secretaria General
Revisó: Marina Segura Saenz - Subdirectora de Talento Humano
VoBo.: Annie Carolina Araujo Gallo – Abogada Despacho Dirección General.
Proyectó: Paula Miranda Bohórquez Botero - STH

ACTA DE POSESIÓN NÚMERO 065

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

En virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 19386 del veintisiete (27) de octubre de 2020, por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario en la Agencia Nacional de Tierras – ANT, se presentó el señor **JOSE RAFAEL ORDOSGOITIA OJEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.405.689, en el empleo Libre Nombramiento y Remoción, denominado Jefe de Oficina de Agencia Código G1 Grado 6 de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., cuya asignación básica mensual es de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($9.683.481.oo), en el cual fue nombrado con efectos fiscales a partir de la fecha de la firma de la presente acta.

Prestó el juramento ordenado por el articulo 122 de la Constitución Política de Colombia.

Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

José R. Ordosgoitia O.

EL(A) POSESIONADO(A)

CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE
Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.405.689
ORDOSGOITIA OJEDA

APELLIDOS
JOSE RAFAEL

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

NOTARIA DE CHINU
ESTA DILIGENCIA SE
HACE A RUEGO E
INSISTENCIA DEL USUARIO

COMO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CHINU - CORDOBA
HAGO CONSTAR QUE ESTA FOTOCOPIA COINCIDE
CON SU ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
19 DIC. 2014
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CHINU - CORDOBA
Leslie Mercado de Bula

REPUBLICA DE COLOMBIA
Leslie Mercado de Bula
NOTARIA UNICA DE CHINU - CORDOBA



FECHA DE NACIMIENTO 30-NOV-1987
CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

20-FEB-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1301600-00302235-M-1032405689-20110520 0027017304A 1 35968302

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

RESOLUCIÓN No. 292

(13 MAR 2017)

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la que le confieren los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, los artículos 9º y 11 de la Ley 489 de 1998, la Ley 80 de 1993, la Ley 160 de 1994, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1753 de 2015, el Decreto 111 de 1996, el Decreto Ley 2363 de 2015; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 ídem prescribe que la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que el artículo antes citado señala que sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

Que el Director de la Agencia Nacional de Tierras es el Representante Legal de la Agencia, al tenor de lo previsto en el artículo 10º del Decreto Ley 2363 de 2015.

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 establece que: *"Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes"*

Que conforme a lo previsto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Agencia Nacional de Tierras, tiene la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley para contratar, comprometer y ordenar el gasto de los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto y además prevé que: "Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarse en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes"

Que el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 dispuso que, a partir de su entrada en vigencia, todas las referencias normativas hechas al INCODER en relación con el ordenamiento social de la propiedad rural debían entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras - ANT-.

Que, en ejercicio de las facultades antes mencionadas, la Agencia Nacional de Tierras expidió las Resoluciones 029 de 2016, 045 de 2016, 081 de 2016, 135 de 2016, 136 de 2016 las cuales se compilan en la presente Resolución con el fin de facilitar su consulta y el cumplimiento de los principios de eficacia, economía y celeridad en la gestión de la Entidad.

Que, por otra parte, por ministerio de los artículos 26 de la Ley 1151 y 56 de la Ley 1152 de 2007, modificatorios del artículo 20 de la Ley 160 de 1994, se asignó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER la competencia para administrar un subsidio integral de tierras diseñado para impulsar de manera conjunta los programas de acceso a la propiedad rural y las políticas de desarrollo agropecuario, permitiendo mediante su otorgamiento la cobertura de hasta el 100% del valor de la propiedad rural y de los requerimientos financieros necesarios para la implementación de los proyectos productivos presentados por los campesinos que resultaran seleccionados en las convocatorias abiertas por la administración para estos efectos.

Que los Decretos 4984 de 2007; 4800 de 2008 y 2000 de 2009, así como los Acuerdos 138 de 2008 y 209 de 2010 expedidos en su momento por el Consejo Directivo del INCODER se ocuparon de señalar los criterios de elegibilidad y selección, las modalidades del subsidio, el procedimiento para su materialización y los mecanismos de pago.

Que en consonancia con la doble finalidad perseguida por el Subsidio Integral de Tierras, se consagraron los referidos reglamentos y procedimientos para la materialización de los componentes de acceso a tierra y desarrollo rural, previendo respecto del primero el giro a favor de los propietarios de los predios adquiridos a través de la asignación estatal e instituyendo, en cuanto al segundo, la creación de cuentas bancarias de manejo compartido entre los respectivos beneficiarios y los Directores Territoriales del INCODER.

Que en ejercicio de las atribuciones descritas, el INCODER realizó entre los años 2008 y 2013, a través de sus Direcciones Territoriales, convocatorias para el otorgamiento de Subsidios Integrales de Tierra (SIT) que a la fecha se encuentran en proceso de

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

materialización, ora respecto del componente de acceso a tierras, ora en lo tocante al proyecto productivo financiado mediante la asignación estatal.

Que el Decreto No. 2363 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1753 de 2015, creó la Agencia Nacional de Tierras y fijó su objeto y estructura, estableciéndose en el artículo 4° numerales 8 y 12 *ejusdem* las funciones de *"Otorgar el Subsidio Integral de Reforma Agraria, conforme a las políticas y lineamientos fijados por el Gobierno Nacional" y "Hacer el seguimiento a los procesos de acceso tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar".*

Que conforme al artículo 6 del Decreto No. 2363 de 2015 dentro la estructura organizacional de la Dirección de Acceso a Tierras se encuentran comprendidas la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión y la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación.

Que el numeral 1 del artículo 24 del Decreto No. 2363 del 2015 establece como función de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión la de "*Adelantar y decidir los procedimientos y actuaciones administrativas de acceso a tierras, adjudicación de subsidio integral de reforma agraria, titulación baldíos, adjudicación de bienes fiscales patrimoniales y adjudicación bienes en cumplimiento de los programas especiales de dotación tierras fijados por el Gobierno Nacional, que a la fecha de entrada en operación la Agencia Nacional de Tierras se encuentren en trámite y no hayan sido resueltos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.*"

Que el numeral 2 del artículo 24 del Decreto No. 2363 del 2015 establece como función de la Subdirección de Acceso a por Demanda y Descongestión la de *"Adelantar y decidir los procedimientos y actuaciones administrativas de acceso a tierras en materia de adjudicación de subsidio integral de reforma agraria, adjudicación de baldíos, bienes fiscales patrimoniales y programas especiales de dotación de tierras fijados por Gobierno Nacional, que se inicien por demanda fuera de las zonas focalizadas por Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural.*

Que las funciones relacionadas con la culminación de los procedimientos administrativos de acceso a tierras por vía del otorgamiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT) adelantadas por el extinto INCODER en el marco de las convocatorias 2008-2011, no fueron asignadas expresamente a ninguna de las direcciones o dependencias que conforman la Agencia Nacional de Tierras, resultando oportuno, conveniente y necesario que el Director General, en ejercicio de la facultad que le confiere el ya citado artículo 11 numeral 18 del Decreto 2363 de 2015, las asigne mediante el presente acto administrativo.

Que es necesario compilar y racionalizar las Resoluciones mediante las cuales se han asignado o delegado funciones para contar con un documento único de consulta de esas y las otras disposiciones que se dictan por esta Resolución.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

Artículo Primero. - Delegar en el Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. La de representar legalmente a la Agencia Nacional de Tierras o la de designar mandatarios que representen a la Agencia Nacional de Tierras en asuntos judiciales, extrajudiciales y procesos administrativos a nivel nacional en los que sea parte o tercero interesado, para la defensa de sus intereses. La función de representación legal o de designación de mandatarios, incluirá las siguientes facultades:

a) Otorgar poderes para la atención de los asuntos antes señalados.
b) Constituir apoderados generales o especiales con las facultades de Ley para conocer de los procesos o revocarlos.
c) Actuar e interponer recursos
d) Notificarse de las demandas
e) Transigir, conciliar judicial o extrajudicialmente o desistir conforme a los lineamientos y decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Tierras.
f) Participar en la práctica de los medios de prueba o contradicción que se estimen pertinentes.
g) Atender, en nombre de la Agencia Nacional de Tierras, los requerimientos judiciales o de autoridad administrativa relacionado con los asuntos derivados de la función delegada.
h) Constituir representantes legales especiales, entre otras cuestiones para que estos, con facultades para conciliar, asistan a las audiencias de conciliación, especialmente las que se realicen en los procesos laborales, conforme a los lineamientos y decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Tierras, de las cuales se rendirán informes por escrito.
i) Iniciar los medios de control y las acciones judiciales que fueren procedentes para la defensa judicial de la Agencia Nacional de Tierras.
j) Iniciar, adelantar y llevar hasta su culminación las acciones de lesividad.
k) Tramitar ante la dependencia correspondiente el cumplimiento de los fallos judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales proferidos con anterioridad o posterioridad a la vigencia del presente acto administrativo, en los cuales hubiere resultado condenado directamente la Agencia Nacional de Tierras.
l) Hacerse parte en los procesos de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional o de Nulidad ante el Consejo de Estado que promuevan contra normas del Sector Administrativo Agricultura y contra los actos administrativos de carácter general proferidos por la Agencia Nacional de Tierras.
m) Notificarse de los autos admisorios de demandas o de inicio de acciones judiciales contra la Agencia Nacional de Tierras.

2. La Ordenación del Gasto, sin límite de cuantía, para el cumplimiento de Sentencias y Conciliaciones.

Artículo Segundo. - Delegar en el Director de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Suscribir a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, las ofertas de compra, los contratos de promesa de compra venta y los contratos de compraventa de aquellos predios que reúnan las condiciones técnicas y jurídicas para ser adquiridos mediante negociación directa en los casos establecidos en los

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

literales b y c del artículo 31 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 27 de la Ley 1151 de 2007.
2. Solicitar la inscripción de las escrituras públicas protocolizadas en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los círculos registrales correspondientes.
3. Reconocer y ordenar el gasto de los impuestos prediales de los bienes inmuebles del Fondo Nacional Agrario.
4. Las demás facultades, trámites y gestiones inherentes para ejercer cabalmente la delegación, incluyendo la ordenación del gasto hasta 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO: Para adelantar los correspondientes procedimientos de compra directa, el Director de la Dirección de Acceso a Tierras previamente deberá consultar los recursos financieros de los que disponga la Agencia Nacional de Tierras a fin de contar con el respaldo presupuestal para tal fin, así como el procedimiento señalado en la Resolución 291 de 2017, artículo Cuarto, y las que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Artículo Tercero. - Asignar al Subdirector de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas:

1. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para adelantar, decidir y culminar los procedimientos administrativos de acceso a tierras por vía del ordenamiento del Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria – SIDRA – a las familias focalizadas y priorizadas en el marco del Acuerdo 310 de 2013, proferido por el Consejo Directivo del INCODER EN LIQUIDACIÓN.

2. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para adjudicar el Subsidio Integral de Reforma Agraria – SIRA -

3. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para asegurar la materialización de los Subsidios Integrales de Tierras (SIT), en favor de los beneficiarios de las convocatorias adelantadas por el liquidado INCODER bajo el marco de los artículos 26 la Ley 1151 y 56 de la Ley 1152 de 2007, los Decretos 4984 de 2007; 4800 de 2008 y 2000 de 2009, los Acuerdos 138 de 2008 y 209 de 2010, así como de cualquier otra que se hubiere efectuado durante las vigencias correspondientes a los años 2008 a 2013.

PARÁGRAFO: La asignación de funciones en materia de Subsidio integral de Tierras SIT – Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria SIDRA y Subsidio Integral de Reforma Agraria SIRA, conllevan la delegación de la ordenación del gasto.

Artículo Cuarto. - Delegar en el Director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Suscribir a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, las ofertas de compra, los contratos de promesa de compra venta y los contratos de compraventa de aquellos predios que reúnan las condiciones técnicas y jurídicas para ser adquiridos mediante negociación directa en beneficio de comunidades indígenas y afrocolombianas de conformidad con la legislación vigente.
2. Solicitar la inscripción de las escrituras públicas protocolizadas en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los círculos registrales correspondientes.
3. Reconocer y ordenar el gasto de los impuestos prediales de los bienes inmuebles adquiridos en beneficio de comunidades indígenas y afrocolombianas de conformidad con la legislación vigente.

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

4. Los demás facultades, trámites y gestiones inherentes para ejercer cabalmente la delegación, incluyendo la ordenación del gasto hasta por 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO: Para adelantar los correspondientes procedimientos de compra directa, el Director de Asuntos Étnicos previamente deberá consultar los recursos financieros de los que disponga la Agencia Nacional de Tierras a fin de contar con el respaldo presupuestal para tal fin, así como el procedimiento señalado en la Resolución 291 de 2017, artículo Cuarto, y las que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Artículo Quinto. - Delegar en el Secretario General de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Ordenar la apertura y dirigir la realización de procesos contractuales, celebrar todo tipo de contrato o convenio, realizar todas las actividades vinculadas a la etapa precontractual y contractual y comprometer recursos y ordenar el gasto a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, sin límite de cuantía, en todos los casos en que no haya una delegación para un tema específico.
2. Posesionar a los funcionarios de la planta permanente y temporal de la Agencia Nacional de Tierras.
3. Conferir comisión de servicios y de estudios a los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, al interior y exterior del país de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, así como reconocer y ordenar el pago de los viáticos, gastos de viaje y el suministro de tiquetes si a ello hubiere lugar.
4. Autorizar el viaje de contratistas, cuando con los mismos se busque el cumplimiento de una obligación contractual dentro del territorio colombiano o fuera de este; se haya previsto en el respectivo contrato; y se cuente con la previa autorización del supervisor, así como reconocer y ordenar el pago de los gastos de desplazamiento, gastos de viaje y el suministro de tiquetes a que haya lugar.
5. Adelantar y suscribir todos los actos que se requieran para el manejo de los bienes de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, tales como baja de bienes del inventario, transferencia, traspaso y enajenación, entre otros.
6. Suscribir los contratos de apertura de las cuentas de ahorro y corriente de la Agencia Nacional de Tierras ante las entidades bancarias, así como las demás actuaciones que se requieran para su administración.
7. Expedir los actos administrativos internos de modificación presupuestal.
8. Representar legalmente a la Agencia Nacional de Tierras, para todo efecto, ante las Cajas de Compensación Familiar, Empresas Promotoras de Salud, Administradoras de Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y Fondo Nacional de Ahorro.
9. Conceder permisos sindicales mediante acto administrativo.
10. Suscribir lo actos administrativos que se requieran para el normal funcionamiento de la Secretaría General, sus Subdirecciones y de los grupos de trabajo que se creen en la Agencia de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo Sexto. - Delegar en el Subdirector de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Expedir los actos administrativos que autoricen las situaciones administrativas del personal de planta de la Agencia Nacional de Tierras – ANT – tales como:

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

a) Permisos remunerados hasta por tres (3) días, previo visto bueno del superior inmediato.
b) Permisos de estudio o de ejercicio de docencia, previo visto bueno del superior inmediato.
c) Licencias de maternidad o paternidad.
d) Licencias por luto.
e) Licencias no remuneradas.
f) Vacaciones, aplazamientos, interrupciones y el reanude de las mismas.
g) Autorización de Horas Extras, dominicales y festivos.

2. Reconocer y ordenar el gasto de los conceptos asociados a las funciones de la Subdirección de Talento Humano, tales como:

a) Servicios personales asociados a nómina y aportes parafiscales.
b) Contribuciones inherentes a la nómina Sector privado y público.
c) Transferencias de previsión y seguridad social
d) Auxilios educativos e incentivos.
e) Certificación mensual de cesantías.
f) Liquidación de prestaciones sociales definitivas de ex servidores públicos.

3. Representar a la Agencia Nacional de Tierras – ANT en la suscripción de los formularios de afiliación al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar y Fondo Nacional de Ahorro, de los funcionarios de la Agencia, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

4. Expedir las certificaciones de verificación del cumplimiento de requisitos mínimos para el desempeño de empleos públicos de la Entidad.

5. Expedir las certificaciones laborales y de tiempo de servicio de servidores y ex servidores, así como las confirmaciones de información de historia laboral que sean requeridas.

6. Expedir las certificaciones de información laboral con destino a la expedición de certificados de bono pensional o cuotas partes pensionales a favor de servidores y ex servidores de la entidad.

7. Expedir las certificaciones de insuficiencia de personal de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo Séptimo. - Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Fungir como Administrador SIIF en tanto no se delegue en otro funcionario.

2. Autorizar el pago, sin límite de cuantía, de los gastos que previamente hayan sido ordenados o solicitados con el cumplimiento de los procedimientos, trámites y requisitos legales y contractuales vigentes.

3. Diligenciar los formatos y documentación para trámites financieros registros de usuarios botón PSE, formatos de trámites de apertura, terminación y sustitución de cuentas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

4. Suscribir los formatos para asignación de Tókens, asignación de claves para acceder al SIIF nación.

5. Elaborar, administrar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.

6. Fungir como Usuario Administrador de los portales Bancarios.

7. Ordenar la apertura, reembolso y legalización de las cajas menores.

8. Reconocer y ordenar el gasto, sin límite de cuantía, de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil, suscripciones e impuestos, tasas y contribuciones de los bienes inmuebles que hagan parte del patrimonio de la Agencia Nacional de Tierras, exceptuando los del Fondo Nacional Agrario.

11. Ordenar el gasto, sin límite de cuantía, para las órdenes de compra en las operaciones secundarias de los Acuerdos Marco de Precios.

12. Suscribir las declaraciones de cambio, para compra de divisas, los oficios de Instrucciones para Bancos para la formalización de Inversiones forzosas, y los oficios a remitirse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reportando las operaciones y estado de las inversiones tanto mensuales como trimestrales, dando cumplimiento al Decreto 1525 de 2008 o la norma que lo modifique sustituya o derogue.

Artículo Octavo. - Corresponde a los asignatarios y delegatarios ejercer las atribuciones asignadas o delegadas conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia y responder en los términos de la Constitución Política y de la Ley.

Artículo Noveno. - Por motivos de conveniencia y necesidad del servicio, el Director General podrá en cualquier tiempo reasignar la competencia asignada o reasumir lo delegado, así como revisar los actos expedidos con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley 734 de 2002.

Artículo Décimo. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y subroga las resoluciones 029 de 2016, 045 de 2016, 081 de 2016, 135 de 2016 y 136 de 2016.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los

13 MAR 2017

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Directora General (E)

Aprobó: Elizabeth Gómez Sánchez Secretaria General
Revisó: Natalia Hincapié – Jefe Ofician Jurídica
Preparó: Tatiana Oñate/ Daissy Patiño – Asesoras Secretaría General

	PROCESO: TITULACIÓN DE BALDÍOS	CÓDIGO: F2-PM-TB-05	Calidad: El camino a la excelencia
incoder	FORMATO: SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDIOS - PERSONAS NATURALES	FECHA EDICIÓN 17/06/2014	
PROSPERIDAD PARA TODOS		Página 1 de 2	

Solicitud No. [ ] Dirección Territorial

FECHA DE LA SOLICITUD Día [ ] Mes [ ] Año [ ]

I. Información sobre el peticionario

1. La solicitud es presentada en los términos del Art 65 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994 (*marque con una X, la opción seleccionada*)
   Individual [X] Cónyuges o compañeros permanentes [ ]
2. Nombres y Apellidos del Solicitante José Orlando Caravali Rivera Telefono: 3133843860
3. Dirección de Notificación: Villa Camila 1, El Porvenir. Ciudad: Puerto Gaitan
4. Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA) 11 | 05 | 1949
5. Número de Identificación 17.385.776 de Puerto López
6. Estado Civil: Soltero [X] Casado [ ]
7. Nombres y apellidos del cónyuge, compañero permanente _____
8. Número de Identificación del cónyuge o compañero permanente _____ de _____
9. Personas dependientes del solicitante

Nombres y apellidos (hijos menores)	*Número de Identificación*	*Fecha de Nacimiento(dd/mm/aa)*	*Parentesco*

10. Es usted, su cónyuge o compañero permanente, adjudicatario de terrenos baldíos ? SI [ ] NO [X]
    En caso afirmativo en qué fecha (DD/MM/AAAA) [ ] Datos titulo _____ y/o Registro _____
11. Es usted, su cónyuge o compañero(a) permanente e hijos menores poseedor o propietario a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional? SI [ ] NO [X] Datos titulo _____ y/o Registro _____
12. Esta usted, obligado a presentar declaración de renta y patrimonio? SI [ ] NO [X] No. De Rut _____
13. El patrimonio de los solicitantes es superior a 1000 SMLMV? SI [ ] NO [X]
14. Usted ha enajenado terrenos baldíos que hayan sido adjudicados? SI [ ] NO [X]
15. Usted, su cónyuge, compañero permanente e hijos menores han sido beneficiarios con la adjudicación de terrenos baldíos efectuadas a Sociedades de las que usted forme parte? SI [ ] NO [X]
16. Usted ha tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de la Junta o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la presente solicitud?
    SI [ ] NO [X] Se advierte la gravedad del juramento Art. 442 - Ley 599 del 2000.
17. Condición del solicitante: Trabajador agrario [X] Desplazado [ ] Resgistrado Si [ ] No [ ]
    En caso de ser desplazado, indique la fecha de abandono del predio Día____ Mes____ Año____

II. Información sobre el predio

18. El predio objeto de la solicitud es baldío? SI [X] NO [ ]
    Informacion Predial Resgistral No. _____
19. Nombre del predio Villa Camila
20. Ubicación: Departamento: Meta Municipio: Puerto Gaitan
    Centro Poblado/Corregimiento: _____ Vereda: El Porvenir
    Código Catastral: _____ Matrícula Inmobiliaria: _____
21. Área aproximada del predio: 285 Hectáreas _____ metros
22. Colindantes del predio: *(Persona natural o juridica)*

NORTE
a. Libia Barahona Riveros
b.
c.

SUR
a. Zona Protectora Caño Caruna
b.
c.

ORIENTE
a. Fernando Bulla
b.
c.

OCCIDENTE
a. Sabana Comunal y Zona protectora
b.
c.

Vías de acceso al predio : Vía Porvenir

23. Usted, su cónyuge o compañero permanente explota predios colindantes al solicitado en adjudicación?

SI☐ NO☒ N.A☐ (No aplica **únicamente** para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

24. En caso afirmativo, a que título: Propietario ☐ Ocupante ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____

Informacion Predial ☐ Resgistral ☐ No. _____

Nombre del predio: _____ Ubicación: _____

25. Ocupación y explotación del predio: N.A☐ (No aplica **únicamente** para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

Fecha desde la cuál ocupa y explota el predio objeto de la solicitud (dd/mm/aaaa) 01 | 02 | 2010

Tipo de Explotación:

Ganaderia	200 Has	%	Agricultura	Has	%
Forestal Productivo	Has	%	Forestal Protector	Has	%
Inculta	Has	%	Vivienda	X Has	%
Otros	- Has	%	Area Total	Has	%

(Especificar otros) _____

26. La explotación que adelanta, la realiza: Trabajo personal ☒ Trabajo Familiar☐ Trabajo con apoyo de Tercero:☐

N.A☐ (No aplica **únicamente** para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

III. Declaración Juramentada y Autorización

27. Declaro(amos) bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento, que las afirmaciones y datos consignados en el presente formulario son correctos y fiel expresión de la verdad. En caso de faltar a la verdad se incurrira en el tipo penal consagrado en el Artículo 442. de la Ley 599 del 2000, Modificado por el art. 8, Ley 890 de 2004: *"Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años."*

28. Autorizo al Incoder para realizar consultas externas (incluida la DIAN) tendientes a la verificación de los requisitos de la Ley 160 del 94 y dispocisiones reglamentarias. Si☒ No☐

29. Autorizo al INCODER para recibir notificaciones por medios electronicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del CPACA: *"Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación(...)"* *Si* ☐ *No* ☒ *Correo electronico:* _____

Firma:	Firma:
Nombre : Jose Orlando Bonilla	Nombre :
No. Identificación 1139676	No. Identificación

IV. Documentos Anexos a la Solicitud

30. Documentos que anexa:

- Fotocopia documento de identificación del(os) solicitante(s) SI☐ NO☐
- Fotocopia documento de identificación de su cónyuge o compañero(a) permanente SI☐ NO☐
- Declaraciones de renta y patrimonio de los tres últimos años (si a ello hubiere lugar) SI☐ NO☐

V. Presentación de la solicitud

31. Personal ☐ Solicitud Escrita (Carta) ☐ Correo electrónico ☐

Nombre del servidor público que recepciona: _____

Cedula de Ciudadania No. _____

Dependencia: _____

Firma: _____

32. Requiere información adicional o complementaria Si☐ No☐

No. De requerimiento (radicado) _____ Fecha: _____

V. OBSERVACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17385776
NUMERO

CARAVALI RIVERA
APELLIDOS

JOSE ORLANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

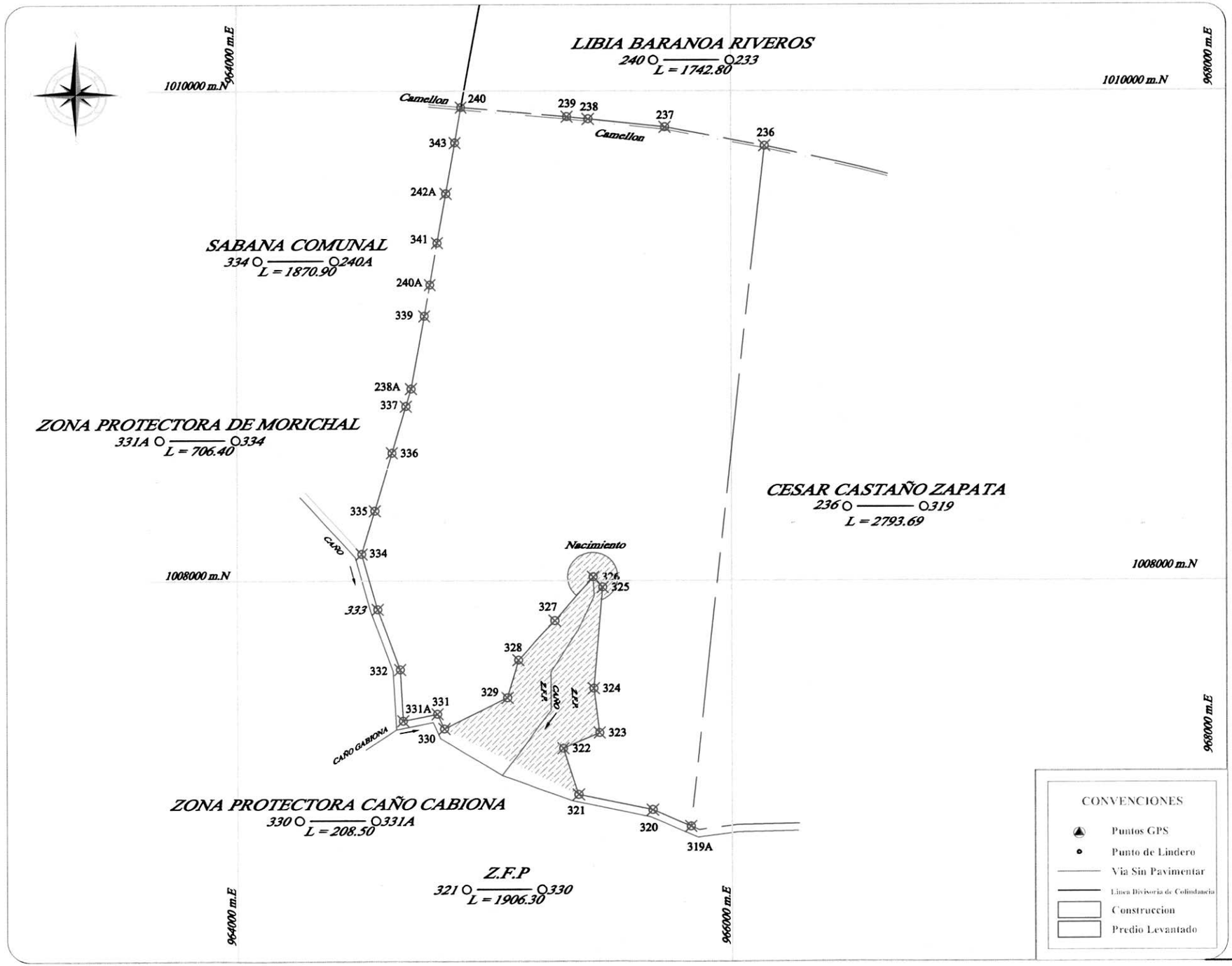
FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1949
CUNDAY
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

22-FEB-1979 PUERTO LOPEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5204500-69106861-M-0017385776-20030214 04092 03041A 01 116395156



CONVENCIONES

- Puntos GPS
- Punto de Lindero
- Via Sin Pavimentar
- Linea Divisoria de Colindancia
- Construccion
- Predio Levantado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO " **"**
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DE META

ORIGEN ESTE
LONGITUD 71°04'39.0285" LATITUD 04°35'46.3215"
FALSO NORTE: 1.000.000 FALSO ESTE:1.000.000
DATUM MAGNA SIRGAS

LOCALIZACIÓN GENERAL



Escala 1:20.000

0 320 640 960 1280

Escala Grafica 1:20.000
1 Centimetro = 200 Metros

CUADRO DE COORDENADAS Y COLINDACIA

PUNTO	ESTE	NORTE	DISTANCIA	COLINDANTE
240	964911.892	1009933.711	1742.80	LIBIA BARANOA RIVEROS
233	966629.915	1009660.296	1129.60	SEBASTIAN BENA VIDEZ RODRIGUEZ
307	966913.236	1008566.797	1665.90	ZONA FORESTAL PROTECTORA
314	967052.239	1007019.935	1725.40	ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA
321	965384.585	1007129.556	1906.30	Z.F.P
330	964839.357	1007397.344	208.50	ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA
331A	964671.996	1007429.864	706.40	ZONA PROTECTORA DE MORICHAL
334	964504.921	1008110.571	1870.90	SABANA COMUNAL
240	964911.892	1009933.711		

CUADRO DE AREAS

COBERTURA	AREA (Ha)	AREA (%)
AREA TOTAL	329 Ha + 6540 m²	100%
NACIMIENTO	2 Ha + 7419 m²	1%
AREA A TITULAR	320 Ha + 9121 m²	99%

DIRECCIÓN TÉCNICA DE TITULACIÓN DE BALDIOS

PROYECTO: TITULACIÓN DE BALDIOS PRODUCTIVOS	TEMA: LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICO
TITULAR: JOSE ORLANDO CARAVALI RIVERA	PREDIO: VILLA CAMILA
DEPARTAMENTO: META / MUNICIPIO: PUERTO GAITAN / VEREDA: EL PORVENIR	
LEVANTO: INCODER - COFESCO TOPOGRAFO RESPONSABLE	REVISO: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI SUPERVISOR
FECHA DE LEVANTAMIENTO: POSICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO / FECHA: ENERO DE 2016	AREA TITULAR: 320 Has 9121 m2

OBSERVACIONES:
- LOS LINDEROS LEVANTADOS FUERON IDENTIFICADOS Y RECONOCIDOS POR EL PROPIETARIO DEL PREDIO.

Prosperidad para todos

	PROCESO: TITULACIÓN DE BALDÍOS	CODIGO: F2-PM-TB-05	Calidad: El camino a la excelencia
incoder	FORMATO: SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDIOS - PERSONAS NATURALES	FECHA EDICION 17/06/2014	
PROSPERIDAD PARA TODOS		Página 1 de 2	

Solicitud No. _____ Dirección Territorial _____

FECHA DE LA SOLICITUD Día _____ Mes _____ Año _____

I. Información sobre el peticionario

1. La solicitud es presentada en los términos del Art 65 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994 *(marque con una X, la opción seleccionada)*
   Individual ☒ Cónyuges o compañeros permanentes ☐
2. Nombres y Apellidos del Solicitante Jose Orlando Caravali Rivera Telefono: 3133843860
3. Dirección de Notificación: Villa Camila 1, El Porvenir. Ciudad: Puerto Gaitan
4. Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA) 11 | 05 | 1949
5. Número de Identificación 17.385.776 de Puerto Lopez
6. Estado Civil: Soltero ☒ Casado ☐
7. Nombres y apellidos del cónyuge, compañero permanente _____
8. Número de Identificación del cónyuge o compañero permanente _____ de _____
9. Personas dependientes del solicitante

Nombres y apellidos (hijos menores)	*Número de Identificación*	*Fecha de Nacimiento(dd/mm/aa)*	*Parentesco*

10. Es usted, su cónyuge o compañero permanente, adjudicatario de terrenos baldíos ? SI ☐ NO ☒
    En caso afirmativo en qué fecha (DD/MM/AAAA) ___ Datos titulo _____ y/o Registro _____
11. Es usted, su cónyuge o compañero(a) permanente e hijos menores poseedor o propietario a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional? SI☐ NO☒ Datos titulo _____ y/o Registro _____
12. Esta usted, obligado a presentar declaración de renta y patrimonio? SI☐ NO☒ No. De Rut _____
13. El patrimonio de los solicitantes es superior a 1000 SMLMV? SI☐ NO☒
14. Usted ha enajenado terrenos baldíos que hayan sido adjudicados? SI☐ NO☒
15. Usted, su cónyuge, compañero permanente e hijos menores han sido beneficiarios con la adjudicación de terrenos baldíos efectuadas a Sociedades de las que usted forme parte? SI ☐ NO☒
16. Usted ha tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de la Junta o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la presente solicitud?
    SI☐ NO☒ Se advierte la gravedad del juramento Art. 442 - Ley 599 del 2000.
17. Condición del solicitante: Trabajador agrario ☒ Desplazado ☐ Resgistrado Si ☐ No ☐
    En caso de ser desplazado, indique la fecha de abandono del predio Día_____ Mes_____ Año_____

II. Información sobre el predio

18. El predio objeto de la solicitud es baldío? SI☒ NO☐
    Informacion Predial Resgistral No. _____
19. Nombre del predio Villa Camila
20. Ubicación: Departamento: Meta Municipio: Puerto Gaitan
    Centro Poblado/Corregimiento: _____ Vereda: El Porvenir
    Código Catastral: _____ Matrícula Inmobiliaria: _____
21. Área aproximada del predio: 285 Hectáreas _____ metros
22. Colindantes del predio: *(Persona natural o juridica)*

NORTE
a. Libia Barahona Riveros
b. _____
c. _____

SUR
a. Zona Protectora Caño Caruna
b. _____
c. _____

ORIENTE
a. Fernando Bulla
b. _____
c. _____

OCCIDENTE
a. Sabana Comunal y Zona protectora
b. _____
c. _____

Vías de acceso al predio : Vía porvenir

23. Usted, su cónyuge o compañero permanente explota predios colindantes al solicitado en adjudicación?

SI☐ NO☒ N.A☐ (No aplica **únicamente** para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

24. En caso afirmativo, a que título: Propietario ☐ Ocupante ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____

Informacion Predial ☐ Resgistral ☐ No. _____

Nombre del predio: _____ Ubicación: _____

25. Ocupación y explotación del predio: N.A☐ (No aplica **únicamente** para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

Fecha desde la cuál ocupa y explota el predio objeto de la solicitud (dd/mm/aaaa) 01 | 02 | 2010

Tipo de Explotación:

Ganaderia	200 Has	%	Agricultura	Has	%
Forestal Productivo	Has	%	Forestal Protector	Has	%
Inculta	Has	%	Vivienda	X Has	%
Otros	Has	%	Area Total	Has	%

(Especificar otros) _____

26. La explotación que adelanta, la realiza: Trabajo personal ☒ Trabajo Familiar☐ Trabajo con apoyo de Tercero☐

N.A☐ (No aplica **únicamente** para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

III. Declaración Juramentada y Autorización

27. Declaro(amos) bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento, que las afirmaciones y datos consignados en el presente formulario son correctos y fiel expresión de la verdad. En caso de faltar a la verdad se incurrira en el tipo penal consagrado en el Artículo 442. de la Ley 599 del 2000, Modificado por el art. 8, Ley 890 de 2004: *"Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años."*

28. Autorizo al Incoder para realizar consultas externas (incluida la DIAN) tendientes a la verificación de los requisitos de la Ley 160 del 94 y dispocisiones reglamentarias. Si☒ No☐

29. Autorizo al INCODER para recibir notificaciones por medios electronicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del CPACA: *"Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación(...)" Si* ☐ *No* ☒ *Correo electronico:* _____

Firma: José Orlando González	Firma:
Nombre :	Nombre :
No. Identificación 14398716	No. Identificación

IV. Documentos Anexos a la Solicitud

30. Documentos que anexa:

- Fotocopia documento de identificación del(os) solicitante(s) SI☐ NO☐
- Fotocopia documento de identificación de su cónyuge o compañero(a) permanente SI☐ NO☐
- Declaraciones de renta y patrimonio de los tres últimos años (si a ello hubiere lugar) SI☐ NO☐

V.Presentación de la solicitud

31. Personal ☐ Solicitud Escrita (Carta) ☐ Correo electrónico ☐

Nombre del servidor público que recepciona: _____

Cedula de Ciudadania No. _____

Dependencia: _____

Firma: _____

32. Requiere información adicional o complementaria Si☐ No☐

No. De requerimiento (radicado) _____ Fecha: _____

V. OBSERVACIONES

_____

_____

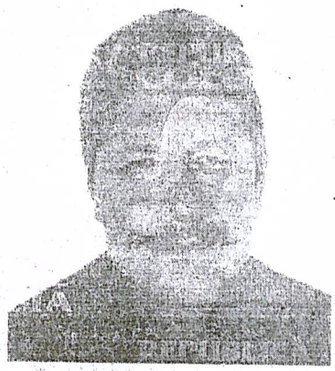
_____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17385776
NUMERO

CARAVALI RIVERA
APELLIDOS

JOSE ORLANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

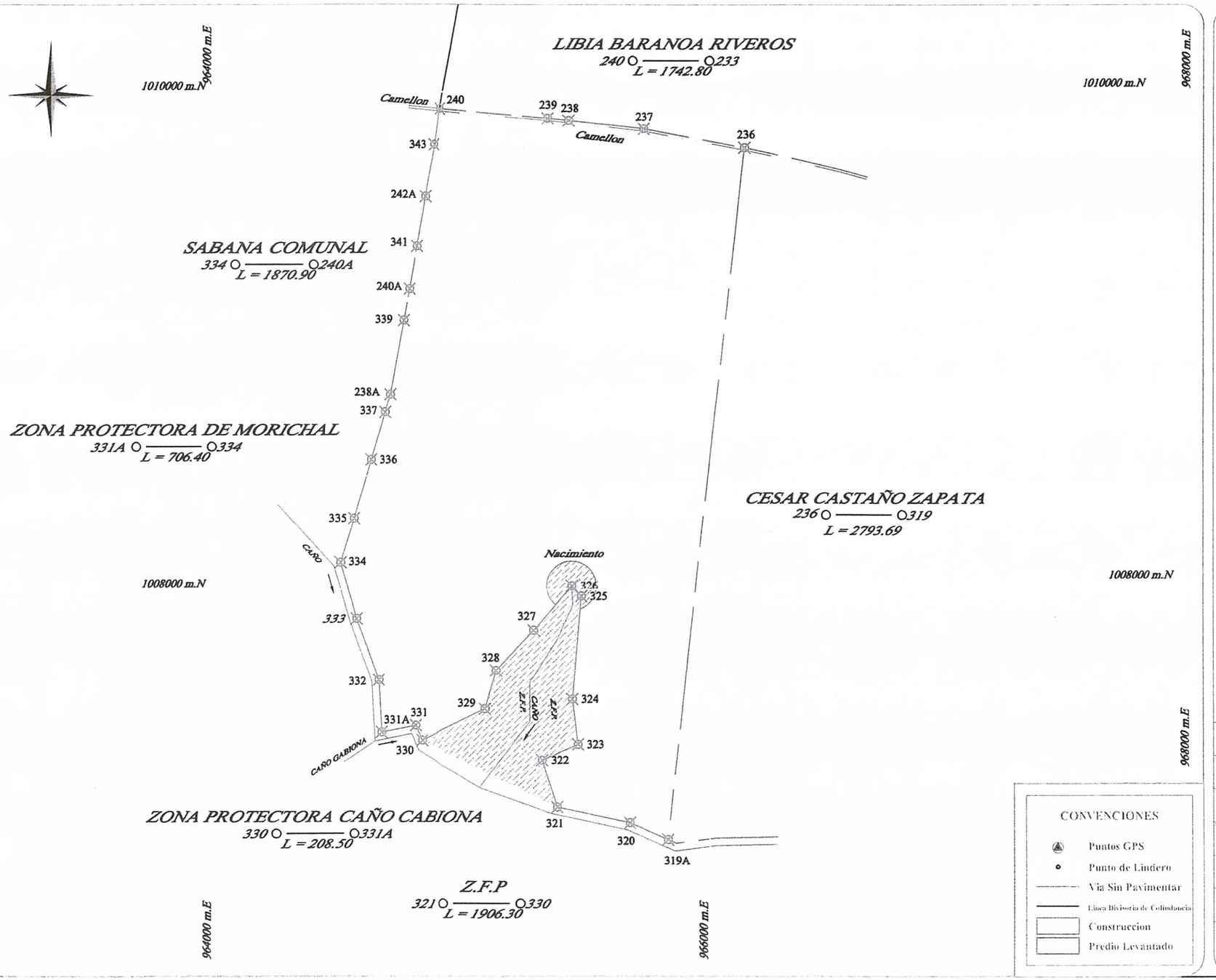
FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1949
CUNDAY
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

22-FEB-1979 PUERTO LOPEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5204500-69106861-M-0017385776-20030214 04092 03041A 01 116395156



CONVENCIONES

- Puntos GPS
- Punto de Lindero
- Via Sin Pavimentar
- Linea Divisoria de Colindancia
- Construccion
- Predio Levantado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO "
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL DEPARTAMENTO DE META

ORIGEN ESTE
LONGITUD 71°04'39.0285" LATITUD 04°35'46.3215"
FALSO NORTE: 1.000.000 FALSO ESTE:1.000.000
DATUM MAGNA SIRGAS

LOCALIZACIÓN GENERAL



Escala 1:20.000

1 Centimetro = 200 Metros

CUADRO DE COORDENADAS Y COLINDACIA				
PUNTO	ESTE	NORTE	DISTANCIA	COLINDANTE
240	964911.892	1009933.711	1742.80	LIBIA BARANOA RIVEROS
233	966629.915	1009660.296	1129.60	SEBASTIAN BENAVIDEZ RODRIGUEZ
307	966913.236	1008566.797	1665.90	ZONA FORESTAL PROTECTORA
314	967052.239	1007019.935	1725.40	ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA
321	965384.585	1007129.556	1906.30	Z.F.P
330	964839.357	1007397.344	208.50	ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA
331A	964671.996	1007429.864	706.40	ZONA PROTECTORA DE MORICHAL
334	964504.921	1008110.571	1870.90	SABANA COMUNAL
240	964911.892	1009933.711		

CUADRO DE AREAS		
COBERTURA	AREA (Ha)	AREA (%)
AREA TOTAL	323 Ha + 6540 m²	100%
NACIMIENTO	2 Ha + 7419 m²	1%
AREA A TITULAR	320 Ha + 9121 m²	99%

DIRECCIÓN TÉCNICA DE TITULACIÓN DE BALDIOS

PROYECTO: TITULACIÓN DE BALDIOS PRODUCTIVOS	TEMA: LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICO
TITULAR: JOSE ORLANDO CARAVALI RIVERA	PREDIO: VILLA CAMILA
DEPARTAMENTO: META	MUNICIPIO: PUERTO GAITAN
VEREDA: EL PORVENIR
ENTIDAD: INCODER - COFESCO TOPOGRAFO RESPONSABLE	ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI SUPERVISOR
ACTIVIDAD: INSPECCIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	FECHA: ENERO DE 2010
AREA TOTAL: 320 Has 9121 m2

OBSERVACIONES:
- LOS LINDEROS LEVANTADOS FUERON IDENTIFICADOS Y RECONOCIDOS POR EL PROPIETARIO DEL PREDIO

Prosperidad para todos

FORMA	INFORME TÉCNICO JURÍDICO PRELIMINAR	CÓDIGO	POSPR-F014
ACTIVIDAD	REALIZA INFORME TÉCNICO JURÍDICO PRELIMINAR	VERSIÓN	1
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ÚNICO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	FECHA	21/09/2017

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Número RESO	4643	**Numero FISO**	97738

2. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN

2.1 Ubicación:

Departamento: Meta

Municipio: Puerto Gaitán

Corregimiento:

Vereda: Matarratón

Centro Poblado: El Porvenir

Nombre o dirección del predio: El Porvenir

Cedula Catastral IGAC:[1]

El Rincón	00-01-0001-0742-000
Las Corocoras	00-01-0001-0745-000
Campo Hermoso	00-01-0001-0087-000
El Pedregal	00-01-0001-0052-000
Mi Llanura	00-01-0001-0756-000

No. Predial asignado por el proyecto: N/A

2.2 Cabida y descripción técnica de linderos

2.2.1 Área:

Del levantamiento topográfico realizado por la Agencia Nacional de Tierras en septiembre de 2018 (levantamiento con último análisis y verificación de insumos bajo radicado N° 20201000129093 de fecha 30 de junio de 2020), se obtienen las siguientes áreas de los predios El Rincón, Las Corocoras, Campo Hermoso, El Pedregal y Mi Llanura, a los que se refiere la Resolución 6423 de 2014, y que conforman un predio de mayor extensión denominado El Porvenir:

Predio	Área FMI*	Área Levantamiento Topográfico ANT*
El Rincón	(234-15742) 4730 ha + 3000 m2	4869 ha + 8196 m2
Las Corocoras	(234-15743) 5681 ha + 2105 m2	5217 ha + 1435 m2
Campo Hermoso	(234-15744) 5969 ha + 5000 m2	5440 ha + 7495 m2
El Pedregal	(234-15745) 4918 ha + 3000 m2	5332 ha + 6001 m2

[1] La información catastral corresponde a los polígonos existentes hoy en día en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC correspondiente a los cinco (5) predios resultantes de los englobes de los veintisiete (27) predios previamente adjudicados. Actualmente los folios de matrícula inmobiliaria FMI de estos cinco (5) predios se encuentran cerrados.

Mi Llanura	(234-15741) 4641 ha + 0500 m2	3823 ha + 9635 m2
Total	**25940 ha + 3605 m2**	**24684 ha + 2762 m2**

* Es de resaltar que los FMI relacionados se encuentran cerrados en virtud de la revocatoria 6423 de julio 30 de 2014.

Nota: El Centro Poblado El Porvenir con un área de 280 ha + 2233 m2, NO se tiene en cuenta para el presente análisis ya que no hace parte de la Resolución 6423 de 2014.

2.2.2 Descripción técnica de linderos:

Los linderos del predio El Porvenir, el cual está conformado por los 5 predios de mayor extensión, denominados El Rincón, Las Corocoras, Campo Hermoso, El Pedregal y Mi Llanura, predios que a su vez son producto de los englobes de los 27 predios originalmente adjudicados, son los siguientes:

Linderos arcifinios:

NORTE: Linda con el Rio Meta.

ORIENTE: Desde la confluencia del Río Meta con el Caño Arecua, caño arriba hasta llegar a su nacimiento.

SUR: Desde el nacimiento del caño Arecua, a partir de allí en línea recta más corta posible hasta llegar al caño El Tomo, desde este punto aguas arriba 2500 m aproximadamente. Desde este punto en dirección noroeste por el centro de todo el morichal hasta llegar al Caño Cabiona, por este caño avanza aguas arriba hasta llegar al predio El Piñal.

OCCIDENTE: Linda con la finca El Piñal, pasando por el quiebrapatas denominado el Piñal y de allí en línea recta hasta el Río Meta.

Coordenadas del levantamiento topográfico:

Las coordenadas que describen los vértices del predio; se relacionan en la siguiente tabla y plano, y están incluidas en el memorando con radicado N° 20201000129093 de fecha 30 de junio de 2020 del área de topografía de la entidad, en sistema de referencia proyectado **MAGNA_COLOMBIA_ESTE.**

No	NORTE	ESTE	No	NORTE	ESTE	No	NORTE	ESTE	No	NORTE	ESTE
1	1013961,231	964051,033	20	1007233,087	968387,711	35	1020954,072	975998,346	50	1023068,900	983235,630
2	1016059,036	965240,494	21	1010088,952	966748,912	36	1021116,800	976969,412	51	1024418,408	985503,373
3	1017929,857	969545,698	22	1012340,039	964797,468	37	1021305,282	978255,363	52	1025509,505	987906,873
4	1013831,427	970698,827	23	1020712,053	975123,582	38	1019988,185	980075,061	53	1027164,967	990627,255
5	1013609,413	970905,734	24	1017835,784	977541,169	39	1021313,476	983571,947	54	1025950,349	990294,782
6	1013791,408	971583,126	25	1016794,381	976940,034	40	1019238,237	983808,683	55	1023113,519	989353,548
7	1012406,109	971712,108	26	1014048,318	975831,710	41	1019028,126	986370,959	56	1022204,673	988754,266

8	1011499,051	972099,865	27	1013712,668	976472,699	42	1018453,437	985564,855	57	1009587,909	958173,123
9	1010869,493	973591,885	28	1013704,699	978735,748	43	1018081,848	985081,756	58	1013562,583	960646,574
10	1010133,821	973276,983	29	1014044,028	979296,665	44	1017547,640	984579,896	59	1015025,733	962832,319
11	1011660,753	974754,981	30	1014022,911	980791,099	45	1015730,945	984473,624	60	1006876,413	966315,889
12	1013621,298	975917,344	31	1011953,056	980965,737	46	1015462,195	984561,899	61	1006955,038	961675,997
13	1013139,774	976262,486	32	1011408,432	978276,359	47	1015758,677	983977,799	62	1005803,162	961115,378
14	1011704,791	977668,635	33	1011817,685	977729,803	48	1014802,098	980698,055	63	1006100,775	960350,582
19	1009104,268	972085,793	34	1021118,351	975923,265	49	1022856,886	979869,739	64	1007316,482	959557,918

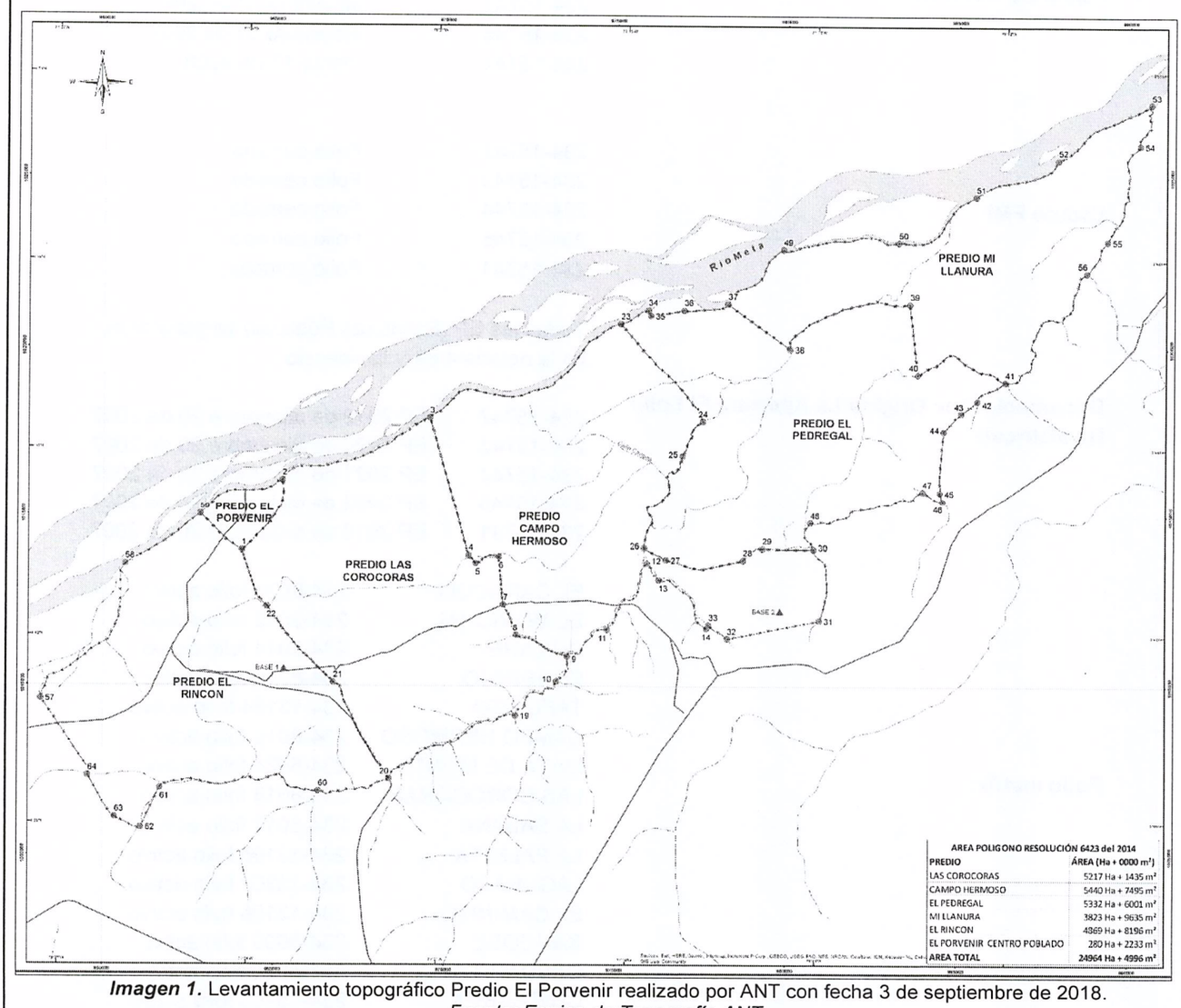


Imagen 1. Levantamiento topográfico Predio El Porvenir realizado por ANT con fecha 3 de septiembre de 2018.
Fuente: Equipo de Topografía ANT.

2.3 Caracterización técnico-jurídica:

Folio De Matricula Inmobiliaria:	El Rincón	234-15742 folio cerrado
	Las Corocoras	234-15743 folio cerrado
	Campo Hermoso	234-15744 folio cerrado
	El Pedregal	234-15745 folio cerrado
	Mi Llanura	234-15741 folio cerrado
Fecha De Apertura:	234-15742	diciembre 28 de 2007
	234-15743	diciembre 31 de 2007
	234-15744	diciembre 31 de 2007
	234-15745	diciembre 31 de 2007
	234-15741	marzo 13 de 2008
Estado FMI:	234-15742	Folio cerrado
	234-15743	Folio cerrado
	234-15744	Folio cerrado
	234-15745	Folio cerrado
	234-15741	Folio cerrado
Documento Que Origina La Apertura El Folio De Matricula:	Todas las EP (Escrituras Públicas) se generaron en la notaria 4 de Villavicencio	
	234-15742	EP 2919 de diciembre 20 de 2007
	234-15743	EP 2920 de diciembre 20 de 2007
	234-15744	EP 2921 de diciembre 20 de 2007
	234-15745	EP 2922 de diciembre 20 de 2007
	234-15741	EP 2918 de diciembre 20 de 2007
Folio matriz:	EL CARACOLI	234-8023 folio activo
	EL MORICHAL	234-8012 folio activo
	CUMARE	234-8014 folio activo
	EL ESPEJO	234-8010 folio activo
	TAFURITO	234-13194 folio activo
	CAMPO HERMOSO	234-8016 folio activo
	MATA DE MONTE	234-8024 folio activo
	LAS COROCORAS	234-8018 folio activo
	LA SABANA	234-8017 folio activo
	LA PALMITA	234-13195 folio activo
	LAGUNAZO	234-13202 folio activo
	EL CAMINITO	234-13196 folio activo
	SAN JOSE	234-8009 folio activo
	CASUARITO	234-8020 folio activo
	CHICHARRA	234-13203 folio activo

	MI LLANURA 234-8007 folio activo PAJONAL 234-8008 folio activo EL RINCON 234-8011 folio activo LA GRAN LAGUNA 234-8025 folio activo MATEJEY 234-8022 folio activo CASCABELES 234-13193 folio activo PALO ALTO 234-8019 folio activo LA PERLA 234-13197 folio activo LA HONDA 234-8013 folio activo LA LAGUNA 234-8006 folio activo EL ESTERO 234-8021 folio activo EL PEDREGAL 234-8015 folio activo
Folio Segregado (S):	N/A
Medida de protección patrimonial por ruta colectiva:	N/A
Inscrita:	N/A
Medida de protección patrimonial por ruta individual:	N/A
Inscripción en el RTDAF:	Predio denominado El Chircal que hace parte del Predio de mayor extensión denominado "El Rincón", identificado con FMI No. 234-8011, cuenta con medida de protección en el Registro de Tierras Despojadas, según consta en la anotación No. 7 del folio en comento.
Etapa judicial de procesos de restitución:	El predio *"Los Pinos"* con folio de matrícula inmobiliaria FMI 234-8025 y cédula catastral 00-010001-0742-000 el cual corresponde al predio denominado *"La Gran Laguna"*, el cual cuenta con medida cautelar determinada por el Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, Meta.
Medidas cautelares, gravámenes y limitaciones vigentes:	Las señaladas.
Restricciones y condicionantes:	Según información geográfica e informe para el predio Porvenir, suministrado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo Especial La Macarena CORMACARENA bajo radicado 20809 del 22 de noviembre de 2017, se identificaron las Zonas de Riesgo Rural (según plano 6A EOT 2009 de Puerto Gaitán) y los siguientes condicionantes ambientales relacionadas con el uso del suelo:

Amenaza inundación alta: 29,80 %
Amenaza inundación baja: 65,70 %
Amenaza inundación nula: 4,50 %

Rondas hídricas y cuerpos de agua: 6,17 %,
Bosque Forestal Protector: 16,6%
Bosque Forestal Protector Productor: 21,6 %.

3. RELACIÓN JURÍDICA CON EL PREDIO

3.1. Naturaleza Jurídica del inmueble:

A) Presuntamente baldío ( )
B) Baldío reservado (X)
B) Fondo nacional agrario ( )
C) Propiedad privada ( )
D) Reserva natural ( )
E) Otros ( )

3.2. Vinculo jurídico y datos característicos e identificadores de la persona(s) interesada(s) en el inmueble rural:

El señor **José Orlando Caravalí Rivera**, identificado con cedula de ciudadanía No. **17.385.776**, pertenece al listado de ocupantes y aspirantes dentro del predio en cuestión de acuerdo al censo realizado por la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación. Adicionalmente, allí se encuentran relacionados los potenciales beneficiarios accionantes de la tutela que dieron lugar la sentencia SU- 426 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.

3.3. Estudio de títulos o FMI de la relación jurídica del predio

Revisada la documentación allegada y recogida en campo, se tiene que en el año de 1992 el entonces Incora adjudicó veinticinco (25) predios baldíos dentro el área que comprende el predio señalado, a saber:

NOMBRE PREDIO	FMI	AREA_FMI	No. RESOLUCIÓN	FECHA	ADJUDICATARIO
EL CARACOLI	234-8023	998,5000	RESOLUCIÓN 051	16/01/1992	ALBERTO VEGA
EL MORICHAL	234-8012	998,1500	RESOLUCIÓN 027	15/01/1992	JESUS ANTONIO BUSTOS
CUMARE	234-8014	984,1000	RESOLUCIÓN 029	15/01/1992	CARLOS CASTILLO LAVERDE
EL ESPEJO	234-8010	995,6000	RESOLUCIÓN 025	15/01/1992	JORGE MONZAIDE VERGARA
TAFURITO	234-13194	994,0500	RESOLUCIÓN 046	16/01/1992	JAIRO RODRIGUEZ NIÑO
CAMPO HERMOSO	234-8016	999,1000	RESOLUCIÓN 031	15/01/1992	JOAQUIN SILVA
MATA DE MONTE	234-8024	994,1000	RESOLUCIÓN 052	16/01/1992	DANIEL VASQUEZ
LAS COROCORAS	234-8018	994,9000	RESOLUCIÓN 041	16/01/1992	ESTEBAN VASQUEZ
LA SABANA	234-8017	999,7580	RESOLUCIÓN 040	16/01/1992	JESUS ANUNDO ARANDA SILVA
LA PALMITA	234-13195	999,9768	RESOLUCIÓN 047	16/01/1992	EDGAR HERNANDO PRIETO
EL CAMINITO	234-13196	994,5000	RESOLUCIÓN 048	16/01/1992	GRACIELA RAMIREZ

SAN JOSE	234-8009	977,4000	RESOLUCIÓN 024	15/01/1992	ARMANDO BERNAL
CASUARITO	234-8020	1000,0000	RESOLUCIÓN 044	16/01/1992	HUGO EFRAIN BUSTOS SILVA
MI LLANURA	234-8007	979,5000	RESOLUCIÓN 022	15/01/1992	HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL
PAJONAL	234-8008	984,2000	RESOLUCIÓN 023	15/01/1992	JOSE DEL CARMEN LEON GAITAN
EL RINCON	234-8011	883,8500	RESOLUCIÓN 026	15/01/1992	GUILLERMO CADENA
LA GRAN LAGUNA	234-8025	1000,0000	RESOLUCIÓN 053	16/01/1992	ANA PAULINA SANCHEZ
MATEJEY	234-8022	868,1000	RESOLUCIÓN 049	16/01/1992	JOSE VICENTE SALINAS
CASCABELES	234-13193	979,6000	RESOLUCIÓN 043	16/01/1992	JUAN MOYA
PALO ALTO	234-8019	998,7500	RESOLUCIÓN 042	16/01/1992	JUAN MANUEL SARMIENTO
LA PERLA	234-13197	985,3000	RESOLUCIÓN 050	16/01/1992	ROBERTO ALVARADO
LA HONDA	234-8013	985,8500	RESOLUCIÓN 028	15/01/1992	JAIME RAMON LOZANO NEIRA
LA LAGUNA	234-8006	972,2000	RESOLUCIÓN 021	15/01/1992	JUAN AGUSTIN HERRERA
EL ESTERO	234-8021	983,8500	RESOLUCIÓN 045	16/01/1992	EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA
EL PEDREGAL	234-8015	991,1000	RESOLUCIÓN 030	15/01/1992	EDUARDO VILLARRAGA

Posteriormente, en el año de 1996 el extinto Incoder adjudicó otros dos (2) predios, así:

LAGUNAZO	234-13202	697,9757	**RESOLUCIÓN 891**	23/09/1996	WILLIAM VELASCO
LA CHICHARRA	234-13203	699,9500	**RESOLUCIÓN 973**	25/09/1996	JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO

De acuerdo con lo anterior, el área total titulada según expedientes constituyó alrededor de 25940 ha + 3605 m2.

Subsiguientemente, en el año 2007 sobre estos veintisiete (27) predios adjudicados se realizó un englobe en cinco (5) grandes predios denominados "El Rincón" (4730 ha + 3000 m2), "Las Corocoras" (5681 ha + 2105 m2), "Campo Hermoso" (5969 ha + 5000 m2), "El Pedregal" (4918 ha + 3000 m2) y "Mi Llanura" (4641 ha + 0500 m2) para un total de 25940 ha + 3605m2.

Una vez examinada la base de datos catastral del IGAC y los registros 1 y 2 (R1-R2), se encontró que los predios producto de los englobes denominados: El Rincón, Las Corocoras, Campo Hermoso, El Pedregal y Mi Llanura, se encuentran identificados con las referencias catastrales del municipio Puerto Gaitán Meta 00-01-0001-0742-000, 00-01-0001-0745-000, 00-01-0001-0087-000, 00-01-0001-0052-000, 00-01-0001-0756-000, respectivamente, igualmente se tienen asociados unos folios de matrícula inmobiliaria 234-15742, 234-15743, 234-15744, 234-15745 y 234-15741, folios que en la actualidad se encuentran cerrados en virtud de la en la revocatoria que sufrieran los actos de adjudicación relacionados.

Que mediante Resolución Incoder No. 6423 del 30 de julio de 2014, el Subgerente de Tierras Rurales del extinto Incoder, dispuso la revocatoria en todas sus partes de los actos de adjudicación de los fundos antes relacionados, y los retiró del ordenamiento jurídico, de suerte que "(...) dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno".

Que el artículo sexto de la Resolución que decidió el procedimiento de revocatoria directa en referencia, indica que, revocados los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles descritos, estos pasan al dominio de la Nación en calidad de baldíos.

Subsiguientemente, por solicitud de diferentes ciudadanos, el Incoder da inicio a un procedimiento de revocatoria directa respecto a los veintisiete (27) predios adjudicados y posteriormente englobados en cinco (5) predios de mayor extensión. Este procedimiento concluyó con la expedición de la resolución de revocatoria 6423 de julio 30 de 2014, en donde disponía la cancelación de los cinco (5) folios de matrícula inmobiliaria No. 234-15745, 234-15742, 234-15743, 234-15744 y 234-15741 correspondiente a los predios "El Rincón", "Las Corocoras", "Campo Hermoso", "El Pedregal" y "Mi Llanura". Así mismo la revocatoria de los veintisiete (27) predios inicialmente adjudicados, adicionalmente se dispuso, entre otras cosas, que dichos predios volverían al dominio de la nación con carácter de baldíos.

.

3.4. Descripción Del Caso

El señor **José Orlando Caravalí Rivera** identificado con cedula de ciudadanía No. **17.385.776**, presentó con la Acción de Tutela solicitud de adjudicación sin radicado, fecha, ni número de solicitud, ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder, respecto del predio denominado *"**Villa Camila**"*, ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como "*El Porvenir*", jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Luego de un proceso lago de búsqueda se logró encontrar un registro de la solicitud en cuestión dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNANDEZ; sin embargo, el formato de solicitud hallado tampoco cuenta con número de expediente, numero radicado o constancia de haber sido presentada ante el extinto INCODER. No obstante, se procederá con el estudio de la solicitud allegada con la acción de tutela.

3.5. Relación jurídica del solicitante con el predio

1. **La solicitud de adjudicación.**

   De acuerdo con lo afirmado en la solicitud mencionada, el nombre del predio objeto de solicitud es ***"Villa Camila"***, con área aproximada de 285 hectáreas y ocupa y explota el predio desde el 01 de febrero de 2010.

2. **El Formulario de Ingreso de Sujetos de Ordenamiento – FISO.**

   Formulario No. 97738, de fecha 25 de julio del año 2018, en el cual se indicó que el nombre del predio es ***"Villa Camila 1"***, que el predio ocupado tiene una extensión de 311 ha, que habita el predio desde el 14 de enero de 2014, que ha ejercido ocupación por un tiempo de 4 años y que explota el predio desde el 18 de mayo de 2014.

3. **El Certificado de la Junta de Acción Comunal Inspección El Porvenir.**

Documento de fecha 20 de julio de 2018 a solicitud del interesado, en el cual se certifica que el señor **José Orlando Caravalí Rivera** es miembro activo y habitante del centro Poblado de la inspección el Porvenir desde el 27 de agosto de 2015i y cantidad aproximada en hectáreas de 311 Ha.

4. **La Declaración con fines extraprocesales**

Documento suscrito ante la Notaria Única del Circulo de Puerto Gaitán - Meta de fecha 24 de julio de 2018, en el cual, declara que es ocupante con ánimo de señor y dueño en forma quieta, pública pacifica e ininterrumpida, desde el día 01 de febrero de 2010 del predio rural denominado "***Villa Camila 1***".

5. **Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial.**

Censo que se realizó a los habitantes del El PORVENIR, Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento de la Sentencia SU 426/2016.

FORMA	INFORME TÉCNICO JURÍDICO PRELIMINAR	CÓDIGO	POSPR-F014
ACTIVIDAD	REALIZA INFORME TÉCNICO JURÍDICO PRELIMINAR	VERSIÓN	1
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ÚNICO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	FECHA	21/09/2017

Formulario No. 110 de fecha 26 de junio de 2017 en el cual indica como fecha de ingreso al predio ocupado 5 años aproximadamente, nombre del predio "***Villa Camila 1***", área aproximada del predio 312 Has y no registra fecha desde la cual ocupa y explota el predio.

Resulta importante mencionar, que en el documento se encuentra como OBSERVACIÓN que: "Anteriormente tenía una sociedad con el señor Fernando Bulla por tal razón hicieron una división del terreno"

En atención a la información que contienen los documentos revisados, se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por el señor **José Orlando Carabalí Rivera** relacionada con la fecha desde la cual ocupa o habita el predio objeto de solicitud, ni el área del mismo.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COMUNITARIA (Cuando aplique)

Dentro del predio actualmente existen diferentes organizaciones, dentro de las principales se encuentran:

1. Las que agrupan a los ocupantes históricos residentes en el centro poblado y en la vereda de Matarratón, mayoritariamente amparados en la sentencia SU 426 de 2016.
2. La organización ASOYOPO SAN JOSE de la cual hace parte el solicitante.
3. Las que agrupan a los ocupantes que ingresaron a la sabana colindante al Centro Poblado a partir de la revocatoria directa que hiciera en Incoder a través de la resolución No. 6423 de 2014.

4.1. Conflictos

¿Se identificaron conflictos?:	SI	X	NO		

Se han detectado conflictos de la comunidad histórica del predio con los nuevos ocupantes que ingresaron en el año 2015, ya que el solicitante y los miembros de la organización a la que pertenece ocupan y aspiran a la adjudicación de gran parte de las áreas colindantes al Centro Poblado y la Vereda Matarratón.

4.2. Uso

4.2.1 Clasificación del Suelo: De conformidad con el EOT del municipio el uso del predio es rural.

4.2.1.1 Aptitud del suelo*:* Según consta en los Certificados de Uso del Suelo emitidos por la Secretaria de Planeación del municipio de Puerto Gaitán, Meta, correspondientes a 5 predios denominados: Mi llanura con No. OAP-1011-08.07-009 DE 2018, El Rincón con No. OAP-1011-08.07-010 DE 2018, Las Corocoras con No. OAP-1011-08.07-011 DE 2018, Campo Hermoso con No. OAP-1011-08.07-012 DE 2018, El Pedregal con No. OAP-1011-08.07-012 DE 2018, con fecha del 15 de enero de 2018, se identifica que la aptitud del suelo de los predios mencionados anteriormente es: FORESTAL PROTECTOR, FORESTAL PROTECTOR PRODUCTOR y AGROPECUARIO.

Así mismo, según consta en los Certificados de Uso del Suelo actualizados, emitidos por la Secretaria de Planeación del municipio de Puerto Gaitán, Meta, con fecha del 20 de mayo de 2020, correspondientes a 5 predios denominados: Mi llanura con No. OAP-1011-08.07-336, El Rincón con No. OAP-1011-08.07-332, Las Corocoras con No. OAP-1011-08.07-333, Campo Hermoso con No. OAP-1011-08.07-334, El Pedregal con No. OAP-1011-08.07-335, se identifica que la aptitud del suelo de los predios mencionados anteriormente es: FORESTAL PROTECTOR, FORESTAL PROTECTOR PRODUCTOR y AGROPECUARIO.

4.2.1.2 Uso actual: En desarrollo del artículo 72 de la Resolución ANT 740 de 2017, y luego de la información recogida en terreno durante las tres visitas de campo realizadas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas en el primer semestre del año 2018, se elaboró el documento denominado "Informe Agronómico sobre Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta", en el cual se describen los siguientes aspectos:

El relieve de la zona es ligeramente plano, con pendientes menores a 3%, los suelos encontrados son profundos, algunos moderadamente drenados y otros con niveles freáticos superficiales y drenajes naturales pobres, texturas moderadamente finas, muy ácidos y con fertilidad muy baja, en este contexto los ocupantes desarrollan su economía en torno a actividades ganaderas en sabanas comunales, ganadería en áreas con pasturas mejoradas con algunas adecuaciones como corrales; agricultura con cultivos de pancoger como plátano, yuca, maíz y forestales (eucalipto, acacia) además de la pesca artesanal como una práctica propia de los habitantes ribereños de la zona.

Así mismo, en el recorrido de los predios se evidenciaron bosques de galería a lo largo de caños y ríos (Caño Cabiona, Caño Arecua, Laguna Tapujo, Caño Paso Ancho, Laguna El Porvenir), los cuales contribuyen a la conservación de su recorrido y nacimientos de agua.

4.2.1.3 Conflictos de uso del suelo: Teniendo en cuenta el concepto de uso del suelo emitido por la secretaria de planeación del municipio de Puerto Gaitán, y la caracterización agronómica realizada, se puede identificar que los usos de suelos son compatibles. En tal sentido no se observan conflictividad en relación con el uso del suelo.

4.2.1.4 Cabida del área adjudicable de acuerdo a la UAF definida: La determinación de UAF predial, para la adjudicación del predio, se realizó una vez se recolectó y analizó la información de campo, en donde se verificaron las unidades cartográficas de suelos, capacidad de uso de suelos, costos de sistemas de producción de la zona, usos actuales de suelos, usos de suelo permitidos; además, se recopilaron datos de la tradición productiva y cultura de los habitantes del predio, también se tomó como referencia la información reportada por la UPRA y las recomendaciones de uso reportados por el IGAC.

De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos según las Unidades Cartográficas de *suelos; y por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector, las cuales se detallan en el Informe Agronómico sobre Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta.* Así, las condiciones especiales de manejo para los suelos, en combinación con la ubicación del predio, las vías de acceso, las vías de comercialización de los productos, el transporte fluvial y los costos de mano de obra, convergen en el cálculo de la UAF predial para el predio El Porvenir, razón por la cual, como se dijo anteriormente, resultaron 4 áreas de UAF, que comprenden: cincuenta y cinco hectáreas más cinco mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (55 ha + 5984 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD; ochenta y siete hectáreas más siete mil quinientos setenta y siete metros cuadrados (87 ha + 7577 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica RVK y VVC; cincuenta y cinco hectáreas más dos mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados (55 ha + 2588 m2) para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y; cuarenta y cuatro hectáreas más dos mil setecientos veintidós metros cuadrados (44 ha + 2722 m2) para el uso de suelo Forestal Protector.

4.2.1.4. Gestiones administrativas relacionadas con la Unidad Agrícola Familiar y uso del suelo: La Agencia Nacional de Tierras emitió nuevo informe Agronómico definido para el Predio El Porvenir, toda vez, que la Procuraduría General de la Nación (Procurador 6 Judicial II Ambiental y Agrario del Meta) solicitó a revisar y replantear el cálculo del área de la Unidad Agrícola Familiar establecida para el predio de mayor extensión "El Porvenir" con el fin de lograr mayor cabida de adjudicaciones dentro del área adjudicable, en razón a la cantidad de aspirantes existentes.

Que el nuevo informe agronómico definido para el predio El Porvenir, se sometió a validación de la Corporación Ambiental, el Municipio de Puerto Gaitán Meta (certificado de usos de suelo) y la Agencia de Desarrollo Rural para que en el marco de sus competencias y funciones se pronuncien acerca de la viabilidad de explotación, uso y desarrollo de futuros proyectos productivos de acuerdo con las áreas incluidas y las nuevas extensiones de UAF definidas para el predio, solicitudes que se desarrollaron de la siguiente manera:

CORMACARENA

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial La Macarena – Cormacarena, con oficio PM-GPO.1.3.85.20.507 de radicación No. 003525-2020, allegado a la ANT con radicado 20206200260942 del 01 de abril de 2020, dio respuesta a la solicitud efectuada por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas mediante radicado ANT No 20204100111351 del 10 de febrero de 2020 y reiterada con radicado No. 20204100249381 del 16 de marzo de 2020, expresando: "(…) *el uso del suelo que define finalmente la compatibilidad o no para el desarrollo de actividades, es competencia del municipio como máxima autoridad y en su ámbito territorial conforme a lo establecido en la Ley 388 de 1997 y a lo reglamentado a través del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT adoptado por el* ***Acuerdo no. 017 de agosto 28 del 2019*** (…). (Subrayado fuera de texto).

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, mediante oficio identificado con radicado No. 20203200031392 del 21 de mayo de 2020, dio respuesta a la solicitud efectuada por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas mediante comunicación identificada con el radicado No. 20204100109851 del 07 de febrero de 2020 y reiterada bajo el radicado No. 20204100231921 del 11 de marzo de 2020, las cuales se adjuntan. En la respuesta, la ADR indicó, entre otras cosas, que *"(…) sólo hasta que se culmine por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el proceso de adjudicación del predio "El Porvenir", la Vicepresidencia de Integración Productiva de la ADR analizara lo correspondiente a la viabilidad de una estructuración de los proyectos productivos propuestos (…)";* es decir, no dio una respuesta de fondo a lo solicitado por esta Agencia.

En tal virtud, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas profirió la comunicación con radicado No. 20204100509521 de fecha 08 de junio de 2020, en la cual, se reiteró a la Agencia de Desarrollo Rural las peticiones No. 20204100109851 del 07 de febrero de 2020 y No. 20204100231921 del 10 de marzo de 2020, por cuanto la solicitud inicial no está enfocada en que se aborde el asunto frente a la titulación de la tierra, sino, con relación al componente objetivo de acuerdo con las condiciones del territorio y la viabilidad en el desarrollo de los futuros proyectos productivos a cargo de la ADR, indistintamente de quienes resulten ser adjudicatarios. Dicha solicitud se realizó en virtud de las labores de acompañamiento y articulación que dispone el Decreto Ley 902 de 2017, en cabeza de la Agencia de Desarrollo Rural para los programas de acceso a tierra a cargo de la ANT, en los siguientes términos:

> *"(…) Artículo 23. Proyectos productivos sostenibles.* ***La Agencia de Desarrollo Rural ADR, acompañará*** *los programas de tierras ejecutados por la Agencia Nacional de Tierras, con esquemas que permitan la incorporación de proyectos productivos sostenibles social y ambientalmente, que cuenten con asistencia técnica, para satisfacer los requerimientos de la explotación exigida, promover el buen vivir de los adjudicatarios y atender el acceso integral de la Reforma Rural.*
>
> *Para tal efecto, la Agencia de Desarrollo Rural deberá garantizar que todas las adjudicaciones directas de tierras en propiedad a los beneficiarios de que trata el artículo 4 y los pueblos y comunidades étnicas del presente decreto ley estén acompañadas de un proyecto productivo sostenible económica, social y ambientalmente, teniendo en cuenta la participación de los beneficiarios y la armonización, entre otros, con los programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina.*
>
> *Todo proyecto productivo deberá atender a las condiciones del suelo y propenderá por el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y respetando la función ecológica y social del predio adjudicado. En los casos en los que se*

trate de predios colindantes con resguardos indígenas, el proyecto productivo tendrá en cuenta además que no se generen afectaciones medioambientales en dichos territorios indígenas. (…)

Artículo 24. Articulación para el acceso Integral. La Agencia Nacional de Tierras se ***coordinará con las demás agencias del Gobierno Nacional competentes en temas rurales****, con el fin de que las medidas de acceso a tierras permitan el desarrollo de proyectos productivos sostenibles y competitivos con enfoque territorial y étnico, cuando sea del caso, para el crecimiento económico y la superación de la pobreza. Adicionalmente, se articulará con las autoridades ambientales para que las medidas de acceso a tierras y formalización atiendan la zonificación ambiental y contribuyan al cierre de la frontera agrícola. (…)"* (Subrayas fuera del texto original)

Al respecto, la Agencia de Desarrollo Rural, mediante correo electrónico de fecha 08 de julio del año en curso, mediante radicado ADR No. **20203000043152 del 07 de julio de 2020**, otorga respuesta indicando, entre otras cosas que *"…la formulación de los proyectos productivos se realiza de manera participativa con la comunidad, lo cual impide realizar cualquier intervención preliminar…"*

Conforme lo anterior, es de resaltar que, con lo requerido a la ADR, se busca otorgar solides técnica y jurídica al proceso de la Unidad Agrícola Familiar "UAF"; sin embargo, como puede observarse, esta entidad no se pronuncia de fondo respecto de la solicitud y sus labores de acompañamiento contenidas en la norma citada más arriba, por lo que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras continuará con el trámite de acceso a tierras correspondiente, dejando las respectivas salvedades en relación con la actuación de la Agencia de Desarrollo Rural.

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, DEPARTAMENTO DEL META

La Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, mediante oficio de radicado No. 20204100329941 del 06 de abril de 2020 requirió a la Alcaldía de Puerto Gaitán, con el fin de que allegara el Certificado actualizado de Uso de Suelo del predio denominado "El Porvenir" conforme al EOT vigente del municipio de Puerto Gaitán a fin de validar la información contenida en el nuevo informe agronómico. Posteriormente, la misma Subdirección procedió a dar alcance a la solicitud con oficio de radicado No. 20204100441271 del 15 de mayo de 2020, facilitando información de identificación del predio y adjuntando los documentos necesarios para la gestión solicitada. Finalmente, mediante memorando No. 20204100141323 del 13 de julio de 2020, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica de la ANT, interponer acción de tutela en contra de la Secretaria de Planeación Municipal - Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, para que se tutele el derecho fundamental de petición.

Al respecto, la Oficina de Planeación del municipio de Puerto Gaitán – Meta, mediante certificado No. OAP-1011-27.01-338 de fecha 20 de mayo de 2020, expresa:

"*Que conforme al proceso con Radicado 505733184001-2018-0024-00, del Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López – Meta, se da viabilidad a los siguientes proyectos productivos propuestos para el Predio en cual se denomina El Porvenir, conformado por los predios con cédula catastral 50-568-00-01-0001-0742-000 denominado El Rincón, 50-568-00-01-0001-0745-000 denominado Las Corocoras, 50-568-00-01-0001-0087-000 denominado Campo Hermoso, 50-568—00-01-0001-0052-000 El Pedregal, 50-568-00-01-0001-0756-000 Mi Llanura definido así:*

Sistemas Productivos consistentes en caucho – silvopastoril para uso de suelo agropecuario AVD, silvopastoril-maíz, para el uso del suelo Agropecuario RVK y VVC, Forestal apícola para uso del suelo Forestal Protector y Productor y Apícola para uso del suelo Forestal Protector."

Adjuntando, a su vez cinco conceptos de uso del suelo asi:
1. CONCEPTO USO DEL SUELO OAP - 1011-08.07 – 332. Correspondiente a predio rural denominado El Rincón.
2. CONCEPTO USO DEL SUELO OAP – 1011-08.07 – 333. Correspondiente a predio rural denominado Las Corocoras.

3. CONCEPTO USO DEL SUELO OAP – 1011-08.07 – 334 – Correspondiente a predio rural denominado Campo Hermoso
4. CONCEPTO USO DEL SUELO OAP – 1011-08.07 – 335 – Correspondiente a predio rural denominado El Pedregal.
5. CONCEPTO USO DEL SUELO OAP – 1011-08.07 – 336 – Correspondiente a predio rural denominado Mi Llanura.

Información que, al ser revisada en detalle por parte del componente agronómico de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, se concluye que, por no haber actualizaciones en el EOT del municipio, no se tienen modificaciones o cambios con relación al uso del suelo, por tal razón, los sistemas productivos propuestos en el informe técnico-agronómico seguirán vigentes.

5. OCUPACIÓN

Teniendo en cuenta las ocupaciones que recaen actualmente sobre el predio El Porvenir, se realizó una compilación de datos disponibles dentro de la *Agencia Nacional de Tierras* ANT, con el fin de realizar un análisis preliminar, donde se pudiese comprobar la existencia de datos geográficos disponibles a nivel físico, digital, alfanumérico y vectorial, así mismo, la correlación de los elementos existentes que permitiese determinar con la mayor precisión la ubicación, forma y área de las ocupaciones dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, así como sus linderos y colindantes.

5.1 Descripción de la ocupación

Solicitud de adjudicación de baldío persona natural radicada ante el Incoder sin número de radicado, fecha, ni número de solicitud (según Acción de Tutela 024 - 2018) y Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO número 0097738 del 25 de julio de 2018, identifica la ocupación ejercida por el señor **José Orlando Caravalí Rivera,** con cedula de ciudadanía **17.385.776.**

El predio se denomina ***"Villa Camila"*** según plano planimétrico anexo al expediente de la solicitud de adjudicación, y describe un área general **320 ha + 9121 m2**, como se observa en la imagen 2.

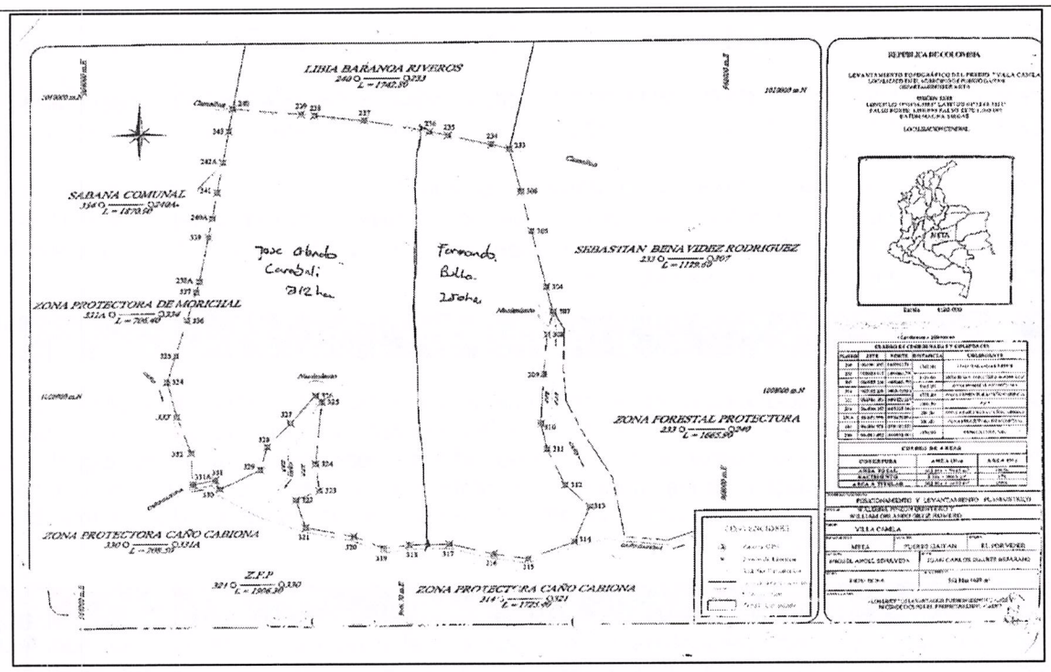


Imagen 2. Plano planimétrico anexo al expediente del formulario de solicitud de adjudicación con fecha 16 de marzo de 2016.
Fuente: INCODER

5.2 Reconstrucción vectorial de la ocupación

En aras de verificar la información aportada por el plano topográfico incluido en la Solicitud de Adjudicación de baldío (imagen 2), se realizaron procesos tales como la digitalización y reconstrucción vectorial a partir de información geográfica que fue posible extraer de repositorios relacionados con el predio Porvenir, los cuales permitieron realizar un aproximamiento del área, ubicación y colindancias de la ocupación (imagen 3).

Tabla 2. Coordenadas según la reconstrucción vectorial.

(ESPACIO EN BLANCO)

ID	Coordenadas (m)		Punto		Distancia (m) Reconstrucción	Fuente Vértice
	Este	Norte	Inicial	Final		
01	964911,892	1009933,711	01	02	1054	Reconstrucción Vectorial
02	965957,944	1009808,416	02	03	2817	Reconstrucción Vectorial
03	965949,581	1006991,579	03	04	592	Reconstrucción Vectorial
04	965383,433	1007125,608	04	05	2446	Reconstrucción Vectorial
05	964671,017	1007428,219	05	06	709	Reconstrucción Vectorial

06	964503,899	1008110,895	06	01	1871	Reconstrucción Vectorial

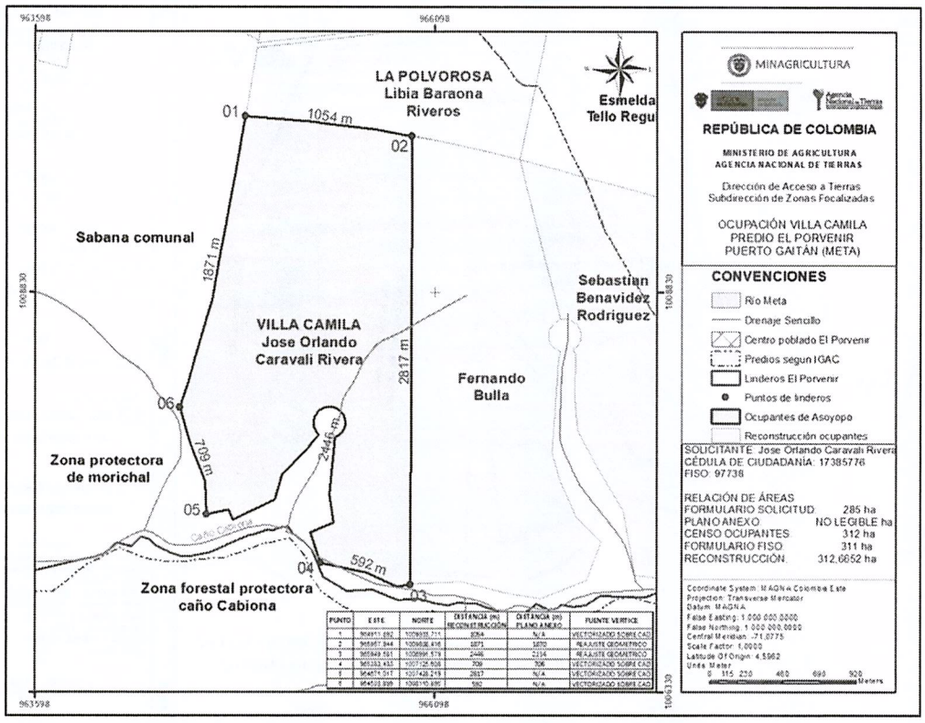


Imagen 3. Reconstrucción vectorial del predio. *Fuente: SATZF-ANT*

Atendiendo lo anterior y para efectos de validar la información reconstruida, se comparó la reconstrucción vectorial con las diferentes fuentes de información y visitas de verificación realizadas en campo, con la cual se logró encontrar correlación entre las mismas en términos de áreas y colindancias, como se observa en la Imagen 4 y en las tablas 3 (áreas) y 4 (colindancias).

Tabla 3. Áreas según las fuentes.

Fuente	Área
Formulario Solicitud	285 ha + 0000 m2
Plano anexo	320 ha + 9121 m2
Censo de ocupantes	312 ha + 0000 m2
Acción de Tutela	285 ha + 0000 m2
Formulario FISO	311 ha + 0000 m2
Visita de verificación	352 ha + 9481 m2
Reconstrucción vectorial	**312 ha + 6652 m2**

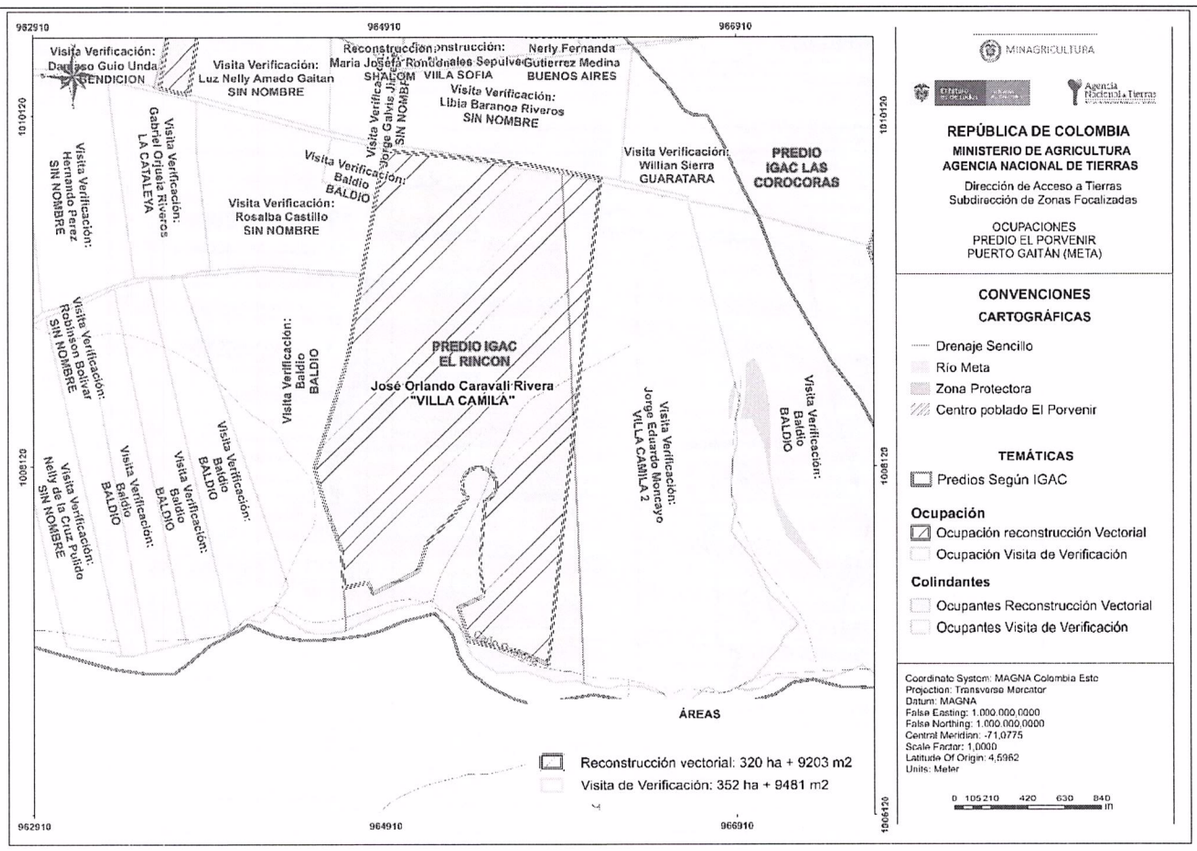


Imagen 4. Reconstrucción vectorial del predio. *Fuente: SATZF-ANT*

Tabla 4. Colindantes según las fuentes.

	Formulario Solicitud	Formulario FISO	Plano Topográfico Anexo	Reconstrucción vectorial
NORTE	Libia Barahona Riveros Ocupación SIN NOMBRE	N/R	Libia Barahona Riveros Ocupación SIN NOMBRE	Libia Barahona Riveros Ocupación SIN NOMBRE
ESTE	Fernando Bulla Ocupación SIN NOMBRE	Fernando Bulla Ocupación SIN NOMBRE	Fernando Bulla Ocupación SIN NOMBRE	Jorge Eduardo Moncayo Ocupación VILLA CAMILA 2
SUR	Zona Protectora Caño Cabiona	Carretera Puente Gloria	Zona Forestal Protectora Caño Cabiona	Zona Protectora Caño Cabiona
				Zona Protectora de Nacimiento de Agua
OESTE	Sabana Comunal y Zona Protectora	Caño Bulla	Sabana Comunal Zona Protectora de Morichal	Zona Protectora Caño Cabiona
				Baldío de la Nación
				Rosalba Castillo Ocupación SIN NOMBRE

5.2.1 Redacción técnica de linderos

A partir de la información recaba y de los análisis efectuados, la *Agencia Nacional de Tierras* construyó la redacción técnica de linderos que corresponde a la ocupación ejercida en la actualidad con un área de **312 ha + 6652 m2**, la cual se describe a continuación:

PUNTO DE PARTIDA: Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 964911,892 m y N: 1009933,711 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes JORGE GALVIS JIMENEZ ocupación "SIN NOMBRE" (según visita de verificación), BALDIO (según visita de verificación) y LIBIA BARAHONA RIVEROS ocupación "SIN NOMBRE" (según visita de verificación). **NORTE:** Del punto de partida 01 se continúa en dirección sureste en línea quebrada en una distancia de 1054 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E: 965957,944 m y N: 1009808,416 m colindando la posible ocupante LIBIA BARAHONA RIVEROS ocupación "SIN NOMBRE" (según visita de verificación). **ESTE:** Del punto 02 se continúa en dirección sur en línea recta, en una distancia de 2817 m hasta encontrar el punto 03 de coordenadas planas E: 965949,581 m y N: 1006991,579 m colindando con el posible ocupante JORGE EDUARDO MONCAYO ocupación "VILLA CAMILA 2" (según visita de verificación). **SUR:** Del punto 03 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 592 m, hasta encontrar el punto 04 de coordenadas planas E: 965383,433 m y N: 1007125,608 m colindando con ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA. Se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 2446 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 964671,017 m y N: 1007428,219 m colindando con ZONA PROTECTORA DE NACIMIENTO DE AGUA y ZONA PROTECTORA DE CAÑO CABIONA. **OESTE:** Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 709 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 964503,899 m y N: 1008110,895 m, colindando con ZONA PROTECTORA DE CAÑO CABIONA. Se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1871 m, hasta encontrar el punto 01, colindando con los posibles ocupantes BALDIO DE LA NACIÓN (según visita de verificación), ROSALBA CASTILLO ocupación SIN NOMBRE (según visita de verificación) y BALDIO DE LA NACIÓN (según visita de verificación), y cierra.

5.2.2 Conclusión del análisis geográfico

Luego del análisis del área solicitada y de su verificación a partir de la reconstrucción vectorial, se define que:

El predio denominado como *"**Villa Camila**"*, sobre el cual, el (la) señor (a) ***José Orlando Caravali Rivera***, con cedula de ciudadanía **17.385.776**, ejerce ocupación, tiene un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**, se encuentra ubicada en un predio de mayor extensión denominado "El Porvenir", jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta, específicamente, el predio *"**Villa Camila**"*, se encuentra inmerso en un (1) predio denominado "El Rincón", el cual hace parte de un total de cinco (5) grandes extensiones que se generaron en el año 2007, a partir del englobe de veintisiete (27) predios que inicialmente fueron adjudicados en la década de 1990 y posteriormente, mediante Resolución 6423 de julio 30 de 2014, fueron revocados y cancelados junto con los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5) predios.

El predio denominado *"**Villa Camila**"*, sobre el cual ejerce ocupación el (la) señor (a) ***José Orlando Caravali Rivera***, con cedula de ciudadanía **17.385.776**, la cual ocupa un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**, queda plenamente identificada bajo los aspectos técnicos descritos en el presente documento.

6. REGISTRO SUJETOS DE ORDENAMIENTO - RESO

Conforme información evidenciada a través del aplicativo del Sistema Integrado de Tierras "SIT" de la ANT, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, realizo valoración y calificación y en consecuencia profirió Resolución No. 4643 del 19 de junio de 2020, mediante la cual resuelve incluir al señor José Orlando Caravalí Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.385.776 en el Registro de Sujetos De Ordenamiento – RESO, en la categoría de solicitante de acceso a tierras a TITULO GRATUITO, asignándole un puntaje de Novecientos Ochenta y Siete Puntos con Treinta y Seis Centésimas (987,36)

7. CONCLUSIONES

Una vez revisados los antecedentes del caso, las condiciones particulares, así como la naturaleza del inmueble de mayor extensión, se puede concluir que en virtud de la revocatoria directa de los actos de adjudicación, efectuada por el entonces Incoder a través de la resolución No. 6423 de 2014, los predios sobre los cuales recae la presente ocupación retornaron al dominio de la Nación", es decir, que actualmente ostentan la condición de baldíos administrados por la máxima autoridad de tierras, hoy en día La Agencia Nacional de Tierras - ANT, y con destino a los programas de acceso a tierra que esta disponga. Por tanto, es claro que los predios en cuestión no hacen parte del régimen de ocupación y adjudicación ordinario como se expondrá.

Lo anterior obedece, entre otras cosas a que la resolución Incoder No. 6423 de 2014 demostró que los adjudicatarios no cumplían con los requisitos para acceder a las titulaciones; señalando, entre otras cosas, que la totalidad de los títulos de adjudicación se expidieron en violación a las condiciones materiales para la adjudicación de baldíos, en tanto, los solicitantes no adelantaron la ocupación por el término de los 5 años y la explotación de las 2/3 partes de lo adjudicado.

La citada resolución también mostró que las titulaciones reprochadas obedecieron a la maniobra de particulares que ocupaban baldíos más allá de los límites permitidos, y dar a tales ocupaciones la apariencia de legalidad a través de la titulación en favor de una pluralidad de personas que no ejercieron la ocupación y explotación de los predios.

En este sentido, contemplar que actualmente los predios están sujetos a un régimen de ocupación y adjudicación ordinario implica aceptar que la intervención del Estado, desplegada para corregir las irregularidades en las adjudicaciones y el fenómeno de concentración de dichos terrenos baldíos, se suspendía una vez terminada los trámites de revocatoria directa, y, sometido a la contingencia de los particulares; al no condicionarse la titulación a un proceso de selección objetiva no existe garantía que los beneficiarios sean aquellos que revisten mayores condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, es altamente probable que, por efecto de la ocupación, se prefiera en la adjudicación a quienes poseen mejores condiciones para ejecutar el señorío y el aprovechamiento económico. Por otra parte, no puede garantizarse equidad en las áreas a distribuir, pues, estas dependen de la manera en la que los particulares hubieran delimitado sus ocupaciones. En suma, negar los efectos de la abstracción del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, implica separar el Estado de las decisiones de apropiación, y aprovechamiento económico, dificultando que el proceso de acceso se oriente por criterios de equidad que privilegien a las personas con mayor vulnerabilidad económica y social.

En tal consecuencia, otro efecto de la resolución No. 6423 de 2014 consistió en otorgar el carácter de baldíos, a los predios objeto de solicitud. Dicha condición tiene como particularidad que sustrae los predios de aquellos que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación, en tanto, su aprovechamiento y titulación deben ser siempre direccionados por el respectivo administrador, para este caso, la ANT.

Quiere decir ello, que, pese a haber adquirido nuevamente la condición de terrenos baldíos, los predios en cuestión no podían ser objeto de la ocupación espontánea y libre, esto es, por iniciativa de los particulares, ya que debe ser el Incoder, hoy ANT quien, a través de un proceso de selección objetiva, determinar las personas que pueden ser adjudicatarias de dichos fundos.

Lo anterior se acompasa con lo establecido en el inciso segundo del artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014, que señala que: *"En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos."*

Así mismo, de conformidad con el inciso segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994, no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida, tal como quedó expuesto en la resolución No. 6423 de 2014 expedida por el entonces Incoder. Ahora bien, en el caso particular, las situaciones de ocupación del predio pudieron ocurrir solo

en dos hipótesis, a saber: (i) las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío que como ya se dijo, no hace parte del régimen de ocupación, explotación y adjudicación ordinaria y paso al dominio de la Nación-Incoder ahora Agencia Nacional de Tierras, o (ii) lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se encontraban concentrados por efecto de la titulación, y posterior englobe de los predios. En esta última hipótesis implica, por tanto, que las ocupaciones tampoco dan derecho a la adjudicación por cuanto en dicho momento ostentan la condición de predios privados.

De acuerdo con lo observado, es posible establecer que la ocupación alegada por el solicitante no permite el reconocimiento de derechos (adjudicación), por cuanto esta se originó como una posesión ejercida sobre predios que se encontraban irregularmente bajo el dominio privado; escenario que a la luz de ordenamiento jurídico colombiano no tiene la capacidad de producir efectos para adquirir el dominio de bienes baldíos.

Sumado a esto, se observa que la ocupación aludida se ejerce actualmente sobre predios que escapan al régimen de ocupación y adjudicación ordinaria, y, al no contar con autorización expresa de la autoridad de tierras, dicha ocupación es a todas luces indebida, susceptible de ser recuperada con destino a los programas de acceso a tierra dispuesto por el Gobierno Nacional en los términos establecidos en artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con las consideraciones establecidas en la sentencia SU-426 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta, que con la revocatoria directa declarada mediante resolución No. 6423 de 2014 se logró retirar del ordenamiento jurídico actos administrativos con el fin de satisfacer el interés general, potestad que se ejerce conforme lo estipulado en los párrafos 6º y 7º del artículo 72 de Ley 160 de 1994; así las cosas, en procura de evitar que se configure violación a lo que establecen las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos, la Agencia Nacional de Tierras debe tener especial y riguroso cuidado para determinar quienes cumplen requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en concordancia con lo ordenado en la Sentencia SU-426 de 2016 de la Corte Constitucional.

Cabe señalar, que en la Resolución 6423 de 2014, se hace alusión a la Sentencia C-255 de 2012 emitida por la Corte Constitucional, donde se manifiesta, que la facultad de revocar unilateralmente los actos de adjudicación de baldíos, responde a fines constitucionalmente valiosos, y al tenor literal transcribe de la sentencia mencionada: ""(…) ***(i) la garantía en el cumplimiento de la función social de la propiedad; (ii) propender por el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios; (iii) la concreción del deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en su obligación de adoptar medidas de protección a favor de quienes, por su difícil condición económica, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta en el sector agropecuario*** (…)" *(Negrillas fuera de texto)".*

Y al respecto, también enfatiza: "*Es más para la Corte Constitucional, la revocatoria unilateral de los actos administrativos de adjudicación de baldíos siempre tiene cabida ante actos manifiestamente ilegales o que deriven en la violación de requisitos sustantivos o materiales de la adjudicación de baldíos, vale decir, aquellos que afecten de manera sensible los fines que subyacen en estos programas o que impliquen una grave distorsión de los mismos, cuando la titulación no recaiga en sus destinatarios legítimos -los sujetos de debilidad manifiesta del sector agropecuario, merecedores de la especial protección del Estado-, sino que termine en manos de quienes por sus privilegios económicos, sociales, políticos, o de cualquier otra índole, tengan la capacidad de inferir negativamente en el cumplimiento de la función social de la propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural.*"

Lo anterior, para decir, que el extinto Incoder emitió un acto administrativo por el cual se ordenó la revocatoria directa de actos administrativos de adjudicación de baldíos, en beneficio del interés general y con el fin de garantizar que las titulaciones recaigan en sus destinatarios legítimos (*-los sujetos de debilidad manifiesta del sector agropecuario, merecedores de la especial protección del Estado)*, es así entonces, para este caso, que la Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de tierras, debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la

seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación, por ser este el objeto de la entidad.

Así las cosas, al no encontrase acreditadas las condiciones y presupuestos que permitan llevar a cabo una eventual titulación del área reclamada, la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas debe desestimar la solicitud de adjudicación.

Aunado a lo anterior, dado que la ocupación ejercida no es e aquellas que permitan dar lugar a la adjudicación, que permita la aplicación del régimen de transición contenido en el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017, la presente solicitud debe ser ventilada y resuelta haciendo uso de las reglas del procedimiento de reconocimiento de derechos, mediante la ruta de Acceso a tierras en zonas focalizadas por el proceso de Adjudicación de Baldío Persona Natural, en el marco del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, regulado por el Decreto- Ley 902 de 2017.

Posteriormente, es necesario que la ANT adelante los procedimientos administrativos de recuperación material de las áreas ocupadas indebidamente, con el fin de tener la disposición material de las mismas que permita su intervención con destino a los programas de acceso a tierra.

Sumado a lo anterior, se evidencia que el ingreso al RESO del solicitante ordenado mediante la Resolución No. 4643 del 19 junio de 2020 proferida por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras debe ser suspendido en virtud de lo establecido en el numeral 5 y parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto Ley 902 de 2017, toda vez que la ocupación se ejerce de manera indebida. Lo anterior hasta tanto finalice el proceso agrario de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o el aspirante suscriba el correspondiente acuerdo de regularización en los términos de la norma señalada.

8. CONCEPTO PRELIMINAR SOBRE RUTA JURÍDICA

Al no encontrase acreditadas las condiciones y presupuestos que permitan llevar a cabo una eventual titulación del área reclamada, la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas debe desestimar la solicitud de adjudicación.

La presente solicitud debe ser tramitada y resuelta haciendo uso de las reglas del procedimiento de reconocimiento de derechos, mediante la ruta de Acceso a tierras en zonas focalizadas por el proceso de Adjudicación de Baldío Persona Natural, en el marco del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, regulado por el Decreto- Ley 902 de 2017, cuya competencia corresponde a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas focalizadas de conformidad con las funciones previstas en los numerales 1, 3 y 7 del Decreto 2363 de 2015.

Es necesario que la ANT adelante los procedimientos administrativos de recuperación material de las áreas ocupadas indebidamente, con el fin de tener la disposición material de las mismas que permita su intervención con destino a los programas de acceso a tierra en favor del grupo de ciudadanos amparados por la Corte Constitucional en los términos dispuesto por la sentencia SU- 426 de 2016.

Por último, el ingreso al RESO del solicitante debe ser suspendido en virtud de lo establecido en el numeral 5 y parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto Ley 902 de 2017, toda vez que la ocupación se ejercer de manera indebida. Lo anterior hasta tanto finalice el proceso agrario de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o el aspirante suscriba el correspondiente acuerdo de regularización en los términos de la norma señalada.

Elaborado por:	Operador	Fecha	S/F	Firma	S/F

Agencia Nacional de Tierras
JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO - FISO

PERSONA NATURAL

Número de formulario: FISO-PN-0097738

POSPR-F-011 – V3

Este documento es dispuesto por la **Agencia Nacional de Tierras** de manera **GRATUITA** es decir NO tiene ningún costo.

La información contenida en este formulario debe ser diligenciada en su totalidad

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Lugar de la solicitud

Departamento Meta Municipio Puerto Gaitan

2. Fecha de solicitud 25 | 11 | 2018 3. Unidad de Gestión Territorial u Operador que atiende UGT Oriente

4. ¿Está usted interesado(a) en los programas de formalización o acceso a tierras rurales adelantados por la Agencia Nacional de Tierras ANT? [X] SI [ ] No

Esta solicitud se presenta en los términos de los Art., 4, 5 y 6 del Decreto Ley 902 de 2017.

Especifique a que Título: Individual [X] Cónyuges o Compañeros Permanentes [X] el Solicitante manifesto a mitad del formulario que vive en Unión libre

II. DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE

5. Tipo y número de documento de identidad

Tipo DOC CC No. de documento 17385776 Fecha de expedición 22 | 2 | 1974

6. Identificación

Primer nombre Jose Demás nombres Orlando Primer apellido Caravali Segundo apellido Rivera

7. Condición del aspirante

Campesino(a) [X] Trabajador(a) agrario(a) [2] Otro [3] ¿Cuál? _____ ¿Es cabeza de hogar? [SI] [ ] No

8. Datos de ubicación

Dirección de residencia _____ Departamento Meta Municipio Puerto Gaitan

Vereda Las Cororas Corregimiento Porvenir Teléfono fijo _____

Teléfono móvil 3133843860 Correo electrónico jacporvenir1974@gmail.com

9. Datos alternos de contacto [ ] SI [X] NO

Primer nombre _____ Segundo nombre _____ Primer apellido _____

Segundo apellido _____ Relación con el aspirante _____

Teléfono fijo _____ Teléfono móvil _____

Dirección de residencia - correspondencia _____ Departamento _____

Municipio _____ Vereda _____ Corregimiento _____

III. ESTADO CIVIL Y VIDA EN PAREJA DE LA PERSONA ASPIRANTE

10. Estado civil actual: No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años [1] No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más [X]

Está separado(a) o divorciado(a) [3] → Pase a 12 Está viudo(a) [4] → Pase a 14 Está soltero(a) [X] Está casado(a) [6] → Pase a 14 el Solicitante manifesto a mitad del formulario que vive en pareja hace más de 2 años (40 años)

11. ¿Alguna vez estuvo casado(a)? [SI] [X] → Pase a 16 Fecha de constitución de la unión marital [DD] [MM] [AAAA]

12. ¿La persona con la que se casó vive? ¿Está viva? [SI] [No] → Pase a 16 [N/s]

13. ¿Se separó legalmente de la persona con la que se casó?¿Se divorció? [SI] → Pase a 16 [No]

14. ¿Cuenta con sociedad patrimonial o conyugal anterior sin liquidar? [SI] → Pase a 16 [No] → Pase a 16

15. ¿La persona con la que se casó, es con la que actualmente vive? [SI] [No]

Autorizo a la Agencia Nacional de Tierras ANT para realizar consultas de información a la DIAN, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 584 del estatuto tributario Decreto 624 de 1989: "Examen de la declaración con autorización del declarante"; al igual que la consulta de otras bases de datos e información que por ley tengan reserva, tendiente a la verificación de los requisitos dispuestos en el Decreto Ley 902 de 2017 y disposiciones reglamentarias, para la inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO. [X] NO

Autorizo a la ANT para remitir notificaciones por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011: "Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación(...)"

Mensajes a través del correo electrónico [X] NO Por error me marque No

Mensajes de voz a través del teléfono móvil [SI] NO

Mensajes de texto a través del teléfono móvil [SI] NO Otro medio electrónico ¿Cuál? _____

La información registrada en este formulario será protegida según la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO - FISO

PERSONA NATURAL

Número de formulario: FISO-PN-0097738

IV. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA ASPIRANTE Y NÚCLEO FAMILIAR

18. Tipo y número de documento
1. Cédula de Ciudadanía
2. Tarjeta de Identidad
3. NUIP
4. Indocumentado
5. Cédula de extranjería
6. No Sabe (No recuerda el número)

21. Parentesco con el aspirante o solicitante
1. Aspirante o solicitante
2. Esposo (a)
3. Compañero(a) Permanente
4. Pareja del mismo sexo
5. Hijo(a) Hijastro(a)
6. Yerno/Nuera
7. Nieto/Nieta
8. Padre/Madre
9. Suegros
10. Hermanos/Cuñados
11. Otros Parientes
12. No pariente
13. Hijo de crianza
14. No sabe (NS) - No responde(NR)

23. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Orientación sexual
1. Heterosexual
2. Lesbiana
3. Homosexual
4. Bisexual
5. Pansexual
6. Asexual
7. No definido
8. No Informa
9. Otro

24. Pertenencia étnica
1. Indígena
2. Gitano(a) Rrom
3. Raizal del archipiélago
4. Palenquero
5. Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), afrodescendiente
6. Ninguno de los anteriores

25. Discapacidad

NO / Pase a la pregunta 26

1. Movilidad
2. Sensorial Auditiva
3. Sensorial Visual
4. Sensorial (Gusto, olfato, tacto)
5. Sistémica
6. Mental Cognitivo
7. Mental Psicosocial
8. Voz y habla
9. Piel uñas y cabello
10. Enanismo
11. No la sabe nombrar

16	17			18		19	20				21	22			23			24			25		
No. de consecutivo de la persona	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo Documento	Número del documento de identidad	Fecha de nacimiento			Edad	Parentesco con el aspirante o solicitante	¿...depende económicamente del aspirante?		Sexo	Orientación sexual	Otro ¿Cuál?	Pertenencia étnica			Discapacidad		
							DD	MM	AAAA			Si	No				De acuerdo con su cultura, pueblo y rasgos físicos,... es o se reconoce como:	Nombre del consejo comunitario, kumpania,vitsa, etnia o pueblo indígena	Indique a que resguardo indígena pertenece (Aplica solo para Indígena)	¿...presenta alguna discapacidad(es)?		Identifique la(s) categoría(s) de la(s) discapacidad(es)
1	Jose	Orlando	Carovali	Rivera	1	17385776	11	5	1949	68				1	1		6			Si	X	
2							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
3							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
4							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
5							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
6							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
7							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
8							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
9							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
10							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
11							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
12							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
13							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
14							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	
15							DD	MM	AAAA			Si	No							Si	No	

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO - FISO

PERSONA NATURAL

Número de formulario: FISO-PN-0097738

IV. INFORMACIÓN BÁSICA DEL ASPIRANTE Y NÚCLEO FAMILIAR

27. Víctimas del conflicto

Es usted víctima del conflicto armado?
NO / Pase a la pregunta 28

En caso de que su condición sea víctima, indique el hecho victimizante
1. Amenaza a la vida, a la integridad y a la seguridad personal
2. Desplazamiento Forzado
3. Desaparición Forzada
4. Homicidio
5. Secuestro
6. Reclutamiento forzado de niños, niñas o adolescentes
7. Lesiones personales
8. Delitos contra la libertad e integridad sexual
9. Tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes
10. Daño en bienes muebles o inmuebles
11. Despojo o abandono forzado de tierras y otros bienes inmuebles
12. Otro

D: Desplazamiento
R: Retorno

28. ¿Cuál es su ocupación actual?
1. Sin Ocupación
2. Empleado
3. Independiente
4. Estudiante
5. Ama de Casa
6. Incapacitado permanente para trabajar
7. Otro

29. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?
1. Ninguno
2. Preescolar
3. Básica primaria (1 - 5)
4. Básica Secundaria (6 - 9)
5. Media (10 - 13)
6. Técnico
7. Tecnológico
8. Universitario
9. Posgrado

	26		27										28		29						
			Víctimas del conflicto												Estudios del aspirante y núcleo familiar						
No. de consecutivo de la persona	¿...está afiliado(a) al SISBEN?		¿...es víctima del conflicto armado?		En caso de que su condición sea víctima, indique el (los) número(s) del (los) hecho(s) victimizante(s)	Para opción 12 (otro), indique ¿Cuál?	Indique la fecha de desplazamiento. Si retornó, indique la fecha de retorno	¿...ha sido beneficiario de las políticas de atención y reparación integral a víctimas?		¿...ha recibido atención y/o reparación en forma de acceso a tierra?		¿Cuál es la ocupación actual de...?	Otro ¿Cuál?	¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por...?	¿Cuál es el último grado aprobado en este nivel?	¿Cuántos periodos de estudios superiores (técnicos, tecnológicos, universitario, posgrado) ha realizado y aprobado?	Nombre del(los) programa(s) académico(s) de estudios superiores y/o título que obtuvo	¿...ha tomado y terminado algún curso,seminario o diplomado en ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas?		Si la respuesta a la anterior pregunta es SI indique el nombre del(los) curso(s), seminario(s) o diplomado(s), la(s) entidad(es) y duración
1	X	No	Si	X			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	X	Si	No X	3		3	1			Si	No X	
2	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
3	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
4	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
5	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
6	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
7	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
8	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
9	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
10	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
11	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
12	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
13	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
14	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	
15	Si	No	Si	No			D DD MM AAAA R DD MM AAAA	Si	No	Si	No							Si	No	

V. BENEFICIARIO DE PROGRAMAS DE TIERRAS

30. ¿Ha sido beneficiario(a) de tierras por parte del INCORA, INCODER o de la ANT? Si [ ] No [X] → Pase a 31 Tipo de beneficio _____

Número de resolución _____ Fecha de la resolución DD | MM | AAAA

¿Registró la resolución en la oficina de registro de instrumentos públicos? No [ ] Si [ ] → Pase a 31 ¿Aún la conserva o cuenta con ella? Si [ ] No [ ]

VI. INFORMACIÓN DEL PREDIO

31. Información general del predio

¿Usted cuenta con un predio rural? [X] No [ ] → Pase a 55 ¿Habita en el predio? [X] No [ ] → Pase a 32 ¿Desde qué fecha habita en el predio? 14 / M / 2014

32. Datos de ubicación del predio

Departamento Meta Municipio Puerto Gaitan Vereda Corocoras Corregimiento Porvenir

Centro poblado _____

33. Identificación del predio

Nombre del predio Villa Camila 1 Dirección del predio Villa Camila, las Corocoras, el porvenir

Código catastral _____ Número de folio de matricula inmobiliaria _____

34. Características del predio

Área aproximada del predio objeto de la solictud (hectáreas) 311

El predio mencionado hace parte de otro predio de mayor extensión [X] No [ ] → Pase a 35 N/s [ ] → Pase a 35

Cuál es el nombre del predio de mayor extensión Las Corocoras

Información jurídica de predio

35. Condición jurídica del predio: Formalizado [1] → Pase a 50 Sin formalizar [X] No aplica [3] **36. Tipo de derecho y forma de tenencia:** Ocupación [X] Posesión [2]

Propiedad [3] → Pase a 38 Otra forma de tenencia *(arriendamiento, usufructo, comodato, entrega provisional por autoridad competente, contrato de aparcería, otra)* [4]

¿Cuál? _____ → Pase a 38

37. Tiempo de tenencia, posesión u ocupación 4 años En caso de ser ocupante indique si ya inició el trámite de adjudicación del predio [X] No [ ] → Pase a 38

¿Ante qué entidad? INCODER Fecha de solicitud 16 / 7 / 2014 Estado del trámite No sabe.

En caso de ser poseedor indique si ya inició el trámite de formalización de predio Si [ ] No [ ] ¿Ante qué entidad? _____

Fecha de solicitud DD | MM | AAAA Estado del trámite _____

38. ¿Por qué considera que tiene derecho sobre el predio que desea formalizar? Porque lo compró [1] Porque tiene una sentencia judicial [2] → Pase a 41

Porque es una herencia [3] → Pase a 45 Porque es una donación [4] → Pase a 48 Porque lo trabaja [X] → Pase a 50 Porque vive en el [X] → Pase a 50

Porque lo ha dado en arriendo [7] → Pase a 50 Porque lo tiene cedido en préstamo a alguien [8] → Pase a 50 Porque actualmente paga por el uso del predio [9] → Pase a 50

Porque se lo adjudicó el INCORA o el INCODER [10] → Pase a 50

Adquisición de predio por compra

39. ¿Quién le vendió el predio? _____ ¿La persona que le vendió el predio aún vive? 1. Si [ ] 2. No [ ] 3. N/s [ ]

¿Tiene cómo contactar a esa persona? 1. Si [ ] 2. No [ ]

40. Documento o documentos que respaldan el negocio: Escritura pública [1] Documento privado [2] → Pase a 42 Promesa de compraventa [3] → Pase a 42 Carta venta [4] → Pase a 42

Documento a nombre de un tercero [5] → Pase a 44 Sin documento, de manera verbal [6] → Pase a 42 Otro [7] ¿Cuál? _____ N/s [ ]

41. ¿Registró el título del predio en la oficina de registro de instrumentos públicos? 1. Si [ ] → Pase a 50 2. No [ ] → Pase a 50 3. N/s [ ]

42. ¿Por qué no ha hecho la escritura? Porque quien vendió no era el real dueño [1] Porque la compra fue a crédito y no ha acabado de pagar [2]

Porque falleció el vendedor (verdadero dueño) [3] Porque sobre el predio hay un embargo o existe alguna circunstancia que impida su venta [4]

Porque el predio se encuentra en régimen parcelario [5] N/s [ ]

43. ¿El (la) vendedor(a) está dispuesto(a) a firmarle la escritura? Si [ ] → Pase a 50 No [ ] → Pase a 50 N/a [ ] → Pase a 50 N/s [ ] → Pase a 50

44. ¿Qué documento o título tiene a nombre de un tercero (otra persona)? Un documento privado (promesa de compraventa, carta venta o similar) [1] → Pase a 50

Sentencia judicial [2] → Pase a 50 Resolución de adjudicación [3] → Pase a 50 Contrato de usufructo [4] → Pase a 50 Escritura pública [5] → Pase a 50 N/a [ ] → Pase a 50

Adquisición de predio por herencia

45. ¿En qué año falleció la persona que le dejó la herencia? _____ ¿Quien dejó la herencia era el(la) verdadero(a) dueño(a) del predio? 1. Si [ ] 2. No [ ] 3. N/s [ ] 4. N/a [ ]

46. ¿Qué documento o título tiene a nombre de quién dejó la herencia? Un documento privado (promesa de compra venta, carta-venta, o similar) [1] Sentencia judicial [2]

Resolución de adjudicación [3] Contrato de usufructo [4] Escritura pública [5] Ninguno [6] No sabe no responde [7]

47. ¿Cuál es el parentesco con la persona fallecida que dejó la herencia? Hijo (a) [1] Padre/Madre [2] Hermano (a) [3] Sobrino(a) [4] Cónyuge [5]

Otro [6] ¿Cuál? _____

¿Existen más herederos con usted? 1. Si [ ] 2. No [ ] 3. N/s [ ] 4. N/a [ ] Si la respuesta es SI, relacione a continuación los demás herederos

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido

¿La totalidad de los herederos están de acuerdo con adelantar la sucesión? 1. [SI] → Pase a 50 2. [No] → Pase a 50 3. [N/s] → Pase a 50

Adquisición de predio por donación

48. ¿Quién le donó o quiere donarle el predio? _____ **¿Qué parentesco o relación tiene usted con el (la) donante?** Hijo (a) [1] Padre/Madre [2] Hermano(a) [3] Sobrino(a) [4] Cónyuge [5] Otro [6] ¿Cuál? _____ **¿Cuántas personas con usted recibieron o recibirán predios del donante?** _____

49. ¿Qué documentos tiene como respaldo de la donación? Escritura pública registrada [1] Escritura pública sin registrar [2] Documento privado [3] No tiene documento [4] La donación está por hacerse [5]

Explotación del predio

50. ¿Usted, explota el predio? [X] No → Pase a 51 Clase de explotación Agropecuaria, Forestal Área de explotación aproximada (hectáreas) 311
¿Desde que fecha explota el predio? 18 5 2014 ¿Quién o quiénes habitan en el predio? El Solicitante y su Compañera permanente.

51. ¿Usted, su cónyuge, compañero (a) permanente explotan otros predios rurales? SI [ ] NO [X] En caso afirmativo ¿A qué título? Propietario [1] Ocupante [2] Poseedor [3] Tenedor [4] Trabajador [5] **La explotación que adelanta, la realiza como:** Trabajo personal [1] Trabajo familiar [2] Trabajo con apoyo de terceros [3] Trabajo comunitario [4] **Clase de explotación a la que prefiere dedicarse:** Agrícola [1] Agroindustrial [2] Agropecuario [3] Comercial [4] Cultural [5] Educativo [6] Forestal [7] Habitacional [8] Industrial [9] Institucional [10] Minero [11] Pecuario [12] Recreacional [13] Religioso [14] Salubridad [15] Servicios Especiales [16] Uso Público [17] Otra [18] ¿Cuál? _____

52. ¿Tiene o ha tenido algún tipo de conflicto de linderos, servidumbre o por el área del predio? 1. SI [ ] 2. NO [X] → Pase a 53 ¿Cuál? _____
Si el conflicto esta vigente describirlo brevemente _____

53. ¿Ha realizado solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y/o abandonadas forzosamente? 1. SI [ ] 2. NO [X] 3. N/s [ ]

VII. INFORMACIÓN DEL PREDIO - COLINDANTES

Colindantes

De acuerdo al caso, relacione el(los) accidente(s) geográfico(s) por cada punto cardinal y/o la plena identificación del (los) colindante(s): Tipo de documento de identidad, número de documento de identidad, nombres y apellidos.

54. Colindantes del predio

Norte _____

Sur Carretera al puente gloria.

Oriente Fernando Valla

Occidente Camo Valla

Vías de acceso al predio Via puerto Gaitan - Arimena el porvenir a 7 Km mano derecha dela trocha rancho grande.

VIII. CARACTERIZACIÓN DE LA PERSONA ASPIRANTE

55. Indique cuál es su patrimonio neto (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes SMMLV)* 51 ¿Está usted obligado a presentar declaración de renta? Si [ ] No [X]

56. ¿Usted es propietario(a) de algún predio rural y/o urbano destinado exclusivamente para vivienda? Si [ ] No [X] → Pase a 58

57. ¿Este predio cuenta con condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo? Si [ ] No [ ]

58. ¿Ha sido usted beneficiario del proceso de restitución de tierras? Si [X] ¿Ha sido usted reconocido como segundo ocupante dentro del proceso de restitución de tierras? Si [ ] No [X]

¿Ha sido usted beneficiario de la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de la propiedad? Si [ ] No [X]

59. ¿Es usted, su cónyuge, compañero permanente o socio adjudicatarios de terrenos baldíos? Si [ ] No [X]

En caso afirmativo, indique si usted su cónyuge, compañero permanente o socio ha(n) enajenado el terreno baldío adjudicado Si [ ] No [X]

Relacione fecha, datos de títulos y/o registros _____

60. ¿Usted es requerido por las autoridades para el cumplimiento, o está cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme? Si [ ] No [X]

61. ¿Tiene usted experiencia en una o en algunas de las siguientes actividades? *Indique el tiempo de experiencia en años - meses:* [X] **Agropecuarias** *años* 47 *meses* ____

[2] **Acuícolas** *años* ____ *meses* ____ [3] **Forestal** *años* 1 *meses* ____ [4] **Economía del cuidado** *años* ____ *meses* ____

[5] **Otra** _____ *años* ____ *meses* ____ [6] **Ninguna**

62. ¿La experiencia indicada en la pregunta anterior se relaciona con servicios ecosistemicos que permiten la preservación y/o restauración de áreas y ecosistemas estratégicos? Si [ ] No [X]

63. ¿Hace parte de alguna asociación campesina, de economía solidaria o cualquier otro instrumento de asociación cuyo objeto esté dirigido a la producción agropecuaria, forestal, acuícola o de servicios ambientales con fines productivos o de la economía campesina?

[X] No → Pase a 64 ¿Cuál? Asoyoposanjose

En caso afirmativo en la pregunta anterior ¿Es usted directivo (a)? Si [ ] No [X] ¿Esta asociación está compuesta solo por mujeres? Si [ ] No [X]

64. ¿A cuánto ascienden (en pesos colombianos) mensualmente sus ingresos? 0 a $ 500.000 [1] $ 500.001 a $ 1'000.000 [X] $ 1'000.001 a $ 2'000.000 [3]

$ 2'000.001 a $ 3'000.000 [4] $ 3'000.001 a $ 4'000.000 [5] $ 4'000.001 a $ 5'000.000 [6] Más de $ 5'000.001 [7]

65. ¿Todos sus ingresos se derivan de actividades realizadas en el sector agropecuario? Si [X] No [ ]

66. ¿Reside o residió en el municipio o región donde se ubica el predio rural objeto de esta solicitud?* Si [X] No [ ] Si la respuesta es afirmativa indique el tiempo de residencia (meses) 60

Para los casos de **Acceso a Tierras** indique: Departamento Meta Municipio Puerto Gaitan

67. ¿Ha sido favorecido con sentencias judiciales que ordenen a la ANT la adjudicación o la reubicación? Si [ ] No [X]

68. ¿Se encuentra en estado de desprotección por viudez o abandono del hogar del cónyuge o compañero(a) permanente? Si [ ] No [X]

69. ¿A cuánto ascienden mensualmente los ingresos de su cónyuge o compañero(a) permanente?

0 a $ 500.000 [X] $ 500.001 a $ 1'000.000 [2] $ 1'000.001 a $ 2'000.000 [3] $ 2'000.001 a $ 3'000.000 [4] $ 3'000.001 a $ 4'000.000 [5] $ 4'000.001 a $ 5'000.000 [6]

Más de $ 5'000.000 [7]

70. ¿Ha participado en algún proyecto de protección y/o restauración ecológica? Si [ ] No [X] 71. ¿Ha sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales? Si [ ] No [X]

72. ¿Está incurso en algún procedimiento de declaratoria de ocupación indebida de tierras baldías o fiscales patrimoniales? Si [ ] No [X]

73. ¿Hace parte de programas de reubicación y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente y fortalecer la producción alimentaria a través de la erradicación de cultivos ilícitos? Si [ ] No [X]

74. ¿Usted es ocupante de predios al interior de resguardos o reservas constituidas por el INCORA que estén pendientes de conversión a resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras? Si [ ] No [X]

IX. TIPO DE SOLICITUD (ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR QUIEN RECIBE LA SOLICITUD)

75. De acuerdo con la información suministrada por el aspirante o solicitante, indique el módulo al cual debe ingresar : Acceso a tierras [X] Formalización de la propiedad [2]

Proceso o pretensiones agrarias [3] Administración [4] Otros [5] ¿Cuál?_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL FORMULARIO

FORMULARIO INSCRIPCIÓN
DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL
DE LA PROPIEDAD
PERSONA NATURAL - FISO

Declaro que los datos suministrados en este formulario son exactos y veraces de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 902 de 2017, donde se precisa que: "Constituye una obligación de los aspirantes inscritos en el RESO garantizar la veracidad de la información allí relacionada. Su incumplimiento dará lugar a la exclusión del RESO y no podrán ingresar en un periodo de 10 años. Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales respectivas".

Firma del aspirante Jose Orlando Caravali.

Nombre del aspirante Jose Orlando Caravali Rivera



Huella del aspirante

Nombre de quién recibe la solicitud Fabián Orlando Reina Rojas

Firma de quien recibe la solicitud

Número de documento de quién recibe la solicitud 1121841030

Número de formulario: FISO-PN-0097738

OBSERVACIONES

El solicitante manifestó a mitad del formulario que vivia en union libre hace 40 años aproximadamente con su compañera. Tambien dijo que no le dieron información sobre traer los documentos de su nucleo familiar por eso no adjunto la cedula de ciudadania de su compañera.

Agencia Nacional de Tierras
JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO

Formulario para cumplimiento orden Sentencia SU - 426 de 2016 - Caso Porvenir (Puerto Gaitan-Meta)

PROCESO: SU - 426 de 2016: CENSO Y DEFINICION DE SUJETOS DE REFORMA AGRARIA

FORMATO: CUMPLIMIENTO ORDEN JUDICIAL

Solicitud No. 110

FECHA DE LA SOLICITUD Día 26 Mes Junio Año 2017

I. Información sobre el peticionario

1. La solicitud es presentada en los términos del Art 65 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 21015. (marque con una X, la opción seleccionada)
Individual [ ] Compañero Permanente [X]

2. Nombres y Apellidos del Solicitante Jose Orlando Caravali Rivera Telefono: 3133843860 (1)

3. Dirección de Notificación: Inspeccion Porvenir Vereda Municipio: Puerto Gaitan Departamento Meta

4. Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA) 22 febrero 1979 Genero: F [ ] M [X]

5. Número de Identificación 17385776 de Puerto Lopez

6. Es mujer cabeza de hogar Si ____ No X

7. Depende su sustento de la explotación del inmueble objeto de la verificación en razón del cumplimiento de la ordén judicial: Si __ No __

8. Estado Civil: Soltero [ ] Casado [ ] Unión Libre [X]

9. Nombres y apellidos del cónyuge, compañero permanente Eva Charon Castellanos

10. Número de Identificación del cónyuge o compañero permanente 21.242.503 de 21.242.503

11. Que actividades realiza su conyuge en el predio: Actividades de la cocina y hogar

12. Personas dependientes: Nombre Juan Miguel Caravali Rincon Edad 15 Identificación 1.121.818.137 parentesco hijo

Nombre ____ Edad ____ Identificación ____ Parentesco ____

Nombre ____ Edad ____ Identificación ____ Parentesco ____

Nombre ____ Edad ____ Identificación ____ Parentesco ____

Nombre ____ Edad ____ Identificación ____ Parentesco ____

13. ¿Cuenta con redes de apoyo familiar o social cerca al lugar de vivienda o trabajo? Si [ ] No [X]

14. Es usted, su cónyuge o compañero permanente, adjudicatario de terrenos baldíos ?
En caso afirmativo en qué fecha (DD/MM/AAAA) SI [ ] NO [X]
Datos titulo ____ y/o Registro ____

15. Es usted, su cónyuge o compañero(a) permanente e hijos menores poseedor o propietario a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional? SI [ ] NO [X] Datos titulo ____ y/o Registro ____

16. Esta usted, obligado a presentar declaración de renta y patrimonio? Compañera tiene una casa urbano y el señor no tiene propiedades
SI [ ] NO [X] No. De Rut ____

17. El patrimonio de los solicitantes es superior a 1000 SMLMV? SI [ ] NO [X]

18. Usted ha vendido terrenos baldíos que le hayan sido adjudicados? SI [ ] NO [X] En que tiempo: ____

19. Usted, su cónyuge, compañero permanente e hijos menores han sido beneficiarios con la adjudicación de terrenos baldíos efectuadas a Sociedades de las que usted forme parte? SI [ ] NO [X]

20. Usted ha tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de la Junta o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la presente solicitud?
SI [ ] NO [X] Se advierte la gravedad del juramento Art. 442 - Ley 599 del 2000. [ ]

21. Condición del solicitante: Trabajador agrario [X] Desplazado [ ] Victima del Conflicto [ ]

22. Indique la ubicación del predio del cual fue desplazado: Vereda: ____ Corregimiento: ____ Municipio ____ Depto: ____

23. Despues de su llegada al predio solicitado en adjudicación ha debido abandonarlo a causa del conflicto armado: __ Si: [ ] No: [X]
Fecha de Abandono: (DD/MM/AAAA) Se han presentado problemas pero con la misma gente Fecha retorno: (DD/MM/AAAA)

24. Fecha de ingreso al predio ocupado (DD/MM/AAAA) 5 años aproximadamente

25. Llegó al predio a través de JAC [ ] Familiar [ ] Institución [ ] Particular [ ] Por cuenta propia [X]

26. Lugar de procedencia: Vereda: ____ Corregimiento: ____ Municipio: Carmen de Apicala Departamento: Tolima
Debido a que trabaja con ganadera

27. ¿Cómo encontró y/o recibió el predio? Sin embargo lleva trabajando en la region 40 años. Sabana, pastos naturales

28. ¿Usted realizó algún pago por el predio? Si [ ] Cuanto $ [ ] No [X]

29.. Es usted solicitante de restitucion de tierras de este predio u otro ? Si: [ ] No: [X]

30. En caso afirmativo indique que predio: Este Predio: ____ Otro: ____ Cual: ____

II. Información sobre el predio solicitado

31. El predio objeto de la solicitud es baldío? SI [X] NO [ ]

Informacion Predial Resgistral No. ____

32. Nombre del predio Villa Camila I - Sabana

33. Ubicación: Departamento: ____ Municipio: P. Gaitan
Centro Poblado/Corregimiento: Inspeccion Porvenir Vereda: ____
Código Catastral: Matrícula Inmobiliaria: No tiene

Agencia Nacional de Tierras
JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO

Formulario para cumplimiento orden Sentencia SU - 426 de 2016 - Caso Porvenir (Puerto Gaitan-Meta)

PROCESO: SU - 426 de 2016: CENSO Y DEFINICION DE SUJETOS DE REFORMA AGRARIA

FORMATO: CUMPLIMIENTO ORDEN JUDICIAL — Página 2 de 2

34. Área aproximada del predio: 312 has Hectáreas _____ Metros _____

35. Colindantes del predio: *(Persona natural o jurídica)*

NORTE a. Lina Baranoa Riveros
b.
c.

SUR a. Caño Cabiona - zona protectora
b.
c.

ORIENTE a. = Fernado Bulla
b.
c.

OCCIDENTE a.
b. Sabanal, tanal de Moichal - Caño Cabiona
c.

Vías de acceso al predio : Sobre la vía Puerto Gloria-Cainagua se desvía hacia el norte 2 kilometros

36. Usted, su cónyuge o compañero permanente explota predios colindantes al solicitado en adjudicación?

SI ☐ NO ☒ NO APLICA ☐ (No aplica únicamente para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

37. En caso afirmativo, a que título: Propietario ☐ Ocupante ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____

Informacion Predial SI ☐ NO ☐ Resgistral No. _____

Nombre del predio: _____ Ubicación: _____

38. Ocupación y explotación del predio: N.A (No aplica únicamente para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados) ☐

Fecha desde la cuál ocupa y explota el predio objeto de la solicitud (dd/mm/aaaa) Potrol mejorados

Tipo de Explotación:

Ganaderia - 164 cabezas aprox.	____Has ____%		Agricultura	____Has ____%	
Forestal Productivo	____Has ____%		Forestal Protector	____Has ____%	
Inculta	____Has ____%		Vivienda	✓ Has ____%	
Otros	____Has ____%		Area Total	____Has ____%	

(Especificar otros) Se evidencia cultivo de platano de 1 año aproximada en 1 Has.

39. La explotación que adelanta, la realiza: Trabajo personal ☒ Trabajo Familiar ☐ Trabajo con Apoyo de Terceros ☒

NO APLICA ☐ (No aplica únicamente para predios urbanos, centros poblados rurales y desplazados)

40. Sabe si en estos predios baldios continua haciendo presencia de manera directa o atraves de terceros la empresa ganadera la "Cristalina" SI__NO X

III. Declaración de juramento y Autorización

41. Declaro(amos) bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento, que las afirmaciones y datos consignados en el presente formulario son correctos y fiel expresión de la verdad. En caso de faltar a la verdad se incurrira en el tipo penal consagrado en el Artículo 442. de la Ley 599 del 2000, Modificado por el art. 8, Ley 890 de 2004: *"Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años."*

42. Autorizo a la Agencia Nacional de Tierras para realizar consultas externas (incluida la DIAN) tendientes a la verificación de los requisitos de la Ley 160 del 94 y disposiciones reglamentarias.

43. Autorizo a la Agencia Nacional de Tierras para recibir notificaciones por medios electronicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del CPACA: *"Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación(...)"*

SI ☐ NO ☐ Correo Electronico: _____

Firma solicitante: _____

Nombre : José Orlando Gonzalez.

No. Identificación 1133954446

Firma conyuge _____

Nombre _____

No.Identificación _____

IV. Documentos que anexa al Solicitud

44. Documentos que anexa:

- Fotocopia documento de identificación del(os) solicitante(s) SI NO
- Fotocopia documento de identificación de su cónyuge o compañero (a) permanente SI NO
- Declaraciones de renta y patrimonio de los tres últimos años (si a ello hubiere lugar) SI NO

V. Presentación de la solicitud

45. Personal ☒ Solicitud Escrita (Carta) ☐ Correo electrónico No tiene correo

SI ☐ NO ☒

46. Requiere información adicional o complementaria _____

VI. OBSERVACIONES

Anteriormente tenia una sociedad con el señor Fernado Bulla por tal razón hicieron una división del terreno.

Agencia Nacional de Tierras — JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	FORMA UNIFICADA DE VISITA DE CARACTERIZACIÓN	CODIGO	ACCTI-F-007
	ACTIVIDAD	EMITIR CONCEPTO VISITA TÉCNICA DEL PREDIO	VERSION	1
	PROCEDIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO - ADQUISICIÓN DEL PREDIO	FECHA	01-03-2017

COMPRA		ZONAS FOCALIZADAS		DEMANDA Y DESCONGESTION		SUBPROCESO	FECHA: DD/MM/AAA 26-06-2017.

Nombre del Propietario	Nombre del Beneficiario y/u Ocupante
	José Orlando Cardeli
Dirección del Propietario	**Documento de Identidad No.**
Insp. Porvenir.	17'385.776
Nombre del Predio	**Departamento**
Villa camila 1.	Meta.

Municipio	Vereda	Código catastral y/o Cédula Catastral
Pto Gaitan.	El Porvenir.	

No. Familias Postulantes	Matricula Inmobiliaria	Coordenadas
Una (1)		4°40'25.36"N 71°23'14.05"W

4,673711 / 71,387236

I. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PREDIO

Predio		Área del Predio		Observaciones:
Rural	Urbano	Ha	m²	
X		312		
Levantamiento Topográfico				
FMI				
Escritura				

Vías de acceso	Estado (Bueno, Malo, Regular)	Medio de Transporte	Descripción Llegada al Predio
Pavimentada			Sobre vía. Pto Gloria-Carimagua se desvia hacia el norte 1 Km Frente a predio de Libia. Bohonca
Carreteable	Malo.	Vehiculo.	
Camino de Herradura			
Vía Fluvial			

Descripción de Linderos		
	Colindancia	Observaciones
NORTE:	Libia. Baranod Riveros	
ORIENTE:	Fernando Bilia.	
SUR:	Cano Cabiona. y Zona. protectora	
OCCIDENTE:	Sabana Comunal y Zona protectora.	

Agencia Nacional de Tierras — JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	FORMA UNIFICADA DE VISITA DE CARACTERIZACIÓN	CODIGO	ACCTI-F-007
	ACTIVIDAD	EMITIR CONCEPTO VISITA TÉCNICA DEL PREDIO	VERSION	1
	PROCEDIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO - ADQUISICIÓN DEL PREDIO	FECHA	01-03-2017

II. SERVICIOS BÁSICOS

Tipo de Servicios	Calidad			No Existe
	B	R	M	
Acueducto		X		
Energía Solar				
Teléfono				
Salud				
Comercio				
Educación				
Recreación				

III. CARACTERÍSTICAS

Altura (m.s.n.m.) máxima	Altura (m.s.n.m.) mínima	Periodo de Lluvias
154	154	Abril - Noviembre

IV. DISPONIBILIDAD HÍDRICA

Fuentes	No	Nombre	Coordenadas	Usos				Frecuencia		
				D	A	G	P	I	P	TL
Río										
Quebrada	1									
Caño	1	Caño Cabiona			X	X			X	
Laguna										
Lago Artificial										
Jagüey										
Nacimiento	2									
Aljibe	1	8mts		X		X	X		X	
Pozo artesanal										

Permiso uso de aguas	SI	NO	El predio cuenta con riego:
		X	NO

NOTA: (D: DOMESTICO, A: AGRICOLA, P: PECUARIO, I: INTERMITENTE, P: PERMANENTE, T: TEMPORAL)

Agencia Nacional de Tierras — JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	FORMA UNIFICADA DE VISITA DE CARACTERIZACIÓN	CODIGO	ACCTI-F-007
	ACTIVIDAD	EMITIR CONCEPTO VISITA TÉCNICA DEL PREDIO	VERSIÓN	1
	PROCEDIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL SUBISIDIO - ADQUISICIÓN DEL PREDIO	FECHA	01-03-2017

V. PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO

Grado de Erosion:	Ligera: menor a 10%	X	Moderada entre 10% - 40%		Severa mayor a 40%:		Color[1]: 10R 4/6		
Drenaje Natural:	Bien drenado		Moderadamente Drenado	X	Mal drenado				
Tipo de Relieve:	Plano - Inclinado:	X	Quebrado:		Escarpado				
Pendiente %	0 a 7%:	X	7 a 25%		25- 50%:		Mayor a 50%		
Frecuencia Inundaciones	Inexistente		Ocasional	X	Frecuente		Muy frecuente:		
Profundidad Efectiva *cm*	<50		50 – 75		75 -100	X	>100		
Pedregosidad	0.1 – 3%:	X	3 – 15%:		15 – 50%:		50 – 90%:		
Tipo Estructura Suelo (FAO)	Granular		Bloques	1	Laminar	1	Otros:		
Textura del Suelo	Limo:		Arena:	1	Arcilla:	1	Franco Arenoso		
Mecanización	Suelos Mecanizables.- Pancoger con Manejo Manual								
Amenazas o Riesgos									

Nota: Tabla de Mounsell.

VI. COBERTURA DEL SUELO

Cobertura[2]	Descripción	Coordenadas	Uso Actual	% Frente a área total del predio
305	Pastos Naturales			97
5.	Pastos Mejorados			2.
2.	Cultivo Pancoger y Eucalipto.		Forestal Pancoger	1

Metodología CORINE LAND COVER

Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	FORMA UNIFICADA DE VISITA DE CARACTERIZACIÓN	CODIGO	ACCTI-F-007
	ACTIVIDAD	EMITIR CONCEPTO VISITA TÉCNICA DEL PREDIO	VERSIÓN	1
	PROCEDIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL SUBISIDIO - ADQUISICIÓN DEL PREDIO	FECHA	01-03-2017

VII. USO ACTUAL DEL SUELO

AGRICOLA				
Uso	Ha	Descripción	Edad del Cultivo	Estado de la Explotación
Transitorios				
Semipermanentes				
Permanentes	1.	Forestal Eucalipto.	6 meses	Establecimiento Crecimiento
Pancoger	1.	Yuca, Platano.	12 no	Producción
Pastos naturales	305	Pasto natural		Pastoreo
Pastos mejorados	5	Brachiaria	1 año	Buena.
Pastos de corte				

PECUARIO				
Especie o Sistema	No. Animal	Descripción		Estado de la Explotación
Vacuno.	164.	Cabezas de Ganado.		Buena.
Apoyo Institucional	SI	~~NO~~	Nombre	
Asistencia Técnica	SI	~~NO~~	Pública o Privada	Frecuencia
Comercialización	Venta Ganado en Pie en Sitio.			

VIII. CALIDAD DEL OCUPANTE (DILIGENCIE SI APLICA)

Clase	No	Area ocupada Ha	Tiempo de ocupación	Tiempo de Explotación
Propietario				
Administrador				
Parceleros				
Tenedor	1.	312.	5 años.	4 años
Arrendatario				
Depositario provisional				

Núcleo familiar		
Nombre	**Edad**	**Parentesco**
Jose Orlando Caravali	65	Solicitante
Eva Chacón	68.	Compañera
Juan Miguel Caravali Rincon	15	Nieto

IX. INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA				
Tipo	**No.**	**Tiempo de Uso**	**Descripción**	
			Tipo o Clase	**Estado (B/R/M)**
Establos				
Sala de Ordeño				
Centro de acopio				
Secadores				
Vivienda	1	42 años.	Madera-Zinc.	Mala.
Plantas de Beneficiadero				
Bodegas				
Secadores				
Trapiches				
Galpones				
Porquerizas				

*Otros		
Cercas		
Clase	Km	Descripción
Perimetrales	6,5	Poste Madera y Alambre.
Internas		

Servidumbres					
Clase	Aguas	Transito	Oleoductos	Eléctrica	Ninguna

Agencia Nacional de Tierras — JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO	FORMA	FORMA UNIFICADA DE VISITA DE CARACTERIZACIÓN	CÓDIGO	ACCTI-F-007
	ACTIVIDAD	EMITIR CONCEPTO VISITA TÉCNICA DEL PREDIO	VERSIÓN	1
	PROCEDIMIENTO	MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO - ADQUISICIÓN DEL PREDIO	FECHA	01-03-2017

Descripción

X. EVALUACIÓN AGRONÓMICA FINAL

Limitante:
Suelos de Baja Fertilidad — Bajo contenido materia Orgánica
Alta acidez — Alto contenido Aluminio
Ciclo Hidrológico con alta generación de excedentes
que Fuerte generen Problemas de anegamiento en
enriquecimiento mayor parte del año — Abril — Nov.

Potencial:
Uso potencial en Conservación con pastos mejorados y/o sobrepastoreo
Uso Potencial Agrícola con Cultivos transitorios Adaptable
como Maíz - Arroz - Yuca y Cultivos permanentes como
Caña - Frutales — Tambien Agroforestería
Siempre con especies adaptadas

Firmas de quienes participaron en la visita:

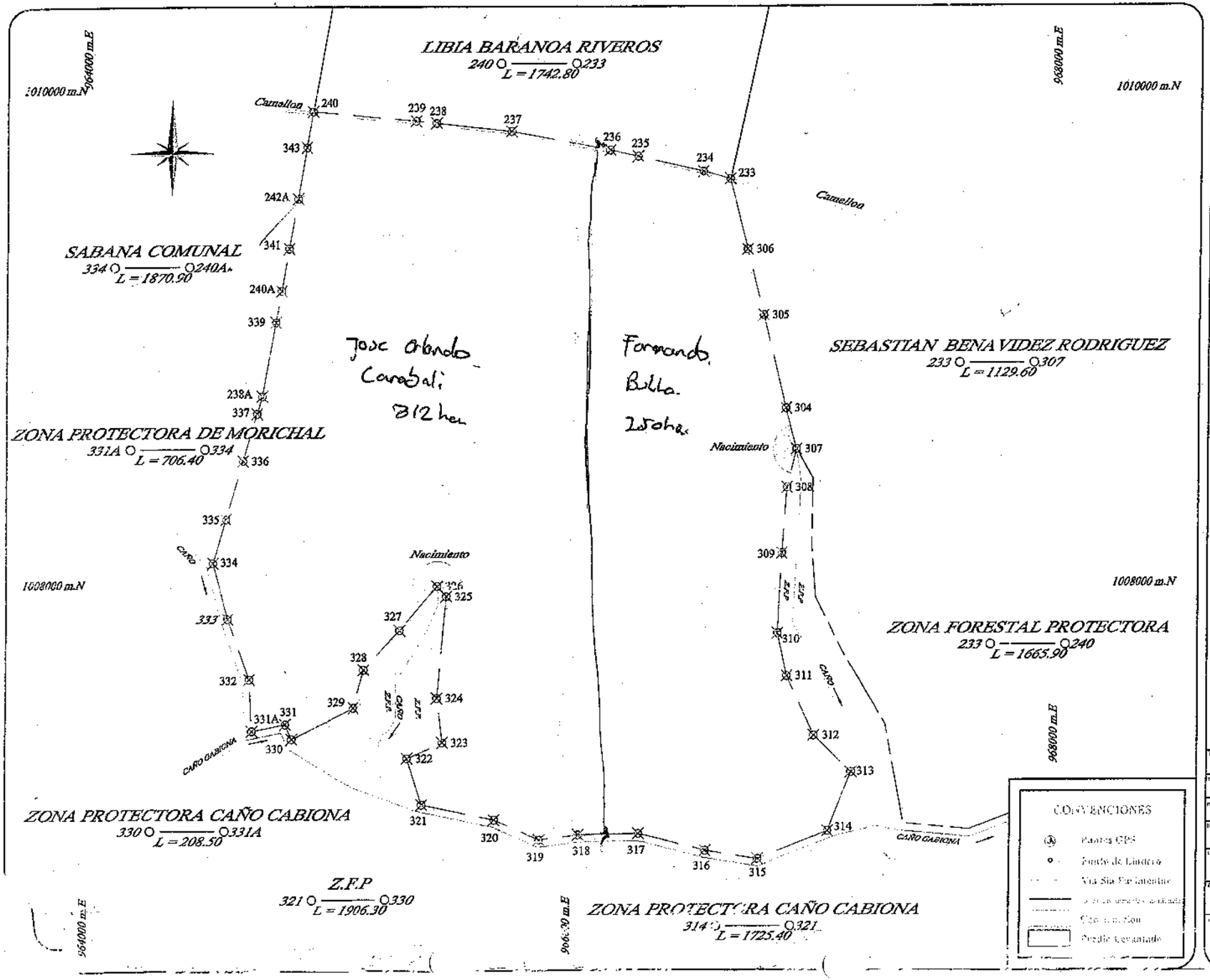
José Alberto Tamboli Calidad: C.C. 17.395.776 Cel: 313 384 3860	Calidad: C.C. _____ Cel: _____	Calidad: C.C. _____ Cel: _____	Calidad: C.C. _____ Cel: _____

XI. CONCEPTO FINAL

Según lo anterior el predio puede clasificarse como CUMPLE X o NO CUMPLE _____ para explotación agropecuaria en un proceso de reforma agraria (Justifique su concepto).

El predio es Apto para explotación Agropecuaria
Siempre con Selección adecuada de especies y
Variedades adaptables a condiciones agroclimaticas limitantes
Se recomienda manejo de suelos con:
— Mecanización Moderada
— Implementación Arenaje — Control de anegamiento
— Aplicación de enmiendas y Fertilización adecuada
— Preservación del entorno y Cuerpos de Agua

Nombre y firma del profesional
Profesión: Ing. Agronomo.
Tarjeta profesional 10,550

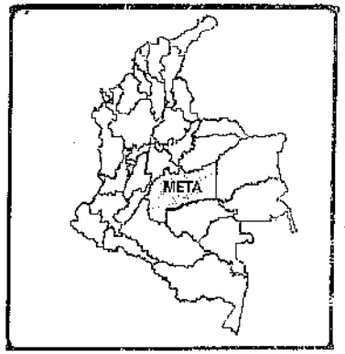


REPÚBLICA DE COLOMBIA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO "VILLA CAMILA"
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
DEPARTAMENTO DE META

ORIGEN ESTE
LONGITUD 71°04'39.0385" LATITUD 04°35'46.3215"
FALSO NORTE: 1.000.000 FALSO ESTE: 1.000.000
DATUM MAGNA SIRGAS

LOCALIZACIÓN GENERAL



Escala 1:20.000

1 Centímetro = 200 Metros

CUADRO DE COORDENADAS Y COLINDACIA

PUNTO	ESTE	NORTE	DISTANCIA	COLINDANTE
240	965911.892	1009933.711	1742.80	LIBIA BARANOA RIVEROS
233	966629.915	1008660.296	1129.60	SEBASTIAN BENAVIDEZ RODRIGUEZ
307	966913.236	1008566.797	1665.90	ZONA FORESTAL PROTECTORA
314	967052.239	1007119.935	1725.40	ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA
321	963384.385	1007129.356	1906.30	Z.F.P
330	964839.357	1007307.344	208.50	ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA
331A	964671.996	1007429.864	706.40	ZONA PROTECTORA DE MORICHAL
334	964503.951	1008110.571	1870.90	SABANA COMUNAL
240	965911.892	1009933.711		

CUADRO DE AREAS

COBERTURA	AREA (Ha)	AREA (%)
AREA TOTAL	565 Ha + 9645 m²	100%
NACIMIENTO	3 Ha + 8006 m²	1%
AREA A TITULAR	562 Ha + 1639 m²	99%

TIPO DE LEVANTAMIENTO: POSICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

TITULAR: WALDINA PINZON QUINTERO Y WILLIAM ORLANDO ORTIZ ROMERO

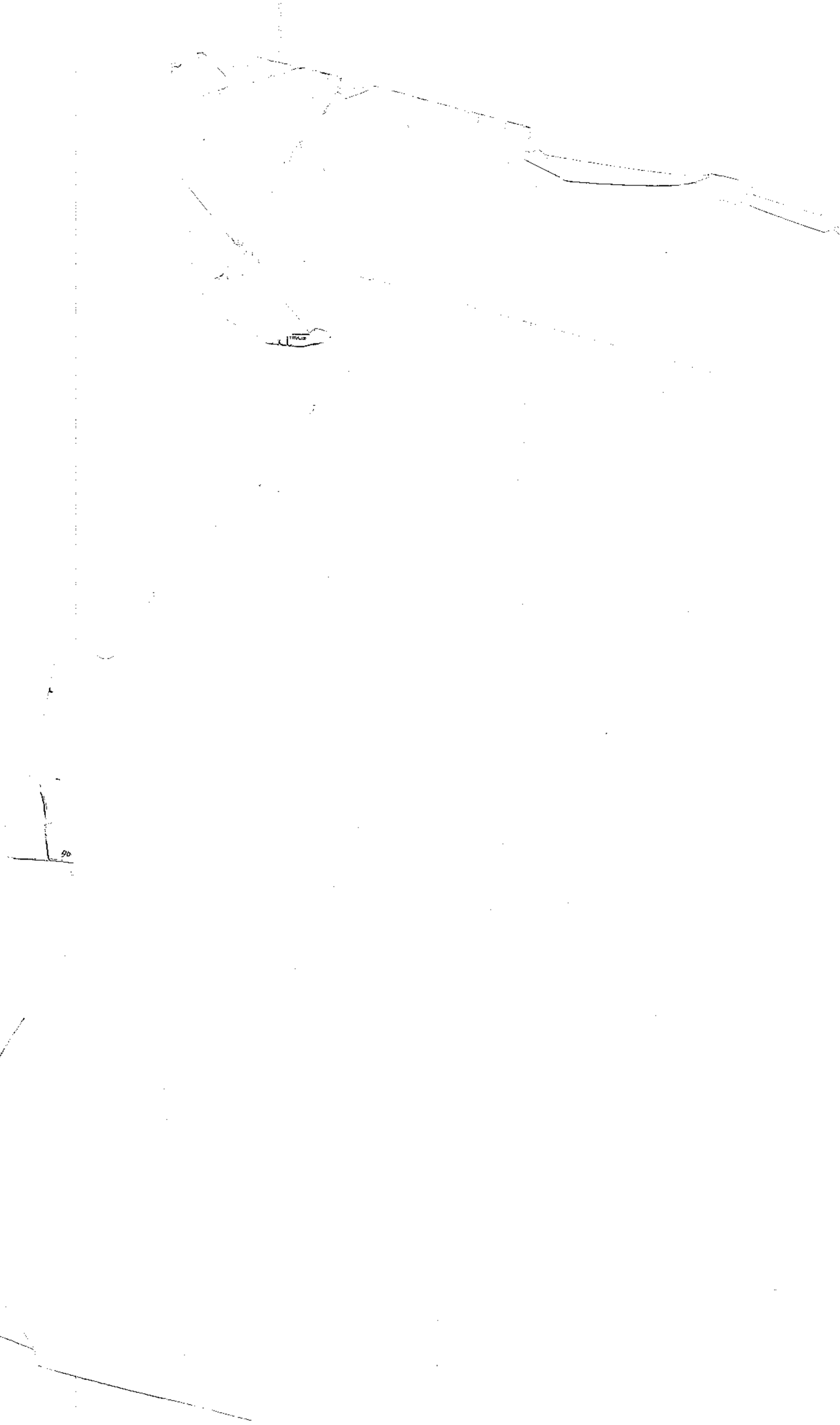
PREDIO: VILLA CAMILA

DEPARTAMENTO: META | MUNICIPIO: PUERTO GAITAN | VEREDA: EL PORVENIR

TOPOGRAFO: MIGUEL ANGEL SEPULVEDA | DIBUJO: JUAN CARLOS DUARTE BEJARANO

FECHA: ENERO DE 2016 | AREA TOTAL: 562 Has 1639 m²

OBSERVACIONES: - LOS LINDEROS LEVANTADOS FUERON IDENTIFICADOS Y RECONOCIDOS POR EL PROPIETARIO DEL PREDIO.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 17385776

CARAVALI RIVERA
APELLIDOS

JOSE ORLANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1949
CUNDAY
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

22-FEB-1979 PUERTO LOPEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMEDA BEATRIZ MERCEDES LOPEZ

A-5204500-89106861-M-0017385776-20030214 04092 03041A 01 116395156

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

20

RESOLUCION NUMERO 000020 DE 19

(29 JUL. 1998)

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución No. 041 expedida por la Junta Directiva el 24 de septiembre de 1996.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, INCORA,

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las que le confiere la Ley 160 de 1994, artículos 38, 65 y 66 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución Número 041 de 1996 se fijaron las Unidades Agrícolas Familiares por Zonas Relativamente Homogéneas, dentro de condiciones que son susceptibles de modificación en el tiempo.

Que varias comunidades campesinas plantearon requerimientos de modificaciones y adiciones, las cuales fueron sustentadas por las Gerencias Regionales así:

1.0 REGIONAL SANTANDER: Solicita estudiar la viabilidad de modificar el Artículo 23 de la citada resolución, a fin de ampliar la Unidad Agrícola Familiar, calculada para la ZONA RELATIVAMENTE HOMOGENEA No.1, que comprende los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Puerto Parra, parte del Municipio de Cimitarra y Bolívar, Simacota, Rionegro y Landázuri en las áreas con altura inferior a 1.000 mts sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De conformidad con las condiciones fisiográficas y socioeconómicas de la zona, centrando su atención en la parte del municipio de **Cimitarra** que atiende esta Regional, la UAF comprendida entre 18 y 33 hectáreas, no es suficiente para obtener índices de producción y productividad, que garanticen el sustento y desarrollo social y económico de una familia campesina y en consecuencia, proponen una UAF promedio de 59 hectáreas.

Estudiados los actuales cálculos efectuados por la Regional Santander para sugerir 59 has como UAF y teniendo en cuenta que se ajustan a los criterios metodológicos contenidos en la Resolución No. 17 de 1995, se considera viable este promedio y al aplicar el margen de tolerancia del 15% quedaría la Unidad Agrícola Familiar comprendida en un rango entre 50 y 68 hectáreas, para la Zona Relativamente Homogénea No. 1.

2.0 REGIONAL AMAZONIA.-

Cuando se expidió la resolución 41/96, no se determinó la UAF para el área sustraída de la Reserva Forestal constituída por la Ley 2a. de 1959 en el departamento de Guainía, 107.000 hectáreas según Acuerdo 11 de 1972 del INDERENA, localizadas en la margen derecha del río Guaviare y parte norte

del departamento del Guainía en consideración al predominio territorial de población indígena en este departamento. No obstante con posterioridad a la expedición de dicha norma, los colonos de la región solicitaron la titulación en el área citada, aduciendo la necesidad de un título de propiedad que les permita consolidar su asentamiento.

Efectuada la visita a la zona con el fin de calcular la Unidad Agrícola Familiar, UAF, se pudo comprobar la convivencia armónica entre las comunidades indígenas y campesinas. Los funcionarios designados realizaron el cálculo correspondiente, siguiendo las directrices contenidas en la Resolución 017 de 1995. Este estudio arrojó una UAF de 107 hectáreas lo cual da un rango de 91 a 123 hectáreas, después de aplicar el margen de tolerancia del 15%.

Igualmente, teniendo en cuenta la solicitud de las comunidades campesinas presentada en la Audiencia Pública celebrada en San José del Guaviare el 27 de septiembre de 1997, sobre el establecimiento de la Unidad Agrícola Familiar para la Zona Relativamente Homogénea, conocida en la región como "sabanas naturales", el INCORA conjuntamente con el SINCHI, Secretaría de Agricultura, CORPOICA, UMATA, PLANTE, Fondo Ganadero del Guaviare y CDA, elaboraron una propuesta para UAFs aplicables en el departamento del Guaviare, incluyendo la UAF para sabanas naturales comprendida en el rango de 212 a 287 hectáreas.

3.0 REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

En la Resolución 41 de 1996, Artículo 22, para la Zona Relativamente Homogénea No. 2 se omitió incluir el rango de la UAF, el que conforme a los parámetros señalados en la resolución no. 17/95 le corresponde una UAF con un rango de 33 a 44 has.

Conforme a lo expuesto, la Junta Directiva del INCORA,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el artículo 23 de la Resolución No. 041 de septiembre 23 de 1996, expedida por la Junta Directiva en el sentido de determinar como Unidad Agrícola Familiar para la Zona Relativamente Homogénea No.1 en el departamento de Santander las extensiones comprendidas en el rango de 50 a 68 hectáreas.

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el artículo 16 de la norma citada, para aclarar que el nombre correcto de la regional es, **Regional AMAZONIA** y no Guaviare como allí aparece.

ARTICULO TERCERO.- Incluir como Zonas Relativamente Homogéneas en la Regional Amazonía, las siguientes:

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGENEA No. 7

Comprende las "SABANAS NATURALES DEL GUAVIARE"

La Unidad Agrícola Familiar para esta zona comprende extensiones entre 212 a 287 hectáreas.

No._____

RESOLUCION NUMERO 000020 **DE 19** 29 JUL. 1998

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGENEA No. 8 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

Comprende el área sustraída de la Zona de Reserva Forestal constituida por la Ley 2a. de 1959, mediante Acuerdo 11 de 1972 del INDERENA, localizada en el municipio de Puerto Inírida, sobre la margen derecha del Río Guaviare.

La Unidad Agrícola familiar para este sector se determina entre 91 a 123 hectáreas.

ARTICULO CUARTO.- Modificar el artículo 22 de la Resolución No. 041de 1.995, en el sentido de establecer como Unidad Agrícola Familiar para la **Zona Relativamente Homogénea No. 2**, en la Regional Norte de Santander, las extensiones comprendidas en el rango de 33 a 44 hectáreas.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Santafé de Bogotá, a los 29 JUL. 1998

JORGE LUIS FERIS CHADID
Presidente de la Junta Directiva

JEANNETTE BENITEZ DE AREVALO
Secretaria

O.E.CBANDO/F.VANEGAS/M. B.Otero

Al responder cite este Nro.
20204100781711

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

14 de Agosto de 2020

Señor
JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA
joseorlandocaravalyrivera@gmail.com
jacporvenir1974@gmail.com

Asunto: Notificación electrónica de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 *"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES".*

Respetado Señor Carabalí Rivera,

Mediante la presente, respetuosamente le informo que la Agencia Nacional de Tierras –ANT- a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, expidió la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 "*POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* respecto del predio denominado "Villa Camila" el cual se encuentra ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como **"*El Porvenir*"**, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

En el mismo sentido, le manifestamos que la información de su dirección de correo electrónico, fue conocida por esta Subdirección mediante radicado ANT No. 20206200391202 del 24 de junio de 2020, suministrado por su apoderado, el Doctor Carlos Daniel Vargas Bacci, así: (joseorlandocaravalyrivera@gmail.com); dirección de correo electrónico, al cual se notifica el acto administrativo señalado en el asunto.

Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020[1], proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se dispuso en el artículo 4 lo siguiente:

> *"Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.*
>
> *En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.*

[1] *"Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".*

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se not comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legal proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacer... notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

De igual manera, es de señalar que, mediante Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento – FISO No. 97738, usted, autorizo a la ANT para recibir notificaciones por medios electrónicos indicando el correo jacporvenir1974@gmail.com. Por lo expuesto, se procede también con la notificación electrónica a este correo.

Conforme a lo anterior, mediante el presente se efectúa la notificación electrónica del siguiente acto administrativo:

Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 "*POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* respecto del predio denominado "Ojo de Agua" el cual se encuentra ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como **"*El Porvenir*"**, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Se remite anexo copia digital de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se informa que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Subdirección y en subsidio el de apelación ante el Director de Acceso a Tierras de la ANT dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 22 y 23 del Decreto 2363 de 2015.

Atentamente,

JULIA ELENA VENEGAS GÓMEZ
Subdirectora de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas

Anexos: Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020
Proyectó: Marcela Cuervo - Abogada Contratista convenio FAO - ANT.
Proyectó: Luisa Gómez - Abogada Contratista convenio FAO - ANT
Revisó: Jhonattan Acevedo – Abogado Contratista Subdirección

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E29689753-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)

Identificador de usuario: 416445

Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)

Destino: joseorlandocaravalyrivera@gmail.com

Fecha y hora de envío: 14 de Agosto de 2020 (16:52 GMT -05:00)

Fecha y hora de entrega: 14 de Agosto de 2020 (16:52 GMT -05:00)
Mensaje no entregado (adicionalmente, se recibió una notificación DSN con status SMTP '5.1.1', que según la organización IANA tiene el siguiente significado; 'Permanent Failure.Addressing Status.Bad destination mailbox address')

Asunto: RV: ENVIO URGENTE: Radicado de Salida 20204100781711 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)

Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

_____

De: Sherly Milena Sanchez Diaz <sherly.sanchez@agenciadetierras.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de agosto de 2020 4:50 p. m.
Para: info <info@agenciadetierras.gov.co>
Cc: Alvaro Alejandro Ruano Ruiz <alvaro.ruano@agenciadetierras.gov.co>; Jhonattan Antonio Acevedo Figueredo <jhonattan.acevedo@agenciadetierras.gov.co>
Asunto: ENVIO URGENTE: Radicado de Salida 20204100781711

Buenos días;

Se solicita en respectivo envió al correo joseorlandocaravalyrivera@gmail.com Y jacporvenir1974@gmail.com

Gracias

[logos-firma4]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
HTML	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
PDF	Content1-application-20204100781711-JOSE ORLANDO CARABALI.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
PDF	Content2-application-ANEXO RESOLUCION.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E29689754-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)
Identificador de usuario: 416445
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)
Destino: jacporvenir1974@gmail.com

Fecha y hora de envío: 14 de Agosto de 2020 (16:52 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 14 de Agosto de 2020 (16:52 GMT -05:00)

Asunto: RV: ENVIO URGENTE: Radicado de Salida 20204100781711 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)
Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la

opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

_____

De: Sherly Milena Sanchez Diaz <sherly.sanchez@agenciadetierras.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de agosto de 2020 4:50 p. m.
Para: info <info@agenciadetierras.gov.co>
Cc: Alvaro Alejandro Ruano Ruiz <alvaro.ruano@agenciadetierras.gov.co>; Jhonattan Antonio Acevedo Figueredo <jhonattan.acevedo@agenciadetierras.gov.co>
Asunto: ENVIO URGENTE: Radicado de Salida 20204100781711

Buenos días;

Se solicita en respectivo envió al correo joseorlandocaravalyrivera@gmail.com Y jacporvenir1974@gmail.com

Gracias

[logos-firma4]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
HTML	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
PDF	Content1-application-20204100781711-JOSE ORLANDO CARABALI.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
PDF	Content2-application-ANEXO RESOLUCION.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Al responder cite este Nro.
20204100796241

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

19 de Agosto de 2020

Señor
JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA
zalberto95@hotmail.com
carloseromerog@hotmail.com
secretariaasoyoposanjose@gmail.com

Asunto: Alcance a nuestro oficio de notificación radicado bajo No. 20204100781711 de fecha 14 de agosto de 2020.

Referencia: Notificación electrónica de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 *"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES".*

Respetado Señor Carabalí Rivera,

Respetuosamente nos permitimos dar alcance al oficio de notificación relacionado en el asunto - el cual se adjunta, en el sentido de informarle que el correo electrónico (joseorlandocaravalyrivera@gmail.com), suministrado por el Doctor Carlos Daniel Vargas Bacci, mediante radicado ANT No. 20206200391202 del 24 de junio de 2020, fue devuelto conforme certificado emitido por de la Empresa de Mensajería 4-72 (E29689753-S) – la cual se anexa.

Igualmente, conforme información suministrada por el personal de la Junta de Acción Comunal del Porvenir, la recepción del correo electrónico remitido a la dirección jacporvenir1974@gmail.com tampoco fue efectuada.

Así las cosas, de manera atenta nos permitimos informarle que la Agencia Nacional de Tierras –ANT, a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, expidió la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 "*POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* respecto del predio denominado "Villa Camila" el cual se encuentra ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como **"*El Porvenir*"**, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Por lo expuesto, le manifestamos que la información de los correos electrónicos (zalberto95@hotmail.com, carloseromerog@hotmail.com y secretariaasoyoposanjose@gmail.com), fueron conocidos por esta Subdirección mediante carta de fecha 12 de septiembre de 2018 obrante en el expediente a nombre de la señora María Concepción Poveda y suscrita por usted, direcciones de correo electrónico, al cual se notifica el acto administrativo señalado en el asunto.

Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020[1], proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se dispuso en el artículo 4 lo siguiente:

[1] *"Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

"Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca v... la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notifica... comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto e... trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Conforme a lo anterior, mediante el presente se efectúa la notificación electrónica del siguiente acto administrativo:

Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020 "*POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* respecto del predio denominado "Ojo de Agua" el cual se encuentra ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como **"*El Porvenir*"**, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Se remite anexo copia digital de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto de la Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020, se informa que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Subdirección y en subsidio el de apelación ante el Director de Acceso a Tierras de la ANT dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 22 y 23 del Decreto 2363 de 2015.

Atentamente,

JULIA ELENA VENEGAS GÓMEZ
Subdirectora de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas

Anexos: Radicado ANT 20204100781711 - Certificado de envío (E29689753-S) - Resolución No. 6915 del 13 de agosto de 2020
Proyectó: Marcela Cuervo - Abogada Contratista convenio FAO - ANT.
Proyectó: Luisa Gómez - Abogada Contratista convenio FAO - ANT
Revisó: Jhonattan Acevedo – Abogado Contratista Subdirección

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E29944238-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)
Identificador de usuario: 416445
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)
Destino: secretariaasoyoposanjose@gmail.com

Fecha y hora de envío: 20 de Agosto de 2020 (14:18 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 20 de Agosto de 2020 (14:18 GMT -05:00)

Asunto: RV: Radicado salida 20204100796241 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)
Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la

opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
	Content1-application-COMUNICACIÓN 20204100796241. JOSE ORLANDO CARAVALÍ.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content2-application-PRUEBA DE ENVIO COMUNICACION 20204100781711 - JOSE CARABALI.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content3-application-6915 JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 20 de Agosto de 2020

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E29944257-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)
Identificador de usuario: 416445
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)
Destino: zalberto95@hotmail.com

Fecha y hora de envío: 20 de Agosto de 2020 (14:18 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 20 de Agosto de 2020 (14:18 GMT -05:00)

Asunto: RV: Radicado salida 20204100796241 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)
Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la

opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
	Content1-application-COMUNICACIÓN 20204100796241. JOSE ORLANDO CARAVALÍ.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content2-application-PRUEBA DE ENVIO COMUNICACION 20204100781711 - JOSE CARABALI.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content3-application-6915 JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 20 de Agosto de 2020

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E29944258-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)
Identificador de usuario: 416445
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)
Destino: carloseromerog@hotmail.com

Fecha y hora de envío: 20 de Agosto de 2020 (14:18 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 20 de Agosto de 2020 (14:18 GMT -05:00)

Asunto: RV: Radicado salida 20204100796241 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)
Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
	Content1-application-COMUNICACIÓN 20204100796241. JOSE ORLANDO CARAVALÍ.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content2-application-PRUEBA DE ENVIO COMUNICACION 20204100781711 - JOSE CARABALI.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content3-application-6915 JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 20 de Agosto de 2020

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 5 7 7 6 **DE** 0 6 SEP 2018 **DE 2018**

"Por la cual se abre actuación administrativa de asignación de derechos en el marco del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado "El Porvenir", ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de unificación SU -426 de 2016 de la Corte Constitucional y se ordenan otras actuaciones"

LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En ejercicio de las funciones y facultades conferidas por medio del Decreto 2363 de 2015, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994; los artículos 58, 60, 65 y concordantes del Decreto 902 de 2017, reglamentado mediante Resolución 740 de 2017 y la Resolución 3234 de 2018, el Decreto 1071 de 2015, la Resolución No. 1384 del 5 de octubre de 2017 y de acuerdo con las siguientes

1. CONSIDERACIONES

Que los Artículo 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen el deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, como también dar prioridad al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales encaminadas a la producción de alimentos.

Que el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 establece que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras.

1.1. Competencia

Que mediante el Decreto 1292 del 21 de mayo del 2003, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria–Incora-, y mediante el Decreto Ley 1300 del 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, que asumió las funciones misionales que en materia de dotación de tierras venía cumpliendo el Incora.

Que mediante el Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015, se dispuso la supresión y liquidación del Incoder, en desarrollo de la facultad prevista en el literal a) del artículo 107 de la Ley 1753 de 2015.

Que igualmente, a través del Decreto No. 2363 de 2015 se dispuso la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, como máxima autoridad de tierras de la Nación, entregándole, entre otras, la función de hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar.

Que la ANT tiene por objeto la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural para gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Que el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, todas las referencias normativas hechas al Incora o al

Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la ANT. Además, el parágrafo establece que las referencias normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la ANT.

Que en desarrollo de las facultades extraordinarias para la Paz el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de Tierras, específicamente, el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras.

Que a través del Decreto Ley 902 del 29 de Mayo de 2017 se ratificó lo dispuesto en el Decreto 2363 de 2015 y se ordenó a la ANT la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y ejecución del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierra aprovechando los barridos prediales para identificar y solucionar tales situaciones.

Que conforme al Decreto Ley 902 de 2017 y 2363 de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá focalizar las zonas para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, aunado a la obligación de ejecutar dicha política en el marco del barrido predial realizado con ocasión de la construcción del catastro multipropósito.

Que mediante Resolución 740 de 2017, modificada por la resolución No. 3234 de 2018 se expidió el reglamento operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, que determina los instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para desarrollar las funciones asignadas a la ANT en dichos asuntos.

Que el citado Decreto No. 2363 de 2015, en el artículo 23, establece las funciones de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, así:

> *"1. (...)*
>
> *3. Analizar y proponer las rutas jurídicas para dotar tierras a los potenciales beneficiarios de identificadas en el proceso de barrido predial.*
>
> *4. (...)*
>
> *5. Resolver en primera instancia, los procedimientos de acceso a tierras que se en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.*
>
> *6. (...)"*

Que, en virtud de lo anterior, el Director General de la ANT profirió la **Resolución No. 1384 del 5 de octubre de 2017,** *"Por medio de la cual se imparten orientaciones para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios en los cuales se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito y se dictan otras disposiciones".*

Que, en tal sentido, y de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución antes mencionada, se ordenó a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión lo siguiente:

> *"En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 24 del Decreto-Ley 2363/2015, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, ordénese a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión remitir a la Dirección de Acceso a Tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes ocho municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (Guajira),* ***Puerto Gaitán (Meta),*** *Lebrija (Santander), Puerto Leguizamo (Putumayo), Santa Marta (Magdalena), San Carlos (Antioquia) y Ovejas (Sucre). La Dirección de Acceso a Tierras distribuirá los expedientes remitidos entre sus Subdirecciones o, entre las Unidades de Gestión Territorial por delegación del Director General, según corresponda a la naturaleza de cada caso".* (Negrillas fuera del original)

Que, en atención a lo anterior, la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, a través de memorando con radicado No. **20184200005571** de fecha 15 de enero de 2018, ordenó entregar a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas el expediente administrativo del predio denominado "*El Porvenir*", ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, para que dentro de sus competencias legales adelante las actuaciones administrativas que correspondan.

Que mediante Resolución No. 4375 del 06 de agosto de 2018 "*Por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) y se dictan otras disposiciones*", la Dirección General de la ANT dispuso la aprobación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del Municipio de Puerto Gaitán que contiene los aspectos enumerados en el artículo 44 del Decreto Ley 902 de 2017.

Que el artículo 40 del Decreto 902 de 2017 indica que las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los términos del artículo 45 del referido Decreto.

Que, en consecuencia, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para conocer del presente trámite de asignación de derechos disponiendo de la emisión del acto definido en el artículo 68 del Decreto 902 de 2017 cuyo fundamento de apertura se sustenta conforme se expone a continuación.

1.2. Identificación del predio

Que durante los años 1992 a 1996 el extinto INCORA, adjudicó veintisiete (27) predios ubicados en el predio de mayor extensión denominado "*El Porvenir*", ubicado en inmediaciones del Centro Poblado *"El Porvenir"*, perteneciente al municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

Que la sumatoria identificada del área titulada se estima aproximadamente en **25958 Ha + 8105 m2**, discriminados como se muestra a continuación, y, donde se determinan las adjudicaciones de los veintisiete (27) predios ubicados en el predio de mayor extensión denominado "*El Porvenir*" así:

ID	PREDIO	FMI	AREA	DOC.	FECHA
1	El Caracolí	234-8023	998,5000	Res. 051	16/01/1992
2	El Morichal	234-8012	998,1500	Res. 027	15/01/1992
3	Cumare	234-8014	948,1000	Res. 029	15/01/1992
4	El Espejo	234-8010	995,6000	Res. 025	15/01/1992
5	Tafurito	234-13194	994,0500	Res. 046	16/01/1992
6	Campo Hermoso	234-8016	999,1000	Res. 031	15/01/1992
7	Mata de Monte	234-8024	994,1000	Res. 052	16/01/1992
8	Las Corocoras	234-8018	994,9000	Res. 041	16/01/1992
9	La Sabana	234-8017	999,7580	Res. 040	16/01/1992
10	La Palmita	234-13195	999,9768	Res. 047	16/01/1992
11	Lagunazo	234-13202	697,9757	Res. 891	23/09/1996
12	El Caminito	234-13196	994,5000	Res. 048	16/01/1992
13	San José	234-8009	977,4000	Res. 024	15/01/1992
14	Casuarito	234-8020	1000,0000	Res. 044	16/01/1992
15	Chicharra	234-13203	699,9500	Res. 973	25/09/1996
16	Mi llanura	234-8007	979,5000	Res. 022	15/01/1992
17	Pajonal	234-8008	984,2000	Res. 023	15/01/1992
18	El Rincón	234-8011	883,8500	Res. 026	15/01/1992
19	La Gran laguna	234-8025	1000,0000	Res. 053	16/01/1992
20	Matajey	234-13193	868,1000	Res. 049	16/01/1992
21	Cascabeles	234-8022	979,6000	Res. 043	16/01/1992
22	Palo Alto	234-8019	998,7500	Res. 042	16/01/1992
23	La Perla	234-13197	985,3000	Res. 050	16/01/1992
24	La Honda	234-8013	985,8500	Res. 028	15/01/1992
25	La Laguna	234-8006	972,2000	Res. 021	15/01/1992

26	El Estéreo	234-8015	991,1000	Res. 045	16/01/1992
27	El Pedregal	234-8021	991,1000	Res. 030	15/01/1992

Que en el año 2007, sobre los veintisiete (27) predios adjudicados se realizó un englobe en cinco (5) grandes predios denominados "*El Rincón*", "*Las Corocoras*", "*Campo Hermoso*", "*El Pedregal*" y "*Mi Llanura*" cuya información se especifica a continuación:

PREDIO	FMI	CÉDULA CATASTRAL	ESCRITURA PÚBLICA	AREA (Ha)
El Rincón	234-15742	00-01-0001-0742-000	EP 2980 de 28/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4.730 Ha 3.000 m²
Las Corocoras	234-15743	00-01-0001-0745-000	EP 2981 de 28/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	5.681 Ha 2.105 m²
Campo Hermoso	234-15744	00-01-0001-0087-000	EP 2982 de 28/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	5.969 Ha 5.000 m²
El Pedregal	234-15745	00-01-0001-0052-000	EP 2983 de 28/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4.918 Ha 3.000 m²
Mi Llanura	234-15741	00-01-0001-0756-000	EP 2979 de 28/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4.641 Ha 500 m²
TOTAL AREA				25940 Ha 3605 m²

Que mediante Resolución Incoder No. 6423 del 30 de julio de 2014, el Subgerente de Tierras Rurales del extinto Incoder, dispuso la revocatoria en todas sus partes de los actos de adjudicación de los fundos antes relacionados, y los retiró del ordenamiento jurídico, de suerte que *"(...)dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno"*.

Que el artículo 6 de la Resolución que decidió el procedimiento de revocatoria directa en referencia, indica que revocados los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles descritos, estos pasan al dominio de la Nación en calidad de baldíos.

1.3 Consideraciones preliminares sobre la situación jurídica del inmueble.

La caracterización tradicional de los derechos de propiedad inmobiliaria como un tipo de derecho real, supone que estos representan facultades que ejerce un determinado sujeto de manera inmediata sobre un bien del que afirma es propietario: "*El Derecho real es el que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa*"[1] . Pese a ello, los derechos de propiedad no suponen, en rigor, relaciones exclusivamente entre un sujeto y el objeto apropiado: las relaciones reguladas en los derechos de propiedad, suponen otros sujetos, que tiene el deber correlativo de acatar las prerrogativas propias de quienes fungen como dueños: la pertenencia como relación jurídica obliga en tal orden, la regulación de relaciones entre diversos sujetos que reconocen facultades para que se ejecuten acciones que involucran los objetos apropiados. Los obligados fungen como parte esencial dentro de la definición y caracterización del dominio, pese a que por razones metodológicas si acostumbre a hacer abstracción de ellos[2].

Los sistemas derechos de propiedad inmobiliaria han recurrido históricamente a la aplicación de dos tipos de criterios para definir el origen de la propiedad: de un lado, apelando a la figura del denominado título, confeccionado con cierto tipo de solemnidades, y en cuya virtud se establece una relación entre un conjunto de personas: un sujeto denominado propietario ejerce de manera exclusiva facultades sobre un determinado objeto, y de otro lado, un conjunto de personas que aceptan, o se obligan a hacerlo. El fundamento

---

[1] BAUDRY-LACANTINERIE Gabriel. Précis de droit civil Tomo II. Pag 33. Tomado de GARCIA MAYNEZ Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrua. Página 206.

[2] *"Nadie tendrá la ocurrencia de inscribir dicha obligación en el pasivo de su patrimonio: el valor positivo que figura en el activo del titular del derecho real, no corresponde un valor negativo en el patrimonio de otra persona . Por esto es que en la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados" Ibidem. La tesis de abstracción de los sujetos pasivos también es criticada al señalar que es un buen recurso para explicar el ejercicio del derecho de propiedad sin necesidad de recurrir a la intermediación de otros. Sin embargo, se califica como falsa pues: "Entre una persona y una cosa no puede existir un vínculo jurídico; semejante relación carecería de sentido. Por definición, todo derecho es un vínculo entre personas" PLANIOL Marcelo y RIPERT Jorge. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés Tomo II. Lo Bienes. Traducción Española DÍAZ CRUZ Mario. Cultural, S.A. Habana 1940.*

del dominio reside, en tal orden, en la declaración ejecutada dentro del respectivo título. En segundo lugar, los sistemas acuden al reconocimiento de cierto tipo de acciones como

propias para el reconocimiento de los derechos de propiedad, y que generalmente se relacionan con el efecto de aprovechar económicamente el objeto que apropian. La apropiación es caracterizada como el efecto inmediato de la ejecución de determinadas acciones que fueron fijadas como el supuesto de hecho para la configuración de la propiedad.

El régimen colombiano de derechos de propiedad inmobiliaria se ha estructurado a través de la combinación de los dos criterios referidos: de un lado impone la necesidad de contar con títulos de propiedad y de su respectiva inscripción en los registros de propiedad, como condición necesaria para afirmar que se es propietario, pero a su vez prevé como supuestos de hecho el aprovechamiento económico, a través de las figuras de la posesión y ocupación con importantes efectos relacionados con la institución del dominio.[3]

En tal orden, y dada la hoy indiscutible condición de terrenos baldíos de los predios sobre los que se dirige las solicitudes de adjudicación, se analizarán en las líneas siguientes el régimen de apropiación y configuración de los derechos de propiedad sobre tal tipo de terrenos. Para tales efectos se analizará: (i) el denominado régimen de la ocupación previa tal como fue estructurado en la Ley 160 de 1994, (ii) se establecerán las afectaciones de dicha institución con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, y (iii) finalmente, definir según dicho régimen la procedencia de las solicitudes de adjudicación formuladas.

1.3.1 Régimen de la ocupación previa.

Con un claro antecedente colonial, para el acceso a las tierras públicas se postuló, como regla general, que los particulares interesados en adquirir derechos de propiedad sobre tierras baldías debían por su iniciativa ocuparlas, y ejercer sobre ellas actividades de aprovechamiento económico.

Dentro de la Ley 160 de 1994 el régimen de baldíos conservó sus rasgos fundamentales a saber: señaló que la propiedad de las tierras baldías sólo podía adquirirse en virtud del título expedido por el Estado (artículo 65); condicionó la titulación al ejercicio de la ocupación de los particulares en extensiones no superiores a la Unidad Agrícola Familiar, en adelante UAF, por un término no inferior a los 5 años, y a la explotación económica en una proporción no inferior a las 2/3 partes del área solicitada (incisos 1 y 2 del artículo 69 de la Ley 160 de 1994)[4]. Estas exigencias, en general, son analizadas bajo la denominación de condiciones objetivas, en tanto, definen atributos que deben revestir los terrenos baldíos para que puedan ser objeto de la adjudicación.

A su vez dentro de la Ley 160 se definieron condiciones subjetivas, que son los atributos personales que deben reunir los postulantes para la adjudicación. En ellas se afirma, como regla general, que las personas solicitantes no deben ostentar derechos de propiedad sobre otros predios rurales, no deben tener la condición de adjudicatarios dentro de los 15 años anteriores, no deben poseer patrimonios superiores a los 1000 salarios mínimos legales, entre otras, (capítulo XII).

Analizado así la procedencia de una adjudicación de baldíos exige la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos.

1.3.1.1 Excepciones a la ocupación previa como modo de acceder a la propiedad de tierras baldías en el régimen de la Ley 160 de 1994.

---

[3] La ocupación es calificada como un hecho que da lugar a determinadas situaciones jurídicas. Tratándose de bienes inmuebles está solo puede configurarse cuando se trata de terrenos baldíos, y siempre que esta hubiere iniciado antes del 29 de mayo de 2017, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017. La ocupación se materializa mediante la apropiación material de un área a través de hechos de aprovechamiento económico incluidas las efectuadas por mujeres bajo la denominación de economía del cuidado. La posesión es un fenómeno jurídico que se concreta a través del hecho de ejercer el aprovechamiento económico de un predio de propiedad privada. A diferencia de la ocupación, esta no se realiza sobre terrenos baldíos, y no exige que las acciones se realicen de manera directa, es decir, que se puede ser poseedor a través de un tercero. La posesión puede ser regular si fue adquirida con justo título (venta, permuta, donación, sentencia) y de buena fe, cuando hay conciencia que el acto jurídico no está viciado, o que no se cometió algún fraude (Artículo 764 del Código Civil) La posesión es irregular cuando se carece o de justo título o de buena fe. (Artículo 764 del Código Civil)..

[4] Los referidos incisos fueron derogados por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017, no obstante, como se mostrará, dichas reglas pueden ser aplicadas en virtud del régimen de transición previsto por el mismo decreto.

Como se indicó, la figura de la ocupación previa se postuló como la regla general para definir el acceso a los derechos de propiedad sobre tierras baldías, empero, este prevé múltiples excepciones que identifican ciertos atributos de algunos terrenos baldíos que los hacen inadjudicables, o en otros eventos, no adjudicables por la vía de la ocupación previa. Dentro de tales excepciones podemos identificar la figura de la reserva de baldíos, que implica que el Estado sustrae del régimen de la ocupación determinadas áreas de baldíos.

Las reservas de baldíos, a su vez, contemplan múltiples hipótesis: son baldíos reservados los predios de propiedad privada sobre los que se aplica la extinción administrativa del dominio (artículo 54 ley 160 de 1994) y deben ser destinados a procesos de adjudicación especiales; son baldíos reservados los delimitados conforme a las reglas del artículo 75 y 76 de la Ley 160, para su destinación a actividades de utilidad pública e interés social, o para el establecimiento de regímenes especiales de ocupación, aprovechamiento y adjudicación; son baldíos reservados las islas de uno y otro mar que no hayan sido apropiados por particulares en virtud de título traslaticio del Estado; son baldíos reservados los delimitados para la constitución de títulos étnicos expedidos en vigencia de la Ley 135 de 1961; son baldíos reservados los que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados (artículo 67 ibídem modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014).

La multiplicidad de reservas que se presenta en el régimen colombiano comparte una cosa en común: en todas ellas no se aplican las reglas generales de apropiación y titulación de baldíos. Visto así, la constitución o identificación de reservas no son otra cosa que la abstracción de terrenos del conjunto de terrenos baldíos sobre los que los particulares por su iniciativa pueden iniciar ejercicios de ocupación con la pretensión de obtener su titulación.

La constitución o identificación de una reserva de baldíos no conduce para en los casos a afirmar que sobre los terrenos delimitados con dicha calidad no se puede adelantar actividades de aprovechamiento. Es decir, la reserva no se adscribe como propiedad definitoria, la de imputar su imposibilidad de adelantar actividades de aprovechamiento, pues su rasgo característico es la abstracción del régimen general de titulación. Así por ejemplo, los baldíos reservados producto de la aplicación de la extinción administrativa, los de la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los reservados según el artículo 76 ibídem se deben destinar a procesos de adjudicación conforme al régimen especial que expida el gobierno nacional (artículo 76 ibídem modificado por el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo).

1.3.1.2. Ocupaciones indebidas en el marco de la Ley 160 de 1994.

Como se ha señalado en varias ocasiones dentro del presente documento, el régimen que planteaba la Ley 160 de 1994 permitía que los particulares por su iniciativa ejercieran la ocupación sobre terrenos baldíos como una condición para solicitar su titulación. También se mostró que dicha regla presentaba multiplicidad de excepciones en las que se postulaba formas distintas a la ocupación espontánea como supuestos de hecho para lograr la adjudicación.

Con ello, es claro que, en el régimen de ocupación previsto por la Ley 160 de 1994, no todas las ocupaciones de baldíos estaban permitidas. Dos aspectos resultaban cruciales para definir si las ocupaciones podían ser consideradas como regulares, es decir, aquellas que dan lugar a la titulación, o, las indebidas y por tanto, de aquellas que debían corregirse a través de la recuperación del inmueble.

El primero tiene que ver con las condiciones personales del sujeto que ejecuta la ocupación, pues como se mostró la titulación está restringida a personas que reúnan delimitadas condiciones económicas y patrimoniales. Este aspecto, en general, configura las causales subjetivas de la ocupación indebida, pues, orbitan frente a las condiciones que reúnen los sujetos que ejercer la ocupación.

El segundo aspecto se relaciona con la calidad del inmueble, pues el baldío sobre el que se ejerce la ocupación debe ser de aquellos adjudicables y que se encuentren dentro del conjunto de baldíos que pueden ser apropiados mediante ocupación. Este tipo de condiciones son denominadas como causales objetivas, en tanto, gravitan sobre las condiciones que debe tener el inmueble objeto de la ocupación.

En ambos casos, es decir, la ocupación ejercida por una persona que no cumpla con las condiciones de sujeto de reforma agraria, o bien la ocupación adelantada por personas, independiente de sus condiciones personales, sobre terreno no adjudicable, o excluidos del

régimen de ocupación, se califican como indebidas y su tratamiento debe ser, en consecuencia, la recuperación de baldíos.

1.3.1.3. La ocupación previa con posterioridad al Decreto Ley 902 de 2017.

Con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 se incorporaron algunas modificaciones al régimen de tierras previsto por la Ley 160 de 1994, ajustando, entre otras, los programas de acceso a la propiedad, con la pretensión de garantizar que su ejecución se realice con mejores criterios de equidad, privilegiando a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad, y otorgando prerrogativas a sujetos que históricamente han sido marginados del acceso a la propiedad rural.

Para tales efectos, se dispuso en primera medida unificar los programas de acceso a tierras dada la alta dispersión con el que se estructuraron al interior de la Ley 160 de 1994.[5] Frente a dicho panorama heterogéneo, el Decreto Ley 902 buscó establecer reglas más claras sobre la determinación de los sujetos aspirantes, el procedimiento para su adjudicación y las limitaciones al ejercicio de la propiedad derivadas del acto de titulación.

Dar mayor claridad sobre dichos aspectos no solo facilita la ejecución institucional de tales programas, sino que, además, asegura que la oferta institucional sea conocida con mayor precisión.

Aparejado a ello, se estructuró un sistema de adjudicación con mayor equidad en su operación. Esto debido a que la expedición de la mayoría de los estatutos agrarios partió de la identificación de dos fenómenos relacionados con la tenencia de la tierra. De un lado, la constitución de propiedades de grandes extensiones en cabeza de pocos titulares y la alta presencia de minifundios y de sujetos sin acceso a tierras. Pese a ello, se mantuvo como una figura válida para la apropiación y titulación de los terrenos baldíos a la ocupación por iniciativa de los mismos particulares. La figura de la ocupación previa como prerrogativa para lograr la titulación de baldíos surgió en un contexto histórico abiertamente distinto al que hoy vivimos. En principio, la titulación de baldíos se orientaba a un claro propósito de consolidar la soberanía nacional del territorio, por ello, el Estado no sólo permitía, sino que promovía que los particulares ocuparan vastas zonas del país, para después efectuar su titulación. Dichas condiciones son hoy distintas, por cuanto, los objetivos que deben condicionar los programas de dotación de tierras deben ser también distintos. Ello explica porque el decreto establece tres tipos de sujetos: de un lado los que su acceso a tierras debe realizarse a título completamente oneroso, porque sus condiciones de vulnerabilidad económica representa mayores dificultades; los sujetos que reciben adjudicaciones a títulos parcialmente gratuito, en tanto, se ubican en segmentos cuyas condiciones de vulnerabilidad económica les permite asumir proporcionalmente a su patrimonio el pago de ciertas sumas de dinero que deben destinarse a nuevos programas de adjudicación y los que solo pueden acceder a los programas de formalización de la propiedad.

La derogatoria de la ocupación previa como modo para acceder a los terrenos baldíos, y la unificación de las condiciones de selección para la adjudicación de predios o subsidios implica concebir un proceso de selección objetiva que permita identificar a los potenciales beneficiarios merecedores de los programas de acceso a tierra.

---

[5] Es posible identificar dentro de la Ley 160 de 1994, por lo menos tres tipos de programas inspirados en los mismos propósitos de dotar de tierras a los campesinos y superar los fenómenos de concentración y fraccionamiento de la propiedad (ordinal 2do artículo 1ero Ibidem). El primero de ellos se consignó en el capítulo IV, bajo la denominación de Subsidio y Crédito y consistía en la asignación de un aporte estatal, por regla general no reembolsable, que se asignaba al campesino para que adelantara el proceso de compra del predio y pagará con ello hasta el 70% de su valor. Este programa fue objeto de cuatro modificaciones dispuestas por los planes de desarrollo expedidos entre 2003 y 2015. El segundo programa es conocido bajo la denominación de adjudicación de predios del Fondo Nacional Agrario, en adelante FNA, o adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, en el que el Incora-Incoder-ANT adquirían predios, los incorporan a su patrimonio y posteriormente los adjudicaban. El tercer programa es el de titulación de baldíos en el que se identificaban sujetos que desarrollan ocupaciones con una duración igual o mayor cinco años y una explotación de por lo menos 2/3 partes del predio procediendo a realizar su titulación. Ciertamente es distinto asignar un subsidio para la compra de tierras que adjudicar un inmueble, incluso la adjudicación difiere dependiendo de su naturaleza. Empero los tres procesos guardaban algunas similitudes en tanto, estaban fundados en los mismos derroteros. Pese a ello las diferencias resultaban radicales, para el FNA se exigía que los aspirantes no tuvieran patrimonios superiores a 200 salarios mínimos, para subsidio no mayores a 200 y para baldíos hasta 1000. Los procedimientos para la determinación de sus beneficiarios también resultaban bastante diferentes. Así mismo, efectuadas las adjudicaciones lo regímenes de limitaciones a la propiedad también resultaban bastante distintos: para FNA se prohibía su enajenación por un término de 15 años sancionable con caducidad administrativa, para el subsidio la prohibición era de 12 años sancionable con la condición resolutoria, y para baldíos no había prohibición de enajenación, pero sí la de constitución de gravámenes.

Para tales efectos, se dispuso la creación del registro de sujetos de ordenamiento social de la propiedad, en adelante RESO, estructurado principalmente para el cumplimiento de dos objetivos: de una parte, a relacionar y ordenar a todos los sujetos que son beneficiarios de las políticas de ordenamiento social de la propiedad, y de otro, a servir como un insumo para el direccionamiento de la política de ordenamiento social.

El primero de tales objetivos resulta útil, especialmente, para resolver los distintos programas de acceso a tierras: las personas interesadas en participar realizan su inscripción a través de un formulario diseñado para tales propósitos denominado FISO (Formulario de Ingreso de Sujetos de Ordenamiento). Su diligenciamiento equivale a la petición formal de ingreso al registro, con lo cual, la ANT valora si dicha persona cumple con los requisitos de elegibilidad. A su vez, se valoran las condiciones de vulnerabilidad económica, capacidad para la ejecución del proyecto productivo, y de otras situaciones de vulnerabilidad a través de la asignación de puntaje, determinantes en los procesos de selección objetiva.

La selección objetiva, por su parte, señala que los programas de acceso operan por demanda, y, dado que los recursos asignados no son suficientes para atender a la totalidad de aspirantes, se fijan reglas objetivas que determinan los órdenes en los que deben priorizarse la asignación de estos recursos. En dichos procesos se valoran las condiciones de vulnerabilidad económica, otorgando puntuaciones más altas a quienes tienen menores patrimonios, acciones afirmativas para corregir situaciones de discriminación negativa, como dar puntos a personas víctimas o a las mujeres rurales. También se asignan puntos a quienes llevan periodos de qué más largos dentro de los registros, otorgando un (1) punto por cada mes de permanencia en el registro, por dar algunos ejemplos.

Frente a la condición de la mujer rural, el RESO prevé varias medidas dirigidas a establecer situaciones en las que pueden obtener mayores puntuaciones y por ende en mejor posición para ser beneficiarias de los programas de dotación de tierras: se establece en la valoración de la experiencia que las actividades de la economía de cuidado deben ser tenidas también como generadoras de puntos por los lapsos en los que se hayan adelantado, en las mismas condiciones en las que se puntúan las otras actividades económicas. Así mismo, al establecer incentivos para que los beneficiarios se asocian, contempla que las mujeres que acrediten pertenecer a una asociación campesina reciben el doble de puntos, y el triple si ocupan cargos directivos dentro de la respectiva organización. Dicho tratamiento fue previsto también para todas las mujeres que pertenezcan a organizaciones de mujeres cuyo objetivo sea el de sensibilizar y empoderar las pretensiones femeninas de acceso a la propiedad[6]

1.4 Régimen de transición del Decreto Ley 902 de 2017.

Como se indicó, el tránsito normativo dispuesto con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 implicó múltiples transformaciones a los procesos de dotación de tierras que misionalmente ejecuta la ANT. Resulta especialmente problemático determinar las condiciones en las que el tránsito afectó los procedimientos de acceso a tierras que se hubieran encontrado en curso al momento de la expedición del Decreto Ley, así como los procedimientos que se deben adelantar actualmente, pero, cuyos supuestos de hecho hacen referencia a la Ley 160 de 1994 previas las modificaciones del 902.

La eficacia de las normas en el tiempo supone considerar a la norma como un precepto con aptitud para regular situaciones jurídicas en determinados lapsos, por cuanto, es necesario establecer claramente el momento en el que comienza a producir efectos y aquel en el que concluyen. En tal sentido, es posible considerar tres situaciones posibles: (i) la norma regula sólo situaciones posteriores a su existencia, sin que pueda admitirse su aplicación a hechos anteriores (irretroactividad de la ley) (ii) la norma regula incluso hechos sucedidos con anterioridad a su existencia (retroactividad de la Ley) y (iii) la norma pese a haber dejado de existir, continua regulando situaciones que fueron acaecidas dentro del periodo de su subsistencia, pero su aplicación se examina en un momento en el que ya no tiene efectos (ultraactividad de la Ley).

De los fenómenos de aplicación de la ley en el tiempo, la irretroactividad se formula como la regla general, justificada en la imposibilidad de que a sus destinatarios le es imposible sujetarse al cumplimiento de normas que no existen, de modo que se asegure que las situaciones consumadas bajo el imperio de una ley no puedan ser modificadas o alteradas por posteriores preceptos. Pese a ello, la retroactividad aplica para aquellos casos en los que expresamente se señale que identificándose una norma posterior como más favorable

---

[6] Vid. Resolución 740 de 2017 del Director General de la ANT.

esta puede primar sobre la norma vigente para el momento en el que se despliega la conducta.

Paralela a esta excepción, la ultractividad desarrolla la aplicación de normas anteriores ya derogadas, que resultan de mayor favorabilidad que las actuales, siempre que pueda mostrarse que los hechos iniciaron en su vigencia.

Dichos fenómenos son distinguibles en el tránsito normativo examinado: el Decreto Ley 902 postula que rige a partir de su expedición, derogando las disposiciones que le resulten contrarias (artículo 82). Con ello, por ejemplo, la adjudicación mediante cualquier proceso de selección objetiva que se hubiese establecido dentro de la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias quedan plenamente sustituidos por las reglas del RESO. De la misma manera, se entienden derogados aquellos supuestos de hecho que en vigencia de la Ley 160, sin las modificaciones del Decreto Ley, daban lugar a prerrogativas que otorgaban derecho a la adjudicación directa. Así, por ejemplo, la ocupación previa daba lugar, cumplidas las condiciones objetivas y subjetivas, a la adjudicación de los terrenos baldíos. Todas estas posibles hipótesis ya no se encuentran consignadas como prerrogativas que dan derecho a la adjudicación, en tanto, se establece que los procesos de selección de beneficiarios se rigen por las reglas del RESO. Esta condición constituye la regla general y materializa lo que hasta acá hemos denominado irretroactividad de ley.

En rigor, la irretroactividad señala que, a partir del 29 de mayo de 2017, los particulares no pueden iniciar ejercicios de ocupación previa, sino solo cuando estas hayan sido autorizadas por la ANT y su adjudicación se regule con el nuevo proceso de selección de beneficiarios.

Y en virtud de la ultraactividad, supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable al ocupante. No obstante, esta última regla exigirá que la ocupación se realice de manera regular, es decir, no pueden pretenderse la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

1.5 Análisis del caso particular

Como un elemento común a las diferentes solicitudes de adjudicación de los aspirantes de tierra dentro del predio *"El Porvenir"*, encontramos que las ocupaciones se iniciaron con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 (27 de mayo de 2017), por cuanto, en principio, se deben resolver sustancialmente bajo las prerrogativas de la Ley 160 de 1994.

Como se mostrará, el efecto inmediato de la resolución que declaró la revocatoria de las adjudicaciones implicó que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho a la adjudicación. Esta conclusión se extrae del análisis de dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la Ley 160 de 1994 por efecto de la ultraactividad prevista por el Decreto Ley 902 de 2017, permite afirmar que no resultan procedentes las titulaciones solicitadas.

Pese a lo anterior, y por efecto de las situaciones analizadas dentro de la Sentencia SU-426 de 2016, los acá solicitantes (accionantes) ostentan una especialísima condición, bajo la denominación de ocupantes históricos, que como se mostrará los hace beneficiarios del estudio de sus solicitudes y una eventual adjudicación directa en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.

La inferencia de tales conclusiones se explica en los puntos que se desarrollan a continuación.

1.6. Efectos de la revocatoria: reserva especial de baldíos

La revocatoria sobre actos administrativos de titulación de baldíos constituye un trámite de carácter especial, en cuya virtud, es posible revisar la legalidad de los actos de adjudicación. Su efecto, frente a la naturaleza de los predios puede darse en dos posibles vías: la primera, si se cuestiona la legalidad de la adjudicación al identificar que operó sobre predios que no tenían la condición de baldíos, su resultado al declarar la revocatoria será la de reconocer que se trataba de bienes que acreditaban dominio ajeno, bien sea propiedad privada, bienes

fiscales patrimoniales, o bien de propiedad étnica. La segunda vía, como resultado posible, es que el bien objeto de la revocatoria adquiera nuevamente la condición de baldío, en tanto, lo que se reprochó fueron las condiciones personales del adjudicatario, que la configuración de la ocupación no era apropiada, o bien, que el baldío era inadjudicable o tenía el carácter de reservado.

De modo concreto, la Resolución 6423 de 2014 expedida por el entonces Incoder, implicó que las áreas hoy ocupadas adquirieron la condición de terrenos baldíos, en tanto, demostró que los adjudicatarios no cumplían con los requisitos para acceder a las titulaciones; señalando, entre otras cosas, que la totalidad de los títulos de adjudicación se expidieron en violación a las condiciones materiales para la adjudicación de baldíos, en tanto, los solicitantes no adelantaron la ocupación por el término de los 5 años y la explotación de las 2/3 partes de lo adjudicado.[7]

La citada resolución también mostró que las titulaciones reprochadas obedecieron a la maniobra de particulares que ocupaban baldíos más allá de los límites permitidos, y dar a tales ocupaciones la apariencia de legalidad a través de la titulación en favor de una pluralidad de personas que no ejercieron la ocupación y explotación de los predios.

Esta condición se ajusta al supuesto de hecho previsto en el inciso segundo del artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014, que señala que: *"En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos."*

En tal orden, otro efecto de la Resolución No. 6423 de 2014, y de acuerdo a la disposición normativa en referencia, consistió en otorgar el carácter de baldío reservado a los predios objeto. La reserva que analizamos sustrae los predios de aquellos que pueden ser ocupados con el objetivo de obtener su titulación, en tanto, su aprovechamiento y titulación deben ser siempre direccionados por el respectivo administrador.

Quiere decir ello, que, pese a haber adquirido nuevamente la condición de terrenos baldíos, los predios no podían ser objeto de la ocupación espontánea y libre, esto es, por iniciativa de los particulares, ya que debía ser el Incoder, quien, a través de un proceso de selección objetiva, determinará las personas que podían ser adjudicatarias de dichos fundos.

Contemplarlo de una manera distinta, implica aceptar que la intervención del Estado, desplegada para corregir las irregularidades en las adjudicaciones y el fenómeno de concentración de dichos terrenos baldíos, se suspendía una vez terminada los trámites de revocatoria, y, sometido a la contingencia de los particulares; al no condicionarse la titulación a un proceso de selección objetiva no existe garantía que los beneficiarios sean aquellos que revisten mayores condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, es altamente probable que por efecto de la ocupación, se prefiera en la adjudicación a quienes poseen mejores condiciones para ejecutar el señorío y el aprovechamiento económico. Por otra parte, no puede garantizarse equidad en las áreas a distribuir, pues, estas dependen de la manera en la que los particulares hubieran delimitado sus ocupaciones. En suma, negar los efectos de la reserva, implica abstraer el Estado de las decisiones de apropiación, y aprovechamiento económico, dificultando que el proceso de acceso se oriente por criterios de equidad que privilegien a las personas con mayor vulnerabilidad económica y social.

1.6.1. Improcedencia de la solicitud de adjudicación de baldíos concentrados

De conformidad con lo expuesto, y en consonancia con el inciso segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994, no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida. Como se señaló los peticionarios afirman que sus ocupaciones iniciaron antes del 29 de mayo de 2017, bajo el régimen de la Ley 160 de 1994, lo que pudo ocurrir solo en dos hipótesis: (i) las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío reservado, o (ii) lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se encontraban concentrados por efecto de la titulación, y posterior englobe de los predios.

En esta última hipótesis implica, por tanto, que las ocupaciones tampoco dan derecho a la adjudicación.

---

[7] Vid Numeral 6.5.4 de la Resolución 6423 de 2014 de Incoder.

1.7. La Orden Judicial

Que con ocasión de una acción de tutela instaurada por la señora Sulay Martínez y otros accionantes[8] contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— y otras entidades de derecho público, resuelta en primera instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015); la Corte Constitucional seleccionó y asumió competencia para la revisión del proceso en referencia.

Que por lo anterior, el día once (11) de agosto de 2016, el alto Tribunal Constitucional profirió la Sentencia de unificación **SU-426 de 2016[2]**, mediante la cual confirmó parcialmente la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; amparando entre otros, el derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Que de acuerdo con lo anterior, la Dirección de Acceso Tierras de la ANT a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para intervenir en el cumplimiento a la **Orden Cuarta literales (ii) (iv) y (iv)** de la Sentencia **SU-426 de 2016,** relacionadas con determinar los sujetos de reforma agraria hoy sujetos de ordenamiento, y, resolver la situación de acceso a tierra de los accionantes peticionarios del predio "*El Porvenir*", teniendo especial consideración con la situación de la mujer rural. En dichas órdenes se establece puntualmente:

> ***"(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en lo Ley 160 de 1994.***
>
> ***(...)***
>
> ***(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.***
>
> ***(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002. "***(Negrilla y subraya fuera del texto original)

Que las órdenes proferidas proferidas por la Corte Constitucional encuentran asidero en el estudio abordado al resolver el problema jurídico que cuestiona, i) la vulneración del derecho fundamental a la tierra y el territorio de los accionantes al no adelantar la identificación y

---

[8] Sulay Martínez, Martha Lucía Horopa Colina, Sandra Del Pilar Tacha Turriago, Mercedes Arenas, Luz Marina Arteaga Henao, Nelsi Anail Cordero, Flor Elvira Sarmiento Silva, Ramiro Chaparro Cárdenas, Elvira Beltrán de Salgado, Carolina Vásquez Cruz, Mery González, Elvidina Velandia Naranjo, Luz Derli Toro Mahecha, Mireya Córdoba Pérez, Johan Camilo Gómez Córdoba, Martha Tello Briceño, Flor Ángela Briceño, Ingrid Maryuri Parales, Yolley Patricia Cardozo Castillo, Edelmira Sáenz Pinzón, Doris Sunilda Castro Montenegro, Pastora Montenegro González, Ana Rovira Gaitán Chipiaje, Belarmina Rivas, Luz Welmina González Rivas, Yidy Yasmina Rivas, Carmen Amelia Cisneros, Yuleinis Hoyos Martínez, Fulvia Manfara Yepes, Rosalba Unda, Gladys Rosalba Castillo, Yeini Alejandra Cardozo Castillo, Adelaida Cardozo Castillo, Luz Dary García Unda, Angélica Rocío Coba Tumay, Ana Bertilde Tumay, Luz Marina Bonilla Ponare, Nadia Córdoba Pérez, María Eugenia Parales, Bayron García Unda, Luifer Mario González Rivas, José Antonio García Romero, Esgar Ramírez Velásquez, Argemiro Torres Pérez, Alfonso Guabave, Luis Eduardo Cardoso Castillo, Orlando Ramón Cardozo Castillo, José Eliecer García Romero, Freddi Duván García Unda, Luis Carlos García Silva, Roberto Coba Pidiache, Ferdinando Tejada Bolívar, Gabriel Gutiérrez Rodríguez, Damaso Cedeño Estrada, Rafael Riveros Rodríguez, Wilson Riveros Inocencio, Omar Elkin Salgado Beltrán, Evelio Conde, Aníbal Riveros, José Rodrigo Pulido, Nelson Salgado, Melesio Gaitán, Nicolás Vanegas Rodríguez, Lázaro González Caicedo, (fe de erratas: el nombre ubicado en la casilla No. 65 no es legible), Luis Eduardo Cisneros Infante, Luis Hermes Rojas Malpica, Manuel Isaac Cujar Ávila, Rigoberto Castro Montenegro, Alfonso Guabave, Alfonso Unda, Emiliano Beltrán Sabogal y Miguel Briceño.

posterior titulación de los fundos pese a los efectos de la revocatoria declarada desde el 14 de julio de 2014, y ii) si la Nación recuperó documentalmente el dominio de los mismos.

Que en el mismo sentido, las órdenes proferidas se enmarcaron en la relevancia constitucional del caso que *"(...)se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros. En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores".*

De allí que en el asunto, la Alta Corporación tuvieran en cuenta el conjunto de supuestos fácticos narrados en el trámite, que demuestra la condición de vulnerabilidad de los actores, y que devino en la categorización de estos como ocupantes históricos teniendo en cuenta su asentamiento data 45 años atrás, y el padecimiento sufrido por estos *"(...)debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso".*

1.7.1. Potenciales beneficiarios del trámite de asignación de derechos sobre la tierra

Que considerado lo anterior, resulta procedente la identificación de los potenciales beneficiarios del trámite de asignación de derechos sobre la tierra, en atención al mandato del artículo 68 del Decreto Ley 902 de 2017, en contraste con las determinaciones jurisprudenciales que sobre el presente asunto revisten de vital importancia estudiar.

Que, por disposición legal, son sujetos de acceso a tierras a título gratuito y parcialmente gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria que cumplen con los requisitos del artículo 4 y 5 del Decreto Ley 902 de 2017.

Que por su parte, el Alto despacho constitucional en el fallo de la acción de tutela consideró, en relación con la población accionante que "*(...) es irrazonable que se ignore la presencia histórica de la población de El Porvenir o que se asimile a la de posibles ocupantes actuales (...)",* de allí que sobre el asunto la Corte Constitucional en sus órdenes dispusiera advertir "(...) *la obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir".*

Que, de acuerdo con lo indicado reiteradamente por la Jurisprudencia Constitucional, los efectos de los fallos de revisión de tutelas proferidos por la Corte Constitucional tienen por regla general efectos inter partes[9], salvo se disponga otorgarle efectos diferentes.

Lo anterior en razón a que no es potestad de la Agencia Nacional de Tierras modular los efectos de las sentencias de unificación proferidas por los jueces de la república, en el sentido de otorgar las mismas prerrogativas en cabeza de los accionantes a las demás personas que hacen presencia en el predio, pues, de hacerlo, dispondría en sede administrativa que un número indeterminado de individuos reclame y adquiriera una condición que no les asiste, con menoscabo de los derechos del grupo de ciudadanos que hicieron uso de los mecanismos legales para el amparo de sus garantías fundamentales.

Que en este sentido, el procedimiento de asignación de derechos del cual se ordena su apertura tendrá como potenciales beneficiarios del trámite de asignación de derechos sobre la tierra a los tutelantes de la acción judicial que dieron origen a los fallos que posteriormente fueron seleccionados y revisados por la H Corte Constitucional, así: Sulay Martínez C.c. No.1134434200, Flor Ángela Briceño C.c. No. 30981461, Miguel Briceño C.c.

---

[9] Corte Constitucional. Sentencia T-583 del año 2006 Magistrado Ponente Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA. Sobre el asunto: *"Nunca los efectos de la decisión de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisión de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, éste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violación. Por ello el examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo a si la acción o la omisión de la persona o personas concretamente demandadas conduce a la violación de derechos fundamentales del o los demandantes"*

No.17333946, Esgar Ramírez Velásquez C.c. No. 9656529, Luz Day García C.c. No. 47432841, José Antonio García Romero C.c No. 4186129, Mercedes Arenas C.c. No. 40418465, Rafael Riveros Rodríguez C.c. No. 8191445, Omar Elkin Salgado Beltrán C.c. No.17343787, Luz Derly Toro Mahecha C.c. No.30983681, Emiliano Beltrán Sabogal C.c. No. 3287042, Doris Sunilda Castro Montenegro C.c. No.30982167, Pastora Montenegro González C.c. No. 21241124, Ferdinand Tejada Bolívar C.c. No. 8296480, Gabriel Gutiérrez Rodríguez C.c. No. 8190458, Luifer Mario González Rivas C.c. No. 1117324092, Félix Alfonso Unda C.c. No. 4185980, Manuel Isaac Cujar Ávila C.c. No. 17325073, Luis Hermes Rojas Malpica C.C. No. 4185630, Gladys Rosalba Castillo C.c. No. 23835387, Luis Eduardo Cardozo Castillo No. 74849668, Orlando Ramón Cardozo Castillo C.c. No. 8192357, Mireya Córdoba Pérez C.c. No. 23834949, Nadia Córdoba Pérez C.c. No. 30983377, Johan Camilo Gómez Córdoba C.c. No. 1121947721, Ana Rovira Gaitán Chipiaje C.c. No. 30982308, Alfonso Guavabe C.c. No.1124826986, Yidi Yasmina Rivas C.c. No. 23835989, Belarmina Rivas C.c. No. 21224316, Luz Welmina González Rivas C.c. No. 23836189, Yorley Patricia Cardozo Castillo C.c. No. 23826218, Martha Lucia Horopa Colina C.c. No. 23835479, Mery Gózales Pedraza C.c. No. 24225836, Flor Elvia Sarmiento Silva C.c. No. 52174645, Ramiro Chaparro Cárdenas C.c. No. 9654694, Rosalba María Unda Guio C.c. No. 23834902, Jorge Eliecer García Romero C.c. No. 4186480, Bayron García Unda C.c. No.74849053, Leonor Adelaida Cardozo Castillo C.c. No. 23836010, Melesio Gaitán Blas C.c. No. 74849248, Edelmira Sáenz Pinzón C.c. No. 261121982, María Eugenia Parales C.c. No. 1117322978, Ingrid Maryuri Parales C.c. No. 1006489657, Rigoberto Castro Montenegro C.c. No. 74849432, Sandra del Pilar Tacha Turriago C.c. No. 23835644, Angélica Roció Coba Tumay C.c. No. 111732452, Ana Bertilde Tumay Humo C.c. No. 23835440, Remberto Coba Pidiache C.c. No. 6671786, Nelsi Anail Cordero C.c. No. 474737725, Dámaso Cedeño C.c. No. 9430822, Wilson Riveros Inocencio C.c. No. 74848756, Carolina Vásquez Cruz C.c. No. 1117325451, Luz Marina Arteaga Henao C.c. No. 35526746, Fulvia Manfara Yepes C.c. No. 23836130, Aníbal Riveros Inocencio C.c. No. 74805009, Carmen Amelia Cisneros C.c. No. 30983309, Lázaro González Caicedo C.c. No. 3297581, Evelio Yadin Conde Ibica C.c. No. 4284961, Argemiro Torres C.c. No. 17325064, Martha Cecilia Tello Briceño C.c. No. 1124818615, Elvira Beltrán de Salgado C.c. No. 35358015, Nelson Antonio Salgado Beltrán C.c. No. 17332321, Luz Marina Bonilla Ponare C.c. No. 30982745, Fredy Duvan García Unda C.c. No. 1007495443, Yeini Alejandra Cardoso Castillo C.c. No. 30983137, Elvidina Velandia Naranjo C.c. No.1115857481, Yuleinir Hoyos Martínez C.c. No. 41060265, Luis Carlos García Silva C.c. No. 1124827560, Jose Rodrigo Pulido C.c. No. 74845002, Luis Eduardo Cisneros Infante, (se desconoce su número de Identificación), Nicolas Venegas Rodríguez, (se desconoce su número de Identificación) y a la persona con nombre ilegible en el expediente judicial, por identificar.

Que de lo anterior, se tiene que, conforme al mandato emitido por la máxima autoridad jurisdiccional constitucional, existe una prerrogativa en favor de los peticionarios ocupantes históricos del predio de mayor extensión denominado *"El porvenir"*, conforme a los hechos probados en sentencia **SU-426 de 2016,** por acción de tutela interpuesta por éstos, de suerte que resulten catalogados bajo el criterio de potenciales beneficiarios del trámite de asignación de derechos sobre la tierra, en los términos del Decreto 902 de 2017.

De allí que deban ser verificados los requisitos subjetivos señalados en el Decreto Ley 902 de 2017 para la definición del cumplimiento de sus condiciones personales conforme al mandato legal, por lo que para ello, se deberá hacer uso del instrumento dispuesto por la Ley para tal fin y que se desarrollará más adelante.

Ahora bien, en relación con los potenciales beneficiarios del trámite de asignación de derechos respecto de los cuales se puede establecer de las acciones adelantadas por la entidad, que han fallecido, que no se identifican o en su defecto no ha sido posible adelantar contacto; con el fin de garantizar el inicio de la Primera Parte de la Fase Administrativa del Capítulo 3 de la Resolución 740 de 2017 en relación con el Registro de Sujetos de Ordenamiento, para la verificación del cumplimiento de los los requisitos del artículo 4 y 5 del Decreto Ley 902 de 2017 de estos y/o su grupo familiar, dispóngase en la parte resolutiva del presente, los medios necesarios a fin de identificarlos y requerir su presencia para que se hagan parte del trámite y, en tal sentido, diligencien en instrumento legal para su calificación y eventual inclusión al RESO, que permita la resolución de su situación de acceso a tierra.

Con todo, la Subdirección de Acceso a Tierras ordenará en la apertura del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad con una prerrogativa para la adjudicación directa para los descritos accionantes habitantes del predio de mayor extensión conocido como *"El Porvenir"*.

1.8. La población no accionante

En segundo orden, con relación de las demás personas identificadas en el censo de ocupantes realizado por la ANT durante el año 2017 y 2018, que teniendo una pretensión de acceso a tierra en el área que comprende el predio denominado *"El Porvenir"*, y que no reúnen las calidades del grupo de accionantes del amparo fundamental en cuestión; una vez se cuente con la disposición material de la totalidad de las áreas producto del proceso de regularización y/o recuperación de los predios baldíos reservados que conforman el polígono de que trata de la Resolución No. 6423 de 2014, y, superado el trámite de asignación de derechos para los potenciales beneficiarios con prerrogativa de asignación directa, se podrá dar apertura a un nuevo procedimiento de asignación de derechos de propiedad rural respecto de las áreas que resulten disponibles para adjudicar, a través de los **procesos de selección objetiva**, conforme a las reglas contenidas en los artículos **4** y **5** del Decreto Ley 902 de 2017, que establecen los requisitos para ser sujeto de acceso a tierra y de formalización; el artículo **45** de la resolución No. 740 de 2017, que regula la asignación de puntaje para el orden para establecer la colocación en la adjudicación.

Que es necesario resaltar que la eventual apertura de dicho trámite se adelantará con posterioridad a la culminación al procedimiento de asignación de derechos para las personas destinatarias de la sentencia **SU-426 de 2016** de qué trata el numeral anterior. Y en todo caso, estará sujeto a la existencia de áreas disponibles para adjudicar.

2. El Procedimiento Administrativo

Que el día 29 de mayo de 2017, el Gobierno Nacional expidió el **Decreto- Ley 902 de 2017** ***"Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras"***

Que en el Título II de este decreto ley regula los aspectos relacionados con el Registro de Sujetos de Ordenamiento, RESO, como una herramienta técnica necesaria para inscribir a los sujetos beneficiarios previstos en el Acuerdo y un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades de acceso y formalización previstas en el Acuerdo. Así, el articulado de este título hace referencia a aspectos como la creación del registro de sujetos de ordenamiento; la relación de este registro con el Fondo de Tierras; los criterios para la asignación de puntos para el RESO; la forma de ingreso y clasificación en el y la promoción de la inscripción en el RESO.

Que en el Título III se reglamentan, entre otras cosas, la prioridad en la asignación de derechos.

Que adicionalmente, en el Título IV, capítulo I regula el tema de las formas de acceso y la adjudicación directa (artículo 20); la prelación sobre asignación de derechos sobre baldíos (artículo 21); el tratamiento a las solicitudes en proceso (artículo 22); la ausencia de derecho para la adjudicación (artículo 23).

Que el señalado decreto ley, en el en el Título VI contempla el procedimiento único para la implementación del ordenamiento social de la propiedad, el cual, en virtud del artículo 40 del mismo decreto, le es aplicable a las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.*** *El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado. La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras.* ***En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.***
>
> ***Parágrafo****. La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura*

del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción." (Negrilla fuera del original)

Que ahora bien, tal como se indicó líneas más arriba, el municipio de Puerto Gaitán, Meta, dentro del cual se encuentra ubicado el predio denominado *El Porvenir,* es uno de los ente territoriales priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural[10] para el desarrollo del Proyecto Piloto de Catastro Multipropósito[11] establecido en el artículo **104** de la **Ley 1753 de 2015** (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) y en el documento Conpes No. **3859 de 2016**, denominado ***"Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano".*** En consecuencia, el municipio de Puerto Gaitán fue uno de los municipios priorizados por el Director General de la Agencia Nacional de Tierras para llevar cabo pilotos de catastro multipropósito con ordenamiento social de la propiedad rural[12]

Que, en virtud de lo anterior, el director de la Agencia Nacional de Tierras, a través de la **Resolución No. 4375 del 06 de agosto de 2018,** aprobó el **Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural** para el municipio de Puerto Gaitán, Meta, lo cual, permite dar plena aplicación al **Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural** dentro de dicho ente territorial focalizado, en los términos establecidos en el citado **artículo 40** del Decreto Ley 902 de 2017.

Que en este orden de ideas, el procedimiento administrativo que regirá la presente actuación es el previsto para la asignación de derechos de conformidad con el **artículo 60** y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017, en concordancia con lo dispuesto en las resoluciones ANT Nos. **740 de 2017** y **1384 de 2018.** En lo no contemplado por estas disposiciones, se aplicarán las demás normas vigentes que regulan la materia, especialmente, en lo relacionado con la titulación de baldíos.

Que igualmente, en lo no reglado para el desarrollo del procedimiento especial de que tratan las normas antes señaladas, se dará aplicación a la cláusula general establecido en el **artículo 34** del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual señala que los procedimientos administrativos se sujetarán a las reglas contenidas en dicho Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados en normas especiales y, en lo no previsto en ellos, se regirán por la parte primera del mismo CPACA[13].

Que en consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por la H Corte Constitucional mediante sentencia **SU-426-2016**; dentro del trámite de acceso a tierra de los destinatarios del amparo constitucional señalados en el numeral **1.7.1** del presente acto, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas ordenará el inicio del procedimiento Único de Ordenamiento Social de Propiedad Rural con prerrogativa de asignación directa de que trata el artículo 25 del Decreto Ley 902 de 2017, reglamentado por las Resoluciones ANT Nos. 740 de 2017 y 1384 de 2018, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes del señalado en Decreto Ley, que dispone la aplicación del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de Propiedad en Zonas Focalizadas, así:

Que el artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017, establece las fases del procedimiento único así:

> ***"Artículo 60. Fases del Procedimiento Único en zonas focalizadas.*** *El Procedimiento Único en el territorio focalizado contará con las siguientes fases:*
> 1. *Fase administrativa compuesta por las siguientes etapas:*
>   a) *Etapa preliminar: Comprende la formación de expedientes, las visitas de campo predio a predio, la elaboración de informe jurídico preliminar y la consolidación del Registro de Sujetos del Ordenamiento.*
>   b) *Los asuntos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior se tramitarán conforme a los manuales operativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras.*
>   c) *Para los asuntos contenidos en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo anterior, en donde se dará apertura y se abrirá periodo probatorio.*
>   d) *Etapa de exposición de resultados.*
>   e) *Etapa de decisiones y cierre administrativo.*
> 2. *Fase judicial. Para los asuntos contenidos en los numerales 3, en los que se presenten oposiciones en el trámite administrativo, y siempre para los asuntos contenidos en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8."*

---

[10] Ver artículo 2° del Decreto 1985 de 2013; artículo 11 numeral 4 del Decreto Ley 2363 de 2015, en el numeral 4 del artículo 11; resolución MADR No. 129 de 2017 y la resolución MADR No. 130 de 2017.
[11] El proyecto piloto de catastro multipropósito es desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación.
[12] Ver la Resolución ANT No. 1384 de 2017.
[13] Ver Ley 1437 de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*

Que como se observa, la etapa preliminar contemplada dentro de la primera parte de la Fase administrativa del procedimiento único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, comprende las siguientes actividades:

1. Formación del expediente.
2. Visitas de campo predio a predio.
3. Informe técnico jurídico preliminar.
4. Registro de Sujetos de Ordenamiento.

Que la Agencia Nacional de Tierras ha dado trámite a los asuntos concernientes a la etapa preliminar de la fase administrativa, así:

2.1. Formación del Expediente

Que el artículo 65 del Decreto Ley 902 de 2017 establece:

> ***"Artículo 65. Formación del expediente.*** *Con la información y documentos recaudados durante el diseño del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural y recogiendo la información recaudada en los ejercicios participativos de que trata el artículo 45, se conformará un expediente por cada predio identificado. Igualmente, se integrarán al proceso único, los procesos administrativos de tierras que estén en curso sobre cada predio."*

Que en consonancia con lo anterior, la **Resolución ANT No. 740 de 2017** *"Por la cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras disposiciones"*, dentro de la Etapa Preliminar de la Fase Administrativa del Procedimiento Único, contempla:

> ***"Artículo 22. Formación de expedientes.*** *Teniendo en cuenta la información recabada en la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y una vez identificados catastral y registralmente los inmuebles rurales existentes en una determinada zona focalizada, la Unidad de Gestión Territorial más cercana, con la supervisión y apoyo de las Subdirecciones pertinentes a Nivel Nacional, darán apertura a un expediente por cada inmueble objeto de barrido.*
>
> ***Artículo 23. Contenido Mínimo del expediente.*** *El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y Comunicaciones oficiales que se expidan en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, pero contendrá como mínimo y para efectos de su apertura, un documento preliminar de análisis predial, que consigne la información catastral y registral del respectivo inmueble junto con sus soportes documentales, como son los registros 1 y 2 de catastro o sus equivalentes y el certificado de libertad y tradición para efectos de lograr identificar el inmueble.*
>
> *En aquellos casos en que en la zona focalizada ya haya finalizado la intervención del catastro multipropósito, en lugar de los registros 1 y 2 de catastro y los certificados de libertad y tradición, se anexará el respectivo certificado plano predial o el documento que haga sus veces según proceda.*
>
> *Cuando no se obtenga información catastral y lo registral sobre el inmueble, se dejará constancia de esa situación que servirá de insumo para la construcción del documento preliminar de análisis predial.*
>
> ***Artículo 24. Documento preliminar de análisis predial para dar apertura al expediente.*** *El documento preliminar de análisis predial señalado en el artículo anterior con el cual se dará apertura a cada expediente, determinará de manera tentativa cuál es la situación física, jurídica y de tenencia del inmueble, con el fin de que dicha información sea posteriormente verificada o corregida al momento de hacer la visita al inmueble.*
>
> *Particularmente la ANT se pronunciará frente a la naturaleza jurídica del inmueble, la existencia o no de informalidad sobre el mismo y la licitud en su adquisición, todo lo anterior, a partir de cruces de información de fuentes secundarias obtenidos en la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y la información recibida de las comunidades mismas y diversos actores a nivel territorial."*

Que por lo anterior, dentro del desarrollo del presente procedimiento administrativo se han incorporado todos los documentos e información recabada durante el desarrollo de las actuaciones desplegadas por las Dependencias de la ANT en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia **SU-426 de 2016,** tales como: comunicaciones oficiales expedidas por la ANT y por otras entidades de naturaleza pública, formatos de caracterización y de cumplimiento de orden judicial, expedientes de solicitudes de adjudicación radicadas ante el extinto Incoder y ante la Agencia Nacional de Tierras, actas de visitas de campo al predio "*El Porvenir*", de reuniones con la comunidad y, en general, toda la documentación obrante en

el expediente conformado por el extinto Incoder y la Agencia Nacional de Tierras desde la expedición de la sentencia de unificación en comento.

Que la Subdirección elaboró el correspondiente Documento de Análisis Predial dónde se encuentra consagrada la información, física, jurídica, catastral, social y de identificación del inmueble *"El Porvenir"*, y de los predios que lo conforman.

Que adicionalmente, se han incorporado los documentos existentes relacionados con el diseño del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de los que trata el artículo 65 del Decreto Ley 902 de 2017, así como el artículo 22 y subsiguiente de la Resolución ANT No. 740 de 2017.

Que así mismo, teniendo en cuenta que los predios baldíos sobre los cuales recae el presente procedimiento de asignación de derechos, tienen lugar con ocasión de la expedición de la Resolución Incoder No. 6423 de 2014 por medio de la cual se revocan los actos de adjudicación de los baldíos que hoy conforman el predio de mayor extensión denominado *"El Porvenir"*, se ha incorporado copia de los documentos obrantes en el expediente administrativo de revocatoria directa, a fin de ser tenido como medio de prueba dentro del presente procedimiento.

Que, además, se incorporará la información técnica, agrológica y agronómica recabada por el equipo de profesionales de la Dirección de Acceso a Tierras en relación con el procedimiento de cálculo de la Unidad Agrícola Familiar de carácter predial, de conformidad con los manuales y metodologías adoptadas por la Agencia para tal fin.

2.2. Visitas de Campo

Que, al respecto, el artículo 66 del Decreto Ley 902 de 2017 establece el propósito y alcance de las visitas de campo aplicable al caso que nos ocupa, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 66. Visitas de campo predio a predio.*** *Las visitas tendrán por objeto mínimo:*
> 1. *Realizar el levantamiento de la información física y jurídica de cada uno de los predios.*
> 2. *Recibir medios de prueba, tales como, declaraciones y documentos relativos a la ocupación, posesión, tenencia o propiedad de la tierra, así como, las oposiciones que se presenten.*
> 3. *Se capturará y documentará información acerca de la explotación económica y uso que se le esté dando al predio.*
> 4. *También podrán adelantarse válidamente ejercicios de cartografía social cuando fuere necesario.*
>
> *Las visitas a los predios se realizarán por parte de la Agencia Nacional de Tierras, o por quien está designe o contrate y la información recolectada en estas tendrá pleno valor probatorio dentro del proceso.*
>
> *Será obligación de los poseedores, tenedores, ocupantes, administradores y en general de las personas que se encuentren en los predios que se van a visitar, permitir el ingreso de los funcionarios o contratistas encargados de realizar estas diligencias.*
>
> *Las visitas de campo podrán ser acompañadas por los Procuradores Ambientales y Agrarios quienes velarán por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con las actividades de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. En ningún caso la ausencia del Procurador Ambiental y Agrario será razón para suspender o no hacer la visita de campo".*

Que, en igual sentido, en el artículo 31 de la citada Resolución ANT No. 740 de 2017, contiene regulación adicional acerca de las visitas a predio, así:

> ***"Artículo 31. Elementos a recoger en las visitas predio a predio****. En las visitas que se realicen en el marco del barrido predial masivo, el equipo interdisciplinario designado por la ANT deberá observar y recoger información frente a los siguientes elementos:*
>
> *1) Documentos que acrediten dominio o soporten el derecho que aducen tener sobre el inmueble. 2) Posible existencia de poseedores,*
>
> *3). Posible existencia de ocupantes,*
>
> *4) Posible existencia de tenedores.*
>
> *5) Posible existencia de potenciales beneficiarios de acceso a tierra.*

6) intención de inscribir el inmueble en el Registro de inmuebles Rurales RIR a que se refiere el título 5 de la presente resolución.

7) Si predio presenta condiciones técnicas y ambientales para el desarrollo de actividades agropecuarias y lo forestales, entre otras con los mismos fines de conformación del RIR.

8) La procedencia de aplicar el deslinde de tierras de la Nación.

9) Cumplimiento de la Función Social de la Propiedad, verificando grado de explotación económica.
La identificación de la tenencia tiene por objeto aclarar la situación jurídica de los sujetos con el inmueble que al momento de la visita estaban siendo explotados por personas distintas al propietario, e inscribirlo en el RESO con fines de acceso a tierra, si hay lugar a ello. Las personas que ejerzan relación de tenencia y no ingresen al RESO como aspirantes de acceso a tierra serán ingresadas al módulo "otros".

Y más adelante dispone:

"En caso de realizar la visita sin el acompañamiento del catastro multipropósito o en predios que no han sido catastrados por él, se recogerá la misma información señalada y adicionalmente:

1) El levantamiento topográfico o planímetro del inmueble conforme a los estándares impartidos por la autoridad Catastral.

2) La demás información catastral pertinente cuando se opere como Gestor Catastral.

***Parágrafo.** Cuando el levantamiento topográfico o planímetro del inmueble arroje un área o linderos diferentes a los que reposen en catastro y/o el registro público de la propiedad se procederá de desarrollar el procedimiento señalado en el capítulo 2 del presente título."*

Que en desarrollo de las visitas a campo adelantadas por los profesionales de la Agencia llevadas a cabo durante los años 2016, 2017 y 2018 se identificaron y censaron los ocupantes y potenciales sujetos de acceso a tierra conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 2017, tal como se observa en los documentos obrantes en el expediente.

Que igualmente, se ha recogido toda la información relacionada con la situación jurídica del predio, las condiciones técnicas, ambientales y de explotación.

Que por consiguiente, se ha incorporado al expediente toda la información recogida por las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Tierras durante todas las visitas de campo efectuadas al predio en cuestión, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 y relacionados del Decreto Ley 902 de 2017.

Cabe indicar que el proceso de levantamiento topográfico o planímetro de los inmuebles objeto de adjudicación se realizará una vez la Entidad haya adelantado el trámite de regularización con los ocupantes de áreas dentro del predio que compone *"El Porvenir"*.

En igual sentido, se ordenará incluir la información recogida por el equipo de topografía de la Agencia Nacional de Tierras durante el proceso de confirmación de área y linderos, así como el levantamiento topográfico para la definición del polígono general del predio denominado "*El Porvenir*".

Que lo anterior sin perjuicio de la información que deba ser incorporada para el normal desarrollo del presente procedimiento.

2.3. El Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO

Que en el título II del Decreto Ley 902 de 2017 se crea el Registro de Sujetos de Ordenamiento como un instrumento de planeación y ejecución de la política pública de ordenamiento social de la propiedad, en los siguientes términos:

***"Artículo 11. Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO-.** Créase el Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO, como una herramienta administrada por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, que consigna públicamente a todos los sujetos del presente decreto ley.*

El RESO constituirá un instrumento de planeación y de ejecución gradual de la política pública, bajo el principio de reserva de lo posible, a fin de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva.

Adicionalmente, se constituye en la herramienta para identificar a los beneficiarios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La información sobre estos beneficiarios reposará en el módulo especial de que trata el siguiente artículo. (...)"

Que el en el **capítulo 3** de la Resolución ANT No. **740 de 2017** se regulan las generalidades, incorporación, módulos del **Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO**, entre otras herramientas que permiten la consolidación del registro de los potenciales beneficiarios de acceso a tierra dentro del predio denominado *"El Porvenir"*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Que en consecuencia, dentro de la etapa preliminar del presente procedimiento único se procedió con el diligenciamiento en campo del Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO a las personas destinatarias del presente procedimiento de asignación de derechos, tendiente a la conformación y consolidación del Registro de Sujetos de Ordenamiento que permita valorar las condiciones personales, así como determinar el posible orden de elegibilidad para dichos potenciales beneficiarios, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional.

Ahora bien, con relación a los destinatarios del amparo constitucional que ostentan la calidad de potenciales beneficiarios, que a la fecha no han diligenciado el Formulario de Ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento, la Dirección de Acceso a Tierras procederá a requerirlos a fin de que completen el trámite descrito, con el objetivo de permitir la consolidación del RESO, en los términos del Decreto Ley 907 de 2017.

Que en este orden de ideas, la información recogida por la Dirección de Acceso a Tierras a través de la herramienta FISO, será remitida a la **Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la ANT,** a fin de que dicha dependencia proceda a valorar las condiciones personales de cada potencial beneficiario, y en consecuencia, expida los correspondientes actos administrativos que decidan el ingreso al RESO y la asignación de puntaje que corresponda para determinar el orden de priorización en las eventuales adjudicaciones, de conformidad con las reglas contenidas en el Decreto Ley 902 de 2017 y sus normas reglamentarias.

2.4. Informe Técnico Jurídico Preliminar

Que el último componente de la Etapa Preliminar de la primera parte de la Fase Administrativa del procedimiento único lo constituye la elaboración del Informe Técnico Jurídico preliminar contemplado en el artículo 67 del Decreto Ley 902 de 2017 de la siguiente manera:

Artículo 67. Elaboración del Informe Técnico Jurídico Preliminar, Planos y Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO -. *Con la información y documentos contenidos en el expediente la Agencia Nacional de Tierras elaborará un informe técnico jurídico preliminar, así como, los planos prediales siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la autoridad catastral.*

(...).

Que a su vez, la Resolución No. 740 de 2017, respecto del Informe técnico Jurídico Preliminar establece:

Artículo 33. Informe técnico jurídico preliminar. *La información obtenida en los barridos prediales a nivel veredal ya ordenada, depurada y clasificada será remitida paulatinamente y conforme a los avances obtenidos, al nivel central. Aunque se debe conformar un sólo expediente por predio rural, la información recogida de cada uno debe concluir en el análisis de la existencia de problemas de acceso a tierra, inseguridad jurídica o incumplimiento a la función social de la propiedad, de forma que debe ser remitido en lo de su competencia a la Subdirección pertinente.*

Para cada caso, tras un análisis de la información aportada, la o las Subdirecciones pertinentes elaborarán un documento denominado "informe técnico jurídico preliminar", que contendrá la información detallada del inmueble, recabada a lo largo del proceso junto con un análisis de dicha información que permita sugerir cuál o cuáles de los asuntos enlistados en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 es necesario iniciar y ejecutar para la respectiva vereda a través

de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.

Cuando se realice la intervención de barrido predial del catastro multipropósito, los informes técnicos jurídicos preliminares podrán provenir de los anexos contenidos en los estándares del catastro multipropósito,

Tratándose del informe técnico jurídico preliminar que recomiende la adjudicación de tierras baldías bajo el régimen de transición o las circunstancias especiales conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto Ley902 de 2017, este deberá contener toda la información señalada en el artículo 72 de la presente Resolución. Si no fuere posible con la información del barrido predial obtener toda la información requerida, así expresamente lo hará constar el informe técnico jurídico y solicitará terminar de recoger la información faltante en desarrollo de la segunda parte de la fase administrativa.

En lo referente a las pretensiones de clarificación de la propiedad y deslinde, recuperación de baldío indebidamente ocupado, reversión y extinción de dominio el informe técnico jurídico preliminar consignará los aspectos sustanciales enunciados en el Decreto 1071 de 2015 en lo concerniente a cada materia.

Igualmente, dicho informe podrá concluir la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho para poder dar inicio a alguno de esos asuntos o sugerir recopilar más información, aclarar alguna prueba o archivar el expediente."

Que por lo anterior, con la información recaudad para los fines descritos, la Agencia procedió a elaborar el Informe Técnico Jurídico Preliminar, documento que es el sustento principal que permite continuar con la fase administrativa del presente procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad de que trata el artículo 68 y siguientes, en concordancia con el artículo 25 del Decreto Ley 902 de 2017 y la Resolución 740 de 2017.

Que igualmente, el documento contiene un análisis de la verificación de los aspectos objetivos y subjetivos sobre la procedencia de las eventuales adjudicaciones.

Que así las cosas, en cumplimiento a lo ordenado por la H Corte Constitucional mediante sentencia **SU-426-2016**; dentro del trámite de acceso a tierra de los destinatarios del amparo constitucional en cuestión, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizada ordenará la apertura del trámite de asignación de derechos de propiedad con prerrogativa de asignación directa a través del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para los potenciales beneficiarios de que trata el numeral **1.7.1** del presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto,

2. RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar procedimiento alguno de reconocimiento de derechos dentro de los predios baldíos con carácter reservado que conforman el de mayor extensión denominado "*El Porvenir*", ubicado en Puerto Gaitán, Meta, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar apertura al procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad con prerrogativa de asignación directa de derechos dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado *"El Porvenir"*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento de la sentencia de unificación SU- 426 de 2016 proferida por la H Corte Constitucional, en favor de las siguientes personas: Sulay Martínez C.c. No.1134434200, Flor Ángela Briceño C.c. No. 30981461, Miguel Briceño C.c. No.17333946, Esgar Ramírez Velásquez C.c. No. 9656529, Luz Day García C.c. No. 47432841, José Antonio García Romero C.c No. 4186129, Mercedes Arenas C.c. No. 40418465, Rafael Riveros Rodríguez C.c. No. 8191445, Omar Elkin Salgado Beltrán C.c. No.17343787, Luz Derly Toro Mahecha C.c. No.30983681, Emiliano Beltrán Sabogal C.c. No. 3287042, Doris Sunilda Castro Montenegro C.c. No.30982167, Pastora Montenegro González C.c. No. 21241124, Ferdinand Tejada Bolívar C.c. No. 8296480, Gabriel Gutiérrez Rodríguez C.c. No. 8190458, Luifer Mario González Rivas C.c. No. 1117324092, Félix Alfonso Unda C.c. No. 4185980, Manuel Isaac Cujar Ávila C.c. No. 17325073, Luis Hermes Rojas Malpica C.C. No. 4185630, Gladys Rosalba Castillo C.c. No. 23835387, Luis Eduardo Cardozo Castillo No. 74849668, Orlando Ramón Cardozo Castillo C.c. No. 8192357, Mireya Córdoba Pérez C.c. No. 23834949, Nadia Córdoba Pérez C.c. No. 30983377, Johan Camilo Gómez Córdoba C.c. No. 1121947721, Ana Rovira Gaitán Chipiaje C.c. No. 30982308, Alfonso Guavabe C.c. No.1124826986, Yidi Yasmina Rivas C.c. No. 23835989, Belarmina Rivas C.c. No. 21224316, Luz Welmina González Rivas C.c. No. 23836189, Yorley Patricia Cardozo Castillo C.c. No. 23826218, Martha Lucia Horopa Colina C.c. No. 23835479, Mery

Gózales Pedraza C.c. No. 24225836, Flor Elvia Sarmiento Silva C.c. No. 52174645, Ramiro Chaparro Cárdenas C.c. No. 9654694, Rosalba María Unda Guio C.c. No. 23834902, Jorge Eliecer García Romero C.c. No. 4186480, Bayron García Unda C.c. No.74849053, Leonor Adelaida Cardozo Castillo C.c. No. 23836010, Melesio Gaitán Blas C.c. No. 74849248, Edelmira Sáenz Pinzón C.c. No. 261121982, María Eugenia Parales C.c. No. 1117322978, Ingrid Maryuri Parales C.c. No. 1006489657, Rigoberto Castro Montenegro C.c. No. 74849432, Sandra del Pilar Tacha Turriago C.c. No. 23835644, Angélica Roció Coba Tumay C.c. No. 111732452, Ana Bertilde Tumay Humo C.c. No. 23835440, Remberto Coba Pidiache C.c. No. 6671786, Nelsi Anail Cordero C.c. No. 474737725, Dámaso Cedeño C.c. No. 9430822, Wilson Riveros Inocencio C.c. No. 74848756, Carolina Vásquez Cruz C.c. No. 1117325451, Luz Marina Arteaga Henao C.c. No. 35526746, Fulvia Manfara Yepes C.c. No. 23836130, Aníbal Riveros Inocencio C.c. No. 74805009, Carmen Amelia Cisneros C.c. No. 30983309, Lázaro González Caicedo C.c. No. 3297581, Evelio Yadin Conde Ibica C.c. No. 4284961, Argemiro Torres C.c. No. 17325064, Martha Cecilia Tello Briceño C.c. No. 1124818615, Elvira Beltrán de Salgado C.c. No. 35358015, Nelson Antonio Salgado Beltrán C.c. No. 17332321, Luz Marina Bonilla Ponare C.c. No. 30982745, Fredy Duvan García Unda C.c. No. 1007495443, Yeini Alejandra Cardoso Castillo C.c. No. 30983137, Elvidina Velandia Naranjo C.c. No.1115857481, Yuleinir Hoyos Martínez C.c. No. 41060265, Luis Carlos García Silva C.c. No. 1124827560, Jose Rodrigo Pulido C.c. No. 74845002, Luis Eduardo Cisneros Infante, (se desconoce su número de Identificación), Nicolas Venegas Rodríguez, (se desconoce su número de Identificación), y respecto de la persona con nombre ilegible en el expediente judicial, por identificar.

ARTÍCULO TERCERO: Dispóngase de los mecanismos necesarios para la conformación del Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO respecto de los potenciales beneficiarios de acceso a tierra con prerrogativa de asignación directa del predio denominado *"El Porvenir"*, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

PARÁGRAFO: Para lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras procederá a desplegar las acciones necesarias que permitan identificar y requerir a los destinatarios de la sentencia **SU- 426 de 2016** que a la fecha no se encuentran plenamente identificados, así como a aquellos que, estando identificados, no han diligenciado el Formulario de Ingreso al Registro de Sujetos de ordenamiento-FISO, a fin de que surtan el trámite señalado. En caso contrario, se continuará con el trámite señalado sin los señalados destinatarios.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez surtido el trámite de que trata el artículo anterior, solicitar a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la ANT que proceda a valorar las condiciones personales de cada potencial beneficiario señalado en el numeral 1.7.7 del presente acto, y en consecuencia, que expida los correspondientes actos administrativos que decidan el ingreso al RESO y asignación de puntaje, de conformidad con las reglas contenidas en el Decreto Ley 902 de 2017 y sus normas reglamentarias.

ARTÍCULO QUINTO: Adelantar el estudio y resolución de las solicitudes de acceso a tierra que existan en relación con la población que no cuente con la característica de ser potenciales beneficiarios del trámite de asignación de derechos con prerrogativa de adjudicación directa de que trata la sentencia **SU-426 de 2016**, conforme a lo dispuesto en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Proceder con el trámite de regularización y/o recuperación de los predios baldíos reservados que conforman el de mayor extensión denominado *"El Porvenir"*, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto. Para lo anterior, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas oficiará a las dependencias encargadas de adelantar dicho procedimiento de conformidad con las funciones contenidas en el Decreto 2363 de 2015.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez surtido el trámite de que trata el artículo anterior, continuar con las actividades descritas en el artículo 62 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017, en concordancia con el artículo 31 de la Resolución 740 de 2017, en relación con cada uno de los inmuebles objeto de eventual adjudicación.

ARTÍCULO OCTAVO: Adelantar la jornada masiva de notificación del contenido del presente acto en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, respecto de las personas relacionadas en el artículo segundo de la presente resolución, o a su apoderado, o a quien haga sus veces. En dicha jornada se podrán llevar a cabo las demás actividades de qué trata el artículo 59 de la Resolución 740 de 2017.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar al Agente del Ministerio Público del contenido del presente acto en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que, si lo estima procedente, proceda en los términos del artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO: Líbrense los oficios que correspondan de acuerdo con las actuaciones que sean requeridas en desarrollo del procedimiento de asignación de derechos de propiedad rural dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado *"El Porvenir"*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar del contenido el presente acto a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, al Ministerio de Defensa Nacional, al Municipio de Puerto Gaitán y demás entidades que se considere pertinente, a fin de activar las actuaciones que permitan el normal desarrollo del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en el predio. Lo anterior con base en el mecanismo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra este acto administrativo no proceden recursos.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los 06 SEP 2018

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CAROLINA RODRIGUEZ BOLÍVAR
Subdirectora de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas
Agencia Nacional de Tierras

Proyectó: J.A.A.F. – Gestor T 01 Grado 10.
A.L.P.C - Asesor contratista Dirección Acceso a Tierras.
A.M.G.A - Abogada contratista Subdirección.
M.A.M.T- Abogado Contratista Subdirección.

Libertad y Orden

21 de Diciembre de 2020

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
RESOLUCIÓN No. *20204000291776* **DEL** 2020-12-21 15:09

"Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras."

EL DIRECTOR DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT

En uso de sus facultades legales previstas en el numeral 9º del artículo 22 del Decreto 2363 de 2015, en armonía con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, entidad que asumió las funciones en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural que se hallaban a cargo del INCODER, y cuyo patrimonio estaría constituido, entre otros, por los bienes y recursos que le hubiera trasferido el INCODER en liquidación.

Que en el numeral 11 del artículo 4 del Decreto Ley 2363 de 2015, establece como función de la ANT la de "*Administrar las tierras baldías de la nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre éstas, celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5 º y 6 º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994*" y el numeral 12 ibídem señala el deber de "*Hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el INCODER o por el INCORA, en los casos en los que haya lugar*".

Que el artículo 22 del Decreto 2363 de 2015 define las funciones de la Dirección de Acceso a Tierras – DAT, contemplando en el numeral noveno (9º) que le corresponde "*Resolver en segunda instancia los recursos que se formulen en contra de las decisiones que tomen las dependencias a su cargo, en materia de acceso y administración de tierras*."

Que el Director de Acceso a Tierras es el superior funcional y jerárquico de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, como se determina en la estructura de la Agencia Nacional de Tierras según se encuentra definido en el artículo 6 del Decreto Ley 2363 del 2015, razón por la cual le corresponde a esta Dirección conocer y resolver el recurso de apelación, así mismo suscribir el presente acto administrativo.

1. **ANTECEDENTES Y HECHOS RELEVANTES DE LA ACTUACIÓN**

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Mediante las resoluciones números Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del agosto 13 de 2020, la Agencia Nacional de tierras – ANT resuelve unas solicitudes de Adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado "EL PORVENIR", ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán Meta, entre otras actuaciones, destacando como Hechos relevantes, los que a continuación se exponen:

Recoge en la parte considerativa el compendio de normas de rango constitucional, Artículos 64 y 65, respecto del deber que tiene el Estado Colombiano en cuanto a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra; Ley 160 de 1994, Artículo 65, que modula la propiedad de terrenos baldíos; los Decretos 1292 de 2003 y 2365 de 2015, suprimieron y liquidaron al INCORA y al INCODER, creando a través del Decreto Ley 2363 de 2015 la Agencia Nacional de Tierras.

La señora MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.417.851 y otros, mediante apoderado judicial presentaron acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras bajo el radicado No. T-00024 de 2018, ante el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META), en el cual, manifiestan que ocupan, explotan económicamente algunos predios que se encuentran ubicados en la vereda "EL PORVENIR" del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, que vienen ejecutando actos propios de ocupación y que radicaron ante el antiguo INCODER solicitud de adjudicación y no se ha dado respuesta.

El JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LOPEZ (META) mediante fallo del 24 de abril de 2018 concedió amparo constitucional de los derechos fundamentales reclamados por los accionantes, ordenando a la Agencia Nacional de tierras abstenerse de impedir explotación agropecuaria de los predios ocupados por los accionantes y adelantar los actos administrativos en el marco de las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, conforme a lo establecido por la Sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas relacionadas con los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

La Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el día 07 de junio de 2018 procedió a decidir la impugnación presentada por esta entidad (Agencia Nacional de Tierras) como accionada, en la cual, resolvió confirmar la decisión adoptada por el *a quo.* Decisión que fue notificada mediante el correo electrónico el día 08 de agosto de 2018, según comunicación de entada con radicado No. 201810307322041.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

En síntesis, los argumentos planteados por los recurrentes son los siguientes:

1. En primer lugar, los recurrentes manifiesta que el predio El Porvenir no existe jurídicamente, que se trata de una ficción jurídica, la cual no puede tenerse en cuenta en el análisis que debe realizarse, pues no tiene un número de matrícula inmobiliaria que lo identifique.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

2. Los recurrentes continúan con su argumento señalando, *"En el tema de competencia, para hacerla radicar en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas se invoca el artículo 40 del decreto Ley 902 del 2017, transcribiéndolo en su integridad y aquí debo exponerle Señor Director, que la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas* ***NO ES COMPETENTE*** *pues la A N T no ha cumplido con la exigencia que le impone el parágrafo del citado artículo 40, es decir, que no se ha identificado el predio como ubicado en zona focalizada, no se ha señalado el número de la matrícula, y menos se ha inscrito esta medida en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente (Puerto López Meta), condición o calidad o requisito para que sea oponible a terceros, incluyendo a la suscrita y para radicar la competencia en la subdirección que emitió la resolución.* ***CONCLUSION: EL PREDIO, A LA FECHA PRESENTE, NO HACE PARTE DE NINGUNA ZONA FOCALIZADA, PARA LOS EFECTOS DE ADJUDICACION."***

3. Acerca de la sentencia SU 426 de 2016 proferida por la Honorable Corte Constitucional con relación al caso del predio El Porvenir -como lo denomina el alto tribunal-, señalan los recurrentes en sus escritos que "***NO ES CIERTO*** *que allí se hayan amparado derechos fundamentales a favor de la "población histórica" que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la resolución 6423 del 2014. (…) por eso la afirmación categórica que aquí se está negando o mejor tergiversado un hecho evidente; privilegiando a unos y rechazando de plano a otros (…)";* es decir, los recurrentes consideran que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas le está dando un alcance erróneo a los efectos de la mencionada sentencia.

4. En cuanto a lo que tiene que ver con la calidad y/o condición del predio objeto de estudio, se dice por parte de los recurrentes que; "*Corresponde ahora detenernos en el estudio; tal vez; del punto más álgido y determinante y es el análisis si en verdad como lo pretende hacer ver la ANT, producto de la REVOCATORIA DIRECTA, de que trata la Resolución 6423 de 2014 los predios además de volver al patrimonio de la nación, sin solución de continuidad en el tiempo en su calidad jurídica de baldío, adquirieron la calidad de* ***BALDÍOS RESERVADOS DE LA NACIÓN****".* De acuerdo a lo anterior, los recurrentes manifiesta que la ANT negó la solicitud de adjudicación en virtud de que dicha solicitud recayó sobre un predio que ostenta la condición de baldío reservado de la nación y por ello no es procedente.

5. Otro de los argumentos expuestos por todos los recurrentes, esgrime la necesaria aplicación de la Ley 160 de 1994 y no del Decreto Ley 902 de 2017, pues consideran que no hay duda de que su solicitud de adjudicación se presentó antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley, razón por la cual se debe dar aplicación al artículo 27 del mismo, que regula lo relativo a las "solicitudes en proceso". En ese sentido, expone lo dispuesto en la sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, así como la decisión del Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López en el marco de la tutela No. 00024 de 2018.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

6. Finalmente los recurrentes exponen que bajo el título de "Efectos de la revocatoria directa: reserva especial de baldíos.", la primera instancia expuso, que con ocasión de la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014 por parte del INCODER, los predios adquirieron la calidad de baldíos, y que no es cierto, que los mismos se sustraigan de los que pueden ser ocupados libremente, por haber vuelto al patrimonio de la Nación.

Así mismo, en párrafos posteriores, manifiestan que la posesión sobre los predios se inició antes de la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014, cuando eran de propiedad privada, pero que dicha posesión se transformó en ocupación, como consecuencia de los efectos retroactivos de la resolución que resolvió la revocatoria directa (antes mencionada), es decir, que esos predios jurídicamente y para todos sus efectos, siempre han sido baldíos de la Nación. Además de que dichos predios no están fuera del régimen común de baldíos, y por lo tanto no pueden considerarse como baldíos reservados.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE AL CASO

La ANT recibió 16 recursos de apelación en contra de igual número de resoluciones individuales "*Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones*"; sin embargo, los argumentos que los 16 recurrentes presentan en contra de las respectivas resoluciones son idénticos y guardan uniformidad en las pretensiones. Sumado a esto se tiene que, el presente recurso de apelación se resuelve a la luz del análisis que la Honorable Corte Constitucional realizó del caso que ella misma denomina "El Porvenir", mediante la expedición de la sentencia SU 426 de 2016, y así mismo, se toman las pautas y lineamientos que el Alto Tribunal entrega a las entidades para actuar en el presente caso.

En virtud de lo anterior, y dando aplicación a lo estipulado en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se procede a realizar la acumulación de procesos para resolver los 16 recursos de apelación interpuestos, pues los argumentos esgrimidos y desarrollados por los recurrentes, así como las pretensiones son las mismas. De igual forma la línea argumentativa que esta Dirección empleará para resolver dichos recursos se desarrollará siguiendo una misma metodología temática, por lo que se trata de una misma actuación y de este modo se evitan decisiones contradictorias por parte de la administración.

3.1 Oportunidad

Una vez surtido el trámite, de notificación de la decisión adoptada por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y con el que, se concede los recursos de reposición y apelación contra las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020, se procederá al estudio y decisión de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en su artículo 74 dispone:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> "Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
>
> 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
> 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito (…)".

En este orden, el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en materia de oportunidad y presentación de los recursos, dispone lo siguiente:

> "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
>
> Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
>
> El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios".

Así como, el artículo 77 de la misma norma, establece los siguientes requisitos: (i) interponerse dentro del plazo legal; (ii) sustentarse con expresión concreta de la inconformidad; (iii) solicitar y aportar pruebas, e (iv) indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Respecto a los requisitos para interponer el recurso de apelación, es claro que se cumplieron en el tiempo y el modo que la ley lo exige, puesto que la notificación personal de las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020, se realizó el 14 de agosto de 2020 y la presentación del recurso de apelación se hizo el día 27 de agosto de 2020, manifestando el recurso de apelación, ante el inmediato superior administrativo de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas. Por consiguiente y de conformidad con el inciso 9º del artículo 22 del Decreto Ley 2363 de 2015, la Dirección de Acceso a Tierras tendrá como función:

> "9). Resolver en segunda instancia los recursos que se formulen en contra de las decisiones que tomen las dependencias a su cargo, en materia de acceso y administración de tierras"

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Por tanto, se procede al análisis del caso en los siguientes puntos:

3.2. Consideraciones en torno a la sentencia SU 426 de 2016 de la Honorable Corte Constitucional.

3.2.1 La sentencia SU 426 de 2016 en la decisión de primera instancia.

Las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 "*Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones*", en el acápite de Antecedentes, hace un recuento de las actuaciones judiciales que dieron lugar a que la Corte Constitucional emitiera la sentencia SU 426 del 11 de agosto de 2016, a través de la cual confirmó parcialmente la decisión de segunda instancia adoptada por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal; cada una de las resoluciones refiere que la variación de la decisión se dio "*… amparando entre otros, el derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población histórica que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural."*

Continuan las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 citando apartes del resuelve, concretamente de la orden Cuarta, y avanza indicando que "… *las órdenes proferidas por la Corte Constitucional encuentran asidero en el estudio abordado al resolver el problema jurídico que cuestiona, i) la vulneración del derecho fundamental a la tierra y el territorio de los accionantes al no adelantar la identificación y posterior titulación de los fundos pese a los efectos de la revocatoria declarada desde el 14 de julio de 2014, y ii) si la Nación recuperó documentalmente el dominio de estos.*

Que en el mismo sentido, las órdenes proferidas se enmarcaron en la relevancia constitucional del caso que "(...) se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros. En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores".

De allí que, en el asunto, la Alta Corporación tuviera en cuenta el conjunto de supuestos fácticos narrados en el trámite, que demuestra la condición de vulnerabilidad de los actores, y que devino en la categorización de estos como ***ocupantes históricos*** *(se resalta) teniendo en cuenta su asentamiento data 45 años atrás, y el padecimiento sufrido por estos "(...) debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso".* (sic)

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Frente al tema continúa las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 indicando que como consecuencia la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas procedió a abrir la actuación administrativa mediante la expedición de la Resolución No. 5776 de 2018, en la cual se indica la ruta jurídica de actuación para el estudio de las solicitudes de adjudicación en el predio denominado "El Porvenir", que se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

3.2.2 Órdenes de la sentencia SU 426 de 2016 en materia de acceso a tierras.

La sentencia SU 426 de 2016 al revisar la acción de tutela interpuesta por la señora Sulay Martínez y otros, resuelve "***CONCEDER*** *la tutela del derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor* ***de la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014****, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural*" (énfasis propio), y en consecuencia emite seis órdenes orientadas a procurar que las entidades involucradas desplieguen acciones en aras de garantizar los derechos tutelados.

En ese sentido, la orden cuarta de la sentencia contiene siete aspectos que debe desarrollar la "*mesa de trabajo interinstitucional* ***para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir***" (énfasis propio), siendo los que se enuncian a continuación, aquellos que guardan relación con la adjudicación de predios a población campesina:

> *"(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.*
>
> *(…)*
>
> *(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga* ***a los peticionarios*** *una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva,* ***el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos****, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias. (…)"* (énfasis propio).

Para el entendimiento pleno de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en el resuelve, se hace necesario acudir a las consideraciones de la sentencia y en particular, a aquellos apartes que se convierten en la "razón de la decisión", toda vez que la lectura sistemática del pronunciamiento suministra elementos de contexto para su adecuada interpretación y ejecución.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

En ese sentido, se debe partir de los problemas jurídicos propuestos y abordados por el Alto Tribunal en la decisión, en la medida que estos circunscriben y acotan el objeto de debate y por lo tanto del sentido del pronunciamiento; así la sentencia definió dos problemas jurídicos:

> *"La Sala Plena debe resolver dos problemas jurídicos independientes, pero relacionados entre sí. El primero se refiere a la supuesta inacción del Incoder en lo que tiene que ver con la recuperación material de los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 (que componen El Porvenir) y la adjudicación y titulación de los mismos a favor de la comunidad campesina de El Porvenir. El segundo tiene que ver con los problemas de seguridad que enfrenta esta comunidad y su líder, el señor Miguel Briceño por reclamar derechos territoriales sobre tales bienes".*

Pasando al estudio de la orden cuarta del resuelve, concretamente en cuanto al citado numeral segundo, se puede evidenciar que éste implica la realización de dos actividades generales y dependientes entre sí, pues ordena que i) se realice un censo de los ocupantes de los veintisiete (27) predios objeto de revocatoria directa, que son los que integran el predio de mayor extensión denominado El Porvenir, y a su vez indica que, ii) se debe definir de estas personas censadas quienes reúnen los requisitos para ser considerados *sujetos de reforma agraria*, conforme lo dispuesto en la Ley 160 de 1994.

Con las pautas dadas en este numeral, el Alto Tribunal pretendía poner límite a nuevas ocupaciones en el predio, y por lo tanto, a nuevas pretensiones de adjudicación sobre el mismo, pues el censo permite contar con una fotografía o un reflejo del estado actual de las cosas al momento en el que se realiza, es decir, número de personas y su relación con la tierra en el momento de la toma de información en sitio.

En el mismo numeral se dispone que, a partir del insumo que proporciona el censo se debe proceder a establecer quiénes cumplen con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, lo cual se entiende respecto de los ocupantes que hicieron parte del mismo. Al respecto, vale la pena señalar que en este punto la Corte Constitucional nada dijo ni ordenó, respecto a la adjudicación de los predios a los posibles beneficiarios, sino que se limitó a la definición de si se es o no sujeto de reforma agraria.

Acerca de los requisitos para ser sujeto de reforma agraria conforme la Ley 160 de 1994, en el numeral 4.5 de las consideraciones y fundamentos, la sentencia señala:

> *"Además, esta nueva Ley incorporó como* ***requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario:*** *(i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF; adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

posesión". (énfasis propio).

Ahora bien, pasando al numeral cuarto de la orden cuarta, la Corte Constitucional señala que no se debe imponer a los "peticionarios" una carga que no estén en capacidad de cumplir, respecto de los requisitos para ser sujeto de reforma agraria, y continúa indicando que bajo esa perspectiva se debe adelantar e impulsar el proceso de adjudicación de bienes baldíos definido en la Ley 160 de 1994.

Para un entendimiento pleno de la orden, vale la pena acudir de nuevo al acápite de consideraciones y fundamentos de la sentencia, pues ahí se observa que esta orden se encuentra motivada en el numeral 9.1., toda vez que al abordar el primer problema jurídico se puede advertir que al referirse a *"los peticionarios",* la Corte se está refiriendo a los accionantes de la tutela que dio lugar a la SU 426 de 2016, que a su vez, se podría entender como *"población histórica"*, en la medida que señala "*De acuerdo con los hechos narrados en la acción de tutela y las conclusiones presentadas en el acápite anterior,* ***los peticionarios hacen parte de la comunidad campesina de El Porvenir, personas que hace más de cuarenta años comenzaron a hacer presencia en la zona y a ocupar los predios en disputa y a explotarlos económicamente****."*

Así mismo, en el numeral 10.9. vuelve a referirse a *"los peticionarios"*, al indicar que "*En virtud de lo expuesto, la Sala modificará la decisión de segunda instancia en lo que tiene que ver con el derecho de los peticionarios a que se defina su situación de acceso a la tierra. En consecuencia, ordenará al Incoder que adelante gestiones para la entrega material del bien, con verificación y control administrativo y policial*".

Sumado a esto, en el numeral cuarto de la orden cuarta se indica la población a la que pretende beneficiar, señalando que busca mitigar el hecho de que El Porvenir haya sido apropiado por un privado "*… en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia*", y al acudir a los hechos que el Alto Tribunal estudió, analizó y aceptó, encontramos a manera de resumen:

> *"Así las cosas, esta breve recomposición de la historia jurídica demuestra que El Porvenir fue, primero, un predio apropiado por particulares, explotado por campesinos, calificado como baldío por el Estado, fragmentado estratégicamente en 27 fracciones para ser adjudicado en el marco de la reforma agraria y posteriormente, convertido en cinco grandes propiedades, en el marco de los protocolos notariales y la inscripción en el registro, ya sin ánimo de aparentar validez legal alguna (dado que la extensión de los predios hacía evidente la ilegalidad de los negocios)."*

Adicionalmente en el numeral 8.6 de las consideraciones y fundamentos, al estudiar el segundo problema jurídico, es decir, lo relacionado con la situación de seguridad en El Porvenir, la Corte Constitucional realizó un análisis del contexto tomando información suministrada por los accionantes, también por la población campesina, por la institucionalidad y por organizaciones de derechos humanos que realizaban acompañamiento en la región, concluyendo que:

> *"(iii) Este contexto ha tenido consecuencias directas en el ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores de la zona de El Porvenir, en Puerto Gaitán, pues en el área se han presentado distintos hechos violentos,*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *cuya perdurabilidad lleva a advertir la persistencia de riesgo a la seguridad, integridad y vida de los miembros de la comunidad campesina.*
>
> *(iv) La situación descrita se agrava por la ausencia de una respuesta institucional efectiva a sus requerimientos para la protección de las tierras (aspecto en el que se profundizará en el siguiente acápite) y en la negligencia de las autoridades locales y regionales en lo que tiene que ver con la garantía de condiciones de habitabilidad dignas, como se constata en la narración de los problemas para el acceso a servicios públicos, de educación y salud de la Defensoría del Pueblo."*

En la misma línea argumentativa, en el numeral 8.7 la Corte Constitucional expresa claramente que los predios que fueron objeto de revocatoria directa mediante la Resolución No. 6423 de 2014 del INCODER, a su vez, se encontraban habitados por población campesina que históricamente ha estado asentada en ese lugar, y que han estado expuestos a un escenario de conflicto y a hechos victimizantes:

> *"Para la Sala, entonces, no cabe duda de que* ***la comunidad campesina históricamente asentada en la zona de El Porvenir*** *(donde se encuentran los predios referidos en la Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Incoder),* ***ha atravesado las consecuencias victimizantes de un contexto violento****, propio del conflicto armado interno, sin que las autoridades públicas atiendan las advertencias de riesgo puestas de presente no sólo por parte de los campesinos habitantes, sino también por distintos organismos gubernamentales y particulares. Esta situación de inseguridad y ausencia de condiciones de habitabilidad adecuadas deviene en una violación del derecho fundamental a la vida digna de esta población".*

En ese sentido el Alto Tribunal considera que, el escenario de violencia y conflicto presente en la región aunado a la falta de respuesta institucional, de cara a la garantía de derechos fundamentales y a derechos sociales y económicos, explica plenamente las situaciones de hecho que se presentaron respecto de la relación con la tierra, y en ese sentido se convierten en la razón por la cual la entidad -INCODER, ANT- y la institucionalidad en general, deben adecuar sus estándares (requisitos y rutas) para garantizar derechos a la población campesina que históricamente ha habitado en El Porvenir.

Las "razones de la decisión" que la Corte Constitucional expone en el acápite de consideraciones y fundamentos de la sentencia, permiten extraer elementos que se deben tener en cuenta al momento de definir lineamientos para establecer el contenido y cumplimiento de las órdenes, para el caso concreto, aquellas que se relacionan con la garantía de acceso a la tierra vía adjudicación por parte de la población campesina, como principal destinatario de los predios baldíos de la Nación.

Volviendo al texto del numeral cuarto de la orden cuarta del resuelve, se tiene que este señala que se debe *adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de baldíos,* es decir, que respecto de los "peticionarios" (accionantes, comunidad históricamente asentada en El Porvenir), la Corte Constitucional si dio la orden expresa de adelantar el proceso de adjudicación para quienes cumplan con los requisitos de sujetos de reforma agraria.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

La diferenciación en la intencionalidad de los citados numerales, también encuentra sustento en las consideraciones de la sentencia, así el Alto Tribunal en el numeral 9.3.3 sobre los ocupantes de El Porvenir, señaló:

> ***"Por supuesto, también los accionantes y los órganos de control han informado acerca de la aparición reciente de nuevos ocupantes, tal como lo hace el Incoder. Pero es claro que estos últimos no pueden confundirse con quienes llevan medio siglo viendo afectados sus derechos y (al menos) dos décadas asumiendo una compleja disputa legal y jurídica por su titularidad. Si esta confusión se produce, ello obedece precisamente a las actuaciones y especialmente las omisiones del Incoder frente a la situación de El Porvenir."***

Así las cosas, la referencia a *comunidad históricamente asentada* se entiende respecto de los accionantes de la tutela que dio lugar a la sentencia SU 426 de 2016 y serán los que tengan prioridad de cara a la adjudicación de predios que hacen parte del predio de mayor extensión conocido como El Porvenir, lo que de ninguna manera implica desconocer el derecho de acceso a la tierra por parte de los ocupantes que hacen parte del censo levantado por la ANT en cumplimiento del numeral segundo de la orden cuarta de la misma sentencia, como se expuso anteriormente.

Así mismo, se hace necesario atender, dar respuesta y orientar las comunicaciones remitidas por la población campesina en su intención de acceder a la tierra o conocer el procedimiento a través del cual pueden acceder a esta, pues en el análisis que la Corte Constitucional realizó del caso concreto, consideró que en atención al contexto descrito anteriormente resulta procedente dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, de modo que las comunicaciones que en su momento fueron remitidas por los peticionarios en las que se refleje una pretensión de adjudicación, debe entenderse de esa forma más allá de la forma en la que se presente. Señaló la Corte en el numeral 9.3.2.

> *"No cabe duda de que, en semejante escenario, las comunicaciones de los peticionarios deben interpretarse como una petición formal en los términos del artículo 23 Superior, y dar lugar a una respuesta de fondo por parte de la Institución, ya sea para iniciar el estudio de las solicitudes de adjudicación o para guiar el inicio de los trámites respectivos."*

Finalmente, es preciso señalar que la posibilidad de atender las solicitudes de adjudicación y garantizar el acceso a la tierra tanto a los peticionarios, a quienes históricamente se han asentado en el predio y a quienes se encuentran en el censo de ocupantes, se supedita al hecho de lograr la recuperación material de los predios que ya fueron recuperados jurídicamente a través de la Resolución No. 6423 de 2014 del INCODER, es decir, que la Agencia Nacional de Tierras pueda ejercer su deber legal de administración de los predios baldíos de la Nación en aras de dar cumplimiento al fin constitucional y legal de los mismos.

Frente al tema y en su momento el Alto Tribunal señaló:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *"Pero desde el punto de vista del goce efectivo de los derechos de los pobladores de El Porvenir, ambos trámites podrían resultar inocuos, pues el Estado no ha asegurado la tenencia física y material de los predios, ni su protección frente a quienes históricamente los ocuparon indebidamente.*
>
> *… Resulta entonces imprescindible que la Corte recuerde una vez más que la finalidad de la recuperación de baldíos no se agota en la restitución del patrimonio estatal, sino que persigue la eficacia de los artículos 64 y 65 de la Constitución: los baldíos son el principal instrumento para propiciar el acceso a la tierra y la equidad en el campo (al, respecto, ver sentencias C-595 de 1995 y C-644 de 2012, previamente citadas).*

3.2.3. Sentencia SU 426 de 2016 como marco jurídico para resolver las solicitudes de adjudicación respecto de los predios baldíos que hacen parte de "El Porvenir".

Ahora bien, con fundamento en lo expuesto hasta el momento, podemos mencionar, que cada una de las solicitudes de adjudicación por parte de los peticionarios, de la comunidad históricamente asentada y demás interesados, sobre los predios que fueron objeto de la decisión de revocatoria directa proferida por el extinto INCODER, a través de la Resolución No. 6423 de 2014, se deberán entrar a estudiar teniendo como marco jurídico, lo indicado por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016, así como la necesidad de realizar la recuperación material de las tierras, como factor determinante para que se lleve a cabo el cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la tierra de los miembros que pertenecen a la comunidad campesina de El Porvenir.

Por ende, no es posible entrar a resolver solicitud alguna de adjudicación sobre terrenos que hacen parte de los 27 predios identificados como baldíos de la Nación en virtud de la citada resolución, hasta tanto, no se resuelvan aquellas peticiones o solicitudes de la comunidad campesina de El Porvenir que ha hecho presencia histórica en la zona, desde la época en que dicho predio fue apropiado por particulares y posteriormente, de manera irregular, adjudicado en 27 predios en el año 1992 por el INCORA, sin desconocer las posibles expectativas y demás situaciones, creadas a favor de los campesinos que han llegado o se han asentado posteriormente en la zona, con la finalidad de ejercer una explotación u ocupación sobre dichos predios.

Es así como corresponde, a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, entrar a realizar de manera conjunta el procedimiento de adjudicación de tierras respecto de los 27 predios baldíos ubicados en la zona de El Porvenir, esto es, que se debe garantizar una respuesta frente a las solicitudes de acceso a tierra para cada uno de los peticionarios[1], en especial, de aquellos que históricamente se han asentado en el predio, así como de aquellos que se encuentren en el censo de ocupantes, y demás situaciones que se puedan advertir.

[1] Tal como lo señaló la Corte Constitucional y como se expuso en el numeral 3.2.2. del presente documento.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

La finalidad de lo anterior, radica en el hecho, de que cada una de las solicitudes de adjudicación se debe entrar a estudiar jurídicamente, con la finalidad de determinar si se reúnen o no los requisitos para ser sujeto de reformar agraria, tal y como lo señaló la Honorable Corte Constitucional en el punto ii) del numeral 4° del resuelve de la Sentencia SU 426 de 2016, para de esta manera entrar a determinar la forma de adjudicación entre todos los posibles beneficiarios, siempre y cuando el área o la cantidad de tierra lo permita, conforme a los estudios técnicos y agronómicos pertinentes.

Valga la oportunidad, para reiterar una vez, lo mencionado por el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia de unificación, respecto a los ocupantes de El Porvenir:

> *"No corresponde a la Corte evaluar la situación específica de cada una de las 421 familias que actualmente esperan una decisión del Incoder. Esta actividad deben adelantarla dicho Instituto y la Unidad de Tierras, en el marco de sus competencias.* ***Pero es irrazonable que se ignore la presencia histórica de la población de El Porvenir o que se asimile a la de posibles ocupantes actuales*** *(de hace tres meses, según las palabras del Incoder) como lo hace el Incoder, al afirmar que ninguna de las familias que pueden hallarse hoy en día en El Porvenir podría acreditar una explotación pacífica del mismo por más de cinco años, dado que el baldío regresó a la Nación hace apenas algo más de un año."* (énfasis propio).

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el enfoque especial fijado por la Corte en el aparte de la providencia judicial citada, no resulta pertinente que se resuelvan solicitudes de adjudicación de posibles ocupantes o personas que iniciaron una presunta explotación sobre los predios, en épocas o momentos posteriores, sin antes entrar a determinar los integrantes de la población histórica de El Porvenir que reúnen los requisitos pertinentes para ser sujetos de reforma agraria, y por lo tanto, virtuales beneficiarios de un proceso de titulación.

Por otra parte, en cuanto al contenido de la orden cuarta numeral cuarto, en el punto en donde el Alto Tribunal conmina a la autoridad de tierras, en su momento INCODER hoy la ANT, a "… *evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia o corrupción estatal",* tal como lo identificó en el caso bajo estudio; se tiene que efectivamente no sólo la autoridad de tierras, sino el sector agrario en general atendió éste y otros llamados, como el del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto a través del punto No. 1. *Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral*, lo que dio lugar a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017.

A través del Decreto Ley 902 de 2017, se busca disponer de aspectos procedimentales para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, la cual establece que los sujetos beneficiarios deben ser "*trabajadores con vocación agraria, sin tierra suficiente y especialmente las mujeres y las personas desplazadas por la violencia…",* constituyéndose en la base de su funcionamiento, razón por la cual resulta fundamental su caracterización y clasificación, de ahí que el citado Decreto dedique el Título II al Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO como un sistema que permite la inmediata inscripción de los beneficiarios, mediante una herramienta de registro e identificación de quienes aspiran a programas de acceso a tierras y formalización de la

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

propiedad.

El artículo 14 presenta los criterios para la asignación de puntaje en el RESO de acuerdo a variables de calificación, dentro de las cuales se encuentran aspectos mencionados por la Corte Constitucional en la sentencia bajo análisis, tales como el ser víctima del conflicto armado, ser mujer campesina, así como las condiciones socioeconómicas (condiciones de vulnerabilidad), residencia previa en la región, entre otros. Es decir, que toma en cuenta características de la realidad y dinámica de vida de los beneficiarios que anteriormente no se consideraban, con el fin de realizar una calificación objetiva que permita la ejecución gradual de la política pública, en aras de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva a los beneficiarios.

Lo descrito anteriormente responde a lo dispuesto por el Alto Tribunal en el acápite de consideraciones y fundamentos en el numeral 10.8, al señalar:

> *"Ciertamente, la Ley 160 de 1994 exige una explotación continua para lograr la adjudicación de un baldío, bajo el lema histórico de que la tierra es de quien la trabaja. Pero el Estado no puede utilizar ese principio para extinguir o violar derechos de la población rural, cuando la posibilidad de cumplir esa exigencia se ve frustrada por su incapacidad para mantener el orden público y su complacencia con los sujetos causantes del despojo."*

También se encuentra en consonancia con el numeral quinto de la orden cuarta, en la medida que el Decreto Ley 902 de 2017, en su articulado, contempla medidas afirmativas en favor de la mujer rural y de manera concreta la calificación que se realiza en RESO incluye variables que corresponden expresamente a dichas medidas afirmativas en favor de la población femenina, de modo que su aplicación frente al caso particular responde a la intencionalidad de hacer menos gravoso a los peticionarios el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de adjudicación de tierras.

La orden cuarta de la sentencia en el numeral quinto dispuso:

> *"(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes…"*

Para esta instancia resulta claro que, si bien el Alto Tribunal en la sentencia SU 426 de 2016, dispuso que se definieran quienes reúnen los requisitos para ser sujetos de reforma agraria según la Ley 160 de 1994, y bajo la misma norma se impulsaran los procesos de adjudicación de bienes baldíos, también señaló expresamente tanto en el resuelve como en las "razones de la decisión", que la autoridad de tierras y las entidades en general, deben evitar imponer a los peticionarios[2] cargas que no se puedan cumplir, tomando en cuenta las características que rodean el caso, llevando a que reciba la categoría de emblemático.

[2] Categoría ya analizada en el numeral anterior.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

En ese sentido y toda vez que para la fecha de la expedición de la sentencia no se contaba con el Decreto Ley 902 de 2017, la Corte Constitucional no podía hacer referencia a este instrumento normativo, sin embargo, en su exposición si se evidencia la intencionalidad por hacer menos gravoso el cumplimiento de requisitos para lograr el acceso a la tierra, de modo que al analizar el Decreto a la luz de las pautas dadas por el Alto Tribunal se puede advertir como éste responde plenamente a dicha intencionalidad y permite cumplir con las órdenes suministradas en mejor medida que si se diera aplicación a la Ley 160 de 1994.

A través de la implementación del Decreto Ley 902 de 2017, éste se torna en un instrumento pertinente a aplicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que se han enfrentado históricamente los campesinos pertenecientes a la comunidad de El Porvenir, teniendo en cuenta las graves circunstancias de orden público, que hacen casi imposible para algunos de los peticionarios, demostrar o acreditar la explotación económica de los predios, tal y como lo exige la Ley 160 de 1994.

3.3 Normativa aplicable, competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad.

3.3.1 Normativa aplicable que minimiza las cargas de requisitos a los aspirantes.

En aras de cumplir la orden de la Corte Constitucional emitida al INCODER o quien haga sus veces mediante la sentencia SU 426 de 2016, en este caso la Agencia Nacional de Tierras, se deberá evaluar los requisitos propios de la reforma agraria establecidos en la Ley 160 de 1994, con el fin de que no se imponga una carga a los ocupantes históricos que no puedan cumplir por negligencia y corrupción estatal, para lo cual, esta Agencia considera que con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, "*Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras*", este entraría a ser mucho más garantista para los ocupantes históricos al momento de establecer los requisitos para ser sujeto de acceso a tierras, los criterios para la asignación de puntos en el RESO, los cuales, tienen en cuenta variables de vulnerabilidad frente a los peticionarios y finalmente, referente al trámite de su solicitud, esta se realizaría mediante el Procedimiento Único de que trata este Decreto Ley.

Así las cosas, es menester recordar los requisitos exigidos por la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias, que en su momento estuvieron vigentes al momento de dictar las ordenes por parte de la Corte Constitucional, al respecto en el numeral 4.5 de las consideraciones y fundamentos de la sentencia SU 426 de 2016 señala lo siguiente:

> *"Además, esta nueva Ley incorporó como* ***requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario:*** *(i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF; adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de posesión".* (énfasis propio).

Además de los requisitos enunciados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016, en la Ley 160 de 1994 también se requieren como requisitos adicionales ser mayor de 16 años de edad; haber ocupado el predio por un mínimo de 5 años; no ser propietario o poseedor a cualquier título de otros predios rurales; no haber enajenado predios adjudicados o si esto se hubiere hecho deben haber trascurrido al menos 15 años desde la primera adjudicación; no estar afectado por alguna prohibición, limitación o inhabilidad legal para ser sujeto de reforma agraria; que su ocupación en el predio baldío no se derive del fraccionamiento de terrenos efectuado por personas que lo hayan tenido indebidamente o que sean inadjudicables; y que los 5 años anteriores a la fecha de solicitud, no se haya tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Contrario sensu, con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, a comparación de los requisitos anteriormente enunciados, se puede evidenciar la disminución en las exigencias para los Sujetos de Acceso a tierra, por lo que, en procura de darle cabal aplicación a lo ordenado en la sentencia SU 426 de 2016, estos son los que deberían cumplir los beneficiarios de la sentencia:

> *Artículo 4. Sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito. Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia ya la población desplazada, que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:*
>
> *1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.*
>
> *2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.*
>
> *3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito quienes además de lo anterior, sean propietarios, poseedores u ocupantes despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

Es así como, se logra evidenciar un aligeramiento en los requisitos exigidos a los ocupantes históricos aplicando el Decreto Ley 902 de 2017 en comparación de los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la Ley 160 de 1994. También es importante mencionar los criterios para la asignación de puntaje en el RESO, cuyo Registro de Sujetos de Ordenamiento, es el instrumento de planeación y ejecución gradual de la política pública de acceso y formalización de tierras de forma progresiva utilizado por la Agencia Nacional de Tierras, tal y como lo establece el artículo 14, los criterios serán los siguientes:

Artículo 14. Criterios para la asignación de puntos para el RESO. El Registro Único de Solicitantes de Tierras se organizará mediante un sistema de calificación que estará sometido a las siguientes variables:

a) Condiciones socioeconómicas y las necesidades básicas insatisfechas del solicitante y su núcleo familiar.
b) ***Cuando las solicitantes sean mujeres campesinas.***
c) Número de personas que dependen económicamente de los ingresos del núcleo familiar, la presencia de sujetos de especial protección y la condición de cabeza de familia.
d) ***Ser víctima del conflicto armado, en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.***
e) Personas beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra.
f) Campesinos que se encuentren en predios al interior de resguardos o reservas constituidas por el INCORA que estén pendientes de conversión a resguardos y aquellos que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes.
g) Personas que hacen parte de programas de reubicación y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos de uso ilícito y fortalecer la producción alimentaria.
h) Experiencia en actividades productivas agropecuarias.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *i) Pertenencia a asociaciones campesinas cooperativas o de carácter solidario cuyo objeto sea la producción agropecuaria, la promoción de la economía campesina, o la defensa del ambiente, con presencia en el municipio o la región.*
> *j)* ***Residencia previa o actual en el municipio o región.***
> *k) Jóvenes con formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales."* (énfasis propio).

Por otra parte, es relevante también decir que para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar en la Ley 160 de 1994, se realiza mediante la metodología de las Zonas Relativamente Homogéneas establecidas en la Resolución 041 de 1994, mientras que, el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar establecida en el Decreto Ley 902 de 2017, se hará mediante la metodología predial, permitiendo la obtención de ingresos a los beneficiarios de 2 a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes con la implementación de su proyecto productivo.

Adicionalmente, es necesario traer a colación el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017, en el que expresamente se deroga los incisos 1 y 2 del artículo 69 de la Ley 160 de 1994, en el cual se establecen los requisitos de la ocupación previa en predio por 5 años y la explotación al menos de las 2/3 partes del predio, para darle paso a los requisitos de sujetos de acceso a tierra a título gratuito y parcialmente gratuito de que trata el Decreto Ley 902 de 2017.

> *"Articulo 82. Vigencias y derogatorias. El- presente decreto ley rige a partir de su expedición y deroga: el capítulo 4; el capítulo 5; el capítulo 8; el capítulo 10 artículos 49, 50 Y 51; el capítulo 11 artículo 53, artículo 57 incisos 2 y 3, parágrafo del artículo 63, artículo 64; capítulo 12 artículo 65 inciso 4, artículo 69 incisos 1 y 2, artículo 71, artículo 73, parágrafo 1 del artículo 74 de la ley 160 de 1994; y las demás normas procedimentales que contradigan el contenido del presente Decreto Ley."*

Si bien es cierto que, se evidenció por parte de esta Dirección la ruta a seguir, la cual, impusiera una menor carga frente a los requisitos para el acceso a la tierra a los sujetos de acceso mencionados en la sentencia SU 426 de 2016, también es cierto que, se debe entrar hacer una revisión del procedimiento aplicable para las zonas focalizadas y determinar conforme a las competencias propias establecidas en el Decreto Ley 2363 de 2015, el despacho que tiene la competencia para conocer y resolver de fondo las solicitudes que se realicen con ocasión en zonas previamente focalizadas por el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, para el presente caso se encuentra en la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

3.3.2. Competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad en municipios focalizados.

Con el fin de esclarecer si la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para conocer de los municipios que se encuentren focalizados por parte de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo primero que se debe revisar es el concepto del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad y como este debe ser desarrollado por la Agencia Nacional de Tierras previa observancia de los lineamientos y metodología establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Rural.

Así pues, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural es la política pública del Gobierno Nacional para transformar el campo colombiano, y debe ser el consecuencia de un proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, el cual, está encaminado a contribuir en la armonización de la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, con el fin de que se mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera), el uso eficiente del suelo, la distribución equitativa y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y económica, de manera articulada con los instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo rural existentes en el territorio.

Que dentro de la política pública establecida, se encuentra un componente llamado Ordenamiento social de la propiedad, cuyo proceso versa en la planificación y gestión para ordenar la ocupación y el uso de las tierras en la ruralidad, así como, la administración de tierras de la Nación, promoviendo el acceso progresivo a la propiedad y a otras formas de tenencia, a la *distribución equitativa de la tierra*, a la *seguridad jurídica en la tenencia de la tierra*, a la planificación, gestión y financiación del suelo rural, a un mercado de tierras monitoreado y efectivamente trasparente, con miras de cumplir la función social y ecológica de la propiedad, así contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

Es así como, el ordenamiento social de la propiedad implica rediseñar la atención de necesidades de administración y gestión de tierras rurales por parte de la institucionalidad, pues ya no solamente se atenderá exclusivamente las solicitudes de los interesados por demanda, sino que la institucionalidad tendrá un enfoque proactivo dirigido a la oferta de servicios, teniendo como pilar la iniciativa gubernamental para la atención de solicitudes y requerimientos originados en la relación entre la población rural y la tierra.

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como promotor del desarrollo rural con enfoque territorial de conformidad con el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 1985 de 2013, tendrá dentro de sus funciones la de "*Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo rural con enfoque territorial, en lo relacionado con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales*".

Por otra parte, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo consagrado en el artículo 3 del Decreto 4145 de 2011, será la de "*Orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios*", en concordancia con el numeral 4 del artículo 5 del mismo Decreto, que establecerá como una de sus funciones el "*Planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para tal efecto"*, en consecuencia, la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

y evaluación de las políticas públicas en estas materias.

Ahora bien, mediante el Decreto Ley 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras, con el objeto de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, como consecuencia de la funciones de cada una de las entidades enunciadas y en concordancia con el ámbito de sus competencias, se llevó a cabo un trabajo mancomunado entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de acordar los lineamientos y la metodología para la operación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, los cuales se materializaron mediante las Resolución No. 000129 del 26 de mayo de 2017 "*Por la cual se adoptan los lineamientos para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones*" y la Resolución No. 000130 del 30 de mayo de 2017 "*Por medio de la cual se adopta la metodología de la focalización territorial para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones*", ambas resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por una parte, conforme a la Resolución No. 000129 del 26 de mayo de 2017, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural se elaborarán y se ejecutarán en zonas focalizadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como, en las áreas focalizadas por el catastro multipropósito.

En ese orden, es importante mencionar los criterios para la focalización de municipios contemplados en el artículo 3 de la Resolución No. 000130 del 30 de mayo de 2017, lo cual establece lo siguiente:

> *"Artículo 3. Criterios para la focalización territorial. Para la aplicación de la focalización territorial de las zonas a intervenir aplicando la modalidad de barrido predial y para la focalización territorial para la asignación del SIRA, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:*
>
> *1-Predios que no tengan identificada la matricula inmobiliaria en la base catastral;*
> *2-Predios con falsa tradición identificada en el folio de matrícula inmobiliaria;*
> *3- Predios sin interrelación catastro-registro;*
> *4-Predios con mejoras inscritas en catastro;*
> *5-Predios reportados por la Superintendencia de Notaria y Registro a la Corte Constitucional en cumplimiento de la Sentencia T-488 de 2014;*
> *6-Predios nominados como baldíos en la base catastral;*
> *7-Zonas con potencial productivo; y*
> *8-Rezago institucional."*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Así mismo, es menester tener en cuenta las variables para la focalización territorial de política pública, con el fin de poder instaurar el orden de priorización a las zonas focalizadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales tendrán que ser atendidas mediante la modalidad de barrido predial, por lo que se enuncian a continuación:

> *"Articulo 4. Variables para la focalización territorial de política pública. Para establecer el orden de prioridad de las zonas focalizadas que deberán ser atendidas mediante la modalidad de barrido predial, se deben considerar las siguientes variables:*
>
> *1-Porcentajes de mujeres rurales cabeza de hogar que habiten los municipios;*
> *2-Densidad de la población rural de cada municipio;*
> *3-Municipios priorizados por el Catastro Multipropósito;*
> *4-Municipios en los que se ejecuta el programa Colombia Siembra;*
> *5-Municipios en los que se ejecutan Proyectos Estratégicos de Interés Nacional-PINE*
> *6-Municipios en los que se ejecuta el programa de sustitución de cultivos ilícitos;*
> *7-Muncipios con operaciones de desminado humanitario;*
> *8-Zonas de influencia de los distritos de riego y drenaje;*
> *9-Municipios en los que haya Zonas veredales Transitorias de Normalización de que trata el numeral 3.1.4.1 del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera";*
> *10-Municipios priorizados para el posconflicto;*
> *11-Las demás que sugiera el Comité Técnico para la focalización territorial de política pública. (…)"*

En razón a lo dispuesto y de acuerdo con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras en su artículo 3 del Decreto Ley 2363 de 2015, es propósito de esta Agencia ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación. Por lo tanto, teniendo en cuenta las Resoluciones 000129 y 000130 de 2017 por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras por mandato expreso del numeral 2 del artículo 16 del Decreto Ley 2363 de 2015 deberá "*impartir directrices para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015*".

Por consiguiente, la Agencia Nacional de Tierras en uso de sus facultades para el caso en concreto, dispuso mediante la Resolución 4375 de 2018 "*por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) y se dictan otras disposiciones*", previa focalización de este municipio por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se establecería el procedimiento para la formulación del plan de ordenamiento social de propiedad para

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, el cual, también hace parte de los 11 municipios focalizados por parte del DNP y el IGAC para la implementación del proyecto piloto del Catastro Multipropósito establecido en el CONPES 3859 de 2016.

Es así como la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas entra a tener competencia en el municipio de Puerto Gaitán ubicado en el departamento del Meta, en virtud del artículo 23 del Decreto Ley 2363 de 2015, pues le corresponderá resolver los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en zonas de barrido predial focalizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que, será la encargada de la adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, adjudicación de baldíos a personas naturales, asignación del subsidio integral de reforma agraria y en general resolver de las formas alternativas de dotación de tierras que se formulen dentro de las zonas de barrido predial focalizadas.

Aunado a las competencias otorgadas por el Decreto Ley 2363 de 2015, la Resolución 1384 del 05 de octubre 2017 "*Por medio de la cual se imparten orientaciones para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios en los cuales se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito*", se establece en su artículo 2 que, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas empezará a ejercer la función que le corresponde de resolver en primera instancia los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en los municipios objeto de las intervenciones catastrales bajo la metodología del levantamiento predial multipropósitos contemplada en el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, entre los cuales se encuentra incluido el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta.

No obstante, de conocer por competencia otorgada por la Ley y las resoluciones enunciadas para zonas focalizadas, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas también tendrá como obligación conocer de los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que sean designados por la Dirección de Acceso a Tierras en virtud de que estos se encuentren en los municipios objeto de intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial catastro multipropósito, por lo que la Resolución 1384 del 05 de octubre de 2017 en su artículo 3 dispone lo siguiente:

> *"En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 24 del Decreto Ley 2363 de 2015, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, ordénese a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión remitir a la Dirección de Acceso a Tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes ocho municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Topaipi (Cundinamarca), Dibulla (Guajira), Puerto Gaitán (Meta) Lebrija (Santander), Puerto Leguizamo (Putumayo), Santa Marta (Magdalena), San Carlos (Antioquia) y Ovejas (Sucre).*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *La Dirección de Acceso a Tierras distribuirá los expedientes remitidos entre sus Subdirecciones o, entre las Unidades de Gestión Territorial por delegación del Director General, según corresponda a la naturaleza de cada caso"*

En atención a lo dispuesto, la Dirección de Acceso a Tierras a través del memorando No. 2018200005571 del 15 de enero de 2018, ordenó que se le entregara a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas el expediente administrativo relacionado con "El Porvenir", cuya ubicación se encuentra en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, para que, dentro de las competencias otorgadas por la ley, se adelantarán todas las actuaciones administrativas tendientes a la resolución del caso en concreto. En consecuencia, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas tendrá plenas facultades para conocer de las solicitudes de adjudicación de predios baldíos ubicados en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, por este encontrase focalizado.

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, se encuentra dentro de los municipios focalizados por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que de acuerdo a esto, la Agencia Nacional de Tierras en su pleno uso de sus facultades, siguiendo los lineamientos y metodología del Ministerio, desarrolló el plan de Ordenamiento Social de la Propiedad para el municipio en mención, por lo que, conforme a la ley y la correspondiente delegación de su superior jerárquico, le corresponderá a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de conocer todos los procesos que en el ámbito de su competencia se encuentren ubicados en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, en especial los relacionados a la vereda "El Porvenir".

3.3.3. Aplicación del Procedimiento Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 para el cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia SU 426 de 2016.

Es así, por consiguiente, si el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, al ser un municipio focalizado como se expuso por esta Dirección, será entonces indiscutiblemente el Procedimiento Único que se debe aplicar para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional, no solo porque este procedimiento del Decreto Ley 902 de 2017 es menos rígido y con un menor tiempo previsto en su trámite para los ocupantes históricos, sino que también, de conformidad con este mismo Decreto Ley, se estableció en su artículo 40 la aplicación del Procedimiento Único en las zonas focalizadas, de la siguiente forma:

> *"Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas. El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

de desarrollo sostenible que se hayan formulado.

La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción."

Así mismo, como se enuncia para la asignación y el reconocimiento de derechos de propiedad, los cuales, se tramitarán conforme al Procedimiento Único, según lo establecido en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017:

"Artículo 58. Asuntos a tratar a través del Procedimiento Único. A través del Procedimiento Único se adelantarán los siguientes asuntos:

1. *Asignación y reconocimiento de derechos de propiedad sobre predios administrados o de la Agencia Nacional de Tierras. (…)"*

Es importante también mencionar en este punto, que se está hablando de 27 predios identificados con folios de matricula inmobiliaria los cuales se encuentran en nuestra base de datos de bienes baldios de la Nación. Cuando se hace referencia al conjunto de los predios como el predio denominado "El Porvenir", es a una alución coloquial que es por demás conocida por todos en la región (hecho notorio) y utilizada por los estrados judiciales, incluso por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016, así como en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, incluso por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Lopez (Meta) que concedió el amparo constitucional a los recurrentes.

Por otra parte, la orden cuarta de la Sentencia SU 426 de 2016, determinó la creación de una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional cuyo fin según lo expresa la Corte Constitucional es:

"(…) ***para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir, e incorporar los siguientes parámetros para lograr ese cometido.***

La Mesa de trabajo estará integrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y la Policía Nacional, con el fin de que, conjuntamente y en el marco de sus

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

competencias legales, ***adopten un plan estratégico*** *destinado a que en el término máximo de un (1) año, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, se logre:*

(i) Establecer si en los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014 continúa haciendo presencia la empresa ganadera "La Cristalina", ya sea de forma directa o a través de terceros. En caso de así corroborarse, adelantar la recuperación material de dichos bienes. Esta deberá incluir visitas interinstitucionales a las distintas áreas de El Porvenir e informes periódicos que permitan corroborar la eficacia y estabilidad de la entrega.

(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.

(iii) Realizar un intercambio de información entre el Incoder y la Unidad de Tierras, de manera que sea posible establecer qué parte de El Porvenir se encuentra en el trámite de restitución, cuál debe ingresar a ese proceso, y cuál seguirá el cauce del trámite administrativo de adjudicación.
(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.

(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

(vi) Que la Unidad de Restitución de Tierras continúe el procedimiento de microfocalización iniciado en torno a los predios de El Porvenir, con el fin de determinar quiénes son los miembros de la población campesina que poseen derechos en el marco específico de la Ley de víctimas y restitución de tierras e impulsar hasta su culminación los procesos judiciales a que haya lugar, para lo cual se solicitará a los órganos de control prestar apoyo inmediato a la Unidad.

(vii) Una vez se hayan cumplido con las labores de identificación, verificación de requisitos y proceso de adjudicación, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá velar por la formalización efectiva de las titulaciones." (énfasis propio).

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

En ese sentido la Mesa de Trabajo Interinstitucional realizada el día 15 de mayo de 2019, adoptó la ruta metodológica para el cumplimiento del acceso a tierras de los 27 predios que conforman el predio denominado "El Porvenir", en donde se establece que la ruta jurídica es la aplicación del Procedimiento Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y las normas que lo complementan, adicionan, sustituyen o deroguen. Así también se ha manifestado desde los primeros informes de cumplimiento que la ANT ha remitido al Tribunal Superior de Distrito Judicial del Meta en su calidad de despacho de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, a la Corte Constitucional y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, en los cuales se presentó la ruta de actuación de acceso a tierra definida para la asignación de derechos y reglamentos de uso dentro del predio El Porvenir.

3.4 Cálculo de la UAF a través de la metodología de UAF predial definida en la Resolución ANT No. 740 de 2017 (Manual Operativo del Procedimiento Único del Decreto Ley 902 de 2017).

El Decreto Ley 902 de 2017, contempla nuevas reglas en materia de administración de baldíos de la Nación, en virtud a que estos son adjudicados con la obligación de establecer en ellos un proyecto productivo para la explotación de dichas extensiones territoriales. Ahora bien, se debe establecer que en virtud de la Resolución expedida por la ANT No. 740 de 2017 (Plan Operativo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad), adicionada por el artículo 10 de la Resolución ANT No. 108 de 2018, en lo que tiene que ver con el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar, ésta dispuso que cuando en desarrollo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad contemplado en el Decreto Ley 902 de 2017, quien persiga la adjudicación de un predio baldío conforme lo señalado en dicha normatividad, la Unidad Agrícola Familiar – UAF, será calculada bajo la metodología de UAF predial y no por zona relativamente homogénea como pretenden los accionantes. Por tal motivo, fue la metodología de UAF predial la que se utilizó para el cálculo de la UAF para el predio denominado "El Porvenir".

De tal forma, se estableció que para cada caso puntual (solicitud de adjudicación) se debe establecer un tipo de proyecto productivo a implementarse y con base en ello decretar el cálculo de la UAF, y no por zona relativamente homogénea. Este último aspecto de cálculo de zona relativamente homogénea contenida en la Acuerdo No. 08 de 2016 del Consejo Directivo de la ANT, que a su vez remite a la Resolución No. 041 de 1996, obedecía a la lógica de la colonización no contralada por el Estado, en la cual el campesino llegaba al predio baldío a ejercer la ocupación, se le exigía la explotación directa del predio, y al cabo de unos años tramitaba ante la autoridad de tierras competente que le reconocieran los derechos por la ocupación. En razón a lo anterior, la Unidad Agrícola Familiar calculada a nivel predial, se calcula teniendo en cuenta el proyecto productivo, y se viene adelantando desde hace varios años por vía de autorización de la Ley 160 de 1994, en la cual se definen las extensiones de tierra para implementar allí los proyectos productivos autorizados y de igual forma someter al campesino a la explotación directa del predio, que es el mismo presupuesto consagrado por el Decreto Ley 902 de 2017.

Conforme a lo dicho en el acápite anterior, es dable que en virtud de la facultad conferida por el Decreto Ley 902 de 2017, se procedan a reglamentar aspectos

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

fundamentales y operativos del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, en lo que respecta al reconocimiento, otorgamiento y asignación de derechos, así como dar aplicación al cálculo de la Unidad Agrícola Familiar bajo la metodología de UAF predial.

Así las cosas, y ya que el presente caso se debe atender bajo la reglamentación contenida en el Procedimiento Único del Decreto Ley 902 de 2017, para darle cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia SU 426 y lo adoptado por la Mesa Interinstitucional creada en la misma orden de la sentencia, la Agencia Nacional de Tierras – ANT, procedió a realizar el cálculo de la UAF predial para el predio de mayor extensión conocido como "El Porvenir" aplicando lo consagrado en la Resolución 2533 de 2018 "Por la cual se adopta la Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF predial".

En esta guía se hace mención a los conceptos y referencias básicas que se deben tener en cuenta por parte del equipo técnico a la hora de proceder con el cálculo de la UAF, además de promover que en dicho cálculo se respeten y conserven las características y/o condiciones tanto del terreno como de la familia campesina. Esto con el fin de registrar el uso sostenible del suelo, la actividad o el proyecto productivo que se desarrolla y de igual forma el sistema comercial que allí se empela, que al final será el sustento y remuneración para la familia. De esa forma se busca obtener un resultado integral, en donde converjan los aspectos principales del terreno, la actividad que desarrolla y por supuesto los aspectos sociales y del entorno del campesino.

En virtud de lo anterior, y dando aplicación a la guía operativa en comento, encontramos que la Unidad Agrícola Familiar – UAF, se define como;

> *La empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio*[3].

En términos generales la UAF se entiende como un instrumento de política pública agropecuaria y de desarrollo rural mediante el cual una familia campesina puede alcanzar los ingresos necesarios para lograr su sostenimiento a través de la explotación de una porción de tierra, la cual es medida en hectáreas (ha). De igual forma, la guía tiene en cuenta que la UAF se utiliza como un instrumento de medición orientado a reconocer las características agrológicas y la capacidad productiva de cada predio, para lo cual se requiere realizar un análisis social, ambiental, técnico y económico frente a la perspectiva de la implementación o mejora de un sistema productivo en particular, que le permita a la familia campesina que explota el predio alcanzar sus ingresos necesarios para lograr su sostenimiento. En ese sentido se deben entender los criterios cualitativos que comprenden el concepto de la UAF, en primer lugar, se exige que los predios sean tan extensos como se requiera para que su

[3] Artículo 38 de la Ley 160 de 1994.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

beneficiario a través de su trabajo consigna la máxima remuneración posible, y de otro lado que el predio no se extienda más allá de lo que el beneficiario pueda, por regla general, aprovechar de manera directa.

En desarrollo del ejercicio del cálculo de la UAF para el predio "El Porvenir" adoptado por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, que es la dependencia que tiene bajo su cargo el presente caso, se procedió a realizar la visita agronómica de manera global sobre el predio de mayor extensión conocido como "El Porvenir", para lo cual se tuvo como resultado el cálculo de cuatro (4) UAF prediales, partiendo de las condiciones agroecológicas y ambientales del predio objeto de estudio. Igualmente, una vez recolectada la información se procedió a verificar las unidades cartográficas de suelos, la capacidad de las mismas, los usos actuales de suelos, los costos de sistemas agropecuarios de la zona y demás factores a tener en cuenta para el cálculo de la UAF (información toda que se encuentra en el informe agronómico respectivo dentro del expediente), no sin antes dejar de mencionar que se tuvo en cuenta la información reportada por la UPRA y las recomendaciones de uso compartidas por el IGAC para dicha zona.

Pues bien, para entrar en materia, y siguiendo los pasos de la guía operativa, hay varios aspectos y/o criterios que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la UAF, que a saber son; i) la explotación agropecuaria para la seguridad alimentaria "EASA", ii) la económica del cuidado "EC", iii) infraestructura productiva "IP" y la formulación de un proyecto productivo, aspectos todos que se encuentran detallados en el contenido de la guía operativa[4]. En todo caso, el cálculo de la UAF Predial, se realizó teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 160 de 1994, y aplicando los criterios consagrados en los Acuerdos 192 de noviembre 25 y diciembre 29 de 2009, además de las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, así como el Decreto Ley 902 de 2017. Aun así, siempre se procuró garantizar que el o los proyectos productivos implementados por la familia campesina le reportaran ingresos netos que no sean inferiores a dos (2), ni superiores a dos puntos cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

En tal sentido, y como bien se dijo anteriormente, para el predio "El Porvenir" se realizó el cálculo de cuatro (4) UAF predial tipo. El informe final de fecha agosto de 2020 dispone lo siguiente en cuanto al cálculo de dichas referencias:

> *" (…) De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos, según las Unidades Cartográficas de suelos presentes, así: una UAF para la Unidad Cartográfica AVD y otra UAF para las Unidades Cartográficas RVK y VVC; por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector (…)"[5].*

En resumidas cuentas, factores tales como la ubicación del predio, las vías de acceso, el transporte fluvial y costos de mano de obra, así como las vías de comercialización

[4] Resolución 2533 de 2018 "Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y otros".
[5] Informe final Predio "El Porvenir", agosto de 2020 por la DAT y SATZF.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

de los productos convergen entre sí para adoptar el cálculo de la UAF Predial. De tal forma que para el uso de Suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD arrojó un resultado de 55 ha + 5984 m2, y la UAF para el uso del Suelo Agropecuario y Unidades Cartográficas RVK y VVC dio como resultado un área de 87 ha + 7577 m2. Además para el uso de suelo Forestal Protector-Productor, la UAF resultó en 55,2588 ha, y para el uso de suelo Forestal Protector la UAF dío como resultado un área de 44,2722 ha. Lo anterior teniendo en cuenta la totalidad de extensión del predio, que cuenta con un área aproximada de 25.000 ha, y un área adjudicable aproximada de 15.000 ha. Así las cosas, son esos cuatro los valores que se deben adoptar a la hora de asignar las UAF a los ocupantes, esto siempre y cuando de manera voluntaria entreguen a la Agencia Nacional de Tierras el excedente de área que se está ocupando indebidamente, tal cual lo consagra el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

En consonancia con lo anteriormente descrito, es preciso mencionar que esas dos unidades o referencias de UAF adoptadas a las cuales se hizo referencia en el párrafo precedente, son las que obedecen a los resultados obtenidos del estudio de los certificados de uso del suelo, ya que el predio como bien se sabe y debido a sus caracterisiticas revierte diferentes usos del suelo, además como consecuencia de su gran extensión. En virtud de lo anterior, se calculan ese tipo de UAF predial para las áreas que no tienen ningún tipo de restricción, (diferente a las áreas inadjudicables con restricción de bosque forestal por ejemplo), es decir las de libre disposición, como quiera que sobre esas extensiones de tierra es donde se van a adelantar los procesos de acceso a tierra que la Agencia tiene dispuestos.

De no proceder el recurrente a la entrega voluntaria de las áreas que excedan la UAF Predial asignada de acuerdo a los estudios técnicos realizados por la Agencia Nacional de Tierras, será esta misma autoridad quien en uso de sus facultades legales la que procederá a través de los mecanismos establecidos para ello, con la recuperación material inmediata de dichas áreas. Lo anterior dando aplicación a lo consagrado en el artículo 225 de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y de Convivenia) y el numeral 4° del artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2107 en armonía con la Ley 160 de 1994 en cuanto a la recuperación material de baldíos indebidamente ocupados, con el propósito de ser destinadas a los programas en favor de la población campesina, para lo cual podrá solicitar el acompañamiento de las autoridades policivas en caso de ser necesario. Proceso que se adelanta a través del procedimiento único establecido en la precitada norma.

Adicionalmente, y en virtud de lo consagrado en la Resolución No. 740 de 2018, modificada por la Resolución No. 12096 de 2019, se prevé que, si el ocupante de manera voluntaria retorna las porciones de terreno indebidamente ocupadas, esto abre la posibilidad de que le sea reconocido un puntaje adicional en el RESO (artículo 26). Situación que se explicó en las variables que asignan puntaje conforme al artículo 14 del Decreto Ley 902 de 2017.

Como soporte de lo anterior, y según lo consagrado en la Sentencia SU 426 de 2016, ésta dispone que *"... al estudiar la constitucionalidad del inciso 9° del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, relativo a la nulidad sobre la propiedad por vía de adjudicación de terrenos baldíos que superen la Unidad Agrícola Familiar, a través de la sentencia C-536 de 1997 esta Corporación determinó que, en concordancia con lo establecido en el artículo 64 de la Constitución, el límite frente a la extensión de predios adjudicables no*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

sólo se torna importante por impedir la concentración de la propiedad, sino también porque, en últimas, redunda en la garantía de mayores posibilidades para beneficiar a más campesinos colombianos con el acceso a la tierra". Aspecto éste que resulta de vital importancia, al encontrarse más que soportado por el máximo Órgano Constitucional que la autoridad de tierras competente, esto es la ANT, no puede entrar a adjudicar terrenos o áreas las cuales han sido producto de acumulación o concentración, sino todo lo contrario, promover las adjudicaciones en las extensiones que determinen las correspondientes autoridades en materia de tierra, es decir las UAF definidas para cada zona o predio.

Por otra parte, las áreas que exceden la Unidad Agricola Familar en los baldios de la Nación si adquieren la connotación de baldios reservados, es así como la Ley 160 de 1994 establece en el artículo 67 inciso 2º lo siguiente:

> "En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos."

Ahora bien, la norma trascrita establece que la Unidad Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona, esto es la UAF por Zona Relativamente Homogenea, pero se ha explicado en este apartado porqué para el caso del predio denominado "El Porvenir" la UAF aplicable es la Predial, en aplicación del Decreto Ley 902 de 2017 y el Manual Operativo establecido en la Resolución 740 de 2017 frente al procedimiento único esto por cuanto también se ha explicado *in extenso* que es la norma más beneficiosa y es la ruta jurídica adoptada por la Mesa Interinstitucional en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016.

3.5 Sobre la recuperación y tenencia material de los predios baldíos que hacen parte del predio de mayor extensión denominado "El Porvenir".

Para el desarrollo del presente acápite, tomaremos como punto de partida, lo mencionado por la Honorable Corte Constitucional en el punto 9.3.1. de la sentencia de unificación tantas veces mencionada, en la que se señaló, respecto al acta de entrega suscrita entre el señor Holman Carranza, a nombre de la ganadería La Cristalina y el INCODER, que fue verificada posteriormente con un sobrevuelo al predio, lo siguiente:

> *"Es claro para la Sala que* ***la suscripción de un acta no puede considerarse equivalente a la entrega material del predio****, especialmente, cuando el propio Instituto encargado de verificar su eficacia aclara que no ha adelantado gestión distinta a un sobrevuelo inicial..."* (énfasis propio).

Es así como el Alto Tribunal, compartiendo el diagnóstico presentado por el Procurador 14 Judicial II Ambiental y Agrario del Meta, Guaviare y Guainía, concluye que:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *"Así las cosas, en lo que tiene que ver con la entrega del predio, la Sala comparte en lo sustancial las observaciones de la Procuraduría Regional citada:* ***la entrega material de El Porvenir no se ha verificado****, y no resulta admisible ni desde la Constitución ni desde el respeto a la Ley que el Incoder cifre sus afirmaciones y conclusiones en la supuesta buena voluntad de los empresarios de La Cristalina, e intente atribuir toda la responsabilidad por los problemas (históricos y actuales) del predio a otras autoridades"* (énfasis propio).

Y sostiene, que la entrega material se torna en una etapa indispensable para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación sobre sus predios, que requiere de una verificación física y del seguimiento adecuado. Así lo señaló el Alto Tribunal acudiendo a un pronunciamiento previo.

> *"7.6. Frente a lo anterior, esta Sala de Revisión estima necesario poner de presente que si bien es la sentencia T-488 de 2014 se dictó en el marco de un caso concreto, de acceso a baldíos mediante una sentencia civil de pertenencia, la relevancia constitucional de la recuperación de los predios baldíos tiene un alcance general, pues, al estar definida como el procedimiento a través del cual se "recuper[a] o restitu[ye] al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares" y tener la finalidad de establecer si sobre los terrenos baldíos previamente clarificados existe ocupación indebida para proceder con su recuperación,* ***se constituye en una etapa esencial para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación, que le permita disponer de los predios para su consecuente adjudicación****.* (énfasis propio).

Así mismo, resalta ese Tribunal, en un aparte de la decisión que hemos citado previamente, que *"[R]esulta entonces imprescindible que la Corte recuerde una vez más que la finalidad de la recuperación de baldíos no se agota en la restitución del patrimonio estatal, sino que persigue la eficacia de los artículos 64 y 65 de la Constitución: los baldíos son el principal instrumento para propiciar el acceso a la tierra y la equidad en el campo (al, respecto, ver sentencias C-595 de 1995 y C-644 de 2012, previamente citadas)"*, teniendo en cuenta que la recuperación efectiva de la tierra por parte del Estado, va de la mano con el derecho efectivo de acceso progresivo a la tierra para la población campesina del país.

Es por esto, que la Agencia Nacional de Tierras – ANT, a través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación expidió el 15 de marzo del año 2018 el documento denominado "*Protocolo de Recuperación Material de Baldíos"*, el cual tiene por objeto establecer una ruta para la recuperación material de las tierras baldías de la Nación. De igual forma propende por establecer un procedimiento cuyo fin es recuperar y restituir al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares.

Como sustento de lo anterior, y tal cual lo contempla el mencionado protocolo se tiene que *"mediante memorando del 28 de septiembre de 2016, el Director General de la*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Agencia Nacional de Tierras estableció que corresponde a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación "efectuar todos los actos tendientes a "ordenar, disponer u organizar" los bienes fiscales patrimoniales de la Agencia y ***las Tierras Baldías de la Nación****" de tal forma que, una vez agotado el proceso agrario de recuperación de baldíos por parte de la Subdirección de Gestión Jurídica de Tierras, esto es con la expedición de la constancia de ejecutoria de la Resolución que pone fin al proceso, en virtud del principio de legalidad, cesa su competencia, correspondiéndole la administración de baldíos a la Dirección de Acceso a Tierras y su respectiva Subdirección y dentro de los actos de administración de estos,* ***proceder a la "ejecución de los resuelto" en el proceso de recuperación que no es más que la recuperación material del predio****"* (énfasis propio). El procedimiento al cual se hace referencia puede ser adelantado de manera oficiosa, a solicitud de los procuradores agrarios, de cualquier entidad pública que manifieste tener interés o bien sea de las comunidades u organizaciones campesinas o de cualquier persona natural y jurídica, las cuales podrán radicar la solicitud en la ANT bajo cualquier medio (físico, verbal, digital).

Es importante hacer la claridad respecto de la directriz impartida por el entonces director (año 2018 en el cual se profirió el protocolo) de la ANT, en cuanto al procedimiento de recuperación material de baldíos. Al respecto se dijo que el procedimiento en comento se dividía en dos etapas, que a saber son: i) recuperación por la vía administrativa del baldío indebidamente ocupado a cargo de la Subdirección de Procesos Agrarios, y ii) la recuperación material del baldío indebidamente ocupado a cargo de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (en adelante SATN) de la Dirección de Acceso a Tierras, punto este que es precisamente el que nos ocupa.

Lo anterior se materializa al concluirse que *"el proceso de recuperación va dirigido a recuperar "predios baldíos de la nación, de tal forma que, una vez ordenada su recuperación en virtud de agotamiento del proceso administrativo agrario y encontrándose debidamente ejecutada la respectiva resolución (para el caso que nos compete la Resolución N° 6423 de 2014), es pertinente proceder a la "ejecución de los resuelto en los procedimientos agrarios"*. Así las cosas, se desprenden del proceso dos actividades que se complementan entre ellas, la del trámite del proceso agrario y la que tiene que ver con la recuperación material propiamente dicha del predio.

Ahora bien, el procedimiento como tal contempla y hace mención al carácter ejecutorio que tienen los actos de recuperación y deslinde, el cual se encuentra en el artículo 2.14.19.3.3 del Decreto Único del Sector Agropecuario No. 1071 de 2015. En esta normatividad, se consagra que una vez esté en firme una actuación administrativa de recuperación de baldío indebidamente ocupado y de desline o cuando se trata de una revocatoria directa de adjudicación de baldios que revierte al dominio de la nación nuevamente, como es el caso bajo estudio, se procederá por parte de la autoridad competente en materia de tierras (ANT), por sí mismo o con colaboración de las autoridades policivas a que se proceda con la actuación de recuperar materialemente el predio. En caso dado de que el ocupante se negare a restituir el inmueble ocupado, el Incoder hoy ANT, solicitará el apoyo de la Policía Nacional, y en un término no superior a diez (10) días se llevará a cabo la diligencia. Lo anterior actuación se complementa con lo estipulado en el Código Nacional de Policía y de Convivenia (Ley 1801 de 2016) en su artículo 225 que reza;

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *"En los procesos administrativos que adelante la Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus veces, encaminados a la recuperación de bienes baldíos y bienes fiscales patrimoniales, así como en aquellos que concluyan con la orden de restitución administrativa de bienes a víctimas o beneficiarios de programas de la Agencia, la ejecución del acto administrativo correspondiente será efectuada por la autoridad de Policía dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud de la Agencia Nacional de Tierras, una vez el acto se encuentre ejecutoriado y en firme."*

Dicho lo anterior, se hará mención a las dos rutas que se identifican para proceder con la recuperación material de baldíos, proceso que adelanta como bien se dijo anteriormente la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT. No se explicará el detalle de dichas actuaciones en vista de que las mismas se encuentran en el Protocolo de Recuperación Material de Baldíos anteriormente enunciado.

Ruta 1. Ejecución del acto de la administración que declaró la indebida ocupación del baldío.

Después de que el proceso agrario administrativo de recuperación haya culminado y la resolución que declaró la indebida ocupación esté en firme o para el caso en concreto bajo análisis la Revocatoria Directa mediante la Resolución N° 6423 de 2014, la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, avoque conocimiento del caso y pueda; i) mediante oficio dirigido a los ocupantes establecer lugar, fecha y hora en la cual se definirá la actuación y/o diligencia de entrega voluntaria del predio. Y ii) igualmente mediante oficio dirigido a los ocupantes, informarles que toda vez que no han manifestado voluntad en entregar el predio a la ANT, esto es haciendo caso omiso a la orden proferida, se iniciarán las acciones tendientes a la recuperación material del predio.

Es preciso mencionar y aclarar en este punto, que con la Resolución de revocatoria mencioanda en el párrafo anterior, la cual ordenaba la recuperación material del baldío, no era necesario que se diera inicio a un nuevo procedimiento agrario de recuperación de baldío indebidamente ocupado. Mas aún cuando se contempla y es dable ejecutar directamente las ordenes impartidas en la revocatoria en conjunto con lo dispuesto en la resolución que niega la adjudicación del baldío. En consecuencia, se reitera que la ruta jurídica aplicable para proceder con la recuperación material del predio, es la orden impartida y consagrada en la resolución de revocatoria N° 6423 de 2014, y por tanto, no habría necesidad de iniciar un proceso agrarío de recuperación de baldío propiamente dicho.

Ruta 2. Ejercicio de las acciones de protección de bienes inmuebles contenidas en el Código de Policía.

En lo que tiene que ver con esta ruta para la recuperación material de un baldío, se deberá por parte de la SATN remitir un oficio al Inspector de Policía competente, para que se de aplicación a lo estipulado en el artículo 223 y 225 del Código Nacional de Policía y de Convivencia, a fin de que se detenga la perturbación por ocupación del predio baldío. Posteriormente, y ya ejecutoriada la decisión que contenga la orden de policía, será ésta misma autoridad quien en un término máximo de cinco (5) días

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

deberá definir la fecha, hora y lugar para que se lleve a cabo la diligencia de restitución de bien baldío. Será deber de la SATN de la ANT, comunicar a todas las entidades sobre el procedimiento a llevarse a cabo, a fin de garantizar y salvaguardar el debido proceso y los derechos que le asisten a los ocupantes.

De acuerdo a lo anterior, se deja plasmada la posibilidad de que los ocupantes de manera voluntaria, restituyan el predio a la Agencia Nacional de Tierras, so pena de tener que interceder con el acompasamiento de las autoridades policivas. De igual forma, y en virtud de lo que se ha dicho referente a la asignación de la UAF para los ocupantes, cabe la posibilidad de que en virtud de un acuerdo o un compromiso de entrega volutaria se les pueda permitir suscribir un acuerdo de regularización, tal cual lo prevé el parágrafo primero del artículo 5° del Decreto Ley 902 de 2017, para que de conformidad con dicha prerrogativa se les permita seguir con la explotación del predio, pero únicamente en la extensión definida por la ANT en el marco de la metodología de UAF predial de la cual se habló en el acapité precedente, situación que será definida y abordada con posterioridad a la decisión que aquí se está adoptando, es decir, una vez los ocupantes realicen la entrega del excedente de tierra, de acuerdo a los valores determinados en virtud de la UAF Predial.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas en cada uno de los acápites, se procederá a confirmar la decisión de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas en negar la solicitudes de adjudicación presentada por las siguientes personas: CAMILO ANDRÉS PRIETO ROCHA, FREDY RODRíGUEZ TRIANA, ALBERTO FERNANDO ZORNOSA MANRIQUE, MARIA NINFA MONTENEGRO MORA, JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA, ALVARO ROPERO, JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, PEDRO PABLO LESMES NOVOA, MARÍA CONCEPCIÓN POVEDA MURCIA, BERNARDO FIGUEROA CASTRILLÓN, BARNEY SORZA GUZMÁN, LIBIA BARAHONA RIVEROS, MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA, NORA BENÍTEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, en virtud que el procedimiento aplicable para el acceso a tierras para el predio denominado "El Porvenir" es el establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y las normas que lo complementan, adicionan, sustituyen o deroguen, debido a que es más beneficioso para los sujetos de reforma agraria o sujetos de ordenamiento de la propiedad, asímismo, es la ruta jurídica adoptada por la Mesa Interinstitucional a la luz de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Acceso a Tierras,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión tomada por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas frente a las 16 solicitudes de adjudicación de predios baldíos de la nación presentada por: CAMILO ANDRÉS PRIETO ROCHA, FREDY RODRíGUEZ TRIANA, ALBERTO FERNANDO ZORNOSA MANRIQUE, MARIA NINFA MONTENEGRO MORA, JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA, ALVARO ROPERO, JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, PEDRO PABLO LESMES NOVOA, MARÍA CONCEPCIÓN POVEDA MURCIA, BERNARDO FIGUEROA CASTRILLÓN, BARNEY SORZA GUZMÁN, LIBIA BARAHONA RIVEROS, MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA, NORA BENÍTEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, a través de las Resoluciones No. No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922,

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo en cumplimiento de la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, en negar dichas solicitudes, se confirma la parte resolutiva de las resoluciones objeto de los recursos en lo que no sea contrario en lo aquí dispuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los solicitantes podrán hacer parte del Procedimiento Único para el acceso a la tierra definido en el Decreto Ley 902 de 2017 y las normas que lo complementan, adicionan, sustituyen o deroguen conforme a la ruta adoptada el día 15 de mayo de 2019 por la Mesa Interinstitucional en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional y definida en la Resolución No. 5776 de 2018.

PARAGRAFO: Para que su situación sea definida en el ingreso al RESO deberán hacer entrega voluntaria de las áreas de terreno baldios que ocupan que son superiores a la Unidad Agricola Familiar Predial definida para el predio denominado "El Porvenir", en cada caso concreto de los 16 recurrentes.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación iniciará los procedimientos para realizar los acuerdos de entrega voluntaria por parte de los 16 solicitantes que excedan la Unidad Agricola Familiar Predial definida para el predio denominado "El Porvenir" en cada caso particular, que permita recuperar gradualmente las áreas de terreno las cuales se informarán a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas para adelantar el procedimiento único de asignación de derechos conforme a la ruta jurídica del Decreto Ley 902 de 2017 y adoptada por la Mesa Interinstitucional el día 15 de mayo de 2019 en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional.

En caso que las personas no accedan a la entrega voluntaria de las áreas de terrenos que exceden la Unidad Agricola Familiar Predial en cada caso particular, la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación iniciará los procedimientos de recuperación material conforme al protocolo de recuperación de baldios y remitirá la información a la oficina misional correspondiente dentro de la Agencia Nacional de Tierras de aquellos que no accedieron a la entrega de los baldios, para que incie los trámites de ocupación indebida de tierras baldías de la nación como trámite que sancionaría a los posibles infractores para que no puedan ser parte de los procesos de acceso a tierras, asímismo, desplegará todas las acciones tendientes a recuperar materialmente los terrenos baldios en virtud de la Resolución No. 6423 de 2014 para darle cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, continuará con los trámites para el acceso a la tierra conforme a la ruta jurídica establecida en el Decreto Ley 902 de 2017 y adoptada por la Mesa Interinstitucional el día 15 de mayo de 2019 en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, en las áreas que la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación informe ya fueron recuperadas y dispuestas para el procedimiento de asignación de derechos.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

"Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras."

ARTÍCULO QUINTO: Devuelvase a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas los 16 expedientes correspondiente a las solicitudes resueltas en el presente recurso, para que hagan parte de los trámites correspondientes en el acceso a la tierra del predio denominado "El Porvenir" conforme a las consideraciones expuestas y la ruta adoptada por la Mesa Interinstitucional el día 15 de mayo de 2019 en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación y a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas para que cumplan lo dispuesto en este acto administrativo de acuerdo a sus competencias y funciones.

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar de la decisión tomada en este acto administrativo a la Mesa Interinstitucional creada mediante la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, para su conocimiento.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo a cada uno de los 16 recurrentes y al Procurador Ambiental y Agrario del Meta.

Dada en Bogotá, D. C., en la fecha 2020-12-21 15:09

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, INFORMESE Y CÚMPLASE

JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ACCESO A TIERRAS

Proyectó: Antonio Guerra
Felipe Rueda
Johanna Castro
Miguel Galindez
Revisó: Ernesto Miranda

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

DETERMINACIÓN UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR PREDIAL
PREDIO EL PORVENIR
PUERTO GAITÁN, META

AUTORES

NUBIA ESPERANZA CARRILLO HERNANDEZ – Ingeniera Agrónoma

YENNI CATALINA SILVA CHIA – Ingeniera Agrónoma

DIANA YISETH QUERUBIN GONZALEZ – Ingeniera Agrónoma

ACTUALIZADO POR

LILIANA MORENO ZURITA - Ingeniera Agrónoma

MAYRA FIGUEROA VELASCO - Ingeniera Agrónoma

DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS

BOGOTÁ, AGOSTO 2020

Introducción

El Porvenir es un predio en donde la Unidad Agrícola Familiar - UAF se establece a nivel predial, cuyo cálculo se realiza conforme el procedimiento determinado en la Guía Operativa de Cálculo de UAF Predial de la Resolución 2533 de 2018, “Por la cual se adopta la Guía Operativa de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF predial”.

El predio está siendo abordado por la SATZF desde el punto de vista técnico y jurídico, en donde cabe resaltar que desde el ámbito técnico no se realizó una visita de inspección ocular puntualmente, ya que realizar esta visita a decenas de familias haría mucho más complejo el estudio del predio; por tal razón, se procedió agronómicamente de manera global, generándose cuatro UAF prediales, partiendo de las condiciones agroecológicas y ambientales del predio.

1. Descripción General de la Zona o Región

2.1. Contexto del municipio de Puerto Gaitán

2.1.1. Descripción geográfica del Municipio

Puerto Gaitán se encuentra ubicado al nororiente del departamento de Meta (Figura 1), a una distancia de 190 Km aproximadamente desde la ciudad de Villavicencio, a través de la carretera principal hacia Puerto López; el municipio cuenta en su totalidad con una extensión de 17.536 km² compuesta por 27 veredas, entre ellas el Porvenir y Matarratón, donde se encuentra el predio denominado EL PORVENIR, objeto de estudio por la ANT para realizar adjudicaciones.

El municipio limita al norte con el departamento del Casanare; al sur con los municipios de Mapiripan y San Martín; al este con el departamento del Vichada y al oeste con los municipios de Puerto López y San Martín; por sus afluentes hídricos junto con sus condiciones de luminosidad y velocidad de los vientos, se puede considerar como un municipio con ubicación geoestratégica privilegiada; por lo que sus suelos son aptos para la producción agrícola, piscícola, pecuaria y forestal, generando grandes proyectos agroindustriales.(Plan de desarrollo 2016-2019)

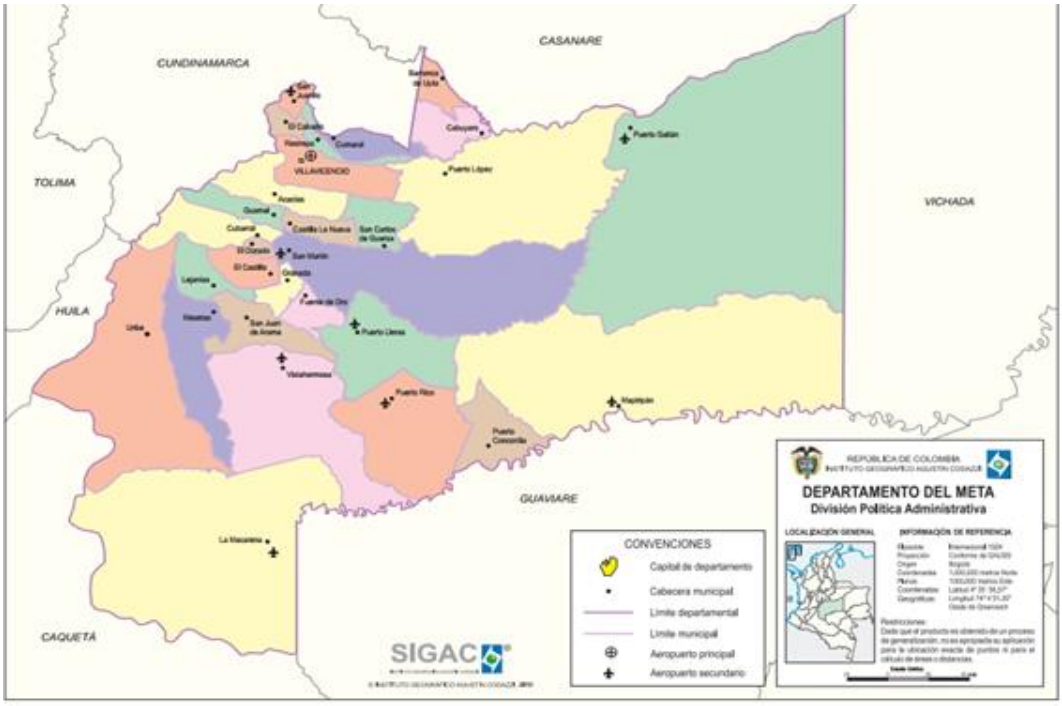


Figura1. División política departamento del Meta
Fuente: Estudio de suelos y zonificación del Meta (2004)

2.1.2. Clima

En Puerto Gaitán se presenta un clima tropical. Este clima es considerado Aw según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Puerto Gaitán se encuentra a 26.9 °C, en donde febrero es el mes más cálido, con un promedio de 28.5 ° C. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está alrededor de 25.4 ° C.
Presenta precipitaciones promedias de 2199 mm y la mayor cantidad de precipitación ocurre en junio, con un promedio de 333 mm, siendo el mes de enero el más seco.

2.1.3. Hidrografía

Este municipio cuenta con nueve cuencas las cuales componen su sistema hídrico natural: Cuenca del río Muco, cuenca del río Manacacias, cuenca del río Tillaba, cuenca del río Planas, cuenca del río Guarrojo, cuenca del río Meta (Figura 2), cuenca del río Yucao, cuenca del río Iteviare, cuenca del río Uva.



Figura 2. Río Meta, municipio de Puerto Gaitán
Fuente: Equipo SATZF 2018

2.1.4. Cobertura y Usos del Suelo

Según el documento “Cobertura Vegetal y Usos del Suelo de la Altillanura Plana de los Municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta - Escala 1:25.000”, del Convenio MADR-Corpoica-CIAT. 2011-2012, las coberturas de la zona son las siguientes (Tabla 1):

Tabla 1. Coberturas y usos de la tierra (ha) del municipio de Puerto Gaitán, para el periodo 2010-2011

CLASE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN COBERTURA	PUERTO GAITÁN
1. Territorios Artificializados	111	Tejido urbano continuo	168
	112	Tejido urbano discontinuo	65
	121	Zonas industriales o comerciales	8
	122	Red vial, ferroviaria y terrenos asociados	6.443
Total Territorios Artificializados			**6.684**
2. Territorios Agrícolas	211	Otros cultivos transitorios	12.728
	231	Pasturas	72.165
	232	Pastos arbolados	832
	233	Pastos enmalezados	
	242	Mosaico de pastos y cultivos	103.147
	243	Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales	534
	244	Mosaico de pastos con espacios naturales	
	2121	Arroz	
	2232	Palma de aceite	18.660
	2235	Caucho	198
	22121	Caña	
Total Territorios Agrícolas			**208.266**
3. Bosques y Áreas Semi-naturales	313	Bosques fragmentados	231
	314	Bosque de galería y ripario	73.021
	315	Plantación forestal	12.968
	323	Vegetación secundaria o en transición	20.117
	331	Zonas arenosas naturales	914
	334	Zonas quemadas	9.124
	3221	Arbustal denso	
	31111	Bosque denso alto de tierra firme	
	31112	Bosque denso alto inundable	20.217
	32111	Herbazal denso de tierra firme	163.678
	32112	Herbazal denso inundable	26.456
	32121	Herbazal abierto arenoso	1.265
Total Bosques y Áreas semi-naturales			**327.989**
4. Áreas Húmedas	411	Zonas pantanosas	
Total Áreas Húmedas			
5. Superficies de agua	511	Ríos	4.188
	512	Lagunas, lagos y ciénagas naturales	130
Total Superficies de agua			**4.318**
Nubes	99	Nube	842
Total Nubes			**842**
TOTAL GENERAL			**548.098**

Fuente. Convenio MADR-Corpoica-CIAT

2.2. Economía del Municipio

Un gran porcentaje de las tierras correspondientes al área rural del municipio son utilizadas en actividades agrícolas y ganaderas extensivas, lo cual garantiza suficiente abastecimiento en carne para el consumo del municipio y regiones vecinas.

Ganadería bovina: En el municipio se manejan alrededor de 155.520 cabezas de ganado reportadas en el 2007 por parte de la Secretaria de Agricultura Departamental, posicionando así el municipio en segundo lugar a nivel departamental.

Piscicultura: Actividad desarrollada de una manera artesanal, los pescadores realizan el proceso de pesca sin darle un valor agregado al producto, por lo que el canal de comercialización se extiende dejando pocas ganancias a quienes participan en el nivel de obtención de materia prima.

Palma Africana: Potencialmente cuenta con 17.383 hectáreas, dispuestas en 469 lotes distribuidos en la especie *E. Guineensis* (16.841 ha) y el híbrido 542 ha, además de 1.080 hectáreas preparadas para la siembra para el año 2011.

Caucho: Cultivo con 1.000 ha censadas al año 2009, pero que actualmente se proyecta como uno de los principales cultivos perennes establecidos en el municipio, los principales lugares en donde se está llevando a cabo el establecimiento son: vereda San Miguel (Finca Casuna) y alto manacacias.

Cultivos semestrales: Maíz y soya, de los cuales se encontraban establecidas a 2009, 10.000 hectáreas. (Plan prospectivo agropecuario 2009-2020).

Para el cultivo de maíz amarillo tecnificado el área cultivada en la zona llega a una cifra de 18.000 ha y para el caso de la soya llega alrededor de las 26.000 ha. (Fenalce, Área, producción y rendimiento de los cultivos de cereales y leguminosas 2015). De las explotaciones mencionadas anteriormente, se hallan algunos aspectos generales: para el caso del pequeño productor, el valor de la producción está limitado de acuerdo a la época del año que se coseche para salir al mercado, para los grandes productores no reportan el precio de las materias primas que extraen de sus plantaciones.

Dentro de las limitaciones más importantes se encuentra la aptitud de los suelos dispuestas en los cultivos, ya que según estudios de suelos compartidos por la empresa privada, son suelos de difícil manejo que requieren una gran cantidad de enmiendas y estrictos planes de fertilización y manejo; las limitantes en materia de competitividad se basan en la infraestructura vial, ya que las vías primarias, secundarias y terciarias se encuentran en mal estado y solamente se realizan mantenimientos periódicos de las vías primarias por parte de la administración municipal y de la empresa privada, las cuales pertenecen al área de influencia de sus proyectos. (Plan de desarrollo 2016-2019).

2. Levantamiento Topográfico del predio

El predio el Porvenir se encuentra a 97 Km aproximadamente del casco urbano del municipio de Puerto Gaitán, posee una extensión alrededor de 15.000 ha adjudicables. Este predio colinda con el río Meta y algunos tributantes, además de algunos traslapes con presuntas propiedades privadas (Cucurital, Maracas, Carraba, El Tolima, Pajonal).



Figura 3. Equipo Topográfico en Predio El Porvenir 2018.
Fuente: Equipo Topografía 2018

El levantamiento topográfico realizado entre el 03/09/2018 y el 08/09/2018 (Figura 3), presenta como resultado de cálculo y dibujo, áreas diferentes a la registrada en la matrícula inmobiliaria y registrada en el Sistema Nacional Catastral, en el cual se tomaron 51 puntos para definir los linderos de los predios, por lo cual, fue necesario apoyarse en la ortoimagen de origen satelital (constelación Planet Scope) con fecha de toma entre diciembre de 2017 y enero de 2018, ya que el acceso a los drenajes está obstaculizada por vegetación densa protectora del drenaje y áreas con rebalse profundo debido a la época invernal (Informe levantamiento topográfico Porvenir 2018).

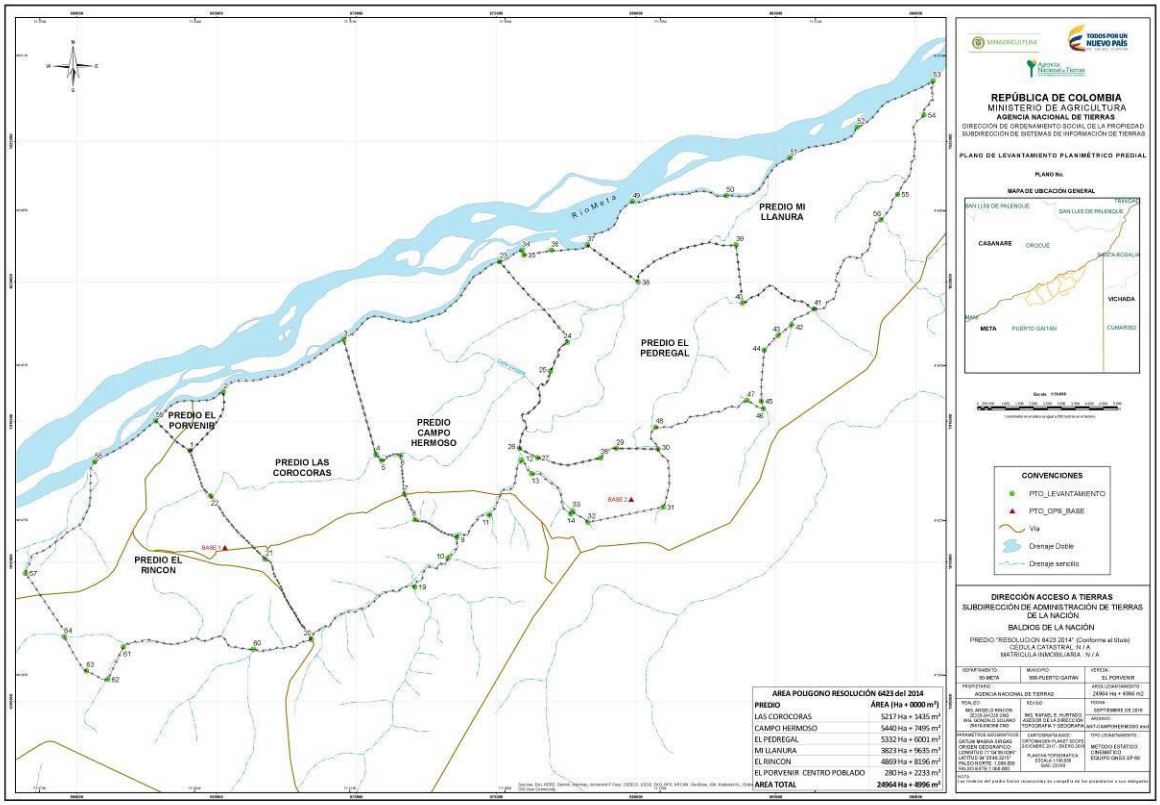


Figura 4. Levantamiento Topográfico Predio El Porvenir 2018.
Fuente: Equipo Topografía 2018

Tabla 2. Áreas levantadas Predio El Porvenir 2018.

Predio	Área
Las Corocoras	5217 ha + 1435 m^2
Campo Hermoso	5440 ha + 7495 m^2
El Pedregal	5332 ha + 6001 m^2
Mi Llanura	3823 ha + 9636 m^2
El Rincón	4869 ha + 8196 m^2
Área Total Levantada	**24684 ha + 2762 m^2**

Fuente: Equipo Topografía 2018

Se realizó el levantamiento topográfico de los cinco predios que conformaban anteriormente El Porvenir (Las Corocoras, Campo Hermoso, El Pedregal, Mi Llanura y El Rincón) (Figura 4 - Tabla 2), con el fin de dar continuidad al proceso de adjudicación del predio, cuyos resultados son necesarios para el análisis de la información obtenida en la visita.

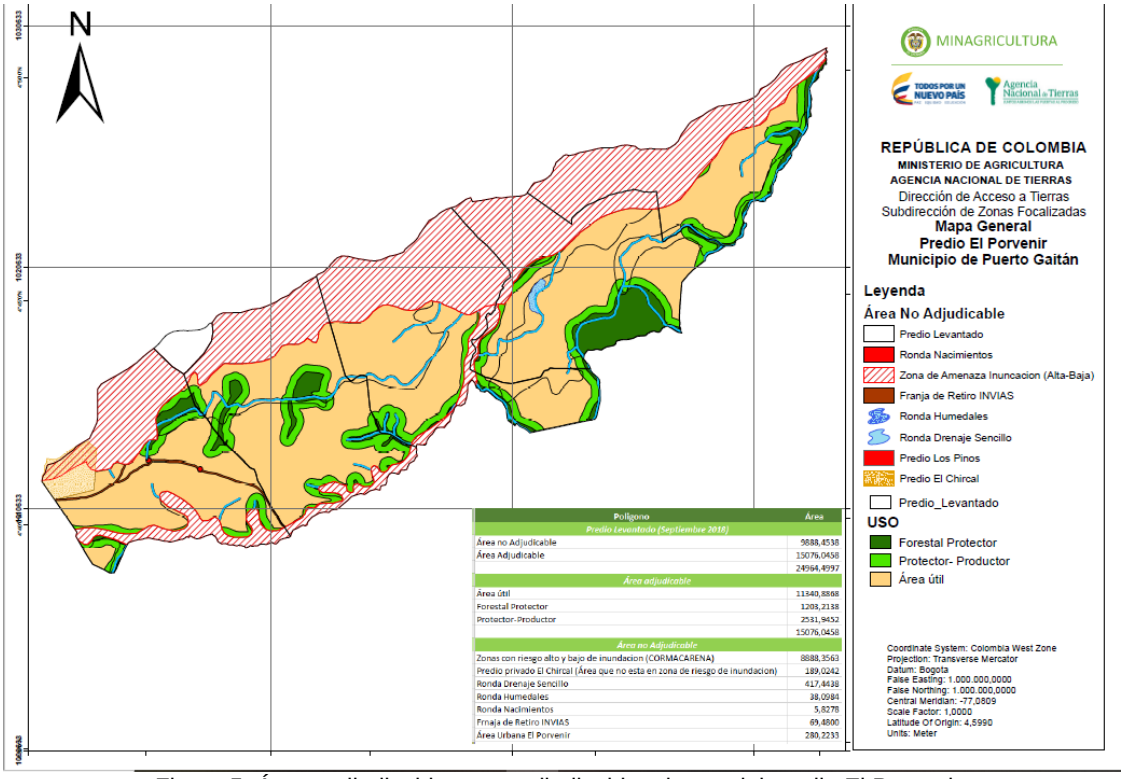


Figura 5. Áreas adjudicables y no adjudicables dentro del predio El Porvenir.
Fuente: Equipo SATZF 2020

De las 24684 ha + 2762 m^2 comprendidas por los cinco predios anteriormente descritos, 15.076 ha + 458 m^2 pertenecen al área que es adjudicable, como se observa en la Figura 5 y Tabla 3.

Tabla 3. Área adjudicable predio El Porvenir 2018.

Nombre del predio	El Porvenir
Matricula inmobiliaria	234-15742 234-15743 234-15744 234-15745 234-15741
Cédula catastral	50568-00-01-0001-0742-000 50568-00-01-0001-0745-000 50568-00-01-0001-0087-000 50568-00-01-0001-0052-000 50568-00-01-0001-0756-000
Departamento	Meta
Municipio	Puerto Gaitán
Vereda/corregimiento	Porvenir - Matarratón
Área georreferenciada	15.076 ha + 458 m^2

Fuente: Equipo Topografía 2018

3. Acceso al predio

Existen tres maneras de llegar al predio: la primera, por vía terrestre desde Puerto Gaitán por vía nacional carreteable hasta el centro poblado El Porvenir (Figura 6), aproximadamente 4 horas de viaje; la segunda por vía fluvial del río Meta (Figura 7), desde el municipio de Puerto Gaitán hasta el puerto de Orocué, aproximadamente 2 horas de viaje y; la tercera por Yopal vía carreteable hasta el municipio de Orocué y luego vía fluvial del río Meta hasta el centro poblado del porvenir aproximadamente 4 horas de viaje.



Figura 6. Vías de acceso al predio El Porvenir en temporada de invierno
Fuente: Equipo SATZF 2018



Figura 7. Vías de acceso fluvial al predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018

4. Uso actual del suelo

En la actualidad dentro del predio, el uso del suelo presenta limitaciones por varios factores; en primer lugar, las condiciones edafológicas de la zona al tener suelos ácidos y con fertilidad baja; un segundo factor es la capacidad adquisitiva de sus habitantes, los cuales en su mayoría no poseen los recursos suficientes para realizar inversiones en establecimiento y mantenimiento de cultivos y tercero, el acceso a vías es precario; las vías secundarias y terciarias en época de invierno no son transitables impidiendo la salida de personas y productos a los centros poblados cercanos, por ello en esta zona y en sus alrededores los sistemas productivos son poco diversificados y limitados. Sin embargo, sus pobladores, campesinos en su mayoría, realizan las siguientes actividades económicas:

- Manejo de ganadería con pasturas de sabana: Este sistema es el predominante en la zona, ya que presenta bajos costos de producción en torno a preparación y manejo de suelos: dentro de este sistema se maneja alrededor de 20 a 70 cabezas de ganado, el cual, es solamente para cría y algunos para levante, debido a las condiciones climáticas, que no permiten el desarrollo de pastos durante todo el año, es una ganadearía sin tecnificación, utilizan lo básico como vacunas, vitaminas y algunas sales minerales para contribuir en el desarrollo de los animales.

- Ganadería con pasturas mejoradas: En este sistema productivo, la inversión económica es mayor, debido a las adecuaciones de terreno para la estabulación o semi estabulación de animales como corrales y alambrado para división de potreros, donde se siembran pastos como el *Brachiaria,* el cual, regularmente es resistente en verano y a condiciones de suelos pobres en nutrientes.

  Dentro de este sistema se manejan alrededor de 100 cabezas de ganado; cabe resaltar que este sistema productivo lo implementan pocos habitantes, ya que poseen herramientas, recursos y maquinaria para sostenerla, además están ubicados en las sabanas no inundables.

- Pancoger: La mayoría de los habitantes en zona inundable o en sabana poseen un sistema de pancoger; este sistema productivo les asegura tener algunos productos que son utilizados para el autoconsumo en las familias.

En época de verano las zonas inundables son utilizadas para desarrollar cultivos como el plátano, maíz, frijol, yuca, papaya.

- Pesca: Al ser habitantes ribereños la pesca es alternada con la cría de ganado y los cultivos de pancoger, es una actividad propia de los habitantes con ocupaciones de menor extensión, las especies que más capturan son el bagre, valentón, baboso, cachama, esta actividad se realiza durante todo el año permitiendo un ingreso medianamente estable.

5. Infraestructura

Teniendo en cuenta las diferentes visitas realizadas por la SATZF en los años 2018-2019 y, de acuerdo con la ubicación dentro del predio y la capacidad adquisitiva de cada ocupante, se observaron los siguientes tipos de estructura:

-CONSTRUCCIONES EN CENTRO POBLADO (Figuras 8 y 9): en donde se concentra la mayor cantidad de ocupantes, las casas en su mayoría se encuentran construidas en ladrillo, piso de cemento, tejas de zinc o Eternit; la distribución interna es: dos, tres o cuatro cuartos destinados para dormitorios, un baño, una cocina, algunas con fogón de leña y estufas con gas de pipeta. Los patios traseros con lavaderos algunas con corrales pequeños donde tienen especies menores como gallinas y patos.

Estas construcciones tienen aproximadamente más de 20 años.

El centro poblado cuenta con un polideportivo techado, en buenas condiciones donde se realizan diferentes reuniones masivas. También cuenta con un centro educativo construido en ladrillo con tejas de Eternit y zinc, los salones cuentan con ventiladores y ventanas, y tienen una cancha de microfútbol.



Figura 8. Centro educativo en centro poblado del predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018



Figura 9. Centro educativo en centro poblado del predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018

-CONTRUCCIONES EN SABANA: Los ocupantes en esta zona tienen diferentes tipos de construcción:

- **Tipo 1:** Casas con paredes de madera, techos de paja o zinc, pisos en cemento o tierra, puertas en madera, dos cuartos destinados para dormitorios, poseen baños con pozo sépticos, cocinas con fogón de leña y estufa a gas de pipeta, patios pequeños con algunas especies menores como gallinas, encerramientos perimetrales con alambres de púas; algunos tienen pozos profundos para obtener agua segura para consumo doméstico.

El tiempo de estas construcciones son de aproximadamente entre 8 a 15 años (Figura 10).



Figura 10. Casa tipo 1, del predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018

- **Tipo 2**: Casas con paredes de ladrillo, techos de zinc, pisos de cemento o baldosa, puertas de madera y metálicas, tres o cuatro cuartos destinados para dormitorios, sala comedor, cocinas con fogón de leña y estufa a gas con pipeta, patios con lavadero en cemento, encerramientos internos y perimetrales con alambre liso y de púas, algunos tienen pozos profundos para obtener agua segura para consumo doméstico

  Cuentan con servidumbres entre fincas, algunas con establos de madera para manejo de ganado bovino.

  Dentro del predio no se evidenció ningún centro de acopio, salas de ordeño, o infraestructura con alta tecnología para el desarrollo de actividades agropecuarias.

6. Composición social o familiar

En el censo de población realizado por la Agencia Nacional de Tierras en el año 2017, se contabilizaron un total de 240 personas que ocupaban el predio, de los cuales 67 eran accionantes de la sentencia SU-426 de 2016 y 173 eran ocupantes que pertenecían a otras organizaciones. Por género, se identificó que 155 eran hombres y 85 mujeres. Una vez realizados los cruces pertinentes con la Unidad para las Víctimas, 54 personas estaban inscritas como víctimas del conflicto armado con registro y 15 sin registro.

Actualmente, existen 5 organizaciones en el territorio: las juntas de acción comunal del centro poblado de El Porvenir y Matarratón, donde se encuentran vinculadas las personas accionantes de la sentencia SU426 de 2016. Estas organizaciones se

caracterizan por ser las que aglutinan a los habitantes históricos del predio y porque sus integrantes no cuentan con tierra u ocupaciones en las zonas adjudicables, sino que se ubican principalmente sobre la ribera del río Meta.

ASDEPAGRAL es una organización que se creó en el 2015. Está conformada por campesinos de escasos recursos que llegaron al predio impulsados por un personaje llamado Elber Abril, quien de manera fraudulenta les cobró a las personas para poder invadir el predio con la promesa de que tendrían derecho a la tierra.

ASOYOPO es la cuarta organización. Está conformada por ex trabajadores de Víctor Carranza. Son las personas que actualmente ocupan la mayoría del predio, en ocupaciones que van desde las 500 hasta las 800 hectáreas. Por lo general estas personas no habitan en los predios, sino que tienen encargados que los cuidan y los explotan productivamente.

Finalmente, se encuentra la organización ASOIMPOME, que es una organización indígena conformada por indígenas Cubeo sikuani. Retornaron al predio en el 2015 aduciendo que tenían ancestralidad en el territorio. Actualmente tienen medidas de protección y se encuentra en estudio la solicitud de constitución de resguardo indígena.

7. Forma de ocupación del predio

Actualmente el predio está siendo ocupado en su mayor parte por los integrantes de la organización ASOYOPO, que cuentan con predios que oscilan entre 500 y 800 hectáreas. En estas ocupaciones se dedican principalmente a la siembra de pasto, de cultivos forestales como eucalipto y teca y, en general de actividades pecuarias. Los accionantes de la sentencia, organizados bajo las juntas de acción comunal del centro poblado de El Porvenir y Matarratón no cuentan con ocupaciones en zonas adjudicables. Los del centro poblado habitan en el caserío y los de la vereda de Matarratón cuentan con ocupaciones que por restricciones ambientales no pueden ser adjudicadas.

Por su parte, los integrantes de la organización ASDEPAGRAL se ubican en un sector del predio que se conoce como el Rincón. Las ocupaciones de estas personas se caracterizan por ser pequeñas. Cada uno cuenta con una casa lote en donde han construido sus casas y predios que oscilan entre 10 y 20 hectáreas para realizar actividades productivas.

Finalmente, ASOIMPOME, se organiza en una zona del predio que oscila entre las 1.000 y 1.500 hectáreas. Cuentan con medidas de protección y actualmente se está estudiando la constitución de un resguardo indígena sobre el área que ocupan.

8. Usos del suelo de El Porvenir según lo establecido en el EOT

Según consta en los Certificados de Uso del Suelo emitidos por la Secretaria de Planeación del municipio de Puerto Gaitán, Meta, uno con fecha del 15 de enero de 2018 y otro actualizado con fecha del 20 de mayo de 2020, correspondientes a 5 predios denominados: Mi llanura con No. OAP-1011-08.07-336, El Rincón con No. OAP-1011-08.07-332, Las Corocoras con No. OAP-1011-08.07-333, Campo Hermoso con No. OAP-1011-08.07-334, El Pedregal con No. OAP-1011-08.07-335, y de acuerdo a la georreferenciación del predio El Porvenir y su respectivo cruce con los usos de suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, se determinó que dicho predio se encuentra clasificado así (Figura 11):

- Agropecuario: 11367,1557 hectáreas
- Forestal Protector - Productor: 2502,82 hectáreas
- Forestal Protector: 1206,07 hectáreas

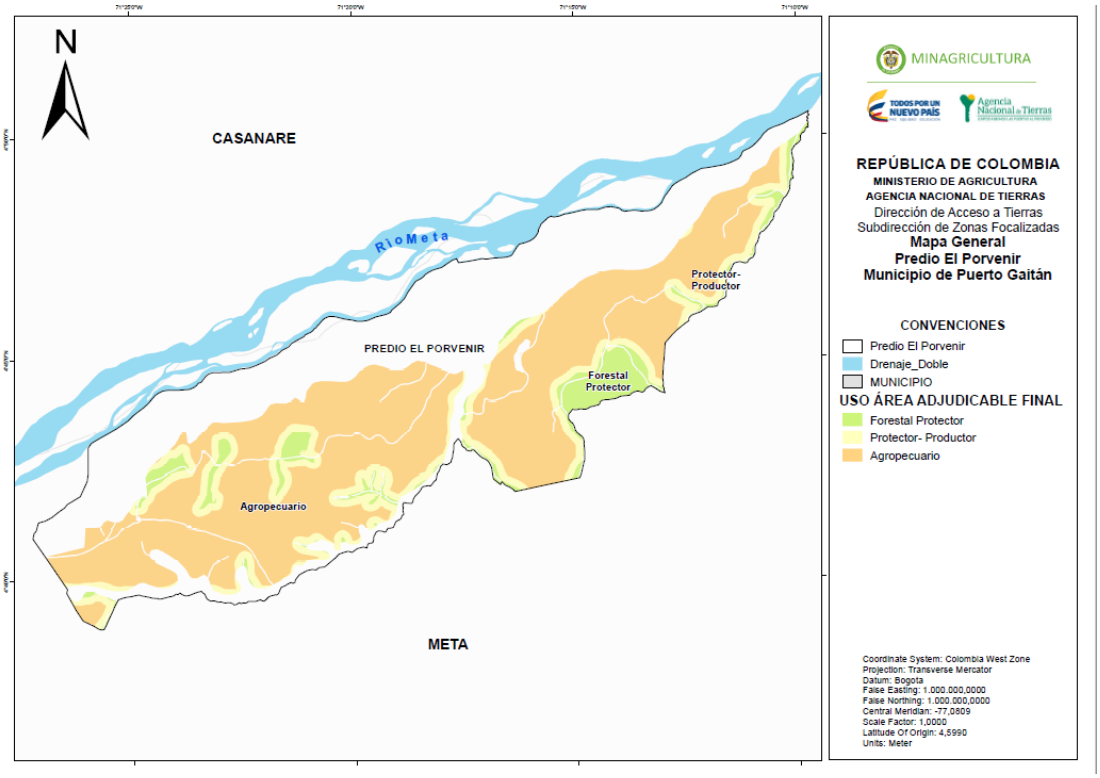


Figura 11. Usos del Suelo del predio El Porvenir del EOT 2009 de Puerto Gaitán – Meta. Fuente: Equipo SATZF 2020

De acuerdo con lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros normativos:

-Uso agropecuario: Son los suelos destinados a los cultivos permanentes o transitorios, no maderables, destinados a la comercialización o autoconsumo, o los destinados a la cría y/o comercialización de especies animales.

-Uso forestal protector-productor: Es aquel uso destinado a la conservación de bosques naturales o implantados, con explotación de recursos naturales renovables, pero con pleno dominio del efecto protector.

-Uso forestal protector: Es aquel uso destinado a la conservación de bosques naturales o implantados, en forma constante, que a su vez sirven para proteger otros tipos de recursos renovables, y no hay posibilidad de explotación y extracción maderera.

Se debe anotar, que el área adjudicable determinada (15.076,0457 ha), incluye los usos del suelo: agropecuario, forestal protector-productor y forestal protector.

9.1 Clases agrológicas y usos principales

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso se fundamenta en el análisis de las características de los suelos que limitan el uso y generan riesgo de degradación de los mismos.
Teniendo en cuenta la información oficial consultada previa a la visita de campo se encuentran las siguientes unidades de capacidad de uso dentro del predio El Porvenir: VIs-1, VIhs-1 y VIIhs-1, (IGAC 2004), las cuales, están directamente relacionadas con las unidades de suelos presentes en la zona; el uso actual principal fue confirmado por el equipo técnico de la SATZF.

A continuación, se reportan las áreas correspondientes para cada unidad (Figura 12 y Tabla 4):

Tabla 4. Clases y usos de suelo principales predio El Porvenir.

Clases, subclases Agrológicas	Unidad de Suelos	Área (ha)	Uso actual principal	Uso recomendado
VI s-1	AVD	7561,23	Ganadería con pasturas de sabana y mejorada. Pancoger	Ganadería extensiva con pastos introducidos como B*raquiaria,* asociados con actividades de agroforestería (frutales, caucho, pino, eucalipto)
VI hs -1	VVC	588,55	Ganadería con pasturas de sabana y mejorada. Pancoger	Agroforestería con ganadería extensiva
VII hs -1	RVK	6926,27	Ganadería con pasturas de sabana y mejorada. Pancoger	Conservación

Fuente IGAC 2004.

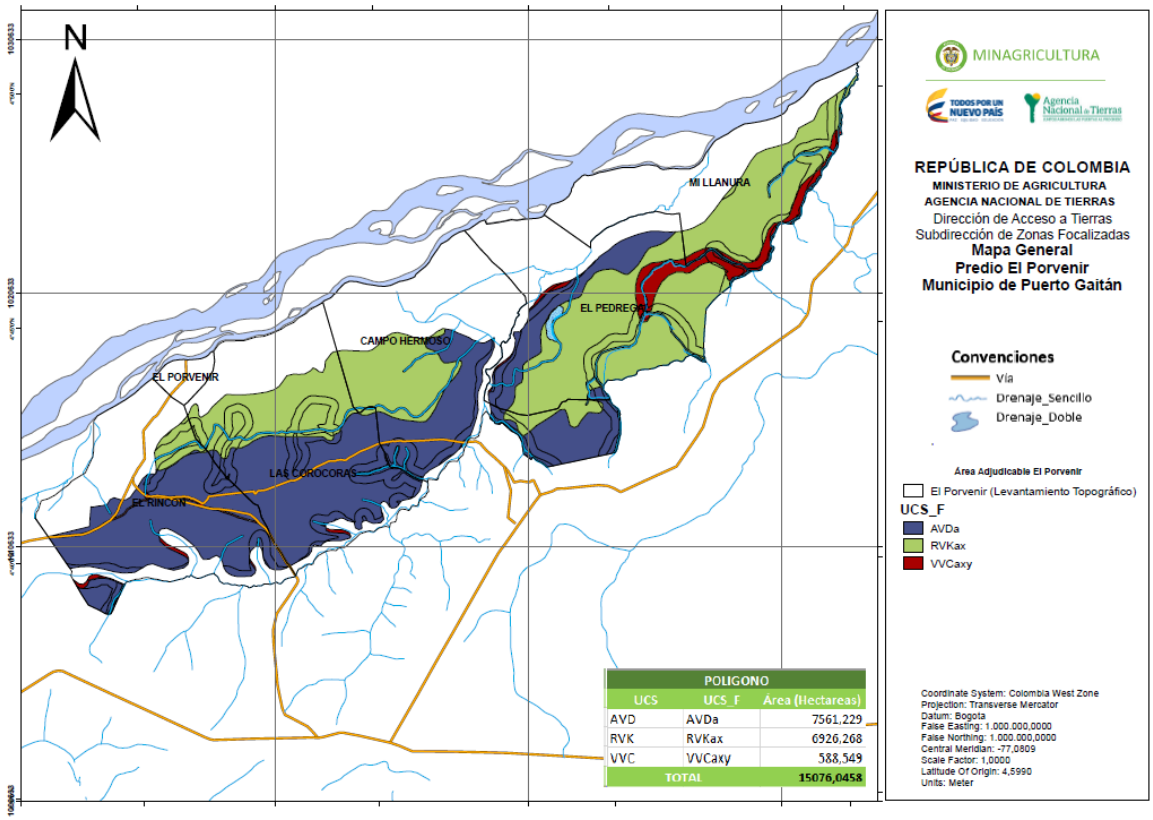


Figura 12. Unidades Cartográficas del predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2020

Para el levantamiento de la información en campo se realizaron 28 observaciones o chequeos de suelos, se efectuaron cajuelas de 40 cm x 40 cm de profundidad (Figura 13) y con la ayuda de barreno se logró profundizar, con el fin de observar las principales características de los suelos como textura, estructura, nivel freático y profundidad efectiva, posibles contenidos de fragmentos de roca, características que influencian su manejo.



Figura 13. Cajuela de observación unidad RVK, equipo SATZF 2018
Fuente: Equipo SATZF 2018

La distribución de los chequeos (Tabla 5 - Figura 14) se realizó de tal forma que lograron verificar las tres unidades edafológicas AVD, RVK y VVC según el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento del Meta IGAC (2004).

La recolección de la información se realizó en época de lluvias, motivo por el cual en la unidad VVC no se lograron realizar chequeos ya que las vías no permitieron el acceso a la zona, así como la inundación en este sector.

Tabla 5. Distribución porcentual de chequeos dentro del predio El Porvenir

UCS	OBSERVACIÓN	N	E
AVD	CHEQUEO_01	4,679098	-71,429761
AVD	CHEQUEO_02	4,673879	-71,446734
AVD	CHEQUEO_05	4,714876	-71,332241
AVD	CHEQUEO_06	4,705816	-71,340177
AVD	CHEQUEO_07	4,695214	-71,357304
AVD	CHEQUEO_08	4,700866	-71,36487
AVD	CHEQUEO_09	4,690525	-71,37938
AVD	CHEQUEO_10	4,690287	-71,39603
AVD	CHEQUEO_12	4,714907	-71,289791
AVD	CHEQUEO_13	4,709798	-71,324286
AVD	CHEQUEO_14	4,7108120	-71,3036440
AVD	CHEQUEO_16	4,721887	-71,289429
AVD	CHEQUEO_21	4,775107	-71,247533
AVD	CHEQUEO_22	4,77508	-71,243621
RVK	CHEQUEO_03	4,720035	-71,334897
RVK	CHEQUEO_04	4,721531	-71,337495
RVK	CHEQUEO_11	4,719593	-71,31499
RVK	CHEQUEO_15	4,722852	-71,282054
RVK	CHEQUEO_17	4,793792	-71,207981
RVK	CHEQUEO_18	4,793825	-71,203897
RVK	CHEQUEO_19	4,790487	-71,196819
RVK	CHEQUEO_20	4,788564	-71,191325
RVK-CA	CA	4,81844	-71,180206
RVK-CA	CA	4,82054	-71,178327
RVK-CA	CA	4,815489	-71,177956
RVK-CA	CA	4,80793	-71,18089
RVK-CA	CA	4,802958	-71,180864
RVK-CA	CA	4,801451	-71,180785
VVC-CA	CA	4,798186	-71,181033

Simbolo UCS	# Puntos	%
AVD	14	50
RVK	8	29
RVK-CA	5	18
VVC-CA	1	4
Total	28	100

Fuente: Equipo SATZF 2018

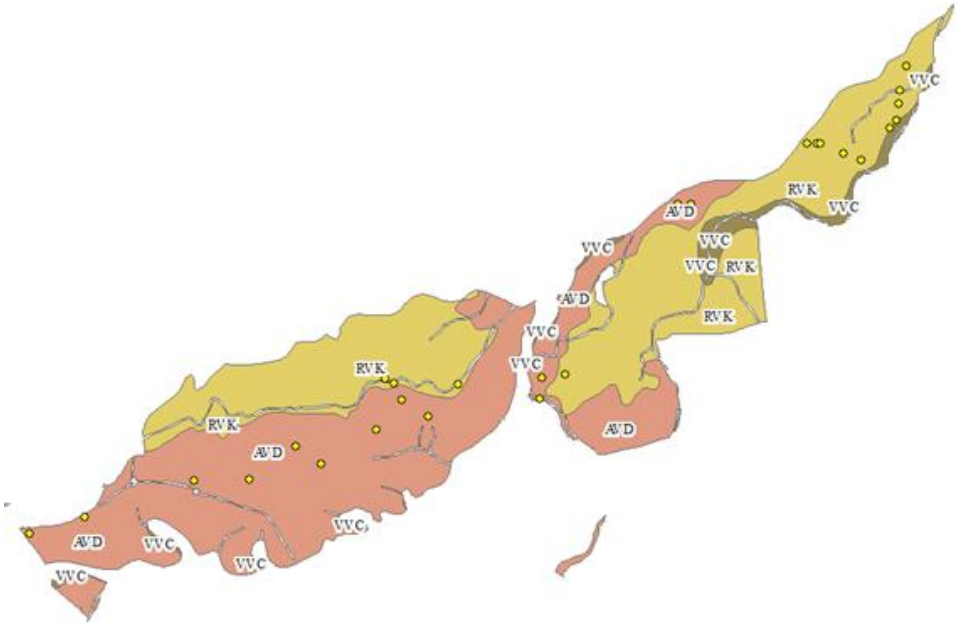


Figura 14: Distribución de los chequeos realizados en las unidades de suelos.
Fuente: Equipo SATZF 2018

Las características principales de los suelos de cada unidad, de acuerdo a los datos recolectados en campo se describen a continuación:

Unidad RVK

En esta unidad se realizaron 8 puntos de chequeo, allí los suelos están distribuidos en la planicie aluvial, en los sectores de la vereda Matarratón y el predio antiguamente denominado mi Llanura, en donde los suelos se caracterizaron principalmente por presentar drenaje imperfecto a pobre, evidenciado por inundaciones y encharcamientos prolongados como limitante para su manejo, la profundidad efectiva varia de superficial a moderadamente profunda, suelos limitados por el nivel freático alto, en profundidad se presentan cambios de color y su textura se hace más arcillosa; además, se observa microfauna como chizas y lombrices en pocas cantidades (Figura 15).
El uso actual de este suelo es principalmente ganadería (Figura 16) y en algunos sectores se observan algunos cultivos de plátano (Figura 17), sobre todo en islotes que en época de verano son cultivados aprovechando el descenso de aguas.



Figura 15. Cajuela en Unidad de Suelos RVK – predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018



Figura 16. Cultivos de plátano en islotes – predio El Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018



Figura 17. Uso actual en ganadería en Unidad RVK
Fuente: Equipo SATZF 2018

Unidad AVD

En esta unidad se realizaron 14 chequeos, los suelos están distribuidos en la altiplanicie estructural, se caracterizaron por ser profundos, de texturas

moderadamente finas, bien drenados y buen desarrollo de estructura (Figura 18); en la información consultada del estudio de suelos del departamento del Meta se describe que una de las principales limitantes de esta unidad, es que en su mayoría son suelos con altos contenidos de aluminio, fertilidad muy baja, lo que puede limitar su manejo en cuanto a la implementación de sistemas productivos.

El uso actual de este suelo es principalmente ganadería con pastos de sabana y en algunos sectores siembran pastos mejorados como *Brachiaria* (Figura 19), también se encuentran establecidos cultivos de pancoger como maíz, yuca, hortalizas.



Figura 18. Cajuela realizada en Unidad AVD - Predio El Porvenir.
Fuente equipo SATZF 2018



Figura 19. Uso actual Ganadería con pasto de Sabana en unidad de suelos AVD
Fuente equipo SATZF 2018

Unidad VVC

En esta unidad no se lograron realizar chequeos, ya que esta zona se encontraba inundada. Según el Estudio de suelos del Meta IGAC 2004, los suelos de esta unidad se caracterizan por principalmente por ser inundables y encharcables, por tal motivo el drenaje natural es imperfecto a pobremente drenado, profundidad efectiva muy superficial, presentan fertilidad baja, alta saturación de aluminio; condiciones que limitan su manejo.

El uso de esta unidad se realiza en épocas de verano para mantener cultivos de ciclo corto y de pancoger como maíz, frijol y yuca.

9. Descripción Componente Ambiental

9.1 Recurso Hídrico

La disponibilidad de agua en la región es indispensable para cualquier sistema productivo ya que de este recurso depende la estabilización y permanencia que inciden en los costos de producción de las actividades agropecuarias. Las veredas el Porvenir y Matarratón se encuentran dentro de la cuenca del río Meta, en donde

terminan su recorrido varios caños que recorren el predio; ejemplo de ello, son los caños Cabiona, Arecua, Paso Ancho, Laguna Tapojo y Laguna el Porvenir.

Estos cuerpos de agua tienen una alta incidencia dentro del predio, debido al aumento de su caudal en temporada de lluvia, que inicia en el mes de abril o marzo y se prolonga hasta el mes de noviembre, presentando un régimen pluviométrico monomodal, esto implica que en esta época del año las zonas amortiguadoras del río Meta se encuentren en un nivel mayor, encontrando en el predio zonas receptoras y reguladoras de su régimen hidrológico como los morichales (Figura 20) y zonas de sabana que generan algunas inundaciones en franjas cercanas a la ronda del río (Figura 21).

En la zona cercana a la ronda del río, en época de verano los habitantes la utilizan para pastoreo de ganado y cultivos de pancoger, como forma del sostenimiento económico de las fincas y sus familias. Sin embargo, la disponibilidad de agua para los habitantes de las sabanas alejadas a estas corrientes y cuerpos de agua es baja para mantener cultivos y ganado, solamente cuenta con aljibes que les permite el agua para consumo doméstico.



Figura 20. Morichal dentro de Predio el Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018



Figura 21. Sabana inundable dentro de Predio el Porvenir
Fuente: Equipo SATZF 2018

9.2 Áreas de Bosques – Reservas Forestales – Reservas Naturales y/o Ambientales (si las hay)

Según la respuesta de CORMACARENA, en concordancia con el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) se delimitaron los elementos ambientales que deben ser objeto de protección y conservación presentes en el predio El Porvenir, una vez procesada la información evidenciada en campo (visita realizada del 11 al 16 de septiembre de 2017) y la base cartográfica disponible al interior de la Corporación, permitiendo establecer lo siguiente (Figura 22):

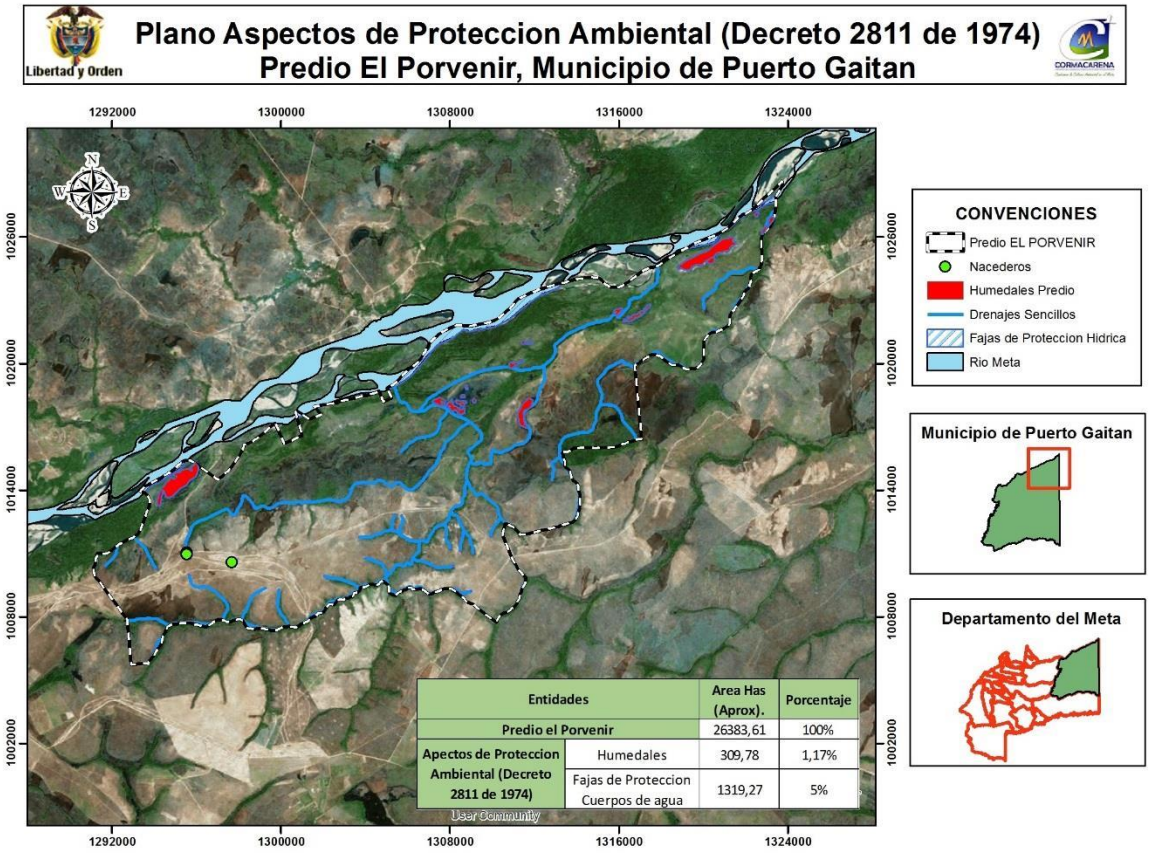


Figura 22. Plano de Aspectos de Protección Ambiental (Decreto 2811) del predio El Porvenir Puerto Gaitán – Meta

En concordancia con las fajas de protección hídrica y conservación de los bosques, el Decreto Único 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:

-Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras: Se entiende por áreas forestales protectoras:

a) Los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de aguas.

Es de aclarar que dichas áreas ambientales de protección no están contempladas dentro del área adjudicable del predio El Porvenir.

9.3 Riesgos

Según la respuesta de CORMACARENA, se procedió a revisar las zonas de riesgo rural según el Plano 6A Riesgo Rural del EOT 2009 de Puerto Gaitán, identificando que dichas zonas se encuentran distribuidas de la siguiente manera (Figura 23):

- Amenaza alta por inundación 7868,62 hectáreas aproximadamente.
- Amenaza baja por inundación 1198,42 hectáreas aproximadamente.
- Sin amenaza 17316,57 hectáreas aproximadamente.

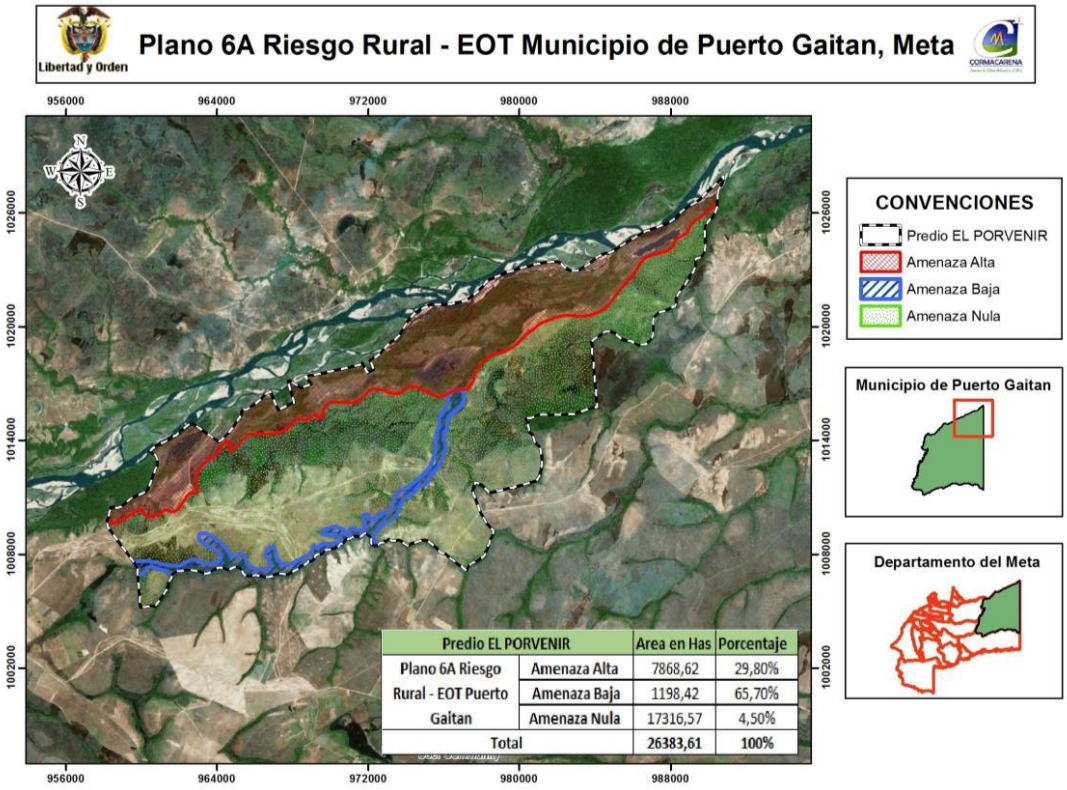


Figura 23. Plano 6ª Riesgo Rural - EOT Municipio de Puerto Gaitán.

(…) RIESGO Y AMENAZA POR INUNDACIÓN: Se genera a partir de las precipitaciones que rebasen los tiempos de retomo de diez (10) años o intervenciones antrópicas a los lechos de los cuerpos de agua que afecten la estructura hidráulica natural de los mismos.

Cabe anotar, que el área adjudicable determinada (15076,0457 ha), sólo incluye zonas con amenaza baja y sin amenaza de inundación.

9.4 Paisaje y suelos

En los recorridos realizados por la SATZF dentro del predio, se lograron identificar tres Paisajes (Tabla 6):

- Altiplanicie estructural: Es una superficie de acumulación, contempla los materiales constitutivos arcillosos, con mantos de arena y limos eólicos relieve plano a ondulado con pendientes menores al 12%. El tipo de relieve generado son mesas y/o superficies onduladas, presenta zonas depresionales (bajos), constituidos por materiales finos que sufren anegamiento prolongado limitando su uso en época invernal.
- Planicies aluviales: Se presentan cuando los cauces pierden su capacidad de carga, se amplían y su profundidad disminuye, ocasionando inundaciones y cambios de curso, en algunos casos se acumulan sedimentos generando la formación de niveles; uno de ellos son los planos de inundación que se encuentran cercanos a la zona de influencia de los ríos donde se encuentran vegas y terrazas bajas y, otros que se denominan terrazas aluviales que son más antiguos y se formaron a partir de depósitos de sedimentos, cuando los ríos eran más grandes y las épocas más húmedas.
- Valle: Son superficies fluvio depositacionales, intercaladas entre paisajes de relieve más altas; se forman paralelas al cauce de los ríos y algunos caños, en fajas alargadas, se constituyen por sedimentos mixtos aluviales y son inundables y encharcarbles.

  Los tipos de suelos definidos para el Predio El Porvenir según El Estudio General del Departamento de Meta IGAC 2004, se describen a continuación (Tabla 7):

- Consociación Typic Haplustox. Símbolo AVDa

  Esta unidad de suelos se encuentra distribuida en las mesas y superficies onduladas de la altiplanicie estructural, en clima cálido húmedo, entre la altitud de 200 a 400 msnm, con pendientes menores al 7%. La consociación

la integran un 75% Typic Haplustox, e inclusiones representadas en un 10% por suelos Plinthic Hapludox, y un 15%Plinthic Tropaquepts.
La unidad se caracteriza por presentar suelos en su mayor porcentaje del orden Oxisoles, los cuales se caracterizan por ser bien drenados, profundos a superficiales, que presentan reacción muy fuerte a fuertemente ácida con rangos de pH de 4,5 a 5,5; bajo contenido de calcio, potasio, fósforo, baja capacidad de intercambio catiónico, valores bajos a medios de carbono orgánico, muy baja saturación de bases, altos contenidos de aluminio en los horizontes superficiales, su fertilidad es baja.
El bajo contenido nutricional y los niveles altos de saturación de aluminio intercambiables con las principales limitantes para el uso agrícola de estos suelos.

- Complejo Plinthic Haplaquox y Plinthic Tropaquepts. Símbolo RVKax

  Esta unidad de suelos se encuentra distribuida el plano inundable de la planicie aluvial, con relieve plano a ligeramente plano de pendientes 0 a 3%, en clima cálido húmedo, entre la altitud de 150 a 200 msnm. El complejo lo integran en un 45% de los suelos Plinthic Haplaquox, en un 40% Plinthic Tropaquepts, y en un 15% los suelos Aeric y Tipic Tropaquepts.
  La unidad se caracteriza por presentar suelos del orden Oxisoles e Incepsitosoles, que se caracterizan por ser superficiales, limitados por el nivel freático fluctuante y presencia de plintita, de textura moderadamente fina y pobremente drenados.
  Los limitantes de uso y manejo agropecuario son el bajo contenido nutricional, los niveles altos de aluminio intercambiables, y la profundidad efectiva superficial que limita el desarrollo de las plantas.
- Grupo indiferenciado Typic Tropofluvents, Typic Tropaquepts, Oxyaquic Dystropepts. Símbolo VVCaxy

  Esta unidad se encuentra en las vegas de los vallecitos coluvio-aluviales de los principales caños secundarios, con un relieve plano a ligeramente plano, con pendientes menores al 3%, en clima cálido húmedo a muy húmedo.
  Las inundaciones y encharcamientos, el nivel freático fluctuante, los niveles altos de aluminio y la baja fertilidad, generan serios inconvenientes para la adecuada explotación. A continuación, se encuentra la leyenda de las Unidades de Suelos y la leyenda de Capacidad de Uso, correspondientes para el predio El Porvenir, determinadas por el IGAC en el 2004.

Tabla 6. Leyenda de Suelos de las unidades del Predio El Porvenir (escala 1: 100.000)

Paisaje	Clima	Tipo de Relieve	Litografía/ Material Transportado	Principales características del Tipo de Relieve y procesos geomorfológicos	Unidades Cartográficas del Tipo de Suelo	Número de Perfil	%	Principales Características de los Suelos	Símbolo
Altiplanicie estructural	Cálido húmedo	Mesas y superficies onduladas	Arcillas con cobertura discontinua de limos eólicos	Relieve ligeramente plano a ondulado, pendientes 0 a 7%. Afectados por escurrimiento difuso generalizado, fenómenos de sufusión que originan zurales	**Consociación** Typic Haplustox, fase 1-7%	PV-05	75	Profundos a superficiales, texturas finas a moderadamente finas, bien a pobremente drenados, muy fuerte a fuertemente ácidos, fertilidad baja, toxicidad por aluminio	AVD a
Planicie Aluvial	Cálido húmedo	Plano de inundación	Sedimentos finos con cobertura delgada de limos eólicos	Relieve plano a ligeramente plano, pendientes de 0 a 3%. Micro relieve de escarceos. Solifluxión líquida	**Complejo** Plinthic Haplaquox Plinthic Tropaquepts	C-32 C -34	45 40	Superficiales, texturas moderadamente finas, pobremente drenados, muy fuerte a fuertemente ácidos, fertilidad baja, susceptibles a inundaciones, toxicidad por aluminio	RVKax
Valle	Cálido húmedo y muy húmedo	Vallecitos Coluvio-aluviales	Depósitos mixtos aluviales y coluviales	Relieve ligeramente plano 0 a 3%. Micro relieve plano cóncavo con ligera inclinación hacia los taludes superiores	**Grupo Indiferenciado** Typic Tropofluvents Typic Tropaquepts Oxyaquic Dystrotepts	CT-8 PL-32 M-16		Superficiales a moderadamente profundos, texturas gruesas a moderadamente finas, imperfecta a pobremente drenados, muy fuerte a extremadamente ácidos, fertilidad baja, ligera toxicidad a aluminio, susceptibles a inundaciones y encharcamientos	VVCaxy

Fuente Estudio de suelos y zonificación del Meta (2004)

Tabla 7. Leyenda de Capacidad de Uso de los Suelos del Predio El Porvenir (escala 1:100.000)

Subclase	UCS	Principales Características de las Unidades Capacidad	Principales Limitantes de Uso	Usos recomendados	Prácticas de manejo
VIs-1	AVD a	El relieve es plano a ligeramente plano, con pendientes menores a 3%. Los suelos son profundos a bien drenados, texturas moderadamente finas, muy fuertemente ácidos y fertilidad muy baja.	Saturación de aluminio mayor al 60%, fertilidad muy baja, difícilmente corregible.	La unidad es apta para ganadería extensiva con pastos introducidos, como Braquiaria, asociado con actividades de agroforestería.	Las prácticas de manejo son inducción de especies resistentes a la acidez fuerte, mejorar las praderas, rotar potreros, establecer cercas vivas, construcción jagüeyes y proteger las fuentes de agua.
VIhs-1	VVC axy	El relieve es plano a ligeramente plano con pendientes de 0 a 3%, drenaje natural imperfecto a pobre, nivel freático cercano a la superficie, pobre en nutrientes, reacción extremada a muy fuertemente ácida, texturas moderadamente gruesas y medias sobre moderadamente finas a finas	Inundaciones y encharcamientos frecuentes, fertilidad natural baja a muy baja y la profundidad efectiva muy superficial.	Agroforestería con ganadería extensiva, zoocultura, para conservación y protección del bosque natural.	Las prácticas de manejo son uso de pastos naturales mejorados, adecuados a las condiciones del medio, construcción de zoocriadreos y protección de bosques de galerías y nacederos de los caños.
VIIhs-2	RVK ax	El relieve es plano a ligeramente plano, con pendientes de 0 a 3%, drenaje natural pobre a pantanoso, nivel freático muy superficial, presencia de zurales y escarceos, reacción media a fuertemente ácida	Inundaciones y encharcamientos frecuentes irregulares y prolongados, profundidad efectiva muy superficial, alta saturación de aluminio, fertilidad natural muy baja y erosión reticular	Conservación y protección del ecosistema y para zoocultura mixta.	Las prácticas de manejo son uso de pastos naturales y mejorados, adecuados a las condiciones del medio, construcción de zoocriaderos y protección de bosques de galería y nacederos de los caños.

Fuente Estudio de suelos y zonificación del Meta (2004)

10. Cálculo de la UAF Predial tipo

Se realiza con base en la propuesta metodológica de cálculo de UAF predial consignada en la Resolución 2533 de 2018 de la Agencia Nacional de Tierras.

Para el cálculo de UAF del predio el Porvenir se realizaron algunas modificaciones para efectuar el cálculo sobre el área general (UAF tipo), más no sobre las ocupaciones.

La selección de los sistemas de producción, se realizó una vez se recolectó y analizó la información de campo, en donde se verificaron las unidades cartográficas de suelos, capacidad de uso de suelos, costos de sistemas de agropecuarios de la zona, usos actuales de suelos, usos de suelo permitidos; además, se recopilaron datos de la tradición productiva y cultura de los habitantes del predio, también se tomó como referencia la información reportada por la UPRA y las recomendaciones de uso reportados por el IGAC.

De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos, según las Unidades Cartográficas de suelos presentes, así: una UAF para la Unidad Cartográfica AVD y otra UAF para las Unidades Cartográficas RVK y VVC; por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector.

10.1 UAF predial – Área útil – Uso de suelo Agropecuario – Unidad Cartográfica AVD

10.1.1 Explotación Agropecuaria Comercial (EAC)

Sistema de producción Caucho

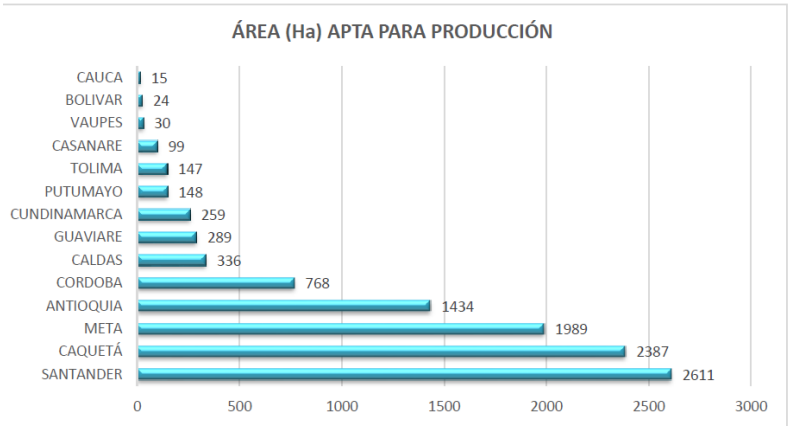
Dentro de las zonas aptas para el desarrollo del cultivo de Caucho en Colombia, se encuentra el piedemonte llanero, las condiciones de temperatura, humedad relativa y altitud de la zona geográfica del predio El Porvenir cumple con los requerimientos agroecológicos para el establecimiento de la plantación.

De igual forma el caucho es una planta establecida en regiones con suelos químicamente pobres, pero de buenas características físicas, en este sentido cuando estas limitaciones químicas se corrigen en el momento oportuno, se logra un mejor desarrollo y, por ende, una mejor producción (Bataglia, 1987).

Según datos UPRA 2017, la aptitud de Caucho para el municipio de Puerto Gaitán, se encuentra entre media y alta. Al realizar el cruce de capas de aptitud del cultivo de caucho y del predio El Porvenir, la aptitud resultante es Alta.

Según el Censo Cauchero de 2015, el departamento de Santander, presenta la mayor área apta para el aprovechamiento con 2.611 hectáreas, seguido por

Caquetá con 2.387 hectáreas, Meta con 1.989 hectáreas y Antioquia con 1.343 ha (gráfica 1).



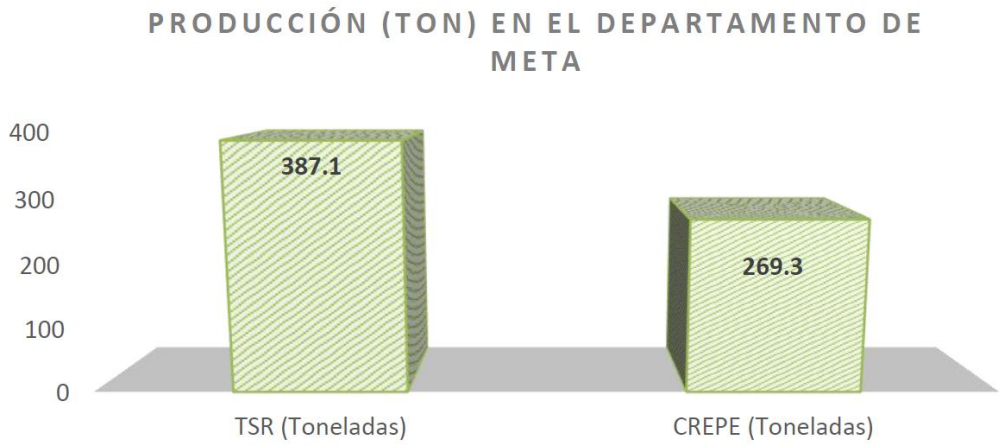
Gráfica 1. Área apta para producción
Fuente. Fondo de fomento cauchero 2015.

El modelo productivo de caucho, se propone con una distancia de siembra de surcos dobles (3 m x 2.5 m x 13 m), con una densidad de siembra de 510 árboles por hectárea.

El aprovechamiento del caucho consiste en la recolección del látex contenido en la red de vasos laticíferos del árbol, mediante la sangría, que se realiza al practicar una incisión llamada “canal” en la corteza del árbol. El mejor criterio para su iniciación ocurre cuando se encuentra el 50% de árboles por hectárea, con una circunferencia superior a los 45 centímetros, a un metro de altura del suelo, 5 – 6 años después de la siembra. La mejor época para iniciar la sangría es al final de un periodo seco y no debe coincidir con plena temporada de lluvias ni con la refoliación de los árboles.

La producción de caucho comienza en los años sexto a séptimo de siembra con 800 Kg por hectárea. El rendimiento del año octavo se incrementa a 1.100 Kg por hectárea. El rendimiento del año noveno se incrementa a 1.250 Kg por hectárea y durante los años décimo y undécimo de siembra, se tienen un rendimiento anual de 1.300 – 1.400 Kg por hectárea. La producción de caucho se estabiliza durante los años 11 – 31 con 1.600 Kg anuales por hectárea. Finalmente, el rendimiento anual de la plantación decrece a 900 Kg durante los años 32 – 34 y 600 Kg por hectárea durante el año 35, último año de producción.
Dichos rendimientos vienen establecidos para una densidad final de siembra de 500-600 árboles /ha.

En general, el coágulo de campo es la materia prima que más se produce en el país, con 808,6 toneladas de caucho seco, y el departamento del Meta proporciona al mercado nacional caucho tipo lámina crepe, además del coágulo necesario para producir materias oprimas a través de procesos agroindustriales como se muestra a continuación. (Gráfica 2). La actividad cauchera es desarrollada por la empresa privada Mavalle S.A en su mayoría, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio y cuya planta procesadora se encuentra en el municipio de Puerto López.



Gráfica 2. Producción de materias primas con procesos agroindustriales.
Fuente. Fondo de fomento cauchero 2015.

Se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de Banco Agrario, Finagro, Dane-Sipsa, Plan Prospectivo Agropecuario Puerto Gaitán 2020, entre otros, del departamento del Meta:

- Establecimiento: análisis de suelo, material vegetal, enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, además de productos fitosanitarios.
- Mantenimiento: enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, productos fitosanitarios, podas.
- Rayado: herramientas y utensilios para recolectar el caucho.
- Poscosecha: Filtrado, dilución, coagulación, laminado, secado y empaque.
- Comercialización: este aspecto es uno de los menos desarrollados dentro del predio El Porvenir, debido a las distancias, la infraestructura vial en mal estado y los bajos volúmenes de producción, razón por la cual, el costo del transporte es alto.

EAC= 22 ha + 5726 m^2

10.1.2 Explotación Agropecuaria de sostenimiento (EAS)

Sistema de producción Silvopastoril

La implementación de la Ganadería bovina, se recomienda mediante el uso de pastos mejorados tolerantes al aluminio, como *Braquiaria,* rotación de potreros e instalación de cercas vivas, en un arreglo agroforestal que combina el cultivo agroecológico de arbustos forrajeros (Leucaena) en una densidad mayor a 1000 plantas por hectárea para ramoneo directo del ganado, asociados siempre a pasturas tropicales mejoradas.

Así, mediante la integración de actividades forestales y pecuarias se pueden lograr varios objetivos medioambientales y socioeconómicos, uno de ellos es la función protectora que cumplen los árboles al reducir la degradación de los suelos y el agua, los cuales, en combinación con procesos de tradición en la región -como la ganadería bajo un sistema de manejo sostenible - permitirían alcanzar un sistema productivo apto para las condiciones edafoclimáticas de la zona.

El modelo productivo silvopastoril, se propone con la siembra dispersa de árboles maderables nativos como Acacia y Matarratón, la siembra de arbustos forrajeros, la siembra de pasto mejorado como *Brachiaria* y, la producción bovina con una capacidad de 1 UGG por hectárea, con la compra de una vaca en el primer año, para la producción de un novillo de levante de 320 kg cada año, desde el año 3, teniendo en cuenta que se tiene un parto por año, desde el año 1 y el novillo alcanza los 320 Kg en 2 años.
Además, en este sistema se propone la compra de pajillas para reproducción, ya que la compra de un toro para este propósito, aumenta excesivamente los costos de producción.
Se contempla la instalación de cercas tradicionales, con postes de madera y alambre de púas.

Se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de Banco Agrario, Finagro, Dane-Sipsa, Plan Prospectivo Agropecuario Puerto Gaitán 2020, entre otros, del departamento del Meta:

 Establecimiento: material vegetal, enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, además de productos fitosanitarios y productos veterinarios para los bovinos.
 Mantenimiento: enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, productos fitosanitarios y productos veterinarios para los bovinos.

 Comercialización: la comercialización del ganado la realizan en la finca; existen dos o tres compradores que llegan desde Puerto López o Puerto Gaitán para realizar la compra directamente, lo cual es una ventaja al no tener costos en transporte, sin embargo, en ocasiones el pago es menor que en mercado convencional. Otros pocos productores, dependiendo su capacidad económica, transportan el ganado por vía terrestre para comercializarlo directamente en las plazas de ganado de Puerto Gaitán y Puerto López.

EAS= 29 ha + 6783 m^2

10.1.3 Explotación Agropecuaria para la Seguridad Alimentaria (EASA)

La mayoría de los habitantes poseen un sistema de pancoger, que les asegura tener algunos productos que son utilizados para el autoconsumo en las familias con cultivos como el plátano, maíz, frijol, yuca, papaya.

De acuerdo a la temperatura de la zona, se establece un clima cálido, con 3 integrantes del núcleo familiar, que es el promedio de la composición familiar del predio El Porvenir.

EASA= 0 ha + 6000 m^2

10.1.4 Economía de Cuidado (EC)

Para el predio El Porvenir, no se estableció Economía del Cuidado, debido a que no se tiene establecido si las familias de los ocupantes históricos, los cuales serán los adjudicatarios, tienen en su composición familiar a una mujer entre ellos.

10.1.5 Infraestructura predial (IP)

Se estableció un área de 1000 m^2 en promedio, para la posible infraestructura que se puede encontrar dentro del predio como, por ejemplo, corrales para manejo bovino o viviendas.

IP= 0 ha + 1000 m^2

10.1.6 Área de Interés Ambiental (AIA)

Se asignó un porcentaje adicional de área sobre las áreas calculadas anteriormente, de acuerdo a la georreferenciación del predio El Porvenir y su respectivo cruce con los usos de suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del

municipio. Esta área corresponde al uso de suelo Agropecuario, el cual tiene destinación para la producción agrícola y ganadera y, para explotación de recursos naturales.

AIA= 2 ha + 6475 m^2

10.1.7 Unidad Agrícola Familiar Predial (UAF)

UAF Predial = EAC + EAS + EASA + IP + AIA

Explotación Agropecuaria Comercial, EAC:	22 ha + 5726 m^2
Explotación Agropecuaria de Soporte, EAS:	29 ha + 6783 m^2
Explotación Agropecuaria Seguridad Alimentaria, EASA:	0 ha + 6000 m^2
Infraestructura Predial, IP:	0 ha + 1000 m^2
Área de Interés Ambiental, AIA:	2 ha + 6475 m^2

UAF PREDIAL CALCULADA: 55 ha + 5984 m^2

10.2 UAF predial – Área útil – Uso de suelo Agropecuario – Unidad Cartográfica RVK y VVC

10.2.1 Explotación Agropecuaria Comercial (EAC)

Sistema de producción Silvopastoril

La ganadería en estas zonas puede mejorarse si se establece en sistemas silvopastoriles que mejoren las condiciones de alimentación en época donde el pasto no está disponible, esto nos permite aumentar el número de animales (UGG) por hectárea o, mejorar su rendimiento en peso diario manejando los animales en un área reducida, donde pastorean en praderas de buena calidad y ramonean arbustos con alto contenido de proteína, en épocas donde deben estar confinados por las inundaciones.

De igual manera, los animales pueden complementar su alimentación con sal y melaza, los cuales son suplementos que mejoran la asimilación de pasto, por su

aporte mineral y energético, permitiendo así satisfacer las necesidades nutricionales de los animales, mejorando su ganancia en peso, condiciones corporales; potencializando el objetivo de la explotación. Para este sistema se propone incluir pastos de cosecha (pastoreo), pastos para ramoneo (consumo directo por el animal de arbustos), bancos de proteína, que son arbustos con altos contenidos de proteína, ubicados como cerca viva en líneas dentro de los potreros, de tal manera que los animales los consumen directamente, y con un componente forestal sembrando árboles maderables y nativos de manera dispersa, para acompañar el cultivo.
La producción bovina se estableció con una capacidad de 1 UGG por hectárea, con la compra de una vaca en el primer año, para la producción de un novillo de levante de 320 kg cada año, desde el año 3, teniendo en cuenta que se tiene un parto por año, desde el año 1 y el novillo alcanza los 320 Kg en 2 años.

Además, en este sistema se propone la compra de pajillas para reproducción, ya que la compra de un toro para este propósito, aumenta excesivamente los costos de producción.
También, se contempla la instalación de cercas tradicionales, con postes de madera y alambre de púas.

Este sistema genera una mayor eficiencia por terreno, genera un confort a los animales, así como también mejora las condiciones del pasto, por los efectos que tienen los arbustos como barrera rompe vientos, evitando que los pastos y la barrera contrarresten el crecimiento, por otro lado, los árboles ayudan a mejorar la humedad del terreno generando una sombra constante que regula la temperatura de los animales.

Para la estructura de costos, se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de Banco Agrario, Finagro, Dane-Sipsa, Plan Prospectivo Agropecuario Puerto Gaitán 2020, entre otros, del departamento del Meta:

 Establecimiento: material vegetal, enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, además de productos fitosanitarios y productos veterinarios para los bovinos.
 Mantenimiento: enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, productos fitosanitarios y productos veterinarios para los bovinos.
 Comercialización: la comercialización del ganado la realizan en la finca; existen dos o tres compradores que llegan desde Puerto López o Puerto Gaitán para realizar la compra directamente, lo cual es una ventaja al no tener costos en

transporte, sin embargo, en ocasiones el pago es menor que en mercado convencional. Otros pocos productores, dependiendo su capacidad económica, transportan el ganado por vía terrestre para comercializarlo directamente en las plazas de ganado de Puerto Gaitán y Puerto López.

EAC = 44 ha + 9672 m^2

10.2.2 Explotación Agropecuaria de sostenimiento (EAS)

Sistema de producción Maíz

Este sistema de producción se plantea, ya que presenta un ciclo más corto para la producción y comercialización y, porque hace parte de los cultivos predominantes en esta zona.
Además, el maíz se propone para los lugares donde las inundaciones son más frecuentes, ya que este es moderadamente tolerable a suelos que presentan condiciones de encharcamiento, para lo cual se propone la construcción de drenajes profundos y así evitar un índice de encharcamiento muy alto.

El modelo productivo de maíz, se propone con una distancia de siembra de 0,8 m x 0,8 m, con una densidad de siembra de 47.000 plantas por hectárea.
El ciclo vegetativo del maíz es de 5 meses, que coincide con los meses de verano de la zona (noviembre a marzo), por lo cual, la cosecha se realiza una vez por año, desde el segundo año. Según las EVAs del año 2016, la producción de maíz (grano seco) para el municipio de Puerto Gaitán, está entre 5 y 6 ton/ha.

Así las cosas, se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de Banco Agrario, Finagro, Dane-Sipsa, Plan Prospectivo Agropecuario Puerto Gaitán 2020, entre otros, del departamento del Meta:

- Establecimiento: semilla, enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, además de productos fitosanitarios.
- Mantenimiento: enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, además de productos fitosanitarios.
- Comercialización: la cosecha se comercializa en el municipio de Orocue; para llegar allí deben pagar transporte fluvial, estos costos dependen de la cantidad de producto transportado para ser distribuido.

EAS = 37 ha + 9116 m^2

10.2.3 Explotación Agropecuaria para la Seguridad Alimentaria (EASA)

La mayoría de los habitantes poseen un sistema de pancoger, que les asegura tener algunos productos que son utilizados para el autoconsumo en las familias con cultivos como el plátano, frijol, yuca, papaya.

De acuerdo a la temperatura de la zona, se establece un clima cálido, con 3 integrantes del núcleo familiar, que es el promedio de la composición familiar del predio El Porvenir.

EASA = 0 ha + 6000 m^2

10.2.4 Economía de Cuidado (EC)

Para el predio El Porvenir, no se estableció Economía del Cuidado, debido a que no se tiene establecido si las familias de los ocupantes históricos, los cuales serán los adjudicatarios, tienen en su composición familiar a una mujer entre ellos.

10.2.5 Infraestructura predial (IP)

Se estableció un área de 1000 m^2 en promedio, para la posible infraestructura que se puede encontrar dentro del predio como, por ejemplo, corrales para manejo bovino o viviendas.

IP = 0 ha + 1000 m^2

10.2.6 Área de Interés Ambiental (AIA)

Se asignó un porcentaje adicional de área sobre las áreas calculadas anteriormente, de acuerdo a la georreferenciación del predio El Porvenir y su respectivo cruce con los usos de suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. Esta área corresponde al uso de suelo Agropecuario, el cual tiene destinación para la producción agrícola y ganadera y para explotación de recursos naturales.

AIA = 4 ha + 1789 m^2

10.2.7 Unidad Agrícola Familiar Predial (UAF)

UAF Predial = EAC + EAS + EASA + IP + AIA

Explotación Agropecuaria Comercial, EAC:	44 ha + 9672 m^2
Explotación Agropecuaria de Soporte, EAS:	37 ha + 9116 m^2
Explotación Agropecuaria Seguridad Alimentaria, EASA:	0 ha + 6000 m^2
Infraestructura Predial, IP:	0 ha + 1000 m^2
Área de Interés Ambiental, AIA:	4 ha + 1789 m^2

UAF PREDIAL CALCULADA: 87 ha + 7577 m^2

11.3. UAF Predial – Uso Forestal Protector-Productor

11.3.1. Explotación Agropecuaria Comercial (EAC)

Sistema de producción Forestal (Acacia y Eucalipto)

La zonificación para plantaciones forestales comerciales a escala 1:100.000, realizada por la UPRA, muestra que el departamento del Meta, es el que presenta una mayor superficie con aptitud alta, 520.160 ha, que representan el 86,8% del área total con aptitud alta en la región de la Orinoquia.

La base de datos del ICA-FINAGRO sobre áreas plantadas, hasta el 2015, con especies forestales comerciales, muestran que en la región las plantaciones forestales ocupan un área de 67.867 ha, siendo las especies más plantadas la Acacia (Acacia mangium) con 23.065 ha, seguida por el Pino caribe (Pinus caribaea) con 17.772 ha y Eucalipto pellita (Eucalyptus pellita), con 12.711ha, representando un 79% del área total plantada. Además, muestran que las plantaciones se concentran en los municipios de Puerto López (12.836 ha), Puerto Gaitán (6.854 ha) y San Martín (4.845 ha).

Este sistema forestal propuesto, presenta las mejores condiciones para un desarrollo industrial maderero en el corto plazo, por dos razones principales: 1) Su cercanía a la ciudad de Bogotá; 2) Las especies plantadas, son caracterizadas por su rápido crecimiento (turnos de 8 a 12 años).

Un estudio realizado por ONF Andina en 2013 para la firma Ecologic CO2 cero, sobre el mercado de la madera en el departamento Meta, arrojó como resultado que el consumo anual de madera era de aproximadamente 12.000 m³, de los cuales 4.360 m³ provenían de plantaciones, eucalipto, acacia y pino principalmente. Las poblaciones objeto del estudio fueron Villavicencio, Puerto Gaitán y Acacías. Además, entrevistas realizadas con propietarios de negocios de madera y reforestadores, indican que durante los últimos 3 años (2014-2017), el consumo se ha aumentado considerablemente por el incremento en la construcción de vivienda, principalmente en las ciudades de Villavicencio, Puerto Gaitán y Puerto López.

El modelo productivo forestal, se propone con Eucalipto y Acacia, con una distancia de siembra de 3 m x 3 m, con una densidad de siembra de 1.111 plantas por hectárea. El turno del Eucalipto está en promedio en 8 años, con un rendimiento de 20 m^3/ha/año; y el turno de la Acacia está en promedio en 12 años, con un rendimiento de 20 m^3/ha/año.

Para la estructura de costos de este sistema productivo, se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de Banco Agrario, Corpoica, Cenicafé, Finagro, Plan Prospectivo Agropecuario Puerto Gaitán 2020, entre otros, del departamento del Meta:

 Establecimiento: material vegetal, enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, además de productos fitosanitarios, construcción de cortafuegos.
 Mantenimiento: enmiendas, fertilizantes orgánicos y químicos, productos fitosanitarios, podas, mantenimiento de cortafuegos.
 Cosecha: Corte, desrrame, trozado, apilado.
 Comercialización: la comercialización de la madera la realizan en Puerto Gaitán. Otros pocos productores, dependiendo su capacidad económica, transportan la madera por vía terrestre para comercializarla en Bogotá.

EAC = 24 ha + 6742 m^2

11.3.2. Explotación Agropecuaria de sostenimiento (EAS)

Sistema de producción Apicultura

Los sistemas apícolas se convierten en la mejor alternativa para el establecimiento de sistemas productivos en zonas donde se busca tener como prioridad la conservación del ecosistema, ya que se puede implementar sin deforestar; otra de las ventajas que presentan los sistemas apícolas es que la producción es de alto valor por peso y volumen del producto, lo que facilita el transporte en caso de encontrarse en zonas alejadas y con difícil acceso, independientemente del producto derivado que sea de interés, adicionalmente si se establecen sistemas productivos que tengan floración abundante y bajo uso de insecticidas, la apicultura puede presentar mayores rendimientos y con ello, mayor margen de utilidad.

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer un proyecto apícola como un sistema productivo de soporte o principal, dependiendo de las características del ecosistema: una colmena puede presentar rendimientos que oscilan entre los 20 – 50 kg de miel en una o dos cosechas por año.
El área de pecoreo de una abeja es de aproximadamente de 706 ha, que corresponde a 1.5 km de radio; esto permite estimar la distancia a la que se deben encontrar las flores a las que se espera que la abeja llegue, por tal razón la abundancia de la floración cercana a la colmena es determinante en el rendimiento a obtener, para esto, se debe tener en cuenta el tipo de plantas que proveen de flores, ya que no es lo mismo contar con la floración de un cultivo joven, que contar con la floración de una zona boscosa con dosel alto y gran floración.

El departamento del Meta ha venido escalando posiciones, debido al aumento de colmenas en la región: según los productores, los departamentos de los llanos orientales brindan condiciones muy favorables para la producción, como la oferta floral y el bajo uso de agroquímicos que deterioren la salud de las abejas.

Entre las ventajas que presenta el establecimiento de un sistema apícola está que cualquiera de sus productos, tiene una vida útil que le permite al productor, almacenar y conseguir mejores precios o mejores mercados; en Colombia, se estima que Bogotá es la plaza de mayor consumo de miel.

Para el sistema productivo apícola, se propone la instalación de 10 colmenas: 5 en el año 1 y otras 5 en el año 2. Se propone una cosecha al año, al final de los meses de verano, con una producción de 20 kg/colmena/año.

Así las cosas, se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de CORMACARENA, CORPOICA, y empresas apícolas, entre otros:

- Establecimiento: instalación de colmenas, manejo de plagas.
- Mantenimiento: revisión y mantenimiento de colmenas, manejo de plagas.
- Comercialización: la cosecha de miel se comercializa en los municipios aledaños, pero principalmente en Bogotá.

EAS = 23 ha + 5274 m^2

11.3.3. Explotación Agropecuaria para la Seguridad Alimentaria (EASA)

La mayoría de los habitantes poseen un sistema de pancoger, que les asegura tener algunos productos que son utilizados para el autoconsumo en las familias con cultivos como el plátano, frijol, yuca, papaya.

De acuerdo a la temperatura de la zona, se establece un clima cálido, con 3 integrantes del núcleo familiar, que es el promedio de la composición familiar del predio El Porvenir.

EASA = 0 ha + 6000 m^2

11.3.4. Economía de Cuidado (EC)

Para el predio El Porvenir, no se estableció Economía del Cuidado, debido a que no se tiene establecido si las familias de los ocupantes históricos, los cuales serán los adjudicatarios, tienen en su composición familiar a una mujer entre ellos.

11.3.5. Infraestructura predial (IP)

Se estableció un área de 1000 m^2 en promedio, para la posible infraestructura que se puede encontrar dentro del predio como, por ejemplo, corrales para manejo bovino o viviendas.

IP = 0 ha + 1000 m^2

11.3.6. Área de Interés Ambiental (AIA)

Se asignó un porcentaje adicional de área sobre las áreas calculadas anteriormente, de acuerdo a la georreferenciación del predio El Porvenir y su respectivo cruce con

los usos de suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.
Esta área corresponde al uso de suelo Forestal Protector-Productor. Este fomenta el uso sustentable de los recursos naturales renovables y particularmente de los productos forestales e incentivar, a través de dicho uso y de prácticas conservacionistas, el desarrollo regional. El objetivo es maximizar la eficiencia productiva y ambiental de las actividades agropecuarias y forestales.

AIA = 6 ha + 3572 m^2

11.3.7. Unidad Agrícola Familiar Predial (UAF)

UAF Predial = EAC + EAS + EASA + IP + AIA

Explotación Agropecuaria Comercial, EAC:	24 ha + 6742 m^2
Explotación Agropecuaria de Soporte, EAS:	23 ha + 5274 m^2
Explotación Agropecuaria Seguridad Alimentaria, EASA:	0 ha + 6000 m^2
Infraestructura Predial, IP:	0 ha + 1000 m^2
Área de Interés Ambiental, AIA:	6 ha + 3572 m^2

UAF PREDIAL CALCULADA: 55 ha + 2588 m^2

11.4. UAF Predial – Uso Forestal Protector

11.4.1. Explotación Agropecuaria Comercial (EAC)

Sistema de producción Apicultura

Los sistemas apícolas se convierten en la mejor alternativa para el establecimiento de sistemas productivos en zonas donde se busca tener como prioridad la conservación del ecosistema, ya que se puede implementar sin deforestar; otra de las ventajas que presentan los sistemas apícolas es que la producción es de alto valor por peso y volumen del producto, lo que facilita el transporte en caso de encontrarse en zonas alejadas y con difícil acceso, independientemente del producto derivado que sea de interés, adicionalmente si se establecen sistemas productivos que tengan floración abundante y bajo uso de insecticidas, la apicultura puede presentar mayores rendimientos y con ello, mayor margen de utilidad.

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer un proyecto apícola como un sistema productivo de soporte o principal, dependiendo de las características del ecosistema: una colmena puede presentar rendimientos que oscilan entre los 20 – 50 kg de miel en una o dos cosechas por año.

El área de pecoreo de una abeja es de aproximadamente de 706 ha, que corresponde a 1.5 km de radio; esto permite estimar la distancia a la que se deben encontrar las flores a las que se espera que la abeja llegue, por tal razón la abundancia de la floración cercana a la colmena es determinante en el rendimiento a obtener, para esto, se debe tener en cuenta el tipo de plantas que proveen de flores, ya que no es lo mismo contar con la floración de un cultivo joven, que contar con la floración de una zona boscosa con dosel alto y gran floración.

El departamento del Meta ha venido escalando posiciones, debido al aumento de colmenas en la región: según los productores, los departamentos de los llanos orientales brindan condiciones muy favorables para la producción, como la oferta floral y el bajo uso de agroquímicos que deterioren la salud de las abejas.

Entre las ventajas que presenta el establecimiento de un sistema apícola está que cualquiera de sus productos, tiene una vida útil que le permite al productor, almacenar y conseguir mejores precios o mejores mercados; en Colombia, se estima que Bogotá es la plaza de mayor consumo de miel.

Para el sistema productivo apícola, se propone la instalación de 10 colmenas: 5 en el año 1 y otras 5 en el año 2. Se propone una cosecha al año, al final de los meses de verano, con una producción de 20 kg/colmena/año.

Así las cosas, se establecieron las siguientes actividades principales, basados en información de CORMACARENA, CORPOICA, y empresas apícolas, entre otros:

- Establecimiento: instalación de colmenas, manejo de plagas.
- Mantenimiento: revisión y mantenimiento de colmenas, manejo de plagas.
- Comercialización: la cosecha de miel se comercializa en los municipios aledaños, pero principalmente en Bogotá.

EAC = 38 ha + 4976 m^2

11.4.2. Explotación Agropecuaria de sostenimiento (EAS)

Para el uso de suelo Forestal Protector, no se propone una explotación de sostenimiento, ya que este uso no permite ningún otro tipo de explotación agropecuaria.

11.4.3. Explotación Agropecuaria para la Seguridad Alimentaria (EASA)

Para el uso de suelo Forestal Protector, no se propone una explotación para la seguridad alimentaria, ya que este uso no permite ningún tipo de explotación agropecuaria.

11.4.4. Economía de Cuidado (EC)

Para el predio El Porvenir, no se estableció Economía del Cuidado, debido a que no se tiene establecido si las familias de los ocupantes históricos, los cuales serán los adjudicatarios, tienen en su composición familiar a una mujer entre ellos.

11.4.5. Infraestructura predial (IP)

Para el uso de suelo Forestal Protector, no se propone un área de infraestructura predial, ya que este uso no permite ningún tipo de explotación ni adecuación que afecten los recursos naturales.

11.4.5. Área de Interés Ambiental (AIA)

Se asignó un porcentaje adicional de área sobre las áreas calculadas anteriormente, de acuerdo a la georreferenciación del predio El Porvenir y su respectivo cruce con los usos de suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. Esta área corresponde al uso de suelo Forestal protector, destinada a la conservación y a la protección ambiental.

AIA = 5 ha + 7743 m^2

11.5.6. Unidad Agrícola Familiar Predial (UAF)

UAF Predial = EAC + EAS + EASA + IP + AIA

Explotación Agropecuaria Comercial, EAC:	38 ha + 4976 m^2
Explotación Agropecuaria de Soporte, EAS:	0 ha + 0 m^2
Explotación Agropecuaria Seguridad Alimentaria, EASA:	0 ha + 0 m^2
Infraestructura Predial, IP:	0 ha + 0 m^2
Área de Interés Ambiental, AIA:	5 ha + 7743 m^2

UAF PREDIAL CALCULADA: 44 ha + 2722 m^2

11. Concepto técnico

- Las principales limitantes de los suelos en el predio El Porvenir se presentan en la Planicie Aluvial -en los planos de inundación- que comprende la Unidad Cartográfico de Suelos RVK, la cual presenta condiciones especiales de manejo por las inundaciones y encharcamientos frecuentes en la época de lluvias, durante los meses de abril a noviembre; adicionalmente, estos suelos se caracterizan por presentar alta saturación de aluminio y baja fertilidad, y estas características que en conjunto presentan los suelos, incrementan los costos de implementación de los sistemas productivos propuestos, ya que se requieren prácticas de manejo de alta inversión para corregir las limitaciones que poseen los suelos, como el drenaje pobre que se presenta por la fluctuación del nivel freático, así como suplir los requerimientos nutricionales mediante una fertilización adecuada y oportuna que demandan los cultivos, por los bajos contenidos de fertilidad y nutrientes en los suelos, de igual forma, se requiere la selección de especies vegetales tolerantes a las altas concentraciones de aluminio.

- De acuerdo a lo anteriormente mencionado, los sistemas productivos propuestos se formularon con unos costos de producción bajos, con baja tecnología, para así obtener áreas (UAFs) más cercanas a lo que en realidad los ocupantes podrían explotar con sus actuales recursos. Así las cosas, para optimizar la explotación

económica de la tierra que será adjudicada por la ANT, es necesaria la participación de la **Agencia de Desarrollo Rural –ADR**, para la financiación e implementación de los sistemas productivos propuestos, con una tecnología más avanzada, conforme a la disponibilidad de más recursos, lo que incurría en costos de producción más altos, pero así mismo con ingresos superiores a los proyectados, lo que aumentaría la rentabilidad en un gran porcentaje, y así mejoraría la calidad de vida de los ocupantes del predio El Porvenir.

- Las condiciones especiales de manejo para los suelos, en combinación con la ubicación del predio, las vías de acceso, las vías de comercialización de los productos, el transporte fluvial y los costos de mano de obra, convergen en el cálculo de la UAF predial para el predio El Porvenir, razón por la cual se resultaron 4 áreas de UAF, que comprenden: cincuenta y cinco hectáreas más cinco mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (55 ha + 5984 m^2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD; ochenta y siete hectáreas más siete mil quinientos setenta y siete metros cuadrados (87 ha + 7577 m^2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica RVK y VVC; cincuenta y cinco hectáreas más dos mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados (55 ha + 2588 m^2) para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y; cuarenta y cuatro hectáreas más dos mil setecientos veintidós metros cuadrados (44 ha + 2722 m^2) para el uso de suelo Forestal Protector.

- Cabida del área adjudicable:

Uso de Suelo	Área (ha)	UAF (ha)	Sistemas Productivos Propuestos	Cabida (Número de familias)
Agropecuario - AVD	5963,9303	55,5984	Caucho-Silvopastoril	107,2680
Agropecuario – RVK y VVC	5376,9565	87,7577	Silvopastoril-Maíz	61,2705
Forestal Protector - Productor	2531,9452	55,2588	Forestales - Apicultura	45,8198
Forestal Protector	1203,2138	44,2722	Apicultura	27,1776
TOTAL	**15076,0458**			**241,5359**

12. Bibliografía

-Alcaldía municipio de Puerto Gaitán. (2016). Plan de desarrollo del municipio de Puerto Gaitán.

- Alcaldía municipio de Puerto Gaitán. (2009). Plan Prospectivo Agropecuario Puerto Gaitán 2020.

-Amézquita, E. (1998). Propiedades físicas de los suelos de los Llanos Orientales y sus requerimientos de labranza. Encuentro Nacional de labranza de Conservación. Memorias. Villavicencio. Colombia.

-Cañon, L y Gómez, O. (2012). Plan de negocios para el cultivo, producción y comercialización de caucho natural en Colombia. Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ingeniería, Departamento Industrial. Bogotá.

-Concejo Municipal de Puerto Gaitán (2009). Esquema de Ordenamiento Territorial.

-Confederación Cauchera Colombiana (2015). Censo de Plantaciones de Caucho Natural (*Hevea brasiliensis*) a año 2015.Informe de resultados. Bogotá, Colombia.

-Contexto ganadero. (2017). Elección suelos aptos para ganadería. Recuperado de http://www.contextoganadero.com/regiones/consejos-la-hora-de-elegir-un-suelo-apto-para-la-ganaderia

-Convenio MADR-Corpoica-CIAT. (2011-2012). Cobertura Vegetal y Usos del Suelo de la Altillanura Plana de los Municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta - Escala 1:25.000.

-Cormacarena. (2015). Guía ambiental apícola para el departamento del Meta.

-Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2019). SIPSA. Boletín mensual de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria. Junio-septiembre de 2019.

-Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2019). SIPSA. Boletín semanal precios mayoristas - 28 de septiembre al 4 de octubre de 2019.

-Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) – Fondo Nacional del Ganado (2014). Foro Ganadería Regional Visión 2014 -2018 Meta. Resumen y conclusiones. Villavicencio, Meta.

-Gobernación del Meta. (2015). Evaluaciones agropecuarias municipales Recuperado de https://www.datos.gov.co/es/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/INFORME-EVAS-2015-CONSOLIDADO-departamento-del-Met/hx8p-rrcf/data#SaveAs

-Hoyos, D. (2007). Manejo Sostenible de la Producción de Miel de Abejas para el Pequeño Productor, Universidad de la Salle, Gerencia de Empresas Agropecuarias. Bogotá.

-Instituto colombiano Agustín Codazzi (2004). Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Meta.

-Incoder- IICA. (2010). Determinación de las unidades agrícolas familiares (UAF) para el departamento meta.

-Incoder. (2014). Estudio técnico para la reformulación de las unidades agrícolas familiares (UAF) para el departamento meta.

-Ladino Orjuela W. (2014). Puerto Gaitán: Transformación administrativa 2000-2011. Saber ciencia y libertad vol. 9.

-Ministerio de Agricultura. (2018). Cadena productiva de las abejas, cifras sectoriales.

- M.W. Moncur et al, The role of acacia and eucalypt plantations for honey production.

-Vásquez Romero et al. (2012). Manual técnico de apicultura abeja (Apis mellifera), CORPOICA.

20204001411761
Al responder cite este Nro.
20204001411761

22 de Diciembre de 2020

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

I04yEt-jWz3-xSIZ-uIE5q-4D9A6v

Señor
JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA
Puerto Gaitán - Meta
Email: joseorlandocaravalyrivera@gmail.com, zalberto95@hotmail.com
asoyopo@gmail.com

Asunto: Notificación Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre 2020 que Resuelve Recurso de Apelación.

Señor Caravalí:

Reciba un cordial saludo. En atención a su solicitud mediante el radicado con número 20206200563142, a través del cual presenta recurso de apelación en contra de la resolución No. 6915 de 2020 expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, respetuosamente nos permitimos comunicarle lo siguiente:

La Dirección de Acceso a Tierras tal como lo establece el artículo 6 del Decreto Ley 2363 del 2015 en su calidad de superior funcional y jerárquico de la mencionada Subdirección y en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 9 del artículo 22 del Decreto Ley 2363 de 2015, mediante la Resolución número 20204000291776 del 21 de diciembre 2020 "*Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras*", resolvió en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por usted.

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, "*las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación*", adicionalmente en concordancia con el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 *"notificación o comunicación de actos administrativos*" durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, y tomando en cuenta que en el radicado número 20206200563142 a través del cual interpuso el recurso de apelación, usted manifestó ser notificado al correo electrónico zalberto95@hotmail.com, mediante el presente la Dirección de

Acceso a Tierras procede a notificar al señor **JOSÉ ORLANDO CARAVAL RIVERA** el contenido de la Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre 2020, de la cual se remite copia digital como anexo al presente.

Cordialmente,



JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ
Director de Acceso a Tierras

Anexos: Se anexan Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

I04yEt-jWz3-xSIZ-uIE5q-4D9A6v

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E37413514-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)

Identificador de usuario: 416445

Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)

Destino: asoyopo@gmail.com

Fecha y hora de envío: 28 de Diciembre de 2020 (16:20 GMT -05:00)

Fecha y hora de entrega: 28 de Diciembre de 2020 (16:20 GMT -05:00)

Asunto: RV: Respuesta radicado ENTRADA 20204000291776 SALIDA 20204001411761 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)

Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
	Content1-application-20204001411761.PDF	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content2-application-20204001411761.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 28 de Diciembre de 2020

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E37413512-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT (CC/NIT 9009489538)

Identificador de usuario: 416445

Remitente: EMAIL CERTIFICADO de info <416445@certificado.4-72.com.co>
(originado por info <info@agenciadetierras.gov.co>)

Destino: zalberto95@hotmail.com

Fecha y hora de envío: 28 de Diciembre de 2020 (16:20 GMT -05:00)

Fecha y hora de entrega: 28 de Diciembre de 2020 (16:20 GMT -05:00)

Asunto: RV: Respuesta radicado ENTRADA 20204000291776 SALIDA 20204001411761 (EMAIL CERTIFICADO de info@agenciadetierras.gov.co)

Mensaje:

POR FAVOR NO CONTESTAR ESTE E-MAIL.

Buen día, por medio de este correo le hacemos llegar a usted la respuesta a su radicado relacionado en el asunto de este mensaje.

Cordialmente,

Contacto Información ANT

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

E-mail: info@agenciadetierras.gov.co

[ant_logo] <http://www.agenciadetierras.gov.co/> [logo_min]

[ant_ambientas]

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
	Content1-application-20204001411761.PDF	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
	Content2-application-20204001411761.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 28 de Diciembre de 2020

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INPECCION EL PORVENIR
CON PERSONERIA JURIDICA Nº 916 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1974

El suscrito presidente de la Junta Acción Comunal, Inspección el Porvenir; MIRIAM TRONCOSO ITANARE, con documento de identificación n°.40.383.190, expedido en Puerto Gaitán...

CERTIFICA.

Señor(a), José Orlando Caravali Con C.C. n°. 17385776 expedido en: pto lopez Es miembro activo y habitante del centro Poblado de la inspección el Porvenir, desde el día, 27 mes, 08 y año, 2015 La Última fecha de actualización de datos reportada en el libro original de la J.A.C. fue el día: ___, mes, ___ y año, ___ según registro de folio n°, ___ y ___, y orden de afiliación n°. ___.

- Ocupante de una fracción, de los terrenos baldíos de la agencia nacional de tierras.SI (X), NO ( ).
- Tiempo de ocupación hasta la fecha:
  1año y 5meses:____,2años y 5meses; ____2años y 8meses; X
- Cantidad aproximado en hectáreas: 311 Hc

Se expide en el centro poblado de la Inspección el Porvenir, a solicitud verbal del interesado para los fines pertinentes, el día 20 de Julio de 2018.

Cordialmente:

MIRIAM TRONCOSO ITANARE.
C.C.N°.40.383.190
Representante legal. (J.A.C)

Celular: 318-7943782- Correo Electrónico: jacporvenir1974@gmail.com

NOTARIA
ÚNICA DEL CÍRCULO DE PUERTO GAITÁN

ACTA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES EXTRAJUICIO

En el Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, República de Colombia, hoy martes (24) del mes de julio año dos mil dieciocho (2018), ante mí, **SANDRA IVET GARCIA VERA**, Notaria Única del Circulo de Puerto Gaitán, compareció: **ORLANDO CARAVALI RIVERA**, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 17.385.776 expedida en Puerto López (Meta) Ocupación u Oficio: Agricultor, residente: Predio Porvenir del Municipio de Puerto López, Estado civil; Soltero con unión marital de hecho, teléfono: 3133843860 y manifestaron:

PRIMERO: Me llamo **ORLANDO CARAVALI RIVERA** y nuestras generales de ley son los ya expresados.

SEGUNDO: De manera libre y espontánea y de acuerdo con la verdad, rindo la presente declaración:

Manifiesto: Que soy OCUPANTE con ánimo de señor y dueño en forma quieta, pública pacifica e ininterrumpida, desde el día 01 de febrero del 2010 del predio rural denominado VILLA CAMILA 1, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, vereda El Porvenir, el cual he venido explotando económicamente, realizando CASA1, BAÑOS 1, POZO PERFORADO, COCINA, TODO EL PREDIO TOTALMENTE CERCADO EN ALAMBRE DE PUA, Y POSTE DE MADERA, PLATANO, AHUYAMA, YUCA, ORNAMENTOS, 200 ARBOLES MADERABLES, PASONES DE RASTRA Y RASTRILLO DE 200 HECTAREAS CON LA ESPERANZA DE SEMBRAR PASTO,PERO TENGO 40 YA SEMBRADAS EN PASTO BRACHIARIA AMARGO Y DULCE Y 160 RESES DE GANADO EN AUMENTO, DOS CABALLOS MACHOS Y TRES HEMBRAS Y UN CORRAL. Finalmente dejo expresa constancia que radique solicitud formal de adjudicación del predio baldío que ocupo de nombre VILLA CAMILA 1 el día 18 de febrero del 2016 ante el INCODER, sin que hasta la fecha se me haya resuelto y fui censado por la Agencia Nacional de Tierras como ocupante del predio en el SEGUNDO semestre del año 2016.

Esta declaración la hago de manera clara, expresa y voluntaria y la puedo ratificar ante el funcionario o la instancia que así lo requiera.

Calle 14 No. 5 38 Barrio Popular
Celular 310 2458149 Puerto Gaitán - Meta

TERCERO: Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración, la cual prestamos bajo la única y entera responsabilidad.

CUARTO: Que la declaración aquí rendida bajo juramento, versa sobre hechos de los cuales doy plena fe y testimonio en razón de que me consta personalmente.

QUINTO: Esta Declaración la rindo con el fin extraprocesal de aportarla como prueba sumaria a ésta y los fines legales pertinentes, para ser presentada a: **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**.

SEXTO: Los declarantes insistieron en el otorgamiento de la presente declaración a pesar de la lectura que personalmente se le hizo del Art. 25 de la Ley 962 del 8 de Julio de 2.005 al igual que el Art. 7 de la Ley Decreto 0019 de 2012. Así mismo leyó la totalidad de su exposición, la aprobó y firmó junto conmigo el notario que de lo expuesto doy fe, previa advertencia de la importancia moral y legal de su declaración y de las sanciones penales establecidas en los artículos 383 y SS del Código de Procedimiento Penal. Se entregan las diligencias originales al interesado para los fines extraprocesales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1.989 DERECHOS $12.689, IVA $ 2.410.- LA NOTARIA NO ACEPTA CAMBIOS DESPUÉS DE QUE LA DECLARACIÓN SEA FIRMADA POR LAS PARTES INTERVINIENTES Y POR LA NOTARIA.

EL DECLARANTE:

ORLANDO CARAVALI RIVERA

C.C No 17385716

La Notaria

SANDRA IVET GARCIA VERA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PUERTO GAITAN META

Calle 14 No. 5 38 Barrio Popular
Celular 310 2458149 Puerto Gaitán - Meta

RESOLUCIÓN 740 DE 2017

(junio 13)

Diario Oficial No. 50.265 de 15 de junio de 2017

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Por la cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras disposiciones.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Resolución 915 de 2020, 'por la cual se expiden reglas para la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Zonas no Focalizadas y se adoptan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.233 de 20 de febrero 2020.

- Modificada por la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Modificada por la Resolución 7622 de 2019, 'por la cual se expiden nuevas reglas para la ejecución del procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad en Zonas No Focalizadas', publicada en el Diario Oficial No. 51.026 de 26 de julio 2019.

- Modificada por la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

- Modificada por la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

- Modificada por la Resolución 108 de de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio do 2017', publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT),

en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 7o, 11, 45, 60, 63, 68 y 69 del Decreto-ley número 902 del 29 de mayo de 2017 y los numerales 1, 2, 5, 14 y 18 del artículo 11 del Decreto-ley número 2363 de 7 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Que el artículo 22 de la Constitución Política consagra que la paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Que, en la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado, el Gobierno nacional suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc-EP), el 24 de noviembre de 2016, un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el Acuerdo Final desarrolla seis ejes temáticos relacionados con: i) Reforma Rural Integral; ii) Participación Política: Apertura democrática para construir la paz; iii) Fin del conflicto; iv) Solución al problema de las drogas ilícitas; v) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto; vi) Mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento del acuerdo.

Que la Reforma Rural integral, sienta las bases para la transformación estructural del campo y el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y bienestar de la población rural, como aspectos fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera.

Que la incorporación del enfoque territorial y el reconocimiento de las realidades locales, junto con la participación de las comunidades, resultan requisitos indispensables para implementar el acuerdo sobre Reforma Rural Integral.

Que para garantizar el cumplimiento de lo expuesto debe ejecutarse una política de ordenamiento social de la propiedad rural que permita: i) dar acceso a la tierra, ii) brindar seguridad jurídica en las diversas relaciones con ella, y iii) velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad rural.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, la formalización de tierras de naturaleza privada reviste una especial importancia como parte de la política pública en materia de ordenamiento social de la propiedad por brindar seguridad jurídica en las relaciones sobre la tierra de los campesinos colombianos, fundamento para el desarrollo rural.

Que para la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural se creó la Agencia Nacional de Tierras, mediante el Decreto número 2363 de 2015, y se estableció la necesidad de actuar por oferta a través de metodologías que logren llegar al territorio de manera planeada, articulada, participativa y expedita para ir barriéndolo y solucionando los conflictos sobre la tierra predio a predio, con el fin de regularizar, de forma integral, masiva y progresiva, las situaciones indeseadas de tenencia y uso de la tierra.

Que a través del Decreto-ley número 902 del 29 de mayo de 2017 se ratificó lo dispuesto en el Decreto-ley número 2363 de 2015 y se ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y la ejecución del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierra aprovechando los barridos prediales para identificar y solucionar tales situaciones.

Que esta aproximación a la gestión y solución de dichos conflictos en torno al acceso, uso y tenencia

de la tierra, predio por predio y conocida como barrido predial, ha sido usada en otros países en escenarios de posconflicto, ya que es un mecanismo rápido y eficaz para precaver el surgimiento de nuevas violaciones asociadas a la incertidumbre jurídica de los derechos sobre la tierra, siendo por tanto fundamental en el desarrollo del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.

Que el barrido predial permitirá a la Agencia Nacional de Tierras adelantar la formalización masiva de la propiedad rural y dar acceso a tierras a trabajadores y a trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, de acuerdo con lo definido por la Reforma Rural Integral.

Que conforme al Decreto-ley número 902 de 2017 y 2363 de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá localizar las zonas para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, sumado a la obligación de ejecutar dicha política en el marco del barrido predial realizado con ocasión de la construcción del catastro multipropósito.

Que, para el cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en la Reforma Rural Integral, la Agencia Nacional de Tierras deberá adelantar el barrido predial en términos aún más ágiles distintos a los tradicionalmente empleados, procurando no tardar más de un año por municipio focalizado, para lo cual deberá contar con herramientas jurídicas y administrativas que lo permitan.

Que el artículo 69 del Decreto-ley número 902 de 2017, establece en cabeza del Director General de la Agencia Nacional de Tierras la facultad de expedir los Reglamentos Operativos necesarios para desarrollar el procedimiento ya contemplado en el referido Decreto en lo atinente a los Planes y el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.

Que es necesario conforme a las razones anteriormente expuestas dictar las reglas operativas que permitan a la Agencia Nacional de Tierras iniciar la ejecución de los Planes y el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad de manera coherente y en desarrollo de las disposiciones que sobre la materia contempló el Decreto-ley número 902 de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO 1.

ASUNTOS OBJETO DE REGLAMENTO OPERATIVO.

ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La presente resolución tiene por objeto establecer las directrices generales para el desarrollo de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, en los siguientes asuntos:

1. Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en sus diferentes fases.

2. La ejecución de la fase administrativa del Procedimiento Único en zonas focalizadas.

3. La asignación de funciones que complementan lo dispuesto en el Decreto 2363-Ley de 2015 en aspectos concernientes a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Procedimiento

Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en zonas focalizadas.

4. Las reglas de escogencia del régimen aplicable para los casos en los que exista ocupación iniciada antes de la entrada en vigencia del Decreto-Ley 902 de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 1. Establézcase el reglamento operativo que determinará los instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para desarrollar las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, en los siguientes asuntos:

1. Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad teniendo en cuenta lo señalado en los artículos 40, 41, 43, 44, 45 del Decreto-ley número 902 de 2017.

2. La ejecución de la primera parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, el cual incluye reglas atinentes a la formación de expedientes, barrido predial masivo, corrección administrativa de área y linderos, actas de colindancia, informe técnico jurídico preliminar y Registro de Sujetos de Ordenamiento, Social de la Propiedad en adelante RESO. Todo lo anterior conforme a los artículos 65, 66, 63, 67, 11, 12, 14, 15 y 7o del Decreto-ley número 902 de 2017, respectivamente.

3. La actualización posbarrido de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, previo al inicio de la ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.

4. La ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, el cual incluye reglas atinentes a la apertura y desarrollo de los trámites administrativos, bien sea para asignación y reconocimiento de derechos, formalización y administración de derechos, decreto de pruebas, exposición pública de resultados, decisiones y cierre administrativo. Todo lo anterior conforme a los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Decreto-ley número 902 del 2017, respectivamente.

5. Las reglas a aplicar fuera de las zonas focalizadas para Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

6. El Registro de Inmuebles Rurales (RIR), conforme al numeral 2 del artículo 32 del Decreto-ley número 902 de 2017.

7. La autorización de venta de los inmuebles adjudicados antes de que haya finalizado el plazo de limitaciones al dominio conforme al numeral 2 del artículo 8o del Decreto-ley número 902 de 2017.

8. La asignación de funciones para algunos de los aspectos concernientes a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.

TÍTULO 2.

PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL.

Notas de Vigencia

- Enunciado del Título modificado por el artículo 2 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

TÍTULO 2.

PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD.

CAPÍTULO 1.

DEFINICIÓN, ALCANCE Y FASES.

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado al texto existente por el artículo 2 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 915 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural son instrumentos de diagnóstico y planificación mediante los cuales la ANT organiza su actuación institucional por oferta, en zonas focalizadas, de manera integral y por unidades de intervención.

El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) se compone de dos momentos:

(i) El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Operativo, el cual caracteriza la realidad jurídica y territorial de los municipios previamente focalizados, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la intervención por oferta y planificación de la metodología de intervención por barrido

predial masivo (BPM) en los territorios.

(ii) El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Consolidado, el cual se elabora una vez se ha culminado el proceso de barrido predial masivo (BPM) y validado la información física y jurídica acopiada en campo, con el objetivo de diagnosticar las situaciones que requieren el ejercicio de las competencias de la Agencia en materia de Ordenamiento Social de la Propiedad.

PARÁGRAFO 1o. De la evaluación de la viabilidad de la intervención realizada en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Operativo, la Agencia podrá concluir que no procede aplicar metodología de barrido predial masivo. En estos casos el ejercicio de las competencias de la Agencia se desarrolla bajo el modelo de demanda.

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en este artículo se aplicará incluso a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad ya formulados.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 915 de 2020, 'por la cual se expiden reglas para la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Zonas no Focalizadas y se adoptan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.233 de 20 de febrero 2020.

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 12096 de 2019:

ARTÍCULO 2. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural son instrumentos de planificación mediante los cuales la ANT organiza su actuación institucional por oferta en las zonas focalizadas, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a regularizar las relaciones de tenencia con la tierra, de manera integral y por unidades de intervención.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 2. Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural son un instrumento de planificación mediante el cual la ANT organiza su actuación institucional por oferta, en zonas localizadas, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a fomentar la distribución equitativa, el acceso a la tierra y la seguridad de la propiedad rural, promoviendo su uso en cumplimiento de la función social y ecológica.

Dichos planes se desarrollarán a través de procesos de participación comunitaria e institucional para garantizar una intervención eficiente y eficaz, en función de las necesidades territoriales.

ARTÍCULO 3o. FASES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL (PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL). <Artículo modificado por el artículo 4 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, contemplan las siguientes fases:

1. Formulación.

2. Implementación.

3. Evaluación y mantenimiento

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 4 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 3o. FASES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, contemplan las siguientes fases:

1. Formulación. Comprende el proceso de alistamiento de la ANT y del territorio, la caracterización de la tenencia, la definición de actividades estratégicas tendientes a identificar situaciones de inseguridad jurídica, distribución inequitativa de la tierra e informalidad de la propiedad rural, y la elaboración y aprobación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, atendiendo a los aspectos señalados en el artículo 44 del Decreto-ley número 902 de 2017.

2. Implementación. Esta fase consiste en la puesta en marcha del Plan a través de la realización del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, el cual implica realizar el barrido predial para posterior y paulatinamente ir dando inicio a actuaciones administrativas encaminadas a ejecutar los asuntos señalados en el artículo 58 del Decreto-ley 902 de 2017, y de esa forma tomar las decisiones por parte de la ANT en materia de ordenamiento social de la propiedad rural a que haya lugar, según las competencias y procedimientos previstos en las normas vigentes.

Los procedimientos administrativos especiales agrarios o de titulación de baldíos ya en curso que se encuentren en la zona localizada y objeto de barrido, se tramitarán conforme a las reglas procesales de la Ley 160 de 1994, teniendo en cuenta las reglas definidas en el régimen de transición del Decreto-ley número 902 de 2017.

3. Evaluación y mantenimiento. Esta fase comprende las estrategias de seguimiento y evaluación a las actuaciones de la ANT en las zonas localizadas tendientes a la consecución de los objetivos definidos en los respectivos Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural



ARTÍCULO 4o. FASE DE FORMULACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Durante esta fase se realizarán las siguientes actividades, además de las previstas en el artículo 44 del decreto 902:

1 Adelanta acciones de coordinación institucional y planeación estratégica en el orden nacional; recolectar y analizar información pertinente tanto en las dependencias de la ANT, como en otras entidades administrativas relacionadas con la administración de la tierra, sobre tos precios ubicados en las zonas de intervención rural.

2. Recolectar y «nabar la información pertinente para el ordenamiento social de la propiedad de las zonas de intervención, utilizando, entre otras, el cruce de las bases de datos de catastro y registro, así como la metodología de cartografía social.

3. Generar espacios de participación institucional y comunitaria que contribuyan a la caracterización territorial a la planeación operativa del barrido predial y a la coordinación de acciones conjuntas en el territorio.

4. Difundir masivamente información clara y pertinente sobro el proceso

5. Identificar y analizar los expedientes de procesos en curso que se hayan iniciado bajo la vigencia de la normatividad anterior en las zonas focalizadas

6. Analizar las limitantes y potencialidades territoriales para el barrido predial.

7. Elaborar la ruta de intervención territorial, teniendo en cuenta las restricciones ambientales y otras

8. Recopilar la información que contribuya a la conformación de expedientes, a la elaboración del diagnóstico jurídico preliminar a nivel municipal y al documento preliminar de análisis predial.

9. Elaborar una propuesta de financiación y una estimación de los recursos requeridos para su implementación la cual atenderá a una lógica de distribución de acuerdo con las unidades de intervención definidas en el POSPR sin perjuicio de que dicha distribución sea modificada según los resultados del barrido predial. Lo anterior con miras a garantizar la atención de los casos no previstos durante la fase de formulación.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafos modificado por el artículo 5 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Elaborado el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural este deberá ser aprobado por el Director General de la ANT.

La resolución que apruebe el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural no deberá contener la relación de los Folios de Matrícula Inmobiliaria que se afectarán como medida publicitaria en el marco de los procesos de Ordenamiento Social de la Propiedad, en tanto la etapa de publicidad conforme lo establece el parágrafo del artículo 40 del Decreto Ley 902 de 2017 se reserva hasta el momento de la implementación del Procedimiento Único mediante la estrategia de barrido predial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley 902.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo 5 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 108 de 2018:

PARÁGRAFO 1o. Finalizadas estas actividades y elaborado el POSPR esto deberá ser aprobado por el Director de la ANT.

PARÁGRAFO 2o. Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad aprobado por el Director mediante resolución, ordenará la inscripción del inicio del Proceso único de Ordenamiento Social de la Propiedad a los inmuebles ubicados en la zona focalizada en los términos del artículo 40 del Decreto 902 de 2017, salvo las excepciones previstas para los casos en que por eficiencia administrativa el procedimiento que no afecte derechos deba concluir su trámite. La materialización de la inscripción estará a cargo de la Subdirección de Planeación Operativa, que podrá cumplir con dicha tarea a través de terceros.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 4. Durante esta fase se realizarán las siguientes actividades, además de las previstas en el artículo 44 del Decreto-ley número 902 de 2017:

1. Adelantar acciones de coordinación institucional y planeación estratégica en el orden nacional; recolectar y analizar información pertinente tanto en las dependencias de la ANT, como en otras entidades administrativas relacionadas con la administración de la tierra, sobre los predios ubicados en las zonas de intervención rural.

2. Recolectar y analizar la información pertinente para el ordenamiento social de la propiedad de las zonas de intervención, utilizando, entre otras, el cruce de las bases de datos de catastro y registro, así como la metodología de cartografía social.

3. Generar espacios de participación institucional y comunitaria que contribuyan a la caracterización territorial, a la planeación operativa del barrido predial y a la coordinación de acciones conjuntas en el territorio.

4. Difundir masivamente información clara y pertinente sobre el proceso.

5. Identificar y analizar los expedientes de procesos en curso que se hayan iniciado bajo la vigencia de la normatividad anterior en las zonas localizadas.

6. Analizar las limitantes y potencialidades territoriales para el barrido predial.

7. Elaborar la ruta de intervención territorial.

8. Recopilar la información que contribuya a la conformación de expedientes, a la elaboración del diagnóstico jurídico preliminar a nivel municipal y al documento preliminar de análisis predial.

9. Elaborar una propuesta de financiación y una estimación de los recursos requeridos para su implementación, la cual atenderá a una lógica de distribución, de acuerdo con las unidades de intervención definidas en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, sin perjuicio de que dicha distribución sea modificada según los resultados del barrido predial. Lo anterior con miras a garantizar la atención de los casos no previstos durante la fase de formulación.

PARÁGRAFO. Finalizadas estas actividades y elaborado el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural este deberá ser aprobado por el Director General de la ANT.

ARTÍCULO 5o. FASE DE IMPLEMENTACIÓN. Durante esta fase se desarrollarán las etapas previstas en el Título 3 de la presente resolución, que comprende entre otras las siguientes actividades:

1. Barrido predial. Consiste en la visita a la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará atendiendo la metodología de catastro multipropósito.

El barrido predial se hará de manera conjunta con la operación del catastro multipropósito o directamente por la ANT atendiendo los estándares definidos por la autoridad catastral, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 62 del Decreto-ley número 902 de 2017.

En aquellos eventos en que la focalización para los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se haga de manera posterior a la operación del catastro multipropósito, los resultados del catastro servirán de insumo para la formulación e implementación del respectivo Plan, en aquellos aspectos de competencia de la ANT.

La información recaudada en desarrollo del barrido predial, para todos los efectos, tendrá valor probatorio dentro del procedimiento único.

Durante el desarrollo del periodo probatorio de la fase administrativa del procedimiento único, la ANT, cuando encuentre mérito, adelantará visitas adicionales a los predios en los que se requiera constatar situaciones particulares o específicas atendiendo los criterios del artículo 71 del Decreto-ley número 902 de 2017.

2. Actualización del Plan. Los resultados del barrido predial, que se vayan obteniendo en las veredas definidas como parte de una unidad de intervención según lo definido en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, lo complementarán para efectos de su actualización y harán parte integral del mismo para efectos de su implementación, seguimiento, evaluación y mantenimiento.

3. Ejecución de actuaciones administrativas. Con la información recolectada en el barrido predial se

conformarán o complementarán los expedientes correspondientes de cada predio, y se ejecutarán las actuaciones administrativas, bien sea en el marco de la Ley 160 de 1994 o del procedimiento único contemplado en el Decreto-ley número 902 de 2017, según sea el caso.

Con relación a los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto-ley número 902 de 2017, se podrán adelantar actuaciones administrativas durante la etapa de formulación del Plan.

Para los procesos nuevos, las actuaciones administrativas regidas bajo el procedimiento único podrán iniciarse una vez se haya ejecutado la totalidad del barrido predial en las veredas definidas como parte de una unidad de intervención, según lo definido en el Plan a la que pertenezca el predio correspondiente.

ARTÍCULO 6o. NECESIDAD DE BARRER LA TOTALIDAD DEL ÁREA FOCALIZADA PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Para aquellos procesos de acceso a tierras en los cuales sea necesario adelantar acciones de priorización de beneficiarios, será necesario haber realizado el barrido predial de la totalidad del territorio focalizado con el fin de consolidar el RESO y seleccionar a los destinatarios de dicha oferta, de acuerdo con los recursos disponibles y los puntajes del registro. Los demás asuntos que se sometan a la competencia de la ANT con ocasión de la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, podrán ser atendidos y resueltos por unidades de intervención, sin necesidad de agotar el barrido predial en la totalidad del territorio focalizado

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 6o. NECESIDAD DE BARRER LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS. Para aquellos procesos de acceso a tierras en los cuales sea necesario adelantar acciones de priorización de beneficiarios, será necesario haber realizado el barrido predial en todo el municipio con el fin de consolidar el RESO y seleccionar, de acuerdo con los recursos disponibles y los puntajes del registro, a los destinatarios de dicha oferta.

ARTÍCULO 7o. FASE DE EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO. La Subdirección de Planeación Operativa, de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, elaborará los indicadores y desarrollará los instrumentos de seguimiento y evaluación a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Así mismo, y como parte de las acciones de involucramiento institucional y comunitario, promoverá el desarrollo de competencias en lo local que contribuyan al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural.

ARTÍCULO 8o. ACTIVIDADES A TRAVÉS DE TERCEROS. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La ANT podrá contratar actividades a través de terceros, para que las desarrolle bajo sus lineamientos, estándares y directrices. Dichas actividades no incluyen la decisión de procedimientos misionales a cargo de la ANT.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 8. Aquellas actividades cuyo desarrollo supere la capacidad de la ANT podrán ser contratadas para que un tercero las desarrolle bajo los lineamientos, estándares y directrices de la ANT.

Dichas actividades no incluyen la decisión de procedimientos misionales a cargo de la ANT.

CAPÍTULO 2.

CRITERIOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL (POSPR).

ARTÍCULO 9o. CRITERIOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. Los criterios mínimos para la formulación, implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, en concordancia con el artículo 43 del Decreto-ley número 902 de 2017 son: Participación, Enfoque Territorial, Enfoque Diferencial y Articulación Territorial.

ARTÍCULO 10. PARTICIPACIÓN. La participación es el conjunto de mecanismos e instancias en donde se involucran a los actores identificados en la caracterización territorial, instituciones locales y comunidad en general de la zona intervenida, que permite mejorar los diseños, propuestas y contribuir en la formulación, implementación y mantenimiento en el territorio de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

ARTÍCULO 11. OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES. Son objetivos principales de la participación comunitaria en todas las etapas de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural:

a) Identificar en el territorio potenciales sujetos de ordenamiento y las posibles solicitudes de inscripción de personas en el RESO y de predios en el RIR;

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

b) Mejorar y enriquecer la caracterización y el diagnóstico territorial;

c) Aportar insumos a partir de la recolección y sistematización de la información comunitaria para la elaboración de la caracterización predial, identificación de los propietarios, ocupantes y poseedores, entre otros;

d) Establecer con las diferentes formas de organización reconocidas en el territorio mecanismos de transmisión de información clara y oportuna de los objetivos de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural;

e) Realizar una planeación efectiva a partir del conocimiento comunitario del territorio;

f) Facilitar y promover la incorporación del enfoque diferencial en el Ordenamiento Social de la Propiedad, en adelante OSPR;

g) Promover la incorporación del OSPR en los instrumentos e instancias de planeación territorial;

h) Proponer estrategias para la evaluación y mantenimiento del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural;

i) Fortalecer las relaciones de confianza entre las comunidades rurales y el Estado para promover espacios de gobernanza de la tierra.

ARTÍCULO 12. LA PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. La ANT garantizará la participación efectiva de los actores territoriales identificados en las etapas de formulación, implementación, evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, a través de los mecanismos e instancias de participación diseñados, con el fin de responder a las necesidades del territorio y garantizar la transparencia y eficacia de la intervención, en los términos del artículo 43 del Decreto-ley número 902 de 2017.

ARTÍCULO 13. MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. Son mecanismos e instancias de participación en la formulación, implementación y evaluación y mantenimiento en el territorio de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, entre otros y sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que regulan la materia, las siguientes:

a) Espacios de acercamiento, diálogo y/o encuentro institucional y comunitario relacionados con el OSPR;

b) Conformación de Semilleros de la Tierra y el Territorio o redes comunitarias;

c) Ejercicios de cartografía social y recolección de información comunitaria;

d) Audiencias públicas para exposición de resultados;

e) Aquellos que existan o surjan de conformidad con las diversas dinámicas territoriales y de articulación con otras estrategias institucionales o comunitarias;

f) Espacios e instancias de diálogo definidos y adelantados con los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto-ley número 902 de 2017.

ARTÍCULO 14. SEMILLEROS DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO. Mediante esta estrategia la ANT vinculará a la comunidad para apoyar, promover y dinamizar el desarrollo de las actividades contempladas en las distintas fases del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural desde las bases sociales como voceros y multiplicadores, considerando el enfoque diferencial y de acción sin daño.

El funcionamiento de esta estrategia será definido por la Subdirección de Planeación Operativa de la ANT en la respectiva guía operativa que permita su cabal desarrollo.

PARÁGRAFO. Cuando se identifique la existencia de organizaciones, colectivos, redes comunitarias o espacios sectoriales de participación que conozcan, trabajen, estudien, y promuevan temas relacionados con la tierra y el territorio, estos se podrán vincular o considerarse como un Semillero, reconociendo sus capacidades organizacionales, sus conocimientos y trayectoria en el territorio.

ARTÍCULO 15. FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMILLEROS DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO. Para el funcionamiento de los Semilleros se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Diseño e implementación de estrategias de capacitación que fortalezcan las capacidades y conocimientos individuales y colectivos de los miembros que conforman el Semillero de la Tierra y el Territorio, de tal manera que en el proceso de los Planes se cuente con un acompañamiento cualificado que apoye la facilitación y mediación para el trámite pacífico de conflictos y la extracción de lecciones aprendidas;

b) Definición de esquemas de difusión de mensajes clave que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, animen a la vinculación de otras personas y actores del territorio e informen sobre el avance y novedades de las distintas fases y actividades del proceso;

c) Planeación y difusión de los cronogramas para el desarrollo de los ejercicios de recolección de información comunitaria, cartografía social y las visitas predio a predio;

d) Diseño de una estrategia comunitaria de evaluación a la implementación de los Planes.

ARTÍCULO 16. EJERCICIOS DE CARTOGRAFÍA SOCIAL Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN COMUNITARIA. En la formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la

Propiedad Rural se utilizarán métodos; cualitativos de recolección de información comunitaria que permitan reconocer las percepciones, conocimientos, expectativas y necesidades de los diferentes actores presentes en el territorio y la relación de estos con la tierra, identificar las conflictividades territoriales, comprender la historia de los predios, usos del suelo y reconocer los derechos de propiedad, posesión y/u ocupación.

Las actividades y particularidades relacionadas con el desarrollo de estos ejercicios serán definidas por la Subdirección de Planeación Operativa en la respectiva guía operativa.

ARTÍCULO 17. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL OSPR. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de las estrategias de comunicación que se establezcan y de cualquier otra modalidad de vinculación activa de los actores del territorio al Ordenamiento Social de la Propiedad, la ANT facilitará espacios de participación comunitaria para la ejecución de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 8 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 17. GARANTÍAS DE LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. A efectos de superar las barreras y conflictos que surjan en los ejercicios de participación de los grupos poblacionales y de promover y garantizar la participación activa en el ordenamiento social de la propiedad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Presencia de actores claves. Inclusión de diferentes sectores de la sociedad y actores, institucionales y comunitarios identificados en el mapa de actores;

b) Presencia de grupos poblacionales sujetos de especial protección constitucional;

c) Promoción de nuevos liderazgos territoriales y apoyo a los relevos generacionales organizativos;

d) Respeto a autoridades y derechos colectivos de los grupos étnicos;

e) Logística participativa e incluyente;

Desarrollo de mensajes claves, acordes a las particularidades regionales y poblacionales, para informar a la comunidad sobre los objetivos y alcances de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural;

g) Calidad y fortalecimiento de la coordinación institucional.



ARTÍCULO 18. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Desde la fase de formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, se debe construir una estrategia de comunicaciones orientada a divulgar, ejercer pedagogía y posicionar los objetivos y la implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en todas sus fases. Esta estrategia estará dirigida a la comunidad, autoridades locales y socios estratégicos.

La implementación de la estrategia será transversal a todas las fases y deberá acoger los siguientes criterios enfocados en los usuarios identificados: i) La difusión de mensajes clave que alisten y mantengan informado al territorio sobre la operación; ii) La promoción de la participación comunitaria como un eje transversal a las acciones a realizar; y, iii) La generación y divulgación de material pedagógico que facilite la comprensión de conceptos, alcances y roles para que el OSPR se desarrolle efectivamente en el territorio y coadyuve al posicionamiento de la ANT.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 18. Desde la fase de formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se deben difundir, mensajes claves que alisten el territorio para la operación, inviten a la participación activa de los actores, promuevan la comprensión y transmisión de conceptos, alcances, instancias y roles necesarios para el OSPR y que coadyuven al posicionamiento de la ANT. Como mínimo se deberá:

1. Identificar los medios y formas de comunicación existentes en el territorio a intervenir. Al respecto, es importante el reconocimiento de las expresiones, palabras y lenguaje más adecuados, según las regiones y la forma en que en la zona se divulga información de interés. Lo anterior permitirá una comunicación acorde a las dinámicas sociales y culturales de la región.

2. Elaborar mensajes claros, efectivos y oportunos, especificando los objetivos, alcances, beneficios y acciones que se desarrollarán durante las distintas fases del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

ARTÍCULO 19. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL. En todas las fases de los planes se incluirán medidas, acciones y actividades específicas que reconozcan la diferencia, promuevan la protección de las poblaciones vulnerables, favorezcan la disminución de las desigualdades y en términos concretos garanticen su participación y disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los derechos a la tierra en el territorio. A efectos de transversalizar el enfoque diferencial en las etapas de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: participación, comunicación, atención diferencial y

preferencial, personal calificado, interpretación de los casos desde una perspectiva de enfoque diferencial y seguimiento y monitoreo diferencial.

ARTÍCULO 20. ARTICULACIÓN TERRITORIAL. Además de las acciones de articulación sectorial y estatal consagradas en el numeral 4 del artículo 43 del Decreto-ley número 902 de 2017, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural deberán estar armonizados con los demás instrumentos de planeación territorial y sectorial que tienen incidencia en los territorios de las zonas focalizadas.

ARTÍCULO 21. VERIFICACIÓN PREVIA DE PRESENCIA DE COMUNIDADES ÉTNICAS. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Previo al inicio del Procedimiento Único del Ordenamiento Social de la Propiedad y con el fin de prever posibles afectaciones a comunidades étnicas, conflictos interculturales o necesidad de consulta previa, la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT comunicará a la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural las pretensiones étnicas de comunidades, consistentes en solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, y constitución de territorios colectivos en beneficio de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de las que tenga conocimiento y solicitará al Ministerio del Interior la certificación sobre la presencia o no de dichas comunidades étnicas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 10 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 180 de 2019:

ARTÍCULO 21. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Previo al inicio del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y con el fin de prever posibles afectaciones a comunidades étnicas, conflictos interculturales o necesidad de consulta previa, la Subdirección de Planeación Operativa solicitara a la Dirección de Asuntos Étnicos certificación sobre la existencia o no. en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales, titulación colectiva, así como presencia de pueblos, comunidades indígenas o comunidades negras, afrodescendientes, raizales o Palenqueras. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos o comunidades, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas y/o negras para que se pronuncien sobro la existencia o no de dichas comunidades en el área pretendida.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 21. Previo al inicio del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y con el fin de prever posibles afectaciones a comunidades étnicas, conflictos interculturales o necesidad de consulta previa, la Subdirección de Planeación Operativa solicitará a la Dirección de Asuntos Étnicos certificación sobre la existencia o no, en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, así como medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas, para que se pronuncien sobre la existencia o no de comunidades indígenas en el área pretendida, la cual será remitida al Ministerio del Interior para su respectiva validación.

TÍTULO 3.

PROCEDIMIENTO ÚNICO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD.

CAPÍTULO 1.

FORMACIÓN DE EXPEDIENTES, BARRIDO PREDIAL, INFORME TÉCNICO JURÍDICO.

Notas de Vigencia

- Enunciado del capítulo 1 modificado por el artículo 11 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

CAPÍTULO 1.

FASE ADMINISTRATIVA - PRIMERA PARTE.

Formación de Expedientes, Barrido Predial, Informe Técnico Jurídico Preliminar

ARTÍCULO 22. FORMACIÓN DE EXPEDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Teniendo en cuenta la información recabada en el barrido predial, y una vez identificados los inmuebles rurales existentes en una determinada unidad de intervención, se dará apertura a un expediente por cada inmueble objeto de procedimiento único

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 12 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 22. Teniendo en cuenta la información recabada en la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y una vez identificados catastral y registralmente los inmuebles rurales existentes en una determinada zona localizada, la Unidad de Gestión Territorial más cercana, con la supervisión y apoyo de las Subdirecciones pertinentes a nivel nacional, darán apertura a un expediente por cada inmueble objeto de barrido.

ARTÍCULO 23. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y comunicaciones oficiales que se expidan y recauden en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad. Deberá contener como mínimo y para efectos de su apertura, un informe técnico jurídico, que consigne la información catastral y/o registral del respectivo inmueble y que realice un análisis sobre la situación jurídica y de tenencia del inmueble que permita determinar cuál de los asuntos previstos en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 es necesario iniciar, junto con el FISO y/o el formulario único predial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 13 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 108 de 2018:

ARTÍCULO 23. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y comunicaciones oficiales que se expidan en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, pero contendrá como mínimo y para efectos de su apertura, un documento preliminar de análisis predial, que consigne la información catastral y registral del respectivo Inmueble.

Cuando no se obtenga información catastral y/o registral sobre el inmueble, se dejara constancia de esa situación que servirá de insumo para la construcción del documento preliminar de análisis predial.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 23. El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y comunicaciones oficiales que se expidan en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, pero contendrá como mínimo y para efectos de su apertura, un documento preliminar de análisis predial, que consigne la información catastral y registral del respectivo inmueble junto con sus soportes documentales, como son los registros 1 y 2 de catastro o sus equivalentes y el certificado de libertad y tradición para efectos de lograr identificar el inmueble.

En aquellos casos en que en la zona localizada ya haya finalizado la intervención del catastro multipropósito, en lugar de los registros 1 y 2 de catastro y los certificados de libertad y tradición, se anexará el respectivo certificado plano predial o el documento que haga sus veces según proceda.

Cuando no se obtenga información catastral y/o registral sobre el inmueble, se dejará constancia de esa situación que servirá de insumo para la construcción del documento preliminar de análisis predial.

ARTÍCULO 24. ANÁLISIS PREDIAL PREVIO AL BARRIDO. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Previo al barrido predial, la ANT deberá analizar la información oficial en las bases de datos disponibles con el objetivo de programar la operación de campo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 14 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 4 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 108 de 2018:

ARTÍCULO 24. DOCUMENTO PRELIMINAR DE ANÁLISIS PREDIAL PARA DAR APERTURA AL EXPEDIENTE. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El documento preliminar de análisis predial señalado en el artículo anterior con el cual se dará apertura a cada expediente, determinará de manera tentativa cuál es la situación física, Jurídica y de tenencia del inmueble, con el fin de que dicha información sea posteriormente verificada o corregida al momento de hacer la visita al inmueble

Particularmente la ANT se pronunciará frente a la naturaleza jurídica del inmueble, la existencia o no de informalidad sobre el mismo y su adquisición conforme a alguno de los supuestos de acreditación de la propiedad del numeral 1 del artículo 48 de la ley 160 de 1994, todo lo anterior, a parir de cruces de información de fuentes secundarias obtenidos en la fase de formulación del POSPR, y la información recaba de las comunidades mismas y diversos actores a nivel territorial.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 24. El documento preliminar de análisis predial señalado en el artículo anterior con el cual se dará apertura a cada expediente, determinará de manera tentativa cuál es la situación física, jurídica y de tenencia del inmueble, con el fin de que dicha información sea posteriormente verificada o corregida al momento de hacer la visita al inmueble.

Particularmente la ANT se pronunciará frente a la naturaleza jurídica del inmueble, la existencia o no de informalidad sobre el mismo y la licitud en su adquisición, todo lo anterior, a partir de cruces de información de fuentes secundarias obtenidos en la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y la información recibida de las comunidades mismas y diversos actores a nivel territorial.

ARTÍCULO 25. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LOS EXPEDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los expedientes del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad se sujetarán en su conformación, alimentación, archivo y demás elementos a las normas técnicas plasmadas en la Ley 594 de 2000, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo número 02 de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación, o aquellas que le modifiquen o sustituyan.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 15 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 25. Los expedientes del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad se sujetarán en su conformación, alimentación, archivo y demás elementos a las normas técnicas plasmadas en la Ley 594 de 2000, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo número 02 de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación.

ARTÍCULO 26. TRÁNSITO HACIA EXPEDIENTES DIGITALES. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La ANT a través de la Secretaría General, implementará mecanismos para que la información y los expedientes reposen en un Sistema de Gestión Electrónico de Archivo y que, con apoyo en las tecnologías de la información, los expedientes físicos sean sustituidos por expedientes digitales, en lo que tiene que ver con la creación de nuevos expedientes, que estarán conformados por las reproducciones digitales de las actuaciones o en cuanto fuera posible, íntegramente por mensajes de datos.

La implementación de los expedientes digitales estará integrada por todos los procesos y herramientas de gestión de la ANT, en el marco de la presente resolución, por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales. Para ello se dispondrá su uso obligatorio de manera gradual, de acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 16 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 26. La ANT a través de la Secretaría General, implementará mecanismos para que la información y los expedientes ligados al Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, reposen en un Sistema de Gestión Electrónico de Archivo y que, con apoyo en las tecnologías de la información, los expedientes físicos sean sustituidos por expedientes digitales, en lo que tiene que ver con la creación de nuevos expedientes.

ARTÍCULO 27. BARRIDO PREDIAL MASIVO PARA EFECTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Es una actuación institucional de la ANT coordinada para desplazarse a los predios rurales que componen una determinada Unidad de Intervención o la totalidad del territorio focalizado, según se trate, con equipos interdisciplinarios para levantar y/o validar la información física, jurídica y social que se determine.

PARÁGRAFO. Para efectos de determinar el alcance del barrido predial masivo, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 6o de la presente resolución". Las especificaciones técnicas para efectos

de los levantamientos prediales realizados en desarrollo del barrido predial masivo, corresponderán a aquellas determinadas por la autoridad catastral reguladora.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 17 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 27. Es una actuación institucional coordinada para desplazarse físicamente a cada uno de los predios rurales que componen una determinada zona focalizada, con equipos interdisciplinarios para validar su información física, jurídica, social y recoger información respecto a la existencia de sujetos potenciales beneficiarios de acceso a tierra, uso, tipo de tenencia, licitud y formalidad en las relaciones con la tierra.

Implica la realización de un esquema operativo, que genera economías de escala en el proceso de levantamiento físico y jurídico de los predios que ocupan la totalidad del territorio de una zona delimitada, de forma continua en espacio y tiempo, atendiendo los estándares definidos y adoptados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 28. PLANEACIÓN DEL BARRIDO PREDIAL MASIVO PARA EFECTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Conforme a los resultados de la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de la que trata el artículo 44 del Decreto Ley 902 de 2017 y del análisis de la información disponible, la ANT y/o los terceros contratados para el efecto en virtud del artículo 8o de la presente resolución, definirán un cronograma de visitas para la intervención en el territorio".

Sobre los predios que ya hayan sido visitados y que no sean objeto de adjudicación directa, la ANT podrá iniciar de inmediato el procedimiento único, en tanto se continúa con el barrido de los predios restantes.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 18 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 28. PLANEACIÓN DEL BARRIDO PREDIAL. Conforme a los resultados de la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, la ANT o los terceros contratados para el efecto, programarán las visitas predio a predio definiendo con precisión el número de inmuebles que serán visitados diariamente y qué inmuebles se esperan visitar, definiendo para el efecto un cronograma de barrido que en la medida de lo posible procure no exceder de cinco (5) meses para haber finalizado la última visita.

Al finalizar ese término, si aún existen inmuebles que no hayan sido visitados, se podrá actualizar el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad frente a los inmuebles ya visitados, para dar inicio a la fase de ejecución sobre ellos, sin perjuicio de que continúe el barrido de los restantes.

ARTÍCULO 29. BARRIDO PREDIAL ESCALONADO A NIVEL VEREDAL. Aunque los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural tienen cobertura municipal, una vez haya finalizado el barrido a nivel veredal, según la escala de intervención definida en el Plan, se procederá a su actualización para dar inicio a la segunda parte del Procedimiento Único en su fase de ejecución para la misma vereda, al tiempo que avanza el barrido en el resto del Municipio, y así sucesivamente hasta completar el área rural del mismo.

ARTÍCULO 30. COMUNICACIÓN DEL INICIO DEL BARRIDO PREDIAL MASIVO PARA EFECTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La ANT o el tercero ejecutor del barrido, con arreglo al artículo 8o de la presente resolución informará a la comunidad sobre el inicio del barrido predial mediante el plan de comunicaciones establecido para tal fin, con arreglo al artículo 18 de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 19 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 30. INFORMACIÓN DEL INICIO DE BARRIDO PREDIAL. En la medida en que se encuentren conformados los expedientes y la ANT se encuentre lista para iniciar las visitas predio a predio directamente o a través de terceros, informará a los propietarios y posibles poseedores, tenedores u ocupantes de los predios a ser visitados, el inicio del barrido predial, conminándolos a estar atentos a la llegada de las personas designadas por la ANT para permitir su ingreso al inmueble y colaborar con el desarrollo de la visita. Solo si es posible desarrollar la comunicación vía telefónica o individualmente se hará de esa manera, sin perjuicio en todo caso de la comunicación por medios de amplia circulación que determine la ANT como más idóneos para el efecto.

Las comunicaciones generales dirigidas a los interesados se deben realizar con una antelación no inferior a 5 días hábiles al inicio del barrido predial, y las comunicaciones individuales con una antelación de 5 días hábiles al desarrollo de la visita particular. En ambos casos las comunicaciones deberán hacer claridad frente a los propósitos de la ANT, que no implican aumento en el cobro de impuestos ni desconocimiento de derechos adquiridos, posesiones u ocupaciones de buena fe.

ARTÍCULO 31. ELEMENTOS A RECOGER EN EL BARRIDO PREDIAL MASIVO PARA EFECTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En el marco del barrido predial masivo con fines de ordenamiento social de la propiedad, la ANT levantará la información de las variables físicas y jurídicas incorporadas en el formulario único de catastro multipropósito, incluyendo el levantamiento predial correspondiente, a través de métodos directos o indirectos de acuerdo con las características del municipio y siguiendo las especificaciones técnicas determinadas en la materia.

Así mismo recogerá en el municipio objeto de intervención, a través de visitas o jornadas masivas, la siguiente información:

1. Información conducente que permita establecer las rutas de atención competencia de la ANT.

2. Información sobre la existencia de potenciales beneficiarios de acceso a tierras.

3. Verificación de restricciones y condicionantes respecto de la titulación y la formalización, conforme a los lineamientos establecidos por la ANT, en los casos que se requiera.

4. Información adicional relacionada con el uso y explotación económica de los predios, en los casos que se requiera.

PARÁGRAFO. En las visitas o jornadas masivas que se adelanten en el municipio objeto de intervención se recopilarán las autorizaciones para realizar las notificaciones electrónicas de los actos administrativos que se expidan en desarrollo del procedimiento único.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 20 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 31. ELEMENTOS A RECOGER EN LAS VISITAS PREDIO A PREDIO. En las visitas que se realicen en el marco del barrido predial masivo, el equipo interdisciplinario designado por la ANT deberá observar y recoger información frente a los siguientes elementos:

1. Documentos que acrediten dominio o soporten el derecho que aducen tener sobre el inmueble.

2. Posible existencia de poseedores.

3. Posible existencia de ocupantes.

4. Posible existencia de tenedores.

5. Posible existencia de potenciales beneficiarios de acceso a tierra.

6. Intención de inscribir el inmueble en el Registro de Inmuebles Rurales (RIR), a que se refiere el Título 5 la presente resolución.

7. Si el predio presenta condiciones técnicas y ambientales para el desarrollo de actividades agropecuarias y lo forestales, entre otras con los mismos fines de conformación del RIR.

8. La procedencia de aplicar el deslinde de tierras de la Nación.

9. Cumplimiento de la Función Social de la Propiedad, verificando grado de explotación económica.

La identificación de la tenencia tiene por objeto aclarar la situación jurídica de los sujetos con el inmueble que al momento de la visita estaban siendo explotados por personas distintas al propietario, e inscribirlo en el RESO con fines de acceso a tierra, si hay lugar a ello. Las personas que ejerzan relación de tenencia y no ingresen al RESO como aspirantes de acceso a tierra serán ingresadas al módulo “Otros”.

En caso de realizar la visita sin el acompañamiento del catastro multipropósito o en predios que no han sido catastrados por él, se recogerá la misma información señalada y adicionalmente:

1. El levantamiento topográfico o planímetro del inmueble conforme a los estándares impartidos por la autoridad catastral.

2. La demás información catastral pertinente cuando se opere como Gestor Catastral.

PARÁGRAFO. Cuando el levantamiento topográfico o planímetro del inmueble arroje un área o linderos diferentes a los que reposen en catastro y/o el registro público de la propiedad se

procederá a desarrollar el procedimiento señalado en el Capítulo 2 del presente título.

ARTICULO 31B. CÁLCULO DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR. <Artículo adicionado por el artículo 10 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en desarrollo del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, se adelantó el trámite para el reconocimiento y asignación de derechos aplicable a quienes opten por la adjudicación conforme a lo señalado en el Decreto 902 de 2017, la Unidad Agrícola Familiar no será la definida por zonas relativamente homogéneas, sino seré calculada para cada caso individual bajo la metodología de UAF predial.

En lo posible se procurará aprovechar la visita predial de que trata el artículo 31 de la presente resolución para realizar las labores de campo requeridas para la definición de la UAF predial.

Las excepciones que permitan la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF predial para quienes opten por la adjudicación en atención a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, serán objeto de reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 10 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

ARTÍCULO 32. INFORMACIÓN DE BARRIDO PREDIAL MASIVO PARA EFECTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. <Artículo modificado por el artículo 21 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La información obtenida en los barridos prediales será ordenada, depurada y clasificada por la ANT y/o el tercero que se encuentre interviniendo el territorio. Esta información será remitida a la Subdirección de Planeación Operativa para su revisión, quien posteriormente la enviará a la Subdirección de Sistemas de Información, la cual se encargará de dirigirla a cada una de las Subdirecciones para la ejecución de la fase administrativa del Procedimiento Único.

PARÁGRAFO. Las jornadas de diligenciamiento FISO se adelantarán únicamente en el marco de la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, ello sin perjuicio del procedimiento general establecido para zonas no focalizadas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 21 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 32. EQUIPOS ENCARGADOS DEL BARRIDO PREDIAL. La ANT podrá vincular a terceros que estén en la capacidad y cuenten con la idoneidad para realizar los barridos prediales e identificar las circunstancias previstas en el artículo anterior disponiendo del personal necesario para el efecto, no obstante, dichos terceros actuarán bajo la coordinación y lineamientos de la Subdirección de Planeación Operativa, conformando para esos fines equipos base que, en la medida de lo posible tendrán, como centro de operaciones la Unidad de Gestión Territorial respectiva.

ARTÍCULO 33. INFORME TÉCNICO JURÍDICO PRELIMINAR. La información obtenida en los barridos prediales a nivel veredal ya ordenada, depurada y clasificada será remitida paulatinamente y conforme a los avances obtenidos, al nivel central. Aunque se debe conformar un sólo expediente por predio rural, la información recogida de cada uno debe concluir en el análisis de la existencia de problemas de acceso a tierra, inseguridad jurídica o incumplimiento a la función social de la propiedad, de forma que debe ser remitido en lo de su competencia a la Subdirección pertinente.

Para cada caso, tras un análisis de la información aportada, la o las Subdirecciones pertinentes elaborarán un documento denominado “informe técnico jurídico preliminar”, que contendrá la información detallada del inmueble, recabada a lo largo del proceso junto con un análisis de dicha información que permita sugerir cuál o cuáles de los asuntos enlistados en el artículo 58 del Decreto-ley número 902 de 2017 es necesario iniciar y ejecutar para la respectiva vereda a través de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.

Cuando se realice la intervención de barrido predial del catastro multipropósito, los informes técnicos jurídicos preliminares podrán provenir de los anexos contenidos en los estándares del catastro multipropósito.

Tratándose del informe técnico jurídico preliminar que recomiende la adjudicación de tierras baldías bajo el régimen de transición o las circunstancias especiales conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto-ley número 902 de 2017, este deberá contener toda la información señalada en el artículo 72 de la presente Resolución. Si no fuere posible con la información del barrido predial obtener toda la información requerida, así expresamente lo hará constar el informe técnico jurídico y solicitará terminar de recoger la información faltante en desarrollo de la segunda parte de la fase administrativa.

En lo referente a las pretensiones de clarificación de la propiedad y deslinde, recuperación de baldío indebidamente ocupado, reversión y extinción de dominio el informe técnico jurídico preliminar consignará los aspectos sustanciales enunciados en el Decreto número 1071 de 2015 en lo concerniente a cada materia.

Igualmente, dicho informe podrá concluir la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho para poder dar inicio a alguno de esos asuntos o sugerir recopilar más información, aclarar alguna prueba o archivar el expediente.

ARTÍCULO 33B. ACTO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO. <Artículo modificado por el artículo 22 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en los expedientes conformados el Informe Técnico Jurídico concluya la inexistencia de supuestos de hecho o de derecho para dar inicio a alguna de las pretensiones agrarias señaladas en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, la Subdirección pertinente expedirá un acto administrativo que ordenará no dar inicio a la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el respectivo inmueble o solicitud.

En tal sentido, respecto de esos casos, no se proferirá el acto administrativo de apertura de que trata el literal c) del artículo 60 del Decreto-Ley 902 de 2017, y contra el acto que ordena el archivo procederá el recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme a las reglas generales definidas en la Ley 1437 de 2011.

Cuando la solicitud verse sobre la asignación o reconocimiento de derechos y el Informe Técnico Jurídico concluya su improcedencia, también se expedirá un acto administrativo que ordenará el no inicio de la segunda parte de la fase administrativa, y contra el cual procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 22 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Resolución 3234 de 2019:

ARTÍCULO 33B. ACTO ADMINISTRATIVO DE NO INICIO DE RUTAS. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 3234 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el informe técnico-jurídico preliminar concluya la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho para dar inicio a alguna de las pretensiones agrarias señaladas en los numerales 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o. y 9o. del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, la subdirección pertinente expedirá un acto administrativo que ordenará no dar inicio a la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad para el respectivo inmueble o solicitud.

En tal sentido, respecto de esos casos, no se proferirá el acto administrativo de apertura de que trata el literal C del artículo 60 del Decreto-Ley 902 de 2017, y contra el acto que ordena el no inicio procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación conforme a las reglas generales definidas en la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Cuando la solicitud verse sobre la asignación o reconocimiento de derechos y el informe técnico-jurídico preliminar concluya su improcedencia, también se expedirá un acto administrativo que ordenará el no inicio de la segunda parte de la fase administrativa, y contra el cual también procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Esta disposición se integra al lineamiento expresado en la Circular 6 de 29 de enero de 2018 expedida por el Director General de la ANT.

A pesar de que la petición particular vaya encaminada a una ruta determinada, la ANT se pronunciará frente a la naturaleza jurídica del inmueble, la existencia o no de informalidad sobre el mismo, la licitud en su adquisición, y conforme a ello podrá sugerir la aplicación de una ruta distinta.

Cuando el informe técnico-jurídico preliminar concluya que un determinado asunto, de cualquiera de los señalados en el artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, no es de competencia de la subdirección o la unidad de gestión territorial a la cual llegó la solicitud, sino de otra, la subdirección o la unidad de gestión territorial a la cual llegó la solicitud, así se declarará y ordenará la remisión del informe técnico-jurídico a la subdirección o a la unidad de gestión territorial competente para que esta realice el análisis y de ser el caso, expida el respectivo acto de apertura.

Para las zonas focalizadas, en los casos en que haya sido procedente la apertura del expediente, la elaboración del documento preliminar de análisis predial, DPAP, y la visita predial, y el informe técnico-jurídico preliminar modifique la postura inicialmente asumida concluyendo que no hay mérito para continuar la segunda parte de la fase administrativa del proceso único de ordenamiento social de la propiedad, no será necesario expedir acto administrativo de no inicio toda vez que la actuación en estos casos es oficiosa y en su lugar bastará con un informe que ordenará archivar en el sistema de gestión documental, el caso respectivo.

CAPÍTULO 2.

CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS, ACTAS DE COLINDANCIA.

Notas de Vigencia

- Enunciado del capítulo 2 modificado por el artículo 23 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

CAPÍTULO 2.

FASE ADMINISTRATIVA - PRIMERA PARTE.

Corrección Administrativa de Área y Linderos, Actas de Colindancia

ARTÍCULO 34. CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS. En las zonas donde se adelante el barrido predial, la ANT podrá solicitar la corrección administrativa de linderos y/o área de los predios mediante el levantamiento o suscripción de actas de colindancia, cuando se adviertan diferencias o inconsistencias en los mismos.

ARTÍCULO 35. ACTA DE COLINDANCIA PARA LA CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS. Entiéndase por tal para efectos de la corrección administrativa de área y linderos, el documento que recoge los acuerdos realizados entre los titulares del derecho real de dominio, respecto a los linderos y puntos que conforman cada predio, en relación a sus colindantes.

ARTÍCULO 36. ACTA DE COLINDANCIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA. Entiéndase por tal el documento que recoge los acuerdos realizados entre los poseedores, respecto a los linderos que conforman cada predio, en relación a sus colindantes.

ARTÍCULO 37. ELABORACIÓN DEL ACTA DE COLINDANCIA PARA LA CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS. Efectuada la visita de campo con la presencia de los titulares del derecho de dominio, que sean parte del conflicto de linderos, se pondrá a su disposición el acta de colindancia para su suscripción y aprobación, con base en el levantamiento planimétrico predial y el informe de colindancia realizado.

ARTÍCULO 38. CONTENIDO DEL ACTA DE COLINDANCIA. El acta de colindancia deberá contener, como mínimo la siguiente información:

a) Lugar y fecha de realización;

b) Nombre o razón social, tipo y número de identificación, domicilio y residencia de los titulares del derecho de dominio del inmueble que deben firmar el acta de colindancia. En los casos en los que se actúe a través de apoderado y/o representante legal, debe acreditarse tal condición mediante los procedimientos legales establecidos;

c) Hechos que describan las diferencias entre los linderos identificados y definidos en los levantamientos planimétricos prediales y/o área de los predios, con la información jurídica, especialmente la del Registro Público de la Propiedad a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, lo anterior en desarrollo del barrido predial masivo para la conformación del Catastro Multipropósito;

d) La consignación expresa del acuerdo al que llegan todos los titulares de derecho de dominio del inmueble y sus colindantes. Estos últimos deberán tener la calidad de titulares de derecho real principal de dominio;

e) Firma y huella dactilar del profesional, funcionario o contratista que realiza el acta, en quien se haya delegado esta labor por parte de la ANT;

Firmas y huella dactilar de las partes que intervienen o de sus representantes legales o apoderados

debidamente constituidos;

g) Informe de colindancia, el cual debe ir anexo a la correspondiente acta y cuya información debe coincidir y ser coherente con el acuerdo estipulado en la respectiva acta de colindancia.

PARÁGRAFO 1o. Los bienes inmuebles objeto del acta de colindancia, por ningún motivo deben colindar con bienes imprescriptibles o propiedad de entidades de derecho público, bienes de uso público, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos, o bienes cuya posesión, ocupación o transferencia estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales o legales, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1579 de 2012, adicionado por el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015 y así debe ser manifestado en el acta de colindancia a excepción de los inmuebles colindantes con vías públicas.

PARÁGRAFO 2o. El acta de colindancia de que trata el presente artículo, no puede afectar derechos de terceros o bienes cuya posesión, ocupación o transferencia, estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales u otras disposiciones legales.

PARÁGRAFO 3o. Una vez aprobada por las partes y finalizada el acta de colindancia, se surtirá el trámite establecido en el artículo 63 del Decreto-ley número 902 de 2017 enviándola a la Autoridad Catastral para la correspondiente rectificación de área y linderos y posterior registro con sus anexos.

☐ ARTÍCULO 39. INFORME DE COLINDANCIA. Se entiende por tal, el documento donde se identifican por predio, cada uno de los linderos que lo constituyen y su correspondiente relación física y jurídica con los predios circundantes al mismo, en este se indicarán las relaciones formales o informales de tenencia identificadas físicamente.

El informe de colindancia, se constituye de dos actividades principales que son:

1. El levantamiento planimétrico predial que contendrá los datos generales y los datos del predio.

2. El levantamiento del componente físico-jurídico del predio comprendido por la naturaleza jurídica del predio, titulares de derecho de dominio y estado de colindancias por tramo.

☐ ARTÍCULO 40. CONTENIDO DEL INFORME DE COLINDANCIA. La información que deberá constar en el informe de colindancia es:

Datos Generales

- Lugar y fecha de la identificación física del predio.

- Fecha de la identificación jurídica del predio.

- Nombre y código del departamento.

- Nombre y código del municipio.

- Nombre del profesional, funcionario y/o contratista designado por la ANT para esta labor.

- Firma de las partes que intervienen en la definición de cada uno de los linderos del predio (con relaciones de tenencia formales o informales). Esta firma no sustituye la del acuerdo de las actas de colindancia para los propósitos de lo consagrado en el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015.

- Del mismo modo, no es un requisito obligatorio (facultativa), salvo para la suscripción de las actas de colindancia.

Datos del predio

- Tipo de predio o relación de tenencia: formal o informal.

- Número de matrícula inmobiliaria, y número predial.

- Nombre completo del propietario, poseedor u ocupante o razón social.

- Número de identificación del propietario, poseedor u ocupante.

- Información de residencia, domicilio número de teléfono celular y correo electrónico si lo tuviere del propietario, poseedor u ocupante.

- Referencia del área y linderos consignada en el título antecedente.

Datos de la Identificación Física del Predio

- Representación gráfica del predio con la identificación de los linderos.

- Identificador para cada lindero acorde con los representados en el plano predial.

- Número predial y número de folio de matrícula inmobiliaria del colindante para cada uno de los linderos identificados del predio.

- Descripción de la materialización de cada lindero identificador del predio (cerca natural, cerca artificial, muro, entre otros), que servirá como referencia de la fecha del levantamiento planimétrico predial. Si el lindero tiene diferentes tipos de materialización, cada tramo debe ser descrito.

- Cada tramo de lindero debe ser identificado con las coordenadas de cada uno de los puntos que lo componen en coordenadas geográficas, procesadas a partir de los datos levantados para cada uno de los puntos del levantamiento planimétrico predial.

- El punto final de un tramo debe coincidir en coordenadas con el punto de inicio del siguiente tramo.

Datos del Estado de Colindancia por Lindero

- Linderos identificados.

- Número del predio.

- Número predial del colindante para cada uno de los linderos identificados del predio.

- Número de folio de matrícula inmobiliaria del colindante para cada uno de los linderos

identificados.

- Nombre completo y número de identificación del propietario, poseedor u ocupante o razón social, del predio con el cual colinda.

CAPÍTULO 3.

REGISTRO DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO - RESO.

Notas de Vigencia

- Enunciado del capítulo 3 modificado por el artículo 24 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

CAPÍTULO 3.

FASE ADMINISTRATIVA - PRIMERA PARTE.

Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO)

ARTÍCULO 41. GENERALIDADES. El RESO, consigna públicamente a todos los individuos y comunidades cuyas relaciones con la tierra deban ser resueltas, tramitadas o gestionadas por la ANT. En consecuencia, subsume y sustituye el Registro Único de Usuarios a que se refiere el Decreto-ley número 2363 de 2015.

Como parte del proceso para garantizar la calidad de la información recolectada sobre las personas aspirantes a ser inscritas en el RESO, la ANT atenderá a criterios de oportunidad, completitud, validez, consistencia, integralidad y precisión en la identificación y valoración de las diferentes fuentes utilizadas.

ARTÍCULO 42. INGRESO RESO GENERAL. Identificadas y verificadas formalmente las solicitudes para cualquiera de las acciones cuya competencia involucra actuaciones de la ANT, serán incorporadas al RESO para dar cumplimiento a los fines establecidos en los incisos 1o y 2o del artículo 11 del Decreto-ley número 902 de 2017.

La valoración para el ingreso a los módulos de Acceso a Tierras y Formalización, se realizará valorando los supuestos de hecho establecidos para cada uno de ellos.

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

ARTÍCULO 43. MÓDULOS. Al interior del RESO se clasificarán los sujetos según los

programas o acciones a los que accedan, para lo cual contará por lo menos con los siguientes módulos:

1. Acceso a tierras. Incorporará los sujetos que pretenden acceder a cualquiera de los programas de dotación de tierras promovidos por la ANT. A su interior se distinguirán las categorías de título gratuito y parcialmente gratuito. El ingreso, categorización y exclusión se realizará conforme a las reglas que de manera especial se establecen dentro del presente texto normativo.

2. Étnico. Incorporará la información sobre los pueblos y comunidades étnicas que aspiran, u ostentan, la condición de beneficiarios de programas de acceso y reconocimiento de la propiedad étnica, señalando sus respectivos territorios, así como los individuos que integran la respectiva comunidad. El ingreso de sujetos y comunidades de sujetos se realizará por orden de los procedimientos administrativos y judiciales que se establecen de modo especial por la ley para cada uno de los tipos de comunidades étnicas.

La inscripción de las comunidades étnicas en el módulo étnico del RESO se efectuará de acuerdo con la información que para tales efectos suministren las autoridades de la respectiva comunidad étnica.

3. Formalización de la propiedad. Relacionará los sujetos que participan dentro de los programas de formalización de la propiedad a cargo de la ANT, y diferenciará los sujetos que lo integran en las categorías de título gratuito, título parcialmente gratuito y título oneroso. El ingreso, categorización y exclusión se realizará conforme a las reglas que de manera especial se establecen dentro del presente texto normativo.

4. Adjudicatarios. Conformado por los sujetos que en cualquier tiempo fueron beneficiarios de programas de dotación de tierras por parte del Estado. Su ingreso se realizará de manera progresiva a partir de la incorporación de los registros administrativos y bases de datos a disposición de la ANT, o por la conclusión del respectivo proceso de adjudicación y/o titulación.

5. Procesos o pretensiones agrarias. Concentrará los sujetos que participan en cualquier calidad dentro de los procesos o pretensiones agrarias que adelanta o promueve la ANT. Su ingreso se realizará de manera progresiva a partir de la incorporación de los registros administrativos y bases de datos a disposición de la ANT, o por solicitud de la dependencia misional encargada del adelantamiento o gestión del respectivo proceso agrario.

6. Administración. Conformado por los sujetos que participan de algún programa de administración de tierras a cargo de la ANT. Su ingreso se realizará de manera progresiva a partir de la incorporación de los registros administrativos y bases de datos a disposición de la ANT, o por solicitud de la dependencia misional encargada de la administración de un determinado predio.

7. Otros. Relacionará los sujetos que discuten las relaciones que mantienen con determinados predios y en cuya resolución participa la ANT, y que no son susceptibles de ser clasificados como propias de alguno de los módulos anteriormente señalados.



ARTÍCULO 44. ENTRADAS. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El RESO podrá conformarse a través de cualquiera de las

siguientes entradas:

1. Registros administrativos.

2. Solicitud de parte.

3. Barrido predial.

4. Decisiones judiciales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 25 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 44. El RESO podrá conformarse a través de cualquiera de las siguientes entradas:

1. Registros administrativos. La ANT incorpora de manera progresiva la información sobre los sujetos que reposan en sus bases de datos, expedientes administrativos y, en general, de la documentación que tenga en su poder. La inscripción en el Módulo de Acceso a Tierras procederá de oficio cuando de los archivos en custodia de la ANT se desprenda la condición de aspirantes en cualquiera de sus categorías. La información exigida por el RESO se diligenciará conforme a lo establecido en los expedientes administrativos y los cruces de bases de datos que pueda realizar la entidad. Estos registros permanecerán suspendidos hasta obtener la ratificación expresa de las personas inscritas, quienes deberán asegurar, bajo la gravedad de juramento, que los datos allí consignados son veraces y completos, su intención de permanecer en el RESO en el Módulo de Acceso a Tierras o Formalización y participar como aspirantes en dichos programas.

Las personas cuyas solicitudes de adjudicación se encuentren en trámite para el momento de la expedición del Decreto-ley número 902 de 2017, serán incorporadas progresivamente al RESO exclusivamente para los fines determinados en los incisos 1o y 2o del artículo 11 ibídem.

2. Solicitud de parte. Una vez sea conformado el RESO en un determinado municipio o región, según las reglas de transición establecidas en la presente resolución, los particulares por su iniciativa podrán solicitar la inscripción en el RESO en el Módulo de Acceso a Tierras. Para dichos efectos deberán diligenciar el Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento, en adelante FISO, suministrado por la ANT, en formato físico o digital.

3. Barrido predial. La conformación del RESO en las zonas focalizadas para los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, se alimentará de información de las personas aspirantes a ser sujetos de ordenamiento recopilado por la intervención propia de la ANT a través del FISO. También podrán incorporarse sujetos a partir de la información proporcionada por el catastro multipropósito en cuyo caso la ANT completará la información del FISO y mantendrá suspendida la inscripción hasta que se produzca la respectiva manifestación del

beneficiario, sobre la veracidad y completitud de la información y su interés de permanecer en el módulo de acceso a tierras.

4. Decisiones judiciales. La ANT conformará la relación de los sujetos respecto de los cuales se haya ordenado efectuar un proceso de adjudicación, procedimiento o gestión a su cargo, incorporándolo en el respectivo módulo.

La ANT de manera directa o a través de terceros idóneos, recopilarán la información de cada uno de los casos anteriormente mencionados y sus respectivos soportes.

ARTÍCULO 45. FACTORES DE CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES. <Artículo modificado por el artículo 26 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación de la persona aspirante al Módulo de Acceso a Tierras que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 4o y 5o del Decreto-Ley 902 de 2017 se efectuará conforme a los siguientes factores y puntajes:

1. Patrimonio: La puntuación asignada por este criterio corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

PA = (700) - Patrimonio

2

Donde “PA” corresponde al puntaje asignado, “patrimonio” corresponde al número de salarios mínimos legales vigentes que la persona aspirante tenga como patrimonio neto.

Las personas aspirantes manifestarán dentro del proceso de inscripción su situación patrimonial la cual se incorporará en virtud del principio de buena fe. La ANT hará uso de los medios que juzgue necesarios para corroborar dicha información, entre otras la ANT deberá verificar en bases de datos de la DIAN o equivalentes la veracidad del patrimonio reportado.

2. Víctimas del conflicto: Se asignarán ciento cincuenta (150) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de víctimas del conflicto armado en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

La ANT deberá verificar en bases de datos de VIVANTO y RUV o equivalentes la condición de víctima.

3. Vinculación a una organización campesina: Se asignarán diez (10) puntos a la persona aspirante que manifieste pertenecer a una asociación campesina o de economía solidaria o cualquier otro instrumento de asociación, siempre que para todos los casos su objeto se dirija a la producción agropecuaria, forestal, acuícola o de servicios ambientales con fines productivos, o la promoción de la economía campesina y con presencia en el municipio o región de residencia de la persona aspirante.

La puntuación será duplicada siempre que se trate de mujeres aspirantes y triplicada si ellas pertenecen a las directivas de la respectiva organización. También será triplicada la puntuación, para

todas sus integrantes, si la organización es compuesta solo por mujeres, en este último caso no se darán puntajes adicionales a sus directivas.

4. Registro en el Sisbén: la asignación de puntos por este criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima de 100 puntos el índice Sisbén de la respectiva persona aspirante.

La ANT deberá verificar en bases de datos del Sisbén o equivalentes la puntuación.

5. Personas a cargo: Se dará una calificación de diez (10) puntos por cada hijo menor de edad, hijo de crianza o persona del grupo familiar que por incapacidad permanente dependa económicamente del aspirante. La puntuación será duplicada si se acredita que las personas dependientes se encuentran en procesos de escolarización. Corresponde a las personas aspirantes demostrar el cumplimiento de las condiciones acá establecidas al momento del registro. Para ello deberán acompañar copia del registro civil de nacimiento de las personas a cargo cuando se trate de demostrar relaciones de consanguinidad. Tratándose de familiares de crianza será posible demostrarlo por cualquier otro medio probatorio.

Parágrafo. Personas a cargo: <Parágrafo adicionado por el artículo 8 de la Resolución 915 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Se dará una calificación de diez (10) puntos por cada hijo menor de 18 años que dependa económicamente del solicitante, personas de la tercera edad o disminuidos físicos, síquicos o sensoriales o personas del grupo familiar quienes por sus condiciones físicas, psicológicas o sociales soporta restricciones en su participación plena y activa en la sociedad.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado al numeral 5 por el artículo 8 de la Resolución 915 de 2020, 'por la cual se expiden reglas para la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Zonas no Focalizadas y se adoptan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.233 de 20 de febrero 2020.

6. Beneficiarios de restitución: Se asignarán cincuenta (50) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra. La puntación será duplicada cuando la atención recibida por dichas personas no haya implicado la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de propiedad. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

7. Ocupantes de territorios étnicos: Se asignarán cien (100) puntos a las personas aspirantes que para el momento de la expedición de la Resolución número 740 de 2017 ocupen reservas o resguardos indígenas que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

8. Experiencia: Se dará una calificación de un (1) punto por cada mes de experiencia en actividades agropecuarias, pecuarias, acuícolas o forestales y de economía del cuidado.

La puntuación será duplicada cuando la experiencia verse en servicios ecosistémicos que permitan la preservación y/o restauración de áreas y ecosistemas estratégicos. Para tales efectos las personas aspirantes deberán manifestar cada uno de los periodos que pretendan puntuar.

Para todos los casos la experiencia computada sólo será valorada desde el momento en el que el sujeto haya cumplido 16 años de edad.

Las personas aspirantes menores de veinticinco (25) años podrán convalidar su experiencia para efectos de la puntuación acá establecida a través de la acreditación de formación académica o en ciencias agropecuarias o para el trabajo, sin perjuicio de la asignación de puntos que por tal criterio se establece de manera independiente.

9. Vinculación rural al municipio o región: Se asignará un (1) punto por cada mes de residencia en el municipio o región. Las personas en condición de desplazamiento, e incluso las que ya la hubieren superado, podrán computar los periodos en los que se vieron en la necesidad de abandonar la respectiva región.

10. Reubicación y Reasentamiento: Se asignarán cien (100) puntos a la persona aspirante que hubiese ejercido una ocupación irregular de terrenos baldíos o bienes fiscales patrimoniales y que voluntariamente hubiese regulado su ocupación con la respectiva entrega material, o la suscripción de acuerdos de aprovechamiento y/o reconversión del suelo. La misma regla aplicará para las personas aspirantes que realicen actividades de erradicación de cultivos ilícitos. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

11. Educación y/o formación en ciencias agropecuarias, ambientales o afines a las mismas: Se evaluará la formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano asignando 10 puntos por cada seminario, curso o diplomado debidamente aprobado y relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas. Igualmente se asignarán 10 puntos por cada periodo debidamente aprobado dentro de los niveles pregrado (Técnico Profesional, Tecnológico o Profesional) y de posgrado (Especializaciones, Maestrías o Doctorados), relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas.

En cualquiera de las modalidades establecidas la puntuación será duplicada tratándose de mujeres aspirantes y de personas en situación de discapacidad. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

Tratándose de los numerales 3, 8 y 9 del presente artículo, la simple manifestación bajo gravedad de juramento en el documento de inscripción al FISO se tendrá como prueba suficiente para acreditar la información allí reportada. Ello sin perjuicio de la competencia de la ANT de poder revisar en cualquier momento por otros medios la veracidad de lo afirmado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en zonas no focalizadas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 26 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 45. La calificación de la persona aspirante al Módulo de Acceso a Tierras que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 4o y 5o del Decreto-ley número 902 de 2017 se efectuará conforme a los siguientes factores y puntajes:

1. Patrimonio: La puntuación asignada por este criterio corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PA = \frac{(700) - patrimonio}{2}$$

Donde “PA” corresponde al puntaje asignado, “patrimonio” corresponde al número de salarios mínimos legales vigentes que la persona aspirante tenga como patrimonio neto.

Las personas aspirantes manifestarán dentro del proceso de inscripción su situación patrimonial la cual se incorporará en virtud del principio de buena fe. La ANT hará uso de los medios que juzgue necesarios para corroborar dicha información.

2. Víctimas del conflicto: Se asignarán ciento cincuenta (150) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de víctimas del conflicto armado en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

3. Vinculación a una organización campesina: Se asignarán cien (100) puntos a la persona aspirante que pruebe pertenecer a una asociación campesina o de economía solidaria o cualquier otro instrumento de asociación, siempre que para todos los casos su objeto de dirija a la producción agropecuaria, forestal, acuícola o de servicios ambientales con fines productivos, o la promoción de la economía campesina y con presencia en el municipio o región de residencia de la persona aspirante.

La puntuación será duplicada siempre que se trate de mujeres aspirantes y triplicada si ellas pertenecen a las directivas de la respectiva organización. También será triplicada la puntuación, para todas sus integrantes, si la organización es compuesta solo por mujeres, en este último caso no se darán puntajes adicionales a sus directivas.

4. Permanencia dentro del registro: Se dará una calificación de un (1) punto por cada mes en el que la persona aspirante permanezca dentro del RESO en el Módulo de Acceso a Tierras, sin

haber accedido a alguna adjudicación.

Los puntos serán asignados directamente por la ANT, desde el mismo momento en el que la persona aspirante presente su solicitud para ingreso y siempre que hayan sido aceptada sus condiciones de elegibilidad. Para los casos en los que se realice la incorporación al RESO de manera oficiosa los tiempos serán computados desde el momento en el que la persona inscrita en el módulo manifieste expresamente su voluntad de permanecer en el registro.

5. Registro en el Sisbén: la asignación de puntos por este criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima de 100 puntos el índice Sisbén de la respectiva persona aspirante.

6. Personas a cargo: Se dará una calificación de diez (10) puntos por cada hijo menor de edad, hijo de crianza o persona del grupo familiar que por incapacidad permanente dependa económicamente del aspirante. La puntuación será duplicada si se acredita que las personas dependientes se encuentran en procesos de escolarización. Corresponde a las personas aspirantes demostrar el cumplimiento de las condiciones acá establecidas al momento del registro.

7. Beneficiarios de restitución: Se asignarán cincuenta (50) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra. La puntación será duplicada cuando la atención recibida por dichas personas no haya implicado la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de propiedad.

8. Ocupantes de territorios étnicos: Se asignarán cien (100) puntos a las personas aspirantes que para el momento de la expedición de la presente resolución ocupen reservas o resguardos indígenas que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes.

9. Experiencia: Se dará una calificación de un (1) punto por cada mes de experiencia en actividades agropecuarias, pecuarias, acuícolas o forestales y de economía del cuidado.

La puntuación será duplicada cuando la experiencia verse en servicios ecosistémicos que permitan la preservación y/o restauración de áreas y ecosistemas estratégicos. Para tales efectos las personas aspirantes deberán acreditar expresamente cada uno de los periodos que pretendan puntuar.

Para todos los casos la experiencia computada sólo será valorada desde el momento en el que el sujeto haya cumplido 16 años de edad.

Las personas aspirantes menores de veinticinco (25) años podrán convalidar su experiencia para efectos de la puntuación acá establecida a través de la acreditación de formación académica o en ciencias agropecuarias o para el trabajo, sin perjuicio de la asignación de puntos que por tal criterio se establece de manera independiente.

10. Vinculación rural al municipio o región: Se asignará un (1) punto por cada mes de residencia en el municipio o región. Las personas en condición de desplazamiento, e incluso las que ya la

hubieren superado, podrán computar los periodos en los que se vieron en la necesidad de abandonar la respectiva región. Para tales efectos los aspirantes harán uso de todos los medios probatorios.

11. Reubicación y Reasentamiento: Se asignarán cien (100) puntos a la persona aspirante que hubiese ejercido una ocupación irregular de terrenos baldíos o bienes fiscales patrimoniales y que voluntariamente hubiese regulado su ocupación con la respectiva entrega material, o la suscripción de acuerdos de aprovechamiento y/o reconversión del suelo. La misma regla aplicará para las personas aspirantes que realicen actividades de erradicación de cultivos ilícitos.

12. Educación y/o formación en ciencias agropecuarias, ambientales o afines a las mismas: Se evaluará la formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano asignando 10 puntos por cada seminario, curso o diplomado debidamente aprobado y relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas. Igualmente se asignarán 10 puntos por cada periodo debidamente aprobado dentro de los niveles pregrado (Técnico Profesional, Tecnológico o Profesional) y de posgrado (Especializaciones Maestrías o Doctorados), relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas.

En cualquiera de las modalidades establecidas la puntuación será duplicada tratándose de mujeres aspirantes y de personas en situación de discapacidad. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

ARTÍCULO 46. PROCEDIMIENTO RESO GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 27 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La subdirección de Sistemas de Información de Tierras analizará de manera formal las solicitudes de los particulares que demanden la actuación de la ANT en asuntos de su competencia, y las examinará, a fin de valorarlas, calificarlas y establecer si cumplen todos los requisitos para la inclusión en el RESO. Si la solicitud no permite la identificación plena del solicitante, o adolece de documentos para su valoración, dentro de los diez (10) días siguientes a iniciar el proceso de valoración se requerirá al particular para que proceda a su corrección. Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos, la subdirección de sistemas de información de tierras remitirá la valoración a la dependencia correspondiente. En el acto administrativo de apertura del procedimiento único se incorporará la decisión de inclusión en el RESO.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 27 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 46. Identificadas las solicitudes de los particulares que demanden la actuación de la ANT en asuntos de su competencia, estos serán examinados de manera formal, a fin de establecer su completitud y consistencia, verificado lo cual serán incorporados al RESO y remitidos a la dependencia encargada para su resolución. Si por el contrario la solicitud no permite la identificación plena del solicitante, o adolece de documentos para su valoración, dentro de los diez (10) días siguientes se requerirá al particular para que proceda a su corrección.

Se exceptuarán de dicho procedimiento las solicitudes que tengan por objeto la inclusión de las personas solicitantes a los módulos de Acceso a Tierras y Formalización, las cuales serán tramitadas conforme a lo establecido en el siguiente artículo.

ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO RESO MÓDULO DE ACCESO A TIERRAS Y FORMALIZACIÓN. Diligenciado el FISO será incorporado en el RESO en calidad de solicitantes. Su ingreso al Módulo de Acceso a Tierras se someterá a las reglas previstas en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011 y, en especial, agotando los siguientes pasos:

1. La información consignada en el FISO será verificada formalmente por la ANT, para corroborar que los datos solicitados en el formulario estén completos y permitan la inequívoca individualización del aspirante, y que los documentos de soporte requeridos hayan sido adjuntados. Cuando se identifiquen inconsistencias o que la documentación anexa se encuentra incompleta, se advertirá de manera inmediata a la persona solicitante para que proceda a su ajuste. Si la persona peticionaria insiste en radicar el formulario de dicha manera se dejará constancia sobre ello en el acto de radicación.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a radicación del FISO la ANT podrá requerir a la persona solicitante para que dentro de los treinta (30) días siguientes completen o corrijan las posibles inconsistencias detectadas en el proceso de verificación o, que adjunten los documentos faltantes que se juzguen necesarios para valorar y calificar su situación. Atendida la solicitud por el particular se reactivarán los términos para resolver. Por el contrario, si la persona solicitante no atiende el requerimiento la solicitud será resuelta decretando su desistimiento siempre que las inconsistencias impidan valorar las condiciones de elegibilidad previstas en los artículos 4o y 5o del Decreto-ley número 902 de 2017. Si por el contrario los defectos se refieren a la determinación de los supuestos de hecho propios de las condiciones de asignación de puntos, la solicitud será aceptada e incorporada al Módulo de Acceso a Tierras, pero se prescindirá de la asignación de puntos según los criterios a los que se reproche las falencias o inconsistencias.

3. Verificadas la completitud y consistencia del FISO y que los documentos requeridos están completos, la ANT procederá a hacer la valoración de la solicitud y decidirá sobre la procedencia de la inscripción del aspirante en el Módulo de Acceso a Tierras y Formalización en las categorías previstas en los artículos 4o, 5o y 6o del Decreto-ley número 902 de 2017.

4. Establecida la categoría a la que pertenezca el aspirante al RESO, la ANT le asignará el puntaje correspondiente, según los criterios establecidos en el Decreto-ley número 902 de 2017 y lo dispuesto en la presente resolución. Dichas decisiones deberán ser tomadas dentro de los treinta (30)

días siguientes a la radicación del FISO, prorrogables por una sola vez cuando pueda justificarse la imposibilidad de resolverlo dentro del término inicial.

Dicha circunstancia debe ser informada al particular previo el vencimiento de los primeros treinta (30) días.

5. Una vez valorada, categorizada y puntuada la solicitud, se hará la inscripción en el RESO, mediante acto administrativo que deberá especificar el módulo o módulos, la categoría y el puntaje asignados a la persona inscrita. Dicho acto administrativo será notificado según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y procederán exclusivamente el recurso de reposición.

PARÁGRAFO 1o. Las personas inscritas podrán, de manera permanente, actualizar su información personal, y la relativa a las condiciones evaluadas para la asignación de puntos. Así mismo, podrán solicitar su exclusión de la condición de aspirantes y su decisión de no participar dentro de los procesos de Acceso a Tierras y Formalización.

Las personas beneficiarias de adjudicación permanecerán en el RESO en el módulo de Adjudicatarios a efectos de realizar el seguimiento a la adjudicación, para lo cual el registro relacionará las limitaciones al ejercicio de la propiedad, el proyecto productivo y las acciones de seguimiento efectuadas.

PARÁGRAFO 2o. La ANT implementará mecanismos que le permitan a la población sorda, sorda-ciega e hipoacústica conocer la oferta institucional, y de manera especial el RESO. Igualmente tramitará de manera diferencial su proceso de inscripción y asignación de puntos.

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

ARTÍCULO 48. NOVEDADES. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En cualquiera de las etapas del Procedimiento Único, se podrán hacer modificaciones a la información consignada en el FISO, como actualización, o que puedan derivar en cambios en el módulo atribuido o en la categoría asignada. A este tipo de solicitud se le llamará Novedad y será tramitada a través del Formulario de Actualización y Novedades del FISO.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 28 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 48. En cualquiera de las etapas del proceso de inscripción en el RESO, se podrán hacer modificaciones a la información consignada en el FISO, como actualización, o que puedan derivar en cambios en el módulo atribuido, en la categoría asignada, o en el puntaje obtenido. A este tipo de solicitud se le llamará Novedad y será tramitada a través del Formulario de Actualización y Novedades del FISO.

ARTÍCULO 49. EXCLUSIÓN O RECATEGORIZACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Según lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 15 del Decreto-Ley 902 de 2017, la ANT podrá excluir a personas inscritas en el RESO o efectuar su reclasificación en las categorías o módulos antes de expedir el acto administrativo de cierre del procedimiento único, cuando el acto de apertura que incluya la clasificación del posible beneficiario se haya emitido en un término superior a un (1) año contado a partir del momento del acto de ingreso al RESO. En los casos en los que deba recategorizarse identificada la variación en los supuestos de hecho, procederá a informar a la persona inscrita para que en el término de cinco (5) días se pronuncie al respecto. Recibido el pronunciamiento del particular o vencido el término anterior, la ANT procederá a efectuar la exclusión o la reclasificación respectiva. Contra dicha decisión solo podrá formularse el recurso de reposición en los términos de los artículos 74 numeral 1 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 29 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 49. Según lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 15 del Decreto-ley número 902 de 2017, la ANT podrá excluir a personas inscritas en el RESO, o efectuar su reclasificación en las categorías o módulos. Para tales efectos, identificada la variación en los supuestos de hecho, procederá a informar a la persona inscrita para que en el término de cinco (5) días se pronuncie al respecto. Recibido el pronunciamiento del particular o vencido el término, la ANT procederá a efectuar la exclusión o la reclasificación respectiva. Contra dicha decisión solo podrá formularse el recurso de reposición en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 50. TRANSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 30 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Hasta tanto el RESO se implemente, las bases de datos de la ANT, seguirán siendo la fuente de información oficial para el desarrollo de sus funciones misionales.

Mientras se produce la referida implementación el Registro se limitará a relacionar progresivamente tanto a las personas aspirantes en cualquiera de las modalidades de adjudicación directa como a los

trámites de adjudicación y/o titulación en curso, así como los usuarios del programa de formalización de la propiedad.

Excepcionalmente y para la adjudicación de predios en proceso de asignación de derechos se dará apertura al RESO circunscribiéndolo a los municipios donde estén ubicados los inmuebles. En tales eventos, la ANT garantizará la publicidad de la oferta institucional y múltiples jornadas de inscripción de las personas aspirantes por un periodo no inferior a un mes en la zona de adjudicación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 30 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 50. Hasta tanto el RESO se implemente y estabilice desde el punto de vista tecnológico, las bases de datos de la ANT, seguirán siendo la fuente de información oficial para el desarrollo de sus funciones misionales.

Dentro del año siguiente a la vigencia del presente reglamento, el Registro se limitará a relacionar a las personas aspirantes en cualquiera de las modalidades de adjudicación directa y de manera progresiva a los trámites de adjudicación y/o titulación en curso, así como los usuarios del programa de formalización de la propiedad.

Excepcionalmente y para la adjudicación de predios en procesos de selección, se dará apertura al RESO circunscribiéndolo a los municipios que se fije como zona de ubicación de los inmuebles. En tales eventos, la ANT garantizará la publicidad de la oferta institucional y múltiples jornadas de inscripción de las personas aspirantes por un periodo no inferior a un mes en la zona de adjudicación.

La Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad establecerá mediante cronograma la entrada en funcionamiento del RESO por demanda y por barrido, según la planificación de las zonas focalizadas.

Las decisiones sobre la inclusión y exclusión de aspirantes en los módulos de Acceso a Tierras y Formalización serán tomadas por la ANT conforme a la asignación de competencias que realice para el efecto el Director General.

ARTÍCULO 51. TRANSITORIO DEL RESO PARA EFECTOS DE FORMALIZACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 7622 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Desde la expedición de la presente resolución y hasta la entrada en funcionamiento del RESO, la ANT adelantará la formalización de los predios privados de que tratan los artículos 36 y 37 Decreto-ley 902 de 2017, en consonancia con el principio de economía previsto en el artículo 3o, inciso 2 de la Ley 1437 de 2011, haciendo uso de la información que al momento del inicio del

procedimiento se encuentre en el SIG-Formalización.

En tal sentido, respecto de los procesos de formalización privada que se encontraban en el Programa de Formalización de la Propiedad Rural a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud del artículo 11 del Decreto-ley 902 de 2017, que concibe al RESO como un instrumento de planeación y ejecución gradual de la política pública de acceso y formalización de tierras bajo el principio de reserva de lo posible y, en aplicación del artículo 35 del Decreto-ley 2363 de 2015, hasta tanto este instrumento no se implemente y estabilice desde el punto de vista tecnológico, las bases de datos de la ANT seguirán siendo las fuentes de información oficial para el desarrollo de sus funciones misionales, no siendo aplicable la inscripción en el RESO y la determinación de ser sujeto a título gratuito, título parcialmente gratuito y título oneroso; en consecuencia la ANT abordará la priorización de las personas a atender con base a los criterios establecidos para tal efecto en la Guía Metodológica que fuera adoptada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 7622 de 2019, 'por la cual se expiden nuevas reglas para la ejecución del procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad en Zonas No Focalizadas', publicada en el Diario Oficial No. 51.026 de 26 de julio 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 51. Desde la expedición de la presente Resolución y hasta la entrada en funcionamiento del RESO, la ANT adelantará la formalización de los predios privados de que tratan los artículos 36 y 37 Decreto-ley número 902 de 2017, en consonancia con el principio de economía previsto en la Ley 1437, haciendo uso de la información que al momento del inicio del procedimiento se encuentre en el SIG-Formalización.

CAPÍTULO 4.

CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO.

Notas de Vigencia

- Enunciado del capítulo 4 modificado por el artículo 31 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

CAPÍTULO 4.

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO.

ARTÍCULO 52. CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. <Artículo modificado por el artículo 32 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad en la fase de implementación consolidará el plan de ordenamiento social de la propiedad rural a partir de la información validada por la Subdirección de Planeación Operativa, proveniente del barrido predial masivo, el cual señalará por lo menos:

1. Identificación de número estimado de predios.

2. Tamaño y naturaleza.

3. Posibles Sujetos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

4. Identificación de los propietarios, ocupantes y poseedores.

5. Relación de potenciales sujetos de programas de acceso y formalización de tierras.

6. Identificación de zonas que constituyan restricciones y condicionantes para el ordenamiento territorial.

7. Estimación de tiempo, recursos humanos, físicos y financieros que se requieran para la fase de implementación.

8. Estrategia de mantenimiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 32 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Concordancias

Resolución ANT 915 de 2020

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 52. INFORMES CONSOLIDADOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES TÉCNICAS PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. Una vez se cuente con todos los informes técnicos jurídicos de los inmuebles objeto de barrido predial a nivel veredal o municipal según corresponda, la Dirección respectiva resumirá y condensará la información en un solo documento dirigido a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad en el que informará cuántos inmuebles requieren continuar a la siguiente etapa del Procedimiento Único, cuántos predios están en informalidad, tienen títulos insuficientes para acreditar dominio ajeno, incumplen la función social de la propiedad sin justa causa, cuántos sujetos de ordenamiento no tienen tierra o se encuentran en alguna situación problemática que exija solución conforme a las competencias de la ANT, como también qué recursos se requerirían para atender todos esos casos.

ARTÍCULO 53. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DE LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE OSPR PARA TITULACIÓN DE BALDÍOS, FORMALIZACIÓN PRIVADA Y ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS. En consonancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5o de la presente resolución, una vez finalizado el barrido predial parcialmente a nivel veredal según la escala de intervención planificada, alimentado el RESO con la información de los aspirantes a titulación de baldíos o formalización privada y elaborados los informes consolidados con los requerimientos de cada Dirección Técnica, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, actualizará el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural a nivel veredal, en asuntos distintos a los señalados en el artículo 54 de la presente resolución, para definir con mayor certeza los elementos necesarios para la ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de OSPR con base en las evidencias, pruebas y elementos recabados durante el barrido.

La actualización implicará, en caso de ser necesario, reformular metas, cronogramas, plazos y costos de la intervención.

ARTÍCULO 54. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DE LA FASE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE OSPR PARA ASIGNACIÓN DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA A QUIENES NO LA TIENEN BAJO NINGÚN CONCEPTO. En consonancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5o y el artículo 6o de la presente resolución, una vez finalizado el barrido predial, sobre la totalidad del área rural del Municipio, una vez alimentado el RESO con la información de los aspirantes de acceso a tierra, y elaborados los informes consolidados con los requerimientos de la Dirección de Acceso a Tierra, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, procederá a actualizar la información de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural para efectos de asignación de derechos sobre la tierra a quienes no la tienen bajo ningún concepto, con base en las evidencias, pruebas y elementos recabados durante el barrido para definir con mayor certeza los elementos necesarios para la ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de OSPR en lo que a estos temas respecta.

La actualización implicará, en caso de ser necesario, reformular metas, cronogramas, plazos y costos de la intervención en materia de acceso a tierra para quienes no la tienen bajo ningún concepto.

ARTÍCULO 55. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE ACCESO A TIERRA INSCRITOS EN EL RESO. <Artículo modificado por el artículo 33 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Para el caso de la asignación de derechos a las personas que no tienen tierra o la tienen de forma insuficiente, y que conforme a las reglas del RESO obtendrían los puntajes más altos en atención a lo dispuesto en los artículos 4o, 5o y 20 del Decreto-Ley 902 de 2017, la ANT identificará con qué recursos y tierras cuenta para atender las necesidades de acceso a tierra de esas personas. Se atenderán de manera prioritaria los sujetos que no tienen tierra.

En estos casos, la ejecución del Subsidio Integral de Tierras (SIAT) o la entrega de tierras del Fondo, se alimentará de la información de todos los aspirantes para adjudicar de acuerdo al puntaje obtenido y de acuerdo con los recursos con los que cuenta la Agencia Nacional de Tierras.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 33 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 55. Para el caso de la asignación de derechos a las personas que no tienen tierra bajo ningún concepto principalmente, o la tienen de forma insuficiente, y que conforme a las reglas del RESO fueron inscritos y obtuvieron los puntajes más altos en atención a lo dispuesto en los artículos 4o, 5o y 20 del Decreto-ley número 902 de 2017, la ANT en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad identificará con qué recursos y tierras cuenta para atender las necesidades de acceso a tierra de esas personas de forma decreciente hasta agotar todos los recursos disponibles y atender con ellos la mayor cantidad posible de beneficiarios. En estos casos, la ejecución del Subsidio Integral de Tierras (SIAT) o la entrega de tierras del Fondo, deberá esperar la finalización del barrido de todo el Municipio para poder alimentar el RESO con todos los aspirantes y repartir los recursos o tierras de forma equitativa.

En caso de no existir aún tierras en el fondo para la Reforma Rural Integral para la respectiva zona focalizada al momento de cuantificar los recursos, dicho ejercicio se hará únicamente teniendo en cuenta los recursos monetarios para entrega de subsidio de tierras y solo se señalarán como beneficiarios para efectos del trámite administrativo de asignación de derechos a quienes se les pueda garantizar los recursos u opciones de tierra.

Una vez comprometidos todos los recursos monetarios para el otorgamiento de Subsidio de Acceso a Tierra a las personas que obtuvieron los mayores puntajes, quienes continúen en orden descendente en la lista del RESO quedarán pendientes de la asignación de derechos sobre la tierra y su acceso a ella dependerá del avance del Procedimiento Único de Ordenamiento Social

de la Propiedad en lo referido a acopio de tierras para el fondo, o la asignación de nuevos recursos para otorgamiento de SIAT en la zona.

Únicamente cuando ya se cuente con nuevos recursos o se haya finalizado por completo algún procedimiento encaminado a nutrir de tierras el fondo y se cuente materialmente con el inmueble, se podrá iniciar respecto de aquellos aspirantes, al trámite administrativo de asignación de derechos.

ARTÍCULO 56. RATIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE VENTA Y CONDICIONES DE LOS INMUEBLES DEL RIR. Previo a la apertura de los trámites administrativos de asignación de derechos sobre la tierra, y como elemento necesario para planificar la intervención en materia de acceso a tierra, la ANT antes de actualizar el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad, contactará a los potenciales vendedores cuyos inmuebles para ese momento se hallen inscritos en el Registro de Inmuebles Rurales RIR para verificar su intención de venta por los valores preacordados en el momento del barrido predial.

Se contactará al propietario por vía telefónica o cualquier medio que evite nuevamente la visita predial, para ratificar su intención de venta. Adicionalmente se consultará un certificado de libertad y tradición para verificar que aún el inmueble se encuentre libre de gravámenes, limitaciones al dominio o anotaciones que den cuenta de actuaciones que en caso de prosperar amenacen la propiedad del inmueble.

CAPÍTULO 5.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA, FORMALIZACIÓN PRIVADA Y DEMÁS PRETENSIONES AGRARIAS.

Notas de Vigencia

- Enunciado del capítulo 3 modificado por el artículo 34 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

CAPÍTULO 5.

FASE ADMINISTRATIVA - SEGUNDA PARTE.

Procedimientos Administrativos de Asignación, Reconocimiento de Derechos Sobre la Tierra, Formalización Privada y demás Pretensiones Agrarias

ARTÍCULO 57. ELECCIÓN DE LAS FUENTES DE ACCESO A TIERRA. <Artículo modificado por el artículo 35 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Se entienden por formas de acceso a tierras, el subsidio integral de tierras, el crédito especial de tierras

de que trata el artículo 35 del Decreto-Ley 902 de 2017 y las tierras susceptibles de ser adjudicadas existentes en el Fondo para la Reforma Rural Integral. La ANT consultará a los posibles beneficiarios la forma de acceso a tierras de su interés de conformidad con los recursos disponibles. Si conforme a lo identificado en el PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL, no existen tierras en el Fondo para la Reforma Rural Integral disponibles para generar acceso a tierra, se informará al beneficiario que puede optar por aspirar al otorgamiento del SIAT, de acuerdo con los recursos disponibles para dicho programa. En caso de que el particular decida continuar con esta modalidad de acceso a tierras se seguirá con lo dispuesto en el reglamento establecido para el efecto.

PARÁGRAFO. El Subsidio integral de acceso a tierras establecido en el artículo 29 del Decreto-Ley 902 de 2017 contará con su propio reglamento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 35 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 57. Existiendo recursos para otorgamiento de subsidio de tierras y tierras listas para ser adjudicadas del Fondo para la Reforma Rural Integral, la ANT elegirá la fuente conforme a las elecciones individuales de los beneficiarios que obtuvieron los mayores puntajes y fueron preseleccionados por existir recursos o tierras disponibles para ellos.

ARTÍCULO 57A. ACEPTACIÓN DE PREDIOS DEL FONDO. <Artículo modificado por el artículo 36 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La ANT asignará los predios disponibles del Fondo a los potenciales beneficiarios, en función de los puntajes. Dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la asignación, los potenciales beneficiarios deberán suscribir acta de aceptación. Si se negaren a aceptar la asignación o no se presentaren para suscribir el acta, se entenderá que desisten de su aspiración.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 36 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

ARTÍCULO 58. APERTURA DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017 señalará con precisión al potencial beneficiario, la identificación física y jurídica del predio seleccionado y con fundamento en la información recolectada del informe técnico-jurídico y demás pruebas recaudadas ordenará:

1. Inscribir los potenciales beneficiarios en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), con indicación de su categoría y calificación.

2. Abrir la actuación administrativa.

3. Notificar el acto administrativo al potencial beneficiario en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

4. La comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la Unidad de Gestión Territorial, para efectos de un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 37 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 58. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-ley número 902 de 2017, para el caso de personas que no tienen tierra bajo ningún concepto principalmente y secundariamente quienes la tienen de forma insuficiente, señalará con precisión al potencial beneficiario y ordenará:

1. Contactarlo nuevamente para obtener declaración juramentada de que las condiciones de elegibilidad que fueron identificadas al momento de la visita predial que sirvió de soporte para su ingreso al RESO e incluso las condiciones existentes al momento del ingreso a dicho registro, no hayan cambiado de tal forma que en caso de actualizarlas pierda la prelación o derecho a la asignación de Tierras.

En caso de que no haya transcurrido más de un (1) mes entre el momento de la última verificación para efectos de ingreso al RESO y el momento de dar apertura a la actuación administrativa de que trata el presente artículo no será necesario verificar si las condiciones posingreso al RESO han cambiado.

2. Verificar que persiste el interés del potencial beneficiario de recibir una solución de tierra a través de alguno de los instrumentos disponibles.

3. En caso de que existan inmuebles disponibles para compra en el RIR, solicitarle que seleccione tentativamente varias opciones asignándoles un orden de interés, si opta por el Subsidio Integral de Acceso a Tierra o si solo procede aquel.

4. En caso de que existan inmuebles del Fondo para la Reforma Rural Integral disponibles para adjudicación, solicitarle que seleccione tentativamente varias opciones asignándoles un orden de interés, si opta por esta opción.

5. Notificar el acto administrativo en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO 1o. Cuando al momento de iniciar el trámite administrativo de asignación de derechos conforme a lo identificado en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad, no existan tierras en el Fondo para la Reforma Rural Integral disponibles para generar acceso a tierra, y sea entonces pertinente dar inicio a la actuación administrativa solo para otorgamiento del SIAT, no se ordenará lo dispuesto en el numeral 4 del presente artículo.

PARÁGRAFO 2o. Se aprovechará la notificación personal del acto administrativo de apertura para al mismo tiempo cumplir las órdenes emitidas en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. En la comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, se podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la Unidad de Gestión Territorial, eligiendo un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

La comunicación que indique la obligación de comparecer a notificarse de ser posible será telefónica o a través de medios idóneos que garanticen comunicación con el potencial beneficiario y de ser posible eviten el envío de oficios.

ARTÍCULO 59. JORNADA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL. <Artículo modificado por el artículo 38 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En cumplimiento de lo ordenado en el acto administrativo de apertura de asignación de derechos sobre la tierra, la ANT realizará jornadas en las que, de manera masiva, citará a los potenciales beneficiarios de acceso a tierra para:

1. Notificarlos personalmente del inicio del trámite administrativo de asignación de derechos.

2. En el evento que el interesado no asista se procederá a la notificación por aviso, a fin de que se surta la publicidad del acto en los términos establecidos en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que la modifique o sustituya.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 38 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 59. JORNADA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE HECHO E INDAGACIONES A LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS. En cumplimiento de lo ordenado en el acto administrativo de apertura de asignación de derechos sobre la tierra, la ANT realizará jornadas en las que de manera masiva y con la mayor cantidad de casos disponibles citará a los potenciales beneficiarios de acceso a tierra para:

1. Notificarlos del inicio del trámite administrativo de asignación de derechos.

2. Verificar que las condiciones de elegibilidad del potencial beneficiario no hayan cambiado desde el momento de su inscripción al RESO. Para este propósito previo a la jornada la ANT consultará fuentes de información institucionales como Sisbén, DIAN, y la Superintendencia de Notariado y Registro, no obstante, hará firmar en la jornada una declaración juramentada del futuro beneficiario.

3. Verificar su intención de recibir el Subsidio Integral de Acceso a Tierra o un inmueble del Fondo para la Reforma Rural Integral, aclarando para el primer caso el monto máximo del subsidio y las condiciones y obligaciones que de él se derivan, y para el segundo, la cantidad, características, ubicación y demás elementos de interés de los predios dispuestos a ser adjudicados.

De igual manera se aclarará, que en caso de optar por recibir un inmueble del Fondo o del RIR, que la elección individual de ellos respetará el orden de puntuación del RESO, de forma que en caso de que dos o más personas elijan el mismo inmueble, se le asignará a aquel que mayor puntaje haya obtenido y así en orden decreciente, luego cada potencial beneficiario deberá elegir varias opciones de inmuebles que sean de su interés asignándoles un orden en atención a su grado de interés, pero solo se les asignará aquel que quede disponible tras cruzar las elecciones de los demás beneficiarios y sus puntajes del RESO.

4. Proceder a elegir sus múltiples opciones de predio en orden de interés una vez hechas las aclaraciones del caso e informado y documentado a los potenciales beneficiarios cuáles son los inmuebles disponibles.

Si del lisiado total de inmuebles disponibles para adjudicación, el potencial beneficiario no presenta múltiples opciones que los cubra a todos, y los inmuebles de su interés son asignados a aspirantes con mayores puntajes, se entenderá que desiste de continuar con trámite administrativo de asignación de derechos sobre la tierra.

Las personas que no asistan a la jornada de notificación personal, verificación de los supuestos de hecho e indagaciones a los potenciales beneficiarios, serán notificadas conforme a las reglas generales de la Ley 1437 de 2011, y para el cumplimiento de lo ordenado en los numerales 3 y 4 del presente artículo, deberán comparecer a la Unidad de Gestión Territorial correspondiente.

ARTÍCULO 59A. CIERRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS. <Artículo adicionado por el artículo 39 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo

texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la exposición pública de resultados, la ANT proferirá el acto administrativo de cierre del procedimiento en el cual ordenará la adjudicación en favor del beneficiario. En la resolución de adjudicación se identificará el bien, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para su enajenación, las causales de incumplimiento, la referencia expresa a la potestad de la ANT para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8o del Decreto-Ley 902 de 2017 y demás aspectos propios del correspondiente régimen jurídico de propiedad rural.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 39 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

ARTÍCULO 59B. VARIACIÓN DE ASIGNATARIOS. <Artículo adicionado por el artículo 40 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de que se haya recibido información adicional que acredite que los supuestos de hecho de inscripción en el RESO de los aspirantes hayan variado, de tal manera que no sean elegibles para asignación de derechos, en el acto de cierre se negará la adjudicación y se ordenará excluir al aspirante del RESO y poner el predio a consideración de otros aspirantes.

Si se hubieren presentado oposiciones serán decididas en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 40 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

ARTÍCULO 60. ASIGNACIÓN DE INMUEBLES DEL FONDO. Una vez finalizada la jornada de notificación personal, verificación de los supuestos de hecho e indagaciones a los potenciales beneficiarios, la ANT tendrá la información de cuáles son los inmuebles de interés de los potenciales beneficiarios y procederá a asignar los predios a adjudicar priorizando las elecciones de quienes tengan los mayores puntajes en el RESO.

Quienes hayan elegido en primer lugar un inmueble que haya sido asignado a otro aspirante con mayor puntaje, solo podrán recibir su segunda opción si esta a su vez tampoco fue elegida por otro aspirante con mayor puntaje, y así sucesivamente en orden decreciente.

ARTÍCULO 61. ELECCIÓN DEL ASPIRANTE DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE SIAT. En caso de que el potencial beneficiario elija o solo se le ofrezca el SIAT, y una vez verificados los supuestos de hecho contemplados en el artículo anterior, en el evento en que no hayan cambiado las condiciones de elegibilidad del potencial beneficiario, ratifique su interés de recibir el subsidio y si existen inmuebles dispuestos a ser enajenados por su propietario e inscritos en el RIR, se consultará la voluntad del interesado de recibir los recursos para continuar en la búsqueda

de un predio rural, como lo establecen los numerales 1 y 5 del artículo 32 del Decreto-ley número 902 de 2017, o adquirir alguno de los inmuebles ofertados en ese momento para lo cual se aplicará el mismo procedimiento de selección señalado en el artículo anterior.

En adelante se surtirán los procedimientos y fases que en su momento se determinen en el decreto que reglamente el SIAT.

ARTÍCULO 62. COMUNICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL INMUEBLE. Una vez asignado el inmueble respectivo se le informará al interesado, quien contará con un término de ocho (8) días calendario para conocer el inmueble y aceptar por escrito en el formato que la ANT disponga para el efecto. En caso de ser posible, la ANT acompañará al potencial beneficiario en su visita al inmueble y en el mismo acto obtener la aceptación.

Si dentro del término estipulado para conocer el inmueble el interesado no realiza la visita y no manifiesta su aceptación, se prorrogará el término según se acuerde con él, sin que en ningún caso se exceda de 30 días calendario. Si finalizado dicho término persiste su omisión sin justificación alguna, se entenderá que desiste de su intención frente al inmueble y será asignado a otro aspirante. En este último caso, solo podrá acceder a los inmuebles respecto a los cuales nadie haya manifestado interés.

ARTÍCULO 63. PROCEDIMIENTO EN CASO DE NEGATIVA DEL ASPIRANTE A RECIBIR EN ADJUDICACIÓN EL INMUEBLE ASIGNADO. Si una vez enterado el potencial beneficiario de cuál fue el inmueble que tras los cruces y priorizaciones del RESO le correspondió de su listado de opciones, se negare a aceptar el inmueble o si el rechazo se produce al momento de visitarlo, solo podrá sustituirlo por otro inmueble que no haya sido elegido por ningún otro aspirante. Si no se da el caso, y su calificación en el RESO y disponibilidad de recursos y cupos lo permite, se le podrá sustituir por un inmueble del RIR aún no elegido por nadie o como última instancia por los recursos para el Subsidio Integral de Acceso a Tierra.

ARTÍCULO 64. SOCIALIZACIÓN EN EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS. Una vez ratificada la elección de los inmuebles que serán adjudicados, la ANT programará una jornada de exposición pública de resultados de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto-ley número 902 de 2017 en el cual informará a la comunidad que se presente, los resultados del proceso de acceso a tierras, indicando quiénes fueron los beneficiarios y qué inmuebles serán adjudicados.

Si en el desarrollo de la audiencia alguna persona se opone a la adjudicación de un inmueble a favor de un potencial beneficiario, únicamente podrá fundar su oposición en que este último haya engañado a la ANT para procurar la obtención de su puntaje e inscripción al RESO para lo cual deberá aportar prueba sumaria, lo cual obligará a suspender la adjudicación del respectivo predio, por un término no superior a 15 días calendario para verificar si las afirmaciones son ciertas o no.

ARTÍCULO 65. INFORME TÉCNICO JURÍDICO DEFINITIVO. Finalizada la exposición pública de resultados, y analizadas las eventuales oposiciones se expedirá el informe técnico jurídico definitivo señalado en el artículo 83 de la presente resolución.

ARTÍCULO 66. CIERRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACCESO A TIERRA. En caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 5 días siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario el cual incluirá sus obligaciones y limitaciones al dominio en los términos del artículo 8o del Decreto-ley número 902 de 2017.

ARTÍCULO 67. APERTURA DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. <Artículo modificado por el artículo 41 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017, para el caso de personas que ocupan baldíos de la nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del mismo decreto, señalará lo siguiente:

1. La inscripción en el RESO del potencial beneficiario, si reúne los requisitos establecidos para el acceso, y su categorización.

2. El régimen sustancial más favorable para el beneficiario, a partir de la valoración de la información técnica y jurídica recabada durante el barrido.

3. La identificación física del bien y la jurídica.

4. La orden de notificar el acto administrativo al potencial beneficiario en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Cuando no se pueda surtir la notificación personal, se realizará por aviso en los términos del artículo 69 de esta misma ley.

5. La orden de comunicar a terceros indeterminados sobre la actuación, con la inserción en la página electrónica de la entidad o en la cartelera de la Alcaldía Municipal de la circunscripción territorial en donde se encuentra ubicado el predio acompañado de un resumen del acto administrativo de apertura que contenga la identificación del potencial beneficiario, del predio y del procedimiento único iniciado.

6. La identificación del potencial beneficiario, del predio y del procedimiento único iniciado.

7. Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-Ley 902 de 2017”.

PARÁGRAFO 1o. La apertura del folio de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad a nombre de la nación tiene el carácter publicitario y no modifica la situación jurídica del inmueble.

PARÁGRAFO 2o. La publicidad a terceros indeterminados contendrá al menos, la siguiente información:

a) El nombre del peticionario y su identificación;

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación;

c) La extensión superficiaria del predio;

d) El término del que disponen para comparecer a hacer valer sus derechos para la realización del periodo probatorio y presentar sus pruebas para que sean debatidas en él.

PARÁGRAFO 3o. No será necesario acudir de manera previa al procedimiento de clarificación de la propiedad para adjudicar los predios que según el informe técnico-jurídico tienen la calidad de baldíos de la nación, sin perjuicio de la procedencia de la nulidad agraria prevista en el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 41 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 5 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 108 de 2018:

ARTÍCULO 67. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto 902 de 2017 para el caso de personas que ocupan baldíos de la nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas señaladas en los artículos 26 y 27 del mismo Decreto, señalara con precisión al potencial beneficiario y ordenará:

1) Realizar la notificación del acto administrativo en los términos del artículo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011.

2) Dar publicidad a terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la ley 1437 de 2011

3) Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria a Nombre de la Nación cuando el inmueble no lo tiene aún y ordenar a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos el registro del acto administrativo

4) La inscripción de la medida del Procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad, indicando el asunto especifico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del Inmueble.

5) Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto 902 de 2017.

PARÁGRAFO 1o. La apertura del folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación tiene carácter publicitario y no modifica la situación jurídica del inmueble.

PARÁGRAFO 2o. La publicidad a terceros indeterminados contendrá la siguiente información

a) El nombre del peticionario y su identificación;

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación

c) La extensión superficiaria del predio;

d) Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes: y.

e) El término del que disponen para comparecer a hacer valer sus derechos para obligar a la realización del periodo probatorio y presentar sus pruebas para que sean debatidas en él.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 67. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-ley número 902 de 2017, para el caso de personas que ocupan baldíos de la Nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del mismo decreto, señalará con precisión al potencial beneficiario y ordenará:

1. Verificar que las condiciones de elegibilidad que fueron identificadas al momento de la visita predial que sirvió de soporte para su ingreso al RESO e incluso las condiciones existentes al momento de ingreso a dicho registro, no hayan cambiado de tal forma que en caso de actualizarlas cambie de categoría o deba pagar contraprestaciones distintas.

En caso de que no haya transcurrido más de un (1) mes entre el momento de la última verificación para efectos de ingreso al RESO y el momento de dar apertura a la actuación administrativa de que trata el presente artículo no será necesario verificar si las condiciones posingreso al RESO han cambiado.

2. Realizar la notificación del acto administrativo en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

3. Dar publicidad a terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

4. Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación cuando el inmueble no lo tiene aún, conforme a lo dispuesto en el Decreto número 1858 de 2015.

5. La inscripción de la medida del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

6. Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-ley número 902 de 2017.

PARÁGRAFO. La publicidad a terceros indeterminados contendrá la siguiente información:

a) El nombre del peticionario y su identificación;

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación

c) La extensión superficiaria del predio;

d) Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes; y,

e) El término del que disponen para comparecer a hacer valer sus derechos para obligar a la realización del periodo probatorio y presentar sus pruebas para que sean debatidas en él.

ARTÍCULO 68. NOTIFICACIÓN PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES. <Artículo modificado por el artículo 42 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación personal del acto administrativo de apertura se hará en jornadas masivas que se convocarán por el medio más efectivo, entre ellos, vía telefónica, perifoneo, radio, entre otros.

Las personas que no comparezcan a la jornada masiva de notificación personal se notificarán en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 42 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 108 de 2018:

ARTÍCULO 68. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación personal del acto administrativo de apertura se hará en jomadas masivas como las señaladas en el artículo 59 de la presente Resolución. En la comunicación que Indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, se podrá Indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la unidad de Gestión Territorial, eligiendo un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

La comunicación que Indique la obligación de comparecer a notificarse de ser posible será telefónica o a través de medios Idóneos que garanticen comunicación con el potencial beneficiario y procuren evitar el envío de oficios.

Para estos casos, en las jomadas masivas de notificación no aplicara la obtención de la declaración juramentada de que no han cambiado las condiciones de elegibilidad que permitieron el ingreso al RESO

Cuando la notificación de apertura se realice en zonas no focalizadas, no será obligatorio el desarrollo de jornadas masivas de notificación.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 68. Se aprovechará la notificación personal del acto administrativo de apertura para

al mismo tiempo cumplir la orden emitida en el numeral 1 del artículo anterior. En la comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, se podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la Unidad de Gestión Territorial eligiendo un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

La comunicación que indique la obligación de comparecer a notificarse de ser posible será telefónica o a través de medios idóneos que garanticen comunicación con el potencial beneficiario y de ser posible eviten el envío de oficios.

La notificación y la obtención de la declaración juramentada de que no han cambiado las condiciones de elegibilidad que permitieron el ingreso al RESO, se harán en jornadas como las señaladas en el artículo 59 y también aplicará lo ahí establecido frente a la ya señalada verificación de condiciones.



ARTÍCULO 69. COMPARECENCIA DE TERCEROS INDETERMINADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE BALDÍOS O FORMALIZACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS. <Artículo modificado por el artículo 43 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los terceros indeterminados que se crean con derechos sobre el terreno baldío pretendido en adjudicación por los potenciales beneficiarios o quienes aduzcan tener derechos reales sobre el predio de naturaleza privada, podrán comparecer y hacer valer sus oposiciones en cualquier momento hasta antes del cierre mediante acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Cuando el opositor alegare que el inmueble objeto de la solicitud de adjudicación es de propiedad privada, o reclame dominio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exige el inciso 2 del ordinal 1 del artículo 48 de la Ley 160 de 1994. En caso de no aportar dicha prueba sumaria se tendrá por no presentada la oposición.

En los casos en que para definir la oposición se requiera de pruebas adicionales a las aportadas por el opositor, la ANT podrá dar apertura a un periodo probatorio que no podrá superar el término de diez (10) días hábiles, prorrogables máximo por cinco (5) días hábiles.

La ANT resolverá las oposiciones en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento y contra este acto procederán los recursos y acciones previstas en la Ley 1437 de 2011.

Cuando la oposición se formule por haberse iniciado contra el peticionario acciones penales, de policía o civiles dirigidas a proteger la ocupación del opositor, previa comprobación de la vigencia de los procesos respectivos, la ANT ordenará suspender el procedimiento administrativo de titulación, hasta cuando se encuentre ejecutoriada la providencia que decida el proceso que motivó la suspensión y a requerimiento del interesado y en todo caso por un término máximo de dos (2) años. Trascurrido el término de dos (2) dispondrá el archivo del expediente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 43 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 69. Los terceros indeterminados que se crean con derechos sobre el terreno baldío pretendido en adjudicación por el potencial beneficiario o quien aduzca tener derechos reales sobre el predio de naturaleza privada, podrán comparecer y hacer valer sus oposiciones en cualquier momento hasta antes del cierre mediante acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

El opositor deberá aportar prueba sumaria en la que se funde su oposición, y será valorada por la ANT, dando apertura para el efecto a un periodo probatorio, cuando no exista ninguna otra circunstancia que ameritara ordenarlo, o en medio de él, cuando ya se hubiera decretado.

Si la oposición se realiza en la exposición pública de resultados, o hasta antes del cierre de la fase administrativa, la ANT resolverá su oposición en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento procediendo contra este acto los recursos y acciones previstas en el Decreto-ley número 902 de 2017.

Si dentro de los 10 días hábiles siguientes a la realización de las comunicaciones y publicaciones no comparece ningún opositor, se presumirá en principio que no existe oposición alguna y si no hay otra razón que lo amerite, se podrá obviar el periodo probatorio.

ARTÍCULO 70. REQUISITOS DE CIERTAS OPOSICIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS SOBRE BALDÍOS. Cuando el opositor alegare que el inmueble objeto de la solicitud de adjudicación es de propiedad privada, o reclame dominio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exige el inciso 2 del ordinal 1 del artículo 48 de la Ley 160 de 1994. En caso de no aportar dicha prueba sumaria se dará por descartada la oposición, pero en caso de aportarla, obligará a la realización de una inspección ocular para verificar si el predio pedido en adjudicación se halla incluido dentro de los linderos de aquel cuya propiedad demanda el opositor, así como a establecer otros hechos o circunstancias de las que pueda deducirse su dominio.

Si de los documentos aportados por el opositor y demás pruebas practicadas no llegare a acreditarse dominio ajeno, conforme a lo exigido en la norma citada en el inciso anterior, se rechazará la oposición y se continuará el procedimiento.

Cuando la oposición se formule por haberse iniciado contra el peticionario acciones penales, de policía o civiles dirigidas a proteger la ocupación del opositor, previa comprobación de la vigencia de los procesos respectivos, la ANT ordenará suspender el procedimiento administrativo de titulación, hasta cuando se encuentre ejecutoriada la providencia que decida el proceso que motivó la suspensión y a requerimiento del interesado. En caso contrario, se dispondrá el archivo del

expediente.

ARTÍCULO 71. PRÁCTICA DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE BALDÍOS. Cuando se presente oposición en los plazos señalados en el artículo 69, de quien alegue que el predio solicitado en adjudicación no es baldío, o aún no haya sido posible establecer con total certeza dicha condición, o se pongan en entredicho las calidades del potencial beneficiario para poder recibir la titulación, o se desconozca alguna de las situaciones contempladas en el siguiente artículo, mediante acto administrativo se ordenará la práctica de un periodo probatorio que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles.

En caso de que no se dé ninguna de las circunstancias previstas en el presente artículo, y si se estima innecesario, se podrá omitir el periodo probatorio y se podrá pasar directamente a la fase de exposición pública de resultados.

ARTÍCULO 72. INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER RESOLVER LA ADJUDICACIÓN DEL PREDIO BALDÍO. <Artículo modificado por el artículo 44 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se pretenda el reconocimiento de derechos sobre predio un baldío de la nación, y sus ocupantes pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 902 de 2017, se podrá omitir la práctica de una inspección ocular dentro del periodo probatorio, siempre que con la información obtenida en el barrido predial señalado en el artículo 66 del mismo Decreto, la ANT tenga plenamente identificados:

a) Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento, municipio, inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre;

b) Los linderos del predio, con sujeción a los puntos cardinales, y el nombre e identificación de los colindantes suministrados por el peticionario, confrontándolos con el plano que para el efecto se haya elaborado o aportado con las especificaciones técnicas propias del catastro multipropósito y, en todo caso, verificándolos directamente en el curso de la diligencia;

c) La clase de explotación del predio, señalando si esta es adelantada directamente por el peticionario, con indicación de la porción ocupada o cultivada y la inculta, su grado de conservación, naturaleza de los cultivos, edificaciones, número y clase de ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás mejoras instaladas en el fundo;

d) La explotación adelantada en el inmueble, para determinar si corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la diligencia;

e) El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio se determinará teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el período vegetativo de los cultivos permanentes y semipermanente, la composición del hato ganadero, el registro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos mejorados, y otros medios de orden técnico que sean pertinentes;

f) La clase de bosques, las fuentes hídricas, si existen áreas de protección legal asociadas a zonas de

ronda o nacimientos, si es necesario repoblar o conservar los bosques existentes, o si estos pueden aprovecharse de conformidad con las disposiciones vigentes;

g) Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, así como las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales; determinar. Se deberá determinar, además, si en el predio hay bosques de páramo, de galería, morichales, humedales, ciénagas, marismas y otros espacios bióticos;

h) Si el predio tiene márgenes o laderas con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45°);

i) Si el predio está comprendido o no en una zona reservada por entidad pública, o por la ley; o se hallan establecidas comunidades indígenas, o destinadas a la titulación colectiva en beneficio de las comunidades negras, según las prescripciones de la Ley 70 de 1993 y sus reglamentos;

j) Si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones nacionales, o madreviejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas de propiedad nacional, así como también si se halla dentro de las reservas territoriales del Estado, o comprende bienes de uso público;

k) Si el predio se halla situado dentro del radio de inadjudicabilidad alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables;

l) Si el predio tiene restricciones al uso asociadas a figuras de protección ambiental de cualquier orden y si el suelo donde se ubica está clasificado con uso agropecuario o similares;

m) Si el predio se encuentra dentro de las zonas seleccionadas o reservadas por entidades públicas, para adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social para la región o el país;

n) Si se hallan establecidas en el fundo personas diferentes al peticionario, indicando a qué título y la extensión aproximada que ocupan;

o) Si existe presencia de comunidades étnicas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 44 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 72. Cuando se pretenda el reconocimiento del derecho de propiedad en favor de personas que ocupan baldíos de la Nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del Decreto-ley número 902 de 2017, se podrá omitir la práctica de una inspección ocular dentro del periodo probatorio, sin con la información obtenida en el barrido predial señalado en el artículo 66 del

mismo decreto, la ANT ya tiene plenamente identificados:

a) Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento municipio, inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre;

b) Los linderos del predio, con sujeción a los puntos cardinales, y el nombre e identificación de los colindantes suministrados por el peticionario, confrontándolos con el plano que para el efecto se haya elaborado o aportado con las especificaciones técnicas propias del catastro multipropósito y, en todo caso, verificándolos directamente en el curso de la diligencia;

c) La clase de explotación del predio, señalando si esta es adelantada directamente por el peticionario, con indicación de la porción ocupada o cultivada y la inculta, su grado de conservación, naturaleza de los cultivos, edificaciones, número y clase de ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás mejoras instaladas en el fundo;

d) La explotación adelantada en el inmueble, para determinar si corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la diligencia;

e) El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio se determinará teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el período vegetativo de los cultivos permanentes y semipermanente, la composición del hato ganadero, el registro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos mejorados, y otros medios de orden técnico que sean pertinentes;

f) La clase de bosques, señalando si pertenecen a especies maderables de valor comercial si las fuentes de corrientes de agua son objeto de la protección vegetal exigida por la ley; si es necesario repoblar o conservar los bosques existentes, o si estos pueden aprovecharse de conformidad con las disposiciones vigentes;

g) Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, así como las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales; determinar, además, si en el predio hay bosques de páramo, de galería, morichales, humedales, ciénagas, marismas y otros espacios bióticos;

h) Si el predio tiene márgenes o laderas con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45o);

i) Si el predio está comprendido o no en una zona reservada por el instituto u otra entidad pública, o por la ley; o se hallan establecidas comunidades indígenas, o se hayan destinadas a la titulación colectiva en beneficio de las comunidades negras, según las prescripciones de la Ley 70 de 1993 y sus reglamentos;

j) Si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones nacionales, o madreviejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas de propiedad nacional, así como también si se halla dentro de las reservas territoriales del Estado, o comprende bienes de uso público;

k) Si el predio se halla situado dentro del radio de inadjudicabilidad alrededor de las zonas donde

se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables;

l) Si el predio es aledaño a Parques Nacionales Naturales constituidos;

m) Si el predio se encuentra dentro de las zonas seleccionadas o reservadas por entidades públicas, para adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social para la región o el país;

n) Si se hallan establecidas en el fundo personas diferentes al peticionario, indicando a qué título y la extensión aproximada que ocupan;

o) Si existe presencia de comunidades indígenas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio;

ARTÍCULO 73. ARCHIVO O SUSPENSIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE. <Artículo modificado por el artículo 45 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Si dentro de las diligencias realizadas por la ANT, se encuentra que la explotación económica adelantada sobre el terreno baldío no corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la inspección ocular, se dejará constancia de ello en el expediente y se ordenará suspender el procedimiento, hasta cuando el peticionario adopte un plan gradual de reconversión, con el acompañamiento institucional pertinente.

Si existiere controversia o duda por parte de la ANT, relacionada con el cumplimiento de las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales, se solicitará el concepto respectivo a la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el nivel nacional o regional, según corresponda. Si este fuere desfavorable, se archivará el expediente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 45 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 73. Si dentro de las diligencias realizadas por la ANT, bien sea en desarrollo del barrido predial o en la etapa probatoria que eventualmente se desarrolle, se encuentra que la explotación económica adelantada sobre el terreno baldío no corresponda a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la inspección ocular, se dejará constancia de ello en el expediente y se ordenará suspender el procedimiento, hasta cuando el peticionario adopte un plan gradual de reconversión.

Si existiere controversia o duda por parte de la ANT, relacionada con el cumplimiento de las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales, se solicitará el concepto respectivo a la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el nivel regional. Si el concepto de la entidad correspondiente del Sistema Nacional Ambiental fuere desfavorable, se archivará el expediente.

ARTÍCULO 74. INFORME TÉCNICO JURÍDICO DEFINITIVO. Finalizada la exposición pública de resultados, y analizadas las eventuales oposiciones se expedirá el informe técnico jurídico definitivo señalado en el artículo 83 de la presente resolución.

ARTÍCULO 75. CIERRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE TIERRAS BALDÍAS. <Artículo modificado por el artículo 46 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la exposición de resultados, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario. Este término podrá ser ampliado en caso de que presenten oposiciones en la audiencia pública de resultados y se requiera abrir el periodo probatorio de diez (10) días señalado en el artículo 51 de la presente resolución.

El Acto Administrativo que resuelve de fondo, deberá decidir sobre las oposiciones en caso de que se hayan presentado. En caso que se declaren infundadas se ordenará la adjudicación, y en caso de que prosperen se negará la adjudicación y se remitirá el expediente a la dependencia competente. Contra este acto procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Cuando se hubiere probado en desarrollo del procedimiento que el inmueble no es baldío, se ordenará la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la nación. Cuando se hubiere probado la naturaleza baldía pero no se determine la procedencia de la adjudicación en favor del aspirante, se dará traslado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación para cancelar la medida publicitaria de apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.

Si para el momento de expedición del acto administrativo de cierre del procedimiento, aún no se ha dado apertura al folio de matrícula inmobiliaria, dicho acto impartirá las órdenes sobre el particular, ratificando lo ordenado en el acto de apertura.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 46 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 108 de 2018:

ARTÍCULO 75. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la Agencia Nacional de Tierras proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario el cual incluirá sus obligaciones y limitaciones al dominio en los términos del artículo 8o del Decreto 902 de 2017

Cuando se hubiere probado en desarrollo del proceso que el Inmueble no es baldío, se ordenará la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación Cuando se hubiere probado la naturaleza baldía pero no se determine la procedencia de la adjudicación en favor del aspirante, el folio de matrícula será cancelado, pero se dará traslado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación para realizar el procedimiento señalado en el Decreto 1858 de 2015, para lo cual se remitirá la información y documentación relevante que haya sido acopiada en el procedimiento de reconocimiento de derechos, para efectos de agilizar dicho trámite

Si para el momento de expedición del acto administrativo de cierre del procedimiento, aún no se ha dado apertura al folio de matrícula inmobiliaria, dicho acto impartirá las órdenes sobre el particular ratificando lo ordenado en el acto de apertura.

Cuando el Proceso Único de Ordénamelo Social de la Propiedad para reconocimiento de derechos sobre tierras baldías se desarrolle en zonas no focalizadas, no se realizará la exposición pública de resultados y el término de 15 días de que trata el presente artículo se contará a partir del vencimiento del termino para realizar oposiciones conforme al artículo 69 de la presente resolución.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 75. En caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 5 días siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario el cual incluirá sus obligaciones y limitaciones al dominio en los términos del artículo 8o del Decreto-ley número 902 de 2017.

ARTÍCULO 75A. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 47 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En la

resolución de adjudicación se identificará el bien, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para la enajenación, las causales de incumplimiento, la referencia expresa a la potestad de la ANT para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8o del Decreto-Ley 902 de 2017 y demás aspectos que sean propios de este régimen jurídico de propiedad rural.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 47 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

ARTÍCULO 76. APERTURA DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LOS ASUNTOS DE FORMALIZACIÓN PRIVADA Y ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS. <Artículo modificado por el artículo 48 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 70 del Decreto-Ley 902 de 2017, para los asuntos contemplados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 58 ibídem, contendrá lo siguiente:

1. La inscripción del potencial beneficiario en el RESO y su categorización para asuntos de formalización privada o, en los casos de administración de derechos, la inscripción de quienes ostentan en el derecho de propiedad en el módulo de pretensiones y procesos agrarios, con fines estadísticos.

2. La identificación física y jurídica del predio.

3. La identificación de quienes ostentan en el derecho de propiedad de conformidad con los asientos registrales del bien.

4. La orden de notificar el acto administrativo al particular interesado o afectado en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Cuando la pretensión o una de las pretensiones del Procedimiento Único sea el deslinde, se entenderán como interesados los titulares de derechos reales principales que figuren en el registro de instrumentos públicos de los predios colindantes.

5. La orden de comunicar al Ministerio Público para que, si lo estima procedente, se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-Ley 902 de 2017.

6. La orden de comunicar a terceros indeterminados sobre la actuación, con inserción en la página electrónica de la Entidad y de la Alcaldía Municipal en donde se encuentra ubicado el predio, o en su cartelera, del acto o de un resumen del acto administrativo de apertura que contenga la identificación de los solicitantes del predio y del procedimiento único iniciado.

7. La orden a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente de inscribir la medida publicitaria de apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

PARÁGRAFO 1o. La decisión de inscripción o no del beneficiario en el RESO y su categorización para asuntos de formalización privada, puede ser objeto del recurso de reposición. Tratándose de

asuntos relacionados con la administración de derechos, contra este acto administrativo no procederán recursos, por ser un acto de trámite.

PARÁGRAFO 2o. No será necesario acudir de manera previa al procedimiento de clarificación de la propiedad para la formalización los predios que según el informe técnico-jurídico tienen la calidad de privados, sin perjuicio de la procedencia de la nulidad agraria prevista en el artículo 39 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 48 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 76. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-ley número 902 de 2017, para los asuntos contemplados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 58 ibídem, ordenará lo siguiente:

1. Notificar el acto administrativo al particular interesado o afectado en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Cuando la pretensión o una de las pretensiones del Procedimiento Único sea el deslinde, se entenderá como interesado los titulares de derechos reales principales que figuren en el registro de instrumentos públicos de los predios colindantes.

2. Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-ley número 902 de 2017.

3. Dar publicidad a terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

4. La inscripción de la medida del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

PARÁGRAFO 1o. Cuando la pretensión del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, sea la formalización privada de que tata el numeral 3 del Decreto-ley número 902 de 2017, el acto administrativo de apertura también ordenará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 67 referido a la verificación de las condiciones de elegibilidad de ingreso al RESO, aplicándole las mismas reglas en materia de notificación, que se hará en las mismas jornadas programadas para la notificación del acto de apertura de reconocimiento de derechos sobre baldíos.

PARÁGRAFO 2o. Contra el acto administrativo de apertura no procede recurso alguno, por ser acto de trámite.

ARTÍCULO 77. TRASLADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL TRÁMITE. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez realizadas las notificaciones y comunicaciones de conformidad con lo señalado en el artículo anterior, las partes tendrán un término de cinco (5) días hábiles para solicitar o aportar las pruebas que consideren.

Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará en los casos de formalización de la propiedad privada de que trata el numeral tercero del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 49 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 77. Una vez realizada la notificación en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, las partes tendrán un término de 5 días hábiles para solicitar o aportar las pruebas que consideren, las cuales deberán ser pertinentes, útiles y conducentes.

Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará en los casos de formalización de la propiedad privada de que trata el numeral tercero del artículo 58 del Decreto-ley número 902 de 2017.

ARTÍCULO 78. CARGA DE LA PRUEBA. Cuando las pretensiones del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad consistan en la extinción del derecho de dominio privado, clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la Nación y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la carga de la prueba corresponde a los particulares, pero la ANT podrá de oficio decretar o practicar las pruebas que considere necesarias, que en su momento no se hayan recogido en el barrido predial, independientemente de que de ello se haya dejado constancia en el informe técnico jurídico preliminar.

Igualmente corresponde a los particulares probar la fuerza mayor y el caso fortuito cuando fueren alegados.

ARTÍCULO 79. ACTO ADMINISTRATIVO DE DECRETO DE PRUEBAS. <Artículo modificado por el artículo 50 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Agotado el término de cinco (5) días, se decretará la práctica de las pruebas solicitadas por las partes que resulten pertinentes, útiles y conducentes, así como las que de oficio considere la ANT, mediante acto administrativo que será notificado por estado y será susceptible del recurso de reposición de acuerdo con lo indicado en la Ley 1437 de 2011.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 50 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 79. ACTO ADMINISTRATIVO DE PRUEBAS. Agotado el término de cinco (5) días referido en el artículo 77 de la presente resolución, se decretarán las pruebas solicitadas por las partes que resulten pertinentes útiles y conducentes, así como las que de oficio considere la ANT mediante acto administrativo que será notificado por estado y comunicado a las partes vía electrónica o mensaje de texto, y será susceptible del recurso de reposición de acuerdo con lo indicado en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 80. REGLAS ESPECIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN PRIVADA. <Artículo modificado por el artículo 51 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad tenga como única pretensión la formalización de tierras de naturaleza privada conforme al numeral 3 del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, si hasta antes de la expedición del acto administrativo que ponga fin al procedimiento, no comparece ningún tercero a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá omitir el periodo probatorio, teniendo en cuenta las pruebas recaudadas en el barrido predial para resolver por parte de la ANT.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 51 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 80. Cuando el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad tenga como única pretensión la formalización de tierras de naturaleza privada conforme al numeral 3 del artículo 58 del Decreto-ley número 902 de 2017, si dentro del término señalado en el artículo 69 no comparece ningún tercero indeterminado a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá omitir el periodo probatorio, si se estimare que con las pruebas recaudadas en el barrido predial y la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural es suficiente para poder tomar la decisión.

ARTÍCULO 81. PERIODO PROBATORIO. <Artículo modificado por el artículo 52 de la

Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El periodo dispuesto para práctica de pruebas no podrá exceder de diez (10) días hábiles, prorrogables máximo por cinco (5) días. La práctica de las pruebas decretadas a petición de parte correrá a cargo de quien las solicita, quien deberá sufragar los gastos completos que correspondan dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo que las decreta. De no pagarse el valor correspondiente a la práctica de pruebas dentro del término establecido, se entenderá que el solicitante desiste de aquellas y se continuará con el proceso; sin embargo, la ANT podrá ordenar su práctica en caso de considerarlo necesario.

Lo dispuesto en el presente artículo respecto del cobro de la prueba, no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas en el RESO, bajo los criterios indicados en el artículo 4o del Decreto-Ley 902 de 2017 como sujetos de acceso a tierras y formalización a título gratuito.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 52 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 81. El periodo dispuesto para práctica de pruebas no podrá exceder de treinta (30) días hábiles. La práctica de las pruebas decretadas a petición de parte correrá a cargo de quien las solicita, quien deberá sufragar los gastos completos que correspondan dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo que las decreta. De no pagarse el valor correspondiente a la práctica de pruebas dentro del término establecido, se entenderá que el solicitante desiste y se continuará con el proceso. Lo dispuesto en el presente artículo respecto del cobro de la prueba, no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas en el RESO, bajo los criterios indicados en el artículo 4o del Decreto-ley número 902 de 2017 ley como sujetos de acceso a tierras y formalización a título gratuito.

PARÁGRAFO 1o. Si ninguna parte solicita la práctica de una prueba que exija inspección ocular, teniendo en cuenta que la inspección se realizó en desarrollo del barrido predial, se podrá continuar con el procedimiento sin volver a realizar dicha inspección.

ARTÍCULO 82. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS. <Artículo modificado por el artículo 53 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En la exposición pública de resultados de que trata el artículo 72 del Decreto-Ley 902 de 2017 se informará a los asistentes las decisiones tomadas por la ANT en los asuntos tramitados a través del Procedimiento Único.

En caso de que se presenten oposiciones en el marco de dicha exposición pública, se solicitará al opositor aportar las pruebas que considere pertinentes, de acuerdo con las reglas previstas en la presente resolución. Las oposiciones serán resueltas conforme a lo indicado en el informe técnico jurídico en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, procediendo contra este acto los

recursos y acciones previstas en el Decreto-Ley 902 de 2017.

Se realizarán el número de jornadas de exposiciones públicas de resultados que sean necesarias dentro de los plazos establecidos por el Decreto-Ley 902 de 2017, como garantía de transparencia y participación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 53 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 82. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS SOBRE ASUNTOS DE FORMALIZACIÓN PRIVADA, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE BALDÍOS, O ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS. En la exposición pública de resultados de que trata el artículo 72 del Decreto-ley número 902 de 2017 para los casos de: formalización privada, reconocimiento de derechos sobre baldíos y los demás asuntos contemplados en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 58 del mismo Decreto, se informará a los asistentes las decisiones tomadas por la ANT en esos asuntos.

En caso de que se presenten oposiciones en el marco de dicha exposición pública, se solicitará al opositor aportar las pruebas que considere pertinentes las cuales serán resueltas conforme a lo indicado en el informe técnico jurídico definitivo en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, procediendo contra este acto los recursos y acciones previstas en el Decreto-ley número 902 de 2017.

Aquellas oposiciones susceptibles de ser resueltas en desarrollo de la misma exposición pública de resultados, se resolverán en ella sin que sea necesario esperar a la expedición del acto administrativo de cierre.

Se realizarán el número de jornadas de exposiciones públicas de resultados que sean necesarias dentro de los plazos establecidos por el Decreto-ley número 902 de 2017, para que la comunidad quede plenamente enterada de las actuaciones de la ANT, como garantía de transparencia y participación.

ARTÍCULO 83. INFORME TÉCNICO JURÍDICO. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez finalizada la fase de exposición pública de resultados y recogidas las observaciones de la comunidad, se expedirá un informe técnico jurídico en el que se sugerirá la decisión final que debe adoptarse por parte de la ANT en el marco de cualquiera de las pretensiones del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, las razones por las que deben acogerse o desestimarse las objeciones formuladas en la etapa probatoria o en la exposición pública de resultados, para que de esa forma, se expida el acto administrativo que ponga fin al procedimiento de manera definitiva para los casos de asignación y

reconocimiento de derechos, formalización privada sin oposición, y solo en la fase administrativa para dar paso a la fase judicial en el resto de asuntos.

En esta etapa, en caso de no haberse identificado variación frente al informe técnico-jurídico producido para la conformación del expediente, no será necesario expedir un nuevo informe.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 54 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 83. INFORME TÉCNICO JURÍDICO DEFINITIVO. Una vez finalizada la fase de exposición pública de resultados, y recogidas las observaciones de la comunidad, se expedirá un informe técnico jurídico definitivo en el que se sugerirá la decisión final que debe adoptarse por parte de la ANT en el marco de cualquiera de las pretensiones del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, las razones por las que deben acogerse o desestimarse las objeciones formuladas en la etapa probatoria o en la exposición pública de resultados, para de esa forma expedir el acto administrativo que ponga fin al procedimiento de manera definitiva para los casos de asignación y reconocimiento de derechos, formalización privada sin oposición, y solo en la fase administrativa para dar paso a la fase judicial en el resto de asuntos.

ARTÍCULO 84. ACTO DE CIERRE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Expedido el informe técnico jurídico definitivo, el expediente entrará al despacho del Gestor a cargo de la Unidad de Gestión Territorial correspondiente o al del funcionario de nivel directivo del orden nacional, según fuere el caso, por un término de cinco (5) días, dentro de los cuales proferirá la decisión de fondo que ponga fin a las actuaciones en sede administrativa. En este acto administrativo se deberá adoptar la decisión, se dará respuesta a las diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del trámite, se decidirán las oposiciones presentadas, se motivará la decisión tomada y además se establecerán las medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la decisión. Lo resuelto deberá ser acatado en un plazo de no más veinte (20) días, contados a partir de su ejecutoria.

Cuando en desarrollo de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la propiedad, se concluya que no existen los supuestos de hecho o de derecho para formalizar tierras de naturaleza privada o presentar la demanda respectiva, el informe técnico jurídico definitivo hará las recomendaciones en ese sentido, y se proferirá un acto administrativo de cierre del procedimiento único que dará por desestimada la formalización y ordenará no presentar la demanda ante el Juez.

Contra el acto administrativo que desestime la formalización o administración de derechos procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en los términos señalados en la Ley 1437 de 2011.

Contra el acto Administrativo de cierre que determine la improcedencia de la revocatoria directa no procederá recurso alguno, conforme a los artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 aplicables a dicha figura.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 55 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 3234 de 2019:

ARTÍCULO 84. ACTO DE CIERRE. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 3234 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Expedido el informe técnico-jurídico definitivo, el expediente entrará al despacho del gestor a cargo de la unidad de gestión territorial correspondiente, o el funcionario de nivel directivo del orden nacional, según fuere el caso, por un término de quince (15) días, dentro de los cuales se proferirá la decisión de fondo que ponga fin a las actuaciones en sede administrativa. En este acto administrativo se deberá adoptar la decisión que corresponda según las evidencias recabadas, se dará respuesta a las diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del trámite, se fundamentará la determinación tomada y se definirán las medidas que hagan efectiva la decisión y que sean necesarias para que lo resuelto pueda ser acatado en un plazo de no más de veinte (20) días a partir de su ejecutoria.

Cuando en desarrollo de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, se concluya que no existen los supuestos de hecho o de derecho para formalizar tierras de naturaleza privada o presentar la demanda respectiva en los casos a que haya lugar conforme a las reglas definidas por el artículo 36, 58, 60 y 75 del Decreto-Ley 902 de 2017, el informe técnico-jurídico definitivo hará las recomendaciones en ese sentido, y se proferirá un acto administrativo de cierre del procedimiento único que dará por desestimada la respectiva pretensión agraria y ordenará la no presentación de demanda ante el juez por la negativa a la formalización administrativa contemplada en el artículo 36 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Contra el acto administrativo de cierre de que trata el presente artículo procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en los términos señalados en la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

En los casos de reconocimiento y asignación de derechos, la negativa para proceder a la adjudicación del baldío, el bien fiscal o el otorgamiento del subsidio, también será declarada mediante acto administrativo susceptible de recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Esta disposición aplicará tanto en zonas focalizadas como en zonas no focalizadas, pero en lo referido a estas últimas, se integra al lineamiento expresado en la Circular 6 de 29 de enero de 2018 expedida por el Director General de la ANT.

Contra el acto administrativo de cierre que determine la improcedencia de la revocatoria directa no procederá recurso alguno, conforme a las reglas generales de la Ley 1437 de 2011 aplicables a dicha figura.

En caso de acuerdo entre el particular titular del derecho y la ANT frente al contenido del acto de cierre cuando la solicitud sea de revocatoria directa, no se presentará demanda ante el juez.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 84. DECISIONES DE CIERRE DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Expedido el informe técnico jurídico definitivo, el expediente entrará al despacho del Director de la Unidad de Gestión Territorial pertinente, o el funcionario de nivel directivo del orden nacional, según fuere del caso, por un término de quince (15) días, dentro de los cuales se proferirá la decisión de fondo que ponga fin a las actuaciones. En este acto administrativo se deberá adoptar la decisión que corresponda según las evidencias recabadas, se dará respuesta a las diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del trámite, se fundamentará la determinación tomada y se definirán las medidas que hagan efectiva la decisión, necesarias para que lo resuelto pueda ser acatado en un plazo de no más de veinte (20) días a partir de su ejecutoria.

En el caso de asuntos que deban ser decididos de fondo por el Juez, ordenará la presentación de las demandas respectivas.

ARTÍCULO 84A. CONTROL OFICIOSO. <Artículo adicionado por el artículo 56 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En la gestión del procedimiento único la Agencia Nacional de Tierras ejercerá un control oficioso, tendiente a sanear las deficiencias de información que hubiere identificado a efectos de lograr su consecución con eficiencia y el cumplimento de los fines para los cuales fue previsto.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 56 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

ARTÍCULO 85. DIVISIÓN DE INMUEBLES DEL FONDO PARA ACCESO A TIERRA EN EXTENSIONES DE UAF. Con el objeto de dar acceso a tierra en extensiones de Unidad Agrícola Familiar, los inmuebles del Fondo para la Reforma Rural Integral cuya extensión sea mínimo de 2 Unidades Agrícolas Familiares, serán objeto de desenglobe y apertura de folios de matrícula inmobiliaria individuales para efectos de adjudicación a los sujetos señalados en los artículos 4o y 5o del Decreto-ley número 902 de 2017.

Dicho procedimiento será realizado por Subdirección de Administración de Tierras de la Nación.

ARTÍCULO 86. APLICABILIDAD DE NORMAS SUSTANCIALES. Habida cuenta de que las normas sustanciales en materia de clarificación de la propiedad y deslinde, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, extinción del derecho de dominio, expropiación, adjudicación de baldíos a entidades de derecho público no fueron derogadas de la Ley 160 de 1994, se aplicarán las normas de carácter estrictamente sustancial contempladas en el Decreto número 1071 de 2015 que no hayan sido adoptadas en la presente resolución, cuando no generen contradicción con lo aquí regulado.

En ese sentido no aplicarán las disposiciones del referido Decreto en lo concerniente a ritualidades procesales o etapas procesales de los procedimientos administrativos agrarios, o adjudicación de tierras baldías.

ARTÍCULO 87. TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL FONDO NACIONAL AGRARIO. <Artículo modificado por el artículo 57 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En las zonas focalizadas, los trámites de regularización de la ocupación de predios del Fondo Nacional Agrario iniciados con anterioridad al 29 de mayo de 2017 se resolverán conforme al Acuerdo número 349 de 2014 del Incoder o la norma que lo modifique o sustituya. Las ocupaciones que se realicen sobre bienes fiscales patrimoniales del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral con posterioridad al 29 de mayo de 2017, no generarán derecho alguno a su titulación o regularización.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 57 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 87. TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS FONDO NACIONAL AGRARIO. Los trámites de regularización de la ocupación de predios del Fondo Nacional Agrario se resolverán conforme a los reglamentos que en virtud de la Ley 160 de 1994 se hubiesen expedido para tales propósitos.

Las ocupaciones que se hubiesen producido con posterioridad a la expedición del Decreto-ley número 902 de 2017 en ningún caso dará lugar a la adjudicación de los predios ocupados, sino exclusivamente en virtud de la aplicación de las reglas de selección previstas en el artículo 88 de la presente resolución.

TÍTULO 4.

REGLAS A APLICAR FUERA DE LAS ZONAS FOCALIZADAS PARA ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD.

ARTÍCULO 88. ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD FUERA DE ZONAS

FOCALIZADAS. Para aquellos casos en los que se identifiquen predios aptos para ser adjudicados en procesos objetivos de selección; y ubicados fuera de las zonas focalizadas, o dentro de estas, una vez se hubieren culminado las actividades del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, su trámite de adjudicación se adelantará conforme a las siguientes reglas:

1. Mediante acto administrativo se dará apertura a la adjudicación señalando las condiciones técnicas de los proyectos a los que se destina la adjudicación, el número de unidades prediales susceptibles de ser adjudicadas, la zona de circunscripción en la que se adelantará el proceso de selección, los medios ordinarios de los que se dispone para realizar inscripciones nuevas al registro o los procesos de actualización de aspirantes que ya figuren en él, la programación de jornadas dirigidas por la ANT para la inscripción, actualización y recepción de documentos, de aspirantes al RESO y la fecha de corte de la información contenida en el Registro para efectos de determinar el orden de adjudicación.

La determinación de las áreas de circunscripción se realizará por municipios. Para su definición la ANT preferirá los municipios de ubicación de los predios, o sus colindantes. La ANT justificará técnicamente la delimitación según el número de aspirantes que figuren en el Registro, las características homogéneas del territorio y las relaciones comerciales entre los diferentes municipios. Excepcionalmente se podrán incluir municipios de otras zonas del país cuando no se identifiquen suficientes aspirantes dentro de los municipios de ubicación de los predios. También de manera se podrán incluir personas aspirantes a quienes se les haya reconocido derechos de adjudicación directa aun cuando no residan en la zona de circunscripción.

2. El contenido de la resolución de apertura deberá ser publicitada a través de medios de comunicación de amplia circulación regional o local, sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación según la dinámica del municipio. Además, dicha resolución será publicada en la página web de la ANT, quien podrá solicitar a las entidades que considere pertinentes, la publicación del acto de apertura en sus carteleras informativas y páginas web.

3. Realizado el corte de la información del RESO, la ANT publicará los resultados. Allí se fijará el listado de aspirantes, las decisiones sobre su ingreso y puntajes asignados, las observaciones presentadas a los aspirantes y las respuestas a ellas dadas. La publicación de resultados se efectuará a través de acto administrativo no susceptible de recursos. En él se señalará los medios de recepción de observaciones a las condiciones y puntuaciones de los aspirantes y la forma en la que se resolverán. Resueltas las observaciones se expedirán los actos administrativos de adjudicación.

La ANT podrá publicar los resultados en una audiencia especial publicitada con las mismas formalidades de la resolución de inicio de proceso de adjudicación. Siempre que la presentación de resultados se haga de manera oral y en ella no se presente observaciones a la condición de las personas aspirantes, o al orden establecido para ellas, que no puedan ser resueltas de manera inmediata, las resoluciones de adjudicación se expedirán de forma inmediata. Si las observaciones requieren procesos de constatación adicionales, la ANT suspenderá por una única vez la audiencia fijando la fecha para su continuación, en la cual resolverá las observaciones formuladas y procederá a expedir las resoluciones de adjudicación. De la audiencia se suscribirá un acta en las que se recogerán los puntos abordados. Esta hará parte integral del procedimiento de adjudicación.

4. Expedidos los actos administrativos de adjudicación la ANT procederá a su notificación y

resolución de los recursos en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 89. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. Definida la situación de la persona aspirante, la ANT, expedirá la resolución por medio de la cual se adjudican en propiedad los inmuebles. En la resolución se determinará e identificará el bien, su valor, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para la enajenación, las causales de incumplimiento, la referencia expresa a la potestad de la ANT para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8o del Decreto-ley número 902 de 2017 y demás aspectos que sean propios de este régimen jurídico de propiedad rural.

ARTÍCULO 90. RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN. Las personas aspirantes podrán renunciar a la adjudicación, mediante comunicación expresa y escrita dirigida a la ANT, hasta antes de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

La aceptación de la renuncia implica la pérdida de los derechos originados en el proceso de adjudicación, pero no su exclusión del RESO de la ANT en condición de aspirante en el módulo de acceso a tierras.

Emitido el acto administrativo de adjudicación, la renuncia solo podrá ser tramitada mediante la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, exigiéndose la manifestación expresa y escrita de la persona adjudicataria.

ARTÍCULO 91. ENAJENACIÓN. Hasta cuando se cumpla el plazo de siete (7) años, contados desde la inscripción en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la resolución de adjudicación, las personas adjudicatarias de que se trate deberán solicitar autorización previa y expresa de la ANT para transferir su dominio o la cesión total o parcial de los derechos que recaigan sobre ella.

ARTÍCULO 92. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PRETENSIONES AGRARIAS POR FUERA DE ZONAS FOCALIZADAS. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 7622 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando por fuera de las zonas focalizadas donde se implementen los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, le corresponda a la Agencia Nacional de Tierras ejecutar alguna de las pretensiones agrarias enlistadas en los numerales 3, 4, 5, 7 y 8 del artículo 58 del Decreto-ley 902 de 2017 por solicitud de los particulares, se adelantará la misma actuación administrativa señalada en el Capítulo 5 del Título 3 de la presente Resolución, omitiendo lo dispuesto en cuanto a exposición pública de resultados y todo aquello que resultare incompatible.

Especialmente se tendrán en cuenta las siguientes reglas relativas a Documentos Preliminares de Análisis Predial, formación de expedientes, visitas e Informes Técnicos Jurídicos Preliminares.

Respecto del procedimiento de formalización privada, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80, en el sentido de si dentro del término señalado en el artículo 69 no comparece ningún tercero indeterminado a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con

total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá prescindir el periodo probatorio, siempre que las pruebas recaudadas sean suficientes para poder proceder a emitir la correspondiente decisión de cierre de la fase administrativa del procedimiento único, sin necesidad de que previamente sea emitido el informe técnico jurídico definitivo.

El procedimiento a aplicar en materia de reconocimiento de derechos, será el señalado en el lineamiento expresado en la Circular 06 de 2018 expedida por el Director General de la Agencia Nacional de Tierras.

El procedimiento aplicable para la asignación de derechos sobre baldíos, bienes fiscales patrimoniales u otorgamiento de subsidios, será el señalado en los lineamientos que se expidan para dichos efectos, por parte del Director General de la Agencia Nacional de Tierras.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 7622 de 2019, 'por la cual se expiden nuevas reglas para la ejecución del procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad en Zonas No Focalizadas', publicada en el Diario Oficial No. 51.026 de 26 de julio 2019.

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 3134 de 2018:

ARTÍCULO 92. Cuando por fuera de las zonas focalizadas donde se implementen los planes de ordenamiento social de la propiedad le corresponda a la ANT ejecutar alguna de las pretensiones agrarias enlistadas en los numerales 3o., 4o., 5o., 7o. y 8o. del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017 por solicitud del particular, se adelantará la misma actuación administrativa señalada en el capítulo 5 del título 3 de la presente resolución, omitiendo lo dispuesto en cuanto a exposición pública de resultados y todo aquello que resultare incompatible.

Especialmente se tendrán en cuenta las siguientes reglas relativas a documentos preliminares de análisis predial, DPAP, formación de expedientes, visitas e informes técnicos-jurídicos preliminares:

a) El procedimiento a aplicar en materia de reconocimiento de derechos, será el señalado en el lineamiento expresado en la Circular 6 de 2018 expedida por el Director General de la ANT.

b) El procedimiento aplicable para la asignación de derechos sobre baldíos, bienes fiscales patrimoniales u otorgamiento de subsidios, será el señalado en los lineamientos que se expidan para dichos efectos, por parte del Director General de la ANT.

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 92. Cuando por fuera de las zonas focalizadas donde se implementen los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad se solicite a la ANT, o de oficio proceda, el adelantamiento

de extinción del derecho de dominio por incumplimiento a la función social de la propiedad sin justa causa, la clarificación de la propiedad y deslinde, la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la reversión de baldío, la condición resolutoria del subsidio de tierras, la caducidad o la revocatoria directa de acto administrativo, se adelantará la misma actuación administrativa señalada en el Capítulo 5 del Título 3 de la presente Resolución, omitiendo lo dispuesto en cuanto a exposición pública de resultados y todo aquello que resultare incompatible.

En lo no regulado expresamente se aplicarán las reglas de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 92A. DOCUMENTO PRELIMINAR DE ANÁLISIS PREDIAL EN ZONAS NO FOCALIZADAS PARA DAR APERTURA AL EXPEDIENTE. <Artículo adicionado por el artículo 4 de la Resolución 3234 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El documento preliminar de análisis predial, DPAP, determinará de manera tentativa cuál es la situación física, jurídica y de tenencia del inmueble, para lo cual deberá contar con la mayor cantidad de información disponible que sea posible conseguir y que permita, de manera preliminar, obtener una primera aproximación a la realidad del inmueble.

Del análisis realizado a partir de las fuentes de información disponibles y el contenido de la solicitud, el DPAP determinará si esta contiene los elementos mínimos que permitan darle trámite o si es notoriamente infundada. En este último caso, mediante acto administrativo ordenará no dar apertura a un expediente.

Se considerará notoriamente infundada la solicitud, cuando del simple examen de la información existente, se evidencie que no se cumplen los elementos mínimos necesarios para adelantar el procedimiento respectivo, exista total certeza frente a los supuestos de hecho y de derecho y conforme a ellos se evidencie de plano la improcedencia de la pretensión.

Cuando se ordene la apertura del expediente, adicional a los asuntos ya señalados, el DPAP se pronunciará sobre la pertinencia de realizar la visita predial señalada en el artículo 66 del Decreto-Ley 902 de 2017, y en caso de que se estime innecesaria, justificará motivadamente tal decisión.

Si el motivo para negar la apertura del expediente, es que el peticionario no aportó la información mínima requerida, en la respuesta a la petición se le informará tal situación conminándolo a que la complete para continuar el trámite.

Tratándose de la actuación administrativa de revocatoria directa, atendiendo la naturaleza de la solicitud presentada, no será necesaria la elaboración del DPAP, por lo tanto, la decisión de negar la apertura del expediente se realizará con base en el análisis preliminar de la información recaudada

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 de la Resolución 7622 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En tratándose de solicitudes de formalización privada, el Documento Preliminar de Análisis Predial DPAP que dé lugar a la apertura del expediente, además de determinar de manera tentativa cuál es la situación física, jurídica y de tenencia del inmueble, procederá a pronunciarse sobre el mérito para expedir el acto administrativo de apertura que dé inicio a la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, cuando de la información aportada al documental se concluya sobre la no utilidad de realizar la visita predial señalada en el artículo 66 del Decreto-ley 902 de 2017, al haberse

verificado previamente el cumplimiento de los supuestos de hecho y de derecho objeto de la petición; en estos casos se prescindirá del documento denominado “informe técnico jurídico preliminar”.

En este sentido, al momento de verificar la conducencia, pertinencia y utilidad de la información aportada al documental en aras de concluir sobre lo no realización de la visita predial, además de la obligatoriedad de constatar el cumplimento de los supuestos de hecho y de derecho objeto de la petición de formalización privada, resulta imprescindible proceder a validar la consistencia de los levantamientos prediales aportados; caso contrario no podrá prescindirse de la visita predial señalada en el artículo 66 del Decreto-ley 902 de 2017. La verificación de la consistencia de los levamientos prediales se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:

a) Superposición del levantamiento realizado con la orthophoto.

b) La superposición del levantamiento se verificará con las bases de datos catastrales y registrales y, en caso de generar alguna duda sobre su coincidencia, se procederá a constatar con una imagen satelital actualizada.

c) Mediante comunicación con el solicitante se confirmarán los linderos y colindantes que se encuentran consignados en el levantamiento predial aportado al documental.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 3 de la Resolución 7622 de 2019, 'por la cual se expiden nuevas reglas para la ejecución del procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad en Zonas No Focalizadas', publicada en el Diario Oficial No. 51.026 de 26 de julio 2019.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 4 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

ARTÍCULO 92B. FORMACIÓN DE EXPEDIENTES EN ZONAS NO FOCALIZADAS. <Artículo adicionado por el artículo 5 de la Resolución 3234 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Teniendo en cuenta la información aportada por el solicitante, la que la ANT pueda recabar y lo definido en el documento preliminar de análisis predial, DPAP, las subdirecciones pertinentes a nivel nacional o la unidad de gestión territorial correspondiente, darán apertura a un expediente.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 5 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

ARTÍCULO 92C. VISITAS PREDIALES EN ZONAS NO FOCALIZADAS. <Artículo adicionado por el artículo 6 de la Resolución 3234 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En

zonas no focalizadas por el ordenamiento social de la propiedad, la visita predial de que trata el artículo 66 del Decreto-Ley 902 de 2017 no será obligatoria cuando, al momento de realizar el documento preliminar de análisis predial, DPAP, o el análisis preliminar de la información recaudada, se evidencia que no es necesario visitar el inmueble para tener certeza sobre la naturaleza jurídica del inmueble y los supuestos de hecho y de derecho objeto de la petición. Esta situación se presenta cuando se determina que para el caso puntual no hay nada que se pueda observar o recopilar en la visita de campo que pueda hacer cambiar la conclusión ya adoptada, teniendo en cuenta que la verificación de la situación jurídica es de carácter estrictamente documental.

En estos casos, con posterioridad a la creación del expediente con el documento preliminar de análisis predial, DPAP, o el análisis preliminar de la información recaudada, se pasará directo a la elaboración del informe técnico-jurídico preliminar.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 6 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

ARTÍCULO 92D. INFORME TÉCNICO-JURÍDICO PRELIMINAR EN ZONAS NO FOCALIZADAS. <Artículo adicionado por el artículo 7 de la Resolución 3234 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Con la información obtenida y como consecuencia de la realización del documento preliminar de análisis predial, DPAP, o del análisis preliminar de la información recaudada y en los casos en que se hubiere realizado la visita predial, la subdirección pertinente o la unidad de gestión territorial, según fuere el caso, elaborará un documento denominado “informe técnico-jurídico preliminar”, que contendrá la información detallada del inmueble recabada a lo largo del proceso junto con un análisis de dicha información que permita determinar si existe mérito para expedir el acto administrativo de apertura e iniciar la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad para el caso puntual.

Sin perjuicio de pronunciarse frente al mérito de dar apertura al procedimiento sobre el que verse la solicitud, la ANT podrá sugerir cuál o cuáles de los otros asuntos enlistados en el artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017 es necesario ejecutar.

Tratándose del informe técnico-jurídico preliminar que recomiende la adjudicación de tierras baldías bajo el régimen de transición o las circunstancias especiales conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 902 de 2017, este deberá contener toda la información señalada en el artículo 72 de la presente resolución. Si no fuere posible obtener toda la información requerida con la información hasta ese momento acopiada, así expresamente lo hará constar el informe técnico-jurídico y allí se solicitará terminar de recoger la información faltante en desarrollo de la segunda parte de la fase administrativa.

En lo referente a las pretensiones de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y extinción de dominio, el informe técnico-jurídico preliminar consignará los aspectos sustanciales enunciados en el Decreto 1071 de 2015 en lo concerniente a cada materia.

Igualmente, dicho informe podrá concluir la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho

para poder dar inicio a alguno de esos asuntos o sugerir recopilar más información, aclarar alguna prueba o expedir el acto administrativo de que trata el artículo 84B de la Resolución 740 de 2017.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 7 de la Resolución 3234 de 9 de julio de 2018, 'por la cual se modifica y-o adiciona la Resolución 740 de 2017 y se expiden reglas para la ejecución del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en zonas no focalizadas'.

ARTÍCULO 93. OCUPACIONES IRREGULARES DE BALDÍOS O BIENES FISCALES CON POSTERIORIDAD AL 29 DE MAYO DE 2017. Las ocupaciones que se realicen sobre baldíos de la Nación o bienes fiscales patrimoniales del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral con posterioridad al 29 de mayo de 2017, no generarán derecho alguno a su titulación o regularización, toda vez que quedarán desde esa fecha afectos a las reglas de adjudicación directa mediante el RESO. En su lugar se ordenará el desalojo de los ocupantes irregulares.

TÍTULO 5.

REGISTRO DE INMUEBLES RURALES (RIR).

ARTÍCULO 94. OBJETO DEL REGISTRO DE INMUEBLES RURALES (RIR). El Registro de Inmuebles Rurales (RIR) es el instrumento para la identificación, caracterización e ingreso de los predios que potencialmente pueden ser adquiridos mediante el Subsidio Integral de Acceso a Tierra y será administrado por la dependencia encargada de desarrollar el programa con el soporte técnico de la Subdirección de Sistema de Información de Tierras. La ANT expedirá el instructivo para el diseño, conformación y alimentación del RIR el cual regulará la operación del mismo de acuerdo con las siguientes reglas.

ARTÍCULO 95. GRADUALIDAD DEL RIR. El Registro de Inmuebles Rurales (RIR) se conformará de manera gradual atendiendo la focalización del barrido predial y catastro multipropósito. Para las zonas no focalizadas los predios a registrar podrán corresponder a los inmuebles identificados mediante invitación pública o postulados por los Sujetos de Acceso a Tierras seleccionados para el SIAT.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 11 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En virtud de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 81 del Decreto ley 902 de 2017 los procedimientos de adjudicación de subsidios para la compra de tierras en zonas no focalizadas, iniciados con anterioridad a la Vigencia del, referido decreto, continuaran su trámite con el procedimiento vigente para el 28 de mayo de 2017

Sin embargo, las condiciones establecidas en bs artículos 104, 105 y 106 de la presente Resolución, le serán también aplicables a los tramites referidos en el inciso anterior.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 11 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

ARTÍCULO 96. INTEROPERABILIDAD DEL RIR. El RIR será interoperable con los sistemas de información de Catastro y Registro que permitan determinar las condiciones jurídicas y físicas de los predios de forma actualizada. Se velará por la verificación periódica de la información ambiental que limite o condicione la explotación de los predios para ingreso y la permanencia en el RIR a través de la gestión con las autoridades ambientales competentes.

ARTÍCULO 97. ROGACIÓN. La inscripción en el RIR procederá a solicitud de los propietarios interesados en ofertar su predio de naturaleza privada para ser ingresado en RIR y potencialmente adquirido mediante el SIAT.

ARTÍCULO 98. NO OTORGAMIENTO DE DERECHOS NI DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. La inscripción en el RIR no otorga derechos ni expectativas legítimas a los propietarios para la adquisición de los predios de naturaleza privada mediante el SIAT. Tampoco otorga derechos ni expectativas legítimas a los sujetos del SIAT sobre el sostenimiento de la oferta del predio postulado y/o seleccionado por parte de sus propietarios.

ARTÍCULO 99. VIGENCIA DEL INMUEBLE EN EL RIR. El ingreso de un predio en el RIR tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la expedición del certificado de ingreso. Una vez transcurrido el término de los 12 meses, deberán los propietarios de los predios ratificar su permanencia y actualizar la información a que haya lugar.

PARÁGRAFO. En caso de que hayan transcurrido los 12 meses de vigencia de la inscripción del predio en el RIR y el propietario no haya ratificado y actualizado la información correspondiente, el predio continuará inscrito, pero en caso de que haya sido seleccionado para ser adquirido mediante el SIAT y el propietario esté de acuerdo con la negociación, deberá actualizar la información en el sistema.

ARTÍCULO 100. PROMOCIÓN. La ANT adelantará acciones para promover la inscripción de predios de naturaleza privada en el RIR.

ARTÍCULO 101. CONFORMACIÓN DEL RIR. La ANT conformará el RIR, con aquellos predios que cumplen todos los requisitos necesarios para ser adquiridos con los recursos del subsidio. El RIR estará conformado por:

a) Predios privados identificados física, jurídica y técnicamente en el Barrido Predial Integral bajo el Catastro Multipropósito cuyos propietarios manifiesten la intención ser inscritos;

b) Predios presentados por sus propietarios a través invitaciones públicas o convocatorias;

c) Predios postulados por los sujetos del RESO seleccionados para el SIAT.

PARÁGRAFO 1o. En caso de que el sujeto del RESO seleccionado para el SIAT elija un predio que pertenezca al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, manifestará expresamente su voluntad de sustituir el Subsidio por la Adjudicación. En consecuencia, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación. En caso de que el valor del Subsidio se haya desembolsado en la cuenta para la compra de tierras, este deberá ser reintegrado a la ANT como condición para la adjudicación, con el fin de que pueda ser asignado nuevamente a otras personas beneficiarias.

PARÁGRAFO 2o. El RIR deberá contener la información y variables mínimas de los atributos de los predios que lo integran, que le permitan y faciliten la elección de los mismos por parte de los sujetos RESO del SIAT y la generación de información estadística para el desarrollo de la política pública.

ARTÍCULO 102. REGISTRO DE INMUEBLES RURALES RIR EN ZONAS FOCALIZADAS PARA BARRIDO PREDIAL Y CATASTRO MULTIPROPÓSITO. La inscripción de los predios en zonas focalizadas cuyos propietarios manifiesten la intención de ser ingresados en el RIR, se realizará atendiendo los insumos y la información aportada en el marco de la operación de barrido predial y catastro multipropósito. Esta información será analizada y verificada por la ANT para determinar si es suficiente para el cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas y ambientales que permitan su adquisición mediante Subsidio.

ARTÍCULO 103. REGISTRO DE INMUEBLES RURALES RIR EN ZONAS NO FOCALIZADAS. La inscripción de los predios en zonas no focalizadas cuyos propietarios manifiesten la intención de ser ingresados en el RIR por invitación pública o convocatoria o por postulación del sujeto seleccionado del RESO para el SIAT, deberá ser sometido a las siguientes etapas para determinar su viabilidad para ingresar en el RIR:

a) Presentación del predio al RIR;

b) Verificación de las condiciones jurídicas de los predios;

e) Verificación de las condiciones de uso del suelo y condiciones ambientales de los predios;

d) Visita Técnica;

e) Viabilidad de ingreso al RIR;

f) Expedición Certificado de ingreso o rechazo de la inscripción en el RIR.

Una vez inscritos los predios que han sido postulados por los sujetos seleccionados para el SIAT en el RIR, se adelantarán las etapas de levantamiento topográfico y de avalúo comercial conforme al procedimiento para la adquisición mediante Subsidio Integral de Acceso a Tierras. Los predios ingresados en el RIR de acuerdo con las etapas anteriores, que hayan sido ingresados por invitación pública o convocatoria, serán sometidos a levantamiento topográfico y avalúo comercial una vez hayan sido elegidos por un sujeto seleccionado para adquirir mediante el SIAT.

ARTÍCULO 104. CONDICIONES JURÍDICAS DE LOS PREDIOS. Los predios que se ingrese

al RIR y que se pretendan adquirir con el SIAT deben reunir las siguientes condiciones:

a) Ser de propiedad privada conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 160 de 1994. Los predios que hayan sido adjudicados, formalizados y/o adquiridos mediante subsidio a título gratuito o parcialmente gratuito podrán ser parte del RIR transcurridos 7 años contados a partir de la inscripción del acto administrativo o del negocio jurídico que asigne la propiedad en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;

b) Ser plenamente identificable, con número de folio de matrícula inmobiliaria, código catastral, linderos, nombre del predio y demás criterios que permitan su individualización;

c) Ser susceptible de enajenación (se establecerá en el concepto del estudio de títulos);

d) No encontrarse inscrito en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (Rupta) o reclamado en procesos de restitución y/o reparación;

e) No encontrarse en litigio, con medida cautelar inscrita en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, con limitación al dominio, afectación y/o cualquier gravamen que afecte los derechos de propiedad a transferir sobre el predio, o con ocupaciones de hecho y/o posesión alguna (esta última condición se verificará a través de la inspección y/o visita técnica).

f) No haber sido objeto de adjudicación como baldío dentro de los siete (7) años inmediatamente anteriores a la fecha del estudio de títulos.

☐ ARTÍCULO 105. CONDICIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS DEL RIR. Los vendedores deberán acreditar las siguientes condiciones:

a) No haber sido condenado mediante sentencia judicial en firme por delitos contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra el orden económico social y contra el patrimonio económico;

b) No tener parentesco en primer grado de consanguinidad (padre e hijo) respecto de los adjudicatarios;

c) Si se trata de persona jurídica se requiere verificar facultades.

☐ ARTÍCULO 106. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DEL SUELO Y CONDICIONES AMBIENTA/ES DE LOS PREDIOS. Las condiciones mínimas técnicas y ambientales que deben cumplir los predios son las siguientes:

a) Debe(n) estar clasificado(s) en suelos rurales de los POT - PBOT de los municipios o en los EOT, en zonas que se puedan desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, agroforestales y/o forestales explotables;

b) No debe(n) ser bien(es) de uso público;

c) No debe(n) estar ubicado(s) en zonas con restricciones de protección ambiental que limiten la explotación, tales como planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas hidrográficas;

d) No debe(n) estar ubicado(s) dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales definido por el artículo 11 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, ni dentro de los parques naturales regionales declarados, de conformidad con el artículo 13 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

e) No debe(n) estar ubicado(s) en reservas forestales protectoras nacionales ni regionales que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 12 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

f) No debe(n) estar ubicado(s) en las reservas naturales de la sociedad civil que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 17 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

g) No debe(n) estar ubicado(s) en las áreas de recreación que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 15 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo, establecida por el artículo 34 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

h) No debe(n) estar ubicado(s) en las zonas de los distritos de manejo integrado que hacen parte del Sinap definidos en el artículo 14 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría de zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo establecida por el artículo 34 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

i) No debe(n) estar ubicado(s) en las zonas de los distritos de conservación de suelos que hacen parte del Sinap definidos en el artículo 14 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría de zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo establecida por el artículo 34 del Decreto número 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

j) No debe(n) estar ubicado(s) en las zonas de reserva forestal establecidas en el marco de la Ley 2ª de 1959, o la norma que la adicione, modifique o sustituya;

k) No debe(n) estar ubicado(s) en los ecosistemas estratégicos de páramos, así mismo no deben estar ubicados en altitudes por encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar (3.000 m s. n. m.);

l) No debe(n) estar ubicado(s) en los ecosistemas estratégicos de humedales declarados por las autoridades ambientales competentes, en los cuales se restrinja el desarrollo parcial o total de actividades agropecuarias;

m) No debe(n) ser bien(es) de propiedad colectiva, ni encontrarse en colindancia total con títulos colectivos otorgados a comunidades indígenas o negras, de conformidad con la Ley 70 de 1993, Ley 160 de 1994 y Decreto número 2164 de 1995, respectivamente, o la norma que las adicione, modifique o sustituya.



ARTÍCULO 107. RETIRO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RIR. Los predios que ingresen en el RIR saldrán del Registro si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) En el caso de los predios ofertados para compra mediante subsidio por voluntad expresa de los propietarios de no continuar haciendo parte del RIR;

b) La compra efectiva del predio por parte de los beneficiarios en el marco del SIAT;

c) Hechos naturales que modifiquen las condiciones de uso del suelo y condiciones ambientales de los predios;

d) Actos jurídicos posteriores que impidan la adquisición del predio con el SIAT.

TÍTULO 6.

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE INMUEBLES DEL FONDO.

ARTÍCULO 108. AUTORIZACIÓN PARA ENAJENACIÓN. Las autorizaciones relacionadas con la enajenación de los predios objeto del Decreto-ley número 902 de 2017 antes de finalizado el plazo de obligaciones y limitaciones al dominio, serán otorgadas cuando:

1. El predio se requiera para actividades consideradas como de utilidad pública e interés social.

2. Cuando la persona adjudicataria acredite que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito está en imposibilidad de adelantar directamente la explotación del predio.

3. Cuando la persona adjudicataria o un integrante de su grupo familiar deba cambiar su lugar de residencia por estrictas recomendaciones médicas, o deba ser sometido a un tratamiento médico cuyo suministro no se oferta en la zona de ubicación del predio.

4. Cuando las transferencias se dispongan en virtud de acuerdos conciliatorios para disolver y liquidar sociedades conyugales o sociedades entre compañeros permanentes. La misma causal se aplicará para la disolución de sociedades de hecho y en general en los trabajos de partición ordenados por autoridades judiciales.

5. Cuando por graves alteraciones del orden público en la zona de ubicación del predio, el adjudicatario afirme su imposibilidad de adelantar la explotación económica de la UAF, o cuando por razones de seguridad el adjudicatario o su núcleo familiar encuentren amenazada su integridad personal.

En los casos de enajenación autorizada de la propiedad sobre una UAF, la persona adquirente se subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor de la ANT por el término de subsistencia del régimen de propiedad parcelaria.

Las Notarías y las Oficinas de Registro se abstendrán de autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio de UAF en las que no se protocolice la autorización expresa y escrita de la ANT para llevar a cabo la enajenación o la constancia o prueba de su rechazo expreso o tácito.

En todos los casos serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención a lo dispuesto en este artículo.

TÍTULO 7.

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES.

1. Administración Fondo Nacional de Tierras

ARTÍCULO 109. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA RURAL INTEGRAL. Asígnese la función de administrar el Fondo de Tierras para la Reforma Rural a la Subdirección de Administración de Tierras la Nación, acorde con lo previsto en los numerales 1 y 10 del artículo 25 del Decreto-ley número 2363 de 2015.

2. Subsidio Integral de Acceso a Tierras

ARTÍCULO 110. FUNCIONES EN MATERIA DE SUBSIDIO INTEGRAL DE ACCESO A TIERRAS. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Asígnese las funciones relacionadas con el Subsidio Integral de Acceso a Tierras a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 8 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 110. Asígnese las funciones relacionadas con el Subsidio Integral de Acceso a Tierras, cuando se trate de zona focalizadas, a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y, en los casos de zonas no focalizadas, corresponderá a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión; lo anterior acorde con lo previsto en los numerales 1 y 7 artículo 23 y numerales 1 y 5, artículo 24 del Decreto-ley número 2363 de 2015.

3. Formalización de predios privados

ARTÍCULO 111. FORMALIZACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 108 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Asígnese la función de emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 36 Y 37 del Decreto 902 de 2017, a la Subdirección de Seguridad Jurídica.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 108 de 2018, 'por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del , publicada en el Diario Oficial No. 50.552 de 2 de abril de 2018.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 111. Asígnese la función de emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 36 y 37 del Decreto-ley número 902 de 2017, a la Subdirección de Gestión Jurídica.

4. Rectificación Administrativa de Área y Linderos

ARTÍCULO 112. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS. Asígnese la función de adelantar el procedimiento de rectificación administrativa de área y linderos de que trata el artículo 63 del Decreto-ley número 902 de 2017, a la Subdirección de Seguridad Jurídica.

ARTÍCULO 113. VIGENCIAS, DEROGATORIAS Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 58 de la Resolución 12096 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica los artículos 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 8o, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33B, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, y 113, y los enunciados del Título 2, del Capítulo 2 del Título 3, Capítulo 3 del Título 3, Capítulo 4 del Título 3, Capítulo 5 del Título 3, adiciona los artículos 57A, 59A, 59B, 75A, 84A, y un enunciado al Capítulo 1 del Título 2 y deroga los artículos 5o, 7o, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 29, 31B, 47, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 78, 91 y 93 de la Resolución número 740 de 2017.

Con el fin de evitar la paralización y/o afectación de las actividades que se están realizando en los municipios focalizados, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad que a la fecha de expedición de esta resolución se encuentren en proceso de formulación, podrán seguir siendo estructurados bajo los lineamientos existentes antes de la presente modificación.

Sin embargo, aun en los casos en los cuales se determine que los Planes podrán seguir siendo estructurados bajo los lineamientos existentes antes de la presente modificación, lo dispuesto en el artículo 5o de la presente resolución se aplicará incluso a dichos planes conforme a los efectos ultractivos de la norma.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 58 de la Resolución 12096 de 2019, 'por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución número 740 de 2017', publicada en el Diario Oficial No. 51.066 de 4 de septiembre 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 740 de 2017:

ARTÍCULO 113. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

TÍTULO 8.

ORGANIZACIONES, COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CAMPESINAS DEL SECTOR SOLIDARIO O CON VOCACIÓN AGRARIA O CON VOCACIÓN AGRARIA.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

CAPÍTULO 1.

ALCANCE E INGRESO AL RESO.

ARTÍCULO 114. OBJETO Y ALCANCE. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Establézcase el manual operativo de asignación de derechos de propiedad, a título gratuito y/o parcialmente gratuito para asociaciones campesinas u organizaciones cooperativas del sector solidario, con vocación agrícola, pecuaria, forestal y/o pesquera.

Los siguientes artículos establecen los requisitos, criterios de calificación, esquemas de adjudicación y las obligaciones derivadas de la asignación de derechos sobre la tierra en favor de asociaciones campesinas u organizaciones cooperativas del sector solidario, con vocación agrícola, pecuaria, forestal y/o pesquera, en adelante, y para efectos del presente manual denominadas como organizaciones campesinas.

El programa de asignación de derechos que se establece en el presente manual funcionará de acuerdo con la oferta que para tales efectos realice la Entidad y su objeto lo constituyen los bienes inmuebles rurales administrados por la Agencia o de su propiedad.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 115. MÓDULO DE INGRESO DE ORGANIZACIONES AL RESO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Las

organizaciones que aspiren a los programas de asignación de derechos de propiedad regulados en el presente manual se relacionarán en un módulo independiente a los consignados en el artículo 45 de la Resolución 740 de 2017, bajo la denominación de “Módulo de Organizaciones Campesinas”. En él se consignarán las organizaciones que cumplan con las condiciones de elegibilidad establecidas en el siguiente artículo.

Para tal efecto la ANT, adoptará las medidas necesarias para que las solicitudes sean diligenciadas mediante el FISO.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 116. REQUISITOS PARA EL INGRESO AL RESO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Se ingresarán al RESO como sujetos de acceso a tierras las organizaciones campesinas que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:

1. Que su objeto de constitución comprenda actividades productivas de vocación agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal y/o pesqueras).

La acreditación de dichas condiciones se realizará sujetándose a las formas definidas normativamente como tarifa legal para la constitución de la respectiva organización.

2. Que los miembros postulados cumplan individualmente con las condiciones del RESO. Tales condiciones serán establecidas con el acto administrativo de ingreso al módulo de acceso a tierras del RESO.

En los casos en los que el ingreso al RESO no hubiere asignado puntos por la pertenecía a la respectiva organización se exigirá certificación expedida por esta, que asegure que los postulados pertenecen a ella en calidad de socios.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 117. PROYECTO PRODUCTIVO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Las organizaciones campesinas que sean seleccionadas deberán presentar un proyecto productivo de acuerdo con los formatos que establezca la entidad, que tendrá que ajustarse a los términos de referencia que establezca la ANT, los cuales se publicarán en la página web de la entidad.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 118. MIEMBROS POSTULADOS. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El proyecto productivo incluirá la identificación de los miembros de la organización campesina que adelantarán el aprovechamiento productivo de la tierra.

En caso de que uno de los miembros postulados sea adjudicatario de acceso a tierras, la organización campesina comunicará a la ANT, el nuevo miembro postulado en su reemplazo y el miembro inicialmente postulado será excluido del proceso de selección.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

CAPÍTULO 2.

REGLAS PROCEDIMENTALES PARA EL ACCESO A TIERRAS.

ARTÍCULO 119. ALISTAMIENTO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del manual operativo de asignación de derechos de propiedad a título gratuito y/o parcialmente gratuito para organizaciones campesinas, la ANT, adelantará un alistamiento con el objetivo de:

1. Estimar la demanda de tierras en la zona con base en la información disponible y las entradas del RESO en la zona a intervenir.

2. Identificar, previo análisis ambiental, técnico y jurídico, el predio o los predios que serán objeto de la convocatoria

Para todos los casos, la invitación para la postulación a los procedimientos se asignación de derechos en favor de organizaciones exigirá la identificación específica del bien inmueble objeto de la adjudicación.

Cuando la adquisición de los bienes inmuebles se hubiere condicionado a la ejecución de un programa específico de adjudicación, ésta deberá ser acatada en el acto administrativo de apertura de respectivo trámite.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 120. ACTO DE APERTURA. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Mediante acto administrativo la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dará apertura al procedimiento de selección y los términos en los que deben realizarse las postulaciones que incluyan por lo menos los siguientes aspectos:

1. Identificación de las condiciones técnicas jurídicas y ambientales de los predios objeto de las adjudicaciones.

2. Los términos de referencia que deberá contener el proyecto productivo.

3. La estimación del número mínimo y máximo de los individuos postulados para el aprovechamiento de los predios objeto de asignación de derechos de propiedad, teniendo en cuenta el cálculo de la UAF predial.

4. La programación de las jornadas para la recepción de FISO como paso para la inscripción en el RESO en los módulos de Acceso a Tierras y de Organizaciones.

5. Los plazos para la postulación en conjunto con la presentación de la propuesta del proyecto productivo por parte de las organizaciones y los términos en los que pueden realizar adiciones o complementaciones a las observaciones presentadas por la ANT.

6. La fecha de cierre de las postulaciones, la cual a su vez constituye el referente para realizar las asignaciones de puntos que acá se establecen.

El contenido de la Resolución de apertura deberá ser publicitada a través de medios de comunicación de amplia circulación regional o local, sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación según la dinámica del municipio. Además, dicha resolución será publicada en la página web de la ANT, quien podrá solicitar a las entidades que considere pertinentes, la publicación del acto de apertura en sus carteleras informativas y páginas web.

Para el acto administrativo de apertura se deberán tener en cuenta las siguientes circunstancias:

A. Se determinará si la adjudicación se realiza en favor de asociaciones campesinas o exclusivamente en adjudicaciones individuales, en consideración al análisis de los siguientes aspectos: (i) número de aspirantes inscritos en el módulo de acceso a tierras y el módulo de asociaciones, buscando privilegiar de los dos módulos, aquel en donde se identifiquen mayores aspirantes (ii) las condiciones técnicas para la implementación del proyecto productivo que recomienden realizarlo de manera asociativa o individual.

B. Se deberá dejar señalando las condiciones técnicas de los proyectos productivos a los que se destina la adjudicación, el número de unidades agrícolas familiares prediales susceptibles de ser adjudicadas, la zona de circunscripción en la que se adelantará el proceso de selección, los medios

ordinarios de los que se dispone para realizar las inscripciones nuevas al RESO o los procesos de actualización de aspirantes que ya figuren en él, esto es, la programación de jornadas dirigidas por la ANT para la recepción de FISO, actualización de datos y recepción de documentos y la fecha de corte de la información contenida en el Registro para efectos de determinar el orden de adjudicación respecto al puntaje.

C. La determinación de las áreas de circunscripción se realizará por municipios. Para su definición la ANT preferirá los municipios de ubicación de los predios, o sus colindantes. La ANT justificará técnicamente la delimitación según el número de aspirantes que figuren en el RESO, las características homogéneas del territorio y las relaciones comerciales entre los diferentes municipios. Excepcionalmente se podrán incluir municipios de otras zonas del país cuando no se identifiquen suficientes aspirantes dentro de los municipios de ubicación de los predios.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 121. CALIFICACIÓN Y UBICACIÓN EN EL RESO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Las organizaciones inscritas en el RESO, deberán cumplir los siguientes requisitos para su participación en los procesos de asignación de derechos de propiedad y ser ubicados según su calificación en el RESO.

CRITERIOS	PUNTUACIÓN	
CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS	Total 200	Documentos
a) Condiciones socioeconómicas y las necesidades básicas insatisfechas de los asociados y su núcleo familiar. Corresponde a la sumatoria de la puntuación en el módulo de Acceso a Tierras del RESO, obtenida por cada individuo que postuló la organización. La sumatoria deberá ser ponderada de acuerdo al puntaje asignado en este ítem.	50	IPM, será consultado por la ANT
b) Postulación de mujeres campesinas. Corresponde al porcentaje de mujeres postuladas por la organización respecto del total de miembros postulados por la organización. El porcentaje de mujeres será ponderado de acuerdo al puntaje asignado en este item.	100	FISO
c) Postulación de jóvenes rurales con formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales. Corresponde al porcentaje de jóvenes rurales con educación y /o formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales que adelanten o hayan adelantado estudios postulados por la organización respecto del total de miembros postulados por la organización. El porcentaje de jóvenes rurales de jóvenes rurales con educación y lo formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales será ponderado de acuerdo al puntaje asignado en este ítem. Para este puntaje se tendrá como equivalencia de la formación, la	50	FISO

certificación en trabajos agropecuarios por 3 años expedidos por las UMATAS, o Secretarías de Agricultura o Desarrollo Económico de los departamentos.		
CRITERIOS DE POLÍTICA PÚBLICA	Total 200	
d) Postulación de víctimas Corresponde al porcentaje de víctimas del conflicto armado, en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarías de las políticas de atención y reparación Integral a víctimas o del proceso de restitución, que hayan sido postuladas por la organización respecto del total de miembros postulados por la organización. El porcentaje de victimas será ponderado de acuerdo al puntaje asignado en este ítem.	100	Registro de Víctimas consultado por la ANT
e) Postulación de campesinos en territorios étnicos. Corresponde al porcentaje de campesinos postulados por la organización que se encuentren en predios al interior de territorios colectivos, resguardos o reservas constituidas por el Incora que estén pendientes de conversión a resguardos y aquellos que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades étnicas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes y que adicionalmente manifiesten mediante documento escrito su compromiso de restituir el predio que ocupan en caso de resultar beneficiada la organización con la asignación de derechos sobre propiedad a la cual se postulan. El porcentaje de campesinos en territorios étnicos será ponderado de acuerdo al puntaje asignado en este ítem.	50	FISO, certificación de la comunidad étnica y manifestación escrita del compromiso de restitución del predio
CRITERIOS DE POLÍTICA PÚBLICA	Total 200	
f) Campesinos objeto de Reubicación y Reasentamiento Corresponde al porcentaje de campesinos postulados por la organización, que hubiesen ejercido una ocupación irregular de terrenos baldíos o bienes fiscales patrimoniales y que hubiesen regulado su ocupación con la respectiva entrega material del predio o con la suscripción de acuerdos de aprovechamiento y/o reconversión del suelo y que adicionalmente manifiesten mediante documento escrito su compromiso de restituir el predio que ocupan en caso de resultar beneficiada la organización con la asignación de derechos sobre propiedad a la cual se postula. El porcentaje de campesinos objeto de reubicación y reasentamiento será ponderado de acuerdo al puntaje asignado en este ítem.	50	FISO, acuerdos de aprovechamiento y/o reconversión y manifestación escrita del compromiso de restitución del predio
CRITERIOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	Total 200	
h) Finalidad del proyecto productivo. Que con el proyecto se tenga objetivos de proteger el ambiente, sustituir cultivos ilícitos o fortalecer la producción alimentaria	20	Proyecto productivo
i) Víctima sujeto de reparación colectiva. Que la organización haya sido declarada como víctima sujeta a reparación colectiva	20	Certificación Unidad de Víctimas o entidad competente.
j) Experiencia. Que la organización tenga experiencia previa en la realización de actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o pesqueras. Los puntos asignados por el presente ítem serán ponderados conforme acá se establece.	20	Contratos, certificaciones u otras constancias que correspondan.

k) Residencia en el Municipio. Que los miembros postulados por la organización residan en la zona (vereda, corregimiento) o en el municipio de ubicación del predio	30	Alcaldía municipal, Juntas de acción comunal o la entidad que corresponda.
l) Permanencia en el RESO. Que la organización haya permanecido inscrita en el RESO, en el módulo de organizaciones sin haber accedido a alguna adjudicación. La permanencia será valorada desde el momento de la Inscripción de la organización, siempre que no hubiere sido beneficiaría de alguna adjudicación en cualquiera de los esquemas, o desde la fecha de última adjudicación.	10	RESO

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 122. SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se vaya a realizar el proceso de selección en determinada zona, la ANT consultará el RESO y con base en las organizaciones campesinas inscritas previamente y las que se inscriban en las jornadas, dispuestas para esto, se dispondrá como mínimo que un treinta (30%) de las organizaciones calificadas con los mayores puntajes en el RESO, participen en la siguiente fase donde se les calificará el proyecto productivo que presenten.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 123. ESQUEMAS PARA EJERCICIO DE LA PROPIEDAD. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Independiente del modo en el que se realicen las adjudicaciones, estas podrán definir que los derechos de propiedad que se transfieren con la adjudicación queden radicados en cabeza de la asociación o de determinados individuos que hagan parte de la asociación.

La propiedad radicada en las asociaciones promoverá el aprovechamiento del predio con individuos, que haciendo parte de la respectiva asociación, reúnan las condiciones de elegibilidad para los programas de acceso a tierras previstos en los artículos 4o y 5o del Decreto Ley 902 de 2017.

En los eventos en los que se disponga la adjudicación en favor de individuos pertenecientes a la asociación deberá igualmente garantizarse que los individuos cumplen con los requisitos de elegibilidad referidos. Si los individuos postulados superan la cabida definida para el predio, el proceso de selección se sujetará al orden en el que aparezcan en el RESO.

Las organizaciones deberán manifestar en el momento de la postulación al procedimiento el esquema de adjudicación por ellos elegido. Para tales efectos deberán acreditar que dicha decisión fue tomada por el máximo organismo de decisión.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 124. MESA TÉCNICA. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La Agencia Nacional de Tierras, conformará una mesa técnica donde invitará a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entre otras, con el fin de que estas entidades califiquen los proyectos productivos, y recomienden el más favorable de acuerdo a los siguientes criterios.

CRITERIOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO	Total 400	Documentos
k) Que el proyecto productivo cuente con posibilidades reales de mercado local, regional, nacional y/o internacional.	150	Contrato o Acuerdo.
CRITERIOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO	Total 400	Documentos
1) Que el proyecto productivo integre Buenas Prácticas Ambientales.	150	Componente ambiental en el documento proyecto.
m) Que el proyecto productivo cuente con valor agregado en el producto final.	100	Capítulo de valor agregado en el documento proyecto.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 125. ASIGNACIÓN DIRECTA. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Excepcionalmente y siempre que exista disposición expresa en favor de una organización determinada mediante norma legal o reglamentaria, sentencias judiciales, los procesos de adjudicación se realizarán de manera directa.

En estos casos la Agencia Nacional de Tierras adelantará el procedimiento único sin tener que adelantar las jornadas de que trata el artículo anterior y sin atender los factores de calificación y asignación de puntajes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de que trata el artículo 116 de la presente resolución.

Para estos eventos ANT efectuará los procesos de adquisición de los bienes inmuebles de manera

concertada con la organización campesina seleccionada de manera directa.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 126. RÉGIMEN TRANSITORIO PARA ASIGNACIÓN DIRECTA. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En los casos donde una institución de gobierno haya suscrito acuerdo con asociaciones u organizaciones campesinas para el acceso a tierras antes del 29 de mayo de 2017, dichos acuerdo y procedimientos se mantendrán en la forma como se venían ejecutando, pero todos los acuerdos posteriores a esa fecha deberán realizarse conforme lo establece la norma vigente, para la adquisición y adjudicación a dichas asociaciones u organizaciones. Esta norma es aplicable a los casos de la Cumbre Agraria.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 127. PAGO POR LA ASOCIACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Para el caso en que los postulados como miembros de la organización sean personas comprendidas en el artículo 5o del Decreto Ley 902 de 2017, y sean estos seleccionados dentro del proceso de asignación de tierras, deberá la organización pagar el valor correspondiente de acuerdo con las tarifas que especifique la ANT en ejercicio de la competencia prevista por el articulo número 7 ibídem.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 128. EJECUTORIA Y REGISTRO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriado el acto administrativo que asigna el derecho, procederá la ANT a remitirlo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo registral donde se ubica el predio, con el fin de que se realice la calificación y registro de la propiedad a nombre de la asociación, o de los beneficiarios si se hubiere escogido dicha opción. Los pagos del impuesto departamental de registro serán asumidos por la asociación asignataria de la adjudicación, para las adjudicaciones individuales se seguirá las reglas consignadas en este manual operativo en el capítulo 5 del título 3. El no pago del impuesto conlleva a que no se registre la

propiedad en cabeza de la organización, absteniéndose la ANT de realizar la entrega material del inmueble hasta tanto la inscripción en registro no se haya efectuado.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

CAPÍTULO 4.

OBLIGACIONES Y SEGUIMIENTO.

ARTÍCULO 129. SEGUIMIENTO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La ANT realizará seguimiento a la adjudicación con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo de asignación del derecho y el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Así mismo, verificará que el proyecto productivo esté siendo ejecutado por los asociados seleccionados.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 130. EJERCICIO DE LA PROPIEDAD. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La propiedad será transferida a la organización, que será responsable ante la ANT y ante las demás autoridades por el seguimiento y el cumplimiento de las obligaciones por parte de la persona jurídica y por parte de sus asociados.

La ANT de acuerdo con la solicitud presentada por la organización comunitaria, otorgará la propiedad de manera individual para los asociados postulados y seleccionados, quienes se obligarán a ejecutar el proyecto productivo formulado por la organización. Así mismo, la organización deberá comunicar a la ANT en caso de que el adjudicatario individual no esté cumpliendo sus obligaciones adquiridas con el fin de que se inicien las actuaciones administrativas o judiciales del caso.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 131. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA PROPIEDAD. <Artículo

adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La organización y los asociados seleccionados se sujetarán al conjunto de obligaciones previstas en el artículo 8o del Decreto Ley 902 de 2017. Para efectos de la aplicación del numeral 1 del mencionado artículo se entenderá que la explotación del predio se adelanta por parte de los miembros de la asociación según los beneficiarios postulados para la ejecución del proyecto productivo.

PARÁGRAFO. Dentro de las resoluciones de adjudicación deberá expresamente consignarse la condición resolutoria de la adjudicación cuyo incumplimiento faculta a la ANT para que adelante la actuación administrativa dirigida a identificar si se configuró el incumplimiento injustificado al régimen de obligaciones derivadas de la adjudicación, y disponer como consecuencia que los predios retornen al dominio de la ANT para un posterior proceso de adjudicación. Dichas actuaciones serán adelantadas conforme a las reglas previstas en la Ley 1437 de 2011, especialmente las referidas a los procedimientos sancionatorios.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 132. FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Las adjudicaciones efectuadas a las asociaciones en cualquiera de las modalidades y esquemas acá previstos no constituyen óbice para dar cumplimiento a la función social y ecológica de la propiedad, y la procedencia de las acciones dirigidas a sancionar su inobservancia.

No obstante, decretada la extinción del dominio las tierras revertidas al dominio de la Nación deberán destinarse preferencialmente a la adjudicación de otras asociaciones campesina.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 133. OPORTUNIDADES DE POSTULACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Las asociaciones campesinas que hubieren sido sujeto de adjudicaciones podrán hacer tantas solicitudes de tierras como deseen siempre que demuestren que al interior de su organización subsisten individuos que no han sido beneficiarios de las anteriores adjudicaciones, y que estos participarán en el nuevo proyecto presentado.

En consecuencia, la extensión máxima de tierras que podrá ser adjudicada a una organización será aquella requerida para la implementación de uno o varios proyectos productivos hasta cuando todos

los miembros elegibles de la asociación se encuentren vinculados a estos proyectos.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

ARTÍCULO 134. REMISIÓN NORMATIVA. En lo no previsto por el presente capítulo, se aplicarán las demás disposiciones de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Título adicionado por el artículo 1 de la Resolución 2562 de 2018, 'por la cual se adiciona la Resolución 740 de 2017 en materia de acceso a tierras para asociaciones campesinas, organizaciones comunitarias y otras formas de economía solidaria', publicada en el Diario Oficial No. 50.632 de 22 de junio de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de junio de 2017.

El Director General Agencia Nacional de Tierras,

MIGUEL SAMPER STROUSS.

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
n.d.
Última actualización: 18 de julo de 2021

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. -915- DE 2020

(12 FEB 2020)

"Por la cual se expiden reglas para la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en Zonas no Focalizadas y se adoptan otras disposiciones"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 1º, 2º, 5º, 14, 18 y 22 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 7 de diciembre de 2015 y el artículo 69 del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley-902 del 29 de mayo de 2017, expedido en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República a través del Acto Legislativo 01 de 2016, adopta medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en materia de tierras, específicamente en lo relacionado con la conformación del Fondo de Tierras y la consagración del Procedimiento Único para el acceso, formalización y administración de los derechos sobre predios rurales.

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-073 de 2018 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 60 del Decreto-Ley 902 de 2017, en el entendido de que los Manuales o Reglamentos Operativos que expida el Director General de la ANT no pueden tener el alcance de establecer un procedimiento distinto al Procedimiento Único.

Que el 13 de junio de 2017, el Director General de la Agencia Nacional de Tierras profirió la Resolución 740 del mismo año, por medio de la cual se expidió el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictaron otras disposiciones.

Que conforme a lo establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y en la Resolución 740 de 2017 expedida por la Agencia Nacional de Tierras, el Registro de Sujetos de Ordenamiento –RESO, podrá conformarse a través de solicitud de parte, según las reglas allí establecidas, para lo cual los particulares podrán por su iniciativa, solicitar la inscripción en el módulo de acceso a tierras del mencionado registro, diligenciando para ello el Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento - FISO.

Que, en el mismo sentido, el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Ley 902 de 2017 dispuso que *"El RESO constituirá un instrumento de planeación y de ejecución gradual de la política pública, bajo el principio de reserva de lo posible, a fin de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva"*.

Que, en aplicación de los principios de gradualidad y reserva de lo posible, la operación de la Agencia Nacional de Tierras está condicionada a la existencia y disponibilidad de recursos, así como a la circunscripción del RESO en municipios donde se encuentren los inmuebles susceptibles de ser adjudicados, señalando que, tal como lo reconoció la H. Corte Constitucional en la sentencia C–073 de 2019, *"Es (...) evidente que la finalidad del acuerdo es establecer una reforma integral a largo plazo, que se implementará de forma progresiva, sin que se hayan comprometido al cumplimiento de tareas que superen las capacidades del Estado. Por el contrario, los negociadores fueron*

conscientes de la magnitud de la meta a alcanzar y desde su formulación, establecieron en el acuerdo una reserva de lo posible, que coincide con lo estipulado en el artículo sub examine."

El artículo 2° de la Resolución 7622 de 2019, *"por la cual se expiden nuevas reglas para la ejecución de procedimiento único en zonas no focalizadas"*, que modifica el artículo 92 de la Resolución 740 de 2017 , modificada por la Resolución 3234 de 2018 , en relación con el procedimiento de formalización privada, aclara que *"se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80, en el sentido que si dentro del término señalado en el artículo 69 no comparece ningún tercero indeterminado a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá prescindir el periodo probatorio, siempre que las pruebas recaudadas sean suficientes para poder proceder a emitir la correspondiente decisión de cierre de la fase administrativa del procedimiento único, sin necesidad de que previamente sea emitido el informe técnico jurídico definitivo"*

Que mediante la Resolución 12096 de 2019 se adicionaron, modificaron y derogaron algunos artículos de la Resolución 740 de 2017, modificada a su vez por las resoluciones 108, 3234 de 2018, 4477 y 7622 de 2019, entre los cuales se suprimió el procedimiento RESO para el ingreso a los módulos de acceso a tierras y formalización, instituyéndose un procedimiento general en el marco del cual se ingresará a la persona al registro, una vez se dé apertura a los procedimientos administrativos de asignación o reconocimiento de derechos sobre la tierra, formalización privada y demás asuntos ventilados a través del Procedimiento Único.

Que el artículo 41 de la Resolución 12096 de 2019 modificó el artículo 67 de la Resolución 740 de 2017, disponiendo que sería la respectiva área misional de la ANT, y no el peticionario o aspirante, quien definiría el régimen sustancial más favorable a partir de la valoración de la información técnica y jurídica recabada durante el barrido.

Que de acuerdo con el artículo 41 del Decreto Ley 902 de 2017 señalo: "Procedencia del procedimiento en zonas no focalizadas. En las Zonas No Focalizadas el Procedimiento Único podrá iniciarse de oficio, o a solicitud de parte aceptada por la Agencia Nacional de Tierras, en los términos señalados por el artículo 61 del presente decreto".

Que el Parágrafo del artículo 26 de la Resolución 12096 de 2019 precisó que, a pesar de lo expuesto en la exposición de motivos de la referida resolución según la cual "lo dispuesto en esta Resolución regula los procedimientos que se desarrollan en zonas focalizadas de modo que en áreas no focalizadas se aplican las disposiciones pertinentes sobre la materia" no se aplicaría a lo dispuesto tanto en el nuevo esquema de puntuación, como en el régimen de tarifa legal

Que el Artículo 26 de la Resolución 12096 de 2019 modificó el artículo 45 de la Resolución 740 de 2017, variando su numeral 3°, en cuanto a los puntajes asignados por permanencia a una organización campesina y el puntaje de calificación por cada mes de permanencia en el Módulo de Acceso a Tierras del RESO.

Que, con el fin de definir el tratamiento que se dará a los aspirantes que diligenciaron su solicitud en el sistema de la ANT bajo las reglas originales de inclusión y priorización establecidas en la Resolución 740 de 2017, la Agencia Nacional de Tierras considera necesario establecer unos criterios de la valoración e ingreso en el RESO que permitan aplicar las disposiciones de la Resolución 12096 de 2019.

Que para ello, con el propósito de garantizar los principios de seguridad jurídica y buena fe y en aras de facilitar el desarrollo del Procedimiento Único del Ordenamiento Social de la Propiedad, así como la operatividad de la entidad, es necesario dictar reglas operativas que, además de permitir el establecimiento del procedimiento para el diligenciamiento del FISO, aclarare el alcance de la normatividad que regirá la totalidad de Formularios de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento que fueron diligenciados antes de la expedición de la Resolución 12096 de 2019.

Que el artículo 4º de la Resolución 1099 de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública *"por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites"*, dispone que *"cuando el trámite sea creado y regulado por la ley, las entidades y organismos públicos o los particulares que cumplen funciones administrativas responsables del trámite deberán registrarlo en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, en los términos que los que fue creado o regulado"*.

Que mediante Memorando 20181000582771 se solicitó aprobación del trámite de registro de sujetos de ordenamiento -RESO, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer las directrices generales para el desarrollo de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Tierras en relación con las solicitudes de inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), específicamente en los siguientes eventos:

1. La valoración de las solicitudes de inscripción al RESO radicadas con anterioridad a la publicación de la Resolución 12096 de 2019 y la remisión a las dependencias competentes para adelantar el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad.
2. La valoración de las solicitudes de inscripción al RESO radicadas con posterioridad a la publicación de la Resolución 12096 de 2019 y la remisión a las dependencias competentes para adelantar el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en Zonas no Focalizadas.
3. Otras reglas relacionadas con la operación del RESO en Zonas Focalizadas y No Focalizadas.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución 7622 de 2019, lo dispuesto en esta Resolución no será aplicable, a los procesos de formalización de predios privados que se encontraban a cargo del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural y que, por virtud del artículo 35 del Decreto-Ley 2363 de 2015, fueron asumidos por la Subdirección de Seguridad Jurídica, órgano de la Dirección de Gestión de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.

Artículo 2. Criterios de valoración e ingreso en el RESO para los trámites de reconocimiento de derechos. Para las solicitudes recibidas hasta el 4 de septiembre de 2019, en las que se identifiquen ocupaciones de bienes baldíos iniciadas antes del 29 de mayo de 2017, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, la ruta jurídica a aplicar corresponderá al régimen jurídico escogido por el aspirante mediante el *"documento de escogencia de régimen"*. Lo anterior, sin perjuicio de que la Agencia Nacional de Tierras, de oficio, en operación del barrido predial, pueda recomendarle al

solicitante que, por razones de favorabilidad, desista por escrito y de forma motivada al régimen al cual se acogió inicialmente y se acoja al que le resulte beneficioso a juicio de la Agencia.

Artículo 3. Criterios de valoración e ingreso en el RESO para solicitudes de acceso a tierras y formalización. Para las solicitudes de parte recibidas hasta el 4 de septiembre de 2019, serán aplicables las reglas vigentes al momento de su inscripción, es decir, las señaladas en el artículo 47 de la Resolución 740 de 2017.

Parágrafo. La totalidad de los FISO que fueron radicados antes del 4 de septiembre de 2019 serán valorados conforme a los puntajes y estándares probatorios existentes en el artículo 26 de la Resolución 12096 de 2019.

Parágrafo 1. Los recursos que se presenten contra decisiones de inclusión en el RESO que hubiesen sido interpuestos contra actos de inclusión y puntuación valorados con los puntajes iniciales contenidos en el artículo 45 de la Resolución 740 de 2017, serán decididos con fundamento en la redacción original de dicha norma.

Artículo 4. Actualización de puntajes de solicitantes que fueron valorados con los criterios originales establecidos en el artículo 45 de la Resolución 740 de 2017. Previo a la expedición del acto administrativo de Apertura para la Asignación de Derechos, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras actualizará los puntajes obtenidos por los aspirantes que fueron incluidos al módulo de acceso a tierras en vigencia del artículo 47 de la Resolución 740 de 2017, así como los que sean calificados conforme a los criterios de valoración e ingreso en el RESO establecido en la presente norma, de acuerdo a las disposiciones normativas que se encuentren vigentes.

Artículo 5. Valoración de los formularios FISO con posterioridad a la publicación de la Resolución 12096 de 2019. La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, a solicitud de la respectiva área misional, analizará de manera gradual las solicitudes de valoración y puntuación.

Tratándose de la operación por barrido predial, la valoración y puntuación tendrá lugar una vez en el respectivo municipio o zona de intervención sea implementado el respectivo Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad.

Parágrafo: Respecto de zonas no focalizadas, la valoración y puntuación se realizará una vez la respectiva área misional lo solicite.

Artículo 6. Acto de no inclusión. Una vez verificado que el aspirante no cumple con las condiciones establecidas para el ingreso al RESO establecidas en los artículos 4°, 5° o 6° del Decreto Ley 902 de 2017, se expedirá un acto administrativo de no inclusión por parte de la Subdirección de Sistemas de Información de la ANT. Contra este acto procederá el recurso de reposición en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7. Facultades del Director de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad para actualizar los datos y unidades de intervención contenidos en los POSPR. Con el propósito de garantizar que la información contenida en los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad se adecúe a los cambios en la tenencia y propiedad de la tierra que se identifiquen, el Director de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras podrá expedir, mediante Resolución de ajuste, las actualizaciones de predios a intervenir, población a atender y unidades de intervención a tratar, cuando de la información recolectada por la

Subdirección de Planeación Operativa o los socios estratégicos se evidencie un cambio sustancial en la información recolectada en el respectivo Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad.

Artículo 8. Adiciónese al numeral 5° del artículo 45 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 26 de la Resolución 12096 de 2019, lo siguiente:

"Parágrafo. Personas a cargo: Se dará una calificación de diez (10) puntos por cada hijo menor de 18 años que dependa económicamente del solicitante, personas de la tercera edad o disminuidos físicos, síquicos o sensoriales o personas del grupo familiar quienes por sus condiciones físicas, psicológicas o sociales soporta restricciones en su participación plena y activa en la sociedad.

Artículo 9. Modificación del artículo 2° de la Resolución 740 de 2017, Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR): Modifíquese el artículo 2° de la resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"**Artículo 2.** Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural son instrumentos de diagnóstico y planificación mediante los cuales la ANT organiza su actuación institucional por oferta, en zonas focalizadas, de manera integral y por unidades de intervención.

El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) se compone de dos momentos:

(i) El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Operativo, el cual caracteriza la realidad jurídica y territorial de los municipios previamente focalizados, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la intervención por oferta y planificación de la metodología de intervención por barrido predial masivo (BPM) en los territorios.

(ii) El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Consolidado, el cual se elabora una vez se ha culminado el proceso de barrido predial masivo (BPM) y validado la información física y jurídica acopiada en campo, con el objetivo de diagnosticar las situaciones que requieren el ejercicio de las competencias de la Agencia en materia de Ordenamiento Social de la Propiedad

Parágrafo 1°. De la evaluación de la viabilidad de la intervención realizada en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural Operativo la Agencia podrá concluir que no procede aplicar metodología de barrido predial masivo. En estos casos el ejercicio de las competencias de la Agencia se desarrolla bajo el modelo de demanda.

Parágrafo 2. Lo dispuesto en este artículo se aplicará incluso a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad ya formulados".

Artículo 10. Mesa de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Créase la Mesa de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que tendrá por objeto realizar labores de coordinación y seguimiento en torno al buen funcionamiento de las fases de formulación, implementación y mantenimiento de la Política Pública de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural

Artículo 11. Funciones. La Mesa de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural tendrá las siguientes funciones:

1. Servir como instancia de Coordinación y Planeación.

2. Promover y orientar la articulación institucional en torno al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios focalizados y por focalizar.

3. Evaluar el desarrollo y avance de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y proponer soluciones jurídicas operativas conjuntas cuando se requiera.

4. Tomar decisiones de carácter técnico en lo relacionado con las competencias de cada Subdirección de atención por oferta.

5. Aprobar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural operativos y consolidados.

6. Determinar la viabilidad de continuar o no con la fase de implementación del modelo de atención, conforme a los insumos técnicos presentados por los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Operativos

7. Documentar las buenas prácticas en cuanto al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Artículo 12. Conformación. En la Mesa de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural ejercerán las labores de secretaría técnica la Subdirección de Planeación Operativa y se conformará de la siguiente manera:

1. El/la Directora(a) General o su delegado (a)
2. El/la Director(a) Oficina Asesora Jurídica o su delegado (a).
3. El/la Director(a) de Ordenamiento Social de la Propiedad o su delegado (a)
4. El/la Subdirector(a) de Planeación Operativa o su delegado(a)
5. El/la Subdirector(a) de Seguridad Jurídica o su delegado(a)
6. El/la Subdirector(a) de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas o su delegado(a)
7. El/la Subdirector(a) de Administración de Tierras de la Nación o su delegado(a)

Artículo 13. Protocolo. La mesa de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se regirá por su propio protocolo.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 12 FEB 2020

MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Revisó: Yolanda Margarita Sánchez Gómez– Jefe Oficina Jurídica
Carolina Araujo Gallo– Asesora Dirección General
Aprobó: Felipe Espinosa Camacho – Director de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad
Leonardo Antonio Castañeda Celis – Subdirector de Demanda y Descongestión
Duberly Eduardo Murillo- Subdirector de Sistemas de Información
Proyectó: Francisco Javier Lara – Abogado Dirección de ordenamiento Social de la Propiedad

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No 12096 DE 2019

16 AGO 2019

"Por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución 740 de 2017".

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 11, 45, 60, 63, 66 y 69 del Decreto Ley 902 del 29 de mayo 2017 y los numerales 1, 2, 5, 14 y 18 del artículo 11 del Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma constitucional, se promulgó el Decreto-Ley 2363 de 7 de diciembre de 2015, por medio del cual se creó la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, como agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de su competencia.

Que el Decreto-Ley 902 de 2017 establece la necesidad de actuar por Oferta a través de las metodologías de barrido predial masivo, de manera que la ANT logre llegar al territorio de manera planeada, articulada, participativa y expedita, regularizando, de forma integral, masiva y progresiva, las situaciones irregulares de tenencia y uso de la tierra.

Que, en concordancia con lo anterior, el Decreto-Ley 902 de 2017 ordenó a la ANT la puesta en marcha de la política pública de Ordenamiento Social de la Propiedad a través de la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, como instrumentos de planificación mediante los cuales se organiza la atención por oferta en zonas focalizadas, teniendo como componente el barrido predial masivo, así como, la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, para gestionar la solución de las situaciones irregulares frente al acceso, uso y tenencia de la tierra.

Que los artículos 60 numeral 1° literal b y 69 del Decreto-Ley 902 de 2017, establecen en cabeza del Director General de la ANT la facultad de expedir los Reglamentos Operativos necesarios para desarrollar el procedimiento ya contemplado en el referido Decreto-Ley, en lo ateniente a los Planes y Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 60 del Decreto-Ley 902 de 2017, en el entendido de que los Manuales o Reglamentos Operativos que expida el Director General de la ANT no pueden tener el alcance de establecer un procedimiento distinto al Procedimiento Único.

Que el 13 de junio de 2017, el Director General de la Agencia Nacional de Tierras profirió la Resolución 740 del mismo año, por medio de la cual se expidió el reglamento operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictaron otras disposiciones.

Que a partir de la expedición de la Resolución 740 de 2017 y sus resoluciones modificatorias 108, 3234 de 2018 y 4477 de 2019, se han identificado aspectos operativos que generan dificultades y hacen más lenta y costosa la operación de la entidad en zonas focalizadas, especialmente tratándose de aquellas etapas o instrumentos en las que se identifica de manera preliminar la información física, jurídica y de tenencia de los inmuebles, actividad que debe revisarse, dado que la operación de barrido predial permite hacer una actualización de la información optimizándose el procedimiento único de que trata el articulo 40 y siguientes del Decreto-Ley 902 de 2017.

Que, atendiendo a la integralidad del proceso, y su optimización, se requiere el ajuste de algunos procedimientos que faciliten la masividad en la intervención. y con el objetivo de garantizar la participación efectiva de los actores comunitarios e institucionales.

Que, en el marco de la política pública de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, resulta adecuado proponer una ruta metodológica para los Planes de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que garanticen un eficiente y eficaz instrumento de planificación para el actuar de la ANT, bajo la modalidad de oferta.

Que lo dispuesto en esta Resolución regula los procedimientos que se desarrollan en zonas focalizadas de modo que en áreas no focalizadas se aplican las disposiciones pertinentes sobre la materia.

Que dicha ruta debe comprender la elaboración y puesta en marcha de estrategias de participación ciudadana en sentido amplio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer las directrices generales para el desarrollo de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, en los siguientes asuntos:

1. Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en sus diferentes fases.

2. La ejecución de la fase administrativa del Procedimiento Único en zonas focalizadas.

3. La asignación de funciones que complementan lo dispuesto en el Decreto 2363-Ley de 2015 en aspectos concernientes a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en zonas focalizadas.

4. Las reglas de escogencia del régimen aplicable para los casos en los que exista ocupación iniciada antes de la entrada en vigencia del Decreto-Ley 902 de 2017".

Artículo 2. Modifíquese el enunciado del Título 2 de la Resolución 740 de 2017 y adiciónese un nombre al capítulo 1, el cual quedará así:

TÍTULO 2

PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL

Capítulo 1

DEFINICIÓN, ALCANCE Y FASES.

Artículo 3. Modifíquese el artículo 2 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 2. Definición y alcance de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural son instrumentos de planificación

mediante los cuales la ANT organiza su actuación institucional por oferta en las zonas focalizadas, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a regularizar las relaciones de tenencia con la tierra, de manera integral y por unidades de intervención".

Artículo 4. Modifíquese el artículo 3 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"**Artículo 3. Fases del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (plan De Ordenamiento Social de la Propiedad Rural).** Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, contemplan las siguientes fases:

1. Formulación.

2. Implementación.

3. Evaluación y mantenimiento".

Artículo 5. Modifiquese el parágrafo único del artículo 4 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 1 de la Resolución 108 de 2018, el cual quedará así:

Parágrafo: Elaborado el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural éste deberá ser aprobado por el Director General de la ANT.

La resolución que apruebe el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural no deberá contener la relación de los Folios de Matricula Inmobiliaria que se afectaran como medida publicitaria en el marco de los procesos de Ordenamiento Social de la Propiedad, en tanto la etapa de publicidad conforme lo establece el parágrafo del artículo 40 del Decreto Ley 902 de 2017 se reserva hasta el momento de la implementación del Procedimiento Único mediante la estrategia de barrido predial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley 902.

Artículo 6. Modifíquese el artículo 6 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"**Artículo 6. Necesidad de barrer la totalidad del área focalizada para adjudicaciones directas.** Para aquellos procesos de acceso a tierras en los cuales sea necesario adelantar acciones de priorización de beneficiarios, será necesario haber realizado el barrido predial de la totalidad del territorio focalizado con el fin de consolidar el RESO y seleccionar a los destinatarios de dicha oferta, de acuerdo con los recursos disponibles y los puntajes del registro. Los demás asuntos que se sometan a la competencia de la ANT con ocasión de la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, podrán ser atendidos y resueltos por unidades de intervención, sin necesidad de agotar el barrido predial en la totalidad del territorio focalizado".

Artículo 7. Modifíquese el artículo 8 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 8. Actividades a través de terceros. La ANT podrá contratar actividades a través de terceros, para que las desarrolle bajo sus lineamientos, estándares y directrices. Dichas actividades no incluyen la decisión de procedimientos misionales a cargo de la ANT".

Artículo 8. Modifíquese el artículo 17 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 17. Espacios de participación comunitaria para el OSPR. Sin perjuicio de las estrategias de comunicación que se establezcan y de cualquier otra modalidad de vinculación activa de los actores del territorio al Ordenamiento Social de la Propiedad, la ANT facilitará espacios de participación comunitaria para la ejecución de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural".

Artículo 9. Modifíquese el artículo 18 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"**Artículo 18. Diseño e implementación de estrategia de comunicación.** Desde la fase de formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, se debe construir una estrategia de comunicaciones orientada a divulgar, ejercer pedagogía y posicionar los objetivos y la implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en todas sus fases. Esta estrategia estará dirigida a la comunidad, autoridades locales y socios estratégicos.

La implementación de la estrategia será transversal a todas las fases y deberá acoger los siguientes criterios enfocados en los usuarios identificados: i) La difusión de mensajes clave que alisten y mantengan informado al territorio sobre la operación; ii) La promoción de la participación comunitaria como un eje transversal a las acciones a realizar; y, iii) La generación y divulgación de material

pedagógico que facilite la comprensión de conceptos, alcances y roles para que el OSPR se desarrolle efectivamente en el territorio y coadyuve al posicionamiento de la ANT".

Artículo 10. Modifíquese el artículo 21 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 2 de la Resolución 108 de 2018 el cual quedará así:

"Artículo 21. Verificación previa de presencia de comunidades étnicas. Previo al inicio del Procedimiento Único del Ordenamiento Social de la Propiedad y con el fin de prever posibles afectaciones a comunidades étnicas, conflictos interculturales o necesidad de consulta previa, la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT comunicará a la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural las pretensiones étnicas de comunidades, consistentes en solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, y constitución de territorios colectivos en beneficio de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de las que tenga conocimiento y solicitará al Ministerio del Interior la certificación sobre la presencia o no de dichas comunidades étnicas".

Artículo 11. Modifíquese el enunciado del Capítulo 1 del Título 3 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Capítulo 1

FORMACIÓN DE EXPEDIENTES, BARRIDO PREDIAL, INFORME TÉCNICO JURÍDICO

Artículo 12. Modifíquese el artículo 22 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 22. Formación de expedientes. Teniendo en cuenta la información recabada en el barrido predial, y una vez identificados los inmuebles rurales existentes en una determinada unidad de intervención, se dará apertura a un expediente por cada inmueble objeto de procedimiento único".

Artículo 13. Modifíquese el artículo 23 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 3 de la Resolución 108 de 2018, el cual quedará así:

"Artículo 23. Contenido mínimo del expediente. El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y comunicaciones oficiales que se expidan y recauden en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad. Deberá contener como mínimo y para efectos de su apertura, un informe técnico jurídico, que consigne la información catastral y/o registral del respectivo inmueble y que realice un análisis sobre la situación jurídica y de tenencia del inmueble que permita determinar cuál de los asuntos previstos en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 es necesario iniciar, junto con el FISO y/o el formulario único predial".

Artículo 14. Modifíquese el artículo 24 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 3 de la Resolución 108 de 2018, el cual quedará así:

"Artículo 24. Análisis predial previo al barrido. Previo al barrido predial, la ANT deberá analizar la información oficial en las bases de datos disponibles con el objetivo de programar la operación de campo"

Artículo 15. Modifíquese el artículo 25 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 25. Normas técnicas aplicables a los expedientes. Los expedientes del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad se sujetarán en su conformación, alimentación, archivo y demás elementos a las normas técnicas plasmadas en la Ley 594 de 2000, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo 02 de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación, o aquellas que le modifiquen o sustituyan".

Artículo 16. Modifíquese el artículo 26 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 26. Tránsito hacia expedientes digitales. La ANT a través de la Secretaría General, implementará mecanismos para que la información y los expedientes reposen en un Sistema de Gestión Electrónico de Archivo y que, con apoyo en las tecnologías de la información, los expedientes físicos sean sustituidos por expedientes digitales, en lo que tiene que ver con la creación

de nuevos expedientes, que estarán conformados por las reproducciones digitales de las actuaciones o en cuanto fuera posible, íntegramente por mensajes de datos.

La implementación de los expedientes digitales estará integrada por todos los procesos y herramientas de gestión de la ANT, en el marco de la presente Resolución, por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales. Para ello se dispondrá su uso obligatorio de manera gradual, de acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello".

Artículo 17. Modifíquese el artículo 27 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 27. Barrido predial masivo para efectos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Es una actuación institucional de la ANT coordinada para desplazarse a los predios rurales que componen una determinada Unidad de Intervención o la totalidad del territorio focalizado, según se trate, con equipos interdisciplinarios para levantar y/o validar la información física, jurídica y social que se determine.

Parágrafo. Para efectos de determinar el alcance del barrido predial masivo, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 6° de la presente Resolución". Las especificaciones técnicas para efectos de los levantamientos prediales realizados en desarrollo del barrido predial masivo, corresponderán a aquellas determinadas por la autoridad catastral reguladora.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 28 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"**Artículo 28. Planeación del barrido predial masivo para efectos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.** Conforme a los resultados de la fase de formulación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de la que trata el artículo 44 del Decreto Ley 902 de 2017 y del análisis de la información disponible, la ANT y/o los terceros contratados para el efecto en virtud del artículo 8° de la presente Resolución, definirán un cronograma de visitas para la intervención en el territorio".

Sobre los predios que ya hayan sido visitados y que no sean objeto de adjudicación directa, la ANT podrá iniciar de inmediato el procedimiento único, en tanto se continúa con el barrido de los predios restantes.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 30 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 30. Comunicación del inicio del barrido predial masivo para efectos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. La ANT o el tercero ejecutor del barrido, con arreglo al artículo 8° de la presente Resolución informará a la comunidad sobre el inicio del barrido predial mediante el plan de comunicaciones establecido para tal fin, con arreglo al artículo 18 de la presente resolución".

Artículo 20. Modifíquese el artículo 31 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 31. Elementos a recoger en el barrido predial masivo para efectos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. En el marco del barrido predial masivo con fines de ordenamiento social de la propiedad, la ANT levantará la información de las variables físicas y jurídicas incorporadas en el formulario único de catastro multipropósito, incluyendo el levantamiento predial correspondiente, a través de métodos directos o indirectos de acuerdo con las características del municipio y siguiendo las especificaciones técnicas determinadas en la materia.

Así mismo recogerá en el municipio objeto de intervención, a través de visitas o jornadas masivas, la siguiente información:

1. Información conducente que permita establecer las rutas de atención competencia de la ANT.
2. Información sobre la existencia de potenciales beneficiarios de acceso a tierras.
3. Verificación de restricciones y condicionantes respecto de la titulación y la formalización, conforme a los lineamientos establecidos por la ANT, en los casos que se requiera.
4. Información adicional relacionada con el uso y explotación económica de los predios, en los casos que se requiera.

Parágrafo. En las visitas o jornadas masivas que se adelanten en el municipio objeto de intervención se recopilaran las autorizaciones para realizar las notificaciones electrónicas de los actos administrativos que se expidan en desarrollo del procedimiento único.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 32 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 32. Información de barrido predial masivo para efectos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. La información obtenida en los barridos prediales será ordenada, depurada y clasificada por la ANT y/o el tercero que se encuentre interviniendo el territorio. Esta información será remitida a la Subdirección de Planeación Operativa para su revisión, quien posteriormente la enviará a la Subdirección de Sistemas de Información, la cual se encargará de dirigirla a cada una de las Subdirecciones para la ejecución de la fase administrativa del Procedimiento Único.

Parágrafo. Las jornadas de diligenciamiento FISO se adelantarán únicamente en el marco de la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, ello sin perjuicio del procedimiento general establecido para zonas no focalizadas

Artículo 22. Modifíquese el artículo 33B de la Resolución 740 de 2017 adicionado por el Artículo 1 de la Resolución 3234 de 2018, el cual quedará así:

"Artículo 33B. Acto administrativo de archivo. Cuando en los expedientes conformados el Informe Técnico Jurídico concluya la inexistencia de supuestos de hecho o de derecho para dar inicio a alguna de las pretensiones agrarias señaladas en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, la Subdirección pertinente expedirá un acto administrativo que ordenará no dar inicio a la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el respectivo inmueble o solicitud.

En tal sentido, respecto de esos casos, no se proferirá el acto administrativo de apertura de que trata el literal c) del artículo 60 del Decreto-Ley 902 de 2017, y contra el acto que ordena el archivo procederá el recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme a las reglas generales definidas en la Ley 1437 de 2011.

Cuando la solicitud verse sobre la asignación o reconocimiento de derechos y el Informe Técnico Jurídico concluya su improcedencia, también se expedirá un acto administrativo que ordenará el no inicio de la segunda parte de la fase administrativa, y contra el cual procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación".

Artículo 23. Modifíquese el enunciado del Capítulo 2 del Título 3 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Capítulo 2

CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS, ACTAS DE COLINDANCIA

Artículo 24. Modifíquese el enunciado del Capítulo 3 del Título 3 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Capítulo 3

REGISTRO DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO - RESO

Artículo 25. Modifíquese el artículo 44 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 44. Entradas. El RESO podrá conformarse a través de cualquiera de las siguientes entradas:

1. Registros administrativos.
2. Solicitud de parte.
3. Barrido predial.

4. Decisiones judiciales".

Artículo 26. Modifíquese el artículo 45 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 45. Factores de calificación y asignación de puntajes.

La calificación de la persona aspirante al Módulo de Acceso a Tierras que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 4° y 5° del Decreto-Ley 902 de 2017 se efectuará conforme a los siguientes factores y puntajes:

1. Patrimonio: La puntuación asignada por este criterio corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PA = (700) - \frac{\text{Patrimonio}}{2}$$

Donde "PA" corresponde al puntaje asignado, "patrimonio" corresponde al número de salarios mínimos legales vigentes que la persona aspirante tenga como patrimonio neto.

Las personas aspirantes manifestarán dentro del proceso de inscripción su situación patrimonial la cual se incorporará en virtud del principio de buena fe. La ANT hará uso de los medios que juzgue necesarios para corroborar dicha información, entre otras la ANT deberá verificar en bases de datos de la DIAN o equivalentes la veracidad del patrimonio reportado.

2. Víctimas del conflicto: Se asignarán ciento cincuenta (150) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de víctimas del conflicto armado en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

La ANT deberá verificar en bases de datos de VIVANTO y RUV o equivalentes la condición de víctima.

3. Vinculación a una organización campesina: Se asignarán diez (10) puntos a la persona aspirante que manifieste pertenecer a una asociación campesina o de economía solidaria o cualquier otro instrumento de asociación, siempre que para todos los casos su objeto de dirija a la producción agropecuaria, forestal, acuícola o de servicios ambientales con fines productivos, o la promoción de la economía campesina y con presencia en el municipio o región de residencia de la persona aspirante.

La puntuación será duplicada siempre que se trate de mujeres aspirantes y triplicada si ellas pertenecen a las directivas de la respectiva organización. También será triplicada la puntuación, para todas sus integrantes, si la organización es compuesta solo por mujeres, en este último caso no se darán puntajes adicionales a sus directivas.

4. Registro en el Sisbén: la asignación de puntos por este criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima de 100 puntos el índice Sisbén de la respectiva persona aspirante.

La ANT deberá verificar en bases de datos del SISBEN o equivalentes la puntuación.

5. Personas a cargo: Se dará una calificación de diez (10) puntos por cada hijo menor de edad, hijo de crianza o persona del grupo familiar que por incapacidad permanente dependa económicamente del aspirante. La puntuación será duplicada si se acredita que las personas dependientes se encuentran en procesos de escolarización. Corresponde a las personas aspirantes demostrar el cumplimiento de las condiciones acá establecidas al momento del registro. Para ello deberán acompañar copia del registro civil de nacimiento de las personas a cargo cuando se trate de demostrar relaciones de consanguinidad. Tratándose de familiares de crianza será posible demostrarlo por cualquier otro medio probatorio.

6. Beneficiarios de restitución: Se asignarán cincuenta (50) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra. La puntación será duplicada cuando la atención recibida por dichas personas no haya implicado la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de propiedad. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

7. Ocupantes de territorios étnicos: Se asignarán cien (100) puntos a las personas aspirantes que para el momento de la expedición de la Resolución 740 de 2017 ocupen reservas o resguardos indígenas que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

8. Experiencia: Se dará una calificación de un (1) punto por cada mes de experiencia en actividades agropecuarias, pecuarias, acuícolas o forestales y de economía del cuidado.

La puntuación será duplicada cuando la experiencia verse en servicios ecosistémicos que permitan la preservación y/o restauración de áreas y ecosistemas estratégicos. Para tales efectos las personas aspirantes deberán manifestar cada uno de los periodos que pretendan puntuar.

Para todos los casos la experiencia computada sólo será valorada desde el momento en el que el sujeto haya cumplido 16 años de edad.

Las personas aspirantes menores de veinticinco (25) años podrán convalidar su experiencia para efectos de la puntuación acá establecida a través de la acreditación de formación académica o en ciencias agropecuarias o para el trabajo, sin perjuicio de la asignación de puntos que por tal criterio se establece de manera independiente.

9. Vinculación rural al municipio o región: Se asignará un (1) punto por cada mes de residencia en el municipio o región. Las personas en condición de desplazamiento, e incluso las que ya la hubieren superado, podrán computar los periodos en los que se vieron en la necesidad de abandonar la respectiva región.

10. Reubicación y Reasentamiento: Se asignarán cien (100) puntos a la persona aspirante que hubiese ejercido una ocupación irregular de terrenos baldíos o bienes fiscales patrimoniales y que voluntariamente hubiese regulado su ocupación con la respectiva entrega material, o la suscripción de acuerdos de aprovechamiento y/o reconversión del suelo. La misma regla aplicará para las personas aspirantes que realicen actividades de erradicación de cultivos ilícitos. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

11. Educación y/o formación en ciencias agropecuarias, ambientales o afines a las mismas: Se evaluará la formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano asignando 10 puntos por cada seminario, curso o diplomado debidamente aprobado y relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas. Igualmente se asignarán 10 puntos por cada periodo debidamente aprobado dentro de los niveles pregrado (Técnico Profesional, Tecnológico o Profesional) y de posgrado (Especializaciones Maestrías o Doctorados), relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas.

En cualquiera de las modalidades establecidas la puntuación será duplicada tratándose de mujeres aspirantes y de personas en situación de discapacidad. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

Tratándose de los numerales 3, 8 y 9 del presente artículo, la simple manifestación bajo gravedad de juramento en el documento de inscripción al FISO se tendrá como prueba suficiente para acreditar la información allí reportada. Ello sin perjuicio de la competencia de la ANT de poder revisar en cualquier momento por otros medios la veracidad de lo afirmado.

Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en zonas no focalizadas.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 46 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 46. Procedimiento RESO General. La subdirección de Sistemas de Información de Tierras analizará de manera formal las solicitudes de los particulares que demanden la actuación de la ANT en asuntos de su competencia, y las examinará, a fin de valorarlas, calificarlas y establecer si cumplen todos los requisitos para la inclusión en el RESO. Si la solicitud no permite la identificación plena del solicitante, o adolece de documentos para su valoración, dentro de los diez (10) días siguientes a iniciar el proceso de valoración se requerirá al particular para que proceda a su corrección. Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos, la subdirección de sistemas de información de tierras remitirá la valoración a la dependencia correspondiente. En el acto

administrativo de apertura del procedimiento único se incorporará la decisión de inclusión en el RESO.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 48 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 48. Novedades. En cualquiera de las etapas del Procedimiento Único, se podrán hacer modificaciones a la información consignada en el FISO, como actualización, o que puedan derivar en cambios en el módulo atribuido o en la categoría asignada. A este tipo de solicitud se le llamará Novedad y será tramitada a través del Formulario de Actualización y Novedades del FISO".

Artículo 29. Modifíquese el artículo 49 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 49. Exclusión o recategorización. Según lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 15 del Decreto-Ley 902 de 2017, la ANT podrá excluir a personas inscritas en el RESO o efectuar su reclasificación en las categorías o módulos antes de expedir el acto administrativo de cierre del procedimiento único, cuando el acto de apertura que incluya la clasificación del posible beneficiario se haya emitido en un término superior a un (1) año contado a partir del momento del acto de ingreso al RESO. En los casos en los que deba recategorizarse identificada la variación en los supuestos de hecho, procederá a informar a la persona inscrita para que en el término de cinco (5) días se pronuncie al respecto. Recibido el pronunciamiento del particular o vencido el término anterior, la ANT procederá a efectuar la exclusión o la reclasificación respectiva. Contra dicha decisión solo podrá formularse el recurso de reposición en los términos de los artículos 74 numeral 1 y 76 de la Ley 1437 de 2011".

Artículo 30. Modifíquese el artículo 50 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 50. Transición. Hasta tanto el RESO se implemente, las bases de datos de la ANT, seguirán siendo la fuente de información oficial para el desarrollo de sus funciones misionales.

Mientras se produce la referida implementación el Registro se limitará a relacionar progresivamente tanto a las personas aspirantes en cualquiera de las modalidades de adjudicación directa como a los trámites de adjudicación y/o titulación en curso, así como los usuarios del programa de formalización de la propiedad.

Excepcionalmente y para la adjudicación de predios en proceso de asignación de derechos se dará apertura al RESO circunscribiéndolo a los municipios donde estén ubicados los inmuebles. En tales eventos, la ANT garantizará la publicidad de la oferta institucional y múltiples jornadas de inscripción de las personas aspirantes por un periodo no inferior a un mes en la zona de adjudicación".

Artículo 31. Modifíquese el encabezado del Capítulo 4 del Título III de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Capítulo 4

CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO.

Artículo 32. Modifíquese el artículo 52 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 52. Consolidación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. La Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad en la fase de implementación consolidará el plan de ordenamiento social de la propiedad rural a partir de la información validada por la Subdirección de Planeación Operativa, proveniente del barrido predial masivo, el cual señalará por lo menos:

1. Identificación de número estimado de predios.
2. Tamaño y naturaleza.
3. Posibles Sujetos de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.
4. Identificación de los propietarios, ocupantes y poseedores.
5. Relación de potenciales sujetos de programas de acceso y formalización de tierras,

6. Identificación de zonas que constituyan restricciones y condicionantes para el ordenamiento territorial.

7. Estimación de tiempo, recursos humanos, físicos y financieros que se requieran para la fase de implementación.

8. Estrategia de mantenimiento".

Artículo 33. Modifíquese el artículo 55 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 55. Selección y priorización de los beneficiarios de acceso a tierra inscritos en el RESO. Para el caso de la asignación de derechos a las personas que no tienen tierra o la tienen de forma insuficiente, y que conforme a las reglas del RESO obtendrían los puntajes más altos en atención a lo dispuesto en los artículos 4°, 5° y 20 del Decreto-Ley 902 de 2017, la ANT identificará con qué recursos y tierras cuenta para atender las necesidades de acceso a tierra de esas personas. Se atenderán de manera prioritaria los sujetos que no tienen tierra.

En estos casos, la ejecución del Subsidio Integral de Tierras (SIAT) o la entrega de tierras del Fondo, se alimentará de la información de todos los aspirantes para adjudicar de acuerdo al puntaje obtenido y de acuerdo con los recursos con los que cuenta la Agencia Nacional de Tierras.

Artículo 34. Modifíquese el encabezado del Capítulo 5 del Título 3 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Capítulo 5

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA, FORMALIZACIÓN PRIVADA Y DEMÁS PRETENSIONES AGRARIAS

Artículo 35. Modifíquese el artículo 57 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 57. Elección de las fuentes de acceso a tierra. Se entienden por formas de acceso a tierras, el subsidio integral de tierras, el crédito especial de tierras de que trata el artículo 35 del Decreto-Ley 902 de 2017 y las tierras susceptibles de ser adjudicadas existentes en el Fondo para la Reforma Rural Integral. La ANT consultará a los posibles beneficiarios la forma de acceso a tierras de su interés de conformidad con los recursos disponibles. Si conforme a lo identificado en el PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL, no existen tierras en el Fondo para la Reforma Rural Integral disponibles para generar acceso a tierra, se informará al beneficiario que puede optar por aspirar al otorgamiento del SIAT, de acuerdo con los recursos disponibles para dicho programa. En caso de que el particular decida continuar con esta modalidad de acceso a tierras se seguirá con lo dispuesto en el reglamento establecido para el efecto.

Parágrafo. El Subsidio integral de acceso a tierras establecido en el artículo 29 del Decreto-Ley 902 de 2017 contará con su propio reglamento.

Artículo 36. Adiciónese un artículo 57A a la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 57A. Aceptación de predios del Fondo. La ANT asignará los predios disponibles del Fondo a los potenciales beneficiarios, en función de los puntajes. Dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la asignación, los potenciales beneficiarios deberán suscribir acta de aceptación. Si se negaren a aceptar la asignación o no se presentaren para suscribir el acta, se entenderá que desisten de su aspiración.

Artículo 37. Modifíquese el artículo 58 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 58. Apertura del trámite administrativo de asignación de derechos. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017 señalará con precisión al potencial beneficiario, la identificación física y jurídica del predio seleccionado y con fundamento en la información recolectada del informe técnico-jurídico y demás pruebas recaudadas ordenará:

1. Inscribir los potenciales beneficiarios en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO, con indicación de su categoría y calificación.

2. Abrir la actuación administrativa.

3. Notificar el acto administrativo al potencial beneficiario en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

4. La comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la Unidad de Gestión Territorial, para efectos de un punto de fácil acceso para los interesados en la zona".

Artículo 38. Modifíquese el artículo 59 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 59. Jornada de notificación personal. En cumplimiento de lo ordenado en el acto administrativo de apertura de asignación de derechos sobre la tierra, la ANT realizará jornadas en las que, de manera masiva, citará a los potenciales beneficiarios de acceso a tierra para:

1. Notificarlos personalmente del inicio del trámite administrativo de asignación de derechos.

2. En el evento que el interesado no asista se procederá a la notificación por aviso, a fin de que se surta la publicidad del acto en los términos establecidos en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 39. Adiciónese un artículo 59A a la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 59A. Cierre del procedimiento administrativo de Asignación de Derechos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la exposición pública de resultados, la ANT proferirá el acto administrativo de cierre del procedimiento en el cual ordenará la adjudicación en favor del beneficiario. En la resolución de adjudicación se identificará el bien, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para su enajenación, las causales de incumplimiento, la referencia expresa a la potestad de la ANT para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8° del Decreto-Ley 902 de 2017 y demás aspectos propios del correspondiente régimen jurídico de propiedad rural.

Artículo 40. Adiciónese un artículo 59B a la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 59B. Variación de asignatarios. En caso de que se haya recibido información adicional que acredite que los supuestos de hecho de inscripción en el RESO de los aspirantes hayan variado, de tal manera que no sean elegibles para asignación de derechos, en el acto de cierre se negará la adjudicación y se ordenará excluir al aspirante del RESO y poner el predio a consideración de otros aspirantes.

Si se hubieren presentado oposiciones serán decididas en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Artículo 41. Modifíquese el artículo 67 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 67. Apertura del trámite administrativo de reconocimiento de derechos. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017, para el caso de personas que ocupan baldíos de la Nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del mismo decreto, señalará lo siguiente:

1. La inscripción en el RESO del potencial beneficiario, si reúne los requisitos establecidos para el acceso, y su categorización.
2. El régimen sustancial más favorable para el beneficiario, a partir de la valoración de la información técnica y jurídica recabada durante el barrido.
3. La identificación física del bien y la jurídica.
4. La orden de notificar el acto administrativo al potencial beneficiario en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Cuando no se pueda surtir la notificación personal, se realizará por aviso en los términos del artículo 69 de esta misma Ley.
5. La orden de comunicar a terceros indeterminados sobre la actuación, con la inserción en la página electrónica de la entidad o en la cartelera de la Alcaldía Municipal de la

circunscripción territorial en donde se encuentra ubicado el predio acompañado de un resumen del acto administrativo de apertura que contenga la identificación del potencial beneficiario, del predio y del procedimiento único iniciado.
6. La identificación del potencial beneficiario, del predio y del procedimiento único iniciado.
7. Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-Ley 902 de 2017".

Parágrafo 1. La apertura del folio de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad a nombre de la Nación tiene el carácter publicitario y no modifica la situación jurídica del inmueble.

Parágrafo 2. La publicidad a terceros indeterminados contendrá al menos, la siguiente información:

a) El nombre del peticionario y su identificación;

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación;

c) La extensión superficiaria del predio;

d) El término del que disponen para comparecer a hacer valer sus derechos para la realización del periodo probatorio y presentar sus pruebas para que sean debatidas en él.

Parágrafo 3. No será necesario acudir de manera previa al procedimiento de clarificación de la propiedad para adjudicar los predios que según el informe técnico-jurídico tienen la calidad de baldíos de la Nación, sin perjuicio de la procedencia de la nulidad agraria prevista en el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Artículo 42. Modifíquese el artículo 68 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el artículo 6 de la resolución 108 de 2018, el cual quedará así:

"Artículo 68. Notificación personal y cumplimiento de órdenes. La notificación personal del acto administrativo de apertura se hará en jornadas masivas que se convocarán por el medio más efectivo, entre ellos, vía telefónica, perifoneo, radio, entre otros.

Las personas que no comparezcan a la jornada masiva de notificación personal se notificarán en los términos de la Ley 1437 de 2011".

Artículo 43. Modifíquese el artículo 69 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 69. Comparecencia de terceros indeterminados en el procedimiento de reconocimiento de derechos sobre baldíos o formalización de predios privados. Los terceros indeterminados que se crean con derechos sobre el terreno baldío pretendido en adjudicación por los potenciales beneficiarios o quienes aduzcan tener derechos reales sobre el predio de naturaleza privada, podrán comparecer y hacer valer sus oposiciones en cualquier momento hasta antes del cierre mediante acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Cuando el opositor alegare que el inmueble objeto de la solicitud de adjudicación es de propiedad privada, o reclame dominio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exige el inciso 2 del ordinal 1 del artículo 48 de la Ley 160 de 1994. En caso de no aportar dicha prueba sumaria se tendrá por no presentada la oposición.

En los casos en que para definir la oposición se requiera de pruebas adicionales a las aportadas por el opositor, la ANT podrá dar apertura a un periodo probatorio que no podrá superar el término de diez (10) días hábiles, prorrogables máximo por cinco (5) días hábiles.

La ANT resolverá las oposiciones en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento y contra este acto procederán los recursos y acciones previstas en la Ley 1437 de 2011.

Cuando la oposición se formule por haberse iniciado contra el peticionario acciones penales, de policía o civiles dirigidas a proteger la ocupación del opositor, previa comprobación de la vigencia de los procesos respectivos, la ANT ordenará suspender el procedimiento administrativo de titulación, hasta cuando se encuentre ejecutoriada la providencia que decida el proceso que motivó la suspensión y a requerimiento del interesado y en todo caso por un término máximo de dos (2) años Trascurrido el término de dos (2) dispondrá el archivo del expediente".

Artículo 44. Modifíquese el artículo 72 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"**Artículo 72. Información necesaria para poder resolver la adjudicación del predio baldío.** Cuando se pretenda el reconocimiento de derechos sobre predio un baldío de la Nación, y sus ocupantes pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 902 de 2017, se podrá omitir la práctica de una inspección ocular dentro del periodo probatorio, siempre que con la información obtenida en el barrido predial señalado en el artículo 66 del mismo Decreto, la ANT tenga plenamente identificados:

a) Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento, municipio, inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre;

b) Los linderos del predio, con sujeción a los puntos cardinales, y el nombre e identificación de los colindantes suministrados por el peticionario, confrontándolos con el plano que para el efecto se haya elaborado o aportado con las especificaciones técnicas propias del catastro multipropósito y, en todo caso, verificándolos directamente en el curso de la diligencia;

c) La clase de explotación del predio, señalando si esta es adelantada directamente por el peticionario, con indicación de la porción ocupada o cultivada y la inculta, su grado de conservación, naturaleza de los cultivos, edificaciones, número y clase de ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás mejoras instaladas en el fundo;

d) La explotación adelantada en el inmueble, para determinar si corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la diligencia;

e) El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio se determinará teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el período vegetativo de los cultivos permanentes y semipermanente, la composición del hato ganadero, el registro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos mejorados, y otros medios de orden técnico que sean pertinentes;

f) La clase de bosques, las fuentes hídricas, si existen áreas de protección legal asociadas a zonas de ronda o nacimientos, si es necesario repoblar o conservar los bosques existentes, o si estos pueden aprovecharse de conformidad con las disposiciones vigentes;

g) Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, así como las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales; determinar. Se deberá determinar, además, si en el predio hay bosques de páramo, de galería, morichales, humedales, ciénagas, marismas y otros espacios bióticos;

h) Si el predio tiene márgenes o laderas con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45°);

i) Si el predio está comprendido o no en una zona reservada por entidad pública, o por la ley; o se hallan establecidas comunidades indígenas, o destinadas a la titulación colectiva en beneficio de las comunidades negras, según las prescripciones de la Ley 70 de 1993 y sus reglamentos;

j) Si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones nacionales, o madre viejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas de propiedad nacional, así como también si se halla dentro de las reservas territoriales del Estado, o comprende bienes de uso público;

k) Si el predio se halla situado dentro del radio de inadjudicabilidad alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables;

i) Si el predio tiene restricciones al uso asociadas a figuras de protección ambiental de cualquier orden y si el suelo donde se ubica está clasificado con uso agropecuario o similares;

m) Si el predio se encuentra dentro de las zonas seleccionadas o reservadas por entidades públicas, para adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social para la región o el país;

n) Si se hallan establecidas en el fundo personas diferentes al peticionario, indicando a qué título y la extensión aproximada que ocupan;

o) Si existe presencia de comunidades étnicas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio".

Artículo 45. Modifíquese el artículo 73 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 73. Archivo o suspensión en la adjudicación del inmueble. Si dentro de las diligencias realizadas por la ANT, se encuentra que la explotación económica adelantada sobre el terreno baldío no corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la inspección ocular, se dejará constancia de ello en el expediente y se ordenará suspender el procedimiento, hasta cuando el peticionario adopte un plan gradual de reconversión, con el acompañamiento institucional pertinente.

Si existiere controversia o duda por parte de la ANT, relacionada con el cumplimiento de las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales, se solicitará el concepto respectivo a la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el nivel nacional o regional, según corresponda. Si este fuere desfavorable, se archivará el expediente.

Artículo 46. Modifíquese el artículo 75 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 75. Cierre del procedimiento administrativo de reconocimiento de derechos sobre tierras baldías. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la exposición de resultados, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario. Este término podrá ser ampliado en caso de que presenten oposiciones en la audiencia pública de resultados y se requiera abrir el periodo probatorio de diez (10) días señalado en el artículo 51 de la presente resolución.

El Acto Administrativo que resuelve de fondo, deberá decidir sobre las oposiciones en caso de que se hayan presentado. En caso que se declaren infundadas se ordenará la adjudicación, y en caso de que prosperen se negará la adjudicación y se remitirá el expediente a la dependencia competente. Contra este acto procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación en los términos de la Ley 1437 de 2011.

Cuando se hubiere probado en desarrollo del procedimiento que el inmueble no es baldío, se ordenará la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación. Cuando se hubiere probado la naturaleza baldía pero no se determine la procedencia de la adjudicación en favor del aspirante, se dará traslado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación para cancelar la medida publicitaria de apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.

Si para el momento de expedición del acto administrativo de cierre del procedimiento, aún no se ha dado apertura al folio de matrícula inmobiliaria, dicho acto impartirá las órdenes sobre el particular, ratificando lo ordenado en el acto de apertura".

Artículo 47. Adiciónese un artículo 75A a la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 75A. Contenido de la Resolución de Adjudicación. En la resolución de adjudicación se identificará el bien, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para la enajenación, las causales de incumplimiento, la referencia expresa a la potestad de la ANT para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8° del Decreto-Ley 902 de 2017 y demás aspectos que sean propios de este régimen jurídico de propiedad rural.

Artículo 48. Modifíquese el artículo 76 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 76. Apertura del trámite administrativo para los asuntos de formalización privada y administración de derechos. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 70 del Decreto-Ley 902 de 2017, para los asuntos contemplados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 58 ibídem, contendrá lo siguiente:

1. La inscripción del potencial beneficiario en el RESO y su categorización para asuntos de formalización privada o, en los casos de administración de derechos, la inscripción de quienes ostentan en el derecho de propiedad en el módulo de pretensiones y procesos agrarios, con fines estadísticos.
2. La identificación física y jurídica del predio.
3. La identificación de quienes ostentan en el derecho de propiedad de conformidad con los asientos registrales del bien.
4. La orden de notificar el acto administrativo al particular interesado o afectado en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Cuando la pretensión o una de las pretensiones del Procedimiento Único sea el deslinde, se entenderán como interesados los titulares de derechos reales principales que figuren en el registro de instrumentos públicos de los predios colindantes.

5. La orden de comunicar al Ministerio Público para que, si lo estima procedente, se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-Ley 902 de 2017.
6. La orden de comunicar a terceros indeterminados sobre la actuación, con inserción en la página electrónica de la Entidad y de la Alcaldía Municipal en donde se encuentra ubicado el predio, o en su cartelera, del acto o de un resumen del acto administrativo de apertura que contenga la identificación de los solicitantes del predio y del procedimiento único iniciado.
7. La orden a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente de inscribir la medida publicitaria de apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

Parágrafo 1. La decisión de inscripción o no del beneficiario en el RESO y su categorización para asuntos de formalización privada, puede ser objeto del recurso de reposición. Tratándose de asuntos relacionados con la administración de derechos, contra este acto administrativo no procederán recursos, por ser un acto de trámite.

Parágrafo 2. No será necesario acudir de manera previa al procedimiento de clarificación de la propiedad para la formalización los predios que según el informe técnico-jurídico tienen la calidad de privados, sin perjuicio de la procedencia de la nulidad agraria prevista en el artículo 39 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Artículo 49. Modifíquese el artículo 77 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 77. Traslado del acto administrativo de apertura del trámite Una vez realizadas las notificaciones y comunicaciones de conformidad con lo señalado en el artículo anterior, las partes tendrán un término de cinco (5) días hábiles para solicitar o aportar las pruebas que consideren.

Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará en los casos de formalización de la propiedad privada de que trata el numeral tercero del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017.

Artículo 50. Modifíquese el artículo 79 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 79. Acto administrativo de decreto de pruebas. Agotado el término de cinco (5) días, se decretará la práctica de las pruebas solicitadas por las partes que resulten pertinentes, útiles y conducentes, así como las que de oficio considere la ANT, mediante acto administrativo que será notificado por estado y será susceptible del recurso de reposición de acuerdo con lo indicado en la Ley 1437 de 2011".

Artículo 51. Modifíquese el artículo 80 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 80. Reglas especiales para el procedimiento de formalización privada. Cuando el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad tenga como única pretensión la formalización de tierras de naturaleza privada conforme al numeral 3 del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, si hasta antes de la expedición del acto administrativo que ponga fin al procedimiento, no comparece ningún tercero a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá omitir el periodo probatorio, teniendo en cuenta las pruebas recaudadas en el barrido predial para resolver por parte de la ANT.

Artículo 52. Modifíquese el artículo 81 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 81. Periodo probatorio. El periodo dispuesto para práctica de pruebas no podrá exceder de diez (10) días hábiles, prorrogables máximo por cinco (5) días. La práctica de las pruebas decretadas a petición de parte correrá a cargo de quien las solicita, quien deberá sufragar los gastos completos que correspondan dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo que las decreta. De no pagarse el valor correspondiente a la práctica de pruebas dentro del término establecido, se entenderá que el solicitante desiste de aquellas y se continuará con el proceso; sin embargo, la ANT podrá ordenar su práctica en caso de considerarlo necesario.

Lo dispuesto en el presente artículo respecto del cobro de la prueba, no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas en el RESO, bajo los criterios indicados en el artículo 4° del Decreto-Ley 902 de 2017 como sujetos de acceso a tierras y formalización a título gratuito.

Artículo 53. Modifíquese el artículo 82 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 82. Exposición pública de resultados. En la exposición pública de resultados de que trata el artículo 72 del Decreto-Ley 902 de 2017 se informará a los asistentes las decisiones tomadas por la ANT en los asuntos tramitados a través del Procedimiento Único.

En caso de que se presenten oposiciones en el marco de dicha exposición pública, se solicitará al opositor aportar las pruebas que considere pertinentes, de acuerdo con las reglas previstas en la presente resolución. Las oposiciones serán resueltas conforme a lo indicado en el informe técnico jurídico en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, procediendo contra este acto los recursos y acciones previstas en el Decreto-Ley 902 de 2017.

Se realizarán el número de jornadas de exposiciones públicas de resultados que sean necesarias dentro de los plazos establecidos por el Decreto-Ley 902 de 2017, como garantía de transparencia y participación.

Artículo 54. Modifíquese el artículo 83 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 83. Informe Técnico Jurídico. Una vez finalizada la fase de exposición pública de resultados y recogidas las observaciones de la comunidad, se expedirá un informe técnico jurídico en el que se sugerirá la decisión final que debe adoptarse por parte de la ANT en el marco de cualquiera de las pretensiones del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, las razones por las que deben acogerse o desestimarse las objeciones formuladas en la etapa probatoria o en la exposición pública de resultados, para que de esa forma, se expida el acto administrativo que ponga fin al procedimiento de manera definitiva para los casos de asignación y reconocimiento de derechos, formalización privada sin oposición, y solo en la fase administrativa para dar paso a la fase judicial en el resto de asuntos

En esta etapa, en caso de no haberse identificado variación frente al informe técnico-jurídico producido para la conformación del expediente, no será necesario expedir un nuevo informe."

Artículo 55. Modifíquese el artículo 84 de la Resolución 740 de 2017, modificado por el Artículo 2 de la Resolución 3234 de 2018, el cual quedará así:

"Artículo 84. Acto de cierre de los procedimientos de formalización y administración de derechos. Expedido el informe técnico jurídico definitivo, el expediente entrará al despacho del Gestor a cargo de la Unidad de Gestión Territorial correspondiente o al del funcionario de nivel directivo del orden nacional, según fuere el caso, por un término de cinco (5) días, dentro de los cuales proferirá la decisión de fondo que ponga fin a las actuaciones en sede administrativa. En este acto administrativo se deberá adoptar la decisión, se dará respuesta a las diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del trámite, se decidirán las oposiciones presentadas, se motivará la decisión tomada y además se establecerán las medidas que hagan efectivo el cumplimiento de la decisión. Lo resuelto deberá ser acatado en un plazo de no más veinte (20) días, contados a partir de su ejecutoria.

Cuando en desarrollo de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la propiedad, se concluya que no existen los supuestos de hecho o de derecho para formalizar tierras de naturaleza privada o presentar la demanda respectiva, el informe técnico jurídico definitivo hará las recomendaciones en ese sentido, y se proferirá un acto administrativo de cierre del procedimiento único que dará por desestimada la formalización y ordenará no presentar la demanda ante el Juez.

Contra el acto administrativo que desestime la formalización o administración de derechos procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en los términos señalados en la Ley 1437 de 2011.

Contra el acto Administrativo de cierre que determine la improcedencia de la revocatoria directa no procederá recurso alguno, conforme a los artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 aplicables a dicha figura".

Artículo 56. Adiciónese un artículo 84A a la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

Artículo 84A. Control oficioso. En la gestión del procedimiento único la Agencia Nacional de Tierras ejercerá un control oficioso, tendiente a sanear las deficiencias de información que hubiere identificado a efectos de lograr su consecución con eficiencia y el cumplimento de los fines para los cuales fue previsto.

Artículo 57. Modifíquese el artículo 87 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 87. Trámites de regularización de predios del Fondo Nacional Agrario. En las zonas focalizadas, los trámites de regularización de la ocupación de predios del Fondo Nacional Agrario iniciados con anterioridad al 29 de mayo de 2017 se resolverán conforme al Acuerdo 349 de 2014 del INCODER o la norma que lo modifique o sustituya. Las ocupaciones que se realicen sobre bienes fiscales patrimoniales del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral con posterioridad al 29 de mayo de 2017, no generarán derecho alguno a su titulación o regularización.

Artículo 58. Modifíquese el artículo 113 de la Resolución 740 de 2017, el cual quedará así:

"Artículo 113. Vigencias, Derogatorias y Régimen de transición. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y **modifica** los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33B, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 72, 73,75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87,y 113, y los enunciados del Título 2, del Capítulo 2 del Título 3, Capítulo 3 del Título 3, Capítulo 4 del Título 3, Capítulo 5 del Título 3, **adiciona** los artículos 57A, 59A, 59B, 75A, 84A, y un enunciado al capítulo 1 del Título 2 y **deroga** los artículos 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 29, 31B, , 47, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 78, 91 y 93 de la Resolución 740 de 2017.

Con el fin de evitar la paralización y/o afectación de las actividades que se están realizando en los municipios focalizados, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad que a la fecha de expedición de esta Resolución se encuentren en proceso de formulación, podrán seguir siendo estructurados bajo los lineamientos existentes antes de la presente modificación.

Sin embargo, aun en los casos en los cuales se determine que los Planes podrán seguir siendo estructurados bajo los lineamientos existentes antes de la presente modificación, lo dispuesto en el artículo 5 de la presente resolución se aplicará incluso a dichos planes conforme a los efectos ultractivos de la norma.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 16 AGO 2019

MYRIAM CAROLINA MARTINEZ CARDENAS
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Revisó: Yolanda Margarita Sánchez Gómez– Jefe Oficina Jurídica
Jaime Augusto Correa Medina – Asesor Jurídico Dirección General
Aprobó: Felipe Espinosa Camacho – Director de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad
Jorge Gaitán – Subdirector de Seguridad Jurídica (E)
Julia Elena Venegas Gómez– Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas
Proyectó: Myriam Sorelly Vergara – Abogada Subdirección de Planeación Operativa
Carlos Andrés García – Abogado Subdirección de Planeación Operativa
Francisco Javier Lara – Abogado Dirección de ordenamiento Social de la Propiedad

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 1 0 8 - DE 2018

(2 9 ENE 2018)

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

El DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 60, 68 y 69 del Decreto Ley 902 de 29 de mayo de 2017 y los numerales 1, 2, 5, 14 y 18 del artículo 11 del Decreto 2363 de 7 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el 13 de junio de 2017 el Director General de la Agencia Nacional de Tierras expidió la Resolución 740 del mismo año, por medio de la cual reglamentó aspectos de los Planes y el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad por autorización expresa del Decreto 902 del 29 de mayo de 2017.

Que en desarrollo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad adelantados desde la expedición de la Resolución 740 de 2017 a la fecha, se han identificado aspectos operativos que ofrecen dificultades y hacen más lenta y costosa la operación de la entidad, tales como la necesidad de incluir como soportes del Diagnóstico Preliminar de Análisis Predial DPAP, los registros 1 y 2 de catastro, o elementos que merecen corrección, como la omisión de la obligación de verificar en la fase de elaboración del Plan, no solo la presencia de comunidades indígenas, sino también de comunidades negras.

Que el numeral 1 del artículo 67 de la mencionada resolución, definió en desarrollo del artículo 68 del Decreto 902 de 2017, que el acto de apertura del trámite administrativo de reconocimiento de derechos sobre tierras baldías para quienes pueden ser objeto de su titulación por acogerse al régimen de transición planteado en los artículos 26 y 27 de la misma norma, exige verificar que las condiciones de elegibilidad del aspirante que dieron lugar a su inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO, no han cambiado de tal forma que en caso de ser actualizadas harían perder el derecho a la titulación o desmejorarían la situación del aspirante por reducir su puntuación.

Que la exigencia antes referida del artículo 67 de la resolución 740 de 2017, frente a la verificación de las condiciones personales de los aspirantes a la adjudicación de baldíos, se considera innecesaria toda vez que los ocupantes que en virtud del régimen de transición optan por las disposiciones sustanciales de la Ley 160 de 1994 como régimen más favorable para lograr su adjudicación, o quienes se encuentran en las circunstancias señaladas en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, derivan su derecho a la adjudicación del baldío de una ocupación previa iniciada antes del 29 de mayo de 2017, y no de una puntuación y categorización en el RESO para acceder a bienes baldíos administrados por la Agencia.

Que el numeral 4 del artículo 67 de la mencionada resolución, también definió en desarrollo del artículo 68 del Decreto 902 de 2017, que el acto de apertura del trámite administrativo de reconocimiento de derechos sobre tierras baldías ordenaría dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria sobre el inmueble objeto de adjudicación, conforme al procedimiento establecido en el Decreto 1858 de 2015.

Que el Decreto 1858 de 2015 no adicionó, modificó ni derogó las disposiciones del libro 2, parte 14, título 10 del Decreto 1071 de 2015 que establece el procedimiento para identificar y adjudicar los terrenos baldíos

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

de la Nación bajo el régimen de la Ley 160 de 1994, normas que en lo sustancial siguen siendo aplicadas en el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad contemplado en el Decreto 902 de 2017.

Que en desarrollo del procedimiento de adjudicación de baldíos reglamentado mediante Decreto 1071 de 2015, la resolución de adjudicación es la oportunidad procesal para realizar la debida inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, mientras que en desarrollo del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad definido mediante Decreto 902 de 2017, la apertura del folio se realiza en el acto de apertura de la segunda parte de la fase administrativa, tras concluir en el Informe Técnico Jurídico Preliminar que el predio efectivamente es baldío.

Que el artículo 68 del Decreto 902 de 2017 determinó que el acto de apertura en el marco del Proceso Único debe contener *"la orden a la Oficina de Instrumentos Públicos para que registre el acto administrativo en el correspondiente folio de matrícula o que abra un folio nuevo"*, pero no hizo mención alguna al procedimiento establecido en el Decreto 1858 de 2015, que es distinto al reglamentario de la Ley 160 de 1994.

Que el procedimiento de apertura de folio de matrícula de que trata el Decreto 1858 de 2015 no se estableció como un trámite incidental o un prerrequisito del procedimiento de adjudicación de baldíos, y que por tanto es pertinente únicamente para establecer la naturaleza baldía de inmuebles que no están afectos a un procedimiento establecido por la Ley 160 de 1994, de forma que el mencionado Decreto 1858 procede para efectos de administración de tierras baldías que se identifiquen y vayan a ingresar al Fondo de Tierras creado mediante el artículo 18 del Decreto 902 de 2017.

Que el numeral 4 del artículo 67 de la Resolución 740 de 2017 se considera innecesario pues obliga a adelantar un procedimiento que no ordenó el artículo 68 del Decreto 902 de 2017, y que implica reprocesos al duplicar acciones tendientes a establecer la naturaleza baldía de los inmuebles.

Que el Decreto 902 de 2017 estable nuevas reglas en materia de administración de baldíos de la Nación, pues estos son adjudicados con la obligación de establecer en ellos un proyecto productivo para explotarlos de manera directa por un término mínimo de 7 años, luego la Unidad Agrícola Familiar cuya extensión debe servir para producir como mínimo 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se debe establecer para cada caso puntual en atención al tipo de proyecto a implementar, y no por zonas relativamente homogéneas que implican un cálculo hipotético de extensiones en predios indeterminados.

Que la Unidad Agrícola Familiar calculada bajo la metodología de zonas relativamente homogéneas, y expresada en la Resolución 08 de 2016, que a su vez remite a la resolución 041 de 1996, respondía a la lógica de la colonización no controlada por el Estado, en que la adjudicación no iba a acompañada de proyecto productivo ni sometía al adjudicatario a un régimen con limitaciones a la propiedad ni obligaciones de explotación directa, como ahora si ocurre bajo las reglas impuestas en el Decreto 902 de 2017.

Que la Unidad Agrícola Familiar calculada a nivel predial en atención al tipo de proyecto a implementar, ya se viene adelantando desde hace varios años por autorización de la Ley 160 de 1994 para definir las extensiones de predios determinados, adjudicados para el desarrollo de proyectos productivos y sometidos a obligaciones de explotación directa, que es el mismo supuesto que ahora contempla el Decreto 902 de 2017.

Que conforme a lo expuesto es pertinente en virtud de la facultad conferida por el Decreto 902 de 2017, de reglamentar aspectos operativos del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, en lo referido a reconocimiento y asignación de derechos, aplicar la Unidad Agrícola Familiar calculada bajo la metodología de UAF predial para las adjudicaciones que se realicen bajo los supuestos consagrados en el Decreto 902 de 2017.

Que el artículo 24 de la Resolución 740 de 2017 contempló el Diagnóstico Preliminar de Análisis Predial como un documento de caracterización inicial de la información relevante de cada inmueble objeto del Proceso Único, necesario para tener una hipótesis de la situación jurídica a ser corroborada en la visita

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

predial, y que en ese contexto se señaló que dicho diagnóstico debe entre otras cosas, pronunciarse frente a la licitud en la adquisición del inmueble.

Que en desarrollo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad que adelanta la Agencia Nacional de Tierras, la expresión "licitud en la adquisición del inmueble" ha generado confusión e interpretaciones erradas frente al alcance de dicha licitud, pues en algunos casos ha llevado a interpretar que guarda relación con asuntos de índole penal, cuando únicamente alude a licitud entendida como la no contravención de normas de carácter agrario, puntualmente la acreditación de dominio ajeno de que trata el artículo 48 de la Ley 160 de 1994.

Que el artículo 75 de la Resolución 740 de 2017 respecto a la ruta de reconocimiento de derechos, señala que "en caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 5 días siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la Agencia Nacional de Tierras proferirá el acto administrativo de adjudicación", no obstante el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad conforme al artículo 61 del Decreto 902 de 2017, también se realiza en zonas no focalizadas, donde no aplican algunas etapas incompatibles con la lógica de lo masivo, como la exposición pública de resultados.

Que el artículo 75 de la Resolución 740 de 2017 puede generar confusión induciendo a interpretar que la exposición pública de resultados puede proceder incluso fuera de zonas focalizadas, aspecto que es necesario aclarar para evitar posibles solicitudes de nulidad en un futuro.

Que el artículo 110 de la Resolución 740 de 2017 asignó a la Subdirección de Acceso a Tierra por Demanda y Descongestión la función de otorgar el Subsidio Integral de Acceso a Tierra SIAT creado en el artículo 29 del Decreto 902 de 2017, no obstante, por razones de eficiencia administrativa y facilidad en el manejo de recursos, se considera que dicha función, que es distinta del otorgamiento del subsidio de tierras señalado en el Decreto 2363 de 2015, debe ser asignada únicamente a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

Que el artículo 111 de la Resolución 740 de 2017 asignó a la Subdirección de Gestión Jurídica los asuntos de formalización de la propiedad rural, no obstante, dicha subdirección no existe, el nombre correcto de la Subdirección es "Seguridad Jurídica".

Que actualmente la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de la anotación de inicio del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad no está asignada a ninguna dependencia de la entidad.

Que la aplicación de criterios técnicos para compra de inmuebles con ocasión de la adjudicación del subsidio para la compra de tierras, deben ser los mismos para todos los casos, independientemente de la fuente normativa procedimental del subsidio a aplicar.

Que conforme a lo expuesto, en aras a mayor claridad, precisión y para facilitar el desarrollo del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad conforme a las lecciones hasta ahora aprendidas en su implementación, es necesario crear un artículo nuevo y modificar y/o adicionar los artículos 4, 21,23, 24, 67, 68, 75 y 110 de la Resolución 740 de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Modifícase el artículo 4 de la Resolución 740 de 2017 y adiciónese un parágrafo 2 en los siguientes términos:

"**Artículo 4. Fase de Formulación.** Durante esta fase se realizarán las siguientes actividades, además de las previstas en el artículo 44 del Decreto 902:

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

1. Adelantar acciones de coordinación institucional y planeación estratégica en el orden nacional; recolectar y analizar información pertinente tanto en las dependencias de la ANT, como en otras entidades administrativas relacionadas con la administración de la tierra, sobre los predios ubicados en las zonas de intervención rural.
2. Recolectar y analizar la información pertinente para el ordenamiento social de la propiedad de las zonas de intervención, utilizando, entre otras, el cruce de las bases de datos de catastro y registro, así como la metodología de cartografía social.
3. Generar espacios de participación institucional y comunitaria que contribuyan a la caracterización territorial, a la planeación operativa del barrido predial y a la coordinación de acciones conjuntas en el territorio.
4. Difundir masivamente información clara y pertinente sobre el proceso.
5. Identificar y analizar los expedientes de procesos en curso que se hayan iniciado bajo la vigencia de la normatividad anterior en las zonas focalizadas.
6. Analizar las limitantes y potencialidades territoriales para el barrido predial.
7. Elaborar la ruta de intervención territorial, teniendo en cuenta las restricciones ambientales y otras.
8. Recopilar la información que contribuya a la conformación de expedientes, a la elaboración del diagnóstico jurídico preliminar a nivel municipal y al documento preliminar de análisis predial.
9. Elaborar una propuesta de financiación y una estimación de los recursos requeridos para su implementación, la cual atenderá a una lógica de distribución de acuerdo con las unidades de intervención definidas en el POSPR, sin perjuicio de que dicha distribución sea modificada según los resultados del barrido predial. Lo anterior con miras a garantizar la atención de los casos no previstos durante la fase de formulación.

Parágrafo 1. Finalizadas estas actividades y elaborado el POSPR este deberá ser aprobado por el Director de la ANT.

Parágrafo 2. El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad aprobado por el Director mediante resolución, ordenará la inscripción del inicio del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad a los inmuebles ubicados en la zona focalizada en los términos del artículo 40 del Decreto 902 de 2017, salvo las excepciones previstas para los casos en que por eficiencia administrativa el procedimiento que no afecte derechos deba concluir su trámite. La materialización de la inscripción estará a cargo de la Subdirección de Planeación Operativa, que podrá cumplir con dicha tarea a través de terceros."

Artículo 2. Modifícase el artículo 21 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 21.** ***Verificación previa de presencia de comunidades étnicas.*** Previo al inicio del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y con el fin de prever posibles afectaciones a comunidades étnicas, conflictos interculturales o necesidad de consulta previa, la Subdirección de Planeación Operativa solicitará a la Dirección de Asuntos Étnicos certificación sobre la existencia o no, en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales, titulación colectiva, así como presencia de pueblos, comunidades indígenas o comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos o comunidades, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas y/o negras, para que se pronuncien sobre la existencia o no de dichas comunidades en el área pretendida."

Artículo 3. Modifícase el artículo 23 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

Artículo 23. *Contenido Mínimo del expediente.* El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y comunicaciones oficiales que se expidan en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, pero

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

contendrá como mínimo y para efectos de su apertura, un documento preliminar de análisis predial, que consigne la información catastral y registral del respectivo inmueble.

Cuando no se obtenga información catastral y/o registral sobre el inmueble, se dejará constancia de esa situación que servirá de insumo para la construcción del documento preliminar de análisis predial.

Artículo 4. Modifícase el artículo 24 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 24. Documento preliminar de análisis predial para dar apertura al expediente**. El documento preliminar de análisis predial señalado en el artículo anterior con el cual se dará apertura a cada expediente, determinará de manera tentativa cuál es la situación física, jurídica y de tenencia del inmueble, con el fin de que dicha información sea posteriormente verificada o corregida al momento de hacer la visita al inmueble.

Particularmente la ANT se pronunciará frente a la naturaleza jurídica del inmueble, la existencia o no de informalidad sobre el mismo y su adquisición conforme a alguno de los supuestos de acreditación de la propiedad del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, todo lo anterior, a partir de cruces de información de fuentes secundarias obtenidos en la fase de formulación del POSPR, y la información recaba de las comunidades mismas y diversos actores a nivel territorial."

Artículo 5. Modifícase el artículo 67 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 67. Apertura del trámite administrativo de reconocimiento de derechos**. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto 902 de 2017, para el caso de personas que ocupan baldíos de la Nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas señaladas en los artículos 26 y 27 del mismo Decreto, señalará con precisión al potencial beneficiario y ordenará:

1) Realizar la notificación del acto administrativo en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

2) Dar publicidad a terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

3) Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria a Nombre de la Nación cuando el inmueble no lo tiene aún y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el registro del acto administrativo.

4) La inscripción de la medida del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

5) Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto 902 de 2017.

Parágrafo 1. La apertura del folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación tiene carácter publicitario y no modifica la situación jurídica del inmueble.

Parágrafo 2. La publicidad a terceros indeterminados contendrá la siguiente información:

a) El nombre del peticionario y su identificación;

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación

c) La extensión superficiaria del predio;

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

d) Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes; y,

e) El término del que disponen para comparecer a hacer valer sus derechos para obligar a la realización del periodo probatorio y presentar sus pruebas para que sean debatidas en él."

Artículo 6. Modificase el artículo 68 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 68. Notificación personal y cumplimiento de órdenes.** La notificación personal del acto administrativo de apertura se hará en jornadas masivas como las señaladas en el artículo 59 de la presente Resolución. En la comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, se podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la Unidad de Gestión Territorial, eligiendo un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

La comunicación que indique la obligación de comparecer a notificarse de ser posible será telefónica o a través de medios idóneos que garanticen comunicación con el potencial beneficiario y procuren evitar el envío de oficios.

Para estos casos, en las jornadas masivas de notificación no aplicará la obtención de la declaración juramentada de que no han cambiado las condiciones de elegibilidad que permitieron el ingreso al RESO.

Cuando la notificación de apertura se realice en zonas no focalizadas, no será obligatorio el desarrollo de jornadas masivas de notificación."

Artículo 7. Modificase el artículo 75 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 75. Cierre del procedimiento administrativo de reconocimiento de derechos sobre tierras baldías.** En caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la Agencia Nacional de Tierras proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario el cual incluirá sus obligaciones y limitaciones al dominio en los términos del artículo 8 del Decreto 902 de 2017.

Cuando se hubiere probado en desarrollo del proceso que el inmueble no es baldío, se ordenará la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación. Cuando se hubiere probado la naturaleza baldía pero no se determine la procedencia de la adjudicación en favor del aspirante, el folio de matrícula será cancelado, pero se dará traslado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación para realizar el procedimiento señalado en el Decreto 1858 de 2015, para lo cual se remitirá la información y documentación relevante que haya sido acopiada en el procedimiento de reconocimiento de derechos, para efectos de agilizar dicho trámite.

Si para el momento de expedición del acto administrativo de cierre del procedimiento, aún no se ha dado apertura al folio de matrícula inmobiliaria, dicho acto impartirá las órdenes sobre el particular, ratificando lo ordenado en el acto de apertura.

Cuando el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para reconocimiento de derechos sobre tierras baldías se desarrolle en zonas no focalizadas, no se realizará la exposición pública de resultados y el término de 15 días de que trata el presente artículo se contará a partir del vencimiento del término para realizar oposiciones conforme al artículo 69 de la presente resolución."

Artículo 8. Modificase el artículo 110 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 110. Funciones en materia de Subsidio Integral de Acceso a Tierras.** Asígnese las funciones relacionadas con el Subsidio Integral de Acceso a Tierras a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas."

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 740 del 13 de junio de 2017"

Artículo 9. Modifícase el artículo 111 de la Resolución 740 de 2017 el cual quedará así:

"**Artículo 111. Formalización de predios privados.** Asígnese la función de emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 36 Y 37 del Decreto 902 de 2017, a la Subdirección de Seguridad Jurídica."

Artículo 10. Adiciónese un artículo 31 B a la Resolución 740 de 2017, en los siguientes términos:

Artículo 31 B. Cálculo de la Unidad Agrícola Familiar. Cuando en desarrollo del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, se adelante el trámite para el reconocimiento y asignación de derechos aplicable a quienes opten por la adjudicación conforme a lo señalado en el Decreto 902 de 2017, la Unidad Agrícola Familiar no será la definida por zonas relativamente homogéneas, sino será calculada para cada caso individual bajo la metodología de UAF predial.

En lo posible se procurará aprovechar la visita predial de que trata el artículo 31 de la presente resolución para realizar las labores de campo requeridas para la definición de la UAF predial.

Las excepciones que permitan la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF predial, para quienes opten por la adjudicación en atención a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, serán objeto de reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Artículo 11. Adiciónese un parágrafo único al Artículo 95 de la Resolución 740 de 2017 en los siguientes términos:

"Parágrafo único: En virtud de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 81 del Decreto Ley 902 de 2017 los procedimientos de adjudicación de subsidios para la compra de tierras en zonas no focalizadas, iniciados con anterioridad a la vigencia del referido decreto, continuaran su trámite con el procedimiento vigente para el 28 de mayo de 2017.

Sin embargo, las condiciones establecidas en los artículos 104, 105 y 106 de la presente Resolución, le serán también aplicables a los trámites referidos en el inciso anterior."

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 29 ENE 2018

MIGUEL SAMPER STROUSS
Director General
Agencia Nacional de Tierras

Proyectó: Andrés Gonzalez
Aprobó: Andrés Gonzalez
Elizabeth Gómez
Revisó: Javier Florez
Juliana Conde
Juan Camilo Sanchez

RESOLUCIÓN 130 DE 2017

(mayo 30)

Diario Oficial No. 50.250 de 31 de mayo de 2017

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Por medio de la cual se adopta la metodología de la focalización territorial para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013 señala dentro de los objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el de *"Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de manera focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo socioeconómico del país".* Igualmente, el numeral 3 del artículo 6° del referido decreto determina como función del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural la de *"Formular y dirigir la política de desarrollo rural con enfoque territorial en los temas relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y generación de ingresos y gestión de bienes públicos rurales".*

Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 *"Todos por un Nuevo País",* específicamente en el Capítulo denominado *"Transformación del Campo",* se dice que *"El ordenamiento social y productivo del territorio apunta a generar las condiciones que permitan a los productores rurales aprovechar la tierra como un factor productivo que contribuye a la generación de riqueza, la estabilización socioeconómica y mejora de su propio bienestar. Para lograr tal fin, resulta indispensable que confluyan tres elementos fundamentales: acceso a la tierra, claridad en los derechos de propiedad y seguridad jurídica, y uso eficiente del suelo".*

Que dentro del ordenamiento social de la propiedad rural se encuentran los programas de regularización de la propiedad y de acceso a tierras.

Que el numeral 4 del artículo 4° del Decreto-ley 2363 de 2015, *"por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se fija su objeto y estructura"* establece la modalidad de barrido predial como la principal metodología para focalizar territorialmente los programas que hacen parte de la política de ordenamiento social de la propiedad rural.

Que el numeral 3 del artículo 13 del Decreto 1985 de 2013 señala como función de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la de *"Proponer normas, instrumentos y procedimientos que permitan la titulación, formalización, restitución, y en general la regularización de la propiedad de las tierras rurales, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA).*

Que el numeral 4 del artículo 5° del Decreto-ley 4145 de 2011 establece dentro de las funciones de la UPRA la de *"Planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para el efecto".*

Que el artículo 1° del Decreto-ley 2363 de 2015 consagra que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es la máxima autoridad de las tierras de la nación en los temas de su competencia. Asimismo, los numerales 1 y 4 del artículo 4 del citado decreto determinan como funciones principales de la Agencia ejecutar la política formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el ordenamiento social de la propiedad rural, así como, en las zonas definidas por este Ministerio, en la modalidad de barrido, los programas constitutivos de dicha política conforme a las metodologías y procedimientos adoptados para el efecto.

Que dentro de los programas de acceso a tierras que hacen parte del ordenamiento social de la propiedad rural se encuentra el otorgamiento del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), establecido en el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, y el Acuerdo número 05 del 30 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Directivo de la ANT.

Que el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, dispone que el Subsidio Integral de Reforma Agraria será asignado de manera focalizada a través de procedimientos de libre concurrencia en las zonas del país seleccionadas en el marco de las intervenciones integrales para

promover el desarrollo rural, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional.

Que el artículo 16 del Acuerdo número 05 de 2016 del Consejo Directivo de la ANT, preceptúa que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la UPRA, definirá las zonas rurales focalizadas sobre las cuales la ANT surtirá el procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el SIRA.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, y la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), dentro del ámbito de sus competencias, elaboraron una propuesta metodológica para focalizar el territorio colombiano en la modalidad de barrido predial, con el objetivo de implementar gradual y progresivamente la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural, la cual se encuentra detallada en el documento denominado *"Lineamientos y criterios técnicos para la focalización territorial de la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural".*

Que en la referida propuesta metodológica se propende por optimizar la gestión de la inversión pública a través de cuatro etapas: (i) etapa de formulación, en la que se definen los propósitos y la pertinencia de la focalización; (ii) etapa de desarrollo, en la cual se realizan reuniones con expertos para identificar las variables que intervienen en la situación, asignar una ponderación de acuerdo con los criterios que se establezcan, y determinar la ecuación del modelo cartográfico que definen las áreas geográficas y su importancia en la focalización; (iii) etapa de resultados, mediante la cual se presentan los resultados de la aplicación del modelo cartográfico; y (iv), etapa de evaluación de resultados, donde se realizan los ajustes necesarios para adecuar el modelo a la realidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se diseña la estrategia para el seguimiento.

Que la aplicación de la ya citada propuesta metodológica arrojó un listado de municipios focalizados y un mapa de focalización por municipios, los cuales se erigen como instrumentos de apoyo que permitirán determinar las áreas geográficas del territorio que podrán categorizarse por nivel de prioridad en alta, media, baja o no priorizables.

Que teniendo en cuenta que a la fecha no se han reglamentado los mecanismos de intervención integral de los que trata el artículo 100 de la Ley 1753 de 2015, se hace necesario adoptar una metodología que permita realizar la focalización territorial para la ejecución, en términos generales, de la política de ordenamiento social de la propiedad rural, para la definición de las zonas donde se ejecutarán los programas de esta política en la modalidad de barrido predial, y para la definición de las zonas para la asignación del SIRA, garantizando en todo caso

una ejecución gradual y progresiva de tal política pública y de dicho programa de acceso a tierras, de acuerdo con el presupuesto asignado para tal fin en cada vigencia y la articulación interinstitucional requerida.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto.* La presente resolución tiene por objeto adoptar la metodología para realizar la focalización territorial para la ejecución de la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural en la modalidad de barrido predial, y para la definición de las zonas de asignación del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), conforme con lo establecido en los numerales 1, 4 y 8 del artículo 4° del Decreto-ley 2363 de 2015, el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, y el Acuerdo número 005 del 30 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

Artículo 2°. *Adopción de metodología para la focalización.* Adóptase la metodología para realizar la focalización territorial para la ejecución de la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural, contenida en el Anexo 1 denominado "Lineamientos y criterios técnicos para la focalización territorial de la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural", el cual forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 3°. *Criterios para la focalización territorial.* Para la aplicación de la focalización territorial de las zonas a intervenir aplicando la modalidad de barrido predial y para la focalización territorial para la asignación del SIRA, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Predios que no tengan identificada la matrícula inmobiliaria en la base catastral.

2. Predios con falsa tradición identificada en el folio de matrícula inmobiliaria.

3. Predios sin interrelación catastro-registro.

4. Predios con mejoras inscritas en catastro.

5. Predios reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Corte Constitucional en cumplimiento de la Sentencia T-488 de 2014.

6. Predios nominados como baldíos en la base catastral.

7. Zonas con potencial productivo; y

8. Rezago institucional.

Artículo 4°. *Variables para la focalización territorial de política pública.* Para establecer el orden de prioridad de las zonas focalizadas que deberán ser atendidas mediante la modalidad de barrido predial, se deben considerar las siguientes variables:

1. Porcentaje de mujeres rurales cabeza de hogar que habiten los municipios.

2. Densidad de la población rural de cada municipio.

3. Municipios priorizados por el Catastro Multipropósito.

4. Municipios en los que se ejecuta el programa Colombia Siembra.

5. Municipios en los que se ejecutan Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (PINE);

6. Municipios en los que se ejecuta el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

7. Municipios con operaciones de desminado humanitario.

8. Zonas de influencia de los distritos de riego y drenaje.

9. Municipios en los que haya Zonas Veredales Transitorias de Normalización de que trata el numeral 3.1.4.1 del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".

10. Municipios priorizados para el posconflicto.

11. Las demás que sugiera el Comité Técnico para la focalización territorial de política pública.

En la definición de las zonas de asignación para el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), además de las variables anteriores se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Vocación de uso del suelo.

2. Clases agrológicas.

3. Índice de aridez.

4. Formalidad de la tenencia de la tierra; y

5. Aptitud para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras.

El resultado del modelo construido con base en estas variables caracterizará los municipios focalizados aplicando los criterios definidos en el artículo 3° de la presente resolución para que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en esta información, defina las zonas de asignación del SIRA.

Artículo 5°. *Comité Técnico para la Focalización Territorial de Política Pública.* Créase un Comité Técnico para la Focalización Territorial de la Política Pública de ordenamiento social de la propiedad rural, el cual estará conformado por: El

Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado; el Director de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras; y el Director de la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras de la UPRA.

Artículo 6°. *Funciones del Comité Técnico para la Focalización Territorial de Política Pública.* El Comité Técnico para la Focalización Territorial de Política Pública tendrá las siguientes funciones:

1. Identificar durante los primeros tres (3) meses de cada año, cuáles y cuántas zonas focalizadas podrán ser objeto de atención en la modalidad de barrido predial, considerando las variables para la focalización territorial por política pública contempladas en el artículo 4 de la presente resolución.

2. Sugerir la inclusión de nuevas variables para la focalización territorial por política pública, atendiendo a necesidades de articulación con políticas o programas del Gobierno nacional.

3. Hacer seguimiento o ajustes a la focalización territorial de política pública.

4. Revisar anualmente la concordancia y coherencia de los lineamientos estipulados en la presente resolución, con la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad y, como resultado, podrá recomendar los ajustes o actualizaciones que estime convenientes para la buena marcha de la gestión y logro de los objetivos del sector.

5. Realizar la focalización territorial teniendo en cuenta las zonas focalizadas bajo los criterios del artículo 3° de la presente resolución, las cuales deberán ser atendidas gradual y progresivamente, con base en los principios de eficacia, economía y celeridad, teniendo en cuenta la capacidad institucional y el presupuesto asignado para la ejecución de los programas dirigidos al ordenamiento social de la propiedad rural.

Parágrafo. Para efectos del orden de las zonas focalizadas para la asignación del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), la competencia estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien deberá realizar la priorización de conformidad con el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 7°. *Resultado de la aplicación de la metodología.* Téngase como parte integral del presente acto administrativo el listado de municipios y los mapas donde se identifican las zonas focalizadas obtenidas de la aplicación de la metodología de focalización resultante del ejercicio realizado en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y la Agencia Nacional de Tierras, usando los criterios y variables establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente resolución, que se encuentran en los siguientes anexos:

Anexo 2. Listado de municipios focalizados para el ordenamiento social de la propiedad rural y para la definición de las zonas de asignación para el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA).

Anexo 3. Mapa de municipios focalizados para la política de ordenamiento social de la propiedad (aplicación de los criterios del artículo 3°).

Anexo 4. Mapa de municipios focalizados para el Programa de Subsidio Integral de Reforma Agraria en Áreas Sin Restricciones Legales de Adjudicación.

Artículo 8°. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de mayo 2017.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 6060 DE 2018

(14 SEP 2018)

"Por medio de la cual se suspende de manera provisional la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca), y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 4 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, en el artículo 2° del Decreto 1399 del 3 de agosto de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que según lo señalado en el numeral 4 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, es función del Director General de la Agenda Nacional de Tierras (ANT): "Aprobar Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad conforme con los lineamientos fijados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural."

Que por mandato expreso del numeral 2 del artículo 16 del Decreto Ley 2363 de 2015, le corresponde a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, impartir directrices para la elaboración de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015.

Que la Subdirección de Planeación Operativa de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad atendiendo lo dispuesto en el Decreto Ley 2363 de 2015, en la Resolución Ministerial No. 129 de 2017, en el Decreto Ley 902 de 2017, en la Resolución No. 740 de 2017 de la ANT y, sujetándose a los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la ANT, elaboró los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca).

Que de conformidad con el artículo 3° de la Resolución No. 740 de 2017, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural contemplan tres fases: Formulación, Implementación y, Evaluación y mantenimiento.

Que mediante las Resoluciones 2831, 2822, 4374, 4375, 4360, 4230 y 4358 de 2018, el Director General de la Agencia Nacional de Tierras aprobó los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de los Municipios de Ituango (Antioquia), Cáceres (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander), Topaipí (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia) respectivamente, con lo cual se da por culminada la Fase de formulación de los POSPR.

Que el artículo segundo de dichas resoluciones ordenó a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) correspondientes, la inscripción con carácter publicitario de los actos administrativos que dan inicio al procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural, en los folios de matrícula de los predios ubicados en estos municipios, los cuales fueron relacionados en las resoluciones de aprobación de cada POSPR.

Que mediante oficio No. 478 del 13 de agosto de 2018, radicado en la ANT bajo el No. 20186200936312, la Registradora de Instrumentos Públicos de Caucasia (Antioquia) remitió las constancias de inscripción de los folios de matrícula señalados en la resolución 2822 de 2018, mediante la cual el Director General de la Agencia aprobó el POSPR del municipio de Cáceres (Antioquia).

Que la Fase de Implementación corresponde a la puesta en marcha del plan, a través del impulso del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad, lo que implica realizar el barrido predial para levantar la información física, jurídica y social de los predios ubicados en el municipio focalizado,

para posterior y paulatinamente ir dando inicio a las actuaciones administrativas encaminadas a ejecutar los asuntos señalados en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017.

Que según el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), emitido el 1 de julio de 2018, los POSPR pueden y deben ser suspendidos en cualquiera de sus Fases, cuando quiera que las condiciones de seguridad en la respectiva zona focalizada así lo aconsejen y siempre que se verifiquen las circunstancias de excepcionalidad allí descritas. Por tanto, los aspectos asociados a las situaciones de seguridad pueden condicionar el inicio de la Fase de Implementación de los POSPR.

Que teniendo en cuenta el concepto de la Oficina Jurídica de la ANT mencionado en el considerando anterior, y a partir del ejercicio de monitoreo y seguimiento de las condiciones en materia de orden público, y su verificación con las autoridades de la Fuerza Pública, los municipios de Ituango y Cáceres (Antioquia), no satisfacen las condiciones mínimas de seguridad que permitan dar inicio inmediato a la Fase de Implementación de los respectivos POSPR, aprobados mediante Resoluciones No. 2831 y 2822 del 27 de junio de 2018.

Que de acuerdo con los ciclos de planeación, desde el año 2017 en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto previsto para el proyecto de inversión 2018 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), denominado: "ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL", tenía una apropiación de $67.424.930.786 de pesos y, con base en ese horizonte presupuestal, la ANT, a través de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, debía proyectar sus metas de planeación y su plan de acción para el año 2018.

Que, por lo tanto, la DGOSP de la ANT proyectó como una de las metas de su plan de acción para el año 2018, la de adelantar la Fase de Implementación de los POSPR en ocho de los municipios focalizados e intervenidos durante el año 2017.

Que en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 39% del monto total asignado al proyecto "ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL", es decir, la suma de $26.424.930.786 de pesos, son recursos en condición presupuestal denominada "sin situación de fondos" y, por tanto, aunque hacen parte del presupuesto destinado a la elaboración de POSPR, no pueden ser comprometidos ni ejecutados.

Que el Coordinador del Grupo Contable de Registro Contable de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, emitió certificación número 139 de 2018 en la cual hace constar que se realizó la constitución de ingresos nación por acreedores varios de la Agencia Nacional de Tierras, por valor de $105.489.311.938,84, mediante comprobante contable No. 2504375 del 29 de agosto de 2018, es decir, la Agencia Nacional de Tierras no dispone de estos recursos en su presupuesto.

Que ante la imposibilidad de dar inicio a la Fase de Implementación de los POSPR de los municipios de Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander), Topaipí (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia)", es preciso impartir directrices para no afectar la buena marcha de la gestión misional de la ANT, ni la tranquilidad y confianza de los habitantes de los municipios mencionados.

Que por todo lo anterior, se considera que hay fundamentos legales y presupuestales suficientes para suspender de manera provisional la Fase de Implementación de los POSPR de los municipios mencionados, así como de las actividades específicamente vinculadas al impulso del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad en su Fase Administrativa (Numeral 1 del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017).

Que el artículo 22 de la Resolución 740 de 2017 ordena la apertura de expedientes con base en la información recabada en la fase de formulación del POSPR y una vez identificados catastral y registralmente los inmuebles rurales en la zona focalizada.

Que es indispensable mantener actualizada la información contenida en los POSPR de cara a facilitar la Fase de Implementación posterior, por lo que se hace necesario adelantar actividades de conservación como son aquellas relacionadas con la Articulación Institucional, los Semilleros de la Tierra y el Territorio (STYT) y, la ejecución de las rutas jurídicas aplicables en el marco de la Ley 160 de 1994 y demás

concordantes, respecto de casos que a la entrada en funcionamiento de la ANT, se encontraban en trámite y que a la fecha no hayan sido resueltos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de Ituango (Antioquia), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 2831 del 27 de junio de 2018.

ARTÍCULO 2. Suspender de manera provisional la orden de inscripción con fines publicitarios contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 2831 del 27 de junio de 2018, que da inicio al Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural del Municipio de Ituango (Antioquia), impartida a la ORIP de Ituango (Antioquia).

ARTÍCULO 3. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de Cáceres (Antioquia), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 2822 del 27 de junio de 2018.

ARTÍCULO 4. Ordenar a la ORIP de Caucasia (Antioquia), la cancelación de la inscripción del inicio del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en los folios de matrícula inmobiliaria relacionados en la Resolución No. 2822 del 27 de junio de 2018, que corresponden a predios ubicados en el municipio de Cáceres (Antioquia).

ARTÍCULO 5. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de Guaranda (Sucre), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 4374 del 6 de agosto de 2018.

ARTÍCULO 6. Suspender de manera provisional la orden de inscripción con fines publicitarios contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 4374 del 6 de agosto de 2018, que da inicio al Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural del Municipio de Guaranda (Sucre), impartida a la ORIP de Sincelejo (Sucre).

ARTÍCULO 7. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de Puerto Gaitán (Meta), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 4375 del 6 de agosto 2018.

ARTÍCULO 8. Suspender de manera provisional la orden de inscripción con fines publicitarios contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 4375 del 6 de agosto de 2018, que da inicio al Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural del Municipio de Puerto Gaitán (Meta), impartida a la ORIP de Puerto López (Meta).

ARTÍCULO 9. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de Lebrija (Santander), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 4360 del 3 de agosto 2018.

ARTÍCULO 10. Suspender de manera provisional la orden de inscripción con fines publicitarios contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 4360 del 3 de agosto 2018, que da inicio al Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural del Municipio de Lebrija (Santander), impartida a la ORIP de Bucaramanga (Santander).

ARTÍCULO 11. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de Topaipí (Cundinamarca), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 4230 del 3 de agosto 2018.

ARTÍCULO 12. Suspender de manera provisional la orden de inscripción con fines publicitarios contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 4230 del 3 de agosto 2018, que da inicio al Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural del Municipio Topaipí (Cundinamarca), impartida a la ORIP de Pacho (Cundinamarca).

ARTÍCULO 13. Suspender de manera provisional la Fase de Implementación del POSPR del Municipio de San Carlos (Antioquia), el cual fue aprobado mediante Resolución No. 4358 del 3 de agosto 2018.

ARTÍCULO 14. Suspender de manera provisional la orden de inscripción con fines publicitarios contenida en el artículo 2° de la Resolución No. 4358 del 3 de agosto 2018, que da inicio al Procedimiento Único

de ordenamiento social de la propiedad rural del Municipio San Carlos (Antioquia) impartida a la ORIP de Marinilla (Antioquia).

ARTÍCULO 15. El reinicio de la Fase de Implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de los municipios de Ituango (Antioquia), Cáceres (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander), Topaipí (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia), queda condicionado a que un comité conformado por el Director General de la ANT, el Director de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y los Subdirectores de las Subdirecciones que implementan el modelo de atención por oferta, verifiquen que las circunstancias que dieron origen a la suspensión de la Fase de Implementación de los POSPR hayan sido resueltas, según cada caso.

ARTÍCULO 16. La orden de apertura de expedientes a la que se refiere el artículo 22 de la Resolución No. 740 de 2017, se entiende provisionalmente suspendida para los municipios de Ituango (Antioquia), Cáceres (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander), Topaipí (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia), en concordancia con los términos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 17. En los municipios de Ituango (Antioquia), Cáceres (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander), Topaipí (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia), se podrán seguir adelantando aquellas actividades que garanticen la continuidad de la Articulación Institucional y de la estrategia de "Semilleros de la Tierra y el Territorio", así como actuaciones de impulso a procesos en curso, orientadas a la conservación de la información contenida en los POSPR.

ARTÍCULO 18. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C., a los 14 SEP 2018

JAVIER ANDRÉS FLÓREZ HENAO

DIRECTOR GENERAL (E)

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Elaboró: Tania Guzmán P. – Ángela Martin P.
Revisó: Elizabeth Gómez Sánchez
Revisó: Andrés González Vesga
Aprobó: Tatiana Santos Dukon

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 6162 - DE 2018

(20 SEP 2018)

"Por la cual se aclaran algunos apartes de la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018 'Por medio de la cual se suspende de manera provisional la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca)'"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 4 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, en el artículo 2°del Decreto 1399 del 3 de agosto de 2018 y,

I. CONSIDERANDO

Que mediante Resoluciones 1384 del 5 de octubre de 2017 y 191 del 12 de febrero de 2018, el Director General de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, impartió orientaciones para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca), dada la intervención catastral bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito, disponiendo la remisión de los trámites con destino a las Subdirecciones de Seguridad Jurídica y Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas por parte de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de Tierras y Demanda y Descongestión.

Que observando lo señalado en el numeral 4 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, el Director General de la ANT, mediante las resoluciones 2831, 2822, 4374, 4375, 4360, 4230 y 4358 de 2018, aprobó en su orden los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de los Municipios de Ituango (Antioquia), Cáceres (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) Topaipi (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia), respectivamente, atendiendo la información recolectada en la fase de formulación, bajo el liderazgo de la Subdirección de Planeación Operativa de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, atendiendo lo dispuesto en el Decreto Ley 233 de 2015, Decreto Ley 902 de 2017, la Resolución 129 del 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Resolución 740 de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras.

Que la expedición de las resoluciones que aprobaron los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, implican el inicio de la fase de implementación, a través del impulso del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural, a través de la metodología del barrido predial para levantar la información física, jurídica y social de los predios ubicados en cada uno de los municipios focalizados, para iniciar posterior y paulatinamente, las actuaciones administrativas encaminadas a ejecutar los asuntos señalados en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017.

"Por la cual se aclaran algunos apartes de la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018 'Por medio de la cual se suspende de manera provisional la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca)'"

Que mediante Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018, el Director General (E) de la ANT suspendió de manera provisional la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca), considerando:

"*Que según el concepto de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), emitido el 1 de julio de 2018, los POSPR pueden y deben ser suspendidos en cualquiera de sus Fases, cuando quiera que las condiciones de seguridad en la respectiva zona focalizada así lo aconsejen y siempre que se verifiquen las circunstancias de excepcionalidad allí descritas. Por tanto, los aspectos*
asociados a las situaciones de seguridad pueden condicionar el inicio de la Fase de Implementación de los POSPR.

Que teniendo en cuenta el concepto de la Oficina Jurídica de la ANT mencionado en el considerando anterior, y a partir del ejercicio de monitoreo y seguimiento de las condiciones en materia de orden público, y su verificación con las autoridades de la Fuerza Pública, los municipios de Ituango y Cáceres (Antioquia), no satisfacen las condiciones mínimas de seguridad que permitan dar inicio inmediato a la Fase de Implementación de los respectivos POSPR, aprobados mediante Resoluciones No. 2831 de 2822 del 27 de junio de 2018.

Que de acuerdo con los ciclos de planeación, desde el año 2017 en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto previsto para el proyecto de Inversión 2018 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) denominado "ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL", tenía una apropiación de &67.424.930.786 de (sic) pesos y, con base en este horizonte presupuestal, la ANT, a través de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, debía proyectar sus metas de planeación y su plan de acción para el año 2018.

Que, por lo tanto, la DGOSP de la ANT proyectó como una de las metas de su plan de acción para el año 2018, la de adelantar la Fase de Implementación de los POSPR en ocho de los municipios focalizados e intervenidos durante el año 2017.

Que en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 39% del monto total asignado al proyecto ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL", es decir, la suma de "26.424.930.786 de (sic) pesos, son recursos en condición presupuestal denominada "sin situación de fondos" y, por tanto, aunque hacen parte del presupuesto destinado a la elaboración de POSPR, no pueden ser comprometidos ni ejecutados.

Que el Coordinador del Grupo Contable de Registro Contable de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, emitió la certificación número 139 de 2018 en la cual hace constar que se realizó la constitución de ingresos nación por acreedores varios de la Agencia Nacional de Tierras, por valor de $105.489.311.938,84, mediante comprobante contable No. 2504375 del 29 de agosto de 2018, es decir, la Agencia Nacional de Tierras no dispone de estos recursos en su presupuesto .

"Por la cual se aclaran algunos apartes de la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018 'Por medio de la cual se suspende de manera provisional la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca)'"

Que ante la imposibilidad de dar inicio a la Fase de Implementación de los POSPO de los municipios de Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander), Topaipi (Cundinamarca) y San Carlos (Antioquia)" (sic), es preciso impartir directrices para no afectar la buena marcha de la gestión misional de la ANT, ni la tranquilidad y confianza de los habitantes de los municipios mencionados.

Que por todo lo anterior, se considera que hay fundamentos legales y presupuestales suficientes para suspender de manera provisional la Fase de Implementación de los POSPR de los municipios mencionados, así como de las actividades específicamente vinculadas al impulso del Procedimiento único de Ordenamiento social de la propiedad en su Fase Administrativa (Numeral 1 del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017)."

Que, con ocasión de la expedición de las **Resoluciones Nos. 1384 del 5 de octubre de 2017 y 191 del 12 de febrero de 2018**, las Subdirecciones Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de Tierras, de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, así como la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, advirtieron la necesidad de atender algunos asuntos de especial importancia, entre otros, bajo los siguientes criterios: cumplimiento de sentencias judiciales, vigilancia especial designada por el Ministerio Público o afectación de los derechos de poblaciones en caso de no resolución oportuna.

Que para tal fin, la Agencia dispuso del personal y recursos necesarios para la atención de los casos que se denominaron como prioritarios, de tal suerte que su atención se pueda mantener durante la vigencia fiscal del año 2018.

Que las circunstancias sobre las que se fundamenta la citada Resolución No. 6060 de 2018, es decir, la falta de situación de fondos requerida para la implementación de los Planes de Ordenamiento social de la propiedad o de seguridad, no es aplicable a las actividades de impulso procesal del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad de que trata el **artículo 60 del Decreto 902 de 2017** respecto a los casos de especial importancia antes mencionados. Esto debido a que su impulso no se desprende de la fase de implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad del respectivo municipio, en lo que guarda relación con el barrido predial masivo.

Que conforme a lo anterior, y debido a que se cuenta con los medios y recursos para su atención, existen razones suficientes para continuar con el impulso del **Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural** para los casos de especial importancia que se adecuan a los criterios mencionados, dado que la Resolución No. 6060 de 2018 que suspendió la fase de ejecución de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de los municipios en cuestión, no cobija a los asuntos que no tienen relación con la ejecución de las actividades de barrido predial masivo, contemplado dentro de la fase de implementación de los POSPR.

Que igualmente, es necesario continuar con el estudio e impulso de aquellos asuntos que fueron iniciados por demanda en el Instituto de Desarrollo Rural bajo el régimen jurídico de la Ley 160 de 1994, los cuales no se ven afectados por la suspensión de la fase de

"Por la cual se aclaran algunos apartes de la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018 'Por medio de la cual se suspende de manera provisional la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca)'"

implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad de los señalados municipios de que trata la Resolución No. 6060 de 2018.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Aclarar el artículo 17 de Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018, en el sentido de indicar que las *actuaciones de impulso a procesos en curso* que se podrán seguir adelantando, se refieren tanto a los asuntos iniciados por el Incoder bajo el régimen dispuesto en la Ley 160 de 1994, así como las actividades de impulso del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en su Fase Administrativa (Numeral 1 del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017), para los casos en los que no se contempla adelantar actividades de barrido predial masivo, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 6060 de 2018 se mantienen vigentes y no sufren aclaración o modificación alguna.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 SEP 2018 de 2018

JAVIER ANDRÉS FLÓREZ HENAO
Director General (E)
Agencia Nacional de Tierras
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectó: Andrea Mariana García Achury
Lady E. Arbeláez Ariza
Jhonattan A. Acevedo Figueredo
Revisó: Andrés Felipe González Vesga
Carolina Rodríguez Bolívar
Aprobó: Elizabeth Gómez Sánchez

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 6915 **DE 2020**

(13 AGO 2020 **)**

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En ejercicio de las funciones y facultades conferidas por medio del Decreto Ley 2363 de 2015, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994; los artículos 58, 60, 65 y concordantes del Decreto Ley 902 de 2017, el Decreto 1071 de 2015, la Resolución ANT No. 740 de 2017, la Resolución ANT No. 1384 de 2017, la Resolución ANT No. 3234 de 2018, la Resolución ANT No. 6162 de 2018, la Resolución ANT No. 5776 de 2018, la Resolución ANT No. 12096 de 2019, la Resolución ANT No. 915 de 2020 y, de acuerdo con las siguientes:

1. CONSIDERACIONES

Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen como deber del Estado, promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, como también dar prioridad al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales encaminadas a la producción de alimentos.

Que el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 establece que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través de la hoy Agencia Nacional de Tierras.

Que mediante el Decreto 1292 del 21 de mayo del 2003, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria–Incora-, y mediante el Decreto Ley 1300 del 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, que asumió las funciones misionales que en materia de dotación de tierras venía cumpliendo el Incora.

Que mediante el Decreto Ley 2365 del 7 de diciembre de 2015, se dispuso la supresión y liquidación del Incoder, en desarrollo de la facultad prevista en el literal a) del artículo 107 de la Ley 1753 de 2015.

Que igualmente, a través del Decreto Ley 2363 de 2015 se dispuso la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, como máxima autoridad de tierras de la Nación, entregándole, entre otras, la función de hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar.

Que la ANT tiene por objeto la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural para gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Que el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la ANT. Además, el parágrafo establece que las referencias normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la ANT.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Que, en desarrollo de las facultades extraordinarias para la Paz, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de Tierras, específicamente, el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras.

Que a través del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017 se ratificó lo dispuesto en el Decreto Ley 2363 de 2015 y se ordenó a la ANT la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y ejecución del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierra aprovechando los barridos prediales para identificar y solucionar tales situaciones.

Que conforme a los Decretos Ley 902 de 2017 y 2363 de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá focalizar las zonas para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, aunado a la obligación de ejecutar dicha política en el marco del barrido predial realizado con ocasión de la construcción del catastro multipropósito.

Que en el Título II de este Decreto Ley regula los aspectos relacionados con el Registro de Sujetos de Ordenamiento, RESO, como una herramienta técnica necesaria para inscribir a los sujetos beneficiarios previstos en el Acuerdo y un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades de acceso y formalización previstas en el Acuerdo. Así, el articulado de este título hace referencia a aspectos como la creación del registro de sujetos de ordenamiento; la relación de este registro con el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral; los criterios para la asignación de puntos para el RESO; la forma de ingreso y clasificación en él, y la promoción de la inscripción en el RESO.

En el Título VI del Decreto Ley 902 de 29 de mayo de 2017 se regulan los aspectos esenciales del Procedimiento Único. En el capítulo 1 se establecen las generalidades del procedimiento único. El inicio del procedimiento en zonas focalizadas (artículo 39). En este capítulo también establece los asuntos que va a conocer a través del procedimiento único (artículo 56); las fases del procedimiento único en zonas focalizadas (artículo 57); el procedimiento único en zonas no focalizadas (artículo 58), entro otros aspectos.

Que mediante Resolución 740 de 2017, adicionada por la Resolución No. 3234 de 2018, y modificada por la Resolución No. 12096 del 06 de agosto de 2019, se expidió el reglamento operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, que determina los instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para desarrollar las funciones asignadas a la ANT en dichos asuntos.

Que la citada Resolución ANT No. 12096 de 2019 en su artículo 22, establece el acto administrativo de archivo para aquellos asuntos en los que se determine que no es procedente el inicio de rutas de asignación o reconocimiento de derechos de propiedad rural, cuando no se reúnan los presupuestos para dar apertura o continuar con el señalado procedimiento único.

Que mediante Resolución No. 4375 del 06 de agosto de 2018, la Dirección General de la ANT dispuso la aprobación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del Municipio de Puerto Gaitán que contiene los aspectos enumerados en el artículo 44 del Decreto Ley 902 de 2017.

Que mediante Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018, la Dirección General de la ANT ordenó la suspensión de manera provisional, de la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca) dado que "*(…) los municipios de Ituango y Cáceres (Antioquia), no satisfacen las condiciones mínimas de seguridad"* y en lo demás *"(…)la Agencia Nacional de Tierras no dispone de estos recursos en su presupuesto".*

Que a través de la Resolución No. 6162 del 20 de septiembre de 2018 "*Por la cual se aclaran algunos apartes de la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018 (…)",* el Director General de la ANT dispuso aclarar el artículo 17 de la precitada resolución "*(…) en el sentido de indicar que las actuaciones de impulso a procesos en curso que se podrán seguir adelantando, se refieren tanto a los asuntos iniciados*

por el Incoder bajo el régimen dispuesto en la Ley 160 de 1994, así como las actividades de impulso del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en su Fase Administrativa (Numeral 1 del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017), para los casos en los que no se contempla adelantar actividades de barrido predial masivo(…)", esto atendiendo "*(…) la necesidad de atender algunos asuntos de especial importancia, entre otros, bajo los siguientes criterios: cumplimiento de sentencias judiciales, vigilancia especial designada por el Ministerio Público o afectación de los derechos de poblaciones en caso de no resolución oportuna(…)* respecto del cual "*(…) la Agencia dispuso del personal y recursos necesarios para la atención de los casos que se denominaron como prioritarios(…)".*

De lo anterior, la Resolución No. 6162 del 20 de septiembre de 2018 indica que "*(…) las circunstancias sobre las que se fundamental la citada Resolución No. 6060 de 2018, es decir la falta de situación de fondos requerida para la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad o de seguridad, no es aplicable a las actividades de impulso procesal del Procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de que trata el artículo 60 del Decreto 902 de 2017 respecto de los casos de especial importancia antes mencionados. Esto debido a que su impulso no se desprende de la fase de implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad del respectivo municipio, en lo que guarda relación con el barrido predial masivo".*

De otra parte, a la fecha de expedición del presente acto administrativo, la Agencia Nacional de Tierras, ante el estado de emergencia sanitaria para la contención del COVID-19 decretado por el Gobierno nacional, con el objetivo de proteger la salud y la vida de los colombianos y en especial de la población rural campesina, de conformidad a lo establecido en el Decreto 491 de 2020 "*Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*", los actos administrativos que se expidan en el periodo determinado para la contención, se suscribirán de forma digital, firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada (artículo 11), y se notificarán por medios electrónicos y en el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (artículo 4); esto dadas las condiciones que impone la mitigación de la pandemia.

1.1. Competencia.

Que el procedimiento único para la implementación del ordenamiento social de la propiedad, el cual, en virtud del artículo 40 del Decreto Ley 902, le es aplicable a las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los siguientes términos:

> **«Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.** El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la· Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado. La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. **En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.**
>
> **Parágrafo**. La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción.» (Negrilla fuera del original)

Que el citado Decreto Ley 2363 de 2015, en el artículo 23, establece las funciones de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, así:

> "1. (…)
>
> 3. Analizar y proponer las rutas jurídicas para dotar tierras a los potenciales beneficiarios de identificadas en el proceso de barrido predial.

4. (…)

5. Resolver en primera instancia, los procedimientos de acceso a tierras que se en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

6. (…)

7. Las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean asignadas y las que por su naturaleza le correspondan".

Que, en virtud de lo anterior, el Director General de la ANT profirió la Resolución No. 1384 del 5 de octubre de 2017, *"Por medio de la cual se imparten orientaciones para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios en los cuales se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito y se dictan otras disposiciones".*

Que, en tal sentido, y de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución antes mencionada, se ordenó a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la ANT, lo siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 24 del Decreto-Ley 2363/2015, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, ordénese a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión remitir a la Dirección de Acceso a Tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes ocho municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (Guajira), **Puerto Gaitán (Meta),** Lebrija (Santander), Puerto Leguízamo (Putumayo), Santa Marta (Magdalena), San Carlos (Antioquia) y Ovejas (Sucre).

La Dirección de Acceso a Tierras distribuirá los expedientes remitidos entre sus Subdirecciones o, entre las Unidades de Gestión Territorial por delegación del Director General, según corresponda a la naturaleza de cada caso". (Negrillas fuera del original)

Que, en atención esto, la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, a través de memorando con radicado No. **20184200005571** de fecha 15 de enero de 2018, ordenó entregar a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas el expediente administrativo del predio denominado "*El Porvenir"*, ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, para que dentro de sus competencias legales adelante las actuaciones administrativas que correspondan.

Que, en consecuencia, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para conocer de las solicitudes de adjudicación de predios baldíos ubicados en los municipios focalizados, dentro de ellos, el de Puerto Gaitán, Meta, y, en especial, de las pertenecientes al predio conocido actualmente como *El Porvenir.*

Que igualmente, en virtud de lo establecido en el señalado artículo 27 de la Resolución 12096 de 2019 y la Resolución 915 de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras es competente para decidir sobre el ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO de que trata el Título II del Decreto Ley 902 de 2017, para aquellas solicitudes radicadas hasta el 4 de septiembre del año 2019, y, partir de dicho momento, será la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, para aquellas solicitudes comprendidas en municipios focalizados en los términos referidos.

1.2. Antecedentes.

1.2.1. La Sentencia SU-426 de 2016.

Que con ocasión de una acción de tutela instaurada por la señora Sulay Martínez y otros accionantes contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— y otras entidades de derecho público, resuelta en primera instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015); la Corte Constitucional seleccionó y asumió competencia para la revisión del proceso en referencia.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Que por lo anterior, el día once (11) de agosto de 2016, el alto Tribunal Constitucional profirió la Sentencia de unificación **SU-426 de 2016**, mediante la cual confirmó parcialmente la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; amparando entre otros, el derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población histórica que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014[1], expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Que dentro de las órdenes contenidas en la Sentencia **SU-426 de 2016,** se establece puntualmente:

> "**(ii)** Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en lo Ley 160 de 1994.
>
> (...)
>
> **(iv)** Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.
>
> **(v)** De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que, al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

Que las órdenes proferidas por la Corte Constitucional encuentran asidero en el estudio abordado al resolver el problema jurídico que cuestiona, i) la vulneración del derecho fundamental a la tierra y el territorio de los accionantes al no adelantar la identificación y posterior titulación de los fundos pese a los efectos de la revocatoria declarada desde el 14 de julio de 2014, y ii) si la Nación recuperó documentalmente el dominio de estos.

Que en el mismo sentido, las órdenes proferidas se enmarcaron en la relevancia constitucional del caso que *"(...) se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros. En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores".*

De allí que, en el asunto, la Alta Corporación tuvieran en cuenta el conjunto de supuestos fácticos narrados en el trámite, que demuestra la condición de vulnerabilidad de los actores, y que devino en la categorización de estos como **ocupantes históricos** (se resalta) teniendo en cuenta su asentamiento data 45 años atrás, y el padecimiento sufrido por estos "(...) *debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso".*

Que, por lo anterior, la Subdirección de Acceso a Tierras den Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras expidió la Resolución No. 5776 de 2018 *"Por la cual se abre actuación administrativa de asignación de derechos en el marco del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado "El Porvenir", ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento a lo*

[1] A través de la cual el Incoder dispuso la revocatoria de veintisiete actos de adjudicación de predios proferidos por el Incora, y ordenó que volvieran al dominio de la nación con carácter de baldíos.

dispuesto en la sentencia de unificación SU -426 de 2016 de la Corte Constitucional y se ordenan otras actuaciones"

Que en dicho acto administrativo se indicó, entre otras cosas, la ruta jurídica de actuación para el estudio de las solicitudes de adjudicación que recaen sobre el predio denominado "*El Porvenir",* ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

1.2.2. La Acción de Tutela expediente radicado No. T-00024 de 2018

Que mediante apoderado – Doctor CARLOS DANIEL VARGAS BACCI, el señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776 y otros, interpusieron acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras, en la cual, los accionantes manifiestan que ocupan y explotan económicamente algunos predios que se encuentran ubicados en la vereda "EL PORVENIR" del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, que vienen ejecutando actos propios de ocupación y que radicaron ante el antiguo INCODER solicitud de adjudicación y no se ha dado respuesta.

Que el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META) mediante fallo del 24 de abril de 2018 concedió el amparo constitucional de los derechos fundamentales reclamados por los accionantes, ordenando a la Agencia Nacional de tierras abstenerse de impedir explotación agropecuaria de los predios ocupados por los accionantes y adelantar los actos administrativos en el marco de las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, conforme a lo establecido por la Sentencia SU -426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas relacionadas con los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

Que la Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el día 07 de junio de 2018 procedió a decidir impugnación presentada por esta entidad (Agencia Nacional de Tierras) como accionada, en la cual, resolvió confirmar la decisión adoptada por el *a quo*. Decisión que fue notificada mediante correo electrónico el día 08 de agosto de 2018, según comunicación de entrada radicado No. 20181030732041.

1.2.3. La solicitud.

Que el (la) señor (a) **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, presentó con la acción de tutela, formato de solicitud de adjudicación ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, respecto del predio denominado ***"Villa Camila"***, ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como ***"El Porvenir"***, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Que la solicitud en cuestión no cuenta con número de expediente o fecha de radicación dentro de los registros documentales en poder de la ANT; no obstante, en virtud de la orden impartida por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LOPEZ (META), en consonancia con la orden cuarta literal (ii) de la sentencia SU – 426 de 2016 de la corte Constitucional, esta Subdirección procede a resolver la solicitud de adjudicación allegada con la acción judicial.

Que, así las cosas, para resolver el presente asunto, es necesario hacer unas consideraciones previas en relación a la situación jurídica del predio de mayor extensión donde recae la pretensión de adjudicación; para de esta manera continuar con el estudio del caso particular y, finalmente, establecer la procedencia o improcedencia de la titulación reclamada.

1.3. Identificación del predio de mayor extensión.

Que de acuerdo con la información consagrada en el Informe Técnico Jurídico Preliminar- ITJP y demás documentos recabados durante la fase preliminar de la actuación administrativa, es posible establecer las características del predio de mayor extensión conocido actualmente como ***"El Porvenir"***, dentro del cual, como se verá, se encuentra la ocupación sobre la cual recae la presente solicitud de adjudicación.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Que durante los años 1992 a 1996 el extinto INCORA, adjudicó veintisiete (27) predios ubicados en el predio de mayor extensión denominado "*El Porvenir"*, ubicado en inmediaciones del Centro Poblado *"El Porvenir"*, perteneciente al municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

Que la sumatoria identificada del área titulada se estima aproximadamente en **25940 ha + 3605 m2**, discriminados como se muestra a continuación, y, donde se determinan las adjudicaciones de los veintisiete (27) predios ubicados en el predio de mayor extensión denominado "*El Porvenir"* así:

ID	PREDIO	FMI	AREA	DOC.	FECHA
1	**El Caracolí**	234-8023	998,5000	Res. 051	16/01/1992
2	**El Morichal**	234-8012	998,1500	Res. 027	15/01/1992
3	**Cumare**	234-8014	984,1000	Res. 029	15/01/1992
4	**El Espejo**	234-8010	995,6000	Res. 025	15/01/1992
5	**Tafurito**	234-13194	994,0500	Res. 046	16/01/1992
6	**Campo Hermoso**	234-8016	999,1000	Res. 031	15/01/1992
7	**Mata de Monte**	234-8024	994,1000	Res. 052	16/01/1992
8	**Las Corocoras**	234-8018	994,9000	Res. 041	16/01/1992
9	**La Sabana**	234-8017	999,7580	Res. 040	16/01/1992
10	**La Palmita**	234-13195	999,9768	Res. 047	16/01/1992
11	**Lagunazo**	234-13202	697,9757	Res. 891	23/09/1996
12	**El Caminito**	234-13196	994,5000	Res. 048	16/01/1992
13	**San José**	234-8009	977,4000	Res. 024	15/01/1992
14	**Casuarito**	234-8020	1000,0000	Res. 044	16/01/1992
15	**Chicharra**	234-13203	699,9500	Res. 973	25/09/1996
16	**Mi llanura**	234-8007	979,5000	Res. 022	15/01/1992
17	**Pajonal**	234-8008	984,2000	Res. 023	15/01/1992
18	**El Rincón**	234-8011	883,8500	Res. 026	15/01/1992
19	**La Gran laguna**	234-8025	1000,0000	Res. 053	16/01/1992
20	**Matejey**	234-8022	868,1000	Res. 049	16/01/1992
21	**Cascabeles**	234-13193	979,6000	Res. 043	16/01/1992
22	**Palo Alto**	234-8019	998,7500	Res. 042	16/01/1992
23	**La Perla**	234-13197	985,3000	Res. 050	16/01/1992

ID	PREDIO	FMI	AREA	DOC.	FECHA
24	**La Honda**	234-8013	985,8500	Res. 028	15/01/1992
25	**La Laguna**	234-8006	972,2000	Res. 021	15/01/1992
26	**El Estero**	234-8021	983,8500	Res. 045	16/01/1992
27	**El Pedregal**	234-8015	991,1000	Res. 030	15/01/1992

En el año 2007, sobre los veintisiete (27) predios adjudicados se realizó un englobe en cinco (5) grandes predios denominados "*El Rincón", "Las Villa Alexandra", "Campo Hermoso", "El Pedregal"* y "*Mi Llanura*" cuya información se especifica a continuación:

PREDIO	FMI	CÉDULA CATASTRAL	ESCRITURA PÚBLICA	AREA (Ha)
El Rincón	234-15742	00-01-0001-0742-000	EP 2919 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4730 ha + 3.000 m^2
Las Corocoras	234-15743	00-01-0001-0745-000	EP 2920 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	5681 ha + 2105 m^2
Campo Hermoso	234-15744	00-01-0001-0087-000	EP 2921 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	5969 ha + 5000 m^2
El Pedregal	234-15745	00-01-0001-0052-000	EP 2922 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4918 ha + 3000 m^2
Mi Llanura	234-15741	00-01-0001-0756-000	EP 2918 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4641 ha + 0500 m^2
AREA TOTAL				25940 ha + 3605 m^2

Que mediante **Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014**, el Subgerente de Tierras Rurales del extinto Incoder, dispuso la revocatoria en todas sus partes de los actos de adjudicación de los fundos antes relacionados, y los retiró del ordenamiento jurídico, de suerte que *"(...) dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno".*

Que el artículo 6 de la Resolución en mención, indica que, revocados los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles descritos, estos pasan al dominio de la Nación en calidad de baldíos.[2]

1.4. Consideraciones preliminares sobre la situación jurídica del inmueble objeto de ocupación.

La característica tradicional de los derechos de propiedad inmobiliaria como un tipo de derecho real, supone que estos representan facultades que ejerce un determinado sujeto de manera inmediata sobre un bien del que afirma es propietario: "*El Derecho real es que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa*"[3]. Pese a ello, el derecho de propiedad no supone, en rigor,

2 CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 675. BIENES BALDÍOS. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.

3 BAUDRY-LACANTINERIE Gabriel. Précis de droit civil Tomo II. Pag 33. Tomado de GARCÍA MAYNEZ Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrua. Página 206.

relaciones exclusivamente entre un sujeto y el objeto apropiado: Las relaciones reguladas en los derechos de propiedad, suponen otros sujetos, que tiene el deber correlativo de acatar las prerrogativas propias de quienes fungen como dueños: La pertenencia como relación jurídica obliga en tal orden, la regulación de relaciones entre diversos sujetos que reconocen facultades para que se ejecuten acciones que involucran los objetos apropiados. Los obligados fungen como parte esencial dentro de la definición y caracterización del dominio, pese a que por razones metodológicas si acostumbre a hacer abstracción de ellos[4].

Los sistemas de derecho de propiedad inmobiliaria han recurrido históricamente a la aplicación de dos tipos de criterios para definir el origen de la propiedad: De un lado, apelando a la figura del denominado título, perfeccionado el cumplimiento de solemnidades expresadas en la ley, y en cuya virtud se establece una relación entre un conjunto de personas, por un lado, un sujeto denominado propietario ejerce de manera exclusiva facultades sobre un determinado objeto, y de otro lado, un conjunto de personas que aceptan, o se obligan a hacerlo. El fundamento del dominio reside, en tal orden, en la declaración ejecutada dentro del respectivo título. En segundo lugar, los sistemas acuden al reconocimiento de cierto tipo de acciones connotativas de derechos de propiedad, y que generalmente se relacionan con el efecto de aprovechar económicamente el objeto que apropian. La apropiación es caracterizada como el efecto inmediato de la ejecución de determinadas acciones que fueron fijadas como el supuesto de hecho para la configuración de la propiedad.

El régimen colombiano sobre el derecho de propiedad inmobiliaria se ha estructurado a través de la combinación de los dos criterios referidos: De un lado impone la necesidad de contar con títulos de propiedad y de su respectiva inscripción en los registros de propiedad, como condición necesaria para afirmar que se es propietario, pero a su vez prevé como supuestos de hecho el aprovechamiento económico, a través de las figuras de la posesión y ocupación con importantes efectos relacionados con la institución del dominio.[5]

En tal orden, y dada la hoy indiscutible condición de terrenos baldíos de los predios sobre los que se dirige las solicitudes de adjudicación bajo estudio, se analizarán en las líneas siguientes el régimen de apropiación y configuración de los derechos de propiedad sobre tal tipo de terrenos. Para tales efectos se analizará: **(i)** el denominado régimen de la ocupación previa tal como fue estructurado en la Ley 160 de 1994, **(ii)** se establecerán las afectaciones de dicha institución con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, y **(iii)** finalmente, definir según dicho régimen la procedencia de las solicitudes de adjudicación formuladas.

1.4.1. Régimen de la ocupación previa.

---

[4] *"Nadie tendrá la ocurrencia de inscribir dicha obligación en el pasivo de su patrimonio: el valor positivo que figura en el activo del titular del derecho real, no corresponde un valor negativo en el patrimonio de otra persona. Por esto es que en la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados" Ibidem. La tesis de abstracción de los sujetos pasivos también es criticada al señalar que es un buen recurso para explicar el ejercicio del derecho de propiedad sin necesidad de recurrir a la intermediación de otros. Sin embargo, se califica como falsa pues: "Entre una persona y una cosa no puede existir un vínculo jurídico; semejante relación carecería de sentido. Por definición, todo derecho es un vínculo entre personas" PLANIOL Marcelo y RIPERT Jorge. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés Tomo II. Lo Bienes. Traducción Española DÍAZ CRUZ Mario. Cultural, S.A. Habana 1940.*

[5] La ocupación es calificada como un hecho que da lugar a determinadas situaciones jurídicas. Tratándose de bienes inmuebles está solo puede configurarse cuando se trata de terrenos baldíos, y siempre que esta hubiere iniciado antes del 29 de mayo de 2017, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017. La ocupación se materializa mediante la apropiación material de un área a través de hechos de aprovechamiento económico incluidas las efectuadas por mujeres bajo la denominación de economía del cuidado. La posesión es un fenómeno jurídico que se concreta a través del hecho de ejercer el aprovechamiento económico de un predio de propiedad privada. A diferencia de la ocupación, esta no se realiza sobre terrenos baldíos, y no exige que las acciones se realicen de manera directa, es decir, que se puede ser poseedor a través de un tercero. La posesión puede ser regular si fue adquirida con justo título (venta, permuta, donación, sentencia) y de buena fe, cuando hay conciencia que el acto jurídico no está viciado, o que no se cometió algún fraude (Artículo 764 del Código Civil) La posesión es irregular cuando se carece o de justo título o de buena fe. (Artículo 764 del Código Civil).

Con un claro antecedente colonial, para el acceso a las tierras públicas se postuló, como regla general, que los particulares interesados en adquirir derechos de propiedad sobre tierras baldías debían por su iniciativa ocuparlas, y ejercer sobre ellas actividades de aprovechamiento económico.

Dentro de la Ley 160 de 1994 el régimen de baldíos conservó sus rasgos fundamentales a saber: señaló que la propiedad de las tierras baldías sólo podía adquirirse en virtud del título expedido por el Estado (artículo 65); condicionó la titulación al ejercicio de la ocupación de los particulares en extensiones no superiores a la Unidad Agrícola Familiar por Zonas Relativamente Homogéneas (artículos 38 y 67)[6], en adelante UAF, por un término no inferior a los 5 años, y a la explotación económica en una proporción no inferior a las 2/3 partes del área solicitada (incisos 1 y 2 del artículo 69 de la Ley 160 de 1994)[7]. Estas exigencias, en general, son analizadas bajo la denominación de condiciones objetivas, en tanto, definen atributos que deben revestir los terrenos baldíos para que puedan ser objeto de la adjudicación.

A su vez dentro de la Ley 160 se definieron condiciones subjetivas, que son los atributos personales que deben reunir los postulantes para la adjudicación. En ellas se afirma, como regla general, que las personas solicitantes no deben ostentar derechos de propiedad sobre otros predios rurales, no deben tener la condición de adjudicatarios dentro de los 15 años anteriores, no deben poseer patrimonios superiores a los 1000 salarios mínimos legales, entre otras, (capítulo XII).

Analizado así la procedencia de una adjudicación de baldíos exige la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos.

1.4.1.1. Excepciones a la ocupación previa como modo de acceder a la propiedad de tierras baldías en el régimen de la Ley 160 de 1994.

Como se indicó, la figura de la ocupación previa se postuló como la regla general para definir el acceso a los derechos de propiedad sobre tierras baldías, empero, este prevé múltiples excepciones que identifican ciertos atributos de algunos terrenos baldíos que los hacen inadjudicables, o en otros eventos, **no adjudicables por la vía de la ocupación previa**.

Dentro de tales excepciones podemos identificar la figura de la reserva de baldíos, que implica que el Estado sustrae del régimen general de la ocupación determinadas áreas de baldíos.

Las reservas de baldíos, a su vez, contemplan múltiples hipótesis: i. Son baldíos reservados los predios de propiedad privada que revierten al dominio de la nación en virtud de la declaratoria de la extinción administrativa del dominio y deben ser destinados a procesos de adjudicación especiales, conforme al reglamento que expida la Junta Directiva del Incora (hoy Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras) (artículo 56 ley 160 de 1994); ii. Son baldíos reservados los delimitados conforme a las reglas de los artículos 67, 75 y 76 de la Ley 160 de 1994, para su destinación a actividades de utilidad pública e interés social, o para el establecimiento de regímenes especiales de ocupación, aprovechamiento y adjudicación; iii. Son baldíos reservados las islas de uno y otro mar que no hayan sido apropiados por particulares en virtud de título traslaticio del Estado; iv. Son baldíos reservados los delimitados para la constitución de títulos étnicos expedidos en vigencia de la Ley 135 de 1961; v. Son baldíos reservados los que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados (artículo 48 numeral 3).

La multiplicidad de reservas que se presenta en el régimen agrario colombiano comparte un punto en común: en todas ellas no se aplican las reglas generales de apropiación y titulación de baldíos.

---

[6] Resolución No. 041 de 1996 "por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por zonas relativamente homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales", expedida por la Junta Directiva del Incora.

[7] Los referidos incisos fueron derogados por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017, no obstante, como se mostrará, dichas reglas pueden ser aplicadas en virtud del régimen de transición previsto por el mismo decreto.

Visto así, la constitución o identificación de reservas no son otra cosa que la abstracción de terrenos del conjunto de tierras baldíos sobre los que los particulares por su iniciativa pueden iniciar ejercicios de ocupación con la pretensión de obtener su titulación.

La constitución o identificación de una reserva de baldíos no conduce a afirmar que sobre los terrenos delimitados con dicha calidad no se puede adelantar actividades de aprovechamiento. Es decir, la reserva no se adscribe como propiedad definitoria, la de imputar su imposibilidad de adelantar actividades de aprovechamiento, pues, su rasgo característico es la abstracción del régimen general de titulación. Así, por ejemplo, los baldíos reservados producto de la aplicación de la extinción administrativa, los de la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los reservados según el artículo 76 ibídem, se deben destinar a procesos de adjudicación conforme al régimen especial que expida el gobierno nacional.

1.4.1.2. Ocupaciones indebidas en el marco de la Ley 160 de 1994.

Como se ha señalado en varias ocasiones dentro del presente documento, el régimen que planteaba la Ley 160 de 1994 permitía que los particulares por su iniciativa ejercieran la ocupación sobre terrenos baldíos como una condición para solicitar su titulación. También se mostró que dicha regla presentaba multiplicidad de excepciones en las que se postulaba formas distintas a la ocupación espontánea como supuestos de hecho para lograr la adjudicación.

Con ello, es claro que, en el régimen de ocupación previsto por la Ley 160 de 1994, no todas las formas de ocupaciones de baldíos estaban permitidas. Dos aspectos resultaban cruciales para definir si las ocupaciones podían ser consideradas como regulares, es decir, aquellas que dan lugar a la titulación, o, las indebidas y, por tanto, de aquellas que debían corregirse a través de la recuperación del inmueble.

El primero tiene que ver con las condiciones personales del sujeto que ejecuta la ocupación, pues como se mostró, la titulación está restringida a personas que reúnan delimitadas condiciones económicas y patrimoniales. Este aspecto, en general, configura las causales subjetivas de la ocupación indebida, pues, orbitan frente a las condiciones que reúnen los sujetos que ejercen la ocupación.

El segundo aspecto se relaciona con la calidad del inmueble, pues el baldío sobre el que se ejerce la ocupación debe ser de aquellos adjudicables y que se encuentren dentro del conjunto de baldíos que pueden ser apropiados mediante ocupación. Este tipo de condiciones son denominadas como causales objetivas, en tanto, gravitan sobre las calidades que debe tener el inmueble objeto de la ocupación.

En ambos casos, es decir, la ocupación ejercida por una persona que no cumpla con las condiciones de sujeto de reforma agraria, o bien la ocupación adelantada por personas, independiente de sus condiciones personales, sobre terreno no adjudicable, o excluidos del régimen general de ocupación, se califican como indebidas y su tratamiento debe ser, en consecuencia, la recuperación de baldíos.

1.4.1.3. La ocupación previa con posterioridad al Decreto Ley 902 de 2017.

Con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 se incorporaron algunas modificaciones al régimen de tierras previsto por la Ley 160 de 1994, ajustando, entre otras, los programas de acceso a la propiedad, con la pretensión de garantizar que su ejecución se realice con mejores criterios de equidad, privilegiando a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad, y otorgando prerrogativas a sujetos que históricamente han sido marginados del acceso a la propiedad rural.

Para tales efectos, se dispuso en primera medida unificar los programas de acceso a tierras dada la alta dispersión con el que se estructuraron al interior de la Ley 160 de 1994.[8] Frente a dicho

[8] Es posible identificar dentro de la Ley 160 de 1994, por lo menos tres tipos de programas inspirados en los mismos propósitos de dotar de tierras a los campesinos y superar los fenómenos de concentración y fraccionamiento de la propiedad (ordinal 2do artículo 1ero Ibidem). El primero de ellos se consignó en el capítulo IV, bajo la denominación de Subsidio y Crédito y consistía en la asignación de un aporte estatal, por regla general no reembolsable, que se asignaba al campesino para que adelantara el proceso de compra del

panorama heterogéneo, el Decreto Ley 902 buscó establecer reglas más claras sobre la determinación de los sujetos aspirantes, el procedimiento para su adjudicación y las limitaciones al ejercicio de la propiedad derivadas del acto de titulación.

Dar mayor claridad sobre dichos aspectos no solo facilita la ejecución institucional de tales programas, sino que, además, asegura que la oferta institucional sea conocida con mayor precisión.

Aparejado a ello, se estructuró un sistema de adjudicación con mayor equidad en su operación. Esto debido a que la expedición de la mayoría de los estatutos agrarios partió de la identificación de dos fenómenos relacionados con la tenencia de la tierra. De un lado, la constitución de propiedades de grandes extensiones en cabeza de pocos titulares y la alta presencia de minifundios y de sujetos sin acceso a tierras. Pese a ello, se mantuvo como una figura válida para la apropiación y titulación de los terrenos baldíos la ocupación por iniciativa de los mismos particulares. La figura de la ocupación previa como prerrogativa para lograr la titulación de baldíos surgió en un contexto histórico abiertamente distinto al que hoy vivimos. Dichas condiciones son hoy distintas, por cuanto, los objetivos que deben condicionar los programas de dotación de tierras deben ser también distintos. Ello explica porque el decreto establece tres tipos de sujetos: de un lado los que su acceso a tierras debe realizarse a título completamente gratuito, porque sus condiciones de vulnerabilidad económica representa mayores dificultades; los sujetos que reciben adjudicaciones a títulos parcialmente gratuito, en tanto, se ubican en segmentos cuyas condiciones de vulnerabilidad económica les permite asumir proporcionalmente a su patrimonio el pago de ciertas sumas de dinero que deben destinarse a nuevos programas de adjudicación y, los que solo pueden acceder a los programas de formalización de la propiedad.

La derogatoria de la ocupación previa como modo para acceder a los terrenos baldíos, y la unificación de las condiciones de selección para la adjudicación de predios o subsidios, implica concebir un proceso de selección objetiva que permita identificar a los potenciales beneficiarios merecedores de los programas de acceso a tierra.

Para tales efectos, se dispuso la creación del registro de sujetos de ordenamiento social de la propiedad, en adelante **RESO**, estructurado principalmente para el cumplimiento de dos objetivos: De una parte, a relacionar y ordenar a todos los sujetos que son beneficiarios de las políticas de ordenamiento social de la propiedad, y de otro, a servir como un insumo para el direccionamiento de la política de ordenamiento social.

El primero de tales objetivos resulta útil, especialmente, para resolver los distintos programas de acceso a tierras: Las personas interesadas en participar realizan su inscripción a través de un formulario diseñado para tales propósitos, denominado **FISO** (Formulario de Ingreso de Sujetos de Ordenamiento). Su diligenciamiento equivale a la petición formal de ingreso al registro, con lo cual,

---

predio y pagará con ello hasta el 70% de su valor. Este programa fue objeto de cuatro modificaciones dispuestas por los planes de desarrollo expedidos entre 2003 y 2015. El segundo programa es conocido bajo la denominación de adjudicación de predios del Fondo Nacional Agrario, en adelante FNA, o adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, en el que el Incora-Incoder-ANT adquirían predios, los incorporan a su patrimonio y posteriormente los adjudicaban. El tercer programa es el de titulación de baldíos en el que se identificaban sujetos que desarrollan ocupaciones con una duración igual o mayor cinco años y una explotación de por lo menos 2/3 partes del predio procediendo a realizar su titulación. Ciertamente es distinto asignar un subsidio para la compra de tierras que adjudicar un inmueble, incluso la adjudicación difiere dependiendo de su naturaleza. Empero los tres procesos guardaban algunas similitudes en tanto, estaban fundados en los mismos derroteros. Pese a ello las diferencias resultaban radicales, para el FNA se exigía que los aspirantes no tuvieran patrimonios superiores a 200 salarios mínimos, para subsidio no mayores a 200 y para baldíos hasta 1000. Los procedimientos para la determinación de sus beneficiarios también resultaban bastante diferentes. Así mismo, efectuadas las adjudicaciones, los regímenes de limitaciones a la propiedad también resultaban bastante distintos: para FNA se prohibía su enajenación por un término de 15 años sancionable con caducidad administrativa, para el subsidio la prohibición era de 12 años sancionable con la condición resolutoria, y para baldíos no había prohibición de enajenación, pero sí la de constitución de gravámenes.

la ANT valora si dicha persona cumple con los requisitos de elegibilidad. A su vez, se valoran las condiciones de vulnerabilidad económica, capacidad para la ejecución del proyecto productivo, y de otras situaciones de vulnerabilidad a través de la asignación de puntaje, determinantes en los procesos de selección objetiva.

La selección objetiva, por su parte, señala que los programas de acceso operan por demanda, y, dado que los recursos asignados no son suficientes para atender a la totalidad de aspirantes, se fijan reglas objetivas que determinan los órdenes en los que deben priorizarse la asignación de estos recursos. En dichos procesos se valoran las condiciones de vulnerabilidad económica, otorgando puntuaciones más altas a quienes tienen menores patrimonios, acciones afirmativas para corregir situaciones de discriminación negativa, como dar puntos a personas víctimas o a las mujeres rurales. También se asignan puntos a quienes llevan periodos de qué más largos dentro de los registros, otorgando un (1) punto por cada mes de permanencia en el registro, por dar algunos ejemplos.

Frente a la condición de la mujer rural, el RESO prevé varias medidas dirigidas a establecer situaciones en las que pueden obtener mayores puntuaciones y por ende en mejor posición para ser beneficiarias de los programas de dotación de tierras: se establece en la valoración de la experiencia que las actividades de la economía de cuidado deben ser tenidas también como generadoras de puntos por los lapsos en los que se hayan adelantado, en las mismas condiciones en las que se puntúan las otras actividades económicas. Así mismo, al establecer incentivos para que los beneficiarios se asocien, contempla que las mujeres que acrediten pertenecer a una asociación campesina reciben el doble de puntos, y el triple si ocupan cargos directivos dentro de la respectiva organización. Dicho tratamiento fue previsto también para todas las mujeres que pertenezcan a organizaciones de mujeres cuyo objetivo sea el de sensibilizar y empoderar las pretensiones femeninas de acceso a la propiedad[9].

1.5. Régimen de transición del Decreto Ley 902 de 2017.

Como se indicó, el tránsito normativo dispuesto con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 implicó múltiples transformaciones a los procesos de dotación de tierras que misionalmente ejecuta la ANT. Resulta especialmente problemático determinar las condiciones en las que dicho tránsito modificó los procedimientos de acceso a tierras que se hubieran encontrado en curso al momento de la expedición del Decreto Ley, así como los procedimientos que se deben adelantar actualmente, pero, cuyos supuestos de hecho hacen referencia a la Ley 160 de 1994 previas las modificaciones del Decreto Ley 902.

La aplicación de las normas en el tiempo supone considerar a la norma jurídica como un precepto con aptitud para regular situaciones jurídicas en determinados lapsos temporales, por cuanto, es necesario establecer claramente el momento en el que comienza a producir efectos y aquel en el que concluyen. En tal sentido, es posible considerar tres situaciones posibles: (i) la norma regula sólo situaciones posteriores a su existencia, sin que pueda admitirse su aplicación a hechos anteriores (irretroactividad de la ley) (ii) la norma regula incluso hechos sucedidos con anterioridad a su existencia (retroactividad de la Ley) y (iii) la norma pese a haber dejado de existir, continua regulando situaciones que fueron acaecidas dentro del periodo de su subsistencia, pero su aplicación se examina en un momento en el que ya no tiene efectos (ultraactividad de la Ley).

De los fenómenos de aplicación de la ley en el tiempo, la irretroactividad se formula como la regla general, justificada en la imposibilidad de que a sus destinatarios les es imposible sujetarse al cumplimiento de normas que no existen, de modo que se asegure que las situaciones consumadas bajo el imperio de una ley no puedan ser modificadas o alteradas por posteriores preceptos. Pese a ello, la retroactividad aplica para aquellos casos en los que expresamente se señale que identificándose una norma posterior como más favorable esta puede primar sobre la norma vigente para el momento en el que se despliega la conducta.

[9]Vid. Resolución 740 de 2017 del Director General de la ANT.

Paralela a esta excepción, la ultraactividad desarrolla la aplicación de normas anteriores ya derogadas, que resultan de mayor favorabilidad que las actuales, siempre que pueda mostrarse que los hechos iniciaron en su vigencia.

Dichos fenómenos son distinguibles en el tránsito normativo examinado: El Decreto Ley 902 postula que rige a partir de su expedición, derogando las disposiciones que le resulten contrarias (artículo 82). Con ello, por ejemplo, la adjudicación mediante cualquier proceso de selección objetiva que se hubiese establecido dentro de la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias quedan plenamente sustituidas por las reglas del RESO. De la misma manera, se entienden derogados aquellos supuestos de hecho que en vigencia de la Ley 160, sin las modificaciones del Decreto Ley, daban lugar a prerrogativas que otorgaban derecho a la adjudicación directa. Así, por ejemplo, la ocupación previa daba lugar, cumplidas las condiciones objetivas y subjetivas, a la adjudicación de los terrenos baldíos. Todas estas posibles hipótesis ya no se encuentran consignadas como prerrogativas que dan derecho a la adjudicación, en tanto, se establece que los procesos de selección de beneficiarios se rigen por las reglas del RESO. Esta condición constituye la regla general y materializa lo que hasta acá hemos denominado irretroactividad de ley.

En rigor, la irretroactividad señala que, a partir del 29 de mayo de 2017, los particulares no pueden iniciar ejercicios de ocupación previa, sino solo cuando estas hayan sido autorizadas por la ANT y su adjudicación se regule con el nuevo proceso de selección de beneficiarios.

Y en virtud de la ultraactividad, supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017 pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable al ocupante. No obstante, esta última regla exigirá que la ocupación se realice de manera regular, es decir, no puede pretenderse la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

1.6. Procedencia de las solicitudes de adjudicación.

Como un elemento común a las diferentes solicitudes de adjudicación de los aspirantes de tierra dentro del predio denominado hoy *"El Porvenir"*, encontramos que las ocupaciones se iniciaron con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 (29 de mayo de 2017)[10], por cuanto, en principio, se deben resolver sustancialmente bajo las prerrogativas de la Ley 160 de 1994.

Ahora bien, como se mostró, el efecto inmediato de la resolución que declaró la revocatoria de las adjudicaciones implicó que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y, por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho a la adjudicación. Esta conclusión, se extrae del análisis de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la Ley 160 de 1994 por efecto de la ultraactividad prevista por el Decreto Ley 902 de 2017, permite afirmar que, en principio, no resultan procedentes las titulaciones solicitadas.

1.6.1. Reserva de baldíos: áreas que superen la UAF.

La primera disposición aludida se encuentra contenida en el inciso segundo del artículo **67 de la Ley 160 de 1994**, **modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014,** que establece: "(…) *En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos.* (…)" (Subrayas fuera del texto original).

Lo anterior quiere decir que todas las áreas que excedan la UAF que sea definida por la Autoridad de Tierras para un municipio o zona determinada, en virtud de la ley se encuentran reservadas automáticamente para el desarrollo de los programas de acceso a tierra en favor de la población campesina.

[10] Informe técnico jurídico preliminar-ITJP

Así pues, todas las áreas que excedan la Unidad Agrícola Familiar definida para el predio de mayor extensión denominado *El Porvenir,* el cual, como se dijo*,* tiene una extensión aproximada de 25 mil hectáreas, se les debe impartir el tratamiento de baldíos reservado, y, por tanto, su régimen de ocupación, aprovechamiento y adjudicación no corresponde al ordinario.

Esto, como se dijo, implica que tales áreas no puedan ser objeto de ocupación libre por particulares con el objeto de que sean tituladas en su favor; toda vez que, al estar reservadas, su régimen de ocupación y adjudicación debe ser el que defina la hoy Agencia Nacional de Tierras.

En consecuencia, todas las ocupaciones ejercidas sobre dichas áreas no solo no otorgan derecho a la adjudicación, sino que, en principio, se tornan indebidas, debiendo ser recuperadas por la autoridad de tierras para el desarrollo de los programas en favor de la población campesina.

Al respecto se debe señalar que la Resolución ANT No. 740 de 2017 (Plan Operativo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad), adicionada por el artículo 10 de la Resolución ANT No. 108 de 2018, en lo relacionado con el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar, dispuso que cuando en desarrollo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad de qué trata el Decreto Ley 902 de 2017, quien opte por la adjudicación de un predio baldío conforme a lo señalado en el Decreto Ley 902 de 2017, la Unidad Agrícola Familiar – UAF- será calculada para cada caso individual bajo la metodología de UAF predial.

Que, en este sentido, y dado que la presente solicitud debe ser ventilada bajo las reglas del Procedimiento Único, por las razones que más adelante se expondrán, la ANT realizó el cálculo de las UAF predial tipo para el predio de mayor extensión conocido actualmente como El Porvenir, labor que se llevó a cabo haciendo uso de la metodología adoptada a través de la Resolución ANT No. 2533 de 2018.[11]

El resultado del cálculo de UAF se encuentra definido en el correspondiente informe agronómico que obra dentro del presente expediente principal del procedimiento de asignación de derechos del predio El Porvenir.

1.6.2. Efectos de la revocatoria directa: reserva especial de baldíos.

La revocatoria sobre actos administrativos de titulación de baldíos constituye un trámite de carácter especial, en cuya virtud, es posible revisar la legalidad de los actos de adjudicación. Su efecto, frente a la naturaleza de los predios puede darse en dos posibles vías: la primera, si se cuestiona la legalidad de la adjudicación al identificar que operó sobre predios que no tenían la condición de baldíos, su resultado al declarar la revocatoria será la de reconocer que se trataba de bienes que acreditaban dominio ajeno, bien sea propiedad privada, bienes fiscales patrimoniales, o bien de propiedad étnica. La segunda vía, como resultado posible, es que el bien objeto de la revocatoria adquiera nuevamente la condición de baldío, en tanto, lo que se reprochó fueron las condiciones personales del adjudicatario, que la configuración de la ocupación no era apropiada, o bien, que el baldío era inadjudicable o tenía el carácter de reservado.

De modo concreto, la Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el entonces Incoder, implicó que las áreas hoy ocupadas adquirieron la condición de terrenos baldíos, en tanto, demostró que los adjudicatarios no cumplían con los requisitos para acceder a las titulaciones; señalando, entre otras cosas, que la totalidad de los títulos de adjudicación se expidieron en violación a las condiciones materiales para la adjudicación de baldíos, por cuanto, los solicitantes no adelantaron la ocupación por el término de los 5 años y la explotación de las 2/3 partes de lo adjudicado, de acuerdo con las normas vigentes al momento de las titulaciones.[12]

La citada resolución también mostró que las adjudicaciones reprochadas obedecieron a la maniobra de particulares que ocupaban baldíos más allá de los límites permitidos, y dar a tales

[11] Por la cual se adopta la Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto Ley 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF Predial.
[12] Vid Numeral 6.5.4 de la Resolución 6423 de 2014 de Incoder.

ocupaciones la apariencia de legalidad a través de la titulación en favor de una pluralidad de personas que no ejercieron la ocupación y explotación de los predios.

En tal consecuencia, otro efecto de la Resolución No. 6423 de 2014 consistió en otorgar el carácter de baldíos a los predios objeto de solicitud. Dicha condición tiene como particularidad que sustrae los predios de aquellos que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación, en tanto, su aprovechamiento y titulación deben ser siempre direccionados por el respectivo administrador, para este caso, la ANT.

Quiere decir ello, que, pese a haber adquirido nuevamente la condición de terrenos baldíos, los predios no podían ser objeto de la ocupación espontánea y libre, esto es, por iniciativa de los particulares, ya que debía ser la autoridad de tierras, quien, a través de un proceso de selección objetiva, determinara las personas que podían ser adjudicatarias de dichos fundos.

Contemplarlo de una manera distinta, implica aceptar que la intervención del Estado, desplegada para corregir las irregularidades en las adjudicaciones y el fenómeno de concentración de dichos terrenos baldíos, se suspendía una vez terminada los trámites de revocatoria, y, sometido a la contingencia de los particulares; al no condicionarse la titulación a un proceso de selección objetiva no existe garantía que los beneficiarios sean aquellos que revisten mayores condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, es altamente probable que, por efecto de la ocupación, se prefiera en la adjudicación a quienes poseen mejores condiciones para ejecutar el señorío y el aprovechamiento económico. Por otra parte, no puede garantizarse equidad en las áreas a distribuir, pues, estas dependen de la manera en la que los particulares hubieran delimitado sus ocupaciones. En suma, negar los efectos de la reserva, implica abstraer al Estado de las decisiones de apropiación, y aprovechamiento económico, dificultando que el proceso de acceso se oriente por criterios de equidad que privilegien a las personas con mayor vulnerabilidad económica y social.

1.6.3. Improcedencia de las solicitudes de adjudicación de baldíos concentrados y reservados.

De conformidad con lo expuesto, y en consonancia con el inciso segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994**,** no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida. Como se señaló el peticionario afirma que su ocupación inició antes del 29 de mayo de 2017, bajo el régimen de la Ley 160 de 1994, lo que pudo ocurrir solo en dos hipótesis: **(i)** las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío reservado que se encuentra fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, **(ii)** lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se encontraban concentrados por efecto de la titulación indebida, y posterior englobe, lo cual devino en la revocación de dichas adjudicaciones.

En esta última situación implica, por tanto, que estas ocupaciones tampoco dan derecho a la adjudicación.

2. EL CASO CONCRETO.

De conformidad con las consideraciones expuestas, esta Subdirección procederá a estudiar la solicitud presentada por el señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, con la finalidad de establecer si es dable dar apertura a la segunda fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en los términos del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017 para el reconocimiento de derechos, o si por el contrario, la Agencia Nacional de Tierras debe abstenerse de ordenar dicha apertura y, por tanto, dar por terminado el presente trámite de acuerdo con el procedimiento aplicable.

2.1. La solicitud de adjudicación.

Tal como se indicó líneas arriba, el señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.385.776, presentó con la acción de tutela, formato de solicitud de adjudicación ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, respecto del

predio denominado ***"Villa Camila"***, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta; predio que se encuentra dentro del de mayor extensión conocido actualmente como *El Porvenir.* Que el solicitante manifestó ocupar el predio señalado desde el día **01 de febrero de 2010**[13]

Que igualmente, a través del Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO No. **97738** del 25 de julio de 2018, el señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA** elevó solicitud de acceso a tierras bajo la ruta de reconocimiento de derechos respecto del predio antes señalado.

2.1.2. La ocupación.

De acuerdo con los documentos contentivos de la solicitud de adjudicación y demás información recabada, se observa que el predio ocupado y reclamado en adjudicación presenta las siguientes características:

Descripción del área solicitada.

Para realizar el presente análisis, se tuvieron en cuenta, entre otras, las siguientes fuentes de información:

- Solicitud de adjudicación de baldío persona natural formato Incoder y anexos.
- Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO 97738 del 25 de julio de 2018.

De acuerdo a los documentos analizados, se identifica que la solicitud de adjudicación es realizada por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, y que dicha solicitud se realizó sobre el predio denominado *"**Villa Camila",*** según plano planimétrico anexo al expediente de solicitud de adjudicación, y describe un área general de **320 ha + 9121 m2,** como se observa en la imagen 1**.**

(ESPACIO EN BLANCO)

[13] Folio 1 de la solicitud de adjudicación.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

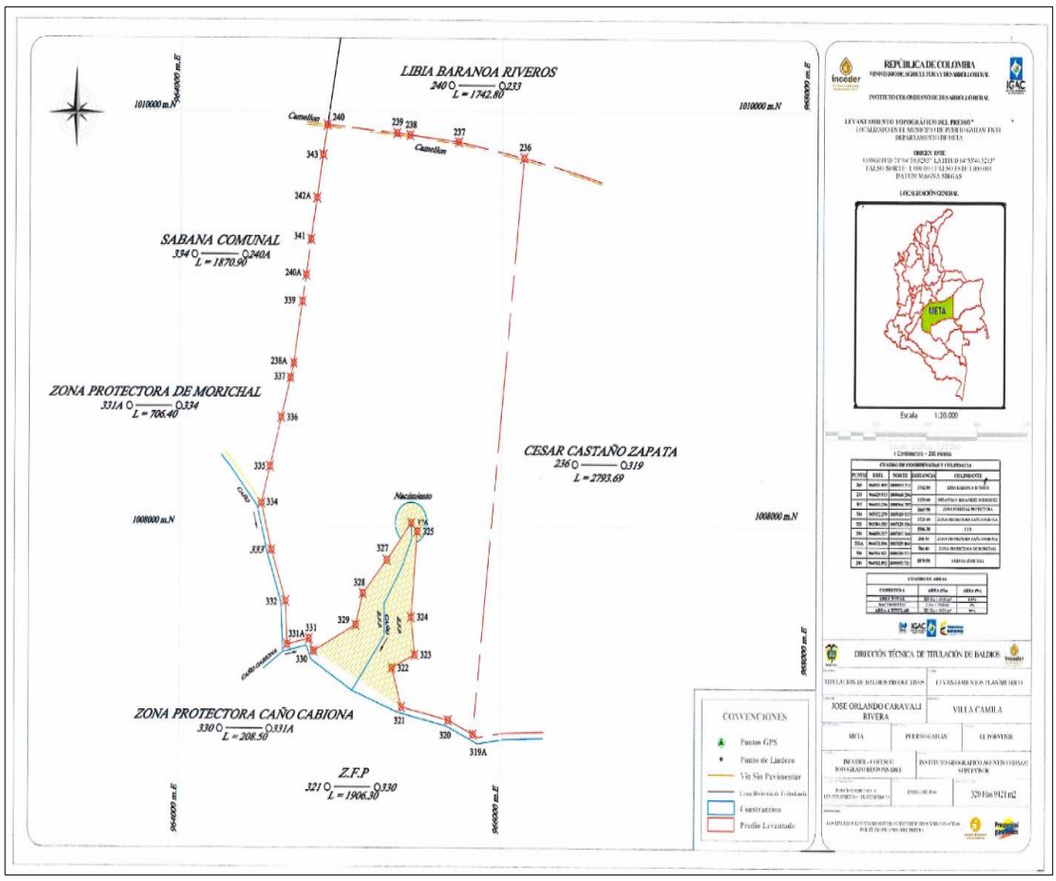


Imagen 1. Plano planimétrico anexo al expediente de solicitud de adjudicación con fecha 16 de marzo de 2016.
Fuente: INCODER

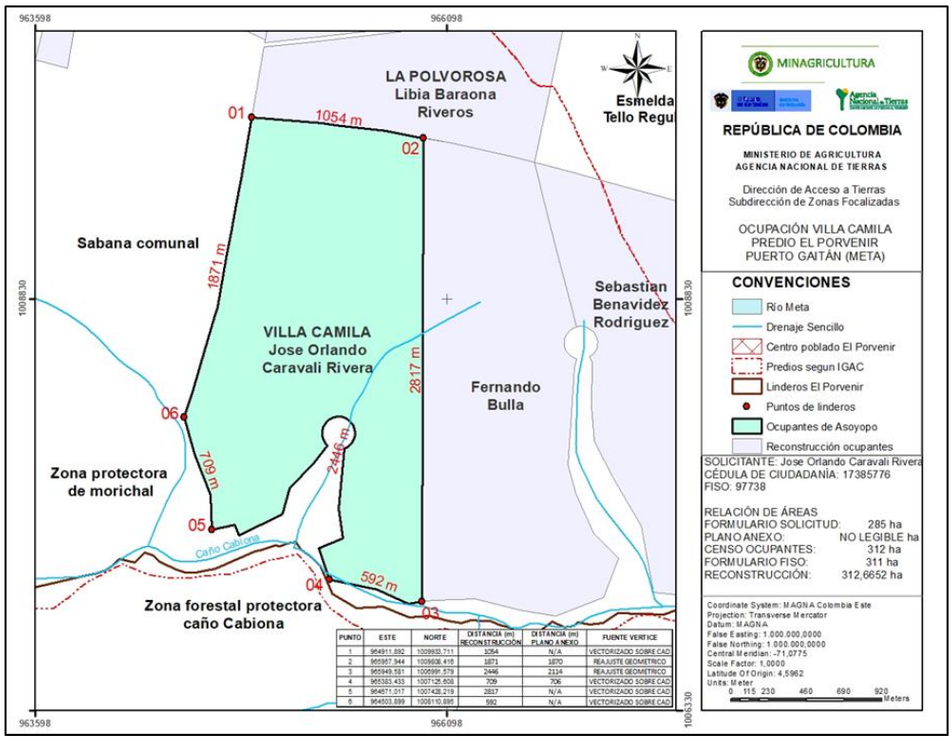
- Reconstrucción vectorial de la ocupación.

En aras de verificar la información aportada por el plano topográfico incluido en la Solicitud de Adjudicación de baldío (imagen 1), se realizaron procesos tales como la digitalización y reconstrucción vectorial a partir de información geográfica que fue posible extraer de repositorios relacionados con el predio Porvenir, los cuales permitieron realizar un aproximamiento del área, ubicación y colindancias de la ocupación (imagen 2).

Tabla 1. Coordenadas según la reconstrucción vectorial.

ID	Coordenadas (m)		Punto		Distancia (m)	Fuente Vértice
	Este	Norte	Inicial	Final	Reconstrucción	
01	964911,892	1009933,711	01	02	1054	Reconstrucción Vectorial
02	965957,944	1009808,416	02	03	2817	Reconstrucción Vectorial
03	965949,581	1006991,579	03	04	592	Reconstrucción Vectorial
04	965383,433	1007125,608	04	05	2446	Reconstrucción Vectorial
05	964671,017	1007428,219	05	06	709	Reconstrucción Vectorial
06	964503,899	1008110,895	06	01	1871	Reconstrucción Vectorial

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"



PUNTO	ESTE	NORTE	DISTANCIA (m) RECONSTRUCCIÓN	DISTANCIA (m) PLANO ANEXO	FUENTE VERTICE
1	964911.892	1009933.711	1054	N/A	VECTORIZADO SOBRE CAD
2	965957.344	1009838.418	1871	1870	REAJUSTE GEOMETRICO
3	965949.581	1008099.579	2446	2134	REAJUSTE GEOMETRICO
4	965303.433	1007125.608	709	706	VECTORIZADO SOBRE CAD
5	964671.017	1007426.219	2817	N/A	VECTORIZADO SOBRE CAD
6	964503.899	1008110.895	592	N/A	VECTORIZADO SOBRE CAD

Imagen 2. Reconstrucción vectorial del predio. *Fuente: SATZF-ANT*

Atendiendo lo anterior y para efectos de validar la información reconstruida, se comparó la reconstrucción vectorial con las diferentes fuentes de información y visitas de verificación realizadas en campo, con la cual se logró encontrar correlación entre las mismas en términos de áreas y colindancias, como se observa en la Imagen 3 y en las tablas 2 (áreas) y 3 (colindancias).

Tabla 2. Áreas según las fuentes.

Fuente	Área
Formulario Solicitud	285 ha + 0000 m2
Plano anexo	320 ha + 9121 m2
Censo de ocupantes	312 ha + 0000 m2
Acción de Tutela	285 ha + 0000 m2
Formulario FISO	311 ha + 0000 m2
Visita de verificación	352 ha + 9481 m2
Reconstrucción vectorial	**320 ha + 9203 m2**

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

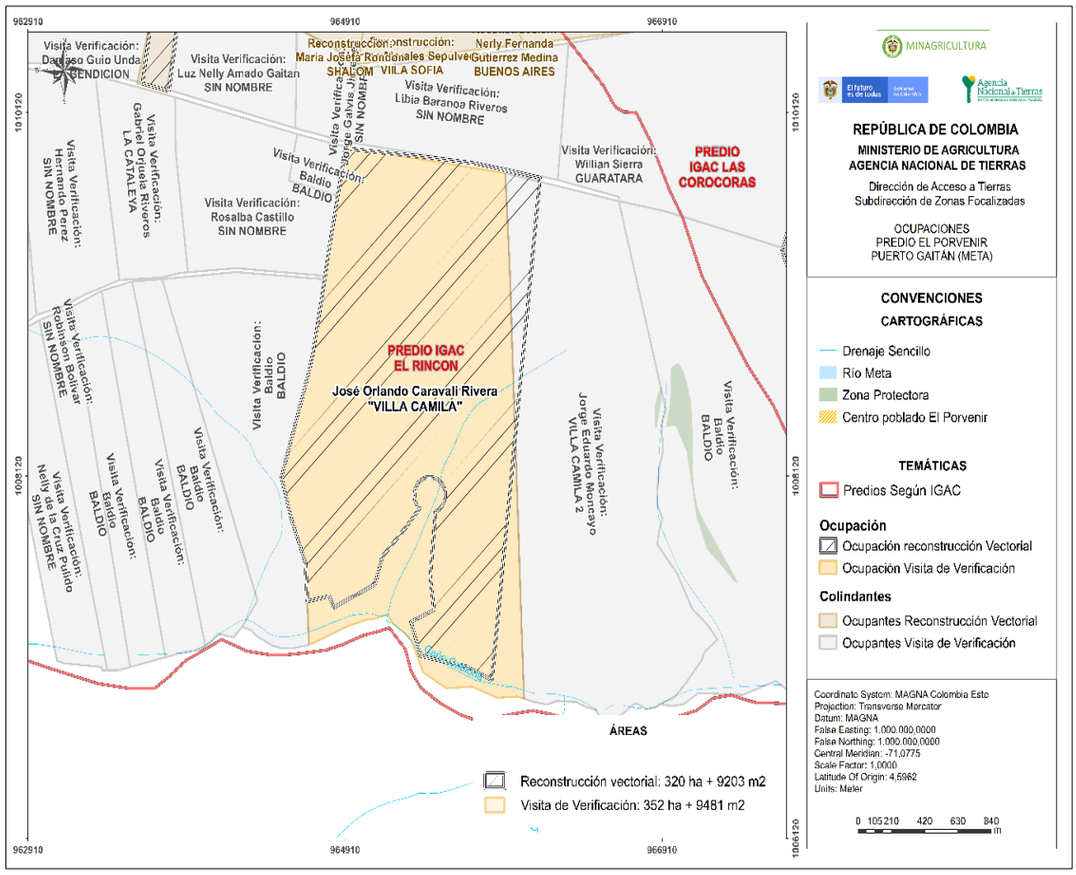


Imagen 3. Reconstrucción vectorial del predio. *Fuente: SATZF-ANT*

Tabla 3. Colindantes según las fuentes.

	Formulario Solicitud	Formulario FISO	Plano Topográfico Anexo	Reconstrucción vectorial
NORTE	Libia Barahona Riveros Ocupación SIN NOMBRE	N/R	Libia Barahona Riveros Ocupación SIN NOMBRE	Libia Barahona Riveros Ocupación SIN NOMBRE
ESTE	Fernando Bulla Ocupación SIN NOMBRE	Fernando Bulla Ocupación SIN NOMBRE	Fernando Bulla Ocupación SIN NOMBRE	Jorge Eduardo Moncayo Ocupación VILLA CAMILA 2
SUR	Zona Protectora Caño Cabiona	Carretera Puente Gloria	Zona Forestal Protectora Caño Cabiona	Zona Protectora Caño Cabiona Zona Protectora de Nacimiento de Agua
OESTE	Sabana Comunal y Zona Protectora	Caño Bulla	Sabana Comunal Zona Protectora de Morichal	Zona Protectora Caño Cabiona Baldío de la Nación Rosalba Castillo Ocupación SIN NOMBRE

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Redacción técnica de linderos

A partir de la información recaba y de los análisis efectuados, la *Agencia Nacional de Tierras* construyó la redacción técnica de linderos que corresponde a la ocupación ejercida en la actualidad con un área de **312 ha + 6652 m2**, la cual se describe a continuación:

- **PUNTO DE PARTIDA:** Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 964911,892 m y N: 1009933,711 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes JORGE GALVIS JIMENEZ ocupación "SIN NOMBRE" (según visita de verificación), BALDIO (según visita de verificación) y LIBIA BARAHONA RIVEROS ocupación "SIN NOMBRE" (según visita de verificación). **NORTE:** Del punto de partida 01 se continúa en dirección sureste en línea quebrada en una distancia de 1054 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E: 965957,944 m y N: 1009808,416 m colindando la posible ocupante LIBIA BARAHONA RIVEROS ocupación "SIN NOMBRE" (según visita de verificación). **ESTE:** Del punto 02 se continúa en dirección sur en línea recta, en una distancia de 2817 m hasta encontrar el punto 03 de coordenadas planas E: 965949,581 m y N: 1006991,579 m colindando con el posible ocupante JORGE EDUARDO MONCAYO ocupación "VILLA CAMILA 2" (según visita de verificación). **SUR:** Del punto 03 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 592 m, hasta encontrar el punto 04 de coordenadas planas E: 965383,433 m y N: 1007125,608 m colindando con ZONA PROTECTORA CAÑO CABIONA. Se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 2446 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 964671,017 m y N: 1007428,219 m colindando con ZONA PROTECTORA DE NACIMIENTO DE AGUA y ZONA PROTECTORA DE CAÑO CABIONA. **OESTE:** Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 709 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 964503,899 m y N: 1008110,895 m, colindando con ZONA PROTECTORA DE CAÑO CABIONA. Se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1871 m, hasta encontrar el punto 01, colindando con los posibles ocupantes BALDIO DE LA NACIÓN (según visita de verificación), ROSALBA CASTILLO ocupación SIN NOMBRE (según visita de verificación) y BALDIO DE LA NACIÓN (según visita de verificación), y cierra.

Conclusiones del análisis geográfico.

Luego del análisis del área solicitada y de su verificación a partir de la reconstrucción vectorial, se define que:

- El predio denominado como ***"Villa Camila",*** sobre el cual, el señor **José Orlando Caravalí Rivera**, con cédula de ciudadanía **17.385.776**, ejerce ocupación, tiene un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**, se encuentra ubicada en un predio de mayor extensión denominado "El Porvenir", jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta, específicamente, el predio ***"Villa Camila",*** se encuentra inmerso en un (1) predio denominado "El Rincón", el cual hace parte de un total de cinco (5) grandes extensiones que se generaron en el año 2007, a partir del englobe de veintisiete (27) predios que inicialmente fueron adjudicados en la década de 1990 y posteriormente, mediante Resolución 6423 de julio 30 de 2014, fueron revocados y cancelados junto con los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5) predios.

- El predio denominado ***"Villa Camila",*** sobre el cual ejerce ocupación el señor **José Orlando Caravalí Rivera**, con cédula de ciudadanía **17.385.776**, la cual ocupa un área reconstruida de **312 ha + 6652 m2**, queda plenamente identificada bajo los aspectos técnicos descritos en el presente documento.

2.2. Análisis probatorio.

Dentro de los documentos valorados para resolver el presente asunto, se encuentran:

2.2.1. La solicitud de adjudicación.

La solicitud que aportó el señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA** con la acción de tutela como radicada ante el extinto INCODER, no contiene radicado, fecha, ni número de solicitud.

Luego de un proceso lago de búsqueda se logró encontrar un registro de la solicitud en cuestión dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNANDEZ; sin embargo, el formato de solicitud hallado tampoco cuenta con número de expediente, numero radicado o constancia de haber sido presentada ante el extinto INCODER. No obstante, se procederá con el estudio de la solicitud allegada con la acción de tutela.

Que, de acuerdo con lo afirmado en la solicitud mencionada, se encuentra presentada a título individual, el predio objeto de solicitud es denominado ***"Villa Camila"***, con área aproximada de 285 hectáreas y ocupa y explota el predio desde el 01 de febrero de 2010.

2.2.2. El Formulario de Ingreso de Sujetos de Ordenamiento-FISO.

La Agencia Nacional de Tierras establece el Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento – FISO, en el marco de la implementación del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017 y la Resolución 740 de 2017, como instrumento para la inscripción de las personas y comunidades aspirantes y/o solicitantes de los programas de acceso y formalización de tierras; esto con la finalidad de registrar públicamente a los sujetos de ordenamiento social de la propiedad en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO.

Que el día 25 de julio del año 2018 se realizó el diligenciamiento en campo del Formulario de Sujetos de ordenamiento- FISO No. 97738 a nombre del señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.385.776**.

Que, de acuerdo a la solicitud de acceso a tierra contenida en dicho formulario, el señor **JOSÉ ORLANDO CARABALÍ RIVERA**, indicó que el nombre del predio es "***Villa Camila 1***", que el predio ocupado tiene una extensión de 311 ha, que habita el predio desde el 14 de enero de 2014, que ha ejercido ocupación por un tiempo de 4 años y que explota el predio desde el 18 de mayo de 2014.

2.2.3. El Certificado de la Junta de Acción Comunal Inspección El Porvenir.

Documento de fecha 20 de julio de 2018 a solicitud del interesado, en el cual se certifica que el señor **José Orlando Caravalí Rivera** es miembro activo y habitante del centro Poblado de la inspección el Porvenir desde el 27 de agosto de 2015, y cantidad aproximada en hectáreas de 311 Ha.

2.2.4. La Declaración con fines extraprocesales.

Documento suscrito ante la Notaria Única del Circulo de Puerto Gaitán - Meta de fecha 24 de julio de 2018, en el cual, declara que es ocupante con ánimo de señor y dueño en forma quieta, pública pacifica e ininterrumpida, desde el día 01 de febrero de 2010 del predio rural denominado "Villa Camila 1".

2.2.5. Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial.

Censo que se realizó a los habitantes del PORVENIR, Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento de la Sentencia SU 426/2016.

Formulario No. 110 de fecha 26 de junio de 2017 en el cual indica como fecha de ingreso al predio ocupado 5 años aproximadamente, nombre del predio "***Villa Camila 1***", área aproximada del predio 312 Has y no registra fecha desde la cual ocupa y explota el predio.

Resulta importante mencionar, que en el documento se encuentra como OBSERVACIÓN que: "Anteriormente tenía una sociedad con el señor Fernando Bulla por tal razón hicieron una división del terreno"

En atención a la información que contienen los documentos revisados, se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por el señor **José Orlando Carabalí Rivera**

relacionada con la fecha desde la cual ocupa o habita el predio objeto de solicitud, ni el área del mismo.

2.2.6. Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder.

Con base en dicho acto administrativo se puede concluir que, en virtud de la revocatoria directa de los actos de adjudicación efectuados por el extinto Incoder, a través de la resolución 6423 de 2014, el predio ocupado el cual hace parte del predio de mayor extensión conocido hoy como *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, volvió al dominio de la Nación, es decir, que ostenta la condición de baldío para ser administrado por la máxima autoridad de tierras, hoy en día, La Agencia Nacional de Tierras.

Igualmente, de la resolución se evidencia la situación de tenencia indebida de la tierra producto de las veintisiete (27) adjudicaciones efectuadas con violación de las normas aplicables a la adjudicación de baldíos, la cual, al quedar plenamente demostrada, devino en la revocatoria de la totalidad de las titulaciones.

2.2.7. Informe Técnico Jurídico -ITJ.

Dentro de este documento preliminar se encuentra consagrada la información catastral y registral (FMI) de los predios objeto de solicitud. Igualmente, contiene una descripción y análisis de la situación de ocupación y naturaleza jurídica del fundo.

A partir de allí, y especialmente de los antecedentes registrales, queda demostrada la naturaleza privada que revestía los predios objeto de solicitud a partir de las resoluciones de adjudicación expedidas el extinto Incora durante los años 1992 a 1996 y hasta su revocatoria en el año 2014, a través de la señalada Resolución No. 6423.

Igualmente, se puede establecer que en razón a la existencia de un título de dominio y su correspondiente inscripción en el Folio de Matricula Inmobiliaria de cada uno de los predios en cuestión, es un hecho aparente y, por tanto, conocido públicamente, que los mismos revestían la naturaleza de privados a partir de su titulación y registro. De allí se establece que la ocupación inicio en el momento en que los predios se encontraban bajo el dominio privado, producto de las titulaciones que hiciera el entonces Incora, y, que posteriormente fueron revocadas por el Incoder.

Así mismo, quedó establecido que la ocupación alegada se ejerce sin autorización de la ANT, sobre predios que se encuentra por fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario a partir de la revocatoria de que trata la resolución No. 6423 de 2014.

Sumado a lo anterior, se tiene que el área ocupada por el (la) solicitante excede por mucho la UAF definida por la Autoridad de Tierras para el predio El Provenir, circunstancia que, igualmente, pone de presente la ocupación indebida de conformidad con las disposiciones y consideraciones indicadas.

2.2.8. Documento preliminar de análisis predial-DPAP.

En dicho documento se encuentra consagrada la información catastral y registral, así como la situación jurídica del predio de que trata el numeral 1.3 del presente documento.

2.2.9. Informe Agronómico UAF predio *El Porvenir.*

Este informe consagra principalmente el resultado del cálculo de la UAF predial definida para el predio de mayor extensión en cuestión. De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos según las Unidades Cartográficas de *suelos; y por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector, las cuales se detallan en el Informe Agronómico sobre Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta.* Así, las condiciones especiales de manejo para los suelos, en combinación con la ubicación del predio, las vías de acceso, las vías de comercialización de los productos, el transporte fluvial y los costos de mano de obra, convergen en

el cálculo de la UAF predial para el predio El Porvenir, razón por la cual, como se dijo anteriormente, resultaron 4 áreas de UAF, que comprenden: cincuenta y cinco hectáreas más cinco mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (55 ha + 5984 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD; ochenta y siete hectáreas más siete mil quinientos setenta y siete metros cuadrados (87 ha + 7577 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica RVK y VVC; cincuenta y cinco hectáreas más dos mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados (55 ha + 2588 m2) para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y; cuarenta y cuatro hectáreas más dos mil setecientos veintidós metros cuadrados (44 ha + 2722 m2) para el uso de suelo Forestal Protector.

2.3. Análisis de la situación particular.

De conformidad con el análisis de los documentos y pruebas que hacen parte de la presente actuación, esta Subdirección procede a valorar la solicitud de adjudicación elevada por el peticionario, a fin de establecer si ésta tiene o no la vocación de prosperar, y así determinar el trámite que debe ser impartido de acuerdo con el procedimiento aplicable.

2.3.1. Ocupaciones iniciadas con anterioridad a la Resolución No. 6423 de 2014.

Teniendo en cuenta la naturaleza privada que ostentaban los predios objeto de revocatoria directa con anterioridad a la expedición de la Resolución Incoder No. 6423 de 2014 soportada en un total de veintisiete (27) actos administrativos de adjudicación de baldíos a persona natural expedidos entre los años 1992 a 1996, se colige que toda ocupación alegada con anterioridad a dicho intervalo resulta inexistente a efectos de acreditar requisitos para lograr una eventual adjudicación; toda vez que tales "ocupaciones", inicialmente recaían sobre lo que entonces se encontraba dentro del dominio privado, y no sobre fundos que tuvieran la naturaleza de baldíos, lo cual implica que su tratamiento jurídico debe ser en principio el de la posesión[14] y no el de la ocupación.[15]

Por consiguiente, todas las "*ocupaciones"* respecto de las cuales se alegue que se produjeron en el período de tiempo señalado, esto es, durante la vigencia de los veintisiete (27) títulos, hasta su revocatoria, deben ser consideradas como posesiones y, por tanto, no es posible que sean reconocidas por la autoridad de tierras al momento de valorar las solicitudes de adjudicación de baldíos que de allí se deriven.

Adicionalmente, esto permite concluir que tales posesiones se gestaron y/o mantuvieron bajo el conocimiento o permisión de los titulares del derecho real de dominio de los fundos cuyos actos irregulares de adjudicación fueron revocados por el extinto Incoder; o bien, lo hicieron bajo la aquiescencia de terceros que en su momento ejercían explotación sobre los mismos, como es el caso de la empresa ganadera *La Cristalina*, de propiedad de la familia del fallecido Víctor Carranza.

Ello se extrae de las afirmaciones hechas por el solicitante, quien asevera que su ocupación inició en el año 2010, cuando es claro que los predios de que trata la solicitud se encontraban en manos de particulares.

Dicho escenario se adecua a uno de los presupuestos normativos contenidos en el ya mencionado parágrafo segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994, el cual establece:

> **«PARÁGRAFO 2o.** No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando se demuestre que el peticionario deriva su ocupación, del fraccionamiento de los terrenos u otro medio semejante, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente, o cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables.**»** (Se subraya)

---

[14]Código Civil. artículo 762. Definición de **posesión**. La **posesión** es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

15ARTICULO 685. <CONCEPTO DE OCUPACIÓN>. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional.

Lo anterior obedece a que como quedó demostrado, los beneficiarios de las (27) resoluciones de adjudicación revocadas por el Incoder no tenían derecho a las titulaciones, por cuanto no cumplían con los requisitos de ocupación y explotación que exigía la ley para dicho momento, es decir, se produjeron con violación de las normas que regulaban la adjudicación de baldíos, conllevando, por tanto, una tenencia indebida de la tierra.

Esto sumado a las maniobras de acumulación indebida de tierra encubiertas a través de los cinco (5) englobes de los terrenos que agruparon la totalidad de los predios adjudicados, situaciones que quedaron suficientemente acreditadas en la resolución de revocatoria directa proferida por el extinto Incoder.

Así las cosas, dado que la solicitud de adjudicación bajo estudio se fundamenta en una posesión que se deriva a su vez de la tenencia de estas áreas bajo las circunstancias indicadas, no está llamada a prosperar.

2.3.2. Ocupaciones iniciadas a partir de la resolución No. 6423 de 2014.

Ahora bien, en relación con el tiempo de ocupación ejercido a partir de la resolución de revocatoria directa No. 6423 de 2014; momento a partir del cual los predios objeto de revocatoria retornaron al dominio de la nación con carácter de baldíos, se debe recordar que tales ocupaciones tampoco dan lugar a una eventual adjudicación, pues, dichos predios no son susceptibles de ser ocupados libremente en virtud de su carácter de reservados, tal como se indicó líneas arriba.

Esto, como se expuso, tiene asidero en que uno de los efectos de la revocatoria directa, fue el de otorgar a los predios de *El Porvenir* la naturaleza de baldíos sustraídos de la posibilidad de ser ocupados libremente con la finalidad de pretender su adjudicación, pues, tales predios se encuentran exceptuados del régimen de ocupación ordinario, por constituirse en predios reservados producto de los efectos especiales otorgados por la revocatoria directa, y en todo caso en virtud de lo establecido en el señalado artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por la Ley 1728 de 2014.

Por tanto, el tiempo de ocupación ejercido por el solicitante a partir de la mencionada Resolución No. 6423, tampoco da lugar a la adjudicación invocada, toda vez, que se encuadra dentro de las ocupaciones consideradas como indebidas por ejercerse sobre baldíos que hoy en día se encuentran bajo el dominio y administración de la Agencia Nacional de Tierras, reservados para los programas de acceso a tierra en favor de una población específica, en los términos establecidos en las normas indicadas, en concordancia, con los considerandos establecidos en la sentencia **SU-426 de 2016** de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, se debe recordar que, de acuerdo las disposiciones legales citadas, el artículo 25 del Decreto Ley 902 de 2017, se estableció la reserva especial de todos los baldíos de la Nación a partir del 29 de mayo de 2017.

2.3.3. Conclusiones.

En síntesis, luego de las consideraciones expuestas y del análisis realizado, se colige que la ocupación ejercida por el peticionario **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, no es de aquellas que permitan o den lugar al reconocimiento de derechos de propiedad rural, es decir, posible de titulación; toda vez que como se analizó, la misma tuvo inicio en el momento que los predios objeto de estudio se encontraban bajo el dominio privado producto de títulos expedidos en forma irregular (año 2010), lo cual conlleva que la *ocupación* alegada se derive de una tenencia indebida de la tierra ejercida por particulares, materializando de esta forma el postulado normativo establecido en el parágrafo artículo 74 Ley 160 de 1994.

En tal virtud, toda solicitud de adjudicación que tenga origen o se derive de la titulación irregular de las áreas de qué trata la señalada Resolución de revocatoria 6423 de 2014, debe ser desestimada, en tanto que uno de los Principios Generales del Derecho establece que "*Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.*"

Concebirlo de otra manera significaría abrir la puerta para que se entregue el dominio de la tierra a personas que derivan su pretensión agraria de situaciones irregulares como la tenencia indebida de las áreas reclamadas, lo cual atentaría contra los postulados esenciales de un Estado Social de Derecho.

En consecuencia, se tiene que la *ocupación* alegada no permite el reconocimiento de derechos (adjudicación), por cuanto, como se indicó, esta se originó como una posesión ejercida sobre predios que se encontraban irregularmente bajo el dominio privado; escenario que a la luz de ordenamiento jurídico colombiano no tiene la capacidad de producir efectos para adquirir el dominio de bienes baldíos.

Sumado a esto, se debe reiterar que debido a que la ocupación aludida se ejerce actualmente sobre predios que ostentan la condición de reservados y, al no contar con el consentimiento de la autoridad de tierras, dicha ocupación es a todas luces indebida[16], susceptible de ser recuperada con destino a los programas de acceso a tierra dispuesto por el Gobierno Nacional en los términos establecidos en artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con las consideraciones establecidas en la sentencia **SU-426 de 2016** proferida por la Corte Constitucional. Adicionalmente, se encuentra plenamente probado que las áreas ocupadas por el solicitante exceden ostensiblemente la UAF definida para el predio EL Provenir.

Así las cosas, al no encontrase acreditadas las condiciones y presupuestos que permitan llevar a cabo una eventual titulación del área reclamada, la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, debe desestimar la solicitud de adjudicación y, por ende, abstener de continuar con el presente procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, con ocasión de la solicitud presentada por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776.

2.4. El procedimiento aplicable.

Dicho lo anterior, es momento de hacer unas breves consideraciones en relación con las normas procedimentales aplicables a la presente actuación.

El Decreto Ley 902 de 2017 señala que, a partir de su vigencia, toda solicitud de acceso a tierra debe ser tramitada bajo las reglas allí contenidas; no obstante, en el artículo 27 se establece la regla para el tratamiento de las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de su entrada en vigencia (29 de mayo de 2017), de la siguiente manera:

> **«Artículo 27.** Solicitudes en proceso. En los casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley se aplicará en su integridad el régimen más favorable para lograr la adjudicación.**»**

Este artículo consagra la posibilidad de aplicación de la ultraactividad de la norma, la cual supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017 pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable al ocupante. No obstante, esta última regla exigirá que la ocupación se realice de manera regular, es decir, no pueden pretenderse la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

Lo anterior implica que la presente solicitud no pueda ser tramitada bajo las reglas procedimentales vigentes al momento en que inicio la ocupación deprecada, esto es, la Ley 160 de 1994, toda vez que para la aplicación a la figura de transición de que trata el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017, es necesario que la ocupación demostrada sea de aquellas que pueden dar lugar a una posible adjudicación, situación que como se advirtió, no ocurre en el caso bajo estudio.

---

16 El artículo 48 de la Ley 160 de 1994, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (hoy Agencia Nacional de Tierras, según lo establece el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015), previa obtención de la información necesaria adelantará entre otros, los procedimientos tendientes a determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos.

Así las cosas, aun cuando la ocupación alegada tuvo inicio en vigencia del procedimiento de adjudicación contenido en la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias; debido a que la ocupación ejercida por el (la) solicitante es de las consideradas como indebidas, no es posible aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994 para la adjudicación de este tipo de bienes, sino que, por el contrario, se debe hacer uso del Procedimiento Único contenido en el Decreto Ley 902 de 2017.

Esto se acompaña con los postulados establecidos en el señalado Decreto Ley 902 de 2017, los cuales, indican:

> **«Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.** El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado.
>
> La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras.
>
> (…)**»**

Y más adelante dispone:

> «**Artículo 58. Asuntos a tratar a través del Procedimiento Único**. A través del Procedimiento Único se adelantarán los siguientes asuntos:
>
> 1. Asignación y reconocimiento de derechos de propiedad sobre predios administrados o de la Agencia Nacional de Tierras.
>
> 2. (...)**»**

Lo anterior tiene plena aplicabilidad, indistintamente del régimen jurídico al que el solicitante se haya acogido voluntariamente.

En este orden de ideas, el procedimiento administrativo que rige la presente actuación es el señalado Procedimiento Único previsto para el reconocimiento de derechos de conformidad con el artículo 60 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución ANT No. 740 de 2017, adicionada por la Resolución No. 3234 de 2018 y, modificada por la Resolución No.12096 del 06 de agosto de 2019 y la Resolución ANT No. 915 de 2020. En lo no contemplado por estas disposiciones, se aplicarán las demás normas vigentes que regulan la materia, especialmente, en lo relacionado con la adjudicación de baldíos.

Igualmente, en lo no reglado para el desarrollo del procedimiento especial de que tratan las normas antes señaladas, le es aplicable la cláusula general establecida en el artículo **34** del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual señala que los procedimientos administrativos se sujetarán a las reglas contenidas en dicho Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados en normas especiales y, en lo no previsto en ellos, se rige por la parte primera del mismo CPACA[17].

En consecuencia, con el fin de resolver el presente asunto, esta Agencia dará aplicación a la figura contenida en el artículo 22 de la Resolución No. 12096 del 06 de agosto de 2019, la cual, modificó el artículo primero de la Resolución No. 3234 de 2018, que, a su vez, adicionó el artículo 33B de la Resolución No. 740 de 2017, en los siguientes términos:

> «**Artículo 22.** Modifíquese el artículo 33B de la Resolución 740 de 2017, adicionado por el Artículo 1 de la resolución 3234 de 2018, el cual quedará así:

[17] Ver Ley 1437 de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*

Artículo 33B. Acto administrativo de archivo. Cuando el informe Técnico Jurídico Preliminar concluya la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho para dar inicio a alguna de las pretensiones agrarias señaladas en los numerales 3,4,5,6, 7, 8 y 9 del artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017, la Subdirección pertinente expedirá un acto administrativo que ordenará el no dar inicio a la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el respectivo inmueble o solicitud.

En tal sentido, respecto de esos casos, no se proferirá el acto administrativo de apertura de que trata el literal c) del artículo 60 del Decreto- Ley 902 de 2017, y contra el acto que ordena el no inicio procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación conforme a las reglas generales definidas en la Ley 1437 de 2011.

Cuando la solicitud verse sobre asignación o reconocimiento de derechos y el informe Técnico Jurídico concluya su improcedencia, también se expedirá un acto administrativo que ordenará el no inicio de la segunda parte de la fase administrativa, y contra el cual también procederá el recurso de reposición en subsidio el de apelación. (…)» (Negrillas fuera del texto original)

2.5. De la recuperación de las áreas indebidamente ocupadas

Que de acuerdo con lo expuesto, ni el tiempo de las ocupaciones ejercidas con anterioridad a la expedición de la Resolución 6423 de 2014, ni el contabilizado a partir de allí, tienen la potencialidad de demostrar el requisito de ocupación debida exigido en la Ley, pues, atendiendo la presunción de legalidad de los actos administrativos, cualquiera de dichas *ocupaciones* se gestó sobre lo que entonces eran predios que se encontraban bajo el dominio privado, bajo el consentimiento y/o aquiescencia de los entonces adjudicatarios o de los terceros usufructuarios; o, bien, se produjeron sobre baldíos con la condición de reservados para los programas de acceso a tierra en favor de la población vulnerable. En ambos casos, la medida de corrección necesaria debe ser la recuperación del área ocupada en forma indebida.

Esto tiene como objetivo que la autoridad de tierras adelante los correspondientes procedimientos de ordenamiento social de la propiedad que permitan la adjudicación de los predios de manera ordenada y equitativa, evitando que se repita el fenómeno de concentración de tierra allí acaecido desde al siglo pasado. Esto además permitirá el cumplimiento integral de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-426 de 2016.

En tal orden, la Agencia Nacional de Tierra debe disponer de los mecanismos legales otorgados para la recuperación material de aquellas áreas objeto de revocatoria directa a través de la Resolución No. 6423 de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Predio *El Porvenir)*, y que luego del análisis correspondiente, se concluya que se encuentran ocupadas de forma indebida. Circunstancia que es visible en el caso bajo estudio.

Así las cosas, esta Subdirección remitirá copia de la presente actuación a las dependencias encargadas, para que, en el marco de sus funciones, y, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución No. 6423 de 2014 proferida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder y las disposiciones legales aplicables, adelanten el procedimiento administrativo correspondiente que conduzca a la recuperación material de las áreas ocupadas indebidamente dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como *El Porvenir,* Puerto Gaitán, Meta.

2.6. De la buena fe y el reconocimiento de mejoras.

Como punto de partida, debe recordarse que el bien objeto de análisis es considerado baldío[18], lo que indica de forma indefectible que detenta las características propias de los mismos, siendo inembargable, imprescriptible e inalienable.[19]

Así, una vez establecida la condición de indebida que reviste la ocupación alegada por el (la) solicitante, procede esta Subdirección a estudiar el tratamiento que debe darse a las mejoras efectuadas dentro del área objeto de recuperación material, frente al principio de buena fe constitucional.

---

[18] Ibídem 2

[19] Ver entre otras, Sentencia T-580 y 18/09/17, Corte Constitucional.

Al tenor del postulado de buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, el cual establece que "*las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*."

De acuerdo con lo anterior, la H Corte Constitucional definió el principio de buena fe en materia de ocupación y adjudicación de terrenos baldíos, en los siguientes términos:

> «La buena fe podría definirse como la convicción plena que tiene el interesado de estar ocupando el bien legítimamente, esto es, de no estar obrando en contra de la Constitución ni de la ley. Entonces, si la buena fe se presume, el ocupante de un terreno baldío o quien se pretenda dueño bajo esa condición, no tiene por qué entrar a demostrar ésta; sin embargo, como tal presunción es de carácter legal, puede ser desvirtuada o impugnada por el Incora o cualquiera otra persona, en cuyo caso sólo a ellos corresponde probar plenamente lo contrario, es decir, que quien viene ocupando el baldío lo detenta de mala fe. »[20]

En este orden de ideas, la presunción de la buena fe es el eje central que debe ser tenido en cuenta por la autoridad al momento de estudiar el cumplimiento de los requisitos que acrediten los particulares para acceder a la titulación de baldíos; no obstante, como lo señala el máximo Tribunal Constitucional, dicha presunción, al no ser *iuris tantum*, admite prueba en contrario. De ahí que corresponda a la autoridad de tierras estudiar la calidad de la referida presunción en el presente caso.

En consonancia con lo anterior, el Código Civil Colombiano en su artículo 768 regula el postulado de buena fe en la posesión, de la siguiente manera:

> «**ARTICULO 768**. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio.
>
> Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.
>
> Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.
>
> Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. »

Ciertamente, dentro del presente trámite se pudo establecer que la ocupación alegada y ejecutada por el (la) peticionario (a) no es de aquellas que permita acreditar el requisito para acceder a la titulación de baldíos. Esto se debe en parte a que la misma se originó en el momento que los predios ocupados tenían la naturaleza de privados, lo cual implica que no se haya configurado la figura de la ocupación de baldíos, sino de la posesión, como se explicó líneas arriba.

Como es sabido, la ocupación es calificada como un hecho que da lugar a determinadas situaciones jurídicas. Tratándose de bienes inmuebles, está solo puede configurarse cuando se trata de terrenos baldíos. La ocupación se materializa mediante la apropiación material de un área a través de hechos de aprovechamiento económico incluidas las efectuadas por mujeres bajo la denominación de economía del cuidado.

Por su parte, la posesión es un fenómeno jurídico que se concreta a través del hecho de ejercer el aprovechamiento económico de un predio de propiedad privada. A diferencia de la ocupación, esta no se realiza sobre terrenos baldíos, y no exige que las acciones se realicen de manera directa, es decir, que se puede ser poseedor a través de un tercero. La posesión puede ser regular si fue adquirida con justo título (venta, permuta, donación, sentencia) y de buena fe, cuando hay conciencia que el acto jurídico no está viciado, o que no se cometió algún fraude (Artículo 764 del Código Civil) La posesión es irregular cuando se carece o de justo título o de buena fe. (Artículo 764 del Código Civil).

En tal virtud, y dado que el solicitante deriva su solicitud de adjudicación de la posesión ejercida sobre terrenos titulados irregularmente a particulares por el Incora en los años 90, no es del resorte de la Agencia Nacional de Tierras establecer si dicha posesión se ejecutó con justo título o de

[20] Sentencia C-097 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Expediente No. D-910

forma irregular; toda vez que al ser en su momento predios de naturaleza privada, escapa a la competencia de la ANT.

Al respecto, para referirse al reconocimiento y pago de mejoras realizadas por el poseedor, el inciso 5 del artículo 966 del Código Civil Colombiano, establece:

> «**ARTICULO 966. ABONO DE MEJORAS ÚTILES** El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda.
>
> (…)
>
> El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla este artículo.
>
> Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados.»

Por su parte, en relación con las mejoras voluptuarias, señala:

> «**ARTICULO 967. MEJORAS VOLUPTUARIAS.** En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente se concede al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles.
>
> Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante.»

Y concretamente, respecto a la buena o mala fe del poseedor, indica:

> «**ARTICULO 969. BUENA O MALA FE DEL POSEEDOR**. La buena o mala fe del poseedor se refiere, relativamente a los frutos, al tiempo de la percepción, y relativamente a las expensas y mejoras, al tiempo en que fueron hechas»

Así las cosas, de conformidad con la legislación colombiana, el posible reconocimiento de las mejoras hechas por el poseedor (solicitante) sobre los que en su momento eran predios del dominio privado, debe ser reclamado ante los entonces titulares del derecho real de dominio[21], es decir, sobre los que tenían en su poder tales fundos. Esto deberá ser tramitado bajo las normas que regulen el título correspondiente a través del cual se originó tal posesión, en caso de existir.

Ahora bien, a partir de la revocatoria directa de las veintisiete (27) titulaciones realizadas por el Incora, momento en que los terrenos retornaron al dominio de la nación con carácter de baldíos; toda ocupación ejercida sin autorización de la autoridad de tierras se torna indebida, tal como se indicó.

En este sentido, ya que cada una de las etapas propias de la actuación administrativa de revocatoria directa que concluyó con la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014 fueron debidamente publicitadas e inscrita a través de la oficina de registro de instrumentos públicos dentro los folios de matrícula inmobiliaria de los predios en cuestión, no puede alegarse un desconocimiento de la actuación a través de la cual se llevó a cabo la revocatoria de los títulos expedidos en forma irregular, ni tampoco de las normas que les atribuyen la condición de reservados, susceptibles de ser destinados para los programas de acceso a tierra.

De allí que no puede predicarse la buena fe en la ocupación ejercida por el solicitante; toda vez que el mismo no puede alegar el desconocimiento de las actuaciones administrativas y de los actos administrativos debidamente publicitados e inscritos en el correspondiente registro público, ni mucho menos, argumentar un desconocimiento de la Ley para justificar una ocupación ejercida de manera indebida.

Lo anterior guarda consonancia con lo establecido en el artículo 679 del Código Civil, que señala:

---

[21] Artículo 739 y siguientes del Código Civil Colombiano

«**ARTÍCULO 679 PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR EN BIENES DE USO PÚBLICO Y FISCALES.** Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión.»

Se debe recordar que a la luz del artículo 675 del mismo Código Civil, los bienes baldíos se consideran de propiedad de la *Unión y bienes fiscales.*

Así las cosas, dado que el solicitante tenía pleno conocimiento de la condición que adquirieron los predios objeto de estudio a partir de la ejecutoria de la revocatoria directa, se hace evidente que incurrió en la prohibición legal citada, puesto que el mismo no cuenta con autorización expresa por parte de la Autoridad de Tierras para ocupar el predio, ni mucho menos, para efectuar obras o mejoras sobre los predios baldíos objeto de estudio. Por el contrario, desde que la ANT asumió la administración de estos baldíos, ha ejecutado permanentes actuaciones con el fin de advertir a los particulares sobre la condición de los predios, las limitaciones y posibles consecuencias e implicaciones de efectuar negocios jurídicos, mejoras e inversiones sobre los fundos baldíos del dominio de la nación.[22]

En consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras no está en posibilidad legal de reconocer ningún tipo de mejoras efectuadas cuando los predios en comento ostentaban la calidad de privados, y, mucho menos, a partir de que estos retornaron al dominio de la Nación con carácter de baldíos al momento de ejecutoriarse las revocatorias directas, toda vez que como quedó establecido, la ocupación se ejerce, a partir de allí, de manera indebida.

2.7. El Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO.

Por último, se procede a realizar unas breves consideraciones sobre la solicitud de ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO elevada por el peticionario a través del FISO.

De conformidad con el artículo 11 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017; los artículos 27 y 113 de la Resolución 12096 de 2019, en concordancia con el artículo 3 y siguientes de la Resolución ANT No. 915 de 2020, la Subdirección de Sistema de Información de Tierras es la dependencia competente para valorar los requisitos particulares del aspirante y resolver sobre su ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO.

Conforme lo anterior, se evidencia a través del aplicativo del Sistema Integrado de Tierras "SIT" de la ANT, que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras realizo la valoración y calificación y, en consecuencia profirió Resolución No. 4643 del 19 de junio de 2020, mediante la cual resuelve incluir al señor José Orlando Caravalí Rivera, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776 en el Registro de Sujetos De Ordenamiento – RESO, en la categoría de solicitante de acceso a tierras a TITULO GRATUITO, asignándole un puntaje de Novecientos Ochenta y Siete Puntos con Treinta y Seis Centésimas (987,36). Dentro del expediente obra copia de la señalada resolución.

No obstante, aun cuando en principio se observa que el solicitante cumple con los requisitos personales que establece el Decreto Ley 902 de 2017; el numeral 5 del artículo 4º del mismo Decreto, indica que para ser sujeto de acceso a tierra y formalización, se requiere, entre otras cosas*: "No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación."*

En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo, esta Subdirección solicitará a la Subdirección de Sistemas de la Información, suspender el ingreso al **RESO** del aspirante, hasta tanto se resuelva sobre la condición indebida que recae sobre la ocupación ejercida o se suscriba el correspondiente acuerdo de regularización.

3. Síntesis de las medidas a adoptar.

[22] Dentro de los actos de administración se encuentran: visitas de campo, vallas informativas, comunicaciones, reuniones y mesas de trabajo con la comunidad ocupante.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Las decisiones a adoptar por parte de la Subdirección de Acceso a tierras en Zonas Focalizadas, se efectuaran de conformidad con las funciones y competencias otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras a través del Decreto Ley 2363 de 2015, donde se ratificó lo dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017, es decir, la responsabilidad de implementar Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y la Ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierras.

3.1. En relación con la solicitud de adjudicación.

Resulta importante traer a colación las disposiciones que ya se han mencionado anteriormente y que permiten establecer la decisión que se adoptara en el caso concreto.

Es así que la Agencia Nacional de Tierras expidió la Resolución No.12096 del 16 de agosto de 2019 "*Por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución 740 de 2017";* normatividad que en su artículo 22º, modifica el artículo 33B de la Resolución 740 de 2017, adicionado por el artículo 1 de la Resolución 3234 de 2018, disponiendo el mecanismo en los casos que no exista viabilidad para proceder con la ruta de asignación o reconocimiento de derechos de propiedad rural (adjudicación de baldíos), decisión, que, como es lógico, debe ser declarada mediante acto administrativo.

En tal virtud, de conformidad con las consideraciones expuestas, la ANT ordenará el no inicio (negación) de la ruta de asignación de derechos en los términos de la normatividad indicada, con lo cual se entienden resueltas las solicitudes bajo estudio.

3.2. En relación con la ocupación y la recuperación material de las áreas.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que como quedó establecido, sobre los predios objeto de solicitud recayó un procedimiento administrativo de revocatoria directa de titulaciones de baldíos indebidamente otorgados, por lo cual, los mismos retornaron al dominio de la Nación con carácter de baldíos; no obstante, en virtud de los efectos de la revocatoria, en con concordancia con la normatividad agraria ampliamente citada dentro de esta providencia, dichos predios se encuentran excluidos del régimen de ocupación y adjudicación ordinario. Esto debido a que, por menester de la ley, los mismos se encuentran reservados para los programas de acceso a tierra que destine la Autoridad correspondiente, para el caso, la Agencia Nacional de Tierras.

Igual importancia reviste el parágrafo 2º de este artículo, que indica la imposibilidad de alegar derecho para la adjudicación de un baldío al demostrarse que la ocupación es derivada del fraccionamiento de terrenos u otro medio semejante, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente.

Así las cosas, ya que se observa que la ocupación ejercida por el solicitante es de aquellas llamadas a ser calificadas como indebidas, la Agencia Nacional de Tierras está en la obligación legal de corregir esta situación y, por tanto, debe llevar a cabo la recuperación material de las áreas de acuerdo con las disposiciones aplicables.

3.3. En relación con el Ingreso al RESO.

Tal como se indicó, el ingreso al **Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO** del solicitante debe quedar suspendido en los términos establecidos en el numeral 5 del artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017, hasta tanto se resuelva sobre la condición de indebida o suscriba el correspondiente acuerdo de regularización.

De acuerdo con lo anterior, se ordenará remitir el presente acto administrativo a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras para que proceda en los términos de la norma citada, dejando en suspenso el ingreso al RESO del aspirante.

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, en ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el **NO INICIO** de la segunda fase de la parte administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el reconocimiento de derechos de propiedad rural y, en consecuencia, negar las solicitudes de adjudicación presentadas por el señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación con destino a la Subdirección de Procesos Agrarios, a La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación y a las demás dependencias que correspondan, para que en marco de sus funciones adelanten los procedimientos administrativos para llevar a cabo la recuperación material del área ocupada indebidamente por parte del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776 o quien funja como ocupante actual, sobre el terreno ubicado en el predio de mayor extensión conocido actualmente como ***El Porvenir,*** municipio de Puerto Gaitán, Meta, de acuerdo con las características contenidas en el numeral **2.1.2.** del presente acto, y, en todo caso, sobre el área sobre la que actualmente se ejerza la ocupación en los términos señalados dentro del presente acto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Solicitar al ocupante del área en cuestión para que, a partir de la fecha de ejecutoria de esta providencia, restituya voluntariamente el lote de terreno indebidamente ocupado a la Agencia Nacional de Tierras -ANT, en su condición de entidad administradora de las tierras baldías de la Nación, lo que posibilitaría la asignación del puntaje adicional en el RESO de acuerdo a la Resolución 740 de 2018 y las normas que la modifican, adicionan o sustituyan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el ocupante se negara a realizar la entrega voluntaria de los terrenos baldíos indebidamente ocupados, la Agencia Nacional de Tierras – ANT continuará con el procedimiento administrativo para la recuperación material de baldíos, para lo cual podrá solicitar la intervención de la autoridad de policía en los casos que se requiera.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Sistemas de la Información para que **SUSPENDA** el ingreso al **Registro de Sujetos de Ordenamiento**- **RESO** del señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.385.776, hasta tanto se resuelva la condición de indebida que recae sobre la ocupación ejercida, o se suscriba el acuerdo de regularización correspondiente, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de este acto administrativo al señor **JOSÉ ORLANDO CARAVALÍ RIVERA,** de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de ser el caso, por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en Decreto 491 de 2020. En el evento en que la notificación no pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al Agente del Ministerio Público Agrario, y a los demás interesados, si los hubiere, por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en Decreto 491 de 2020. En el evento en que la notificación no pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.

ARTÍCULO SEXTO: Informar que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Subdirección y en subsidio el de apelación ante el Director de Acceso a Tierras de la ANT dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 22 y 23 del Decreto 2363 de 2015.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar del contenido el presente acto a las entidades que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de seguimiento al cumplimiento de la sentencia **SU-426 de 2016** proferida por la Corte Constitucional, y, en especial, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, al Ministerio de Defensa Nacional, al Municipio de Puerto Gaitán y demás

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

autoridades que se considere pertinente, a fin de activar las actuaciones que permitan el normal desarrollo de los procedimientos de que trata el presente acto administrativo. Lo anterior con base en el mecanismo del Sistema de Alertas Tempranas.

ARTICULO OCTAVO: Librar los oficios que correspondan.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada, archivar las solicitudes de adjudicación de que trata el presente acto.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los
13 días del mes de agosto de 2020.

JULIA ELENA VENEGAS GÓMEZ
Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas

Proyectó: Jhonattan A. Acevedo F. – Abogado contratista ANT
Erika Marcela Cuervo Moreno- Abogada contratista convenio FAO - ANT
Luisa Gómez - Abogada contratista convenio FAO - ANT
Dayana Marín - Ingeniera catastral contratista convenio FAO - ANT
Julián Guerrero - Ingeniero Topógrafo contratista convenio FAO - ANT
Liliana Moreno – Ingeniera Agrónoma contratista convenio FAO - ANT
Revisó: Jhonattan A. Acevedo F.- Abogado contratista ANT
Jairo Ríos- Ingeniero catastral contratista ANT
Mayra Figueroa - Ingeniera Agrónoma contratista ANT

Fecha: 25 de noviembre de 2016	HORA INICIO: 9:00 a.m.	HORA FIN: 12:00 m.
PROCESO: REGISTRO	LUGAR: Agencia Nacional de Tierras.	

OBJETIVO

Establecer la hoja de ruta para dar cumplimiento a las órdenes señaladas en la sentencia SU 426 de 2016.

DESARROLLO

TEMA: Sentencia SU 426 de 2016	TIEMPO

Las entidades convocadas fueron las siguientes:

Agencia Nacional De Tierras
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Superintendencia de Notariado y Registro
Procuraduría General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Policía Nacional de Colombia
Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer
Consejera Presidencial para los Derechos Humanos
Defensoría del Pueblo
Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado interno
Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras;
Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales
Defensoría Delegada para Derechos de la Población Desplazada.

La agenda definida para la reunión fue la siguiente:

9:00 a.m. Exposición de la sentencia SU 426 de 2016 caso “El Porvenir”.
9:15 a.m. Exposición en detalle de las órdenes señaladas en la sentencia SU 426 de 2016 caso “El Porvenir” y entidades responsables. Rubén Revelo, Director Jurídico UAEGRTD y Paola Quintero, Abogada UAEGRTD.
9:30 a.m. Informe sobre el estado de las solicitudes de restitución sobre el predio “El Porvenir” por parte de la UAEGRTD. Diana Esmeralda Herrara. Directora Territorial Meta.
9:50 a.m. Informe sobre el estado de las solicitudes de adjudicación sobre el predio “El Porvenir”. Agencia Nacional De Tierras - ANT.
10:10 a.m. Participación de la Corporación Yira Castro, representantes de la comunidad campesina del predio “El Porvenir” que interpuso la acción de tutela.
10:20 a.m. Definición de hoja de ruta para el cumplimiento de las órdenes emitidas dentro de la sentencia SU 426 de 2016.

Se inicia la reunión con una breve reseña de los hechos que rodearon la presentación de la acción de tutela por parte de los representantes de la corporación Yira Castro, con la intervención de la Defensoría del Pueblo, quien informó sobre la situación existente dentro del predio “El Porvenir”.

Con posterioridad, la actual gerente del predio “El Porvenir”, Ingeniera Marcela Orduz, perteneciente a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, hace su exposición sobre las actuaciones adelantadas por parte de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT, Dirección de Acceso a Tierra manifestando que actualmente hace presencia permanente en el predio atendiendo el caso. Dentro de las actividades que se han adelantado se encuentra el trabajo mancomunado con Corpamacarena; siendo la siguiente fase la medición del predio en territorio, advirtiendo el desacuerdo de algunas personas que habitan el predio.

El diagnóstico inicial es que los actuales ocupantes no cuentan en principio con los requisitos de la Ley 160 de 1994, sin embargo, se estarán evaluando las salidas jurídicas para determinar las adjudicaciones solicitadas.

La Defensoría del Pueblo recomienda a la funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras, formular las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, debido a los hechos de amenaza que manifestó haber recibido en

su contra. De igual forma, ofrece acompañamiento con miras a que desde la Defensoría Regional se active la ruta de protección individual ante la Unidad Nacional de Protección, luego de haber sido formuladas las denuncias correspondientes.

La Defensoría del Pueblo solicita informar en qué sentido se articularán las actuaciones socializadas por la Agencia Nacional de Tierras, a la luz de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, toda vez que dicha entidad manifiesta haber instalado vallas informativas y haber realizado un recorrido por el territorio con el objeto de avanzar en la recuperación material de los bienes baldíos.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a utilizar los canales institucionales para comunicar y hacer partícipe a las entidades de las actuaciones que son adoptadas por la Agencia Nacional de Tierras, toda vez que el grupo de whatsapp conformado por esta última entidad, no es el adecuado para socializar a último momento las actividades de caracterización que se adelantaron ni mucho menos para solicitar por ese medio observaciones o recomendaciones a las demás entidades públicas.

La ANT señala que el trabajo propio de esta entidad, incluido dentro de la sentencia referido a la entrega material del predio, efectuando la información a toda la comunidad sobre la prohibición de entrada de más personas.

El abogado Francisco Henao perteneciente a la Corporación Jurídica Yira Castro, requiere información sobre la caracterización que se está haciendo a los pobladores de la comunidad, respecto de lo cual, la ANT informa que la caracterización parte del trabajo del INCODER y el procedimiento ya ha sido socializado con los miembros de la corporación.

Al momento de efectuarse la caracterización, no ha sido posible identificar a las personas de la sentencia, por lo que Francisco indica que ante la calidad de desplazados de las personas, no es posible la convocatoria y asistencia de todas las personas, por lo que recomienda que las citaciones se hagan con suficiente tiempo de antelación para lograr la asistencia de todos los convocados.

La Ingeniera Marcela Orduz, reitera que la ANT informa que llegará donde se encuentran las personas, desplazándose hasta donde estén las personas que deben ser caracterizadas y las beneficiarias de la sentencia- Cumpliendo con la tarea del reconocimiento y toma de los predios, con la voluntad de adelantar la entrega del predio.

Se establece la necesidad del intercambio de información con la Defensoría del Pueblo, la ANT y la URT, para contar todas las instituciones con la misma información.

A continuación, hace su presentación la Directora Territorial Meta de la Unidad de Tierras, sobre el avance de las actuaciones adelantadas en virtud de las solicitudes indicando que para finalizar el mes de diciembre se estarían resolviendo las solicitudes, señalando que de las 21 solicitudes inicialmente existentes, dos han sido proferidas 2 resoluciones aceptando desistimientos expresos, 1 con decisión de no inclusión por no haberse cumplido con las calidades jurídicas exigidas en la Ley, 2 solicitudes se encuentran con resolución de pruebas y 16 solicitudes en estado de análisis previo.

Ante la existencia de futuras solicitudes de restitución, actualmente se cuenta con los poderes otorgados al señor Miguel Briceño y a la Corporación Yira Castro para que se presenten estos requerimientos por parte de las personas faltantes.

Ruben Revelo señala la necesidad de iniciar una actividad pedagógica para determinar los requisitos para adjudicación de predios y los de la restitución de predios

Martha Carvalajino, Procuradora 31 Judicial II Ambiental y Agraria, interviene y manifiesta su preocupación en relación con la existencia de dos vías que se vienen adelantado simultáneamente por parte de la ANT a la URT y que pueden entrar en conflicto, solicitando que lo adelantado por parte de la ANT concurra al plan de acción que debe adelantar la mesa para efectuar el análisis correspondiente, cominando a concentarr la acción de las instituciones presentes a que se defina un plan de trabajo conforme lo ordenado por la Corte Constitucional. Advierte Rubén que precisamente que la Mesa es precisamente para eso, conocer el panorama actual de las solicitudes vigentes de adjudicación y restitución.

La Corporación Yira Castro manifiesta que está dispuesto a efectuar un análisis sobre las solicitudes para identificar si la ruta corresponde a restitución o adjudicación, siendo facilitadores y suministradores de información, para que vayan en consenso con lo que se persigue en la Mesa de Trabajo.

El Doctor Rubén Revelo, interviene informando que actualmente existen muy pocas solicitudes de restitución, por lo que es necesario indicar o recopilar la información de todas las personas que actualmente están en el predio, para hacer un inventario de las posibles solicitudes.

Juan Camilo Sánchez, Subdirector de Acceso a Tierras por demanda y descongestión de la ANT, señala que finalmente se trata de adjudicación vía restitución o concluido el proceso adelantado por la ANT, en ese sentido el plan estratégico debe adelantarse en pos de la adjudicación, por lo que este proceso se adelante con la posibilidad que se presenten solicitudes de restitución, por lo que para el momento en que se vaya a fallar por el Juez la ANT incluso ya haya adjudicado los predios requeridos. Esto para que no se hable de una dualidad, para que no se plantee como una dualidad, sino que la prioridad es adjudicar agilizando este proceso por la ANT.

A continuación, se efectúa la exposición de cada una de las órdenes que contiene la sentencia SU 426 de 2016, por parte de Claudia Paola Quintero Camacho y Rubén Revelo de la Unidad de Restitución de Tierras, con la finalidad de establecer las entidades encargadas de dar cumplimiento a cada una de las órdenes establecidas y los tiempos para tal fin:

Seguimiento judicial: **Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio**.

Remisión a la SDP - Tribunal Superior de Villavicencio y copia a la Corte Constitucional:
- **Plan estratégico** en un plazo **máximo de dos (2) meses.**
- **Informes trimestrales** de progreso.

ORDEN	ENTIDADES ENCARGADAS	ACTIVIDADES	PLAZOS
CUARTO: ORDENAR la constitución de una **nueva mesa de trabajo interinstitucional** para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir, e incorporar los siguientes parámetros para lograr ese cometido. (…) con el fin de que, conjuntamente y en el marco de sus competencias legales, adopten un **plan estratégico.**	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Agencia Nacional de Tierras Unidad de Restitución de Tierras Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Superintendencia de Notariado y Registro Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Policía Nacional	Solicitar a la Corte constitucional la inclusión de más entidades, tales como la Fiscalía General de la Nación, Alcaldías y Gobernación del Meta. ANT y URT conformarán la secretaría técnica de la Mesa Interinstitucional.	Una vez sea efectuada la notificación.

La Mesa de trabajo y las entidades que la conforman deberán adoptar un **plan estratégico** destinado a que en el **término máximo de un (1) año**, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, **se logre**:

ORDEN	ENTIDADES ENCARGADAS	ACTIVIDADES	PLAZOS
(i) Establecer si en los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014 continúa haciendo **presencia la empresa ganadera "La Cristalina",** ya sea de forma directa o a través de terceros. En caso de así corroborarse, adelantar la **recuperación material de dichos bienes**. Esta deberá incluir **visitas interinstitucionales** a las distintas áreas de El Porvenir e informes periódicos que permitan corroborar la eficacia y estabilidad de la entrega.	Agencia Nacional de Tierras	Informe elaborado por parte de la ANT sobre las actuaciones adelantadas para la recuperación y entrega material del predio El Porvenir.	Por definir cronograma
(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.	Agencia Nacional de Tierras Unidad de victimas URT Consejería Presidencial para la mujer. Defensoría del Pueblo	Creación de mesa técnica para la creación de una metodología para la caracterización integral de los habitantes. Metodología de caracterización: 2 de diciembre de 2016. reunión, con la asistencia de representantes de cada una de las entidades con carácter decisorio. 9:00 a.m. ANT Poner en conocimiento de la mesa interinstitucional la metodología para las observaciones pertinentes. Censo integral. Próxima mesa interinstitucional se definiría la fecha.	Por definir cronograma
(iii) Realizar un **intercambio de información entre el Incoder y la Unidad de Tierras**, de manera que sea posible establecer qué parte de El Porvenir se encuentra en el **trámite de restitución**, cuál debe ingresar a ese proceso, y cuál seguirá el cauce del **trámite administrativo de adjudicación.**	Agencia Nacional de Tierras Unidad de Restitución de Tierras	Cruce de información geográfica de los predios. Inventario de solicitudes de restitución y de adjudicación.	Por definir cronograma

iv) Advertir al **Incoder o a quien haga sus veces**, acerca de su obligación de evaluar **los requisitos de reforma agraria**, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. **Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos**, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.	Agencia Nacional de Tierras.	Procesos de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Ley 160 de 1994. Acompañamiento por parte de la Consejería de la equidad de la mujer. Agencia especial de la procuraduría para hacerle seguimiento a los procesos de adjudicación.	Por definir cronograma
(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el **Incoder y la Unidad de Tierras** deberán definir, adoptar e implementar **medidas afirmativas para la población femenina** en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.	Agencia Nacional de Tierras Unidad de Restitución de Tierras Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Defensoría del Pueblo	Procesos de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Ley 160 de 1994. Acompañamiento de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.	Por definir cronograma
(vi) Que la **Unidad de Restitución de Tierras** continúe el procedimiento de **microfocalización iniciado en torno a los predios de El Porvenir**, con el fin de determinar quiénes son los miembros de la población campesina que poseen derechos en el marco específico de la Ley de víctimas y restitución de tierras e impulsar hasta su culminación los procesos judiciales a que haya lugar, para lo cual se solicitará a los órganos de control prestar apoyo inmediato a la Unidad.	Unidad de Restitución de Tierras Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Superintendencia de Notariado y Registro Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer Policía Nacional	Proceso de restitución de tierras con el acompañamiento de las entidades referidas.	Por definir cronograma

(vii) Una vez se hayan cumplido con las labores de identificación, verificación de requisitos y proceso de adjudicación, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá velar por la **formalización efectiva de las titulaciones.**	Superintendencia de Notariado y Registro.	Revisar si se han abierto más folios y advertir a los Registradores que se abstengan a abrir nuevos folios.	Fecha: Próxima semana. 29 a 2 de diciembre de 2016.
Quinto.- REMITIR COPIAS de este proceso a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales **adelanten las investigaciones que estimen pertinentes**. Además, se les insta a **redoblar sus esfuerzos institucionales frente al conocimiento de las denuncias y quejas** que ya se encuentran en trámite, con ocasión de los hechos contenidos en la acción de tutela estudiada en esta providencia.	Fiscalía General de la Nación Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República	A cargo de la Corte Constitucional para la remisión del proceso a las entidades señaladas.	N/A

Frente a la primera orden existen avances importantes por parte de la ANT pero esto correspondería también a la Procuraduría y a todas las entidades de control, atendiendo el alcance de la entrega material, reconocimiento de los Predios, tal como lo señala la Corte Constitucional.

La ANT manifiesta la dificultad de determinar si las personas que actualmente habitan el predio, cuestionado por la sentencia, saber con certeza si estas personas hacen parte de la empresa La Cristalina, es por ello que todas las órdenes se deben articular, como en este caso, con la orden del censo.

Juan Camilo Sánchez, señala que teniendo en cuenta que todavía no se ha efectuado la notificación de la sentencia a todas las entidades, es necesario efectuar la solicitud ante la Corte Constitucional para que otras entidades sean vinculadas a la Mesa, tales como la Fiscalía General de la Nación y Alcaldías y la Gobernación del Meta. De igual forma, se precisó que la ausencia de una notificación formal del referido fallo a cada una de las Entidades que conforman la mesa de trabajo interinstitucional instalada, no es óbice para comenzar a definir el plan estratégico que corresponde. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo respalda la remisión de un documento a la Corte Constitucional, solicitando la vinculación de entidades como la Fiscalía General de la Nación, con miras a avanzar en un plan de acción integral en el territorio.

El censo debe hacerse con otras entidades, por lo que se establece que las actividades deben efectuarse con las otras entidades. Se propone la creación de una mesa técnica liderada por parte de la ANT, con la activa participación de la URT y la Unidad de Victimas. La Consejería de la mujer señala que su participación en el censo es fundamental, por lo que indica su voluntad de participar en la misma, haciendo una caracterización integral.

Yira Castro: Informa que la Fiscalía Seccional 21 de Bogotá - Fiscal Ricardo Romero, actualmente tiene conocimiento de las investigaciones penales e indican que procederán a remitir las denuncias y estado de los procesos a la Mesa.

La Defensoría del Pueblo, manifiesta su preocupación sobre la población étnica Sicuani, por las condiciones en las que se encuentran. De igual forma, hace un llamado a la URT para impulsar el procedimiento administrativo de restitución de tierras que se adelanta a su favor en el municipio de La Primavera del departamento del Vichada y solicita el acompañamiento de la UARIV, debido a las condiciones de extrema vulnerabilidad en que se encuentran actualmente en

la Inspección El Porvenir.

De acuerdo con lo acordado en la Mesa Interinstitucional, se define la segunda reunión a realizarse entre el 9 y el 13 de enero y la convocatoria estaría a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras.

COMPROMISOS

(Actividades definidas en el cuadro anexo en el desarrollo de la reunión)

ACTIVIDAD	FECHA MAX. DE LOGRO	RESPONSABLE

ASISTENTES

Hace parte integral del acta la lista suscrita por cada uno de los asistentes a la reunión.

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
1				
2				

ASISTENCIA	**LOGRO OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:** - Dar a conocer a las entidades convocadas el fallo proferido por la Corte Constitucional el pasado 11 de agosto de 2016, referido al caso del predio "El Porvenir". - Instalación de la Mesa Interinstitucional ordenada mediante la Sentencia SU 426 de 2016. - Definición de actividades a seguir respecto de cada una de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.
Asistentes/Total de convocados*100	**Temas tratados/Temas Planeados**

Elaborada por:	Claudia Paola Quintero. URT Mónica Camacho. ANT.